



EL REFORMISMO DEPENDIENTE.

**POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL GOBIERNO
DE LOS DOCE AÑOS DE JOAQUÍN BALAGUER: 1966-1978**

Wilfredo Lozano

EL REFORMISMO DEPENDIENTE.

**POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL GOBIERNO
DE LOS DOCE AÑOS DE JOAQUÍN BALAGUER: 1966-1978**

Wilfredo Lozano

EL REFORMISMO DEPENDIENTE.

**POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL GOBIERNO
DE LOS DOCE AÑOS DE JOAQUÍN BALAGUER: 1966-1978**

Fundación Friedrich Ebert Stiftung
Instituto de Investigación Social para el Desarrollo
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Santo Domingo
República Dominicana
2020

Dedico esta segunda edición
de *El reformismo dependiente*
a la memoria de mi hija
ANA JULIA
(4-11-2004/8-8-2020)

Por tanto, cuando la burguesía excomulga como **socialista** lo que antes ensalzaba como **liberal**, confiesa que su propio interés le ordena esquivar el peligro de su **Gobierno Propio**, que para poder imponer la tranquilidad en el país tiene que imponérsela ante todo a su parlamento burgués, que para mantener intacto su poder social tiene que quebrantar su poder político; que los individuos burgueses solo pueden seguir explotando a otras clases y disfrutando apaciblemente de su propiedad, la familia, la religión y el orden bajo la condición de que su clase sea condenada con las otras clases a la misma nulidad política; que, para salvar la bolsa, tiene que renunciar a la corona, y que la espada que había de protegerla tiene que pender al mismo tiempo sobre su propia cabeza como la espada de Damocles.

CARLOS MARX
El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte

Contenido

	<i>Págs.</i>
Índice de cuadros, diagramas y gráficos	15
Principales siglas y abreviaturas	21
Prefacio del autor a la segunda edición	23
Introducción	31
Capítulo 1: LA CRISIS DEL POSTRUJILLISMO	41
1.1 Estado, crisis de hegemonía y clases sociales	42
1.2 Las luchas sociales en el período 1961-1966	62
Capítulo 2: LA ESTRATEGIA DE LA DOMINACIÓN DEL REFORMISMO DEPENDIENTE	73
2.1 Reformismo y bonapartismo	74
2.2 La dominación política del reformismo dependiente	92
2.2.1 <i>La desmovilización del movimiento popular</i>	98
2.2.2 <i>La acción corporativa de las clases dominantes y el Estado</i>	104
2.3 Estado, modernización capitalista y burguesía	111

Capítulo 3:	ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y CLASES SOCIALES	137
3.1	La producción y distribución del excedente en la economía exportadora	138
3.1.1	<i>El dinamismo de la economía exportadora en el período 1966-1978</i>	149
3.1.2	<i>Las transformaciones del PIB y el crecimiento capitalista en el período 1966-1978</i>	158
3.1.3	<i>Las etapas de acumulación</i>	164
3.2	Los patrones de acumulación en el reformismo dependiente	175
3.2.1	<i>La reorientación de la inversión y el crecimiento del mercado interno</i>	175
3.2.2	<i>La estrategia de explotación de la fuerza de trabajo</i>	186
3.2.3	<i>La distribución del ingreso y el crecimiento del mercado interno</i>	201
Capítulo 4:	LA MODERNIZACIÓN DE LA BURGUESÍA DEPENDIENTE	221
4.1	El predominio del capital financiero	222
4.1.1	<i>El papel dirigente de la banca</i>	223
4.1.2	<i>El proceso de endeudamiento externo</i>	232
4.1.3	<i>La inversión extranjera, las empresas transnacionales y el Estado</i>	239
4.2	La industrialización dependiente y sus contradicciones	266
4.2.1	<i>Industrialización y clases sociales</i>	269
4.2.2	<i>Límites y contradicciones de la industrialización</i>	474
4.2.3	<i>Crisis agraria e industrialización</i>	292
Capítulo 5:	EPÍLOGO: LA CRISIS DEL REFORMISMO DEPENDIENTE	303
Capítulo 6:	POST SCRIPTUM: REPENSANDO EL REFORMISMO, EL AUTORITARISMO Y LA DEMOCRACIA	329

6.1	Crisis de hegemonía y guerra civil	333
6.1.1	<i>La crisis de hegemonía postrujillista</i>	333
6.1.2	<i>La guerra civil y la intervención militar extranjera</i>	338
6.1.3	<i>Cómo se soluciona una crisis</i> 186	343
6.2	La solución bonapartista	349
6.2.1	<i>La cuestión bonapartista</i>	349
6.2.2	<i>Los militares y el poder bonapartista</i>	353
6.2.3	<i>La fuerza de la geopolítica</i>	364
6.2.4	<i>El corporativismo empresarial y la Ley 299</i>	369
6.2.5	<i>La clase ausente: los campesinos y el desarrollo económico</i>	374
6.3	El significado histórico del reformismo dependiente	383
6.3.1	<i>El gobierno de los diez años: continuidad y ruptura del reformismo dependiente</i>	384
6.3.2	<i>Modernización desde arriba y autoritarismo</i>	396
	Bibliografía	417
	Apéndice estadístico	443
	Testimonio gráfico	461
	Índice onomástico	479

Índice de cuadros, diagramas y gráficos

CUADROS	<i>Págs.</i>
Cuadro 1.1: Remuneraciones per cápita por sectores económicos (RD\$ anuales): 1961-1968	59
Cuadro 2.1: Evolución del presupuesto nacional y su ejecución por la Presidencia de la República (en millones de RD\$): 1966-1978	118
Cuadro 2.2: Gastos del Gobierno Central (en millones de RD\$): 1966-1978	119
Cuadro 2.3: Préstamos canalizados por el Programa del Fondo de Inversiones para el Desarrollo, según sectores beneficiarios y entidades financieras: 1966-1978	122
Cuadro 3.1: Ventas, ganancias, masa y cuota de ganancia y de explotación en la industria azucarera: 1950-1973	141
Cuadro 3.2: Indicadores del grado de internacionalización de la economía dominicana: 1960-1976	151
Cuadro 3.3: Exportaciones por grupo de productos principales (en millones RD\$): 1966-1979	153
Cuadro 3.4: Exportaciones y términos de intercambio: 1969-1980 (a precios de 1962)	156
Cuadro 3.5: Índice de la relación de intercambio: 1969-1980 (a precios de 1962)	160

Cuadro 3.6:	Tasas de crecimiento del PIB por sectores económicos: 1962-1975	161
Cuadro 3.7:	Evolución del PIB: 1962-1975 (en millones de RD\$) (precios de 1962)	162
Cuadro 3.8:	Modelos de crecimiento económico: 1961-1978 (tasas de crecimiento acumulativas anuales)	167
Cuadro 3.9:	Clasificación económica de los gastos del Gobierno Central: 1966, 1972 y 1976 (en millones de RD\$) (a precios de 1962)	178
Cuadro 3.10:	Estructura funcional del gasto del Gobierno Central: 1966-1976 (en millones de RD\$)	181
Cuadro 3.11:	Préstamos otorgados por la Asociación de Ahorros y Préstamos: 1966-1977 (en millones de RD\$)	184
Cuadro 3.12:	Corporación Estatal del Azúcar (CEA): personal ocupado, sueldos y jornales pagados, sectores manufacturero y agrícola: 1962-1972	189
Cuadro 3.13:	Corporación Estatal del Azúcar (CEA): salarios promedios anuales por hombre ocupado, sector industrial y agrícola: 1966-1972	191
Cuadro 3.14:	Evolución del salario industrial no azucarero por hombre ocupado: 1966-1976	195
Cuadro 3.15:	Salarios mínimos urbanos y salarios agrícolas, industriales y en la construcción: 1965-1980 (cifras mensuales)	196
Cuadro 3.16:	Estimación de sueldos y salarios pagados en la industria de la construcción: 1970-1979 (En RD\$)	198
Cuadro 3.17:	Número de empleados fijos del Gobierno Central por escala de salarios mensuales: 1966-1977	199
Cuadro 3.18:	Precios e inflación: 1966-1978 (1966=100)	202
Cuadro 3.19:	Índice de precios al consumidor en la ciudad de Santo Domingo por grupos de bienes y servicios: 1966-1978	203
Cuadro 3.20:	Índice de precios al consumidor por grupos de ingresos y subgrupos de bienes alimenticios en la ciudad de Santo Domingo: 1970-1977 (1969=100)	206

Cuadro 3.21:	Cambios en la distribución del ingreso en Santo Domingo: 1969-1973	207
Cuadro 3.22:	Ingresos y gastos medios mensuales del hogar por zonas según categorías de ingresos mensuales: 1976-1977 (En RD\$)	208
Cuadro 3.23:	Distribución regional de las ventas al por mayor (en millones de RD\$): 1960-1975	209
Cuadro 3.24:	Ventas al detalle por localidades: 1960-1975	212
Cuadro 3.25:	Tasas de crecimiento urbano-rural: 1920-1981	213
Cuadro 3.26:	Dinámica migratoria por regiones: 1950-1970	215
Cuadro 3.27:	Crecimiento de la ciudad de Santo Domingo: 1950-1970	219
Cuadro 4.1:	Depósitos de ahorro y a plazo en los bancos comerciales: 1960-1976	229
Cuadro 4.2:	Préstamos acumulados por destino de los bancos comerciales (en millones de RD\$): 1966-1977 (saldos a fin de año)	231
Cuadro 4.3:	Evolución de la deuda externa: 1966-1978 (en millones de RD\$)	234
Cuadro 4.4:	Inversión extranjera y la deuda que genera (en millones de RD\$): 1967-1978	235
Cuadro 4.5:	Evolución de la deuda externa por tipo de deudores: 1966-1979 (en millones de RD\$)	236
Cuadro 4.6:	Inversión extranjera localizada de las empresas Falcombridge, Shell, Codal, Codetel y Gulf and Western: 1969-1974 (en millones de RD\$)	242
Cuadro 4.7:	Inversión extranjera directa registrada por el Banco Central por ramas de actividad: 1969-1978 (en millones de RD\$)	245
Cuadro 4.8:	Inversión extranjera directa registrada en el Banco Central para el sector industrial: 1969-1978 (en millones de RD\$)	246
Cuadro 4.9:	Inversiones directas localizadas de Gulf and Western: 1971-1974 (en millones de RD\$)	251

Cuadro 4.10:	Posesiones de tierras (estimado) de Gulf and Western: 1967-1976	253
Cuadro 4.11:	Costos y beneficios por toneladas de caña producidas en el Central Romana Corporation: 1970-1976	254
Cuadro 4.12:	Precios F.O.B. del furfural en dólares por KG: 1963-1970	256
Cuadro 4.13:	Inversiones extranjeras directas y remesas de ingresos derivados de inversiones en intereses y utilidades: 1966-1978 (en millones de RD\$)	265
Cuadro 4.14:	Ritmo de crecimiento del sector industrial no azucarero: 1967-1977	274
Cuadro 4.15:	Evolución de la productividad en la industria manufacturera y en sus principales ramas (en RD\$ y a precios de 1970 e índices): 1970-1977	276
Cuadro 4.16:	Origen de las materias primas empleadas por la industria manufacturera: 1950-1977 (en millones de RD\$)	278
Cuadro 4.17:	Retribución al capital como porcentaje del valor agregado en la actividad industrial: 1970 y 1977	279
Cuadro 4.18:	Participación de los salarios en el valor agregado de la producción y salarios reales por ramas industriales: 1970 y 1977	280
Cuadro 4.19:	Niveles de concentración de la inversión industrial según ramas manufactureras, excluida el azúcar (cantidad de establecimientos, miles de RD\$ y porcentaje): 1977	284
Cuadro 4.20:	Beneficios brutos del sector industrial: 1970-1977 (en millones de RD\$)	285
Cuadra 4.21:	Industrias nuevas clasificadas bajo la Ley 299 de Incentivo Industrial: 1968-1976	286
Cuadro 4.22:	Valor de las utilidades reinvertidas por las empresas que obtuvieron el beneficio de la reinversión según la Ley 299 de Incentivo Industrial: 1969-1976	287
Cuadro 4.23:	Gravitación de las importaciones en la oferta interna según sectores económicos: 1973-1980 (en miles de RD\$ y porcentaje)	291

Cuadro 4.24:	Importaciones del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRES): 1970-1978 (en millones de RD\$)	297
Cuadro 4.25:	Valor de la producción agrícola a precios constantes: 1970-1974 (1962=100)	299
Cuadro 5.1:	Tasas de crecimiento del PIB y de la Inversión Bruta Interna: 1970-1978	305
Cuadro A.1:	Composición del Producto Interno Bruto por sectores de origen: 1950-1976 (en millones de RD\$ a precios de 1962)	444
Cuadro A.2:	Oferta y demanda finales: 1960-1976 (en millones de RD\$ a precios de 1962)	445
Cuadro A.3:	Inversión bruta interna según tipo de comprador: 1960-1976 (en millones de RD\$)	446
Cuadro A.4:	Balanza de pagos en cuenta corriente de la República Dominicana: 1960-1978 (en millones de RD\$)	447
Cuadro A.5:	Evolución de las exportaciones tradicionales: producción, valor y precios: 1966-1979 (toneladas métricas en miles y millones de RD\$)	448
Cuadro A.6:	Estructura de las importaciones de bienes: 1966-1978 (precios corrientes en millones de RD\$)	449
Cuadro A.7:	Gastos presupuestados del Gobierno Central por capítulos: 1966-1978 (en miles de RD\$)	450
Cuadro A.8:	Gastos ejecutados del Gobierno Central por capítulos: 1966-1978 (en miles de RD\$)	451
Cuadro A.9:	Clasificación funcional del gasto del Gobierno Central: 1966-1978 (en miles de RD\$)	452
Cuadro A.10:	Clasificación económica de los gastos del Gobierno Central: 1966-1976 (en millones de RD\$)	453
Cuadro A.11:	Clasificación económica de los ingresos recaudados: 1966-1979 (en millones de RD\$)	454
Cuadro A.12:	Préstamos por destino de los bancos comerciales: 1966-1977 (saldos a fin de años en millones de RD\$)	455
Cuadro A.13:	Préstamos del Fondo de Inversión para el Desarrollo (FIDE) clasificados por categorías y entidades financieras: 1966-1978 (en miles de RD\$)	456

Cuadro A.14:	Prestamos del Fondo de Inversión para el Desarrollo (FIDE) clasificados por sectores económicos e industriales intermediarios: 1966-1978 (en miles de RD\$)	457
Cuadro A.15:	Clasificación de las empresas con capital extranjero registradas en el Banco Central por ramas de actividad, volumen de inversión y utilidades: 1966-1978	458

DIAGRAMAS	<i>Págs.</i>

Diagrama 1:	Estructura institucional del Estado dominicano: 1975	115
Diagrama 2:	Esquema organizativo del Gobierno Central: 1975	116

GRÁFICOS	<i>Págs.</i>

Gráfico 3.1:	Evolución de las tasas de ganancias y de explotación en la industria azucarera 1950-1973	142
Gráfico 3.2:	Proceso de internacionalización de la economía dominicana: 1960-1976	154
Gráfico 3.3:	Índice de precios de las exportaciones, importaciones y términos de intercambio: 1960-1980	157
Gráfico 3.4:	Tendencia general de la economía exportadora tradicional: 1966-1979	171
Gráfico 3.5:	Índice de la evolución del salario en la industria azucarera: 1966-1977 (Índice base 1966=100)	193
Gráfico 4.1:	Dinámica de la inversión extranjera: 1966-1978	263
Gráfico 4.2:	Retribución al capital como porcentaje del valor agregado en la actividad industrial: 1970 y 1977	266

Principales siglas y abreviaturas

ADORA	Asociación Dominicana de Radio
AID	Agencia Internacional para el Desarrollo
BC	Banco Central
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CEA	Consejo Estatal del Azúcar
CORDE	Corporación Dominicana de empresas Estatales
COFINASA	Confederación financiera, Sociedad Anónima
CODIA	Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
CODETEL	Compañía Dominicana de Teléfonos
CND	Comisión Nacional de Desarrollo
FIDE	Fondo de Inversión para el Desarrollo
FMS	Ventas Internacionales Militares a Crédito
FMI	Fondo Monetario Internacional
FNP	Fuerza Nacional Progresista
GW	Gulf and Western
INESPRE	Instituto Nacional de Estabilización de Precios

IMET	Programa de Educación Militar Internacional y Entrenamiento
INFRATUR	Instituto de Financiamiento e Infraestructura del Turismo
JCE	Junta Central electoral
MAAG	Grupo Asesor de Asistencia Militar
MAR	Movimiento Agrario Reformista
MPD	Movimiento Popular Dominicano
MIDA	Movimiento de Integración Democrática Antirreeleccionista
ONAPLAN	Oficina Nacional de Planificación
PIDAGRO	Plan de Inversiones para el Desarrollo Agropecuario
PM	Programa de Asistencia Militar
PR	Partido Reformista
PRD	Partido Revolucionario Dominicano
PRSC	Partido Revolucionario Social Cristiano
PCD	Partido Comunista Dominicano
PQD	Partido Quisqueyano Demócrata
PQDC	Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano
PDP	Partido Demócrata Popular
UCN	Unión Cívica Nacional
IJ4	Movimiento Revolucionario 14 de Junio

Prefacio del autor a la segunda edición

Dos razones fundamentales me condujeron a tomar la decisión de reeditar *El reformismo dependiente* treinta y cuatro años después de que apareciera en 1985. En primer lugar, muchos colegas y personas interesadas en las ciencias sociales me han estado insistiendo en que vale la pena reeditar el libro, ya que las nuevas generaciones tienen un conocimiento muy fragmentado, precario y, en muchos casos, errático de lo ocurrido en esos años (1966-1978). En segundo lugar, porque creo que debemos, hoy más que nunca, estudiar a Balaguer en su desnudez, no como un demócrata, sino como el principal líder conservador que ha producido la República Dominicana moderna. El caudillo autoritario era esencialmente un conservador y un político pragmático y realista. Fueron estas cualidades precisamente las que le permitieron articular con relativo éxito su gobierno reformista entre 1966 y 1978, el cual en realidad constituyó la respuesta conservadora que resolvió autoritariamente la crisis de hegemonía política producida en el país tras la muerte de Trujillo en 1961, que culminó en una guerra civil y la intervención extranjera en 1965.

Contra todo pronóstico, tras su derrota electoral en 1978, Balaguer regresó al poder en 1986 inaugurando su gobierno de los diez años, que se prolongó hasta 1996. Pero ese Balaguer ya

no fue el líder bonapartista del gobierno de los diez años, sino el caudillo autoritario que encabezó un gobierno conservador y populista que dio paso a la apertura neoliberal de nuestra economía y a lo que podríamos caracterizar como la fase contemporánea de nuestra endeble democracia en las postrimerías del siglo XX.

A lo largo de su trayectoria de 22 años en el poder, Balaguer dejó una impronta definitiva en la política nacional, que trilla el camino del autoritarismo y articula una cultura política conservadora, resistente al cambio democrático, pero no a la reforma económica. Aun así, está situado en la médula espinal de la política dominicana moderna. Comprender nuestros problemas políticos modernos exige entender el lugar ocupado por Balaguer en los procesos políticos dominicanos, particularmente en la construcción de la democracia, la cual el caudillo conservador vio con recelo, adaptándose a ella en una aptitud realista, como en su tiempo lo predicara Winston Churchill: asumir la democracia como el menos malo de los gobiernos malos.

Creo que las incertidumbres que hoy plantea el proceso democrático dominicano exigen estudiar su raíz conservadora y la presencia del autoritarismo como cultura política. Balaguer está fuertemente situado en el origen moderno de ambas “tradiciones”, de ahí el imperativo de estudiar su figura política y la práctica de los gobiernos que encabezó si es que se desea realmente construir una auténtica casa democrática dominicana. *El reformismo dependiente* no es más que un grano de arena en ese propósito.

Entre 1985 y 2019 solo tres críticas expresas a *El reformismo dependiente* se han presentado como objeciones académicas. La primera es de Faustino Collado¹. En su libro sobre el Partido Reformista, argumenta que calificar como “reformista” el régimen de Balaguer del período 1966-1978 constituye un error. A su juicio se trataba de un régimen simplemente autoritario. Lo central es reconocer que para Collado no hubo tal “reformis-

¹ Collado (1990).

mo” en el régimen balaguerista, pues –aunque no se presentan pruebas que demuestren que no hubo tales reformas– se argumenta que Balaguer nunca se “propuso” reformar la economía ni el Estado.

En ningún momento en el texto de Collado se aprecia lo que se entiende por “reformismo”. Por mi parte, asumo que históricamente el reformismo surge en el mundo moderno y en la literatura que al respecto se ha producido como una formulación opuesta a la idea de “revolución”, oposición que remite a dos asuntos: a diferencia de la idea de revolución, la reforma no se propone el cambio radical del capitalismo como sistema económico. Lo más importante es que el llamado reformismo asume su propuesta de cambio de manera gradual y casi siempre no violenta. Este puede, por otro lado, asumir expresiones diversas. Hay modalidades reformistas liberales o autoritarias, radicales o moderadas, pero lo central es el gradualismo y, con ello, los cambios políticos, económicos y sociales limitados. En mi libro califico ese carácter reformista del régimen balaguerista de los doce años como “dependiente”, por su estrecha vinculación con el poder de Estados Unidos y su claro perfil subordinado a los intereses del gran capital internacional. Tres décadas después de haberse publicado mi libro, me parece que la calificación del régimen balaguerista como reformista dependiente se sostiene y sigue vigente.

Una crítica menor de Collado a mi libro se refiere a –lo que entiende como un error– mi planteamiento relativo a las complejidades organizacionales e institucionales del Estado bajo los gobiernos reformistas en comparación con lo que fue el Estado, por lo menos hasta la muerte de Trujillo. Es evidente que, tras la “des-trujillización”, el Estado dominicano se hizo más complejo institucionalmente, pues hubo de enfrentarse a cuestiones como las crecientes demandas populares, se movió en una difícil escena internacional y tuvo que dar respuestas a problemas nuevos que imponían los procesos de desarrollo, la creciente urbanización y los cambios generales sufridos por la estructura social. Bajo el régimen de los doce años los cambios experimentados por las

estructuras estatales encontraron un eje central articulador: el poder que adquirió la Presidencia de la República como esfera burocrática específica. Eso es lo que se plantea en *El reformismo dependiente*. De todos modos, nunca debe confundirse la expresión organizacional del Estado con la dimensión institucional que lo sostiene y organiza.

Las otras dos críticas son las del profesor Jonathan Harthlyn², que es con mucho la de mayor consistencia y fuerza argumentativa, y la de la socióloga Laura Faxas³. Harthlyn rechaza la caracterización del régimen balaguerista de los doce años como bonapartista y propone en su defecto su caracterización como neopatrimonialista. Por ahora, lo único que debo decir es que mientras el bonapartismo se refiere a la forma del régimen político, el neopatrimonialismo apunta a la configuración política más amplia del Estado y su relación con la sociedad. De esta manera, en tanto el neopatrimonialismo está relacionado con el vínculo entre política y sociedad y la lógica general de dominación, el bonapartismo tiene que ver con las relaciones de clase, las conexiones entre actores políticos y la construcción de vínculos hegemónicos en las relaciones de poder. La crítica de Faxas va dirigida al tema de la movilización populista, vale decir, a la movilización de un actor popular en la construcción democrática, lo cual remite a otra problemática de carácter esencialmente sociológico, a propósito de la construcción de subjetividades políticas. En el *Post scriptum* desarrollo una respuesta más amplia a estas dos importantes críticas académicas.

En 1986 Roberto Cassá publicó su libro *Los doce años. Contrarrevolución y desarrollismo*. Este representa una contribución definitiva a los estudios sobre el régimen balaguerista y asume también una caracterización del régimen como bonapartista. El libro de Cassá presenta el análisis más completo y creativo, hasta hoy no superado, sobre dos aspectos centrales: la ideología en el

² Harthlyn (2008).

³ Faxas (2007).

pensamiento balaguerista y la experiencia del proceso industrializador por sustitución de importaciones en esos años.

A 34 años de haberse publicado *El reformismo dependiente*, puedo evaluar con cierta objetividad los problemas y defectos de esta obra y no solo detenerme en los pocos méritos que podría tener. Según aprecio hoy, la principal limitación del libro es su acentuado sesgo estructuralista. Claramente, este enfoque, predominante en la época en que lo escribí, tiene absoluta legitimidad intelectual como estrategia analítica a la hora de caracterizar la naturaleza del régimen político, los procesos de cambio económico que estimuló y las transformaciones de la estructura de clases a las cuales dieron lugar las iniciativas gubernamentales de Balaguer y el proceso más general de desarrollo capitalista en esos años.

En *El reformismo dependiente* esto queda articulado bajo la caracterización del régimen político como bonapartista. Las críticas a este enfoque tardaron un poco y ya las hemos visto arriba. Sin embargo, en el análisis de los procesos de cambio político, como en la discusión sobre las transformaciones sociales en esos años, desde la muerte de Trujillo en 1961 hasta la salida del poder de Balaguer en 1978, predomina un enfoque donde el estudio de las estructuras y sus transformaciones en muchos aspectos no penetra en el comportamiento de la acción de los sujetos o actores⁴. La acción de los actores se analiza y discute, pero desde la dinámica de las estructuras y no de su visión y comportamiento social. El enfoque es legítimo como estudio de un sistema, pero debe reconocerse sus limitaciones.

Asimismo, en este volumen queda bien establecido el papel determinante del Estado en la conformación de las clases. Este quizás sea su principal mérito. Sin embargo, un enfoque más cen-

⁴ Es Harthlyn (2008) quien más ha avanzado en este nivel del análisis. El análisis de Faxas, en un camino distinto, debe también ponderarse, aunque penetre poco en la acción de los actores clasistas y no clasistas en sus particularidades históricas, salvo lo que ella llama “el actor popular” que como tal constituye una “construcción” generalizadora. El libro de Jimenes Polanco (1994), por la naturaleza de su objeto (los partidos políticos), junto al de Harthlyn, es el que a mi criterio más avanza en el estudio de los actores sociales y políticos particulares, sobre todo en el estudio de los partidos.

trado en la acción de los sujetos, como el que propone Faxas (2007), podría hacer avanzar mucho el conocimiento del régimen político y las transformaciones sociales, como lo ha hecho el enfoque institucionalista de Harthlyn. Pero esto sería una discusión en otra perspectiva analítica.

Un aspecto particularmente relevante en el libro es el del proceso de transnacionalización que sufrió la economía dominicana en esos años y sus efectos en la dinámica del mercado interno y la conformación de los grupos y clases dirigentes de la economía. Hoy día las hipótesis sugeridas hace tres décadas creo que han quedado al respecto confirmadas, pues la sociedad dominicana está profundamente transnacionalizada y su economía es abierta. De todos modos, hay que señalar que este asunto es un poco más complejo, como se trata de discutir en el *Post scriptum*. La noción de “mercado”, pese al esfuerzo clásico y neo-clásico, por su diferenciación tajante respecto al Estado, no puede prescindir del momento político que articula las reglas que facilitan el “cumplimiento” de sus “leyes”. Es lo que pasa con la presencia del Estado-nación como categoría histórica, a partir de la cual adquiere sentido, en determinado momento histórico, la dimensión nacional de los mercados. La globalización relativiza precisamente ese determinante nacional, pero no niega la intervención del Estado en la dinámica reguladora. Es claro que en 1985 era difícil apreciar estas sutilezas.

En su primera edición, la cuestión campesina apenas está esbozada en el libro a través de diversas hipótesis. Por ello, en el *Post scriptum* avanzo algunos razonamientos al respecto y trato de aclarar el fascinante y difícil problema de la contribución del campesinado a los procesos de desarrollo y modernización política, donde claramente mi enfoque es tributario de la obra de Barrington Moore.

A partir del análisis del lugar del campesinado en el proceso político, debe recuperarse el debate acerca de la tensión entre autoritarismo y democracia, específicamente desde la muerte de Trujillo en 1961. Aunque en el libro la hipótesis bonapartista así lo asume, al reconocer que la fuerza del campesinado en la estruc-

tura social quizás constituyó, en esa larga coyuntura histórica, la pieza clave del carácter autoritario de la cultura política dominicana y en concreto del peso determinante del bonapartismo en la caracterización del régimen balaguerista, esta relación apenas queda indicada. De esta forma, sus núcleos problemáticos básicos requieren estudios particulares⁵.

* * *

Esta segunda edición amplía el aparato de notas, ya sea introduciendo nuevas o reformulando las ya existentes. El resultado ha sido mayor claridad en los comentarios y precisiones que figuran a pie de página. Se ha ampliado la bibliografía, al incorporar alrededor de cien nuevos textos que hoy son de necesaria lectura para la cabal comprensión del régimen balaguerista de los doce años en el contexto más amplio de los procesos de democratización que sucedieron al régimen a partir de 1978.

En otro orden, más formal, en la presente edición se han corregido errores de redacción y algunos cuadros estadísticos, lo cual facilita su lectura e interpretación. Se ha añadido un encarte de fotos que persigue brindar al lector una imagen visual de los actores involucrados en los procesos históricos estudiados e ilustrar, gráficamente, el análisis de varios de estos procesos y situaciones.

De todos modos, es importante que el lector lea el *Post scriptum*, en el cual replanteo algunos asuntos esenciales para la comprensión del reformismo balaguerista y en particular para la interpretación del gobierno de los doce años. En este se ampliaron determinados análisis sobre cuestiones que en el texto de 1985 apenas se plantearon hipótesis y sugerencias complementarias. Las luchas militares y su significado político, la crisis agraria y

⁵ En el país esta problemática se ha trabajado poco. En este sentido, merece destacarse el libro de Turits (2003) sobre la relación entre el despotismo trujillista y el campesinado, como clave de la naturaleza del modelo político despótico que caracterizó a este régimen, pero sobre todo constituye un eje determinante para el entendimiento del proceso mediante el cual los campesinos, en la situación posttrujillista, pasaron a apoyar a Balaguer, sentando así las bases sociales del bonapartismo.

el papel del campesinado, la revolución de abril 1965 y Balaguer, los conflictos en el seno del empresariado industrial, el papel de Estados Unidos en la crisis del postrujillismo son algunos de los asuntos que sugiero deben profundizarse Este *Post scriptum* constituye, a mi juicio, un complemento necesario del texto de 1985 y ayuda a situar hoy la discusión sobre el Balaguer de los doce años en el nuevo horizonte histórico de la globalización.

* * *

En la preparación de esta segunda edición de *El reformismo dependiente*, conté con el apoyo de Cornelio Nolasco, quien tuvo la amabilidad de revisar el aparato estadístico del libro, en particular el conjunto de gráficos que le acompaña. Mi gran amigo Juan Daniel Balcácer leyó el texto en su conjunto con su ojo de historiador e hizo sugerencias pertinentes que traté de incorporar, siempre que pude. Jean Michel Caroit con su agudo olfato periodístico contribuyó más de lo que él piensa a que esta segunda edición resultara un producto de mayor calidad que la primera. Aimara Vera realizó una minuciosa revisión del texto que mejoró sustancialmente su redacción.

A ninguna de estas personas puedo pagarles su apoyo, simplemente les reitero mi agradecimiento y hago público que ellos no tienen responsabilidad de mis errores, pero sí claramente comparten los pocos aciertos que pueda tener todavía mi ya viejo libro. Mi esposa Julia y nuestra querida hija Ana Julia, con discreción y prudencia, me dejaron tranquilo y ayudaron a crear el clima que permitió que en pocos meses pudiera tener listo el nuevo manuscrito. No tengo cómo agradecerles, salvo reiterarles mi amor.

WILFREDO LOZANO
Santo Domingo, D.N.
Marzo de 2019

Introducción

En 1980, recién llegado al país, luego de una ausencia de casi cinco años, fui invitado a un Seminario Internacional¹ celebrado en un lujoso hotel de la ciudad de Santo Domingo. En dicha reunión sobre las alternativas de cambio en el área del Caribe se me pidió presentar una ponencia sobre el caso dominicano. Luego de dudar un poco, pues mi larga ausencia me impedía el manejo de los detalles más recientes de la situación política dominicana, acepté. En esa ocasión presenté un largo trabajo de más de sesenta cuartillas bajo el título “Subdesarrollo y dominación social en la República Dominicana”, en el cual hacía un análisis general de las principales transformaciones sociales, económicas y políticas ocurridas en el país desde la muerte de Trujillo en 1961 hasta la derrota electoral de Balaguer en 1978. En los hechos, ese trabajo constituyó la célula germinal del presente libro.

En la reunión, donde brillaron por su ausencia los análisis sistemáticos sobre la situación del Caribe, tuve la oportunidad de apreciar el febril entusiasmo que primaba en muchos de mis colegas dominicanos respecto al porvenir político y social del país.

¹ Primer Seminario Sobre Alternativas Políticas en Centroamérica y el Caribe, auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y el Centro de Estudios de la Realidad Social Dominicana (CERESD) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Algunos argumentaban que con la llegada al poder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se abría un capítulo “alentador” para la democracia dominicana, pues la liberalización política no solo permitiría un nuevo espacio de acción a las clases populares y partidos revolucionarios (lo cual, hay que confesarlo, ha sido cierto), sino que auguraba una profundización del proceso de desarrollo y modernización capitalista, ya que, ahora, la “burguesía industrial y moderna” se encontraba en el “poder”. Allí tuve la oportunidad de plantear mis dudas al respecto.

Posteriormente, leí una serie de ensayos, algunos de ellos muy inteligentes, que trataban de teorizar este planteamiento. Con el tiempo, los hechos se encargaron de esfumar esta ilusión. En el mismo año 1980, la grieta entre empresarios y gobierno se profundizaba sistemáticamente hasta que al final del gobierno de Antonio Guzmán la ruptura se hizo casi absoluta y el gobierno perredeísta quedó solo: aislado de su base política, en franco antagonismo con los sectores empresariales que inicialmente le apoyaron y hostigado por una oposición política cada vez más beligerante. Por otro lado, desde el diseño de la política de demanda inducida en el gobierno de Antonio Guzmán (1978-1982), se vio claro que la crisis internacional que se abría espacio, lejos de apoyar las posibilidades de desarrollo de la burguesía industrial, sistemáticamente le cerraba el paso y colocaba poco a poco a los sectores financieros como sus verdaderos beneficiarios. Tal parecía que la política económica se volvía contra sus autores, alterando a su vez la situación para la cual fue creada: el gobierno de los supuestos industriales, precisamente los penalizaba y favorecía en su defecto el gran capital financiero, aun cuando entrara en conflicto con un importante sector de la burguesía importadora.

Eso no me parecía nada extraño y mucho menos que fuera una contradicción dramática. Era, en cierto modo, la consecuencia lógica de un estilo de desarrollo y acumulación de capital no solo engendrado bajo el régimen balaguerista, sino estrechamente enquistado en la propia estructura de la economía dominicana, sumamente abierta al exterior, profundamente penetrada por el gran capital monopolista y altamente dependiente del mercado

mundial. Esta situación podía permitir espacios de modernización a la burguesía dependiente, pero en modo alguno alterar su matriz intermediaria, compradora. Para ello se requería de cambios radicales, a los cuales esa misma burguesía en sus sectores más modernos no estaba dispuesta a someterse.

En el ensayo que presenté en el evento, sostenía que el balague-rismo, lejos de caracterizarse por el apoyo y robustecimiento de un moderno empresariado industrial como sector hegemónico en el Estado, pese a estimular un proceso de industrialización sustituti-vo de importaciones, robusteció sobre todo a la fracción financiera de la burguesía. Iba más lejos. Argumentaba que propiamente el proceso de industrialización sustitutivo de importaciones había colocado al sector exportador en una posición de subordinación frente al Estado al transferir gran parte de los excedentes antes controlados por los exportadores a las tareas de la industrializa-ción, forzándolos a su asociación con la banca local y extranjera, como estrategia de renegociación de la “repartición” del excedente económico con el Estado. En este proceso, los emergentes grupos industriales siempre mantuvieron su posición subordinada tan-to respeto a la burguesía financiera como al Estado. Consideraba, además, que quizás el elemento básico de la nueva situación era la profundización del proceso de internacionalización del mercado interior en función de la creciente penetración en nuestra econo-mía de las empresas transnacionales y el gran capital financiero, no tanto el surgimiento de un grupo empresarial industrial. Ello per-mitía explicar que, en el contexto de la industrialización sustitutiva de importaciones, apoyada desde el Estado, la burguesía importa-dora, lejos de perder terreno económico, robusteciera su posición.

Me parecía que esta situación tenía importantes consecuencias políticas, pues la asociación entre capital y Estado, sobre todo a par-tir del fortalecimiento y creciente hegemonía del capital financiero, no iba a ser rota fácilmente por el acuerdo burgués-populista que llevó al PRD al poder en 1978. Por el contrario. Argumentaba que esta última era frágil en su estructura interna, pues se fundaba, más que en una verdadera coexistencia estratégica de intereses de clase, en una necesidad de coyuntura, que obligó a la burguesía compra-

dora “modernizante” a apoyarse en las masas urbanas movilizadas tras el populismo perredeísta para desplazar a Balaguer del poder. Allí no había de parte de la burguesía un verdadero proyecto modernizador y democrático. Por eso, más temprano que tarde, esa alianza entraría en crisis, poniendo en jaque las conquistas que en el orden democrático alcanzaron las masas en los últimos veinte años de lucha social. Mi escepticismo fue visto con recelo por algunos asistentes a la reunión. Ante caras tan adustas me retiré a las oscuras cavernas del trabajo burocrático universitario y el ensayo de 1980 quedó momentáneamente en el olvido. Pero la manzana de la discordia teórica ya había sido mordida y no pude resistirme a la seductora tentación de investigar el problema. Me propuse entonces fundamentar más el argumento que había planteado en 1980. Quizás por eso el ensayo nunca se publicó. Después de varios años de continuas interrupciones y dificultades de todo tipo, pude terminar un borrador en la segunda mitad de 1984. Lo cierto es que, para bien o para mal, fruto de ese trabajo surgió este libro sobre el reformismo dependiente. En los hechos, el modesto objetivo inicial pronto se transformó en una tarea más ambiciosa: caracterizar el proceso de desarrollo de la burguesía dependiente dominicana desde la muerte de Trujillo en 1961 hasta la caída del régimen balaguerista en 1978. La perspectiva que se asumía tomaba como su centro de atención los procesos de desarrollo capitalista e internacionalización de la economía en los años sesenta y setenta y como su eje analítico el complejo tinglado de relaciones sociales y políticas que, tras la instancia estatal, ponían en evidencia las transformaciones sufridas por las clases, sobre todo las dominantes.

Dada la naturaleza del particular equilibrio de fuerzas que en el Estado se articulaban bajo el régimen reformista, el cual le aseguraba una gran autonomía de movimiento político, restringiéndole capacidad de representación política organizada a las clases dominantes y concentrando las bases del poder del Estado en su instancia ejecutiva, he calificado esta forma de régimen como bonapartista, apellidándolo “dependiente” por la fuerza hegemónica del poder imperial, sobre todo norteamericano, en la composición del bloque de fuerzas en el poder.

Si bien el balaguerismo en lo político pudo ser considerado como un verdadero régimen bonapartista dependiente, estimo que en el plano más general del desarrollo capitalista la tarea de la industrialización, que signó su estrategia de desarrollo, permite calificarlo como reformista. No solo por el hecho de su fallido intento de reforma conservadora del agro, sino por su efectivo apoyo al surgimiento y formación de nuevos grupos burgueses de base financiera e industrial. Reforma conservadora en lo modernizador y dependiente, pero reforma, a fin de cuentas.

En el análisis me concentré sobre todo en el período balaguerista y consideré solo como un prelude la crisis orgánica del posttrujillismo en los años 1961-1965.

Me animaba en la tarea una gran hipótesis, cuya fuerza o debilidad el lector tiene derecho a ponderar una vez lea este libro, según la cual el reformismo balaguerista constituyó la salida histórica de la burguesía dominicana ante su fracaso para articular desde su seno una propuesta de hegemonía política alternativa al trujillismo y estructurar una nueva estrategia capitalista que suplantara el modelo trujillista de desarrollo. En ese entonces estimé, y creo que esta obra lo demuestra, que, además, el reformismo, en la medida en que asumía esta tarea, restringía el campo de maniobra de la burguesía como clase política y articulaba a su vez una estrategia de dominación que suponía la dispersión política de la clase obrera, el recrudescimiento de sus niveles de explotación y, en general, el control autoritario de los nuevos agentes sociales que, tras la urbanización acelerada en los años sesenta y el despuntar de la industrialización en los setenta, surgían y se organizaban. Sin embargo, el reformismo fue algo más. Surgido en una situación de crisis orgánica de las clases dominantes, apoyado en la dispersión y control políticos de las clases dominadas, retomó la tarea histórica del crecimiento interno de base industrial iniciado por Trujillo en los años cuarenta, lo único que en condiciones sociales, económicas y políticas distintas. Por eso puede argumentarse que la pauta esencial del desarrollo capitalista en los años 1966-1978 estuvo signada por la industrialización y el comando del Estado. Aún en las condiciones del posttrujillismo, tras el restablecimiento de la

“hegemonía” bajo el liderazgo balaguerista, el proceso de desarrollo capitalista en dicho período estuvo dirigido “desde arriba”. Sin embargo, en las nuevas condiciones impuestas por la destrujillización y la expansión del gran capital internacional en la economía dominicana, el proceso de industrialización y crecimiento capitalista, si bien reconocía en el Estado su “comando estratégico”, se organizó con el deliberado propósito de expandir y consolidar una verdadera burguesía “ajena” al Estado.

El otro elemento importante que se reconoce en materia de desarrollo capitalista bajo el reformismo es que, tras la expansión de las empresas transnacionales en el país, el crecimiento del mercado interior ha internacionalizado la estructura y dinámica de nuestra economía, haciéndola más dependiente del exterior, consolidando la posición de la burguesía compradora, sobre todo de su sector importador.

Por todo ello, creo aportar en este libro suficientes elementos que permiten afirmar que el componente más relevante en la vida económica dominicana de los últimos veinte años es el dominio y predominio alcanzado por el gran capital monopolista internacional en la formación social. Este se expresa en una amplitud de niveles que van desde las empresas exportadoras agromineras hasta la expansión del mercado interior tanto en términos específicamente industriales como comerciales y financieros.

En esta cuestión del capital monopolista subsisten muchos mitos. En principio, la inversión extranjera, en tanto no bloquea nada en materia de desarrollo, salvo –claro está– aquellos casos en que, como la minería, el dominio de los recursos no renovables en el largo plazo puede constituir un cuello de botella para el desarrollo. ¿Dónde se aloja la cuestión problemática? A mi modo de ver se localiza en los efectos inducidos a que puede dar lugar la dinámica de la inversión extranjera en estrecha consonancia con la expansión y dominio del capital financiero en la formación social. En tal sentido, bajo el balaguerismo, en la formación social dominicana esta dinámica de inversión se realizó movilizandogran parte del ahorro interno local o vía préstamos. En ambos casos comprometió la economía al gran capital monopolista y

desvió importantes capitales de las tareas del desarrollo inmediatamente pertinentes. En ese sentido, más allá de la cuestión del drenaje de excedentes, la inversión extranjera sí constituyó un verdadero bloqueo al desarrollo.

El otro elemento relevante en la cuestión del dominio del capital monopolista se refiere al capital financiero. Es cierto que en los doce años de gobierno balaguerista la banca dominicana y extranjera (en estrecha asociación y en la que esta última, a su vez, controlaba y dominaba a la primera) estimuló un cierto crecimiento industrial privado. Pero esto se hizo de un modo tal que en los hechos fortaleció el dominio del gran capital comercial – sobre todo importador– a partir de una matriz industrial sumamente dependiente en materia de insumos, energía y tecnología del mercado mundial. Por lo demás, coexistiendo con esta apoyatura financiera del proceso de crecimiento industrial, se verificó un gran crecimiento de los sectores improductivos, gracias a las altas tasas de beneficio que la especulación comercial proporciona en una formación social como la dominicana, con una matriz económica básicamente agroexportadora. En este sentido, aunque parezca grosero y paradójico, el capital financiero bajo el balaguerismo tendió a estrechar lazos con la burguesía comercial y agraria, modernizando su gestión, pero sin desplazar sus ejes de actividad económica.

En este punto surge la cuestión del lugar que en dicha estructura ocupa el agro. En cierto sentido este fue el gran cuello de botella que mantuvo trancado el sistema. Ciertamente, su modernización era un requisito para la expansión del mercado interior, pero lograrlo hubiese traído profundos desequilibrios en el orden político y social. Por ello, la vía elegida por la burguesía en sus sectores más modernizantes fue la de la “no colisión” con la oligarquía terrateniente, preservando con ello –en los hechos– la estructura del atraso rural.

Como he afirmado, bajo el balaguerismo el Estado constituyó el motor y conductor del proceso de desarrollo capitalista. Hablando en términos históricos, sin embargo, lo cualitativamente nuevo del proceso fue que esta gestión se hizo sobre la base del dominio y expansión del gran capital monopolista internacional en nuestra

economía y de la subordinación de las clases dominantes locales a dicha lógica, aun cuando el propósito estatal de modernización apoyó la formación de una burguesía financiera e industrial. Por esto, puede afirmarse que la modernización burguesa en los años 1966-1978 se hizo “desde arriba”.

En ese contexto, la estabilización y fortalecimiento del Estado era ciertamente requisito del propio crecimiento de la clase burguesa en su conjunto. En este proceso se encontraba interesado sobre todo el capital extranjero, pero, en la medida en que ello se verificaba, se condenaba a la clase burguesa local a la subordinación económica y política respecto al gran capital monopolista, y, lo más importante, esto le reportó un gran margen de autonomía a las fracciones burocráticas y estratos pequeñoburgueses que controlaban el Estado.

El modelo político que se conformó bajo el balaguerismo dependió ciertamente de una alta dosis de coerción social sobre los mecanismos del consenso, pero en el largo plazo el régimen balaguerista logró agenciarse un espacio de legitimación política, fundamentalmente en las clases campesinas y los grupos medios urbanos; estos últimos enriquecidos a la luz del proceso de crecimiento capitalista verificado en esos años y el descenso del nivel de vida de las clases trabajadoras que le acompañó. En la pérdida de este espacio político se encuentra gran parte de los elementos que permiten explicar no solo el aislamiento y la derrota política que sufrió el balaguerismo al final de la década de los setenta, sino también los crecientes espacios de participación política y conquistas democráticas alcanzados por las masas populares, sobre todo a partir del año 1974 como se discute en este libro.

En su primera edición este volumen ha sido organizado en cuatro capítulos y un epílogo². En el primer capítulo se analiza la crisis de hegemonía posterior a la muerte de Trujillo en 1961, cuyo punto culminante fue la revolución constitucionalista de 1965 y cuya salida burguesa fue el balaguerismo. En el segundo capítulo

² En esta segunda edición se ha seriado el epílogo, como el capítulo cinco, y se añadió un *Post scriptum*, como nuevo capítulo (6), lo cual aumenta a seis secciones el texto en su conjunto.

se indaga en la dialéctica de la dominación social bajo el régimen balaguerista, tomando como eje el papel estratégico del Estado en el proceso. Luego de caracterizar la dinámica general del bonapartismo dependiente, se procede a estudiar la relación del Estado con las clases dominadas, tras su propósito desarticulador y represivo del poder popular, sobre todo en su expresión urbana. Asimismo, se discuten las relaciones del Estado con las clases dominantes, destacando sobre todo la restricción corporativa de estas últimas, el papel del Ejército en el modelo político de dominación, así como la dialéctica entre representación política-Estado y clases dominantes. Finalmente, se examina el papel estratégico del Estado en el proceso de modernización capitalista observado en el país en el período 1966-1978.

En el tercer capítulo se estudia la dinámica de la acumulación de capital en el período 1966-1978, tomando como eje la relación economía-Estado y clases sociales. En primer lugar, se analiza lo que he llamado la problemática de la repartición del excedente en la economía exportadora. Luego, tomando como perspectiva estructural este problema, se discute la dinámica global del proceso de desarrollo capitalista observado en el país en el período 1966-1978. Finalmente, se examina con mayor detalle el comportamiento de los patrones de acumulación fundamentales que caracterizaron el modelo reformista de crecimiento. Respecto a este último punto, el análisis se concentra en la dinámica de la inversión, el comportamiento de los salarios y la expansión de los mercados.

En el cuarto capítulo se estudia el proceso de modernización de la burguesía dependiente dominicana observado en el período 1966-1978. Para ello me detengo en el papel dirigente de la banca, en función del rol estratégico que en el proceso ha tenido el capital financiero. Luego, se indaga sobre la dinámica del endeudamiento externo y la dinámica de las inversiones extranjeras, para culminar con el análisis de la industrialización dependiente. Finalmente, en el epílogo se analiza la crisis del reformismo, a la luz de los procesos de formación y articulación de clases a que dio lugar y se discuten con cierto detalle las contradicciones entre

la burguesía modernizante y la élite burocrático-militar balague-rista, el momento de las leyes agrarias y la ruptura de la unidad del bloque en el poder, así como la derrota del reformismo dependiente en las elecciones de 1978.

* * *

En gran medida un libro es una empresa colectiva de la cual se benefician quienes lo firman como autores individuales. En este muchas voluntades y opiniones han dejado caer su influencia. No por ello puedo dejar de mencionar a algunas, tan responsables como yo, de que esta obra al fin se concluyera. El capítulo uno fue leído con mucho cuidado y atención por Achen Wahendorfer y Franc Báez Evertsz. Una lectura crítica muy rigurosa de los capítulos uno y dos fue realizada por Ruddy Santana, cuyos comentarios en su mayoría fueron incorporados al texto definitivo. Carlos Ascuasiati dedicó mucho de su escaso tiempo a discutir conmigo los complicados problemas de la economía dominicana y su influencia se deja sentir en los capítulos tres y cuatro. He discutido con Franc Báez Evertsz la mayoría de las tesis que en el libro se plantean. Sus ideas gravitan a lo largo de todo el texto confundiendo muchas veces mis opiniones con las suyas. A todos estos amigos y colegas mi agradecimiento. Quisiera mencionar especialmente a Marina Ariza, quien realizó una revisión completa de todos los capítulos tanto en términos estilísticos como de contenido. Sin su ayuda y entusiasmo no creo que hubiera podido escribir este libro. Para ella no tengo palabras de agradecimiento, solo reconocer que es una herencia compartida por ambos. Es claro que, pese a la complicidad de todos estos amigos y colegas, el responsable último de lo que aquí se dice no puede ser otro más que “su autor”.

WILFREDO LOZANO
Santo Domingo, D.N.
Diciembre de 1984

Capítulo 1

LA CRISIS DEL POSTRUJILLISMO

La legitimación no concierne a las masas, sino a los cuadros. La cuestión de la estabilidad política depende de la medida en que el pequeño grupo de dirigentes del Estado sea capaz de convencer al grupo más amplio de empleados centrales y potentados regionales de que el régimen se formó y funciona sobre la base de cualesquiera valores consensuales que se pueda hacer creer a estos cuadros que existe, y de que es en bien de los intereses de estos cuadros que el régimen continúe funcionando sin grandes obstáculos.

Cuando se dan esas circunstancias podemos llamar legítimo a un régimen.

Más aún, la legitimidad no es una cuestión resuelta de una vez por todas. Es una cuestión de compromisos constantes [...].

IMMANUEL WALLERSTEIN
El moderno sistema mundial II

La muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961 inauguró un nuevo período en la historia política y social dominicana. Se iniciaba así una larga crisis política que en este libro caracterizo como crisis de hegemonía¹. La misma se manifestó como crisis del poder del Estado, que dio paso a una etapa de agudos conflictos sociales y políticos entre los diversos sectores y fracciones de las clases dominantes y de estos

¹ Entenderé por hegemonía la capacidad de una clase o fracción de clase para imponer su proyecto sobre el conjunto de la sociedad. Esta capacidad se expresa siempre en un determinado equilibrio de fuerzas en el Estado, al estructurar un bloque de poder a partir del cual se impone un determinado poder de clase. Por esto el ejercicio de la hegemonía remite siempre a una particular alianza de clases, desplazándose en un *continuum* que va de desde la coerción hasta el consenso. Es claro que, como tal, la hegemonía implica un “momento” cultural e ideológico. Aquí destacaré sobre todo la perspectiva política. La “ausencia” de hegemonía implica una crisis orgánica en el conjunto de la estructura social o sobre el ámbito de la superestructura política, según sea la naturaleza de la crisis. Para un tratamiento del concepto véase Gramsci (1972) y Poulantzas (1971).

respecto a las clases dominadas, situación que se prolongó por lo menos hasta el año 1966².

En esa coyuntura histórica, en el campo de las clases dominantes, en un primer momento la batalla política y social se decidía y expresaba en el conflicto planteado entre los reductos dirigentes de la dictadura y los diversos sectores parcialmente excluidos del proyecto trujillista de dominación³. A ello se une el surgimiento de un nuevo actor de carácter popular. El espacio político de esta lucha tenía como su eje central la disputa por el control del Estado en el conjunto de fuerzas del bloque de dominación y el choque de este bloque dominante con el movimiento popular que surgía como verdadera y efectiva fuerza interesada en reivindicaciones sociales secularmente postergadas, así como por su participación democrática en el nuevo escenario político. Durante cuatro años las luchas y conflictos que caracterizaron la crisis de hegemonía en esos años difíciles condujeron a la guerra civil. En lo adelante discutiré lo que entiendo son los ejes explicativos centrales de ese prolongado conflicto.

1.1. Estado, crisis de hegemonía y clases sociales

Además de la dura lucha entre fracciones de los grupos y clases dominantes y en medio de la crisis de hegemonía, uno de sus resultados inmediatos fue la acción de las masas populares urbanas⁴, las cuales lograron afianzar crecientes presiones y capacida-

² Sobre el período de crisis orgánica en los años 1961-1966, existe una amplia bibliografía. Es imprescindible leer a Martin (1975), Bosch (1964), Lowenthal (1971), Goff y Locker (1972), Slater (1976), Vilas (1973 y 1979), Del Castillo y Fernández (1974), Gleijeses (1978), Vega (2004 y 2006), Cassá (1986) y Balcácer (2006).

³ Sobre el proyecto trujillista de dominación debe verse a Cassá (1982) y Báez Evertsz (1979). Galíndez (1956) y Crassweller (1968) continúan siendo referentes necesarios. Modernamente, ha ido surgiendo una nueva bibliografía que aborda las dimensiones políticas y culturales de la dictadura trujillista, véase al respecto Mateo (1993), Capdevila (2000), Derby (2015) y Turits (2013).

⁴ La noción de “masas populares urbanas” la empleo para distinguir la acción “política” de los grupos pequeñoburgueses urbanos, del proletariado y del subproletariado, así como de los estratos más bajos de las clases medias. Como tal, la noción remite a un conglomerado “clasista” heterogéneo. Es útil hacer la distinción entre la acción política organizada de las masas populares urbanas, a través de sus diversas expresiones corporativas (sindicatos, asociaciones barriales, etc.) y políticas (partidos), de sus presiones

des sobre el Estado en el propósito de lograr mayor nivel de participación social y política, como más abajo se describe. De este modo, las masas populares urbanas comenzaron a sostener un creciente margen de participación económica, social y política en el nuevo escenario histórico dominicano.

Es preciso detenerse un poco en el análisis del contenido general de la crisis de hegemonía en el período 1961-1966 que condujo a la guerra civil (1965) y, como su producto político, al gobierno de los doce años de Joaquín Balaguer (1966-1978).

Como he insinuado, la crisis se caracterizó por la interconexión de varios elementos: 1) en primer lugar, se manifestaba como crisis en el seno de las clases dominantes en su lucha por el control del Estado en medio de una situación de profunda debilidad de sus diversas fracciones y sectores en la que el Estado se convertía en el principal empresario capitalista, tras el traspaso de los bienes de la familia Trujillo a sus manos; 2) expresaba, a su vez, la emergencia de las masas populares como actores históricos activos con una creciente capacidad de participación social y política, y, 3) finalmente, se verificaba en un contexto en el que los Estados Unidos constituían un poderoso agente político en la búsqueda del restablecimiento del equilibrio en el seno de las clases dominantes y en la articulación de un nuevo esquema de dominación. En el manejo de esos elementos en sus conexiones internas, podemos aproximarnos al análisis del contenido de clase de los conflictos sociales y políticos del período 1961-1965, como de su posterior desenlace en el régimen balaguerista (1966-1978).

Cabe preguntarse cuál era la naturaleza del conflicto que en el escenario político libraban los diversos grupos de las clases dominantes por el control del poder en el Estado y qué lugar ocupaba en la cadena de contradicciones la emergencia de las masas populares urbanas como actores políticos activos.

A partir de un notable ensayo de 1973 de Carlos M. Vilas, la naturaleza social del conflicto en lo concerniente a las clases dominantes en su disputa por el poder del Estado ha tendido a inter-

informales más o menos espontáneas y no organizadas, o más o menos indirectas. En la coyuntura de 1961-1965 este último tipo de acción jugó un importante papel.

pretarse como un enfrentamiento entre los emergentes intereses burgueses industriales y los tradicionales grupos oligárquicos vinculados a la tierra y la especulación mercantil. La posición de Vilas se resume en el pasaje que me permito citar *in extenso*:

La muerte del dictador y el desmembramiento de su camarilla dejaron paso a un período caracterizado, por un lado, por las presiones de los sectores populares para obtener un papel decisivo en la escena política y para lograr un desplazamiento del poder (de la camarilla trujillista, WL) en beneficio de sus intereses y de su participación en el control del aparato productivo o, cuando menos, de los mecanismos de distribución y de regulación del consumo, y por otro lado a un doble juego de conflictos –aunque de desigual intensidad– desarrollados por los grupos que en la etapa anterior solo habían podido beneficiarse de la misma en la medida en que el “Jefe” lo consintiera y por ello mismo al precio de una obsecuencia sin límites, y que ahora pugnaban por ocupar el vacío dejado por su muerte. En ese desempeño tales grupos se encontraban embarcados en conflictos entre sí, principalmente por el control del Estado y de los mecanismos económicos que a partir de 1961-1962 pasaron a integrar el sector público, tanto como contra los sectores populares, pero uniéndose en la medida en que estos sectores, a través de sus organizaciones y sus movilizaciones, creaban situaciones de riesgo para sus objetivos y para el mantenimiento de su situación en las relaciones de dominación.

La elevación de las remuneraciones logradas por las presiones populares se tradujo en un fuerte aumento del consumo⁵ que, dado el bajo desarrollo de la economía y la debilidad e inexperience de las recientes organizaciones de los sectores masivos de la población y de la pequeña y mediana burguesía, no se satisfizo recurriendo a un incremento de la producción nacio-

⁵ En el sector azucarero, por ejemplo, el salario anual promedio pasó de RD\$ 324.8 en 1960 a RD\$ 740.4 en 1962 y a RD\$ 918.1 en 1964, y el volumen total del capital variable aumentó de 21 millones en 1960 a 70.9 millones en 1964 (*Cfr.* Oficina Nacional de Estadísticas). El consumo privado creció entre 1961 y 1964 a un ritmo del 12.1 % acumulativo anual, frente a 5.9 % en 1950-1958 y 5.8 % en 1966-1969 (cifras del Banco Central de la República Dominicana).

nal para el mercado interno sino apelando al aumento de las importaciones⁶. La muerte de Trujillo no fue seguida de una democratización de la sociedad dominicana ni por una transferencia –siquiera parcial– de poder hacia los sectores populares, y el control del Estado y de las empresas que éste heredó del trujillato fue copado inmediatamente por grupos que, dada su base de poder –la gran propiedad agraria y el comercio de importación– carecían de todo interés en orientar el aparato productivo hacia la satisfacción del mercado interno; ello habría requerido de una modernización del sistema económico dominicano –principalmente del sector agropecuario– y una drástica reorientación de las políticas de priorización y asignación de recursos, y habría implicado, por lo tanto, la realización de cambio en la estructura del poder en beneficio si no de los masivos pero débiles sectores populares, si al menos de la incipiente burguesía formada alrededor de la industria y de algunas ramas de la producción agrícola destinada al mercado nacional. Esta, por su parte, encaminó su acción hacia el logro de cierto control del Estado y en especial de sus mecanismos comerciales y financieros, y de las posibilidades de especulación, fluctuando en una inestable posición intermedia entre los sectores populares, con relación a los cuales su debilidad la convertía en una fuerza vulnerable, y la oligarquía, que la excluía de una participación en los beneficios más acentuada y autónoma⁷.

Estimo que tal interpretación del contenido social de la disputa en el seno de las clases dominantes, siendo brillante y en general acertada, es por lo menos imprecisa y exagerada en muchas de sus conclusiones. En esa coyuntura (1961-1965) la disputa en el seno de las clases dominantes no debe interpretarse como una simple batalla entre el atraso y el autoritarismo versus la modernización y la democracia, como una lucha entre el Estado Trujillista que se disolvía y la burguesía

⁶ El coeficiente de importaciones pasó de 13.5 % en 1960 a 19.4 % en 1964; entre 1961 y 1964 las importaciones crecieron a un ritmo de 38.7 % acumulativo anual (cifras de la Oficina Nacional de Planificación).

⁷ Vilas (1973) p. 183 y ss.

antitrujillista que emergía o como una batalla social entre la oligarquía (reaccionaria) y la moderna burguesía industrial (democrática) emergente.

Parte de todo esto era cierto, pero en realidad, más allá de la ruptura del equilibrio de fuerzas en el Estado, con la consiguiente crisis política, la crisis del postrujillismo representó la de todo un orden de dominación en su conjunto, en el que se imponía la necesidad de una nueva modalidad de dominación social, con la consecuente redefinición de los patrones de acumulación de capital que caracterizaron la dominación trujillista. Como tal, representaba la apertura a un nuevo escenario histórico en el que nuevos actores sociales y políticos hacían su aparición, a la vez que otros reactivaban su participación. Como resultado de ello no solo la sociedad sufrió profundas convulsiones, al ser modificados en gran medida sus mapas sociales, sino que emergieron nuevos actores políticos, con el consiguiente reacomodo de las funciones estatales. Empezar esta última tarea, activando un proceso de modernización económica y política, le correspondería al Dr. Joaquín Balaguer y su régimen a partir de 1966 hasta 1978.

Es cierto que la tarea de la industrialización trujillista, al establecer un virtual monopolio sobre dicha actividad, le concedió a la escasa burguesía local un espacio marginal en esta. Por lo demás, y en gran medida como consecuencia de esa situación, la débil burguesía local concentró el grueso de su actividad en la esfera mercantil en estrecha asociación con los atrasados grupos terratenientes. Los escasos burgueses industriales existentes aparecían como elementos subordinados al proyecto trujillista, como estratos residuales en el conjunto de las clases dominantes dominicanas. Era difícil que del seno de estos débiles y escasos burgueses industriales surgiera al principio de la década de los sesenta un grupo con la suficiente coherencia política y unidad de propósito económico como para disputarle el control del Estado postrujillista a la burguesía compradora y los grupos terratenientes, ver-

dadera “alianza oligárquica”, base fundamental de la dominación social en la época⁸.

Si a partir de 1961 comenzó a constituirse un sector modernizador en el seno de la burguesía dominicana, este no se organizó en torno a la industria, sino a la banca.⁹ Fue alrededor del capital financiero¹⁰ que se inició el tortuoso proceso de modernización de la burguesía dominicana en la década de los sesenta, lo cual, en

⁸ La noción de “oligarquía” se ha empleado en América Latina para designar a los estratos superior de los grupos dominantes vinculados al eje agroexportador tanto en su expresión comercial como terrateniente. Como tal, la noción en su uso común introduce muchas confusiones, la mayoría derivadas del hecho de que generalmente se ha empleado para calificar formas de organización y comportamientos sobre todo políticos, sin especificar claramente las estructuras sociales a partir de las cuales dichos grupos adquieren significado histórico. Aquí emplearé la noción para designar una particular “alianza de clases” entre los estratos superiores de las clases dominantes en una economía capitalista subdesarrollada predominantemente agroexportadora. Asimismo, los representantes del poder oligárquico se encuentran “localizados” en los distintos sectores del capital no solo en el eje comercial-terratiente. En este sentido, la alianza de clases calificada como “oligarquía” expresa sobre todo un estilo o forma de dominación burguesa dependiente. Como tal, es insuficiente para caracterizar la naturaleza de la economía y la estructura de clases en dichas formaciones sociales. Sin embargo, la noción continúa siendo útil en la medida en que permite conceptualizar el vínculo orgánico burgués-terratiente y la expresión “no democrática” excluyente de la participación de masas y el disenso social en la dinámica de la estructura política y en las bases del poder del Estado. Este último problema se encuentra en las bases del conflicto entre las llamadas oligarquías latinoamericanas tradicionales (vistas como alianzas de clases) con los emergentes populismos. El concepto ha sido manejado por Bosch (1971). Su conceptualización del llamado “frente oligárquico” se acerca mucha a mi conceptualización de la “alianza oligárquica” y, en definitiva, remite a la misma problemática: la del bloque histórico de dominación burguesa en una economía agroexportadora. Sin embargo, mientras el profesor Bosch es impreciso en la caracterización clasista del componente burgués hegemónico en dicho “frente oligárquico”, no me caben dudas del carácter predominantemente burgués de las oligarquías en dicha alianza clasista. Cotler (1978) ha empleado con notable éxito el concepto de “burguesía oligárquica” para caracterizar la misma problemática en el Perú. Véase también a Florestán Fernández (1978).

⁹ El libro de Estrella (1971) esclarece muy bien este problema. Debe consultarse también a Álvarez (1982) en torno a las instituciones financieras. El estudio de Moya Pons (1989) sobre la historia del Banco Popular no deja dudas sobre el papel del sector bancario en el surgimiento de un empresariado moderno en el país y de figuras como Alejandro Grullón y Jimmy Pastoriza.

¹⁰ Cuando empleo la expresión “capital financiero” en el presente estudio me estoy refiriendo a la banca, a menos que se especifique lo contrario. La acepción leninista, por ejemplo, expresa la integración del capital bancario y el industrial en una sola gestión en el proceso global de acumulación. Cuando se asuma esta última visión será especificado. Un texto crítico al respecto es el de Barratt Brown (1976).

términos históricos y aunque parezca paradójico, hizo del Estado el mecanismo impulsor básico de la industrialización dependiente y de los sectores burocráticos estatales y grupos pequeño-burgueses vinculados al aparato financiero en crecimiento, la fuente de reclutamiento ideal del nuevo empresariado dominicano en la década de los setenta. Pero, en la cúspide, el alto comercio continuó representando la fuente de financiamiento (en estrecha asociación con el gran capital bancario nacional y extranjero) de la industrialización, por lo menos de su sector monopolístico, como también constituyó la fuente de reclutamiento de la alta burguesía industrial. Empero, al inicio de los años setenta, solo cuando la crisis de hegemonía de los años 1961-1965 fue superada y el Estado estuvo en capacidad de apoyar la tarea de la industrialización, unido al interés del capital monopolista internacional, en su expresión bancaria e industrial, hubo posibilidad de reactivar el proceso de industrialización. El precio que se pagaba por ello era la subordinación del proceso y sus grupos dirigentes a los intereses del gran capital financiero, local e internacional, lo cual modificaba radicalmente la naturaleza del proceso de industrialización iniciado por Trujillo en la década de los cuarenta.

Antes de proseguir con el análisis de la coyuntura de los años 1961-1966, es necesario detenerse un poco en el poder del Estado bajo la dictadura de Trujillo¹¹. En dicho período la organización del Estado supuso una alta concentración del poder político en manos de la élite burocrático-militar trujillista, cuyo punto aglutinante y centralizador del poder era, precisamente, la figura del dictador. En gran medida esto se logró gracias a la “marginalización” de las clases dominantes del control de los aparatos de Estado. Me refiero específicamente a lo que he llamado la “alianza oligárquica comercial-terrateniente”. Como ha referido

¹¹ Sobre el Estado trujillista el texto de Cassá sigue siendo el mejor (1982). Debe verse también a Báez Evertsz (1979), Crassweller (1968), Galíndez (1956) y Cordero Michel (1975). En los últimos años se ha publicado nueva literatura, véase al menos a Derby (2016) y Turits (2013). Báez Evertsz (1979) ha sintetizado muy bien los límites y contradicciones históricas de la dictadura trujillista.

J. R. Cordero Michel¹², desde el principio de su régimen, Trujillo comprendió muy bien las bases y funciones del Estado moderno: la de servir de fuente de apoyo político y económico al desarrollo capitalista. Sin embargo, el proyecto capitalista organizado por Trujillo implicó el bloqueo y dispersión de la burguesía dominicana como clase política. En sus consecuencias generales esto provocaría un profundo y secular atraso de la burguesía dominicana no solo en el terreno político, sino en su capacidad de desarrollo como clase económica.

Este carácter de “monopolio económico y político”, que desde el principio caracterizó el proyecto trujillista, le permitió una estrategia de crecimiento económico de profunda trascendencia para el porvenir del capitalismo en el país. Gracias a ello, como ha señalado Báez Evertsz¹³, Trujillo logró articular un proceso de acumulación originaria, base del capital industrial, que dio pie al despegue del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, el crecimiento del mercado interior y el impulso definitivo del capitalismo en el agro dominicano, así como posteriormente en la década de los cincuenta, el control de la producción azucarera. Con ello, como posteriores estudios han demostrado, durante la dictadura trujillista se consolidó definitivamente el dominio del capitalismo en la formación social dominicana.

Este “estilo” de desarrollo capitalista implicó la puesta en práctica de una singular modalidad de dominación social. La base del poder político del dictador dependía mucho de la élite burocrático-militar organizada en torno al Estado. A partir de esa mediación política se abre una vía para la comprensión de la capacidad del régimen para el establecimiento de un espacio de dominación política y aceptación social del campesinado como del control del conjunto de los sectores sociales urbanos¹⁴.

¹² Cordero Michel (1975).

¹³ Báez Evertsz (1979).

¹⁴ Para un estudio del complejo vínculo entre el campesinado y Trujillo, como bases del control político de la dictadura sobre el conjunto social, véase a Turits (2013).

Por su extracción social pequeñoburguesa esta élite burocrático-militar tenía profundos vínculos con la intelectualidad urbana, los terratenientes y el conjunto de las clases campesinas¹⁵. Fue en el seno de la intelectualidad urbana pequeñoburguesa que Trujillo reclutó a sus principales cuadros, los que lograron darle “cuerpo doctrinario” a la dictadura, así como racionalizar su gestión estatal. Muchos de estos hombres, sin embargo, aunque habían hecho su vida en las ciudades, por su procedencia y origen estaban profundamente vinculados al mundo rural, lo que colocaba en el centro de sus preocupaciones ideológicas la cuestión agraria, de cuya solución dependía el desarrollo económico (léase el éxito de la empresa trujillista).

Indudablemente que en el seno de estas capas “pequeñoburguesas” se definían líneas ideológicas diversas. A finales de la década de los cuarenta era claro que una figura como Ramón Marrero Arísty representaba el sector más avanzado de la intelectualidad trujillista, mientras otras como Manuel Arturo Peña Batlle y Rafael F. Bonelly eran expresiones del ala conservadora¹⁶. Al final de la década de los cincuenta se apreciaba cada vez más claro que la figura de Joaquín Balaguer despuntaba como el intelectual más prominente del régimen en el plano político. Balaguer conjugaba, junto a su lealtad sin tachas al régimen (lo que no fue precisamente la mejor virtud de muchos de los principales colaboradores de la dictadura), una gran capacidad y experiencia burocrática, grandes dotes intelectuales y políticas, así como una inclinación doctrinaria que, si bien se identificaba con las posiciones sostenidas por el sector reaccionario de la intelectualidad trujillista, por lo menos en lo que respecta al antihaitianismo militante, el hispanismo y el gran “pesimismo histórico”¹⁷, en lo económico no le im-

¹⁵ Véase concretamente a Cassá (1982) y Turits (2013).

¹⁶ Vale la pena ver el estudio de Céspedes (1984) que analiza las relaciones entre el Estado trujillista y la intelectualidad.

¹⁷ Sobre este punto en particular véanse los libros de Balaguer *La realidad dominicana* (1949) y *El pensamiento vivo de Trujillo* (1955), que fundamentan su punto de vista conservador. Pero la mejor síntesis de sus ideas políticas es *La palabra encadenada* (1975). Para una visión del papel de Balaguer en la política de Estado bajo el trujillismo debe verse a Rodríguez de León (1996).

pedía sostener posiciones reformistas y desarrollistas, sobre todo a propósito del problema agrario y el papel de las clases medias en el proceso de desarrollo económico¹⁸.

El sector militar de la camarilla gobernante era un producto del mundo campesino. Con el tiempo, muchos de estos cuadros militares pasaron a ocupar en el campo dominicano una posición no solo de gran poder político, sino también de verdadero poder económico, gracias a las prebendas que en ese plano obtenían de la dictadura, lo que les permitió vincularse socialmente con las clases dominantes rurales, sobre todo con sus capas terratenientes. Esto le reportó al régimen capacidad de control militar y político sobre las poblaciones rurales y un amplio espacio de aceptación y dominación social sobre estas¹⁹.

Durante los treinta y un años que duró el dominio de la dictadura sobre la sociedad dominicana afirmo que su poder no solo se sostuvo con base en el terror organizado, sino también gracias a su capacidad de dominación social e ideológica sobre los núcleos poblacionales más numerosos del país, los campesinos. La dictadura logró crear, además, sus propios intelectuales orgánicos²⁰, como también definir un discurso ideológico coherente, no por ellos menos reaccionario y elitista. Ciertamente, en su expresión civil la élite burocrático-militar trujillista representaba un aparato administrativo del poder político e instrumentalizador del terror y la represión en su expresión militar, pero también era más. Dicha élite representó la estructura mediadora fundamental de la dominación social, ideológica y política del régimen sobre la sociedad dominicana. Donde más claramente funcionaba esta

¹⁸ En su libro de 1949 *La realidad dominicana*, Balaguer desarrolla una argumentación sobre el papel de las clases medias en la modernización económica y se detiene en el tema del desarrollo agrario. Por desgracia, los mejores trabajos marxistas (Gómez, 1977; Cordero Michel, 1975, y Báez Evertsz, 1979) –salvo Cassá (1982) que sí lo analiza e incluso refiere el libro de Balaguer– y no marxistas (Wiarda, 1978; Crassweller, 1968; Galíndez, 1976) no se detienen a estudiar este punto. Es Turits (2013) quien discute esta cuestión en los años noventa.

¹⁹ Turits (2013) es muy pertinente y convincente en el análisis de esas complejas relaciones.

²⁰ Sobre este concepto véase Gramsci (1972) y Buci-Gluskman (1978).

estructura mediadora era en las áreas rurales, logrando un apoyo “pasivo” de importantes núcleos campesinos a la dictadura. En las ciudades, sobre todo respecto a las emergentes clases medias, el discurso legitimador trujillista era mucho menos eficaz, teniendo el régimen que apoyarse para su dominio del mundo urbano en una reiterada recurrencia a la represión y el terror político directos²¹. No fue casual que salieran del seno de la pequeña burguesía urbana los principales brotes oposicionistas al régimen a lo largo de los treinta y un años de su dominación despótica²². Pero aun allí la dictadura logró abrirse espacios de legitimación que no pueden ser eludidos.

Como he sugerido arriba, esto tenía como requisito la pérdida de la hegemonía política en el control de los aparatos de Estado y “la marginación” del conjunto de las clases dominantes de los beneficios directos de este proyecto económico liderado por la élite burocrático-militar trujillista. Sin embargo, tal situación en ningún momento supuso la “anulación” política o económica de dichos sectores, sino simplemente su pérdida de hegemonía política en el Estado y su subordinación a los intereses del emporio trujillista en la conducción del proceso de desarrollo capitalista. Como ha señalado J.R. Cordero Michel:

Este proceso ha ocurrido en detrimento del desarrollo natural de la burguesía como clase económicamente independiente. La preponderancia del capital monopolista en todos los sectores de la economía ha atrofiado su desarrollo. Por ejemplo,

²¹ Aun así, es necesario establecer que esto pasó por fases. En los inicios de la dictadura hubo una feroz represión sobre la oposición política, sobre todo en las ciudades más importantes (Santo Domingo y Santiago), como lo describe Mejía (1988). A finales de los años treinta hubo un momento de represión brutal sobre la población haitiana, sobre todo en la llamada Línea Noroeste (Zaffaroni *et al.*, 2018; Turits, 2013; Derby, 2016; Vega, 1988). A mediados de los cuarenta a la repuesta estatal al auge coyuntural del sindicalismo azucarero, que culminó en 1946 con una huelga histórica, le sucedió un momento de fuerte represión (Cassá, 1990) y a finales de los cincuenta, tras la invasión de Cayo Confites en 1947 y los tres desembarcos guerrilleros liberadores en 1959, sucedió quizás la fase más brutal de todas (Cassá, 1999).

²² Sobre la participación de la pequeña burguesía urbana en la lucha contra Trujillo véase a Galíndez (1956), Crassweller (1968) y Cassá (1982).

en el sector del comercio de exportación, todas las compañías privadas que estaban en operación fueron disueltas en 1954 y en su lugar fueron creados por el dictador dos monopolios que controlaban todo el comercio exterior e interior de los principales productos del país. El 51 % de las acciones se las reservó para sí, distribuyendo el resto entre los comerciantes adictos al régimen. La política de integrar la sección de la burguesía más fiel al régimen en el disfrute de los enormes superbeneficios que obtienen en sus operaciones estos monopolios es realizada con el objetivo de subordinar sus intereses de clase a los intereses de la dictadura. La concentración monopolista en beneficio de la camarilla militar-burocrática y un puñado de comerciantes y terratenientes ha hecho apartar del régimen –de una manera más o menos importante– amplios sectores de las clases que, en el pasado, sostenían o toleraban la dictadura a cambio del paraíso económico que les brindaba la sujeción servil de las masas trabajadoras²³.

Más adelante, precisa Cordero Michel:

Lo que caracteriza todo el período de la “Era de Trujillo” es que la producción capitalista ha sido introducida en gran escala en una sociedad con fuertes vestigios feudales, por un Estado autocrático en estrecha alianza con el capital extranjero. Este desarrollo capitalista es de un carácter altamente monopolístico. El Estado significa en la República Dominicana la explotación feroz ejercida por un puñado de militares, burócratas, terratenientes y burgueses sobre el resto de la población²⁴.

Por todo esto, la referida debilidad de la burguesía dominicana en su conjunto en la situación postrujillista hizo de la necesidad del control directo del Estado un imperativo histórico; sin embargo, sus profundas debilidades constituyeron un formidable obstáculo para que esta lograra alcanzar un control político estable del Estado.

²³ Cordero Michel (1975), pp. 31-32.

²⁴ *Ibidem*, p. 33.

Una vez muerto el tirano, una situación semejante en sus resultados, pero distinta en su forma y origen, se le presentaba a los grupos burocráticos y militares trujillistas herederos del régimen, los cuales eran liderados por Joaquín Balaguer, presidente de la República desde 1960. Dichos grupos, en la coyuntura de los años 1961-1962, se resistieron a ser desplazados del control del Estado por parte de aquellas fracciones burguesas no pertenecientes directamente al proyecto trujillista. Esto así por su situación política como “herederos” del régimen, dada la necesaria tarea “democratizadora” exigida por Washington y las sistemáticas presiones populares y de la llamada alianza oligárquica en el nuevo escenario político. La posición de Washington ante la llamada “transición democrática” colocaba en una situación de extrema debilidad y escaso margen de negociación al grupo burocrático-militar trujillista frente a los otros sectores de las clases dominantes locales. A esto se une el hecho de que dichos sectores de ascendiente trujillistas no representaban de hecho un efectivo núcleo de poder económico, su fuerza era sobre todo política, dado su control efectivo de los aparatos de Estado. De eso se había encargado en su momento el propio dictador, puesto que, si bien le otorgó grandes beneficios políticos y sociales a su camarilla, también se ocupó de que los beneficios económicos derivados de estas prebendas políticas no lograsen competir con su proyecto económico personal. De aquí, en gran medida, la dificultad de parte de la “fracción trujillista” (sobre todo de sus cuadros burocráticos más comprometidos con el régimen) de pasar a convertirse en parte de las clases dominantes en términos económicos en la coyuntura postrujillista. Esto último es un elemento importante para la comprensión de la relativa facilidad con que fue desplazado del escenario político el grupo burocrático-militar heredero de la dictadura en los años 1961-1962 por las fracciones burguesas no participantes directamente del proyecto trujillista, lo que he llamado la alianza oligárquica.

Sin embargo, los círculos dirigentes de las clases dominantes tampoco tenían la capacidad ni la suficiente cohesión política como para asegurar la estabilidad del aparato estatal, que

permitiera cohesionar un proyecto de dominación social alternativo en parte por su escasa o nula participación en la mecánica del poder político durante la dictadura, pero también por su naturaleza social como grupos burgueses dependientes de un orden capitalista precario en sí mismo, con un alto grado de concentración monopólica en sus ejes dinámicos, donde las arterias económicas básicas del desarrollo capitalista estaban fuera de su control, como lo ha demostrado J. R. Cordero Michel. A la muerte de Trujillo las Fuerzas Armadas, en sus núcleos dirigentes, no poseían la experiencia y capacidad políticas que les permitiera un cabal entendimiento del papel que les tocaba representar en la nueva situación. De esta forma, no fue por un propósito político propio que pasaron a desempeñar, casi de un modo natural, un papel activo en la coyuntura política de los años 1961-1965. Esto fue sobre todo el resultado del papel político que les había tocado desempeñar en el Estado bajo la dictadura trujillista, como también el producto de la debilidad de las clases dominantes locales²⁵.

Hasta aquí he discutido algunas de las implicaciones de la crisis de hegemonía en el período 1961-1962, sobre todo en lo relativo a sus consecuencias para el bloque de dominación, cuyo espacio político de disputa era el Estado. La otra dimensión del conflicto estaba representada por la emergencia de las clases populares como actores políticos activos tras la muerte del dictador.

En términos históricos, este sí era un elemento novedoso en la historia contemporánea. Es más, de no haber sido por el papel activo de las masas populares urbanas en la coyuntura de los años 1961-1962 y hasta la guerra civil de 1965, las disputas en el seno del bloque de dominación a la muerte de Trujillo posiblemente no hubieran pasado de un simple reacomodo de fuerzas en el Estado a convertirse –como lo fue en efecto– en una verdadera crisis de todo un orden de dominación social. La intervención de las masas populares urbanas abrió una nueva dimensión del conflicto social y político, prácticamente polarizando al bloque de dominación en

²⁵ Desarrollo este punto en el *Post scriptum*.

una relación antagónica con el bloque dominado. ¿Cuál era la naturaleza de este conflicto?

En primer lugar, el conflicto entre clases dominantes y dominadas se daba en el ámbito de la economía a propósito de las presiones del movimiento popular para elevar sus niveles de ingresos. En segundo término, el conflicto se expresaba en el ámbito sociopolítico, a causa de las exigencias de participación social y política de grandes sectores de masas. Fruto de las intensas luchas sociales del período, se inicia en el país la reorganización a escala nacional del movimiento obrero, el cual, pese a sus limitaciones corporativas y el bajo nivel de conciencia política de la generalidad de sus dirigentes, logró organizar en pocos meses (de mayo de 1961 a diciembre de 1962) más de 150 nuevos sindicatos²⁶. En poco tiempo, los obreros textiles, los choferes del transporte público, los empleados del gobierno central, los trabajadores de la construcción y del azúcar, los maestros, etc., lograron crear y mantener un movimiento sindical de gran importancia política²⁷. Debido a las presiones de las masas, los niveles salariales de los trabajadores azucareros y manufactureros urbanos, así como los sueldos y salarios de los empleados del Estado y demás sectores urbanos asalariados ocupados, lograron una elevación considerable. Si en 1960 el salario promedio por hombre ocupado en la industria azucarera era de RD\$ 324.8 al año, en 1962 se había elevado a RD\$ 740.4 y en 1964 ascendía a RD\$ 981.0. Solo para la industria azucarera las erogaciones por concepto de sueldos y salarios se elevaron de 21 a 70.9 millones de pesos entre los años 1960 y 1964. Con los empleados públicos ocurría otro tanto. Si en 1961 el sueldo promedio anual de un empleado público era de RD\$ 697.6, en 1964 se había elevado a RD\$ 1,066.8. Los obreros de la industria manufacturera también vieron elevarse sustancialmente sus niveles salariales. El salario nominal en este sector se elevó de RD\$ 676.6 anual por hombre ocupado en 1961 a RD\$ 1,074.4 en 1964.

²⁶ Véase a Morrison (1965), Goff y Locker (1972) y De Sierra (1968). Específicamente sobre el auge del sindicalismo en esos años debe verse a Calderón (1975).

²⁷ Sobre el punto específico de la participación del movimiento obrero en las luchas sociales y políticas de los años 1961-1965 el texto de Calderón sigue siendo el mejor (1975). Véase además a Cassá (1986 y 1990).

Esto es más significativo si consideramos que el costo de la vida en los años 1963-1966 apenas se elevó en un 3.5 %, lo que significa que este aumento de los sueldos y salarios implicó una mejoría efectiva del nivel de vida de las clases trabajadoras²⁸.

La elevación de los sueldos y salarios en las áreas urbanas amplió considerablemente los niveles de demanda interna, creando un incentivo directo para la inversión, sobre todo privada, puesto que gran parte del gasto público en dicho contexto tuvo que orientarse al pago de sueldos y salarios, sustancialmente elevados. De todos modos, la estructura productiva interna no logró responder de modo ágil al vertiginoso incremento de la demanda interna. Esto dio paso a que la demanda se cubriera vía las importaciones, las que lograron expandirse, pese a la merma considerable de las exportaciones en el período, debido a que “la capacidad de endeudamiento del país estaba prácticamente intacta, puesto que el modelo anterior dependía de sus recursos internos y no se hizo uso del endeudamiento externo sistemático”²⁹.

Teóricamente la elevación de la demanda interna, vía el incremento de los sueldos y salarios, en los hechos permitiría a los grupos importadores y al escaso empresariado industrial mantenerse interesados por que ese grado de participación de amplios sectores de masas en la distribución del ingreso se cristalizara, dado que, hasta cierto punto, esto les aseguraba su estabilidad como grupos económicos, al ver ensancharse sus posibilidades de mercado. Esta situación constituyó uno de los elementos esenciales que permitió atenuar los términos del conflicto social en el período.

A la larga, la mejora en la distribución del ingreso a través del aumento de los sueldos y salarios benefició directamente a la pequeña burguesía urbana, sector social cada vez más importante en la dinámica histórica contemporánea del país³⁰. No sostengo con esto que los sectores obreros no se beneficiaran de las nuevas

²⁸ Véase sobre el punto a Ascuasiati (1972), ONAPLAN (1965 y 1972).

²⁹ Ascuasiati (1972).

³⁰ Véase Vilas (1973) y Cassá (1986).

condiciones impuestas por la llamada “destrujillización” (reflejo de ello fue, precisamente, el auge del movimiento sindical y el alza de los salarios industriales). Sin embargo, dichos beneficios se concentrarían sobre todo en las áreas urbanas y esencialmente en sus sectores medios. El cuadro 1.1 muestra la realidad de los hechos. Mientras los salarios en el sector industrial se elevaron en 39 % entre 1962 y 1964, los sueldos y salarios del sector público lo hicieron en un 25.2 %. Como se sabe, en el sector público era donde los estratos medios de la población encontraban inserción ocupacional, básicamente en el tren burocrático estatal. Por otro lado, la situación del campesinado dominicano permaneció prácticamente estancada, y en muchos sentidos empeoró, al ser este sector social el de mayor importancia cuantitativa y representar a la vez los principales contingentes de la población trabajadora dominicana³¹. Es preciso reconocer que el alza de los salarios de los trabajadores azucareros benefició sobre todo a los obreros del ingenio y el sector industrial de las plantaciones, y solo en menor medida a los cortadores de caña. Ciertamente, el aumento de los salarios en el sector azucarero en su monto global fue muy significativo, pero en mucho menor medida que el monto global representado por la elevación de los sueldos y salarios del sector público a tenor de su desigual composición interna que privilegiaba a los trabajadores del central sobre los del corte de la caña.

De todos modos, a la larga, la sustancial elevación de los sueldos y salarios fortaleció un mercado de consumo urbano, sostenido por una clase media con un creciente poder social y político, mercado que no afianzó al escaso sector empresarial industrial, sino a la fracción comercial importadora de la burguesía. Como resultado de ello, tal como ha demostrado el profesor Ascuasiati, se sentaron en este período las bases del secular desequilibrio de nuestra balanza de pagos y la consecuente espiral inflacionaria, como veremos abajo³².

³¹ Para una evaluación del peso de la clase obrera industrial en la estructura general de la fuerza de trabajo dominicana véase OIT (1973) y Duarte (1986).

³² Ascuasiati, *op. cit.*

Cuadro 1.1
REMUNERACIONES PER CÁPITA POR SECTORES ECONÓMICOS
(RD\$ ANUALES)
1961-1968

Años	Industria		Sector Público	Total	Alza del costo de la vida (%)
	Azucarera	Manufacturera			
1961	380.8	676.6	901.0	697.6	
1962	740.5	901.2	995.4	903.8	
1963	578.8	998.8	1,109.1	888.5	
1964	856.1	1,107.4	1,204.5	1,066.8	
1965	785.5	2,072.5	1,372.0	1,144.0	
1966	695.9	1,210.1	1,316.0	1,057.7	
1967	501.8	1,221.4	1,249.8	941.6	
1968	562.9	1,244.0	1,300.0	1,006.7	
Tasas anuales de crecimiento (%)					
1961-62	94.5	33.2	10.5	29.6	3.2
1962-64	7.5	10.6	10.0	8.6	3.5
1965	-8.3	-2.3	13.9	7.2	-0.9
1966-68	-11.3	1.4	-0.6	-2.5	1.8

FUENTE: Secretariado Técnico de la Presidencia: Oficina Nacional de Planificación (1972).

El vertiginoso incremento de la demanda de consumo, que logró estimular en un abrir y cerrar de ojos las dimensiones de los mercados urbanos, trajo aparejado serios problemas económicos, pues no se correspondía con una ágil y elástica capacidad de oferta. En última instancia, esto benefició sobre todo a los importadores, ante las insuficiencias del tren industrial nacional y la parálisis de la productividad agropecuaria, pero se produjo al precio del desequilibrio externo. En el caso del agro, si bien el incremento de la actividad importadora en modo alguno colidía con la parálisis de la productividad agropecuaria, el precio que se pagaba por ello era el bloqueo de la industrialización, al afianzar un esquema de crecimiento económico que revertía las tendencias de crecimiento interno propias del modelo anterior hacia un modelo abierto al exterior, donde el sector líder del proceso pasaba a ser el capital importador.

La pregunta interesante que surge de todo esto es la siguiente: si el beneficiario directo del aumento de la demanda de consumo fue la oligarquía importadora, y dicho aumento se debió

en gran medida a la mayor capacidad de participación social y política de las masas urbanas, ¿por qué, entonces, la oligarquía se opuso al incremento de la participación social y política de las masas populares? A propósito de este conflicto, la cuestión que aquí se planteaba era más estratégica que coyuntural, y tiene que ver con la repartición del excedente económico en condiciones de escasez y subacumulación³³.

Como he analizado arriba, los beneficios de la elevación del ingreso en el período favorecieron sobre todo a la clase media urbana, y solo en menor medida a las clases trabajadoras, sobre todo a las masas campesinas. Si bien la oligarquía importadora necesitaba un espacio de mercado que le asegurara su crecimiento, la efectiva redistribución del ingreso a favor de los estratos medios urbanos y de importantes núcleos obreros, que acompañó el proceso de “democratización” de la sociedad dominicana en los años sesenta, implicaba la ruptura, o por lo menos el cuestionamiento, de uno de los pilares básicos sobre los cuales había descansado el proceso de desarrollo capitalista en la etapa anterior: la profunda concentración del ingreso, como requisito de la acumulación. Si a esto añadimos el hecho de que en el período el Estado se convirtió en el principal empresario y empleador del país, una conclusión salta a la vista: la creciente participación popular en la repartición del excedente forzaba más temprano que tarde a la modernización de la economía³⁴ y, en consecuencia, hacía peligrar la estabilidad de la oligarquía dominicana. De aquí que la conquista del Estado se convirtiera para la oligarquía en una urgencia no solo de orden

³³ Para una discusión del papel de las élites en el proceso de desarrollo capitalista en condiciones de subdesarrollo y subacumulación puede consultarse a Baran (1968) y Gunder Frank (1970) como textos generales. Más específicos acerca de los mecanismos del proceso de subdesarrollo son, en un plano teórico, Marini (1974) y Benetti (1976). Es imprescindible la lectura de Prebisch (1963). Con todo, en lo relativo al papel de las élites en la dinámica del desarrollo el texto colectivo coordinado por Lipset y Solari (1967) es la referencia clásica.

³⁴ De Sierra (1968) es de los pocos autores que advierten con claridad el problema. En un plano teórico, para el caso latinoamericano, debe leerse a Prebisch (1963) y Cardoso (1968 y 1972).

político, sino económico, y su oposición a la democracia política y la movilización popular terminara transformándose en un objetivo económico.

Además de los elementos referidos, en el período de crisis se produjo un verdadero auge de masas en materia política, manifiesto en el nacimiento de grandes partidos de masas, como el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la Unión Cívica Nacional (UCN), y en la activación de un importante movimiento de izquierda, con gran arraigo en las capas medias urbanas, como fue el caso del Movimiento Revolucionario 14 de Junio (MR-1J4).

Como veremos en el próximo apartado, una vez la alianza oligárquica logró asirse a las arterias del poder del Estado, sus dificultades para el ejercicio de la hegemonía política se manifestaron en una profunda contradicción, determinada por tres elementos básicos: 1) su incapacidad para restablecer el necesario equilibrio político y consecuente estabilidad estatal en el bloque de dominación que se articulaba bajo nuevas condiciones sociales y económicas; 2) su fracaso en el establecimiento de un modelo de crecimiento económico estable, al orientar la satisfacción del aumento de la demanda interna hacia las importaciones, con los consecuentes desequilibrios externos a la industrialización y modernización de la economía, 3) y, finalmente, sus limitaciones económicas y sociales. En una palabra, la alianza oligárquica en el poder en el período 1961-1965 expresó claramente su incapacidad económica y política para resolver de un modo satisfactorio el crucial problema de la distribución del excedente hacia las tareas de la modernización en condiciones de escasez y subacumulación, como también la cuestión de la unidad del bloque de dominación, ante las tareas que la situación postrujillista demandaba³⁵.

³⁵ Para la oligarquía dominicana en sus sectores más conservadores el ascenso de Bosch al poder planteaba una situación límite, ya que ponía directamente en entredicho sus propósitos estratégicos (control del poder económico estatal, apertura democrática y total sometimiento al poder norteamericano). Esta dejó en evidencia su incapacidad hegemónica e inmediata avenencia al proyecto de golpe de Estado, como expresión de su cosmovisión política autoritaria. En el *Post scriptum* desarrollo un análisis más pormenorizado de esta problemática.

1.2. Las luchas sociales en el período 1961-1966

A la muerte de Trujillo, Joaquín Balaguer pasó a ser el presidente en funciones. Como hemos visto, era un viejo personaje del régimen trujillista, destacado intelectual que desempeñó las funciones de secretario de Estado de Educación, embajador y canciller interino, a lo que se unía su gran experiencia y sagacidad políticas. Con la muerte del dictador, Balaguer desde el principio enfrentó una serie de presiones políticas, procedentes de varias direcciones. Por el lado de los sectores de las clases dominantes, cuyos poderes económico y político fueron constreñido bajo la dictadura, era claro que las presiones tenían como objetivo estratégico el desplazamiento de la camarilla trujillista que controlaba el Estado, dando paso a su dominio oligárquico³⁶. Por el lado de Washington, las presiones tendían a acelerar el proceso de destrujillización, mientras que, por parte de los herederos del régimen, sobre todo de la familia del dictador, en particular de su hijo Ramfis (el cual tenía una relativa ascendencia sobre el Ejército), las presiones sobre el gobierno no solo tendían a lograr la venganza de la muerte del tirano, sino a asegurar la permanencia del régimen³⁷.

Resultado de esa situación, ante las presiones directas de Washington y atendiendo a los intereses del pequeño sector burocrático-militar liderado por Balaguer, se dieron garantías a los actores políticos de la oposición para el inicio de sus actividades, aún con la presencia de la familia Trujillo en el país. En 1962 el primer partido político que llegó del exilio fue el PRD, liderado por Juan Bosch. Empero, la primera organización política que se constituyó a la muerte de Trujillo fue la UCN, la cual inicialmente se declaró apartidista, planteándose como su único objetivo la destrujillización del país³⁸.

³⁶ Sobre el particular véase a Vilas (1973) y Goff y Locker (1972).

³⁷ Morrison (1965) discute con claridad el punto. El libro de Latorre (1975) es muy útil para el análisis de esa coyuntura específica.

³⁸ Véase a Bosch (1964), Martin (1973) y Latorre (1975).

En tales condiciones, se desata un período de grandes movilizaciones políticas en el cual las masas populares van teniendo una participación cada vez más activa y la pequeña burguesía urbana prácticamente se convierte en el grupo social dirigente del proceso político. Las consecuencias de esta situación se discutirán luego. Ante las presiones de las clases dominantes locales y de Washington y la creciente y activa participación popular en el escenario de la lucha política, los Trujillo se ven forzados a salir del país. De inmediato se constituyó un Consejo de Estado presidido por Balaguer e integrado por un conjunto de figuras políticas dominicanas, muchas de ellas antiguos colaboradores del régimen trujillista. En este primer Consejo de Estado, la UCN era hegemónica y con ella la burguesía comercial importadora y los terratenientes³⁹, la llamada alianza oligárquica. Luego del fracasado golpe de Estado del general Rodríguez Echavarría, tras la creación de una Junta Cívico-Militar, Balaguer quedó aislado y, después de una prolongada huelga general que duró diez largos días, fue finalmente expulsado del país. Con la salida de Balaguer se constituyó el segundo Consejo de Estado presidido por Rafael F. Bonelly, oscuro abogado de provincia, antiguo colaborador del régimen, abogado de Trujillo en materia de tierras y genuino representante de la oligarquía dominicana⁴⁰. Este segundo Consejo de Estado fue de completa hegemonía oligárquica, al ser el gobierno que, paradójicamente, preparó las elecciones de 1962 que le darían el triunfo a Bosch. Una síntesis del proceso de constitución de los Consejos de Estado la ofrece el propio profesor Bosch:

La presión sobre Balaguer aumentó a tal punto que aceptó entregar el poder a un equipo de hombres de la Unión Cívica Nacional, tal como le había pedido la Unión Cívica Nacional con el respaldo del Departamento de Estado. Washington quería un gobierno colegiado con autoridad para negociar, para recibir

³⁹ Bosch (1964/2009b).

⁴⁰ Para una caracterización de los miembros de la oligarquía dominicana es imprescindible la lectura de Martín (1975).

préstamos y obligar al Estado; y ese tipo de gobierno no podía crearse sin una reforma constitucional. Balaguer, pues, envió al Congreso una solicitud de Enmienda a la Constitución, y así creó el Consejo de Estado, de siete miembros, con uno de ellos como Presidente, que debía gobernar hasta el 27 de febrero de 1963 y debía convocar a elecciones para la Constituyente a más tardar el 26 de agosto de 1962 y a elecciones presidenciales, de congreso y de ayuntamiento a más tardar el 20 de diciembre del mismo año.

Para formar el Consejo de Estado, la Unión Cívica Nacional escogió cuatro de sus miembros y alguien que no se sabe si fue Balaguer, si fue Echavarría, o fue otra autoridad, a los dos supervivientes del 30 de mayo. En total cuatro civiles y dos que no lo eran, y después de la renuncia de Balaguer se agregaría uno que había entrado en la Unión Cívica Nacional a título de dirigente del 14 de junio, pero que en diciembre ya no era catorcista sino cívico.

La mecánica de la sustitución de Balaguer por ese Consejo de Estado fue la siguiente: Balaguer seguiría siendo Presidente de la República como Presidente del Consejo de Estado hasta el 27 de febrero de 1962, el Licenciado Rafael F. Bonelly, que debía encabezar el Consejo como Presidente, sería Vicepresidente hasta renunciar Balaguer, cuando pasaría a ser Presidente.

Se estableció, pues, lo necesario para el traspaso del poder, pero la Unión Cívica Nacional no estaba conforme y quería hacer saltar a Balaguer antes del 27 de febrero. Los cívicos no podían esperar unos días; querían el poder inmediatamente. La agitación crecía por horas, y esa agitación desembocó, el 16 de enero, en la muerte de cinco personas en el Parque Independencia. Hostigado por los cívicos, Rodríguez Echavarría envió un tanque de guerra a ese parque para que impidiera actividades de agitación en el local de la Unión Cívica que se hallaba en aquel lugar, y como la multitud no se dispersaba, sino que se mostraba agresiva, los tripulantes del tanque dispararon. Rodríguez Echavarría perdió la cabeza, y a la conmoción producida por el desgraciado episodio respondió con un golpe de Estado relampagueante. Balaguer y los miembros del flamante Consejo de Estado fueron presos en el

Palacio, aunque a Balaguer se le permitió después salir, e inmediatamente Rodríguez Echavarría formó una Junta de Gobierno de tres miembros⁴¹.

El segundo Consejo de Estado, presidido por Rafael F. Bone-ly, encontró un inmediato respaldo de Washington, lo cual se expresó en un conjunto de medidas, tales como el levantamiento de las sanciones económicas que desde 1960 pesaban sobre el país, la estructuración de planes de ayuda militar, la extensión de un crédito de emergencia de 25 millones de dólares y la autorización de compras de azúcar en el mercado norteamericano a precios preferenciales.

Del Castillo y Fernández han resumido los resultados básicos de la gestión del Consejo de Estado en nueve puntos:

- 1) Concertación de contrato entre el Estado Dominicano y la Intercontinental Hotels, para la venta del Hotel embajador.
- 2) Autorización para que operen en el país el First National City Bank y el Chase Manhattan Bank.
- 3) Suscripción de acuerdo de asistencia militar entre los Estados Unidos y la República Dominicana.
- 4) Promulgación de la Ley de Emergencia para legalizar las deportaciones.
- 5) Creación de la Dirección Nacional de Seguridad en sustitución del Servicio de Inteligencia Militar (SIM).
- 6) Establecimiento de sanciones para las huelgas ilegales.
- 7) Aprobación de contrato entre el Instituto Agrario dominicano (IAD) y la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) de los Estados Unidos, para la planificación de la reforma agraria.
- 8) Ratificación de la concesión minera de la Alcoa.
- 9) Ratificación de la concesión minera a la Falcombridge.⁴²

Como se aprecia, de los nueve puntos cuatro consistían en acuerdos económicos entre el Estado Dominicano y sectores capi-

⁴¹ Bosch (1964), pp. 57-58.

⁴² Del Castillo y Fernández (1974).

talistas norteamericanos y dos en acuerdos “bilaterales” de “ayuda” civil y militar de los Estados Unidos hacia República Dominicana. Bajo el Consejo de Estado era evidente la injerencia y dominio de los Estados Unidos en la gestión estatal. Ahora bien, como he discutido en la sección anterior, detrás de la llamada destrujillización planteada por la UCN, se formulaba la necesidad de la oligarquía dominicana del control directo del Estado. Estimaban que solo al desplazar del control del gobierno a la fracción balaguerista podía lograrse este objetivo estratégico. Toda la acción política desarrollada por la UCN se encaminó a ese objetivo. Pese a que en ese primer momento los Estados Unidos se inclinaron por la posibilidad de que Balaguer continuara al mando de las tareas del Estado (para cimentar el proceso de transición en el período inmediato a la muerte del tirano, al que bautizaban como de “transición democrática”) en los hechos la lógica del pragmatismo les obligó, finalmente, a brindar un apoyo irrestricto a los sectores oligárquicos, deshacerse de Balaguer y depositar en manos de la UCN el control directo del gobierno⁴³. En términos de clases, y visto en una amplia perspectiva histórica: ¿qué representaba la UCN? ¿Cuál era el significado exacto del PRD? En otras palabras: ¿Quiénes eran los verdaderos actores históricos del conflicto que, en el ámbito inicial de los partidos y organizaciones políticas, se manifestaban a través de un brutal enfrentamiento entre “trujillistas” y “antitrujillistas”, para luego transformarse en una batalla política entre “cívicos” y “perredeístas”?

En términos de sus intereses económicos y sociales, la composición de fuerzas sociales que se aglutinaban tras la UCN era más homogénea que la agrupada tras el PRD. En la UCN se veían representados los intereses de la oligarquía comercial y terrateniente, algunos sectores del escaso empresariado no comprometidos directamente con la dictadura, la clase media urbana en ascenso e incluso sectores del proletariado urbano. Del lado del PRD la situación era más compleja en su composición social: allí convergían los intereses del proletariado urbano y los sectores marginales más pauperizados, la mayoría del campesinado, fracciones de

⁴³ Gleijeses (1978/2011) y Vega (2004).

la burguesía vinculadas a la dictadura, intelectuales con un reciente pasado trujillista; todo ello con el apoyo tácito del Ejército, y sostenido además por una plataforma liberal y reformista que difícilmente unificaría intereses y sectores sociales tan disímiles.

En la coyuntura electoral la estrategia del PRD se sintetizaba inteligentemente en la política de “borrón y cuenta nueva”, que tendía a ganarse la anuencia, o por lo menos la neutralización, de los sectores económicos, políticos y militares ligados al viejo régimen. El PRD desplazó su estrategia del puro terreno político-coyuntural (espacio donde se situó la UCN: la “destrujillización”) al social (la lucha contra los “tutumpotes”, expresión local para designar a los hijos de la oligarquía). Con ello el PRD logró, además del apoyo de los grupos sociales referidos, la anuencia de los militares, con lo cual logró abrir las puertas del campo dominicano, donde se localizaba la mayoría del electorado: las grandes masas campesinas.

Al aproximarse las elecciones de mayo de 1962, la UCN se declaró partido político. Al contrario del PRD, la UCN desde el principio se aisló de los sectores político-militares anteriormente ligados al régimen trujillista, enfilando su política hacia el total aislamiento de los remanentes del trujillato del control de los aparatos del Estado, aislándose también del proletariado urbano y sobre todo del campesinado pobre, pese a que logró aglutinar a la pequeña burguesía urbana “antitrujillista”.

En lo inmediato, en la coyuntura planteada por las elecciones de mayo de 1962, la UCN llevaba las de perder, pues el proyecto oligárquico que defendía la aislaba del electorado nacional, principalmente de las clases trabajadoras urbanas y el campesinado. Sin embargo, en términos mediatos, el proyecto político de la UCN tenía más posibilidades de pasar al control del Estado que el del PRD, ya que convergía con el de la oligarquía, único sector en quien los Estados Unidos podían finalmente confiar, a quien al fin y al cabo los militares se encontraban vinculados y contra el cual los sectores más radicalizados de la pequeña burguesía de hecho no habían podido estructurar un proyecto político alternativo de sustitución y reemplazo del trujillismo. En ese contexto, las elecciones generales de 1962, en las que el PRD salió victorioso con una aplastante ma-

yoría sobre la UCN, expresaron claramente el proyecto oligárquico de hegemonización política del Estado, pero también su rotundo fracaso, pues demostraron la incapacidad de la oligarquía para movilizar y cohesionar un bloque de poder frente al proyecto populista y pequeñoburgués del PRD y los sectores de masas ante los cuales tenían más posibilidades de dominio y control social: los campesinos y la clase media urbana en ascenso⁴⁴.

Del lado perredeísta el significado de las elecciones era más claro: tras el PRD la pequeña burguesía urbana articulaba un instrumento formidable en su lucha por la participación social y política en las condiciones del postrujillismo, pero también el triunfo perredeísta daba forma política a las presiones populares por una más justa distribución del ingreso.

Como se puede apreciar, el proyecto de Bosch entraba en franca colisión con el oligárquico de la UCN. De manera tal que prácticamente desde la toma de posesión de Bosch, la oligarquía, tras la UCN, dio la espalda al gobierno, colocándose prácticamente en el terreno de la conspiración⁴⁵.

Inicialmente los militares apoyaron a Bosch en las elecciones por una determinación de orden estrictamente político: en ese momento era la garantía que les permitía su continuidad y vigencia en la nueva situación política. Pero, a la larga, dadas sus vinculaciones con las esferas terratenientes y su papel en el Estado como aparato represivo, los intereses de las élites dirigenciales del Ejército se adecuaban a la naturaleza económica y social del proyecto oligárquico y no con el plan liberal de Bosch. Este último, pese a que coyunturalmente encontró el apoyo de amplios sectores populares (los que, para ser exactos, de hecho siempre le prestaron apoyo) y de algunos sectores de las clases dominantes (en su versión “trujillista”, si cabe

⁴⁴ El “interregno” de los siete meses de gobierno de Bosch en el asalto oligárquico al poder del Estado no ha sido estudiado con la seriedad que merece. Para las implicaciones económicas del período, véase a Estrella (1971) y para una evaluación del punto de vista norteamericano véase a Martin (1975). Un enfoque interesante es el de Latorre (1975). Debe verse a Guerrero (1993) y Grimaldi (2000). El ensayo de Goff y Locker (1972) sigue siendo el mejor al respecto.

⁴⁵ Bosch (1964/2009b) y Grimaldi (2000).

la clasificación), así como de los cuadros dirigentes del Ejército, no se avenía con el proyecto económico y social de la burguesía dominicana en su conjunto, específicamente de los grupos oligárquicos, que era la que a la larga pasaba a ocupar el puesto que antes detentara la empresa trujillista. Esto le obligó a moverse en una dualidad de comportamientos políticos que terminó aislándolo de las masas populares, aun cuando –y hay que decirlo– conservó la vigencia de las libertades públicas. Era claro que estos tortuosos movimientos políticos eran el resultado de la necesidad de neutralizar las presiones de las clases dominantes, sin embargo, esto lo dejó prácticamente en manos de la oligarquía y el Ejército.

Finalmente dio luz verde a la conspiración la actitud de los Estados Unidos. Usualmente se ha querido ver en la actitud de Washington hacia el gobierno de Bosch el resultado de factores exclusivamente políticos, principalmente su tono liberal que permitió a la izquierda cierta libertad de organización política, situación que se tradujo en algunos sectores, como los movimientos sindical y estudiantil, en un relativo auge organizativo y político. A esto se unía el espectro de Cuba, que para la fecha constituía el factor condicionante de la política norteamericana en el área del Caribe. Las derechas dominicanas supieron hacer buen uso de estas circunstancias para lograr de la Embajada Norteamericana si no el apoyo abierto para la conspiración golpista por lo menos una inicial “neutralidad cómplice”. Con los militares ocurría otro tanto. Las derechas dominicanas, a través del llamado problema del comunismo, lograron minar las bases militares del gobierno de Bosch hasta colocar a sus principales dirigentes en la franca conspiración. A mi juicio, tanto en el caso de los norteamericanos como en el de los militares criollos, lo importante es destacar los condicionantes de clase que determinaron sus posiciones. De hecho, los militares estaban ligados, por su posición de control del aparato represivo del Estado, al respeto a la legalidad del gobierno, pero se planteaba no tanto la preservación de la “legalidad burguesa sin burguesía”, sino la afirmación del proyecto burgués dependiente. Este no era liderado por Bosch, sino por la oligarquía desplazada del control del gobierno tras los resultados de las elecciones de 1962.

Además, existían profundos vínculos entre los sectores importadores-exportadores y terratenientes y los militares. El único sector militar que posiblemente, desde el principio y hasta el final de los breves siete meses del gobierno de Bosch, se mantuvo en contra de la conspiración fue el que respondía a la fracción balaguerista, en ese momento bastante diseminado, como consecuencia de la derrota que había sufrido al pasar la oligarquía en 1962 al control directo del gobierno tras el Consejo de Estado⁴⁶. Por esa situación, dicha fracción militar no podía enfrentarse en ese momento a los sectores más atrasados del bloque militar-oligárquico. Además, existía el grupo de asesores norteamericanos, que a la larga terminó comprometido con la conspiración golpista⁴⁷.

La posición norteamericana es más fácil de comprender: el presidente Kennedy lo había afirmado en el período previo a las elecciones⁴⁸. Los norteamericanos preferían una democracia que sustituyera el régimen trujillista, pero ante la posibilidad de una nueva Cuba no vacilarían en apoyar una dictadura derechista. Era natural la hostilidad de los norteamericanos hacia la actitud de Bosch respecto a la democracia: la democracia política planteada por Washington suponía la persecución del movimiento de izquierda al que Bosch había dado legalidad y la desarticulación del movimiento sindical, al que le había permitido un espacio de organización⁴⁹. De ahí que, finalmente, el 25 de septiembre se produjo el golpe de Estado contra Bosch y su gobierno⁵⁰.

⁴⁶ Hubo también una pequeña fracción de jóvenes oficiales de rango medio y alto, que mostró una posición institucionalista y leal a Bosch, la cual fue liderada por el coronel Fernández Domínguez. Véase la segunda edición del libro de Gleijeses publicada en español en Santo Domingo bajo el título *La esperanza desgarrada* (2011). Sobre la figura del coronel Fernández Domínguez y su papel en este proceso debe verse el libro de Arlette Fernández (1981).

⁴⁷ Atkins (1987), B.J. Bosch (2010), Grimaldi (2000) y Guerrero (1993).

⁴⁸ En el libro de Morrison (1965) se colige con claridad las ambivalencias de Washington.

⁴⁹ La posición “liberal” de Washington, unida a su anticomunismo doctrinal queda claramente evidenciada en el libro de Martín (1975). La documentación levantada por Bernardo Vega ratifica la dimensión del anticomunismo de Washington, como un claro condicionante de su política exterior hacia el Caribe (Vega 2004 y 2006).

⁵⁰ Grimaldi (2000) y Guerrero (1993).

Sin embargo, al poco tiempo del golpe de estado contra Bosch, el Triunvirato que le sucedió pronto entro en una fase de deterioro a la vez que los militares afirmaron una clara propensión a la corrupción, a lo que se unía la profunda incapacidad de gestión gubernamental. Asimismo, importantes personalidades y grupos de poder, que inicialmente apoyaron con cierto entusiasmo a los militares golpistas, terminaron alejándose del régimen. A esto se añade la fractura del Ejército y el aumento del descontento en la sociedad, manifiesto en huelgas, reclamos, paros y todo tipo de oposición al gobierno, que terminaron fortaleciendo al PRD. Puede decirse que, tras el asesinato de Manuel Aurelio (Manolo) Tavárez Justo y la liquidación de la guerrilla que dirigió, el declive moral del régimen quedó marcado. Al final, el llamado Triunvirato, cuya cabeza dirigente era el presidente de facto Donald Reid Cabral, quedó aislado. En los meses que precedieron a la revuelta de abril de 1965, Lowenthal describe la situación:

Para abril de 1965, casi todos los dominicanos políticamente activos se oponían al régimen de Reid Cabral. Probablemente la mayoría habría favorecido la pronta celebración de elecciones en las que participaran los ex presidentes Bosch y Balaguer como el mejor medio de reemplazar al gobierno de Reid Cabral. Sin embargo, no había acuerdo sobre si podrían asegurarse las elecciones y cuándo se celebrarían. Lejos de ofrecer garantías para las tan deseadas elecciones, Donald Reid Cabral hacia sugerencias de que serían pospuestas, o de que Bosch y Balaguer serían excluidos de ellas. Por lo tanto, el deseo de dar un golpe que abriera el camino al regreso de Bosch y Balaguer ganó ímpetu entre los seguidores de ambos líderes. La embajada Norteamericana, ansiosa de evitar el golpe, con todas sus inciertas consecuencias, se concentró en respaldar a Reid. Al notar el evidente apoyo norteamericano a Reid, los dominicanos dudaban que el gobierno de los Estados Unidos ejerciera presiones para que se celebraran las elecciones en septiembre. Por consiguiente, aumentaron aún más los incentivos para adelantar el golpe⁵¹.

⁵¹ Lowenthal (1977), pp. 68-69.

La acertada descripción del profesor Lowenthal deja clara la complejidad de la crisis en la que se encontraba el país al momento en que se desató la revuelta de abril de 1965. Quizás el eje central de dicha crisis fue el claro quiebre de la unidad del bloque de fuerzas en el poder. Había claramente una ruptura entre las fuerzas empresariales que apoyaron inicialmente el régimen golpista: de un lado los importadores, como la fracción predominante, estaban en abierto conflicto con los débiles grupos industriales y con la fracción financiera, mientras las diferencias entre los grupos militares comenzaban a aflorar en los mandos militares entre sí y entre el estamento militar y el empresariado. En las propias Fuerzas Armadas se planteó la división, mientras la crisis política condujo a una agudización de las políticas represivas contra el movimiento sindical y estudiantil, además de la persecución a los partidos opositores, sobre todo al PRD. Pero esos dos últimos elementos, ante la división del bloque del poder, lejos de diezmar la fuerza del movimiento sindical y la oposición, fortalecieron al PRD y la izquierda. Había una seria crisis económica manifiesta en la aguda crisis de la balanza de pagos, el aumento de la deuda externa y las tendencias a la aceleración de la inflación, cuyos resultados inmediatos fueron el desabastecimiento alimenticio y la crisis del sector exportador. En esas condiciones, Estados Unidos se mostró dispuesto a negociar con la oposición, principalmente con el PRD, una solución política a la crisis del régimen. Finalmente, en tales circunstancias la oposición se mostraba cohesionada, lo cual se manifestó en el llamado Pacto de Río Piedras en Puerto Rico entre el PRD y la democracia cristiana, específicamente con el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC). En tales condiciones, la Revolución de Abril de 1965 estaba ya a la vuelta de la esquina⁵².

⁵² Gleijeses (1978/2011), en particular el capítulo V, que analiza el período del llamado Triunvirato.

Capítulo 2

LA ESTRATEGIA DE LA DOMINACIÓN DEL REFORMISMO DEPENDIENTE

[...] cuando un príncipe conquista un Estado nuevo que añade como miembro al suyo propio, entonces es necesario desarmar al Estado adquirido, con excepción de aquellos de sus miembros que al conquistarlos se han pronunciado por ti, y aún a éstos es menester, en tiempo y ocasión oportunos, tornarlos afeminados y muelles, ingeniándose de modo que todas las armas de tus Estados estén en manos de tus soldados propios, que en tu antiguo Estado viven junto a ti. Solían aquellos de nuestros antepasados que eran tenidos por doctos decir que era preciso mantener Pistoia con los partidos y Pisa con fortalezas, y así alimentaban en cualquier ciudad las diferencias, para poseerlas más fácilmente.

NICCOLO MACHIAVELLI
El príncipe

El que me sustituya, ¿será mejor que yo, más fiel que yo a la Constitución de la República, y a los principios de esa Carta Orgánica que consagran la libertad de comercio, la libre empresa, la libertad de expresión, la inviolabilidad de los derechos fundamentales del hombre, el derecho de todos a disenter de las opiniones del que gobierna, y, en fin, a las prerrogativas inherentes a la dignidad humana?

¿Hay, por otra parte, dentro de las Fuerzas Armadas, una sola figura que unifique a todos los hombres que visten el uniforme del Ejército Nacional, de la Marina de Guerra o de la Fuerza Aérea?

¿Qué candidato es el que mejor garantizaría en estos momentos la continuación de la paz, la ininterrupción del progreso, la escrupulosa inversión de los fondos públicos, la armonía tanto dentro de las fronteras de la República, hogar común de todos los dominicanos, como dentro de los propios recintos militares?

“Yo soy, en cierto modo, señores, un instrumento del destino.

JOAQUÍN BALAGUER

El análisis de la estrategia de dominación bajo el régimen balaguerista demanda delimitar el campo teórico que permite deslindar lo político de lo social, sin sacrificar el estudio de sus relaciones. Son dos los ejes centrales por dilucidar. El primero es el concepto de “bonapartismo”, que permitirá reconocer la lógica de articulación de las alianzas de clase en una situación de debilidad estructural del Estado y débil capacidad de las clases y fracciones de clase para afirmar un proyecto de dominación estable. El segundo eje es el concepto de “reformismo” que permite reconocer la forma a partir de la cual el Estado asume la dominación frente a los grupos dominados, pero también ante las emergentes fracciones de las clases dominantes que la nueva situación impone.

Asumiendo ese enfoque, en una primera parte de este capítulo analizo la dinámica de la dominación política, en particular el papel del militarismo y las políticas de control represivo y dominio clientelar del movimiento de masas. Situado en ese punto, finalmente procedo a presentar una primera aproximación del análisis del proceso de modernización capitalista que desde el Estado se impulsa y permite la movilización de recursos que fortalecerán una determinada estrategia de crecimiento económico, cuyo eje fue la industrialización por sustitución de importaciones, pero se organiza a partir del papel que pasa a desempeñar el capital financiero en la articulación y reproducción del conjunto de la economía.

2.1. Reformismo y bonapartismo

Con la instalación del primer gobierno de Joaquín Balaguer (1966), un nuevo esquema de dominación social, económica y política se inaugura en la República Dominicana. En lo político, dicho esquema logró integrar en un proyecto coherente y bastante estable los intereses de los diversos sectores y fracciones de las clases dominantes, a la vez que mantener su eficaz dominio y control sobre el conjunto de las clases dominadas, fundamentalmente sobre sus destacamentos de vanguardia, partidos de izquierda, orga-

nizaciones populares y sindicatos¹. Dicho modelo de dominación permitió, a su vez, unificar los diversos intereses económicos de las clases dominantes, en función de la nueva modalidad de inserción de la formación social dominicana en un sistema mundial caracterizado por el dominio del gran capital monopólico internacional, cuyo elemento dinámico se sintetiza en la expansión de las empresas transnacionales².

Si en lo político este esquema de dominación asumió la organización de una modalidad de “Estado de Excepción” de tipo bona-

¹ Sobre el régimen balaguerista, con todo y hablarse tanto de él, su bibliografía es pobre, sobre todo en lo que se refiere a textos académicos, más o menos generales sobre el régimen: su naturaleza política, composición de clase, etc. Algunos de los trabajos que pueden consultarse son Oviedo (1983), excelente tesis de grado, aunque quizás muy atrapada en la ambientación teórica de sus ideas básicas; Cassá (1976), breve y claro trabajo sobre la historia dominicana en lo que va de siglo, posiblemente el mejor resumen del período, aun cuando en lo que respecta al período balaguerista estimo que muchas de sus ideas resultan discutibles y un poco esquemáticas; Vilas (1979), trabajo pionero que planteó las hipótesis iniciales que orientaron las contribuciones de autores como Cassá (1986), y nuestro propio libro en su primera edición de 1985. Asimismo, el ensayo de Cuello de 1973, que produjo la primera crítica sistemática a la política económica del régimen reformista. Treinta años después de publicado *El reformismo dependiente*, la bibliografía sobre el gobierno de los doce años se enriqueció, aunque aún continúa siendo relativamente limitada. Merece referirse a Cassá (1986), texto fundamental que contiene el mejor análisis de la ideología reformista y el pensamiento de Balaguer, así como un meticuloso estudio en torno a la crisis política de los años 1961-1966. El libro de Moya Pons (1992) sobre los conflictos interempresariales y el Estado continúa siendo el mejor texto de historia de la industrialización dominicana moderna. Harthlyn (2008) ha escrito el trabajo más completo sobre la historia del proceso democratizador en la política dominicana moderna. Hay otros estudios que discuten aspectos puntuales del proceso político dominicano, publicados desde los noventa en adelante, como el estudio de Jiménez Polanco (1999) sobre los partidos; F. D. Espinal (2001) acerca de la historia constitucional y política; R. Espinal (1987), en cuanto a la presencia del autoritarismo en la política dominicana del siglo XIX al XX, y Faxas (2007), que trata la experiencia populista, entre otros.

² Sobre la expansión de las empresas transnacionales en el país los mejores artículos se encuentran dispersos en la revista *Impacto Socialista*, la mayoría de los cuales se deben a José Israel Cuello. En relación con la Gulf and Western (GW) en el país los libros de Del Castillo, Puig *et al.* (1975) y Frundt (1980) son los textos más ilustrativos. El último, pese a ser de una capacidad interpretativa menor que el primero, es más documentado. Véase también la polémica Cuello-Peynado (1974). Para el caso de Falcombridge debe leerse el libro de Deverell y el Latin American Working Group (1977).

partista³, en lo económico implicó la afirmación de un esquema de acumulación y desarrollo capitalista caracterizado por el dominio y predominio en la formación social dominicana del capital monopolístico internacional, así como la subordinación y dependencia del conjunto de las clases dominantes locales respecto al capital financiero internacional⁴.

De hecho, la revolución de abril de 1965 no significó sino la expresión exacerbada de las debilidades de la alianza oligárquica dominicana sobre todo en su expresión política. Como tal, el conflicto de abril fue el resultado histórico de la larga crisis de hegemonía planteada a las clases dominantes en el período previo (1961-1965), a raíz de la muerte de Trujillo, como también el gobierno de Joaquín Balaguer en 1966 fue la solución política articulada para resolverla. Sin embargo, en el estallido del conflicto de abril no solo intervienen estos factores de crisis en el seno de las clases dominantes, los cuales abandonados a su suerte hubieran encontrado una solución política dentro de los marcos de la propia estabilidad y legalidad burguesas. En efecto, fue la presencia de las masas populares en el conflicto de abril de 1965, el factor que transformó un movimiento típicamente conspirativo dentro de la mejor tradición cuartelaria latinoamericana en una experiencia de guerra popular, cuyos alcances afectaron la esfera de

³ Para un entendimiento del concepto de *Estado de Excepción* ver Poulantzas (1971). La modalidad bonapartista de Estado de Excepción está bien analizada en Bartra (1977). En América Latina la cuestión ha sido tratada y discutida en una amplia bibliografía de la cual refiero algunos títulos: O'Donnell (1977), Garretón (1977), Cavarozzi (1977). El libro de Lechner (1977) sobre la crisis del Estado en la región resume con brillantez el problema.

⁴ En términos estrictos, la expansión del capital financiero en su modalidad bancaria adquiere fuerza a partir de los años setenta, en consonancia con la expansión del mercado de euro-dólares entrada la década. En ese sentido, en el plano local, la expansión del gran capital financiero como fuerza económica hegemónica se robustece a partir de los años setenta, coincidiendo con el punto de auge y expansión del modelo reformista de crecimiento que analizo en el Capítulo 3 de este libro. Para un análisis del asunto en el plano internacional, véase el ensayo de Rosario Green y Jaime Estévez "El resurgimiento del capital financiero en los setenta: contribución a su análisis", en *Economía de América Latina*, 4 (80) marzo.

las relaciones internacionales⁵. Ciertamente, a los pocos días las masas populares alcanzaron una mayor participación en el control de la revuelta al fortalecer la presencia de organizaciones de izquierda, todo lo cual obligó a los sectores liberales a radicalizarse –tal es el caso del PRD y del PRSC– y a otros sectores menos comprometidos, que inicialmente participaron en la conspiración golpista, a romper definitivamente con el movimiento de masas, como fue el caso del Partido Reformista (PR) de Joaquín Balaguer⁶.

La derrota sufrida por las fuerzas constitucionalistas, gracias a la intervención militar directa de más de cuarenta mil marines norteamericanos en el país, implicó por parte de los Estados Unidos la estimulación de un reacomodo del bloque en el poder, así como la articulación de un nuevo esquema de dominación social y política, que fijó como sus objetivos estratégicos: 1) la contención del movimiento popular tanto en materia política, laboral-reivindicativo como organizacional; 2) la estructuración de un entendido político entre los diversos sectores y fracciones de las clases dominantes, que rearticularía la composición del bloque en el poder, permitiéndole un margen de participación a aquellos sectores que hasta ese momento se encontraban real o virtualmente excluidos de este, como la reducida burguesía industrial y el emergente ca-

⁵ A título de ilustración debe verse los libros de Slater (1976), Draper (2016) y Lowenthal (1977), que expresan con claridad las implicaciones del conflicto de abril de 1965 para la política exterior norteamericana.

⁶ Sobre los aprestos conspirativos de los grupos políticos vinculados a Balaguer durante el llamado Triunvirato en los años 1963-1965, véase Lowenthal (1977). Varias décadas después de publicado este libro, ha aparecido una literatura importante para dilucidar este punto. El libro de Gleijeses (1978) sobre la revolución constitucionalista es a mi juicio el estudio más completo publicado hasta ahora sobre el tema. En 2011 Gleijeses publicó una segunda edición en español profundamente revisada de su libro, bajo el título *La esperanza desgarrada*, con la novedad de que incorporó mucha información nueva procedente de los documentos desclasificados del Departamento de Estado, la CIA y otras instituciones estatales norteamericanas, que ayudan a precisar la visión norteamericana de la crisis de abril de 1965 y su grado de involucramiento. Los libros de Atkins (1987) y Brian J. Bosch (2010) sobre los militares en la política dominicana postrujillista, son de lectura necesaria para el conocimiento del tema de las conspiraciones cívico-militares del período 1963-1965 y los conflictos entre las camarillas militares en el gobierno de los doce años (1966-1978).

pital bancario, dado el predominio de las fracciones comerciales y terratenientes (lo que he llamado la alianza oligárquica) en el control del Estado, y 3) asegurar que las nuevas inversiones norteamericanas en el país tendrían no solo un amplio margen de seguridad en lo político, sino de expansión económica interna lo suficientemente estable y sostenida⁷.

En el terreno social y político es decisivo reconocer que esta nueva estrategia de dominación tuvo que desplegarse y articularse en función de las fuerzas sociales existentes en la formación social dominicana no solo desde la perspectiva de las clases dominantes, sino del conjunto de las clases dominadas. En la coyuntura de 1965, como se ha visto, ninguna de las fracciones de las clases dominantes estaba en capacidad política de enfrentar la tarea de cohesionar el pacto clasista que en esas nuevas condiciones se articulaba.

En este punto es donde se sitúa la importancia histórica del llamado “sector balaguerista” surgido en el seno de la dictadura trujillista⁸. De hecho, no puede decirse que el balaguerismo representara un grupo o capa social definido, capaz de articular un proyecto político e ideológico coherente. En todo caso, si lo fue estuvo solo en la cabeza de Balaguer, el cual, como puede fácilmente inferirse de sus escritos, sí tenía, desde finales de la década de los cuarenta, un proyecto político claro y definido⁹. ¿Qué representaba Balaguer y, mejor aún, el balaguerismo?

En primer lugar, el balaguerismo fue el heredero histórico de las bases sociales y políticas de la dominación trujillista. En tal sentido, Balaguer era, si no el único, el mejor representante de las viejas y experimentadas élites burocráticas y militares crecidas bajo la sombra de la dictadura. En las circunstancias postrujillis-

⁷ Un análisis detallado de este proceso se encuentra en el Capítulo 4 de este libro.

⁸ Sobre este particular Cuello (1973) tiene interesantes ideas que deben verse. Consulte, además, a De León (1996), que es a la fecha el trabajo más completo sobre la actividad de Balaguer durante la dictadura de Trujillo.

⁹ Véase su libro *La Realidad dominicana*, publicado en 1947 en México, que pone de manifiesto las ideas de Balaguer en materia de modernización del campo, su visión del papel de las clases medias en el proceso de modernización y expresa ideas sobre su visión de la función estatal en el proceso de cambio social modernizador.

tas, dichas élites encontraron en Balaguer un camino seguro de reorganización al adaptarse a las nuevas condiciones históricas, a la vez que lograron un espacio de participación y legitimidad políticas. En segundo lugar, el balaguerismo era el heredero histórico de la función política y social que, tras el Estado, logró articular Trujillo sobre el grupo social más numeroso del país, base del capitalismo agroexportador predominante en la formación social: los campesinos. Una consecuencia práctica surge a la vista: en las condiciones impuestas por la crisis de hegemonía en los años 1961-1965, y de la revolución constitucionalista de 1965, en medio de un movimiento popular en pleno proceso de radicalización, dadas las condiciones de la intervención militar norteamericana y el resultado del conflicto de abril, y tras la dispersión efectiva de las fuerzas políticas burguesas, el balaguerismo surgía como la alternativa política capaz de proporcionar las bases del equilibrio que permitiría restablecer los términos de la hegemonía burguesa en el Estado, con una base mínima de legitimación entre las masas, por lo menos entre sus actores más conservadores, pero más numerosos: los campesinos. En la coyuntura de 1966, este elemento permitiría restablecer el consenso de masas para enfrentar las fuerzas populares, agrupadas tras la defensa de la Constitución de 1963 en el conflicto de abril, fuerzas sociales esencialmente urbanas, compuestas por un tinglado heterogéneo de clases: intelectuales, pequeñoburgueses, obreros, grupos marginales, etc. Tras el balaguerismo, el nuevo bloque en el poder que se articulaba, con la anuencia hegemónica directa de los Estados Unidos, no solo podía oponer una respuesta política coherente a las fuerzas populares y el movimiento revolucionario, sino sobre todo hacerlo articulando a su vez una estrategia de hegemonía sobre el campesinado, que fuera capaz en el terreno de las masas de responder a las fuerzas sociales populares organizadas en las ciudades.

Las elecciones de 1966 demuestran lo referido anteriormente. Realizadas en un contexto de una gran presencia militar de una potencia invasora, este hecho condenaba al fracaso a las fuerzas constitucionalistas que, tras la candidatura de Bosch, se agrupaban en el PRD. En tales condiciones, la victoria de Bosch hubiese

representado el triunfo de los sectores sociales y fuerzas políticas contra los cuales habían intervenido militarmente los Estados Unidos en el país. Era sencillamente imposible, en tales condiciones, la victoria electoral del PRD. Sin embargo, más allá de esta derrota, las elecciones de 1966 expresaban claramente que en el lapso de 1961-1966 se había producido un reacomodo del electorado dominicano. Si en 1962 el PRD logró movilizar masivamente el voto campesino, en 1966 este se desplazó a Balaguer: el PRD, a su vez, reconcentraría su votación en las ciudades¹⁰.

Más allá de la propia mecánica electoral y del elemento intimidatorio y fraudulento en que se desarrollaron las elecciones, ¿hasta qué punto esto no evidenciaba una situación de mayor envergadura histórica? A mi manera de ver algo quedaba claro: el balaguerismo lograba movilizar a las masas campesinas en el apoyo de un proyecto político en el que, de un lado, le reportaba al bloque de fuerzas en el poder que ahora se articulaba un consenso de masas sólido con el cual enfrentar al bloque popular concentrado básicamente en las ciudades. Por otro lado, le permitía al sector balaguerista acrecentar su autonomía relativa respecto al conjunto de las clases dominantes, puesto que era él, Balaguer, el agente esencial de la función mediadora del consenso sobre el campesinado. Esta circunstancia, como veremos, acrecentaba su capacidad de dominio y control del Ejército.

En tales condiciones se explica que, finalizado el conflicto de abril en 1965, los norteamericanos recurrieran al llamado “grupo balaguerista” para que asumiera desde el Estado la tarea de cimentar las bases de la nueva etapa de expansión y dominio burgués en la formación social. Al imponer la solución balaguerista, los nortea-

¹⁰ De un total de 1,343,404 votos computados, el PR obtendría en 1966 759,887 (56.7%), seguido del PRD con 494,570 (36.7%). El restante 7.9% de los votos se repartió entre ocho partidos. Es interesante que el grueso de la votación reformista se concentró en las zonas rurales, y en las provincias de mayor peso campesino, como La Vega, Santiago y Puerto Plata. Aún en aquellas provincias de fuerte peso urbano y obrero, el reformismo pudo en las zonas rurales obtener una fuerte representación. En cambio, la votación perredeísta se concentró en las ciudades y las provincias de la zona Sur y Este de mayor peso proletario, tales como Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y Barahona.

americanos lograban por lo pronto un resultado promisorio para la futura expansión de sus intereses económicos y de dominio político en el país: consolidar la suficiente autonomía relativa del Estado respecto al conjunto de las clases dominantes que asegurara no solo la permanencia de sus intereses económicos en la nación, sin la necesaria estabilidad política, prerequisite para la expansión de sus inversiones, más allá de las debilidades intrínsecas de las fracciones de las clases dominantes y sus colisiones inmediatas o potenciales¹¹. Indudablemente, en la cuestión de la estabilidad política, tan cara a Washington, media también un determinante de tipo geopolítico en el área del Caribe que no debe ser soslayado¹².

Desde el punto de vista de la naturaleza del bloque en el poder, que en esta alianza clasista se articuló, lo esencial para el entendimiento de su dinámica política es que las clases dominantes y los norteamericanos tuvieron que recurrir a las capas políticamente más atrasadas de la pequeña burguesía (urbana y rural), a importantes núcleos de la vieja intelectualidad trujillista y a sectores de la burocracia civil y militar ligados al fenecido dictador, a fin de lograr la puesta en ejercicio de un esquema de dominación coherente y estable tanto desde la perspectiva de la acumulación de capital como del dominio y control de las clases dominadas. En tales circunstancias, la debilidad política de la burguesía en su conjunto la condujo a la búsqueda y finalmente utilización de una mediación política “pequeñoburguesa” y “burocrático-militar”, que fuese capaz de articular y hacer eficaz el esquema de dominación que se organizaba. En gran medida, esa es la importancia histórica del

¹¹ En el *Post scriptum* de esta segunda edición analizo con mayor detalle las implicaciones de la decisión norteamericana de apoyo a Balaguer. Para la discusión acerca de los esfuerzos norteamericanos para impulsar la figura de Balaguer tras la guerra civil de 1965 debe verse sobre todo a Vega (2004).

¹² Sobre este punto ver Martin (1975) y Morrison (1965), quienes expresan muy bien el punto de vista norteamericano en ese momento, con la ventaja de representar una posición “democrática liberal”. Aunque no comparto la idea que de alguna manera expone Vega en sus importantes estudios de 2004 y 2006 de que desde el principio de las negociaciones para el final del conflicto de abril los norteamericanos asumieron la “solución Balaguer”; me parece que terminaron asumiéndola. Pero ello fue el resultado del proceso negociador, no su premisa. Desarrollo el punto más abajo en el *Post scriptum*.

doctor Joaquín Balaguer en la historia moderna de la República Dominicana. En él quedaba representado fielmente el conjunto de sectores mediadores de la dominación burguesa anteriormente mencionados, se articulaba la “necesaria vocación” negociadora del bloque de poder que a partir de 1966 se organizaba en el país, como también en su figura se sintetizaba la disposición dependiente y neocolonial del conjunto de la burguesía dominicana. Así, el balaguerismo dispuso los hilos de la trama que permitirían la mejor utilización del Estado no solo en términos del proceso de acumulación capitalista, sino también del aniquilamiento de las capacidades de movilización y lucha de las clases dominadas.

Balaguer no solo logró nuclear al conjunto de los diversos sectores de las clases dominantes en un coherente proyecto de dominación social, afianzando además los intereses económicos y políticos norteamericanos, sino que lo hizo mediante la consecución del apoyo social y político de los sectores más atrasados de la pequeña burguesía urbana y del campesinado, dificultando así, “desde la base”, las posibilidades de cuestionamiento al orden burgués por parte de las clases dominadas, más allá de los mecanismos represivos organizado desde el Estado. Esa base mínima de legitimación que Balaguer logró articular sobre estos sectores pequeñoburgueses le reportaba un amplio margen de legitimidad política, sobre todo respecto al conjunto de sectores de la clase dominante, y fundamentalmente frente al Ejército. Es esta circunstancia, la de servir de “correa de transmisión” entre la pequeña burguesía y el campesinado frente a las clases dominantes, la que vincula a Balaguer al Ejército, como “líder” cuyo “carisma” se ejerce en la práctica providencialista de su actuar político, así como en su “paternalismo prebendario” ante las capas dirigenciales castrenses¹³.

¹³ Sobre la cuestión militar en Santo Domingo casi no se ha escrito en una perspectiva sociopolítica. En el período balaguerista los mejores análisis coyunturales al respecto continúan siendo los que realizó Orlando Martínez (1976). En los años noventa, muchos después de publicado *El reformismo dependiente*, han visto la luz varios estudios valiosos, principalmente los libros de Atkins (1987) y Brian J. Bosch (2010). Un trabajo pionero es el de Lozano y Liriano (1990).

El apoyo que Balaguer logró suscitar por parte del Ejército lo convirtió en un líder de gran importancia, incluso dentro de las filas de sus suboficiales, y sobre todo del alto mando. Este apoyo se encuentra estrechamente vinculado a la base campesina que pudo movilizar a partir del hecho de que el Ejército trujillista tenía como su fuente natural de poder hegemónico el eje agrario. Si bien Balaguer heredó un Ejército tradicional, levantado sobre una base campesina, que lo vinculó a los sectores terratenientes atrasados, el proceso de modernización del Estado dominicano durante sus doce años de gobierno afectó al propio Ejército no solo en su constitución y eficacia tecnomilitar, sino también en la redefinición de sus bases sociales. En primer lugar, Balaguer promovió la movilidad económica de sus oficiales medios y de alta jerarquía, integrándolos, en términos socioeconómicos, a nuevos estratos sociales, desplazando en gran medida sus vinculaciones sociales y económicas del campo a la ciudad. De este modo, a la modernización técnica de la vieja oficialidad y su sustitución por una jerarquía de oficiales mejor preparados, le sucedió la modernización social y económica y la promoción de muchos de sus cuadros a verdaderos empresarios capitalistas, en tanto movilizaba a una parte de su oficialidad (con una inicial y directa atadura agraria) a una posición pequeñoburguesa modernizada, cuyos intereses sociales e incluso políticos devenían de más en más identificados con el mundo urbano. Esta nueva oficialidad desplazaba sus ejes de vinculación clasistas del campo a la ciudad¹⁴.

El papel que asumía el Estado en el proceso de dominación, y específicamente de acumulación de capital, no era nuevo en la historia dominicana. En cierto modo, ocurrió lo mismo durante la Primera Ocupación Norteamericana del país en 1916¹⁵. En ese entonces el Estado interventor norteamericano fue el padre de la

¹⁴ En este *desplazamiento* debemos ir a buscar una de las claves básicas que permiten explicar la ruptura del Ejército, o por lo menos su neutralización respecto a la figura de Balaguer y su régimen en la coyuntura de 1978. Asimismo este desplazamiento le facilitó a la embajada norteamericana su acción política neutralizadora de los mandos militares en la coyuntura de 1978, más allá del hecho evidente de su dominio ideológico-político sobre las jefaturas miliares. Sobre este punto véase a Brian J. Bosch (2010).

¹⁵ Sobre la ocupación norteamericana de 1916 debe verse a Lozano (1976/2017) y Calder (1984).

Guardia Nacional, organizada en 1919, organismo que le permitió a Trujillo en 1930, como su comandante en jefe, el control del aparato de Estado y su posterior entronización en el poder por más de tres décadas (1930-1961)¹⁶. Cincuenta años después de la primera ocupación norteamericana, en las condiciones surgidas por la guerra de abril en 1965, la nueva situación fue que en el plano interno el papel del Estado no suponía la total exclusión de las clases dominantes de su control o de los beneficios que reportara la lógica de acumulación –a la que su estabilización y afianzamiento contribuían–, sino solo la exclusión parcial de su control político, precisamente como requisito de la expansión de los intereses del gran capital monopolista en el país y de la burguesía dominicana en su conjunto, ahora en calidad de socio subordinado.

En esa situación cupo al Ejército el fortalecimiento del nuevo papel del Estado, a la vez que la contención del movimiento popular. Esto suponía la estabilización y fortalecimiento del Estado, así como una mayor autonomía relativa respecto al conjunto del bloque de dominación, visto como un conjunto de grupos y fracciones de las clases dominantes locales, como de las fuerzas imperiales propiamente norteamericanas.

La estabilidad política y expansión de los intereses norteamericanos en el país debe ser mejor estudiada. Desde finales de la década de los cuarenta, en que Trujillo compró la mayoría de los ingenios de propiedad norteamericana, las inversiones extranjeras se habían visto bastante limitadas. Apenas dos grandes empresas norteamericanas funcionaban a principio de la década de los sesenta: la Alcoa Exploration Company y la Porto Rico Sugar Company¹⁷. En este período el capital monopolista norteamericano comienza a interesarse en una serie de áreas estratégicas, como la minería y el azúcar. Esta situación corre pareja con un proceso de alcance más general que reordenaría las relaciones centro-perife-

¹⁶ Galíndez (1950).

¹⁷ Véase el libro de Devereil (1977) para la Alcoa Exploration Company. En el caso de la Porto Rico Sugar Company debe verse el estudio de Humberto García Muñoz (2010). En la fase contemporánea de esta última empresa debe verse a Del Castillo, Puig *et al.* (1975).

ria en América Latina, permitiendo que en la región se afianzara un proceso de industrialización tardía por sustitución de importaciones¹⁸. Este se inicia en el continente en la posguerra, fortaleciéndose en la década de los sesenta. En República Dominicana dicho proceso se vio retardado por la presencia de la empresa monopolista trujillista, la cual impuso significativas limitaciones a la inversión extranjera¹⁹.

A la muerte de Trujillo en 1961, para el capital monopolístico internacional resultaba vital la cuestión de la estabilidad política como requisito previo a la expansión de sus intereses. De ahí la necesidad de afianzar a toda costa los aparatos de Estado, base de dicha estabilidad. Indudablemente que en este interés de Washington gravitaba también la cuestión del fantasma de Cuba, específicamente en el área del Caribe, y la necesidad norteamericana de estabilizar los gobiernos del área, ante el supuesto peligro comunista²⁰.

Una vez muerto el tirano Trujillo, el Departamento de Estado intentó la estabilización política a través de la llamada “democratización” del Estado dominicano. Luego, ante la incapacidad de la burguesía de asegurar un mínimo de equilibrio político y el fracaso de esta vía “oligárquica”, tras los resultados de la guerra civil, los Estados Unidos buscarían articular un pacto clasista que restableciera el equilibrio de fuerzas del bloque en el poder, ahora bajo la hegemonía y dominio norteamericanos. En el fondo, este

¹⁸ Sobre este proceso en América Latina, véase a Dos Santos (1980), Cardoso y Faletto (1971), sobre todo el posfacio a la edición de 1979. También es necesaria la lectura de Frobel y Kreye (1981) y el estudio de Mandel (1972). Específicamente sobre la industrialización latinoamericana véase a Fajnzylber (1983), Salama (1976) y Conceição Tavares (1980).

¹⁹ Hay ciertas especificidades del “despegue” del proceso de industrialización dominicano respecto a Latinoamérica: su carácter relativamente tardío (es apenas en los años cuarenta cuando se inicia el proceso), su carácter oligopólico (dado el dominio del emporio trujillista), su atadura al eje azucarero exportador en materia de fuente de excedentes, el proteccionismo estatal, etc. Para la región Latinoamericana ver a Bulmer-Thomas (1998); para un análisis más amplio del asunto, véase a Gómez (1977). Moya Pons (1992) representa hasta hoy el estudio más completo del proceso industrializador dominicano.

²⁰ Goff y Locker (1972).

reequilibrio del bloque en el poder produjo un nuevo modelo de dominación social que alteró a su vez el modelo oligárquico de acumulación de capital y dominación política que venía ejerciéndose. En la crisis de este modelo oligárquico se sitúa, precisamente, la revolución de abril de 1965, y en su resultado histórico se yergue el nuevo modelo de dominación y acumulación de capital que inaugura el régimen balaguerista. Todas estas circunstancias le permitieron a Balaguer articular una sagaz estrategia de dominación que le aseguró un amplio margen de autonomía respecto a las clases dominantes y los Estados Unidos como potencia hegemónica, así como un eficaz dominio de las masas, sobre todo de sus organizaciones de vanguardia, a través de eficaces mecanismos represivos y de control. De esta manera se procuraba restablecer el vínculo histórico “perdido” a la muerte de Trujillo entre el Estado y el campesinado, sobre el cual descansó en gran medida la estabilidad política y capacidad de dominio hegemónico del trujillismo²¹. Desde la dictadura trujillista hasta el régimen balaguerista, la “alianza” entre Estado y campesinado pasaba a constituir el espacio social hábil a través del cual se articularía la dominación burguesa sobre el conjunto de la sociedad dominicana. El precio que la burguesía pagaría por ello era su marginación del control político del Estado y su práctico socavamiento como clase política. El bonapartismo articularía los términos de esta contradictoria solución histórica a la que se enfrentaban las clases dominantes, en el ejercicio de la dominación, ante el hecho de sus profundas debilidades económicas y sociales. Por su forma política, este modelo de dominación puede denominarse “equilibrio tenso”. En los hechos, por su contenido político, el balaguerismo representó en su modalidad capitalista dependiente, un régimen de tipo bonapartista²².

²¹ Para la discusión de este punto debe verse a Turits (2013), quien ha planteado el análisis más completo de las relaciones del campesinado con la dictadura trujillista.

²² Cuando hablo de *forma política* me refiero a la dinámica de funcionamiento del modelo político; cuando hablo del *contenido político* del modelo me estoy refiriendo a las fuerzas y clases sociales que componen el régimen y a la naturaleza de sus proyectos.

Como se sabe, el bonapartismo responde a una situación en la que el equilibrio de fuerzas en que descansa el poder del Estado capitalista se ha roto, resquebrajándose las bases del poder hegemónico del conjunto de las clases dominantes. Esto da pie a una crisis de hegemonía en la que es característica la incapacidad del conjunto de las fuerzas en lucha para que de su seno pueda surgir un grupo hegemónico capaz de restablecer los términos del equilibrio político en el Estado. Gramsci argumenta:

Se puede decir que el cesarismo expresa una situación en la que las fuerzas en lucha se equilibran de una manera estratégica, o sea, de una manera tal que la continuación de la lucha no puede menos que concluir con la destrucción recíproca. Cuando la fuerza progresiva A lucha con la fuerza progresiva B, no solo puede ocurrir que A venza a B o viceversa; puede ocurrir también que se debiliten recíprocamente y que una tercera fuerza C intervenga desde el exterior eliminando a la que resta de A y de B [...] ²³.

Generalmente, estas situaciones se acompañan de un peligro revolucionario, ante la posibilidad de que la intervención de las masas y sus representantes políticos en el escenario de la lucha de clases haga de la crisis de hegemonía política una crisis catastrófica de todo un orden de dominación. La solución bonapartista representa una “tercera fuerza” que tiende a restablecer el equilibrio político en el Estado y las bases de la hegemonía burguesa sobre el conjunto de la sociedad, pero al precio del sacrificio del poder directamente político sobre el Estado ejercido por la burguesía. Como ha referido Bartra:

Estas “terceras fuerzas” tienen como hábitat principal el sector agrario, que es donde el capital encuentra más resistencia para desarrollarse; sin embargo, ningún poder político mediador de tipo bonapartista puede surgir más que cuando el modo de producción capitalista es dominante en la sociedad, y cuando, por tanto, ha iniciado ya la transformación capitalista de la agricul-

²³ Gramsci (1972), p. 72. Véase además el clásico estudio de Marx *El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*.

tura, creando con ello los embriones sociales pequeño burgueses entre los que la burguesía va a buscar apoyo. Situaciones de este género aparecen en aquellos momentos en que, por ejemplo, la burguesía dominante requiere –para consolidar su poder– de una reforma agraria que le allane el camino al capital y al mismo tiempo le proporcione una base de apoyo “popular” contra el proletariado a las fracciones conservadoras de las clases dominantes (por ejemplo, los terratenientes)²⁴.

En el fenómeno bonapartista es preciso distinguir la coyuntura propiamente política específica de la crisis de hegemonía –ante la cual el bonapartismo representa, precisamente, la respuesta burguesa– de las condiciones sociales e históricas que permiten articular la respuesta de las clases dominantes a su propia crisis, por la vía del bonapartismo. Lo primero nos remite al equilibrio de fuerzas en el Estado, lo segundo a las particulares estructuras de mediaciones sociales en las que se apoya el bonapartismo. En ese sentido, Bartra afirma que:

[...] toda forma de mediación (y la expresión complementaria) expresan al bloque histórico de alianzas de fracciones de clase o de clases, que corresponden a un nivel dado de desarrollo económico y social, y a las particularidades de este desarrollo. Es importante volver a subrayar las diferencias entre la coyuntura bonapartista (o bonapartismo propiamente dicho) y la mediación de tipo bonapartista. Como se ha dicho más arriba, se trata de la diferencia entre situaciones coyunturales en las que “terceras fuerzas” toman la dirección del Estado y situaciones estructurales en las que una parte del aparato de Estado se transforma en una mediación no democrática relativamente²⁵.

Gramsci, por su parte, explica que el cesarismo no se reduce al problema del equilibrio de las fuerzas sociales fundamentales en el Estado. Es necesario a su vez reconocer los vínculos entre las clases sociales dominantes y los grupos, capas y estratos sociales

²⁴ Bartra (1977), p. 22.

²⁵ Bartra (1977), p. 98.

mediadores de la dominación burguesa –como las modernas burocracias estatales, el Ejército y las clases campesinas– para que el bonapartismo pueda erigirse en la “solución histórica” a la crisis de hegemonía²⁶.

Esto último nos conduce a la cuestión de las condiciones en que “la solución bonapartista” encuentra asidero social. En general, como ha señalado Bartra, el bonapartismo, como expresión específica del dominio burgués en el Estado, tiende a surgir “en condiciones de un desarrollo capitalista combinado con atraso (particularmente atraso rural)”²⁷. Esto permite sostener que la mediación bonapartista es una forma primitiva de “lograr la hegemonía” en un contexto donde el dominio propiamente capitalista de la formación social coexiste con formas y modos de producción no capitalistas, como las economías campesinas, donde todavía estas últimas sostienen una apreciable y decisiva importancia económica y social. Como ha dicho el profesor Stinchcombe, la hipótesis de Marx sostiene que el bonapartismo surge allí donde predomina “un modo de producción pequeño-burgués”²⁸.

En tales condiciones, en la estructura de la dominación política, la importancia de los estratos y capas sociales intermedios, como los grupos pequeñoburgueses urbanos o las capas burocráticas civiles y militares, se acrecienta en la construcción de los equilibrios políticos del poder en el Estado.

Sin embargo, por su propia naturaleza social y su forma política, el bonapartismo es precario en su estabilidad política interna. De un lado, tiende a la concertación de un permanente equilibrio inestable de compromisos entre el conjunto de fracciones y sectores de las clases dominantes con grupos y capas burocrático-militares-pequeñoburgueses. Por otro lado, existe una permanente tensión entre estas burocracias y capas mediadoras de la dominación bonapartista y el conjunto de las clases dominantes. Los primeros requieren un margen de autonomía creciente para poder

²⁶ Gramsci (1972) *op. cit.*, p. 72 y ss.

²⁷ Bartra, *op. cit.*

²⁸ Stinchcombe (1979).

funcionar como la expresión política de los segundos, mientras estos se ven amenazados en su dominación social y económica por la creciente autonomía política de los primeros, aun cuando requieran de su intervención para el ejercicio de la dominación social sobre el conjunto de la formación social, específicamente de las clases trabajadoras y grupos políticos revolucionarios

En el caso del régimen balaguerista, el bonapartismo expresa una incapacidad de hegemonía de las clases dominantes, pero no lo hace como resultado de un “empate” político en el seno de estas, entre sus diversas fracciones en pugna, sino como el resultado de una debilidad histórica de dichas clases frente a las dominadas, cuya expresión definitiva fue la Revolución Constitucionalista de 1965. En tales circunstancias, en la guerra civil de 1965 solo la intervención de una “tercera fuerza” militar aseguró a los grupos dominantes tradicionales, y en particular a los militares, la derrota del bando constitucionalista, a partir del papel de las tropas norteamericanas invasoras. De hecho, solo la intervención de una “tercera fuerza” política les permitió salvar el vacío de hegemonía: el balaguerismo.

De esta forma, en República Dominicana en el período 1961-1965, la prolongada crisis política si bien mostraba una incapacidad hegemonica de la alianza oligárquica para el control del Estado, no lo era a consecuencia de la fortaleza que los sectores modernos de la burguesía habían logrado en esa coyuntura, que les permitiría disputarle a la oligarquía la hegemonía estatal. Estos últimos sectores eran muy reducidos, con poca cohesión política y social y escasa capacidad económica. Si la oligarquía dominicana se encontraba en una crisis hegemonica no era a consecuencia de un “empate de clase” en su disputa con una real o supuesta burguesía moderna. El verdadero sentido de la crisis de hegemonía radicaba en una profunda debilidad estructural e histórica de la alianza oligárquica para cohesionar un modelo de dominación alternativo al modelo trujillista en disolución. Esta situación se extremaba en un contexto en que las clases dominadas, como consecuencia, de la propia debilidad burguesa para el ejercicio de la hegemonía lograban un mayor espacio de participación social y política. Esto

último transformó la crisis política en el Estado en una verdadera crisis de todo un orden de dominación social; en una palabra, en una crisis orgánica. La prueba histórica de este último hecho fue la Revolución Constitucionalista de 1965, la cual, a partir de la intervención activa de las masas populares y sus destacamentos de vanguardia revolucionaria en la conducción del conflicto, puso en peligro las bases del poder oligárquico.

En segundo lugar, es preciso reconocer que en el terreno político la disposición de la oligarquía por el control del Estado se articulaba en torno al enfrentamiento directo con las élites burocráticas y militares herederas de la maquinaria del Estado trujillista (gobierno de Balaguer en 1962 y primer Consejo de Estado) y en franca batalla social con las masas populares y el sector más radicalizado de la pequeña burguesía urbana. La expresión política más clara de esto fue la batalla electoral de 1962 que enfrentó a la UCN, como genuino representante de los intereses del bloque oligárquico, y al PRD, como cohesionador político de la opción popular. Así, la naturaleza política de la crisis de hegemonía colocaba los términos del conflicto social no en el choque frontal entre oligarquía y burguesía, sino en el enfrentamiento entre las bases del poder oligárquico, por un lado, y la pequeña burguesía urbana y el conjunto de las masas urbanas, por el otro. Era en este último espacio donde la intervención balaguerista se situaba, como la solución providencial y salvadora, propiamente bonapartista. Si no comprendemos esto, se haría imposible el entendimiento de la lógica de la dominación del régimen balaguerista, así como el sentido histórico del reformismo en condiciones de dependencia y subdesarrollo.

Finalmente, es preciso destacar un aspecto superficialmente evidente. Me refiero a la hegemonía imperial en la estructuración del nuevo pacto de dominación a partir de 1966 en los términos del equilibrio de clase en el nuevo bloque en el poder. El cesarismo balaguerista estuvo siempre condicionado por el control que ejercía Estados Unidos en el país. Sin esa sobredeterminación hubiera sido poco menos que imposible que el sector balaguerista surgiese históricamente como la alternativa a la crisis de la dominación burguesa en el período 1961-1965.

En esas condiciones, el bonapartismo dependiente exige, como requisito de su constitución y funcionamiento, la intervención imperialista, como parte de esa “tercera fuerza” que decide el equilibrio político. De esta manera, el bonapartismo dependiente surgía como el producto no solo de los conflictos entre las fuerzas políticas locales, sino como expresión de la lucha de clases a nivel mundial²⁹.

La estrategia de la dominación balaguerista implicó varios tipos de objetivos económicos, sociales y políticos, los cuales, a su vez, fueron modificándose a la luz del desarrollo del capitalismo en el período y los diversos contextos a los que se enfrentó el régimen en el proceso más general de lucha de clases.

2.2. La dominación política del reformismo dependiente

El régimen de dominación política del balaguerismo se organizó en torno a cuatro elementos: 1) la debilidad del conjunto de las clases dominantes para el ejercicio de la hegemonía en la esfera estatal, lo que, a su vez, dificultaba la implementación de estrategias de acumulación que aseguraran un ritmo de crecimiento estable al conjunto de la burguesía, pero también proponía serios obstáculos al control y dominio de las clases dominadas. En términos estructurales, a largo plazo, esto se vincula a la debilidad económica de los sectores burgueses, como también se relaciona con la naturaleza fundamentalmente agraria y comercial de las clases dominantes. 2) La sobredeterminación imperial en la constitución y dinámica del bloque en el poder. 3) La capacidad de mediación hegemónica de Balaguer sobre el campesinado. Finalmente, 4) el eficaz liderazgo balaguerista sobre el Ejército.

²⁹ Sobre la autonomía en la acción política del régimen balaguerista respecto a las clases dominantes locales y al poder imperial norteamericano, se ha escrito poco. Véase a Oviedo (1983), Cassá (1976), Báez Evertsz y Fernández (1975). El aspecto internacional de esta problemática no ha sido tratado sistemáticamente por la mayoría de los autores, de todos modos, en los años posteriores a la publicación de *El reformismo dependiente* Harthlyn publicó su libro sobre el proceso democratizador dominicano (2008), que todavía hoy constituye el texto más sistemático al respecto y en este es abordada la cuestión internacional, aunque no como un eje central de su análisis del balaguerismo. También debe verse a Lozano (2004) y Espinal y Harthlyn (2012).

En el régimen balaguerista de los doce años, la rearticulación del bloque en el poder se estructuró haciendo coexistir en el dominio y control del Estado los intereses burgueses y agro-comerciales y terratenientes con los de los emergentes grupos financieros e industriales. En esta alianza los intereses industriales se encontraban en una relación de subordinación respecto al gran capital financiero y comercial. Como he referido, la hegemonía imperialista sobre el conjunto del bloque en el poder era requisito esencial para el equilibrio político y el ejercicio eficaz de la dominación³⁰.

La debilidad política del conjunto de la clase dominante en sus diversas fracciones y sectores era la condición de legitimidad y control de Balaguer sobre el Ejército. Este último respondía en su estructura interna de mando a un equilibrio precario del cual Balaguer era la pieza articuladora fundamental. La lógica de movimiento político que en torno a dicha estructura se generaba es de gran importancia para la comprensión del modelo político balaguerista. En este esquema político, el Ejército, en tanto asume la defensa del orden burgués, lo hace tomando la forma de la fidelidad no al conjunto de la burguesía como tal, sino a la figura de Balaguer. Ciertamente, la estructura de poder que cohesionaba esta posición ideológica robustecía el rol cesarista de Balaguer, pero a su vez lo dejaba presa de los elementos en torno a los cuales tendía a realizarse el equilibrio político. El Ejército pasaba a jugar el papel de principal aparato del Estado en el ejercicio de la dominación. De aquí que en gran medida se constituyese en un verdadero partido del orden “sans phrases”.

En tales condiciones, en el modelo bonapartista el Ejército no solo funge como instrumento represivo estatal frente al conjunto de las clases dominadas, sino que se convierte en el mediador político determinante y primario del equilibrio del poder en el Estado. De ahí que las pugnas entre las camarillas militares bajo el balaguerismo constituyan en gran medida el espacio de articulación del modelo político de equilibrio tenso que lo caracterizó. Al respecto, la desmovilización política de las clases dominantes en la práctica las forzaba a “retirarse” de las pugnas que en el seno de

³⁰ Véase Goff y Locker (1972), Vilas (1973) y el interesante estudio del CORECATO (1978).

los poderes del Estado se verificaban en torno al aparato militar. Su beligerancia en estos conflictos hubiese implicado el cuestionamiento de la unidad política del aparato militar en su conjunto y, como tal, de la unidad del Estado. Su práctica ausencia de los poderes legislativos las condenaba a buscar en el Ejecutivo su posibilidad de intervención en el Estado, lo cual las forzaba a delegar en Balaguer su representatividad. Gracias a ello, Balaguer se erigía en el árbitro del conflicto entre los grupos militares y, como tal, en el factor de equilibrio del campo político en torno al cual se establecía la unidad del poder del Estado, afirmándose así su poder como opción bonapartista.

Se impone una mayor precisión histórica. El Ejército trujillista, pese a que en su momento fue uno de los mejores equipados del área del Caribe, poseía una estructura organizacional bastante tradicional, con una clara visión de “casta” en su alta oficialidad y mandos medios. Se establecía así un marco de valores y “visión del mundo” de los cuales se cuidó fomentar la ideología trujillista. De esta forma, en su discurso ideológico los militares aparecían como grupo o sector “aparte” del conjunto de la población. Eso suponía hacer a sus componentes, sobre todo a su oficialidad, “inmunes” a las veleidades de la sociedad. Dicho discurso tendía a lograr que los grupos castrenses se percibieran a sí mismos como relativamente ajenos o independientes de la “sociedad civil”, pero al mismo tiempo esto les hacía entender la necesidad de encausar su movimiento en función de los derroteros trazados por “el jefe”. Esto revela que la función de defensa del orden social y político era ejercida a través de un esquema de “obediencia” carismática y patrimonialista de los mandos militares a la figura del dictador, no tanto el resultado de un esquema de organización racional donde predominara la lealtad al cargo y la función por encima de la persona³¹. De todo esto resultó una relativa neutralización del Ejército en la lucha política directa,

³¹ Véase Weber (1968/1948). Para el estudio del componente ideológico del militarismo trujillista véase a Turits (2013), Derby (2016) y Mateo (1993). Las observaciones de Cassá (1982 y 1990) deben ser tomadas en cuenta. Los estudios de Atkins (1987) y Brian J. Bosch (2010) sobre los militares son de imprescindible lectura.

para lo cual existía un aparato construido a tal efecto: el Partido Dominicano (PD), y un cuerpo represivo instrumentado en igual sentido: el Servicio de Inteligencia Militar (SIM)³².

El Ejército entraría en la etapa postrujillista sin el suficiente entrenamiento en la lucha política y el suficiente conocimiento por parte de sus cuadros dirigenciales del rol político que le cabía desempeñar en la nueva situación. En cierto modo, por ello podemos explicar que inicialmente en la coyuntura de 1962 el Ejército se alineara con Juan Bosch y el PRD y no con Viriato Fiallo y la UCN. De esta forma los militares asumirían una franca oposición a la alianza oligárquica dominicana representada por la UCN y el Triunvirato. Con el tiempo, los cuadros militares dirigenciales tendieron a identificar sus intereses con la tradicional burguesía comercial y con los terratenientes (la alianza oligárquica), aunque durante todo el período 1961-1966 no puede decirse que asumieran por ello –pese al golpe de Estado de septiembre de 1962– un rol de participación directa en la dinámica de la lucha de clases en tanto aparato de dominación. El Ejército en la coyuntura política como aparato de Estado se subordinaba a la lógica política de la dominación oligárquica.

En el nuevo esquema de dominación inaugurado por Balaguer, el rol o función asignado al Ejército se alteraría profundamente. En el período inmediatamente posterior a la Revolución Constitucionalista de 1965 era evidente el interés de los Estados Unidos por afianzar técnica y políticamente al Ejército dominicano, como principal aparato que “evitara otros abriles”, pero también como primordial mecanismo que determinara el proceso de estabilización del Estado³³, como luego veremos.

Aquí debemos retomar la perspectiva de la “fracción balague-rista”, constituida por las necesidades de la permanencia de la dominación política y el directo interés norteamericano en una ne-

³² Sobre la represión bajo la dictadura trujillista hay una abundante literatura. A título de ilustración, consúltese a Jimenes Grullón (1962), Galíndez (1956) y Crassweller (1968).

³³ Brian J. Bosch (2013).

cesaria mediación histórica a tal efecto³⁴. Todo ello le permitiría a esta fracción un paulatino control del Estado³⁵ y erigirse en un factor de poder político con la suficiente autonomía³⁶ como para posteriormente disputarle a los grupos burgueses locales el espacio de la hegemonía.

El balaguerismo alcanzaba esta posición gracias a la conjunción de una serie de factores y circunstancias³⁷:

1. Por la expansión de los intereses del gran capital monopolístico internacional en la formación social.
2. Al permitir a las diversas fracciones y sectores de la burguesía local amplios márgenes de beneficio, estabilizando el ritmo de la acumulación. Esto así por la doble vía del afianzamiento de la dinámica importadora y la nueva política en materia de industrialización, la cual transformó al Estado de principal competidor en agente canalizador de la obra de infraestructura y apoyo a la acumulación, necesaria a la expansión de los mercados.
3. Al comprometer a los cuadros dirigenciales militares en un esquema de participación en los beneficios de la acumulación

³⁴ Bartra (1977) discute la cuestión del poder mediador del bonapartismo en condiciones de atraso y subdesarrollo. En el contexto dominicano, este “poder mediador” indica que, más allá de la crisis coyuntural de la dominación burguesa, dicho esquema político históricamente tiende a plantearse como la forma política más adecuada a la reproducción del dominio burgués en la formación social.

³⁵ Sobre este aspecto en particular véase a Oviedo (1983). El texto de Therborn (1978) ilustra las implicaciones generales de esta problemática.

³⁶ Poulantzas (1971).

³⁷ Es pertinente destacar que en el presente texto cuando hablo de modelo de dominación en modo alguno me refiero a la voluntad individual de Balaguer o de los cuadros políticos y militares del régimen. Me refiero esencialmente al juego de fuerzas sociales que dicho régimen representaba y el conjunto de relaciones políticas en torno a las cuales se desenvolvía. De la compleja interacción de estos elementos se decantaban líneas de acción política y estrategias de dominación social y crecimiento económico. Indudablemente, el análisis debe ponderar y hacer suyo el momento en que interviene la voluntad individual, máxime si se trata de una situación de tipo bonapartista donde la férrea personalidad de un hombre como Balaguer gravitaba sobre el porvenir de los acontecimientos de modo directo. Pero el análisis sociológico debe abandonar el subjetivismo y tratar de vislumbrar la eficacia de la acción individual a la luz del conjunto de fuerzas sociales más vastas que le condicionan y delimitan su despliegue histórico.

capitalista, a partir de los cuales pasaron de ser simples élites dirigenciales para constituirse en verdaderos sectores de poder económico, vinculándose a la larga con las diversas fracciones de la burguesía local y el poder imperial, en el terreno económico, sobre todo a partir de los canales financieros. Esto también afectó al mando de las capas políticas dirigentes del balaguerismo. Emergían así, bajo la sombra del poder del Estado, nuevos grupos burgueses, los cuales entrarían en contradicción, más temprano que tarde, con los grupos ya existentes, sobre todo con los grupos más modernizantes, industriales y financieros, parcialmente excluidos inicialmente de los beneficios directos del poder del Estado.

A partir de la representatividad pequeñoburguesa de Balaguer en el Estado, la instancia estatal se constituye en el principal agente económico de la acumulación de capital, sobre todo tras su condición de Estado Empresario. Como he analizado en el Capítulo 1, el Estado se constituía en un objetivo a dominar por las diversas fracciones y sectores de la burguesía criolla no solo por determinaciones políticas en la lucha por la hegemonía del bloque en el poder, sino por determinaciones directamente económicas. En esas circunstancias, en la medida en que la función empresarial del Estado se estabilizaba, se facilitaba a los grupos vinculados al régimen reformista no solo su expansión económica, sino también su imposición política sobre el conjunto de las fracciones del bloque dominante. Esto, más temprano que tarde, entraría en contradicción con determinados grupos burgueses que, favorecidos por el régimen balaguerista, no participaban directamente del control de los aparatos de Estado.

En el terreno político, durante los doce años del régimen balaguerista, podemos reconocer diversos objetivos estratégicos con sus modificaciones pertinentes, según el momento de la lucha de clases y las coyunturas sociopolíticas:

1. Bajo la dominación balaguerista se advierte un permanente propósito desmovilizador de la acción y organización política de las masas populares.

2. Reconocemos el objetivo de afianzar la acción corporativa de la clase dominante, pero al precio del bloqueo de su acción política.
3. En el régimen balaguerista se afirma un proceso modernizador del Estado, principalmente de sus aparatos represivos y de control.

2.2.1. La desmovilización del movimiento popular

Como se discutió en el Capítulo 1, el incremento de la participación social y política de las masas desde 1961 dificultaba los términos de la acumulación del capital, pero ello no basta para proponer una interpretación aceptable de la desmovilización y represión popular que se observa durante el régimen de Balaguer³⁸.

¿A qué respondía el contenido inmediatamente económico de la desmovilización popular iniciada por Balaguer en 1966? A mi manera de ver, estaba determinado por dos circunstancias:

1. La eclosión del movimiento popular en sus capacidades reivindicativas y políticas se había constituido en un serio obstáculo –si no el principal– para la estructuración de un nuevo proyecto hegemónico alternativo al desaparecido esquema trujillista, tarea para la cual las clases dominantes locales se habían mostrado incapaces. El nuevo bloque histórico de dominación requería, como una de sus tareas prioritarias, la desmovilización, o por lo menos el bloqueo del movimiento popular. Es decir, en una primera instancia la desmovilización popular la determinaba un componente básicamente político.
2. La desmovilización popular, al bloquear la capacidad de negociación de la clase obrera frente al empresariado contribuyó

³⁸ No debemos olvidar que durante el período 1961-1964, si bien reconocemos el inicio del ya secular desequilibrio crónico de la balanza de pagos del país, el PIB creció a una tasa significativamente alta de un 10 %. ¿Cuál era, entonces, el problema? Como he sugerido, el aumento de los ingresos experimentado por los grupos obreros urbanos y del sector azucarero durante el período en cuestión, aun en el caso de favorecer en lo inmediato a los grupos importadores, contribuyendo al sostenimiento de la demanda, base de la expansión del comercio importador, en el largo plazo forzaba a la modernización de la economía, con las consecuencias negativas para la oligarquía, que ya analicé en el Capítulo 1.

directamente a la reducción de los salarios reales, que en el período balaguerista se verificó como una tendencia estructural desde sus inicios. Esto facilitó el saneamiento de las empresas del Estado, sobre todo de la Corporación Estatal del Azúcar (CEA), y permitió la movilización de los excedentes generados o captados por el Estado hacia las tareas de apoyo directo a la acumulación del capital del conjunto de la burguesía. Es obvio que la reducción de los salarios obreros apoyó en su momento el éxito inicial del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que para finales de la década de los sesenta impulsaría el régimen balaguerista.

De manera que, si bien la desmovilización popular era primeramente un objetivo político para el restablecimiento del equilibrio de fuerzas y estabilidad de las clases dominantes, en sus consecuencias económicas directas e inmediatas favoreció a los emergentes sectores de la burguesía (financieros e industriales), no tanto a los grupos tradicionales, y con ello se insertó en el reordenamiento de un nuevo esquema de acumulación del capital, donde al capital financiero y el industrial se les asignaba un papel cada vez más significativo. Claro está, en el largo plazo la desmovilización popular favorecería al conjunto de las clases dominantes en sus consecuencias políticas y económicas.

Por todo esto, creo poder afirmar que el propósito desmovilizador del movimiento popular fue una constante del régimen balaguerista. En un primer momento, el terror organizado fue el instrumento directo de la desmovilización popular³⁹. Pero una vez que el movimiento obrero organizado quedó desarticulado, las organizaciones revolucionarias diezmadas y desorganizadas y en general el movimiento popular replegado, la dialéctica de la

³⁹ Usualmente, los análisis acerca de la represión bajo el balaguerismo no logran conceptualizar claramente la lógica del terror como forma de dominio y coerción, lógica que no agota las posibilidades de la dominación. Por ello, confunden la represión, como mediación política, con sus objetivos estratégicos: la desmovilización popular. Esto se debe a que en general no insertan el análisis del problema en un contexto más amplio acerca del carácter del régimen reformista no solo en el sentido político, sino también económico.

represión comenzó a dar un giro y los mecanismos del terror organizado pasaron a segundo plano, dándose paso a lo que algunos autores han denominado “la represión institucional”⁴⁰. En el plano sociológico es importante reconocer que este segundo momento del proceso de desmovilización popular gradualmente desplazaba los objetivos de la dominación de la simple desmovilización a las tareas propias de su control político.

Dada la naturaleza del equilibrio político bajo el bonapartismo, la desmovilización constituye un requisito esencial de la unidad del bloque en el poder. De ahí que, aun cuando el régimen logró en 1972 sus objetivos desmovilizadores de las masas populares, la sombra del terror permaneció siempre como alternativa de la dominación política. Pero, mientras en los años 1966-1971, el terror fue un requisito clave de la constitución del nuevo bloque en el poder y en tal sentido era un mecanismo que favorecía al régimen balaguerista, en los años 1972-1978 pasaba a constituirse en obstáculo para el proceso de modernización capitalista, conspiraba contra la unidad del bloque en el poder y restaba capacidad de maniobra al bonapartismo frente a las clases dominantes. De modo que el giro estratégico que se observa en la acción estatal frente a las clases dominadas a partir de 1972 en gran medida indica que se pasa de acciones directamente represivas a la articulación de una estrategia asistencialista, cuyo objetivo era la cooptación corporativa y prebendaria del lumpen

⁴⁰ Por ejemplo, uno de los mejores artículos acerca de la represión durante el régimen balaguerista es sin duda el de Duarte y Pérez (1980). Por desgracia, los autores cometen el error de calificar como represión institucional la mecánica de la coerción política y social en los años 1972-1978. Es cierto que en esas circunstancias la coerción se ejerce como represión desde los aparatos formales del Estado, básicamente de los cuerpos policiales, pero no tiene mucho sentido hablar de la “represión institucional” como algo específico y propio del Estado balaguerista, cuando ello (el uso “legítimo” de la fuerza, la coerción) constituye un rasgo propio de cualquier Estado capitalista. Si bajo el régimen balaguerista la represión “se institucionaliza” ello quiere decir dos cosas: 1) que existe un fuerte y claro dominio del Estado sobre la sociedad civil, específicamente sobre las clases populares, 2) que el ejercicio de la coerción se “moderniza” y la dominación política exige ahora de un momento propiamente ideológico, hegemónico. Esto conlleva serias contradicciones, debido a la naturaleza del equilibrio político en el Estado balaguerista, cuyas consecuencias analizo en el presente capítulo.

proletariado urbano, de sectores bajos pequeñoburgueses y del movimiento obrero organizado; en ese último caso, la estrategia estatal integró en un solo esquema un estilo represivo, pero a la vez clientelista y prebendario de cooptación del movimiento obrero. Todo esto a tenor de las acciones de Estado frente a las clases campesinas, en materia de reforma agraria, organización y movilización⁴¹.

Al “administrar la desmovilización popular” sobre todo en las zonas urbanas, el régimen quedaba forzado al prebendalismo asistencialista, que le caracterizo a partir de 1972, pero también a permitir determinados espacios de liberalización política⁴². Esto le restaba capacidad de negociación frente a las clases dominantes, al tiempo que abría a los seguidores políticos de los sectores populares (partidos revolucionarios, organizaciones de masas y PRD) una vía de reorganización y acción políticas. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, la naturaleza del bloque en el poder requería de la desmovilización permanente de las clases dominadas, como requisito del equilibrio interno en el Estado. Esto de nuevo forzaba al régimen a la implementación de mecanismos directamente represivos (aun cuando se reconociera que existía un amplio control del movimiento popular) como parte de una mecánica de permanente restauración del equilibrio interno en el Estado. En el corto plazo esta dinámica robustecía al régimen, en un plazo mediano significaba su condena.

En el período 1966-1970 la acción desmovilizadora del régimen balaguerista se dirigió a dos frentes: 1) el político, representado por el movimiento revolucionario, el PRD y las organizaciones populares y 2) el corporativo, representado por el movimiento obrero organizado⁴³.

En esta etapa la represión organizada estuvo dirigida por grupos paramilitares, teniendo por objetivo inmediato el desar-

⁴¹ Véase a Dore (1981), D'Oleo (1983) y Fernández (1983).

⁴² Al respecto debe verse Del Castillo (1981).

⁴³ En cuanto a la acción represiva del Estado sobre el movimiento obrero véase a Nacla's (1975), Cassá y Jarvis, (1994) y Calderón (1975).

me popular. Esta hizo víctimas a decenas de combatientes constitucionalistas, bajo el claro objetivo desarticulador de la resistencia armada y popular en los años inmediatos a la Revolución Constitucionalista⁴⁴. En este período abiertamente represivo y contrainsurgente, el movimiento obrero fue duramente reprimido, al encarcelar e incluso asesinar a muchos de sus dirigentes, destruyendo o dividiendo los sindicatos más importantes y combativos, como los casos del Sindicato Unido de la Romana y de POASI⁴⁵.

Como he referido arriba, a partir de 1972, aproximadamente, la represión organizada no quedó en manos de grupos paramilitares, sino que pasó a ser directamente controlada por los cuerpos policiales⁴⁶. A finales de 1970 se ensayó una nueva modalidad de acción represiva, a través de la creación del Frente Democrático Anticomunista, mejor conocido como “La Banda”. Esta organización, cuyos integrantes eran reclutados del lumpen proletariado urbano, sobre todo si habían tenido un pasado izquierdista, era de abierto corte terrorista. Sus acciones introdujeron una modalidad de represión, que por su naturaleza los grupos uniformados no podían poner en práctica, sino de manera eventual: las golpizas, los asaltos y asesinatos que de forma sistemática y consuetudinaria produjo este grupo afectaron directa y especialmente a los barrios populares, sobre todo a los jóvenes líderes barriales con algún lazo con el movimiento revolucionario, pero también a sus familiares y

⁴⁴ Durante los años 1967 y 1971 se registraron 3,276 casos de persecuciones políticas y encarcelamientos, y fueron asesinados o desaparecidos alrededor de 650 personas, 300 de ellas en 1970. Duarte y Pérez (1980) presentan la información sistemática sobre la represión bajo el régimen balaguerista de los doce años.

⁴⁵ Véase a Calderón (1975). Para el caso del Sindicato Unido de la Romana en particular véase a Cassá y Jarvis (1994).

⁴⁶ Por este tiempo “la policía que fue la institución ‘más afectada por la revolución de abril’, había sido rehabilitada, gracias a un trabajo sistemático que incluyó un fuerte asesoramiento norteamericano [...]”. En tales condiciones “[...] para 1970, la Policía Nacional estaba ya sustituyendo a las *fuerzas incontrolables* en la labor de represión política y de eliminación de los opositores considerados peligrosos para la ‘paz’ y estabilidad del Estado dominicano. En esos años, un solo grupo marxista-leninista del país (el MPD) había perdido toda una generación de dirigentes y militantes, incluyendo a sus principales dirigentes” (Duarte y Pérez, *op. cit.*, 1980, p. 67).

amigos. Con ello se lograba hacer del terror un “hecho cotidiano”, al desarticular la capacidad de respuesta política organizada de las masas populares⁴⁷.

Pero, como he referido arriba, a partir de 1972 la estrategia de la desmovilización popular da un giro. La persecución política ya no culmina con el asesinato, sino con el encarcelamiento o la deportación. Se prefiere la cooptación prebendaria del movimiento obrero y no su desarticulación y se estructura una política asistencialista a las bases populares (sobre todo a los sectores marginales de la ciudad de Santo Domingo) a través de organizaciones paraestatales, como la Cruzada del Amor. En pocas palabras, el régimen en este período “administra la desmovilización popular”.

La dialéctica de la represión tenía como contrapartida la modernización del Estado, especialmente en cuanto a sus aparatos represivos y de control social. En este sentido, durante el régimen balaguerista las fuerzas armadas sufrieron un profundo proceso de modernización técnica e ideológico-política. De este modo, bajo el control directo de los oficiales norteamericanos del MAGG (Grupo Asesor de Asistencia Militar) los oficiales superiores y los mandos intermedios del Ejército y la policía dominicanos eran permanentemente asesorados en el orden político por los Estados Unidos, y en el orden estrictamente militar eran entrenados de modo sistemático en labor de contrainsurgencia guerrillera, tanto urbana como rural. El Ejército y la policía fueron reequipados con armamentos modernos, propios de la actividad contrainsurgente, etc. Asimismo, para tales fines fueron creados destacamentos especiales, como el batallón de cazadores montañeses, y las fuerzas de operaciones especiales adscritas a la Policía Nacional. Esta última en particular sufrió un reordenamiento completo en su estructura, apoyándose ahora en una oficialidad mejor entrenada, sobre todo en las tareas propias de la contrainsurgencia y “seguridad nacional”. Los organismos militares y de seguridad de los Estados Unidos –como la CIA y

⁴⁷ *Ibidem.*

el Pentágono- fueron verdaderos ejecutores de este proceso de modernización militar sufrido por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dominicanas, sobre todo en lo relativo a las tareas estratégicas del control insurgente, como la represión y control social cotidiano de la sociedad civil⁴⁸.

2.2.2. La acción corporativa de las clases dominantes y el Estado

El bonapartismo implicó la estructuración de un modelo de dominación desmovilizador de la acción política de las clases populares y la adopción de un esquema corporativo en relación con las clases dominantes⁴⁹. En este sentido, tiene razón Del Castillo cuando afirma que:

[...] las clases, fracciones y grupos sociales están representados en la estructura de poder mediante una selección autoritaria de sus dirigentes, anulándose la función de mediación de los partidos políticos y sustituyéndose por los grupos funcionales de interés. Los partidos políticos serían tolerados dentro de ciertos límites de acción, sujetos discrecionalmente a los criterios del Ejecutivo, operándose en este sentido dentro de un sistema semi-corporativo⁵⁰.

En el primer gobierno del doctor Balaguer (1966-1970), el primer y más importante intento de cooptación corporativa de las clases dominantes y de proyección de la función de arbitraje social y político del Ejecutivo, se expresó en la llamada Comisión Nacional de Desarrollo (CND). Es el propio Balaguer el mejor expositor del contenido y significado político de la CND para el nuevo esquema de dominación que a partir de 1966 se inaugura:

Lo característico de este organismo (CND) es que en su seno se hayan representados los intereses de la banca, el comercio, la industria, la agricultura, la ganadería, etc., esto es, tanto lo que

⁴⁸ Para los detalles específicos de estos programas, véase a B.J. Bosch (2010).

⁴⁹ Sobre la dimensión corporativa del régimen reformista debe verse a Del Castillo (1973), p. 59.

⁵⁰ Del Castillo (1973), *op. cit.*, p. 61.

se ha dado en llamar la oligarquía, como el sector obrero y los organismos que se dedican a empresas humanitarias o a actividades puramente sociales. El Gobierno Nacional tiene así la oportunidad de enterarse de lo que piensan frente a cada uno de los problemas básicos que se relacionan con nuestro desarrollo, los representantes de todas nuestras fuerzas vivas, y de sopesar serenamente los puntos de vista de cada uno de esos grandes sectores. Lo importante es que el gobierno asiste, como un simple espectador, a ese debate abierto, y se reserva para ejercerlo en el momento oportuno su derecho a decidir soberanamente sin ninguna clase de coacción ni de interferencia ajenas⁵¹.

La argumentación sugerida por Balaguer en la cita anterior es extremadamente esclarecedora del contenido político del bonapartismo. Con este tipo de mecanismo corporativo, Balaguer colocaba al conjunto de las clases dominantes como compromisarios de las ejecutorias del Ejecutivo y, en tal virtud, como instancias subordinadas a él. Por otra parte, el Ejecutivo se colocaba como el interlocutor natural de las clases dominantes y dominadas en el seno del Estado, sobre todo respecto a los aparatos de coerción (Ejército y Policía) y de legitimación jurídico-política (Justicia y Congreso)⁵². En tales circunstancias, la función de arbitraje que se adjudicaba el Ejecutivo anulaba las capacidades y las funciones de mediación políticas de las clases dominantes para equilibrar sus intereses en el seno del poder del Estado. Con ello se veían forzadas a depositar en Balaguer las funciones de naturaleza política, que antes depositaban en los partidos. De ahí que el papel de estos últimos no solo quedaba minimizado en el esquema de dominación, sino que el conjunto de los aparatos de Estado en los hechos pasaba a ser una función subordinada al Ejército, constituyéndose en una instancia donde el equilibrio interno que aseguraba su unidad se establecía ahora en función de la mediación bonapartista y no del juego de intereses políticos directamente

⁵¹ Joaquín Balaguer, *Listín Diario*, 17 de agosto de 1970.

⁵² Para una historia del principal organismo corporativo del empresariado, el CNHE, posteriormente CONEP, debe verse a Sang (2015).

procedentes de las clases dominantes. El significado de este hecho lo veremos abajo respecto al papel político del Ejército en el régimen balaguerista, pero por lo pronto un punto queda claro: en tales circunstancias el aparato legislativo quedaba convertido en una simple instancia formal sancionadora y legitimadora de las decisiones del Ejecutivo.

Este esquema político fue más importante durante la primera fase del régimen, en el período 1966-1970, en el que Balaguer aún no había logrado un control y hegemonía adecuados de las Fuerzas Armadas, y en el Congreso existía una significativa representación congresional perredeísta⁵³. A partir de 1972, este esquema, sin dejar de ejercitarse, da paso a otras estrategias. Del Castillo indica que esta nueva estrategia se caracterizaría por:

[...] la búsqueda de un apoyo popular organizado. Obligado a legitimar su continuidad por medio del recurso electoral, el Ejecutivo y la élite burocrática impulsarían una estrategia de cooperación de dirigentes sindicales, de promoción de una reforma agraria y de una organización paraestatal de los campesinos. Igualmente, de implementación de una política de asistencialismo orientada hacia los sectores marginados urbanos y de creciente liberalización y tolerancia política⁵⁴.

Sin embargo, sería un error suponer que las necesidades de legitimación popular del régimen implicaban un bloqueo al “corporativismo autoritario”⁵⁵, que caracterizó el estilo de dominación bonapartista. En ese sentido, el régimen no dejó de apoyar la organización corporativa de las clases dominantes por buscar apoyo en los sectores populares urbanos o por intentar restablecer su hegemonía en el campesinado en los años 1972 y siguientes; como también, no por el hecho de que desde 1970,

⁵³ No puede perderse de vista que hasta 1970, durante su primer gobierno (1966-1970), Balaguer no pudo controlar mecánicamente el Congreso, debido a la importante presencia congresional del PRD. A partir del nuevo Congreso, constituido en agosto de 1970, Balaguer tendría un dominio mecánico del principal poder del Estado, el Congreso.

⁵⁴ Del Castillo (1981), *op. cit.*, p. 27.

⁵⁵ Rescato aquí la feliz expresión de Del Castillo (1981).

con la primera reelección de Balaguer y el reconocimiento de fisuras en la unidad del bloque en el poder, tras la búsqueda de canales autónomos de expresión política por parte de sectores de las clases dominantes, el régimen en su conjunto había cambiado su estilo corporativo autoritario, como ha sido descrito arriba.

No es exagerado afirmar que en general la burguesía dominicana, durante los doce años del régimen balaguerista, no logró definir organizaciones políticas representativas de sus intereses. En tal virtud, su representación estuvo siempre delegada. Vale la pena introducir aquí una reflexión de alcance general: siguiendo a Gramsci, se reconoce que la ausencia de una expresión política partidaria propia por parte de la burguesía industrial no constituye el punto de controversia en este asunto, puesto que para hacer efectivo su dominio hegemónico del Estado, la moderna burguesía no tiene que proceder al control directo de sus diversos aparatos, como tampoco la ausencia de dicho control es requisito de su organicidad como clase. Ello se encuentra indiscutiblemente vinculado a la expresión política moderna del Estado capitalista, donde su dinámica se desenvuelve en un permanente equilibrio de fuerzas y compromisos que obliga a la gran burguesía industrial y financiera a desplegar la representación de sus intereses en una diversidad de actores políticos, dependiendo de las correlaciones de fuerza en el Estado. Claro está que en los períodos de crisis la tendencia de la burguesía industria es a cerrar filas con los intereses de los grupos agrarios, y en este caso el partido de los grandes industriales es el partido de los grupos agrarios comerciales de las clases dominantes, actores políticos que sí llegan a constituir organizaciones políticas propias, representativas de sus intereses⁵⁶.

El caso de la UCN, en los tormentosos años de 1961 a 1963, ilustra claramente la capacidad de los grupos dominantes agrario-terratenientes y comerciales de estructurar una organización política propia, representativa de sus intereses, mientras los

⁵⁶ Véase a Gramsci (1972), Buci-Gluckman (1978) y Poulantzas (1971 y 1971b).

emergentes grupos industriales, en dicha coyuntura, y aún bajo el balaguerismo, en ningún momento lograron estructurar una organización política que les representara: en la coyuntura de los años 1961-1962 sus hombres más avanzados políticamente apoyaron al PRD, organización esencialmente pequeñoburguesa y populista; en el período 1966-1978 es claro que no solo los industriales, sino el conjunto de las clases dominantes, encontraron en la gestión balaguerista su representación política.

En este sentido, es significativo del fenómeno los procesos electorales de 1970 y 1974. A diferencia de las elecciones de 1966, en que las clases dominantes encuentran en Balaguer su coherente y unificador representante, las elecciones de 1970 permiten reconocer las primeras fisuras al interior del bloque de fuerzas políticas en que se apoyaba el reformismo. El primer motivo de disputa fue el propósito reeleccionista de Balaguer. La naturaleza de los grupos políticos que se escinden es sintomática: rompe con Balaguer Francisco Augusto Lora, vicepresidente del PR, y crea su propio movimiento, el MIDA. Elías Wessin y Wessin, oscura figura militar que había liderado al bando contrarrevolucionario en la Revolución de Abril de 1965, rompe con el balaguerismo y funda el Partido Quisqueyano Demócrata (PQD). ¿Qué significan estos agrupamientos políticos? La escisión del movimiento de Francisco Augusto Lora dejaba ver claro el propósito centralista y autoritario de Balaguer, en su afán continuista, pero también permitía reconocer su fuerza. La ruptura con Wessin y Wessin evidencia con mayor claridad este último punto: al sacarlo de las Fuerzas Armadas, Balaguer lograba aislar y disgregar a aquellos grupos militares que podían no solo cuestionarle su propósito continuista, sino el propio modelo político bonapartista. Por eso, al formar el PQD Wessin y Wessin de hecho formalizaba su derrota, iniciada con su desvinculación de las Fuerzas Armadas⁵⁷.

⁵⁷ Sobre el particular, véase a Del Castillo y Fernández (1974). Para los detalles del conflicto de Balaguer con el general Wessin y Wessin, ver *infra Post scriptum*.

Ahora bien, pese a los vínculos de Francisco Augusto Lora con los grupos agrarios y terratenientes del Cibao, y los lazos militares de Wessin y Wessin, las clases dominantes dominicanas continuaron en definitiva apoyando a Balaguer en la coyuntura electoral de 1970. No solo por el simple hecho de que Balaguer supo aprovechar inteligentemente las fisuras al interior del PRD, entre los partidarios de la dictadura con respaldo popular, que rechazaban la táctica electoral, y los partidarios de la opción electoral. También es acertado reconocer que:

La extraordinaria recepción tributada por las masas a Bosch, quien regresaba de su exilio que culminaba su metamorfosis política –con un haber de obras como el *Pentagonismo*, la tesis y un viaje a “las antípodas”– brindó la oportunidad ideal para que Balaguer se jugara a fondo en una campaña encaminada a mostrar la peligrosidad de Bosch y sus ideas, infundiendo el temor en los sectores y partidos conservadores que habían hecho causa común circunstancialmente con el PRD, acicateados por el anti-reeleccionismo⁵⁸.

Pero esto expresaba un problema de mayor envergadura histórica: los partidos políticos conservadores o abiertamente oligárquicos, opuestos al continuismo balaguerista, tras el anti-reeleccionismo simplemente reconocían su incapacidad para presentarle a las clases dominantes un programa alternativo al reformismo. Por eso le fue tan fácil a Balaguer forzarlos a la participación electoral, pese al abstencionismo perredeísta. Por lo demás, mientras el PRD fuera el polo antagónico, con quien no se podía conciliar ni aun en la táctica, ¿de dónde iban a obtener un apoyo de masas para enfrentar a Balaguer aquellos sectores de las clases dominantes en oposición al reformismo? La ruptura entre representantes y representados en el seno de la clase dominante era un hecho, como también lo era que, en tales condiciones, Balaguer continuaba siendo la solución burguesa a esa contradicción. Es por esto que logra el triunfo electoral en 1970,

⁵⁸ Del Castillo (1981), p.28.

el cual no se explicaría tan solo por su gran habilidad táctica o por la simple torpeza de sus opositores políticos.

Por lo referido, se puede apreciar que, en República Dominicana, en última instancia, quienes quedan “anulados” en su capacidad de expresión política bajo el reformismo balaguerista son los grupos representativos de la alianza oligárquica, es decir, los grupos agrario-terratenientes y comerciales, no tanto la emergente burguesía industrial. Esta última era de reciente formación y como tal tradicionalmente “no tiene partido propio”, como ha señalado Gramsci⁵⁹. El punto de controversia radica precisamente en esto último: la alianza oligárquica se vio forzada en la coyuntura de 1965 a depositar en Balaguer su representación política, abriendo así desde el Estado un espacio para el crecimiento de la burguesía bancaria e industrial. En este punto las clases dominantes tradicionales se vieron forzadas a apoyar un proceso modernizador desde el Estado, el cual históricamente las condenaba a su transformación, pero en un plazo mediano social y políticamente las preservaba como actores necesarios del nuevo bloque histórico que se conformaba. La solución a esta tensión histórica fue un “dragón de dos cabezas”: a los grupos agrotarratenientes y comerciales el proceso de modernización los preservaba y políticamente los anulaba; a los emergentes grupos industriales poco a poco les abría un espacio político y social, pero el precio era un crecimiento lento, estructuralmente dependiente del Estado y del eje financiero-comercial⁶⁰. En una palabra, la alianza oligárquica, al ceder su dominación política para preservar su dominación social, se vio forzada a una relativa modernización económica, mediante la cual el Estado logró estimular “desde arriba” un cierto proceso de crecimiento capitalista de tipo industrial, apoyado en la expansión de la banca.

⁵⁹ Véase *Notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno* (1972).

⁶⁰ De aquí la entusiasta ilusión de algunos autores de ver en el ascenso del PRD al poder en 1978 “la hora de la burguesía nacional” que tomaba “la hegemonía” del proceso de industrialización capitalista. Véase a Catrain y Oviedo (1981).

De este modo, el proceso modernizador auspiciado desde el Estado, al tiempo que forzaba a la modernización de la burguesía tradicional, aun cuando esta quedara políticamente anulada, daba pie al surgimiento de nuevos agrupamientos burgueses vinculados al proceso de industrialización y la expansión de la banca y el gran capital extranjero, que en su momento entraría en contradicción con la propia burguesía tradicional, básicamente con su sector comercial importador y terrateniente.

2.3. Estado, modernización capitalista y burguesía

Hoy día se admite sin discusión que el Estado bajo el régimen balaguerista tuvo una directa y decisiva intervención en el proceso de desarrollo del capitalismo verificado en el país en el período 1966-1978. La intervención estatal no se limitó a las tareas estratégicas de apoyo a la acumulación del capital, sino que se convirtió en el estímulo fundamental y el ordenador decisivo del proceso de desarrollo capitalista, al marcar sus directrices básicas, producir o canalizar los excedentes necesarios al desarrollo y crecimiento de los sectores de la economía considerados estratégicos, y, en general, al estimular, y en muchos casos cohesionar, la estructuración de los nuevos grupos y fracciones de clase en los que descansaría la dinámica del desarrollo capitalista en el período bajo estudio (1966-1978).

En ese contexto, bajo el régimen reformista se verificó un contradictorio proceso de modernización del Estado, no solo de sus aparatos represivos y de control social, sino también de aquellas instancias de apoyo a la acumulación del capital y, en general, racionalizadora de la dominación burguesa. En ese sentido, la complejización de las estructuras burocráticas estatales se encuentra estrechamente relacionada con el proceso de modernización de la sociedad civil observado en el período, a propósito del desarrollo capitalista.

A partir de 1966, la estructura institucional del Estado fue haciéndose más compleja en un esquema centralizador que hizo del Poder Ejecutivo el eje articulador del andamiaje institucional del

Estado en su conjunto. Los diagramas de más abajo muestran claramente la subordinación del Congreso y del sistema de justicia al poder centralizador del Ejecutivo, y revelan sobre todo cómo, en la práctica, el Ejecutivo suplantaba las funciones institucionales del campo correspondiente a los aparatos de Estado en los cuales debía descansar la gestión estatal en su conjunto.

Esto se aprecia en toda la estructura estatal, pero es sobre todo en la instancia ejecutiva que se revela el poder centralizador de la instancia presidencial. Concentrémonos en el organigrama 2.2, relativo al Poder Ejecutivo. Lo primero que reconocemos en el diagrama es la multiplicación de organismos y aparatos institucionales que se constituyen como apoyos directos a la gestión del Ejecutivo, más allá del apoyo a la gestión gubernativa que brindan las secretarías de Estado. Estos organismos eran el Secretariado Técnico y el Secretariado Administrativo de la Presidencia, las secretarías de Estado sin cartera y la Procuraduría General de la República. A excepción de esta última, cada una de estas instancias estatales desempeñaba funciones estrechamente vinculadas a la reproducción política del bonapartismo. Por ejemplo, bajo el reformismo se observa una asombrosa proliferación de los secretarios de Estado sin cartera. Este cuerpo de funcionarios resolvía al reformismo varios problemas de la gestión estatal, vinculados a la reproducción política del régimen. Los secretarios sin cartera permitían encontrar un espacio para la prebenda a aquellos cuadros ligados al aparato político reformista, sin afectar directamente el esquema organizativo más orgánico del Estado. Asimismo, estos funcionarios constituían un extenso aparato político que posibilitaba al Estado y en concreto al poder presidencial, vincular el modelo bonapartista, en su capacidad de cooptación prebendalista, a las instancias más moleculares de la sociedad civil, por encima de los cuadros formales del aparato administrativo del Estado. Con ello el esquema bonapartista era reforzado, al presentar la “imagen” de Balaguer como un líder por encima de los aparatos formales estatales, pero con una eficacia específica para insertarse en la sociedad civil y resolver sus problemas. De este modo, Balaguer se constituía en condición necesaria para la “expresión” de las clases

populares en el Estado, ampliándoles su poder negociador frente a las clases dominantes y fortaleciéndole a Balaguer su poder y capacidad de arbitraje⁶¹.

A través de la Secretaría de la Presidencia, sobre todo en su oficina administrativa, Balaguer canalizaba lo que fue una constante de su gestión de gobierno, la centralización de la gestión administrativa y el control directo del gasto público. Toda decisión de importancia era filtrada por el Ejecutivo, reservándose la última palabra y respuesta. No es que la Presidencia bloqueara la capacidad de intervención del cuadro administrativo estatal en su conjunto, que tenía la responsabilidad de la gestión de gobierno (secretarios de Estado, directores generales y administrativos), sino que colocaba la capacidad efectiva de su gestión como una instancia directamente subordinada al Poder Ejecutivo de manera *cuasi* personal, lo que le reportaba un asombroso poder de decisión al presidente Balaguer. Para implementar esta estrategia, el bonapartismo orquestó un complicado aparato de movilización y circulación de élites políticas en el seno del reformismo, que tendía a bloquear su capacidad política decisoria, forzándolas a la aceptación pasiva del centralismo bonapartista, como requisito de la preservación de sus intereses⁶².

Donde mejor se aprecia la capacidad centralizadora de la gestión estatal del Ejecutivo es en el control del presupuesto nacional por la Presidencia de la República. A lo largo de los doce

⁶¹ Es indudable que esto le permitía a Balaguer enterarse de los problemas específicos de las comunidades, por más remotas que fueren, de las cuestiones políticas real o aparentemente más intrascendentes, de las cuales no podía percatarse a través de los aparatos formales del Estado o mediante su propio aparato político. Realmente los secretarios de Estado sin cartera fungían como representantes políticos personales del presidente en los intersticios de la sociedad civil. Creo que personalmente Balaguer, con su experiencia como funcionario del tren burocrático trujillista, con los secretarios de Estado sin cartera adoptó a las condiciones del bonapartismo como régimen político una figura empleada por Trujillo para una función semejante, pero en una sociedad esencialmente rural: los alcaldes pedáneos. Véase a Turits (2003) que analiza con lucidez las bases del poder político de Trujillo sobre el campesinado.

⁶² Sobre este punto particular véase a Del Castillo (1981) y Oviedo (1983).

años del régimen, en la ejecución del presupuesto la Presidencia pasó de controlar el 7.3 % en 1966, al inicio del gobierno, a alcanzar el 43.5 % al final, en 1978.

Fuera de las secretarías de Estado, tras cuya gestión se orienta y desarrolla gran parte de la función estatal de apoyo directo a la acumulación del capital y de la reproducción social en su conjunto⁶³ a través del sector descentralizado, el Estado balaguerista estructuró en muchos sentidos su estrategia de desarrollo, básicamente por medio del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) el Banco Central y el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)⁶⁴.

⁶³ Los llamados gastos sociales del Estado (O'Connor, 1976) no son únicamente una función de las necesidades de legitimación y consenso, sino también de mantenimiento y reproducción de la estructura económica (por ejemplo, obras públicas), como de la fuerza de trabajo (salud, asistencia y seguridad sociales, educación, etc.). Algunos autores tienden a ponderar sobre todo la primera de las funciones aludidas del gasto social del Estado, olvidándose de las otras.

⁶⁴ El saneamiento del CEA representaba una política de desarrollo en sí misma. Tras el Banco Central, sobre todo a través del programa FIDE (Fondo de Inversión para el Desarrollo) y de la Ley 299 de incentivos y desarrollo industrial, el gobierno estructuró su política de desarrollo industrial. Para un análisis más completo véase el Capítulo 4 de este libro.

Diagrama 1.

ORGANIGRAMA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

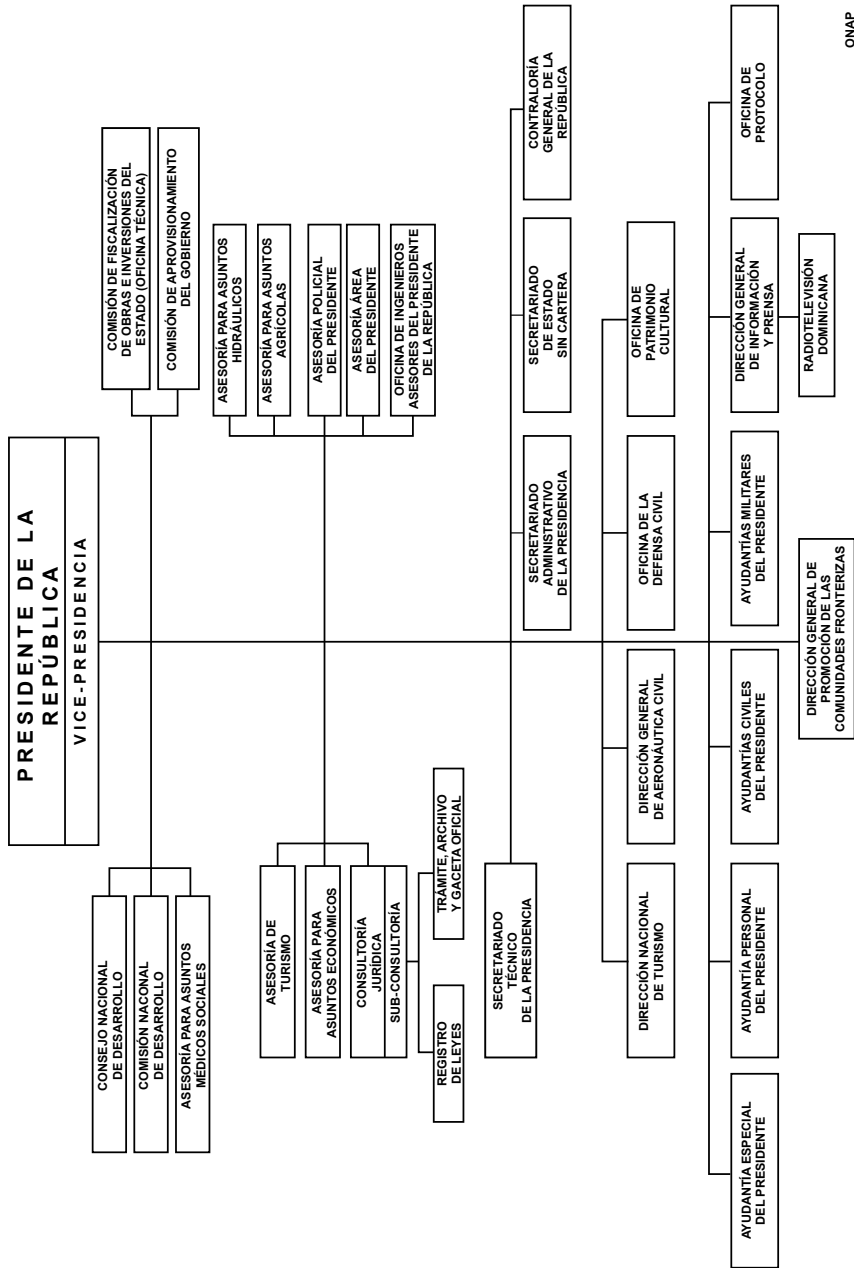
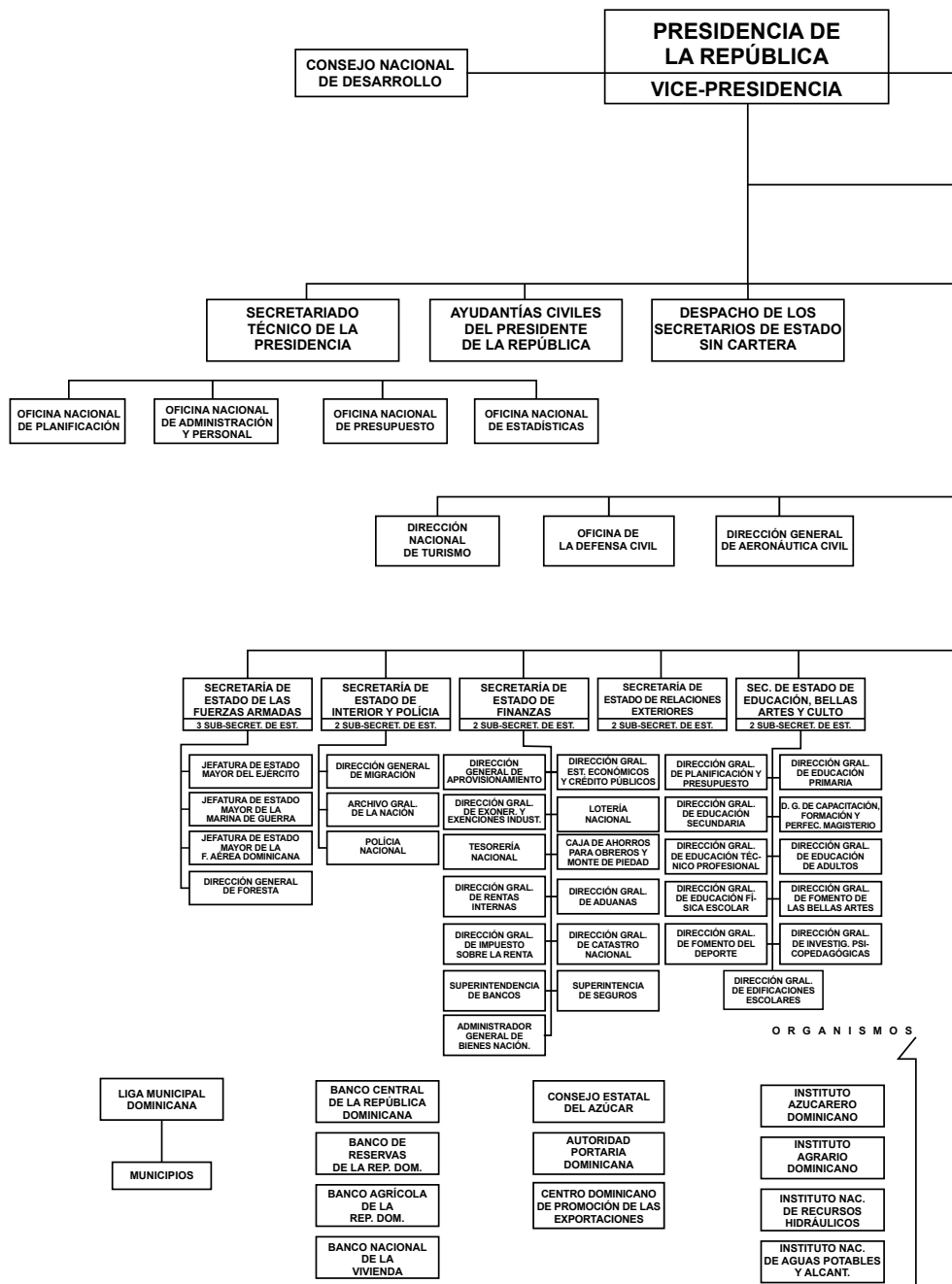


Diagrama 2.

ORGANIGRAMA DEL



PODER EJECUTIVO

COMISIÓN NACIONAL
DE DESARROLLO

COMISIÓN DE
APROVISIONAMIENTO

CONTRALORÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA

AYUDANTÍAS MILITARES
DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA

SECRETARIADO
ADMINISTRATIVO
DE LA PRESIDENCIA

CENTROS REGIONALES
DE FORMACIÓN
LABORAL ACELERADA

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
INVESTIGACIONES

DIRECCIÓN GRAL.
DE DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD

CENTRO NACIONAL
DE ARTESANÍA

INDUSTRIA
NACIONAL DE
LA AGUJA

DIRECCIÓN GRAL.
DE INFORMACIÓN
Y PRENSA

OFICINA DE
PATRIMONIO
CULTURAL

DIRECCIÓN GRAL.
DE PROMOCIÓN DE LAS
COMUNIDADES FRONTERIZAS

RADIO TELEVISIÓN
DOMINICANA

PANTEÓN
NACIONAL

SECRETARÍA DE
ESTADO DE
AGRICULTURA
3 SUB-SECRET. DE EST.

SEC. DE ESTADO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES
3 SUB-SECRET. DE EST.

SECRETARÍA DE
ESTADO DE
TRABAJO
SUB-SECRET. DE EST.

SECRETARÍA DE
ESTADO DE IN-
DUST. Y COMERCIO
SUB-SECRET. DE EST.

SEC. DE ESTADO DE
SALUD PÚBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL
2 SUB-SECRET. DE EST.

PROCURADURÍA
GENERAL DE
LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN GRAL.
DE CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES

DIRECCIÓN GRAL.
DE EDIFICACIONES

DIRECCIÓN GRAL.
DE CARRETERAS

DIRECCIÓN GRAL.
DE TRANSITO
TERRESTRE

DIRECCIÓN GRAL.
DE EQUIPO Y
TRANSPORTE

DIRECCIÓN GRAL.
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GRAL.
DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

DIRECCIÓN GRAL.
DE EMPLEO Y RE-
GISTRO DE DESOCUP.

DIRECCIÓN GRAL.
DE MEDIACIÓN Y
ARBITRAJE

DIRECCIÓN GRAL.
DE TRABAJO

DIRECCIÓN GRAL.
DE MINERÍA

DIRECCIÓN GRAL.
DE CONTROL
DE PRECIOS

DIRECCIÓN GRAL.
DEL SERVICIO
NAC. DE LA SALUD

DIRECCIÓN GRAL.
DE ASISTENCIA
SOCIAL

DESCENTRALIZADOS

CORPORACIÓN
DOMINICANA DE
ELECTRICIDAD

CORPORACIÓN
DOM. DE EMPRESAS
ESTATALES

CORPORACIÓN
DE VALDESIÁ

INSTITUTO
DOMINICANO DE
SEGUROS SOCIALES

CRUZ ROJA
DOMINICANA

CORPORACIÓN
DE FOMENTO
INDUSTRIAL

INSTITUTO NACIONAL
DE LA VIVIENDA

INSTITUTO DE
AUXILIOS Y VIVIENDAS

INSTITUTO DE
DESARROLLO Y
CREDITO COOPERATIVO

INSTITUTO DE
ESTABILIZACIÓN
DE PRECIOS

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
SANTO DOMINGO

ONAP
O y M, 1971

Cuadro 2.1

**EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL
Y SU EJECUCIÓN POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**
(En millones de RD\$)
1966-1978

Años	Presupuesto programado y ejecutado	Presupuesto ejecutado por la Presidencia	
		Absoluto	%
1966	198.0	14.5	7.3
1967	198.1	32.8	16.5
1968	207.6	46.4	22.3
1969	235.3	65.0	27.6
1970	264.8	81.3	30.7
1971	305.9	114.3	37.4
1972	334.3	138.8	41.5
1973	387.3	174.5	45.0
1974	508.7	255.3	56.1
1975	664.9	320.1	48.1
1976	580.6	266.5	45.9
1977	631.3	297.8	42.1
1978	689.7	300.1	43.5

FUENTE: Oficina Nacional de Presupuesto: *Ejecución Presupuestaria*, años 1966-1978.

Uno de los objetivos prioritarios del régimen balaguerista fue desde sus inicios el saneamiento de las empresas estatales y el CEA, lo cual se logró a través de una política de reducción de sus volúmenes de empleo, acompañado de un drástico constreñimiento de los salarios obreros. Al lograr la rentabilidad económica del CEA, sobre todo a partir de la buena coyuntura de precios iniciada en 1972, este pasó a constituirse en una fuente de ahorro y financiamiento de la inversión. Las consecuencias de este hecho se verán más adelante en el Capítulo 3. Lo importante ahora es retener la idea de que de este modo el CEA maximizaba su función redistribuidora del excedente azucarero en el conjunto de la economía, a la vez que permitía dar salida a la estrategia prebendalis-

ta del reformismo, que nucleaba su base política. Detengámonos en esto último⁶⁵.

Cuadro 2.2
GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
(En millones de RD\$)
1966-1978

Años	Corrientes	De capital	Otros (*)	Totales
1966	124.6	21.4	48.3	194.3
1967	110.5	35.0	56.0	201.5
1968	105.8	43.8	56.7	208.3
1969	114.8	63.6	58.3	236.7
1970	122.1	76.4	64.4	262.9
1971	129.3	107.0	68.6	304.9
1972	138.5	126.3	69.0	333.8
1973	150.7	151.6	84.6	386.9
1974	178.4	203.1	131.1	512.6
1975	198.7	292.3	162.3	653.3
1976	216.9	229.4	123.0	569.3
1977	235.2	236.1	147.4	618.7
1978	282.5	210.2	182.8	675.5

(*) Incluye deuda pública.
FUENTE: Banco Central: *Boletín Mensual, 1966-1978*: Oficina Nacional de Presupuesto: *Proyecto de Presupuesto, 1984*.

En el CEA el balaguerismo terminó depositando las tierras de colonato en manos de los principales líderes militares de rango superior e intermedio, lo cual era parte de una estrategia de equilibrio político que he discutido arriba en el Capítulo 2 y en la primera parte de este, donde la prebenda jugaba un papel determinante, pero también evidenciaba un elemento de alcance estratégico para el modelo político bonapartista. Llama la atención la homología que se daba entre el CEA, como princi-

⁶⁵ Las operaciones de efectivo del CEA en el período 1966-1969 fueron las siguientes, expresadas en millones de RD\$:

	1966	1967	1968	1969
Ingresos de efectivo	62.2	71.9	68.1	87.5
Egresos de efectivo	72.8	66.2	64.7	85.6
Superávit o déficit	-15.6	5.7	3.4	1.9
Financiamiento	15.6	-5.7	-3.4	-1.9

pal conglomerado del sector azucarero de la acumulación, y los militares, como principal eje del modelo político bonapartista. Claro está, de la “prebenda azucarera” se beneficiaron también las burocracias civiles, pero no del modo como lo hicieron las élites militares, es decir, controlando directamente gran parte de la reproducción social y económica de la producción azucarera del CEA en el sector más conflictivo y base de la estrategia de explotación del trabajo en dicha empresa: el corte de la caña. Mientras los cuadros de la burocracia política civil controlaban la gestión administrativa de la empresa azucarera, ciertamente podían especular, enriquecerse, y en muchos casos hacerse hasta millonarios, pero esto no definía una pauta estructural en la reproducción de la corporación azucarera. No así el caso de los colonos, cuyo papel pasaba a definir una pauta estructural más allá de la prebenda. Los colonos llegaron a controlar durante el período balaguerista más del 40 % de la producción cañera, convirtiéndose así en una fuerza social y política decisoria en la vida económica del sector azucarero.

De esta manera, el balaguerismo lograba controlar, en la base de la reproducción económica del eje central de la acumulación, las fuerzas determinantes en las que se apoyaba su modelo político, lo cual robustecía su poder centralizador al tiempo que ampliaba su margen de autonomía respecto a las clases dominantes.

El segundo elemento que debo destacar es el apoyo que el sector descentralizado del Estado brindó a la acumulación del capital, como mecanismo de instrumentalización de las políticas de desarrollo y, en tal virtud, racionalizador de la distribución del excedente.

Veamos el caso del INESPRES. Dicho organismo, más que un simple regulador de precios, a la larga terminó convirtiéndose en una estructura reguladora del valor y reproducción de la fuerza de trabajo. Como tal, devino una estructura de apoyo al proceso de acumulación en los ejes urbanos, sobre todo en materia industrial, al facilitar al capitalismo urbano, luego de la regulación de los precios e incluso de la comercialización de los productos agropecuarios, un mecanismo de transferencia de excedentes

del campo a la ciudad, sin el que históricamente ningún proceso de desarrollo industrial ha podido tener éxito⁶⁶. El complemento natural de esa política fue el subsidio estatal a los productos rurales y la importación de alimentos, tras lo cual el Estado pasaba a convertirse en un verdadero agente regulador de la acumulación de capital en el campo.

En una expresión diferente, pero complementaria de las dos anteriores, tras el Banco Central, bajo el balaguerismo se estructuró una política de movilización de excedentes hacia las áreas de acumulación consideradas prioritarias para el capital, a través de la política de préstamos. Los principales beneficiarios de esta política fueron, sin lugar a duda, las fracciones financiera e industrial de la burguesía, el gran capital monopolístico extranjero y la burguesía ganadera. Dicha política se implementó, desde el Banco Central, a través de dos estructuras institucionales: el Fondo de Inversión para el Desarrollo (FIDE) e INFRATUR. Analicemos el caso FIDE.

Como mecanismo regulador de la estrategia de apoyo estatal a la acumulación capitalista, tras el FIDE se estructuró una política de bloqueo sistemático a las empresas del Estado en materia de inversiones. Con ello se bloqueaba el financiamiento internacional a las empresas estatales, potenciando así el apoyo al gran capital financiero internacional y al sector privado⁶⁷.

En una primera etapa, tras el FIDE y a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno norteamericano incidía de manera directa en la delineación de una política de desarrollo que tendía, estratégicamente, a debilitar el sector estatal de la economía. En una segunda etapa, el financiamiento del FIDE se apoyó cada vez más en los fondos estatales. En todo caso, el Estado, como contrapartida de los fondos internacionales, mediante el FIDE canalizaba hacia los sectores de la economía considerados estratégicos en el modelo de acumulación (industria, ganadería, etc.)

⁶⁶ Sobre esta problemática, véase a Bairoch (1978).

⁶⁷ Sobre los orígenes del FIDE, véase a Estrella (1971) y Ascuasiati (1972).

gran parte de los excedentes controlados estatalmente o generados por las empresas del Estado. Esto último, sin embargo, podía realizarse de modo óptimo mientras se disfrutara de una buena coyuntura de precios internacionales que le permitiera al Estado, ya por la vía del CEA o de las recaudaciones fiscales, manejar gran parte del excedente generado en el sector externo de la economía en la buena coyuntura de precios. Pero, en la medida en que tales condiciones eran anuladas, el Banco Central tuvo que recurrir cada vez más a emisiones monetarias sin sólido respaldo, como fuente de financiamiento de los préstamos del FIDE. Con ello, por la vía de las presiones inflacionarias, que esta política monetaria implicaba, se transfería a los consumidores y los demás sectores de la economía no favorecidos con los préstamos del FIDE, gran parte de los costos de dichos financiamientos. De hecho, esto significaba un “reordenamiento” de las reglas del juego en la distribución y apropiación del excedente generado en el conjunto de la economía, el cual favorecía a aquellos sectores de la burguesía involucrados en los préstamos del FIDE: gran parte del capital financiero local e internacional, la burguesía industrial, los ganaderos, etc.

Cuadro 2.3
**PRÉSTAMOS CANALIZADOS POR EL PROGRAMA DEL FONDO
DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO, SEGÚN SECTORES
BENEFICIARIOS Y ENTIDADES FINANCIERAS
1966-1978**

Sectores	FIDE (RD\$)	Beneficiarios (RD\$)	Intermediarios (financieras) (RD\$)	TOTAL (RD\$)
Industrial	81,231,452.90	53,832,072.09	22,404,488.28	157,468,513.22
Agrícola	15,719,569.40	7,475,640.88	1,088,411.48	24,283,621.76
Ganadero	38,925,365.41	14,070,439.92	4,243,782.00	57,239,587.33
Otros*	-	-	-	34,697,308.10
TOTAL	136,376,387.71	-	-	274,179,030.40

*Incluye salud, educación, turismo y otros servicios.
FUENTE: Banco Central: Fondo de Inversiones para el Desarrollo (FIDE): *Boletines Trimestrales, 1966-1978.*

El segundo elemento que interesa recuperar aquí es el hecho de que, tras el FIDE, el Estado y los organismos financieros internacionales transferían el “comando” del proceso de industrialización a la banca local, lo que en la práctica depositaba en manos del capital financiero la conducción del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, por lo menos en sus lineamientos estratégicos en materia de orientación de la inversión⁶⁸. Dada su estructura orgánica, el Banco Central no podía encargarse directamente de realizar los préstamos del FIDE a los sectores productivos, ya que funciona como banco emisor de la moneda y regulador de la política monetaria. Esto determinó que los préstamos del FIDE se canalizaran a través de la banca privada local (nacional y extranjera), lo cual, de hecho, permitía a la burguesía financiera solo participar de los beneficios de la política de financiamiento del FIDE y depositaba en sus manos, tras la administración financiera de los préstamos hacia los sectores productivos, una gran capacidad para el control estratégico de las empresas favorecidas.

En el período 1966-1978, el FIDE canalizó alrededor de 168.3 millones de pesos a los sectores productivos. El principal beneficiario de estos préstamos fue el sector industrial, el cual concentró alrededor del 60 % (81.7 millones de pesos) del financiamiento total canalizado por el FIDE. En segundo lugar, reconocemos a la actividad pecuaria, la cual concentró el 28 % del financiamiento global del FIDE (39.9 millones de pesos). Ahora bien, tras el FIDE, considerando los aportes de las intermediarias financieras (bancos y financieras privadas), como de los propios beneficiarios de los préstamos, se canalizaron en el período bajo estudio alrededor de 277.7 millones de pesos hacia los sectores productivos, al ser su principal beneficiario el sector industrial, con el 57.6 % del financiamiento global (157.9 millones de pesos). Como se aprecia, fueron la burguesía indus-

⁶⁸ Para una conceptualización del proceso industrializador por sustitución de importaciones, véase a Maria da Conceição Tavares (1980) y Fajnzilber (1983). Bulmer-Thomas (1998) proporciona una visión general del proceso latinoamericano.

trial y de modo secundario la burguesía ganadera los principales beneficiarios del programa FIDE, a través del cual el Estado financió y motorizó gran parte de su estrategia de industrialización por sustitución de importaciones.

De esta forma, en el período 1966-1978, de 81.7 millones de pesos dirigidos a las inversiones industriales en el programa FIDE, el 62.6 % (51 millones de pesos) fue canalizado a través de la banca comercial, el 19.6 % (16 millones de pesos) a través de sociedades financieras y el 17.8 % por entidades de fomento. Es importante resaltar el hecho de que el financiamiento bancario estuvo concentrado sobre todo en la banca extranjera radicada en el país, con alrededor del 46.6 % (23.8 millones de pesos) del financiamiento privado total. Dentro de la banca local, el Banco de Reservas concentró el 20.3 % (10.4 millones de pesos) y el resto de la banca privada local concentró el 44.1 % (10.4 millones de pesos). Dentro de la banca privada local el financiamiento a la industria lo concentró el Banco Popular con 14.8 millones de pesos. Como se puede apreciar, el financiamiento de las inversiones industriales, tras el programa FIDE, fue canalizado y controlado por el gran capital bancario internacional y la oligarquía financiera local.

El financiamiento directo del FIDE se dirigió sobre todo a las inversiones en capital fijo (equipos, maquinarias e instalaciones) y en menor medida a financiar gastos de asistencia técnica u operaciones. Por el contrario, el aporte propio de los beneficiarios se concentró esencialmente en los gastos de operaciones y la compra de terrenos. De esta manera, el financiamiento directo del FIDE apoyaba las inversiones cuya recuperación era más lenta y de mayor riesgo, pero sobre todo aseguraba las bases del proceso industrializador, al concentrarse en los gastos de inversión en capital fijo. Por el contrario, los fondos provenientes de las entidades financieras privadas, al sufragar sobre todo las inversiones en capital variable (gastos de operaciones) y las compras de terreno, lograban establecer altas tasas de interés, como también una mayor velocidad de recuperación de los préstamos, sin por ello arriesgar la conducción global del financiamiento industrial y por lo tanto su control.

El financiamiento al sector ganadero sostuvo un comportamiento ligeramente distinto al del sector industrial. Por lo pronto, en la canalización de los préstamos al primero, las sociedades financieras tuvieron un importante papel, concentrando, junto a la banca comercial, el 77 % del financiamiento global (37 % de las sociedades financieras y 40 % de la banca comercial, de un total de 19.9 millones de pesos). Asimismo, en dicho financiamiento se advierte una mayor participación del capital financiero local, aun cuando la banca extranjera continúa concentrando el mayor monto del financiamiento bancario (40 %, con alrededor de 7 millones de pesos). Al igual que en el sector industrial, en el ganadero los fondos del FIDE se dirigieron sobre todo a apoyar la compra de ganado, la construcción de instalaciones y la compra de maquinarias, es decir, a apoyar las inversiones en capital fijo. El financiamiento de las entidades financieras privadas se concentró también en la compra de ganado y en la construcción de instalaciones. Un elemento importante es que las inversiones en el sector ganadero prácticamente no tuvieron grandes erogaciones en la compra de terrenos, pues, obviamente, la mayoría de los ganaderos eran propietarios de las fincas hacia donde se dirigieron las inversiones.

Los préstamos al sector agrícola fueron los de menor significado del conjunto de préstamos canalizados o financiados directamente por el FIDE. Estos, a diferencia de los dirigidos al sector industrial o ganadero, en su ejecución se concentraron en las sociedades financieras locales, salvo el caso del CITIBANK, N.A. Asimismo, dichos préstamos, lejos de apoyar las inversiones reproductivas en el agro, se dirigieron sobre todo en la compra de insumos agrícolas y el pago de mano de obra, y solo en segundo término en la compra de equipo y la construcción de infraestructura.

Com se aprecia, en el período 1966-1978, tras el programa FIDE el Estado canalizó gran parte de su apoyo financiero y logístico a la industria sustitutiva de importaciones y también estimuló una relativa, pero importante, modernización del sector ganadero de la burguesía rural. Por otro lado, tras el FIDE, advertimos con suma claridad la capacidad de control y dirección del proceso de indus-

trialización por sustitución de importaciones por parte del gran capital financiero tanto internacional como local.

Pese a la gestión de apoyo al esquema de acumulación de capital por instituciones estatales como INESPRE y el Banco Central, es preciso admitir que en una situación donde primaba la corrupción y el prebendalismo político, la centralización presupuestaria y ejecutiva de la Presidencia permitía un relativo control de la gestión económica estatal en su conjunto. Sin embargo, ello expresaba una profunda contradicción, en la medida en que entorpecía la racionalización del Estado, exigida por la modernización capitalista. Por el contrario, en función del modelo político, la centralización estimulaba la irracionalidad de la gestión estatal, una vez que el presupuesto fuera asignado a las diversas instituciones estatales (secretarías de Estado, direcciones generales, organismos descentralizados, etc.) gracias a la mecánica de movilización y circulación de élites y camarillas políticas.

La centralización bonapartista de la gestión estatal, a la vez que se inscribía en un proceso más general de modernización del Estado y la sociedad, por la naturaleza del modelo político que le era propio, dificultaba la consecución de sus objetivos económicos y sociales. De este modo, la complejidad del aparato burocrático-estatal lejos de racionalizar y autonomizar la gestión administrativa del Estado, al centralizar las decisiones en el Ejecutivo, hizo depender no solo las decisiones administrativas, sino las estrategias de desarrollo de una instancia política personalizada.

Con ello el funcionamiento de los aparatos de Estado en sus implicaciones estratégicas de apoyo a la acumulación del capital, y en general de la reproducción social bajo el dominio capitalista, quedaba en gran medida subordinado a las necesidades de preservación del modelo político que definía el equilibrio interno del poder del Estado, modelo en el que Balaguer aparecía como la figura providencial, articuladora y decisoria.

La centralización de la gestión estatal en el Ejecutivo, lejos de obedecer a un elemento disruptor, era la consecuencia natural de un esquema más amplio de dominación política, al que he definido como bonapartista. Esto introducía una variada gama de pro-

blemas en la gestión estatal, sobre todo en aquellas áreas de apoyo a la dinámica más general de la acumulación del capital, a la vez que depositaba en Balaguer y su equipo posibilidades inmensas de “corrupción estructural” del bonapartismo en un esquema prebendario, como requisito de la reproducción de la élite política. En su momento, esta capacidad de “corrupción estructural” del bonapartismo se convertiría en un verdadero obstáculo para el desarrollo de los grupos burgueses ya establecidos (como se verá abajo). De este modo, la gestión balaguerista, que en general apoyaría y estimularía un proceso de modernización capitalista, generaba, a la larga, obstáculos a la expansión de la clase burguesa en su conjunto.

Este esquema clientelista y prebendario resultaba necesario a la lógica del dominio bonapartista en el Estado⁶⁹. Con ello se abría la posibilidad de que, a través de la prebenda, la corrupción y el tráfico de influencias, las élites burocrático-estatales se enriquecieran, constituyéndose en verdaderos grupos de poder económico. El bonapartismo encontraba así una directa base de apoyo “burgués” en el seno del Estado, aun cuando pueda admitirse que el comportamiento económico de dichas élites “enriquecidas” distaba mucho de la racionalidad económica empresarial capitalista. De este modo, se estimulaba el enriquecimiento y la movilidad social de amplios sectores pequeñoburgueses que, en las nuevas condiciones impuestas por el proceso de modernización capitalista, se requerían. En tales condiciones, el Estado actuaba como un excelente agente de la dominación burguesa, no solo como aparato de control social, o como apoyo del desarrollo capitalista, sino también como el espacio social en torno al cual se gestaría gran parte de los nuevos grupos y estratos sociales exigidos por las nuevas condiciones económicas y sociales del proceso de modernización capitalista dependiente.

Más allá del elemento moral, en ese escenario la corrupción administrativa en el Estado actuó como un proceso redistribuidor de excedentes que, en la medida en que ayudaba a definir el equilibrio político, contribuía a su vez a la creación de los

⁶⁹ Véase *Supra*, Acápites 1 del presente Capítulo 2.

nuevos agentes económicos en los cuales se apoyaría el proceso de acumulación.

Es cierto que esta nueva “élite económica” creada tras la protección del Estado, tenía una abierta “vocación” especulativa, comercial y terrateniente, y solo en forma subordinada se orientó hacia la industria. Pero esta era una característica del proceso de desarrollo capitalista dominicano en su versión agroexportadora.

Las dificultades económicas en materia de acumulación a las que esta nueva élite burocrático-militar conducía al conjunto de las clases dominantes y sobre todo a los emergentes sectores burgueses industriales, no consistían tanto en el robo abierto en el Estado, sino más bien en los obstáculos que introducían en el funcionamiento del mercado, gracias al monopolio del poder político de que disfrutaba. Esto sí era un elemento desestabilizador del juego económico global capitalista, más allá del hecho de que en lo inmediato afectara de manera acentuada a determinadas fracciones burguesas, fundamentalmente las de reciente formación y menor peso económico y social. De esta manera la corrupción administrativa de la élite económica balaguerista, sobre todo de sus capas más ligadas a la especulación comercial, financiera y a la construcción, planteó la existencia de una contradicción interburguesa, más allá del esquema de dominación política, la cual, de profundizarse, ponía en peligro las bases económicas y sociales de la acumulación y expansión capitalista, colocando en entredicho la vigencia del reformismo dependiente como modelo de dominación política. Por supuesto, esta contradicción solo tendría posibilidad de expresión cuando dichos sectores burgueses lograran articular una mediación política de masas con las que enfrentar el dominio bonapartista sobre la pequeña burguesía y el campesinado.

Los análisis precedentes permiten proponer algunas ideas generales acerca del significado y alcance sociopolítico de los procesos hasta aquí estudiados.

Puede admitirse que en lo económico la estrategia de la dominación balaguerista se propuso la modernización de la clase burguesa en su conjunto, pero al precio del desplazamiento hacia su fracción del ejercicio de la hegemonía política en el Estado. Ello se

apoyó en una estrategia reorientadora del excedente económico a través del cambio de las políticas de inversión del Estado, como del apoyo y protección estatal a las áreas consideradas prioritarias del desarrollo capitalista, sobre todo en materia industrial y financiera⁷⁰. Indudablemente que estos procesos conllevaron la modificación de los patrones de explotación de la fuerza de trabajo, lo que se expresó de modo diáfano en una nueva política de contracción salarial y bloqueo de las capacidades de negociación de la clase obrera frente al empresariado y el propio Estado. Esto a su vez se correspondía con una política de contracción del ingreso de los sectores medios urbanos y el descenso de los niveles de vida de las clases trabajadoras.

La otra cara de este proceso fue el afianzamiento del poder imperial en la formación social dominicana, a través de la expansión y dominio de las empresas transnacionales y el gran capital financiero internacional en la estructura económica del país⁷¹.

Se impone ahora el análisis de algunos de esos problemas. El primer asunto que discutir es el del Estado Empresario.

En el turbulento período de los años 1961-1966 la presencia de un Estado Empresario, heredero del emporio económico trujillista⁷², constituía un formidable obstáculo económico y

⁷⁰ Instituciones como el FIDE asumen una importancia estratégica de primer orden en el proceso de desarrollo capitalista, a la luz de esta premisa. Igualmente, las estrategias de control de divisas implementadas por el Estado en los hechos fungen como una política redistribuidora del excedente económico hacia los sectores punta del proceso de crecimiento capitalista.

⁷¹ Sobre este proceso en particular véase a Del Castillo *et. al.* (1975), Deverell (1977), Frundt (1980), entre otros autores.

⁷² Como ha referido Estrella (1971), en 1963 la Corporación de Fomento Industrial (CFI) había recibido el siguiente patrimonio del Estado, significativo de la riqueza heredada del emporio trujillista: "A) *empresas en las que el Estado tenía la totalidad de las acciones*: Fábrica de Calzados Fa-Doc CXA; Tenería la Fa-2 CXA; Ferrocarril Sánchez-La Vega; Minas de Sal y Yeso (Barahona); Consorcio Algodonero CXA; Sisal Dominicano CXA; Industria Nacional del Vidrio CXA, y Sacos y Tejidos Dominicanos CXA, división Textil y división FASACO. B) *Empresas en las cuales el Estado es accionista mayoritario*: Sociedad Inmobiliaria CXA; Fábrica Dominicana de Discos CXA; Industrialización de Frutas Dominicanas CXA; Chocolatera Industrial CXA; Industria Licorera La Altigracia CXA; Industrial Lechera CXA; Atlas Comercial Company, CXA; Industria Nacional del Papel, CXA; Caribbean Motor Company, CXA; Compañía Anónima Tabacalera, CXA; Fábrica Dominicana de Cemento, CXA;

político para la expansión y crecimiento del conjunto de las clases dominantes dominicanas, principalmente de sus sectores vinculados a la actividad comercial-importadora. En primer lugar, el Estado Empresario representaba un importante competidor en el mercado a ser tomado en consideración; en segundo lugar, tras el domino estatal de la actividad industrial en sus sectores hegemónicos, la burguesía importadora encontraba un fuerte obstáculo a su estrategia de expansión como el sector dirigente del proceso de crecimiento capitalista en los años 1961-1963. Esta situación se tornaba más compleja si tomamos en consideración que en medio de la crisis de hegemonía en el período, la autonomía relativa del Estado se acrecentaba.

Desde la muerte de Trujillo en 1961, la alianza oligárquica que pasó a gobernar el país, tras el Consejo de Estado en 1962 y el Triunvirato en 1963-1965, definió una estrategia de compra de las empresas del Estado. Esta estrategia, en los hechos, fracasó. En parte, por la debilidad económica de las clases dominantes locales, que les dificultaba en sumo grado la consecución de los capitales necesarios a tan cuantiosa inversión, en parte por las presiones de masas a través de sus principales representantes

Dominican Motor Company, CXA, y Ferretería Read, CXA. C) *Empresas en las cuales el Estado no es accionista mayoritario, pero controlaba indirectamente el capital*: Quisqueya Motor, CXA; Planta Recauchadora, CXA; Fábrica de Baterías Dominicana CXA, y San Rafael CXA. D) *Empresas en las cuales el Estado era accionista minoritario*: Equipo de Construcción, CXA; Industria de Asbesto Cemento CXA; Equipo de Construcción, CXA; Concretera Dominicana, CXA; Nacional de Construcción CXA; Industrias Nigua CXA; Talleres Cima CXA; Petrolera Dominicana CXA; Fábrica de Ropas y Tejidos CXA; Ferretería el Martillo CXA; Productos Asfálticos CXA; Mezcla Lista CXA; Fomento Industrial Mercantil CXA; Comercial Dominicana CXA; Radio HIN; Industria del Plástico CXA; Seguros en General CXA; Fábrica de Chocolates y Dulces CXA. (Dovasca); Instalaciones Eléctricas y Sanitarias CXA; Cervecería Nacional Dominicana CXA; Santo Domingo Country Club; Refrescos Nacionales CXA; Comisiones en General CXA; Electro Radio CXA, y Compañía Dominicana de Hormigón Asfáltico Caliente CXA [...]” (pp. 109-111). A esto habría que añadir los doce ingenios azucareros del CEA y la Corporación Dominicana de Electricidad. En función de ello, estimaciones del Secretariado Técnico de la Presidencia (1966) calculaban que la fortuna de Trujillo implicaba el control del 63% de la industria azucarera, 66.6% de la producción de cemento, 73.2% de la producción de papel, 86.6% de la producción de pintura, 72% de la producción de cigarros y cigarrillos, 85% de la industria lechera y 68% de la producción de harina de trigo.

políticos organizados, tras el movimiento sindical, el PRD, los partidos de izquierda, pero sobre todo debido a su gran debilidad y dispersión política.

Sin embargo, si bien la alianza oligárquica no pudo proceder a la compra de las empresas del Estado, logró por lo menos desestabilizar su gestión empresarial, como lo señala un importante documento técnico elaborado por la ONAPLAN en 1965:

[...] las utilidades de estas empresas desaparecen con la estatización. A ello confluyen varios factores entre los cuales no es ajeno el propósito deliberado de mostrar la ineficiencia de la administración del Estado y preparar su entrega al sector privado. Así, por ejemplo, el crédito para las empresas estatales fue dificultado y se abrieron las puertas a las importaciones de los productos competitivos extranjeros [...]⁷³.

Como se sabe, casi desde su creación el sector descentralizado y autónomo del Estado, entró en una permanente crisis económica⁷⁴. En parte debido a la errática gestión administrativa de las burocracias políticas que se sucedía en el Estado y el clientelismo político en el turbulento período de los años 1961-1966, pero también debido a las dificultades que la alianza oligárquica trataba de provocar a las empresas estatales. A la larga, esta situación afectaba la estabilidad política interna del Estado, y con ello contribuía a la obstrucción de una posible opción hegemónica de los grupos oligárquicos.

Con el reordenamiento que el balaguerismo en el poder provocó en el Estado, a partir de 1968, se logró sanear al CEA y hasta hacer rentable en pocos años muchas de las empresas de la Corporación de Empresas Estatales (CORDE). Sin embargo, tras el reformismo, la estrategia estatal en materia industrial alteraría el patrón tradicional en lo que respecta a las empresas estatales.

De esta forma, se observa que en el período 1966-1968 se produce un traspaso real del dominio del mercado interior al

⁷³ ONAPLAN (1965), p. 25.

⁷⁴ Al respecto el texto más completo es el de Estrella (1971).

sector industrial-manufacturero no controlado por el Estado mientras las empresas estatales, agrupadas en CORDE, prácticamente ven paralizada su expansión. Ello, como se verá en el próximo Capítulo 3, obedecía a un patrón de desarrollo gracias al cual en la expansión del sector industrial observada en el período 1966-1978, el Estado no competiría como empresario con la emergente burguesía industrial⁷⁵. Al respecto, el papel del Estado se limitaría a servir de apoyo estratégico del proceso de industrialización, como mecanismo movilizador de excedentes hacia la industria, y como estructura reguladora del equilibrio del mercado. Esto último le aseguraría a los emergentes grupos industriales la “protección” necesaria frente al capital comercial, nacional o extranjero⁷⁶.

Como argumento a lo largo de este libro, pese al real apoyo que el régimen balaguerista brindó a los emergentes sectores industriales, la clave del proceso de modernización capitalista en el período 1966-1978 no se encuentra en el eje industrial, sino en el financiero-comercial⁷⁷. El traspaso del dominio del mercado interior a la burguesía dominicana, con la gradual exclusión de la competencia estatal al respecto, lejos de bloquear a los sectores comerciales supuso su expansión. En este último sentido, la expansión del mercado interior en el período implicó en la práctica la compartimentación de los intereses industriales y financieros con los comerciales y agrarios. Indudablemente que esto tenía sus

⁷⁵ Véase ONAPLAN (1965), *op. cit.*, y Ascuasiati (1972). Modernamente véase a Moya Pons (1992).

⁷⁶ Véase Ascuasiati (1972), *op. cit.*, y Moya Pons (1992), *op. cit.*

⁷⁷ No se trata de demostrar simplemente cuáles sectores del PIB crecieron a tasas más altas y aceleradas en el período 1966-1978 ni tampoco cuáles tenían un peso económico más fuerte en la estructura del PIB. De ser así, la industria fue el sector más dinámico en su crecimiento y el comercio y actividades conexas continuaron sosteniendo un peso económico determinante en la estructura del PIB. Se trata del “comando” del proceso económico, de cuál sector capitalista tenía la posibilidad de convertirse en la pieza articuladora de la reproducción del capital, como conjunto. Mi proposición sugiere que solo el capital financiero podía enfrentar esa tarea y por ello se convirtió en el sector dirigente del proceso. Para el debate teórico, véase a Gershenkron (1968), Benetti (1976), Cardoso y Faletto (1971).

límites y se desarrollaba en medio de contradicciones entre los diversos grupos económicos⁷⁸.

Hemos visto que la estrategia de crecimiento del régimen reformista significó la conservación y saneamiento del CEA, como elemento indispensable para la estabilización del Estado, lo que fortaleció la gestión estatal reguladora de la acumulación, pues depositaba en sus manos la fuente básica generadora de excedentes, al tiempo que consolidaba su autonomía relativa. Esto afectaba al proceso de modernización de la burguesía dominicana en su conjunto, ya que la hacía depender de una instancia de la cual no se poseía su control efectivo. Por esto, puede decirse que el proceso de modernización y crecimiento económico en República Dominicana se hizo “desde arriba” y su principal ejecutante fue el Estado⁷⁹.

Esta era una dinámica sumamente contradictoria. En primer lugar, implicaba que en el proceso de modernización capitalista las clases dominantes eran excluidas del control de la fuente básica de producción de excedentes, precisamente como requisito de su expansión⁸⁰. Además de hacerlas profundamente dependientes del Estado en materia de desarrollo, suponía que solo desde el Estado podía apoyarse un proceso de relativo desarrollo industrial. En este sentido era más o menos natural que los emergentes grupos empresarios industriales en el período surgieran bajo su sombra. Lo más

⁷⁸ La polémica sostenida por Gerschenkron (1968) con el historiador italiano Rosario Romeo, a propósito de las tesis de este último sobre el *Risorgimento* italiano y las vías hacia la industrialización, es muy ilustrativa del alcance de esta discusión. En América Latina, Cardoso (1968 y 1972) tiene reflexiones pertinentes que ayudan a situar el caso dominicano. Un balance teórico de estas discusiones se encuentra en Benetti (1976).

⁷⁹ Para la discusión general véase a Moore (1976) y Gershenkron (1968). El caso asiático ilustra bien la función estratégica estatal en el desarrollo industrial en la periferia capitalista en la globalización. Véase Wade (1999).

⁸⁰ Una situación distinta a la que enfrentaban los industriales locales, e incluso los propios importadores, era la de las empresas transnacionales que operaban en el país, respecto a sus relaciones con el Estado. Para un debate general de este tipo de relación entre las empresas transnacionales y los Estados de la periferia véase a Dos Santos (1980). Para el caso dominicano debe verse a Del Castillo, Puig *et al.* (1975), Frundt (1980) y Deverell (1977).

importante es que esto forzaba a los sectores dominantes, sobre todo a sus grupos oligárquicos, a apoyarse en el sector financiero, como la vía a través de la cual se incorporarían a su vez al proceso de modernización capitalista en el período, permitiéndoles apropiarse por este canal de parte del excedente generado en el Estado (por la vía azucarera y empresarial), o canalizado por él mismo (por la vía del endeudamiento externo y los ingresos fiscales).

Fue así como, dada la particular estrategia de desarrollo apoyada por el Estado, la lógica de la acumulación capitalista terminó uniéndose en un sólido y estrecho bloque a la poderosa burguesía financiera con la oligarquía comercial, esencialmente importadora, y a través de esta integración vinculó a la burguesía comercial en su conjunto con el proceso modernizador⁸¹. A la larga, este proceso terminó depositando en manos de la burguesía financiera el comando del proceso de industrialización por sustitución de importaciones y, en tal virtud, constriñendo sus perspectivas, pues forzaba a los emergentes grupos industriales a un equilibrio de intereses con la burguesía comercial, como requisito de su posible expansión, a la vez que convertía a la burguesía financiera en el sector articulador del conjunto de las clases dominantes en las nuevas condiciones económicas.

Por eso no es exagerado afirmar que el elemento fundamental que caracteriza el proceso de desarrollo capitalista durante el período balaguerista es el predominio que adquieren los intereses ligados al capital financiero en materia de desarrollo, al punto de que puede decirse que, en términos clasistas, es característico del régimen balaguerista el afianzamiento de un verdadero empresariado ligado a las finanzas, no tanto el robustecimiento de un empresariado industrial, pues es a partir del predominio de los intereses de la fracción financiera de la burguesía (local e internacional) que adquiere significado económico el proceso de crecimiento industrial, que a partir

⁸¹ Naturalmente, esta es una hipótesis que merece un estudio más amplio, pero creo aportar en el presente libro suficientes elementos para justificar su probabilidad y validez.

de 1969 se observa en el período bajo estudio, como también se logra comprender el proceso de expansión de las grandes empresas transnacionales en el país.

De este modo, si bien el Estado pasó a constituir la pieza articuladora fundamental del modelo político de dominación bajo el balaguerismo, las finanzas lo fueron del modelo económico. A través de la expansión del capital financiero, se logró entrar a participar de los beneficios del modelo de acumulación a la emergente burguesía industrial, sin mermar los intereses de las fracciones comerciales; fue posible incluso provocar cierta reforma del agro, sin que por ello la oligarquía terrateniente se viera seriamente afectada. Por ejemplo, las llamadas Leyes Agrarias de 1972-1973, al plantear la compra de la tierra a la oligarquía terrateniente, colocaban parte de sus valores en bonos cambiables, que a la larga se traducirían en la extensión de importantes propiedades terratenientes urbanas, más allá del hecho de que por este camino dicha fracción de la clase dominante entraba a participar de los beneficios del boom de las construcciones, que caracterizó al modelo económico balaguerista. En este proceso cupo al capital financiero un rol determinante. Asimismo, fue a través del canal de las finanzas que se verificó en gran medida la expansión del capital extranjero en el país, canalizando, entre otras cosas, el ahorro interno para fines de la acumulación capitalista monopólica. En este último sentido no es un escándalo afirmar que las finanzas constituyeron, durante el régimen reformista, el canal a través del cual se expresó el proceso de creciente subordinación del capital nativo a la lógica de expansión del gran capital monopólico internacional. Finalmente, es preciso reconocer que las finanzas constituyeron, junto a la actividad especulativa y mercantil, el terreno propicio para el surgimiento de los nuevos estratos sociales y grupos de poder económico, creados a la sombra del poder del Estado y vinculados a la burocracia civil y militar, como a la emergente clase media en expansión.

Capítulo 3

ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y CLASES SOCIALES

Los hombres flaquean, presienten en algún lado su perdición, y siguen adelante como si nada pudiese hacerse. Nadie sabe en realidad qué hacer, a pesar de la cháchara. Los jóvenes se enojan porque no tienen dinero que gastar. Su vida entera depende de gastar dinero, y ahora no tienen para gastarlo. Esa es nuestra civilización y nuestra educación: educar a las masas a depender íntegramente de gastar dinero, para que después no lo tengan.

D. H. LAWRENCE

El amante de lady Chatterley

En este capítulo analizo el proceso de producción y apropiación del excedente económico en la formación social dominicana, concentrándome sobre todo en la dinámica de crecimiento del eje básico de la economía exportadora, que dinamiza el proceso de acumulación capitalista en su conjunto: el sector azucarero.

Procedo luego a estudiar la dinámica del proceso de acumulación, enfocándome, en primer lugar, en el crecimiento del PIB, su composición y sus cambios sectoriales. A seguidas, discuto la lógica económica de los modelos de acumulación de capital por medio del comportamiento del producto, el ahorro y la inversión. Situado en ese punto, estudio la expansión de los mercados y la lógica económica del proceso de explotación de la fuerza de trabajo a través de las remuneraciones salariales y la distribución de las rentas. En la parte final del capítulo analizo los procesos sociales que acompañaron y delinearon el contexto macrosocial del cambio económico, tales como los procesos migratorios y la acelerada urbanización en esos años.

3.1. La producción y distribución del excedente en la economía exportadora

Desde la articulación de la moderna economía exportadora a inicios del siglo XX, la producción azucarera ha constituido el sector estratégico que define las características básicas del proceso de desarrollo capitalista dominicano. De esta forma, el dinamismo global de la economía dominicana ha descansado en su sector externo. Así, los patrones de acumulación de capital de la economía se articulan en torno a dicho sector, dependiendo de las especificidades internas de la repartición del excedente generado por este y los equilibrios de fuerzas políticas en el Estado. Entonces, se hace necesario dilucidar, aunque sea someramente, el papel histórico de la economía azucarera en el proceso de desarrollo capitalista dominicano, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX¹.

En primer lugar, es preciso discutir el papel desempeñado por el sector azucarero en la estructura global de la economía exportadora, como eje dinámico del proceso de acumulación. En segundo lugar, en función de la debilidad histórica de la burguesía dominicana, es necesario situar la importancia cobrada por el Estado, como agente mediador por excelencia del proceso de acumulación de capital. Se plantea, además, discutir cómo ha resuelto históricamente la economía dominicana el problema de la repartición del excedente en función del papel estratégico de su sector exportador y el papel mediador del Estado.

Por razones que discutiré más adelante, los excedentes generados por el sector azucarero han escapado hacia otros sectores de la economía. No es difícil demostrar que prácticamente durante el siglo XX las actividades del corte de la caña no se modernizaron, las inversiones reproductivas en la plantación azucarera no han sido elevadas y la productividad del trabajo en los años objeto de

¹ Sobre el desarrollo de la economía azucarera en el siglo XX lo mejor es el libro de Báez Evertsz sobre la inmigración de braceros (1986) y su estudio sobre la articulación del sector azucarero con el conjunto de la sociedad dominicana y el Estado (1979). Véase, además del clásico libro de Knight (1982), los estudios de Lozano (1976/2016) y Calder (1984) sobre la ocupación norteamericana de 1916, así como el libro de Cassá (1982) sobre la dictadura de Trujillo.

estudio ha permanecido estática. Puede pensarse que ello obedece a los bajos niveles de beneficios obtenidos por las corporaciones azucareras desde los años cincuenta hasta nuestros días, pero creo que existe la suficiente evidencia como para poder afirmar, por el contrario, que la actividad azucarera ha generado significativos volúmenes de excedentes.

Según Cassá² la tasa promedio de beneficios en la industria azucarera entre los años 1945-1953 fue del 33.5 %; conforme a mis propios cálculos entre los años 1950 y 1960 fue del 40.06 %. Este autor argumenta que en el período 1945-1953 la tasa de explotación fue alrededor del 82.2 %; de acuerdo con mis propias estimaciones en el período 1950-1960 establecen una tasa de explotación de cerca del 98.4 %. Si bien es cierto que entre 1962-1966 la industria azucarera en su conjunto registró pérdidas por aproximadamente 236 millones de pesos, a partir de 1967 la situación se modifica. En 1971 la industria azucarera proporcionaba ganancias netas en el orden de los 21 millones de pesos y en el período 1971-1973 la tasa media de ganancia del sector alcanza el 19.5 %. Pese a las fluctuaciones cíclicas, la tendencia histórica demuestra la capacidad de la industria azucarera para la generación de un significativo *quantum* de excedentes, aun cuando en términos empresariales esta situación en determinadas coyunturas haya determinado una escasa o nula rentabilidad³.

El drenaje de los excedentes producidos por el sector azucarero hacia otros sectores de la economía es explicado por Corten a partir del predominio del enclave extranjero en la actividad azucarera, sobre todo desde la Primera Ocupación Norteamericana, de 1916-1924, cuando los sectores de las clases dominantes locales desplazan el campo de sus inversiones hacia las actividades comerciales y especulativa. Sostiene Corten que:

² Cassá (1982).

³ Sobre esto último véase ONAPLAN (1977). Lo referido no quiere sostener que no ha habido importantes inversiones en el sector azucarero, por lo menos en el período 1950-1970. Ejemplo de ello fue la creación del Central Río Haina en 1952 y las inversiones del Grupo Vicini en la década de los setenta. En todo caso, estas inversiones no han contribuido a incrementar la productividad del trabajo agrícola, sino que al localizarse principalmente en las áreas fabriles de la plantación se han encaminado sobre todo a elevar la capacidad de molienda y producción. Véase a Báez Evertsz (1979 y 1986).

[...] tal desplazamiento [...] va a privar al sector azucarero de todo capital industrial: fenómeno decisivo puesto que va a obligar a fijar la productividad y la división técnica del trabajo en el nivel de los molinos de azúcar. Esta situación no puede mantenerse sin una regresión hacia las formas menos evolucionadas de organización social de la producción [...]⁴.

El argumento de Corten simplifica la complejidad del problema de la repartición del beneficio capitalista en la actividad azucarera. En primer lugar, este argumento no permite incorporar la cuestión de las alianzas de clase en el Estado en función de las cambiantes coyunturas políticas y económicas, a partir de las cuales se definen las posibilidades de distribución del excedente. La consecuencia de este enfoque es que se infieren como características de una determinada estructura económica y del sistema de división del trabajo que le es consecuente, lo cual no es más que el resultado de particulares equilibrios de fuerza entre la burguesía imperialista, el Estado y la burguesía compradora local. Naturalmente, un enfoque de esta naturaleza, más allá de su tono economicista, encuentra serias dificultades para establecer los vínculos entre la economía en su conjunto, su subsector azucarero y la sociedad global; y su tono estructuralista le impide la adecuada ponderación de los cambios históricos que afectan las relaciones de la industria azucarera con el resto de la sociedad global y las posiciones de las distintas clases sociales ante esta⁵.

⁴ Corten (1973), p. 54. Independientemente de las críticas que en otro parte (1976) le he planteado a este argumento, sobre todo porque no logra establecer con claridad las imbricaciones entre el trabajo propiamente agrícola y el fabril en la actividad azucarera, en lo que respecta a la dinámica de la repartición del excedente esta tesis sobresimplifica los hechos. Es cierto que se verifica el desplazamiento de las ganancias de la burguesía local de la esfera productiva azucarera hacia la esfera comercial, pero esto tiene lugar en condiciones distintas a las propuestas por Corten y con otros atenuantes, como discuto en este libro.

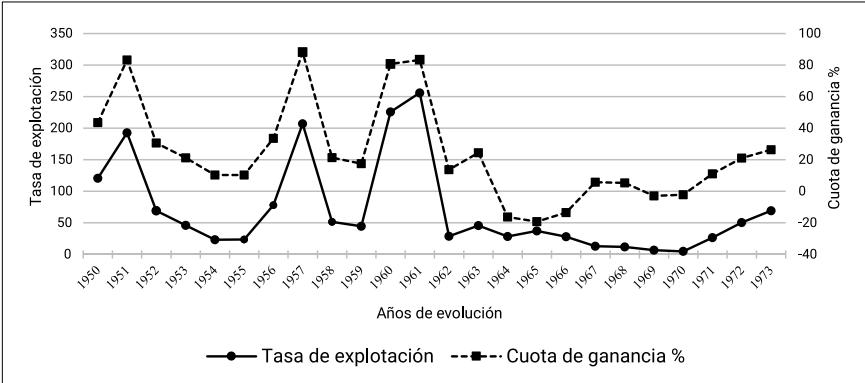
⁵ Para un análisis del problema de la repartición del excedente económico y sus efectos en el proceso de desarrollo véase a Baran (1968).

Cuadro 3.1
**VENTAS, GANANCIAS, MASA Y CUOTA DE GANANCIA
 Y DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA AZUCARERA:
 1950-1973**

Años	Ventas (Valor constante)	Masa de ganancias (Valor constante)	Cuota de ganancia %	Tasa de explotación
1950	27,069,510	8224,225	43.6	120.9
1951	45,579,990	20704,084	83.2	192.8
1952	41,123,912	9,671,718	30.7	69.4
1953	39,090,282	6,841,667	21.2	46.0
1954	36,230,836	3,431,572	10.4	23.4
1955	40,266,920	3,761,595	10.3	23.8
1956	65,018,745	16,332,808	33.5	78.0
1957	103,610,205	48,556,771	88.2	206.9
1958	68,130,724	11,963,936	21.3	51.6
1959	62,424,971	9,364,571	17.6	44.8
1960	145,317,211	64,919,102,	80.7	225.7
1961	80,187,120	53,686,765	83.3	256.1
1962	116,498,950	14,024,433	13.7	29.0
1963	100,155,434	23,980,084	24.5	45.8
1964	100,994,562	-19,705,272	-16.3	28.5
1965	54,547,569	-13,000,102	-19.2	37.3
1966	78,078,796	-12,082,343	-13.4	28.2
1967	102,752,848	5,657,582	5.8	13.0
1968	84,732,604	4,317,005	5.3	11.8
1969	120,545,941	-3,677,245	-2.9	6.8
1970	156,337,927	-3,455,549	-2.1	4.8
1971	214,091,087	-21,534,029	11.1	26.8
1972	269,555,361	47,064,285	21.1	50.5
1973	302,847,869	63,137,297	26.3	69.4

FUENTE: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE): *Estadística Industrial de la República Dominicana* (boletines anuales), 1950-1973.

Gráfico 3.1
VENTAS, GANANCIAS, MASA Y CUOTA DE GANANCIA
Y DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA AZUCARERA:
1950-1973



FUENTE: Ventas, ganancias, masa y cuota de ganancia y de explotación en la industria azucarera: 1950-1973.

Comencemos por este último problema. La tesis de Corten explica solo parcialmente el drenaje de excedentes sufrido por la industria azucarera durante la primera mitad del siglo XX, puesto que en manos de las corporaciones extranjeras el drenaje de excedentes no lo decide un grupo económico local. Sin embargo, no por el predominio de las corporaciones extranjeras en la economía azucarera la actividad mercantil de los grupos burgueses locales se encuentra desconectada de la lógica económica que preside el funcionamiento de la empresa azucarera. Por el contrario, como he expuesto en otra parte⁶, la expresión mercantil de la burguesía local responde a necesidades determinadas en gran medida por la expansión del enclave azucarero.

La expansión de los modernos centrales azucareros demandaba bienes de capital, requería de géneros alimenticios para sus trabajadores y se apoyaba en una compleja infraestructura de servicios localizada sobre todo en los puertos y ciudades del Este del país, cercanas a las plantaciones azucareras, como San Pedro

⁶ He desarrollado esta tesis en mi libro sobre la primera ocupación norteamericana de 1916 (1976/2017).

de Macorís, aunque también la dinámica descrita contribuyó a acelerar el proceso de urbanización en Santo Domingo. De este modo, la demanda de la economía azucarera de bienes de capital, alimentos y servicios activó el surgimiento de una burguesía importadora relativamente significativa, la cual logró apoyarse en los bancos extranjeros, los que en su momento apuntalaron la expansión del enclave azucarero.

Entre los intereses bancarios, los del comercio importador y los azucareros, se estableció una estrecha correspondencia, afianzada en mecanismos económicos precisos, fruto de un esquema de acumulación que, si bien no lograba encontrar una reinversión reproductiva del excedente azucarero en la economía interna no por ello marginaba absolutamente a las clases dominantes locales respecto a los beneficios de este esquema de acumulación. Esto era indicativo del grado de subordinación de las clases dominantes locales a los intereses del gran capital internacional, representado por las grandes corporaciones azucareras y el capital bancario extranjero. En este proceso la mediación estatal jugaba un papel determinante, puesto que constituía la instancia reguladora de la relación entre las clases dominantes locales y el capital extranjero azucarero y bancario.

Aun cuando el enclave azucarero pautaba el dinamismo esencial de la economía de exportación, una fracción de la burguesía local permaneció controlando renglones significativos del comercio exterior en torno a la producción y comercio de café, cacao y tabaco⁷. Fue sobre estos sectores de la economía que Trujillo logró apoyar gran parte del proceso de acumulación originaria desatado a partir de 1930 hasta los albores de la Segunda Guerra Mundial. A través de un sistema de elevadas tasas impositivas al comercio exportador e importador, y del virtual monopolio de

⁷ Para un análisis de la economía exportadora tradicional dominicana de base campesina o capitalista lo mejor sigue siendo el libro de San Miguel sobre el campesinado del Cibao (1995). Martínez Moya (2011) sistematiza la información estadística general sobre la economía azucarera. Véase además a Muto (2014), B. J. Bosch (2016) y Lozano (1976/2016), que sistematizan la información estadística sobre las exportaciones tradicionales y las importaciones en el período 1900-1930. Cassá (1975) sistematiza información estadística hasta principios de la década de los sesenta del siglo XX.

los mecanismos de distribución en el reducido mercado interno, Trujillo logró asegurar el control de gran parte de los beneficios generados por la coyuntura de buenos precios del comercio exportador en los años cuarenta. Gracias a esto, en la década de los cincuenta, Trujillo pudo disponer de los suficientes capitales como para proponerse un reordenamiento sustancial de las relaciones entre el enclave azucarero, el Estado y los intereses del monopolio Trujillista. Ello culminó con la compra por parte de Trujillo de la mayoría de los ingenios radicados en el país y en manos extranjeras y la construcción del Central Río Haina en 1952. La acción de Trujillo determinó una modificación del patrón de distribución del excedente azucarero, definiendo así una nueva situación que abría posibilidades alternativas de desarrollo que el anterior modelo de crecimiento capitalista con predominio de enclave impedía, pues ahora el control de las principales arterias de la economía azucarera permitía a Trujillo potenciar un proceso de acumulación en el área industrial urbana, el cual apoyaría una expansión relativa del mercado interior⁸.

Bajo las condiciones descritas, el sector azucarero produjo gran parte de los excedentes con los cuales se financió el despegue de la industrialización por sustitución de importaciones⁹ en su primera fase (1940-1961). Sin embargo, la decisión de orientar el excedente azucarero hacia las tareas del crecimiento interno fue eminentemente política, apoyada en un dominio tal del Estado por parte de Trujillo que le permitió no solo transferir parte del excedente generado en el sector tradicional exportador hacia las tareas del

⁸ Para los detalles de este proceso, véase a Cassá (1982). Véase además a Ascuasiati (1972) sobre las implicaciones para el proceso de desarrollo dominicano en su conjunto, y a Gómez (1977), quien analiza la idea de la acumulación originaria como condición del despegue de la industrialización. El libro de Moya Pons (1992) sobre el proceso de industrialización analiza con claridad los problemas enfrentados por la sustitución de importaciones bajo la dominación trujillista.

⁹ Para el debate sobre el despegue en el estudio de la industrialización debe verse a Gerschenkron (1968). Benetti (1976) discute la teoría económica del despegue. Sutcliffe (1978) analiza el problema en el marco del debate sobre el imperialismo moderno. Para el caso latinoamericano debe verse a Fajnzylber (1983) y Bulmer-Thomas (1998). Debe verse el libro de Maria da Conceição Tavares (1980) sobre la experiencia brasileña de industrialización.

crecimiento interno, sino también marginar a la burguesía local del control del proceso de expansión del mercado interior y de la industria sustitutiva de importaciones.

Vemos que en sí misma la actividad azucarera no bloquea nada, todo depende de la naturaleza económica, social y política del grupo que acumula capitales en el sector. En manos extranjeras, la industria azucarera articulaba un esquema que drenaba excedentes para las inversiones reproductivas de la plantación, bloqueaba el desarrollo del mercado interno y dificultaba las posibilidades de la industrialización. Tras su control nacional, se definía el potencial de la expansión del mercado interior y de la industrialización por sustitución de importaciones¹⁰.

Esto se encuentra estrechamente relacionado con la situación del agro, cuya rígida estructura de tenencia de la tierra, atraso tecnológico y permanente drenaje de sus excedentes a favor del capitalismo urbano, se convertían en requisitos de un proceso de industrialización sumamente débil, apoyado en un estrecho mercado interior. La rigidez de los precios agrícolas no impidió sin embargo que la oferta agropecuaria, desde mediados de la década de los cuarenta hasta finales de la década de los cincuenta cubriera en lo esencial la demanda urbana, lográndose con ello que el valor de la fuerza de trabajo se mantuviera estable en las ciudades. Indudablemente esto implicaba que gran parte de los costos de la industrialización se transfirieran hacia la economía agraria. Para lograr esto último se requería no solo de capitales, sino también de una voluntad política que permitiera imponer en el agro una estrategia de subordinación de los intereses de la tierra y el comercio a las tareas de la industrialización. En gran medida el Estado trujillista solucionó esta situación al precio del despotismo político¹¹.

¹⁰ Véase ONAPLAN (1966), que analiza con claridad este punto.

¹¹ Este complejo proceso en el que en el mundo rural se impuso una lógica despótica que sin embargo logró el consenso del campesinado es analizado con acierto por Turits (2003). Vale la pena la comparación con el debate entre Rosario Romeo y Gerschekron (1968), a propósito del *Risorgimento* italiano y la persistencia del atraso de la agricultura italiana en el sur.

Este modelo económico hizo crisis a partir de 1958. Tras la desaparición de Trujillo en 1961, el modelo de acumulación de capital organizado sobre esas bases comienza a redefinirse al dar paso a otras estrategias de acumulación de capital, aun cuando el eje agroexportador continuó representando la variable dinámica básica. A partir de 1961 el hecho más importante es, sin lugar a duda, el paso a manos del Estado de las áreas económicas industriales y azucareras ejes de la acumulación y hasta ese momento propiedad de Trujillo y su entorno familiar.

Más allá de la crisis de hegemonía en la coyuntura política de los años 1961-1965, el reordenamiento de los equilibrios políticos en el Estado y la emergencia de las masas populares urbanas como actores políticos activos, alteraron el tradicional patrón sobre el que hasta ese momento había venido descansando la dinámica de la acumulación de capital en el sector azucarero. En primer lugar, las empresas azucareras de Trujillo, ahora en manos del Estado, pasaron a ser objeto del clientelismo político y el peculado burocrático, con lo cual la racionalidad empresarial que había ordenado su gerencia en los años anteriores quedaba minada, colocando así a dicha industria en una situación de permanentes déficits. A esto contribuiría el propósito oligárquico de traspasar las industrias del Estado a manos del sector privado, para lo cual era un objetivo estratégico demostrar que en manos del Estado las empresas del emporio trujillista irían a la bancarrota económica. El otro elemento decisivo que enfrentaba la industria azucarera en el período de crisis hegemónica entre 1961 y 1966 es el reordenamiento de la relación capital/trabajo. Bajo las nuevas condiciones políticas, las clases trabajadoras del sector azucarero lograron prácticamente duplicar sus remuneraciones, como ya se ha discutido¹². Este último elemento alteraba profundamente el patrón de explotación de la fuerza laboral sobre el que había descansado el desarrollo de la industria azucarera durante toda la Era de Trujillo, poniendo a peligrar así las bases de la acumulación para el con-

¹² Por ejemplo, si en 1946 el salario mínimo en el corte de la caña era de RD\$ 0.55, en 1962 se elevó a RD\$ 1.25.

junto de la burguesía, la cual, por lo demás, en las nuevas circunstancias pasaba a ejercer el control directo del Estado. El conjunto de políticas restrictivas del salario que se implementarían a partir de 1966 respondió, en gran medida, a la necesidad de solución de esta contradicción, orientándose en tal virtud hacia el restablecimiento de la dinámica de la acumulación en el eje básico de la economía: la producción azucarera.

En la coyuntura de los años 1961-1965, con el breve interregno de los siete meses de gobierno de Bosch en 1962-1963, el predominio de la alianza oligárquica terrateniente y comercial en el Estado, implicó que los excedentes azucareros de las empresas estatales fueran movilizados hacia “tareas improductivas” que beneficiarían primordialmente a los grupos importadores. Con esto, objetivamente, se frenaba el impulso a la industrialización, sostenido en el período anterior, precisamente con el apoyo del sector exportador azucarero. En esta perspectiva, en la coyuntura 1961-1965, en el sector azucarero estatal se verificó un verdadero drenaje de excedentes hacia el sector comercial y bancario de la economía. En cierto modo, con el control del Estado, la alianza oligárquica intentaba afirmar un modelo de crecimiento que se apoyaba en las empresas estatales, pero estratégicamente perseguía su estrangulamiento, aun cuando ello condujera a una verdadera crisis de la economía dominicana en su conjunto, al frenar el desarrollo de los sectores productivos, sobre todo industriales, y sostener la estructura del atraso rural¹³.

En este contexto debe contemplarse la importancia estratégica del reformismo balaguerista y el particular estilo de dominación que dicho régimen implicó. En tal virtud, es necesario reconocer que el saneamiento de las empresas estatales, realizado por el reformismo en su primer gobierno (1966-1970), más que resolver la cuestión del equilibrio fiscal en el Estado, conducía a mediano

¹³ El análisis de la relación entre el proceso de industrialización y el atraso rural se presenta en el Capítulo 4 de este libro. Para un debate más general, véase a Kemp (1979) y Sereni, *et al.* (1970). En el caso latinoamericano, véase a Bulmer-Thomas (1998), Fajnzylber (1983). Prebisch (1961 y 1981) ha teorizado este problema en el marco de su argumento general sobre los obstáculos a la industrialización latinoamericana.

plazo a una relativa restricción y racionalización económica del sector predominante de la burguesía dominicana: su fracción comercial, exportadora e importadora.

De esta manera, tras los controles cambiarios en materia monetaria, el reformismo procedía a disponer del control de gran parte de los excedentes generados por el sector exportador, incluidas las propias empresas estatales. En tales condiciones, el Estado tomaba de nuevo la conducción del proceso de industrialización y en general de modernización de la economía, pero ahora sostenido en un nuevo equilibrio de fuerzas políticas y bajo un reordenamiento de los lazos con el gran capital internacional¹⁴.

Esta estrategia de drenaje de excedentes del sector exportador hacia la actividad industrial, sostenida por el Estado a través de los controles cambiarios y las políticas de financiamientos bancarios e incentivos industriales, tenía serias limitaciones de tipo estructural. De hecho hacía depender el proceso de industrialización de las fluctuaciones cíclicas del mercado mundial, dependencia que a su vez reportaba varias consecuencias: 1) en tales condiciones, las posibilidades de desarrollo industrial se encontraban sujetas al proteccionismo estatal, lo que estimulaba el monopolio; 2) sin embargo, paradójicamente, debido a que gran parte de los ingresos fiscales descansaban en los impuestos a las importaciones, el Estado, pese a su política de industrialización, se veía forzado a conceder un significativo espacio económico al sector importador, lo que en términos mediatos implicaba una restricción al modelo de crecimiento por sustitución de importaciones.

El argumento que sostengo es que, tras el reformismo, desde el Estado se estimuló un proceso de relativa modernización de la burguesía tradicional dominicana, que determinó un cambio en sus patrones de comportamiento político y económico. Al estimular la industrialización sobre las premisas referidas, el Estado facilitaba la estructuración de un sector industrial relativamente importante, aunque mantuviera su dependencia del

¹⁴ Sobre las relaciones entre la burocracia de Estado y las empresas transnacionales en América Latina, véase a Cardoso (1972).

capital comercial, del gran capital internacional y del propio Estado a través del papel de intermediación de la banca, como se verá en el próximo capítulo. El Estado se veía así forzado a permitir un amplio margen de expansión económica a los grupos importadores, al tiempo que conducía al sector exportador a la articulación de estrategias alternativas que optimizaran su participación en el control del excedente generado en la economía exportadora, del cual el Estado tenía el comando efectivo. Como analizaré más abajo, esto determinó que importantes núcleos de exportadores establecieran estrechos vínculos económicos con la banca privada nacional e internacional. Tras su alianza con la banca, la burguesía exportadora sufrió importantes transformaciones modernizadoras, que le facilitaron renegociar con el Estado sus márgenes de participación en el control del excedente exportador.

3.1.1. El dinamismo de la economía exportadora en el período 1966-1978

No es mi propósito en este momento realizar un análisis del proceso de industrialización por sustitución de importaciones en el largo período 1930-1978, o en el más corto de 1966-1978, como tampoco discutir en detalles el crecimiento interno que les caracterizó. Me limitaré a formular algunas ideas relativas a la naturaleza económica del proceso industrializador bajo el bala-guerismo y su relación con el crecimiento del mercado interno, recuperando algunas ideas comparativas con el modelo trujillista de industrialización.

El primer aspecto que resalta es que durante el período 1966-1978, a diferencia de los años cincuenta del siglo XX, el crecimiento industrial se encuentra asociado al gran capital extranjero, el cual no solo se ha expandido en el sector exportador (minería y azúcar), sino también ha cubierto importantes departamentos de la producción de cervezas, rones, cigarrillos y alimentos¹⁵. En este sentido, la emergencia de una burguesía industrial en los años

¹⁵ En el Capítulo 4 se amplía este análisis.

setenta ha implicado su asociación con el gran capital extranjero. Esta no se establece solo por la vía de la coparticipación extranjera en las inversiones industriales, lo hace también a través de la creciente dependencia del capital industrial del financiamiento bancario. Por ello puede considerarse que en términos globales la industrialización dependiente de los años setenta profundizó la subordinación y atadura al gran capital monopolista extranjero.

El segundo aspecto que debemos considerar es el relativo a las relaciones entre el capital industrial y el comercial. A diferencia del esquema trujillista de crecimiento industrial por sustitución de importaciones, bajo el balaguerismo las restricciones a la burguesía comercial en materia de control de excedentes definidas por el Estado no impidieron la expansión de los sectores importadores, como ya se ha expresado arriba. Esto, asociado a la gran dependencia del sector industrial del mercado mundial en materia de compra de maquinarias, pago de *royalties* y compra de materia prima, ha determinado que el crecimiento interno observado en la buena coyuntura de precios internacionales de los productos de exportación en los años setenta, de más en más haya determinado una creciente internacionalización del mercado interior, ahondando la dependencia de la economía dominicana del mercado mundial¹⁶.

A la luz de esta dinámica, se redefinió la posición de la economía dominicana en el sistema de división internacional del trabajo y se rearticulaban sobre nuevas bases las relaciones entre el capital extranjero y el Estado. Esto se expresó en el creciente dominio del gran capital monopolístico internacional sobre la economía dominicana, a través de mecanismos financieros o de inversiones extranjeras directas. Este último punto, a su vez, incidió en la determinación de una relativa recomposición de la estructura de la economía exportadora cuya principal característica fue sin duda la importancia adquirida por la minería en la composición general de las exportaciones en el período 1966-1978¹⁷. Ese dinamismo del

¹⁶ Véase a Cardoso y Faletto (1971) y Frobel y Kreye (1981).

¹⁷ Sobre este punto en particular, véase ONAPLAN (1977).

eje agrominero exportador implicó un mayor grado de apertura de la economía dominicana al exterior. En ese sentido, medido en términos del valor de las exportaciones y las importaciones respecto al PIB, el grado de apertura de la economía dominicana al exterior pasó de un 35.5 % en 1966 al 46 % en 1976. Así, con el auge económico de los años 1966-1975 la economía dominicana se hacía más dependiente del mercado mundial. En este momento me interesa destacar la naturaleza de esa dependencia. Para discutir el punto detengámonos en el análisis del cuadro 3.2.

Cuadro 3.2
**INDICADORES DEL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA ECONOMÍA DOMINICANA
1960-1976**

Años	Capacidad de endeudamiento (o préstamos)*	Apertura de la economía al exterior**	Exportaciones/ demanda final	Importaciones/ Oferta final	Inversión bruta/ demanda final
1960	10.1	38.5	21.3	12.4	8.6
1961	10.3	35.9	19.8	11.3	6.4
1962	1.4	42.9	18.3	17.2	9.1
1963	-4.9	41.5	14.8	18.8	12.0
1964	-7.6	42.5	14.0	20.0	13.6
1965	-1.3	33.9	13.8	15.0	7.8
1966	-6.6	35.5	11.9	17.4	11.6
1967	-4.3	37.2	13.6	17.2	12.0
1968	-6.1	39.0	13.4	18.4	12.0
1969	-6.5	37.7	12.7	18.1	13.6
1970	-6.9	39.9	13.3	19.0	15.3
1971	-6.9	42.3	14.1	19.7	16.0
1972	-3.1	43.0	16.8	18.7	18.0
1973	-1.5	42.7	16.8	18.1	19.2
1974	-7.4	47.7	15.7	21.6	19.8
1975	-8.4	45.7	14.6	21.3	21.6
1976	-3.5	46.0	17.0	20.0	20.0

*Exportaciones-importaciones/PIB; **Exportaciones + importaciones/PIB

FUENTE: Banco Central. Elaboración del autor.

Si bien los exportadores eran los generadores de los excedentes básicos de la expansión de la economía, su participación en la demanda final en los años 1966-1976 siempre fue más restringida que la de las importaciones en la oferta final. Paralelo a este

proceso, se elevó la participación relativa de la inversión bruta interna en la estructura de la demanda final. ¿Qué significa esto? A mi entender expresa un modelo claro: las exportaciones financiaban las importaciones, pero también servían de fuente de acumulación a los sectores productivos internos, independientemente de que ello se verificara en un contexto de continuo deterioro y crisis de la balanza de pagos¹⁸. Expresa, además, que el crecimiento interno estaba forzado estructuralmente a apoyarse en el dinamismo externo, pero el precio no solo era la dependencia, sino la especialización de nuestra economía de una manera tal que, de hecho, significaba a la larga un bloqueo estructural a la expansión del mercado interno. En este sentido, cuando hizo crisis el eje agrominero exportador, la parálisis del crecimiento interno se hizo casi automática: su fragilidad se evidenciaba de un modo trágico.

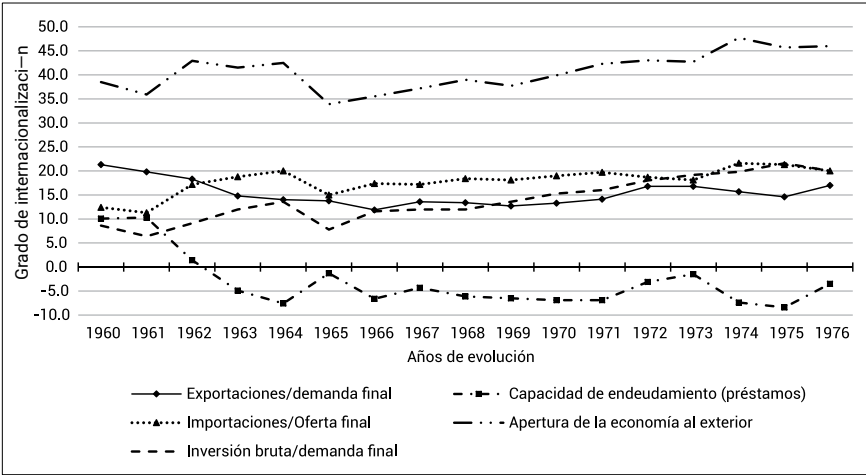
¹⁸ Pese a que el deterioro de la balanza de pagos dominicana comienza a observarse desde 1962, donde tuvo un saldo negativo de 10.4 millones de pesos, es sobre todo a principios de la década de los setenta donde el déficit se acentúa. Ahora bien, pese a que desde 1966 el déficit de la balanza comercial sistemáticamente se incrementa, es sobre todo el déficit de la balanza de servicios el principal responsable de los desequilibrios globales de la balanza de pagos a lo largo del período 1960-1978. En este proceso, las transacciones de capital en la balanza de pagos experimentan un saldo positivo sistemático desde 1966 hasta 1978. El principal responsable del crónico desequilibrio de la balanza de pagos en el período en cuestión son las amortizaciones a corto y mediano plazo de la deuda externa tanto pública como privada, los pagos por concepto de fletes, acarreos, royalties, etc., así como las remesas de utilidades de las inversiones extranjeras en el país, las cuales a partir de los años setenta representan un saldo negativo sistemático en relación con las inversiones directas. Para mayores detalles de este proceso, debe verse a Ceara (1984) y Beltré Melo, Suero *et al.* (1980).

Cuadro 3.3
EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS PRINCIPALES
 (En millones de RD\$)
1966-1979

Años	Azúcar y otros derivados	Café y sus manufacturas	Cacao y sus manufacturas	Tabaco y sus manufacturas	Productos agrícolas menores	Minerales en bruto	Otros	Totales
1966	80.5	21.0	11.2.	6.6	1.5	10.6	5.3	136.7
1967	94.3	17.0	12.1	10.3	2.5	13.1	6.9	156.2
1968	92.2	17.9	13.9	11.2.	4.3	12.8	11.2.	163.5
1969	98.9	21.2	20.1	12.6	5.2	14.7	11.4	184.1
1970	114.4	28.9	19.1	14.0	0.3	15.1	21.6	213.3
1971	147.2	23.3	12.5	20.0	0.1	16.5	23.3	142.9
1972	175.5	29.7	16.0	28.5	1.1	61.8	34.8	347.4
1973	205.1	46.4	19.5	29.8	1.3	98.3	41.6	442.0
1974	348.1	45.6	48.0	35.5	9.1	112.4	33.9	636.6
1975	594.6	43.2	29.0	35.6	10.5	147.1	33.8	893.8
1976	287.6	100.6	44.9	39.3	-	181.3	62.6	716.3
1977	247.6	184.6	93.1	28.9	-	168.8	57.4	780.4
1978	209.9	96.8	85.5	45.7	-	169.1	68.5	675.5
1979	232.2	157.7	73.1	54.9	-	272.2	78.5	868.6

FUENTE: Banco Central: Boletines Mensuales.

Gráfico 3.2
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA ECONOMÍA DOMINICANA
1960-1976



FUENTE: Indicadores del grado de internacionalización de la economía dominicana: 1960-1976.

Pese a que el valor de las exportaciones logró elevarse en el período 1966-1978, sobre todo en los años 1972-1976, como revela el cuadro 3.3, el consecuente incremento de la participación de las exportaciones en el PIB obedeció sobre todo a la subida de los precios en la favorable coyuntura del comercio exterior en los años 1968-1975. En dicha coyuntura, el eje agroexportador en su conjunto continuó en condiciones tecnológicas y productivas atrasadas. En los casos del café, el tabaco y el cacao no solo se mantuvo estancada la productividad promedio, sino que el grueso de los excedentes generados no contribuyó en lo absoluto a la modernización productiva del sector, sino que fue a parar a las manos de la burguesía compradora rural. Esto en gran medida era el resultado de que la producción de estos rubros estaba en manos del sector campesino, cuya productividad era baja y elevado su atraso tecnológico, como también del dominio que sobre la comercialización de los productos del agro tenían los comerciantes e intermediarios sobre los productores rurales. Esto de hecho drenaba el excedente del sector campe-

sino productor, y en general de la economía exportadora, hacia otras esferas de inversión terratenientes o capitalistas urbanas, dificultando así a los productores rurales sus posibilidades de acceso al crédito bancario comercial, minando su potencial de inserción en el mercado interno como consumidores¹⁹.

En el cuadro A.5 (Apéndice estadístico) se evidencia claramente la situación. Muestra que, si bien el *quantum* de las exportaciones tradicionales aumentó, fue a tasas no tan altas, incluso en el caso del cacao la productividad física se mantuvo prácticamente estancada. No sucedió así con los precios, los cuales, en el caso del café, se elevaron en más del 45 %, mientras que en los del tabaco y el cacao aumentaron en 45 % y 71 %, respectivamente.

En el caso del azúcar se observa, en lo que respecta a la cuestión de la productividad, una situación semejante en el período 1960-1978. De esta manera, si entre 1961 y 1966 la productividad promedio en el sector azucarero era de 65.7 toneladas métricas por hombre ocupado, en el período 1968-1975 fue de 11.2. El estancamiento productivo del sector era evidente.

De esta manera, la coyuntura de buenos precios azucareros no fue aprovechada para la modernización de la planta industrial y el sistema de corte de la caña²⁰; simplemente se extendieron las áreas de corte de la caña, se intensificó el uso de la fuerza laboral y se redujeron sustancialmente los salarios obreros.

La otra cuestión que debe debatirse es la de los términos de intercambio. En general, durante el período 1966-1975 la favorable coyuntura de precios de los productos de exportación significó una mejoría significativa de los términos de intercambio. Esto permitió definir una cómoda posición del país en el mercado mundial, abriendo las posibilidades de movilización de importantes excedentes de

¹⁹ Es cierto que de todos los cultivos agropecuarios los más favorecidos con el crédito bancario (estatal y privado), además del arroz, fueron los productos tradicionales de exportación, pero en este último caso favorecía sobre todo al capital comercial e intermediario, no tanto al productor rural directo. En el caso del arroz, dichos préstamos se dirigieron y fueron controlados sobre todo por la burguesía arrocería, no tanto por el sector campesino. Véase a Dore (1981), D'Oleo (1983) y Fernández (1983).

²⁰ Para los detalles de esa problemática, véase PREALC (1982).

las tradicionales tareas relativas al establecimiento del equilibrio de la balanza de pagos hacia inversiones productivas internas. Sin embargo, es necesario precisar mejor el asunto. Es cierto que desde 1962 los términos de intercambio de la economía dominicana con el exterior venían siendo desfavorables, observándose en los años 1962-1969 una ligera recuperación del índice de precios de intercambio. Sin embargo, en los años 1970-1975, donde tiene lugar propiamente el auge de las exportaciones bajo el régimen balaguerista, dicho índice experimenta un notable descenso, salvo el año 1975 en que obviamente la súbita alza de los precios del azúcar lo elevaron a 113.3, con una ganancia de intercambio de 138.3 millones de pesos. Resulta interesante que es precisamente en los años 1966-1975 donde la economía dominicana logra menores pérdidas por efecto de la relación de intercambio y eso coincide con el momento de auge de la economía exportadora. Cuando la economía exportadora cae en crisis, el deterioro de los términos de intercambio fue tal que, en apenas tres años, entre 1976 y 1978, la economía dominicana tuvo una pérdida de alrededor de 257.5 millones de pesos por ese concepto. Pese a la favorable coyuntura de los años 1966-1975, y más específicamente de 1970-1975, el deterioro de los términos de intercambio, como tendencia histórica a largo plazo, fue sistemático en los años 1960-1978, manifestando así la vulnerabilidad estructural de este modelo de crecimiento capitalista dependiente²¹.

Cuadro 3.4
EXPORTACIONES Y TÉRMINOS DE INTERCAMBIO
(En millones de RD\$)
(Valores constantes precios de 1962)

1960-1978		
Períodos	Promedio de las exportaciones anuales	Ganancias o pérdidas de intercambio
1960-1965	175.3	(30.0)
1966-1969	166.9	23.9
1970-1975	225.2	(32.8)
1976-1978	536.8	(257.5)

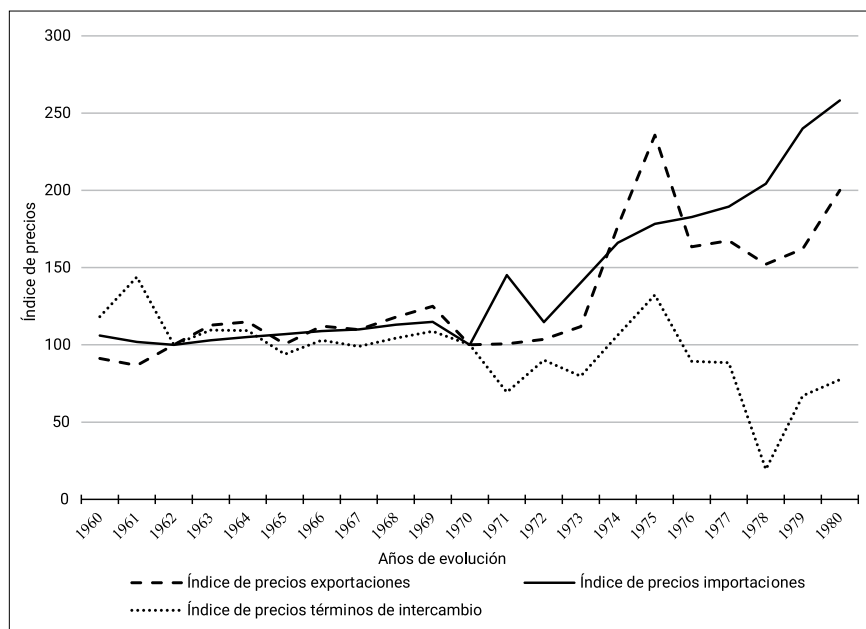
FUENTE: Banco Central: *Boletines Mensuales*. Elaboración del autor.

²¹ Un análisis convincente de este problema lo encontramos en Ceara (1984).

El otro asunto relevante para reconocer aquí es que esta modalidad de crecimiento interno, apoyada en la dinámica del eje agrominero exportador, internacionalizó las bases del mercado interior, en la medida en que permitió una gran dinamización de la economía importadora, al tiempo en que el crecimiento industrial por sustitución de importaciones profundizaba su relación de dependencia de mercado, financiamiento y tecnología del gran capital internacional.

Por ello afirmo que el proceso de crecimiento capitalista observado en el período 1966-19 78 hizo más dependiente a la economía del mercado mundial, al tiempo que no contribuía a la transformación modernizadora de las fuentes básicas del excedente económico: la industria azucarera y la economía agraria.

Gráfico 3.3
ÍNDICE DE PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES, IMPORTACIONES
Y TÉRMINOS DE INTERCAMBIO:
1960-1980



FUENTE: Índice de la relación de intercambio (a precios de 1962; 1960-1980).

3.1.2. Las transformaciones del PIB y el crecimiento capitalista en el período 1966-1978

Una primera aproximación analítica al proceso de acumulación de capital en el período 1960-1978 la proporciona el estudio del PIB: su composición, dinamismo y transformaciones.

A lo largo del período 1962-1975, el PIB prácticamente se triplicó al pasar de 886 millones de pesos en 1966 a 2,001 millones en 1975. Su ritmo de crecimiento fue sistemático, como se aprecia en el cuadro 3.6. Sin embargo, pese a esto y a la relativa modernización de la economía dominicana en el período bajo estudio, en lo esencial el PIB ha conservado sus características básicas. A mi manera de ver, esto expresa tres importantes hechos económicos y sociales: a) el primero y más evidente de todos nos obliga a reconocer en el incremento del PIB un efectivo proceso de crecimiento del mercado interior. b) Esto nos conduce al segundo aspecto de la cuestión: este crecimiento del mercado interior no ha conllevado una efectiva transformación de la economía dominicana; por el contrario, pese a su modernización en algunos sectores, la industrialización por sustitución de importaciones y el dinámico crecimiento del proceso de urbanización, la economía dominicana continuaba siendo esencialmente agraria y exportadora. c) Arribamos aquí al tercer aspecto del problema: el crecimiento del PIB se ha apoyado realmente en el dinamismo del sector externo y no en el desarrollo de capacidades productivas internas. Así, las buenas coyunturas del comercio exterior estimulan la expansión del PIB. En los períodos de crisis la tendencia del PIB es a la contracción de su ritmo de crecimiento. Veamos más de cerca esta dinámica.

En el análisis de las tendencias de desarrollo del PIB en el período 1962-1975, el primer hecho que llama la atención es la pérdida de importancia relativa de las actividades agropecuarias, unido al práctico estancamiento de su dinamismo. De este modo, las actividades primarias (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) pasan de concentrar el 21 % del PIB en 1966 al 18 % en 1975, mientras a partir de 1966 su dinámica de crecimiento se estanca en un 4 % acumulativo anual, muy por debajo, en todos los casos, de la tasa de crecimiento medio del PIB.

Esto no significa, necesariamente, que el sector agropecuario ha dejado de ser un eje determinante del proceso de acumulación de capital; por el contrario, en la medida en que la economía dominicana se ha expandido “hacia afuera” incrementándose su dependencia del mercado mundial, la importancia estratégica del agro para el desarrollo del capitalismo se ha hecho más fuerte. En este sentido, el estancamiento del agro afecta sobre todo los rubros productivos destinados al mercado interno, aun cuando reconozcamos que la agricultura de exportación apoya en gran medida su racionalidad y éxito económico en el atraso del sector de subsistencia campesino. Según revelan las estadísticas agropecuarias, mientras la producción agrícola para exportación y la destinada al mercado interno con predominio capitalista, como el arroz, han incrementado su producción (aun cuando en dichos sectores no se haya alcanzado un nivel de modernización y eficiencia técnica adecuados), los cultivos destinados al mercado interior con predominio de la producción campesina, como los víveres y el maíz, en el período 1960-1978 manifiestan una clara tendencia al estancamiento²².

Esta situación conduce a una paradoja, consistente en el hecho de que mientras el éxito del sector externo –que ha financiado el dinamismo de los sectores productivos internos de base industrial– se ha apoyado en una estructura agraria relativamente atrasada, con un alto constreñimiento de los ingresos de los trabajadores rurales, en su momento esto ha actuado como una limitante para la expansión del mercado interior. De esta paradoja no puede escapar el sector industrial, sino a riesgo de poner en “jaque” su propia fuente de excedentes, a partir de la cual ha logrado definir un espacio de mercado estable. El punto no radica, ni siquiera, en el hecho de que el agro no genera los suficientes excedentes para financiar su desarrollo ni tampoco en que aun generándolos estos han ido a parar a manos de los grupos industriales urbanos, sino fundamentalmente en que dichos excedentes han venido a

²² Sobre el atraso de la agricultura y la situación de la producción campesina, véase a Bendezú (1982), D'Oleo (1983), Dore (1981) y Aquino González (1978).

robustecer la posición de los sectores monopolistas extranjeros controladores del comercio de exportación, o beneficiarios de este, y a la burguesía compradora local. Con esta situación encuentran un freno no tanto las tareas de la modernización agraria, sino las de la propia industrialización urbana. A esto se han avenido las propias clases dominantes urbanas, ajustándose así a un esquema preservador del atraso²³.

Cuadro 3.5
ÍNDICE DE LA RELACIÓN DE INTERCAMBIO
(A precios de 1962)
1960-1980)

Años	Índice de precios exportaciones	Índice de precios importaciones	Índice de precios términos de intercambio
1960	91.20	106.0	118.3
1961	86.70	101.9	143.9
1962	100.00	100.0	100.0
1963	112.80	103.0	109.5
1964	114.90	105.1	109.3
1965	100.60	107.0	94.0
1966	112.20	108.9	103.0
1967	109.80	110.0	99.0
1968	118.00	113.0	104.4
1969	125.00	114.9	108.8
1970	100.00	100.0	100.0
1971	100.69	145.2	69.3
1972	103.54	114.7	90.2
1973	111.79	140.2	79.7
1974	176.79	166.1	106.3
1975	235.72	178.3	132.3
1976	163.48	182.8	89.4
1977	167.45	189.4	88.4
1978	152.13	204.3	19.4
1979	162.14	240.0	67.0
1980*	200.00	258.2	77.5

*Valor estimado.

FUENTE: Banco Central: *Boletines Mensuales*.

²³ Para el debate latinoamericano de esta problemática, véase de Janvry (1981). En el caso dominicano debe verse a Dore (1979), Crouch (1979) y D'Oleo (1983).

Cuadro 3.6
**TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB POR SECTORES ECONÓMICOS
1962-1975 (*)**

Actividades	Períodos		
	1962-1966	1966-1970	1970-1975
Actividades Primarias:	1.4	4.3	4.7
Agricultura	0.5	4.6	3.5
Ganadería	4.2	3.9	3.4
Silvicultura y pesca	3.8	3.8	-0.5
Actividades secundarias y minería:	2.3	10.4	14.9
Industria	0.6	9.4	10.3
Construcción	9.0	13.4	15.9
Energía	8.1	11.4	11.3
Minería	2.0	11.3	50.0
Actividades terciarias:	4.2	6.5	7.9
Comercio	1.8	7.0	10.1
Transporte y comunicación	7.9	1.6	9.1
Finanzas	6.6	5.8	13.2
Gobierno	4.1	1.6	-0.5
Otros servicios	5.5	3.1	11.3
PIB	4.2	6.5	7.9

(*) Tasas acumulativas porcentuales anuales.

FUENTE: Cuadro 3.7.

Del predominio que adquiere la burguesía compradora en la economía, surge en gran medida el tercer aspecto que merece destacarse, a propósito de las transformaciones del PIB en el período 1960-1978: la importancia estratégica del comercio y la creciente participación de las actividades de servicios en la estructura y composición del PIB. Entre 1961 y 1975 las actividades terciarias incrementan su participación relativa en el PIB en un 9 % al pasar de 41 % en 1962 a 50 % en 1975. En esta dinámica las actividades comerciales han mantenido constante en 18 % su participación relativa en la estructura del PIB a lo largo del período 1962-1975.

La creciente terciarización de la economía reconoce dos grandes momentos: 1) el primero localizado en el período 1962-1966, cuando las actividades terciarias pasan de representar el 41 % a concentrar el 53 % del PIB; 2) el segundo momento cubre el período 1966-1975. En esta última etapa las actividades terciarias, sobre todo las comerciales, estabilizan su posición relativa

en el PIB, coincidiendo con un gran auge y dinamismo de las actividades industriales, mineras y de construcción, paralelo a un brusco descenso de la participación del agro en la composición global del PIB.

Cuadro 3.7
EVOLUCIÓN DEL PIB
(En millones de RD\$, precios de 1962)

ACTIVIDADES	1962		1966		1970		1975	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
PRIMARIAS ⁽¹⁾:	239.5	21.0	253.5	25.2	301.1	23.4	361.9	18.0
Agricultura	170.0	19.2	171.7	17.1	205.6	16.0	230.0	11.5
Ganadería	61.5	6.9	72.5	7.2	84.7	6.6	123.1	6.1
Silvicultura y pesca	8.0	0.9	9.3	0.9	10.8	0.8	8.8	0.4
SECUNDARIAS:	192.8	21.7	211.3	21.2	314.4	24.4	630.6	31.6
Industria	145.1	16.4	148.0	14.8	212.5	16.5	347.4	17.4
Construcción	27.5	3.1	38.8	3.9	64.2	5.0	134.2	6.7
Energía	9.3	1.0	12.7	1.3	19.6	1.5	33.6	1.7
Minas	10.9	1.2	11.8	1.2	18.1	1.4	115.4	5.8
TERCIARIAS:	454.1	41.3	535.8	53.6	690.5	52.2	1,008.7	50.5
Comercio	159.4	18.0	171.6	17.2	224.5	17.5	364.7	18.2
Transporte y comunicación	44.3	5.0	60.1	6.0	81.9	6.4	126.8	2.3
Finanzas	13.0	1.5	16.8	1.7	21.1	1.6	38.1	1.9
Gobierno	109.8	12.4	129.0	12.9	137.4	10.7	127.3	6.4
Otros servicios ⁽²⁾	127.6	14.4	158.3	15.8	205.6	16.0	354.8	17.6
PIB	886.4	100.0	1,006.6	100.0	1,306.0	100.0	2,001.2	100.0

⁽¹⁾ No incluye minería.

⁽²⁾ Incluye propiedad de vivienda.

FUENTE: Banco Central, *Cuentas Nacionales*.

En términos de clases, el gran beneficiario del proceso de terciarización de la economía ha sido la burguesía importadora, aun cuando también es necesario reconocer como favorecidos a los grupos intermediarios locales ligados al mercado interno, sobre todo a los grupos mercantiles monopolistas del alto comercio en Santo Domingo y Santiago, controladores de la distribución interna de los bienes importados, como de la comercialización de la producción agropecuaria para consumo interno. Este proceso, como veremos, se ha verificado en estrecho vínculo con la expan-

sión de la banca comercial privada y ha sido su apoyo de mercado la economía urbana en expansión.

Sin embargo, la terciarización de la economía no ha impedido que un significativo sector industrial se expanda de manera dinámica. De este modo, reconocemos que las actividades industriales, pese a concentrar alrededor del 17 % del PIB en el período 1962-1975, se han expandido a ritmos crecientes, muy por encima de la tasa media de crecimiento del PIB. Entre 1966-1970 y 1970-1975 se expandieron a tasas de 9.4 % y 10.3 % contra 6.5 % y 7.9 % del PIB, respectivamente. Este dinamismo ha permitido que las actividades secundarias en su conjunto (industria, construcción, energía y minas) hayan incrementado su participación relativa en la estructura del PIB en un 12 % entre los años 1966 y 1975.

Estas transformaciones son reveladoras de un claro modelo de crecimiento: 1) la burguesía comercial, sobre todo en su expresión importadora, en los años 1966-1975, aun cuando limita su dinamismo de crecimiento, estabiliza una fuerte posición económica y dominio del mercado interior; 2) los sectores ligados a la actividad industrial y la construcción, se expanden dinámicamente, aun cuando no logren disputarle a la burguesía comercial “su dominio de mercado” y su papel hegemónico en el conjunto de la economía; 3) el gran capital internacional tiene una gran expansión en la economía dominicana, sobre todo en los sectores minero y azucarero, aun cuando a partir de los años setenta las empresas transnacionales se comienzan a interesar por determinadas esferas del mercado interno; 4) el sacrificado es el sector agropecuario, que por la vía de la producción para exportación, en una favorable coyuntura de precios internacionales y gracias a la política cambiaria del gobierno central y los controles de precios de los rubros agropecuarios destinados al mercado interno, financia o apoya gran parte del dinamismo de crecimiento de las actividades urbanas vinculadas al proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Este crecimiento, minero, industrial y urbano, se apoyó sobre todo en el Estado y la banca, era altamente dependiente del gran capital financiero internacional y

estaba, en el caso de la minería, directamente controlado por las grandes firmas transnacionales²⁴.

3.1.3. *Las etapas de acumulación*

En el período 1961-1978 pueden distinguirse claramente dos grandes etapas de acumulación de capital en el proceso más general de desarrollo del capitalismo.

La primera etapa cubre el período 1961-1964 y la denomino “modelo oligárquico” de acumulación. La segunda etapa cubre el período 1966-1978 y la denomino “modelo reformista” de acumulación. Para esta última etapa, se pueden reconocer tres subperíodos: 1966-1969, 1970-1975 y 1976-1978.

El período 1961-1964 es de dominio oligárquico de la economía. En este se verifica un práctico estancamiento de las exportaciones, y las importaciones asumen el rol directriz de la dinámica económica. A partir de 1966, tras la llegada de Balaguer al poder, se estructura un modelo de acumulación alternativo, en el cual, como indiqué arriba, podemos distinguir tres subperíodos: 1) una etapa de estabilización de la economía y organización del nuevo modelo de acumulación (1966-1969) en el que las empresas estatales son saneadas, constreñida la expansión de las importaciones, aun cuando las exportaciones, el PIB y la inversión privada no se dinamizan; 2) un período de auge y expansión (1970-1975), en el que las variables dinámicas son las exportaciones, la inversión bruta interna (privada y pública) se dinamiza, al tiempo que las importaciones inician su recuperación, aun cuando crecen a tasas muy por debajo de las exportaciones, el PIB crece a una tasa de 9.4 % acumulativo anual; 3) un período de crisis y contracción (1975-1978) en el que las exportaciones y el PIB se contraen a los niveles del período 1961-1964, reduciéndose notablemente la inversión bruta, sobre todo la privada. Veamos con mayor detalle estos procesos.

²⁴ En la revista *Impacto Socialista* hay abundante literatura sobre la expansión de las empresas transnacionales, sobre todo en el sector minero. En el caso específico de la Falconbridge, debe verse a Deverell (1977). En el caso de la Gulf and Western, véase a Del Castillo, Puig e. al (1975).

El modelo oligárquico (1961-1964)

El profesor Ascuasiati ha resumido con gran precisión la naturaleza del modelo económico del período 1962-1964. Vale la pena citarlo *in extenso*:

En el corto período de tres años se da un modelo bastante extraño para Latinoamérica: la economía crece basada primordialmente en los niveles de inversión privada. Entendemos que dos agentes obran en este crecimiento: 1) los incentivos a invertir, creados por la elevación extraordinaria de la demanda interna, y 2) que al elevarse el nivel de los salarios e iniciarse la organización de los trabajadores, se le hizo necesario al sector empresarial incrementar su eficiencia: desde luego el camino forzado condujo a elevar el grado de tecnificación.

El activador por excelencia, en este período, es la inversión privada, puesto que las exportaciones medran, perdiendo peso respecto a los niveles del producto bruto interno y la inversión pública se reduce en razón de que los recursos públicos son absorbidos por el incremento del gasto, sueldos y salarios.

La remuneración media anual, en términos reales, entre 1961-1962 crece en la industria azucarera al 11.6%; en la industria manufacturera al 11.4% y en el gobierno al 24.8 por ciento.

El resultado de esta expansión monetaria no se hace esperar, el consumo privado en el modelo 1950-1961 se mantiene en 5.5 por ciento, ahora se expande al 12.1 por ciento anual acumulado si nos referimos al período 1961-1964.

Las repercusiones en los niveles de inversión son de tal magnitud que la inversión bruta fija en maquinaria y equipo como en construcciones crece a un 32 por ciento, representando aproximadamente 8 veces el promedio a que crece entre 1966 y 1970, ya que la inversión de los nacionales entre estos años solo lo hace al 4.2 por ciento.

La política económica general, debido a motivos de orden político, se orienta a 'cebar la bomba'; los resultados, en fin, fueron un alza espectacular del consumo privado, de la inversión privada y de las importaciones²⁵.

²⁵ Ascuasiati (1972), pp. 79-80.

Las consecuencias sociales y políticas, y algunos de los resultados económicos de esta situación, los discutí en el primer capítulo de este libro. En este momento me interesa retener la cuestión del excedente, con el cual se financió este modelo de crecimiento. Como se ha discutido, tras la muerte de Trujillo, en mayo de 1961, se destacan dos hechos de consecuencias económicas importantes: 1) la estatización de los bienes del emporio trujillista y 2) el incremento de la participación social y política de las masas populares urbanas, lo cual determinó, en medio de la crisis de hegemonía del período, la ampliación de su nivel de participación en la repartición del excedente, a través de una mejora en la distribución del ingreso. La estatización del emporio trujillista significaba que la fuente básica de generación del excedente (tras las empresas azucareras) pasaba a manos del Estado, pero en un contexto de práctico estancamiento de las exportaciones y en medio de una situación sociopolítica que drenaba parte del excedente hacia los nuevos actores políticos urbanos. En esta situación, tras el incremento de la demanda, la estructura productiva agropecuaria se mantuvo estancada, mientras que los sectores industriales, pese a que respondieron dinámicamente al aumento de la demanda, lo hicieron sobre todo optimizando su capacidad ociosa: además de que su peso en la estructura económica era muy débil, y aquel sector que sí tenía capacidad de crecimiento (el industrial en manos del Estado) era condenado por la oligarquía terrateniente e importadora en el poder al práctico estancamiento. Ello determinó una opción de crecimiento que, como afirma Ascuasiati, se limitó a “cebar la bomba”, al responder al aumento de la demanda sobre todo por la vía de las importaciones. De este modo, la opción privilegiada por la oligarquía importadora financió su expansión en última instancia por la vía del endeudamiento externo, conservando la estructura del atraso rural y paralizando la dinámica del crecimiento industrial, sumergiendo así a la economía en una profunda crisis externa, mediante el desequilibrio crónico de la balanza de pagos, al tiempo que colocaba a la banca y el comercio importador como los grandes beneficiarios del proceso, en materia de absorción y concentración del excedente generado en los sectores productivos o captados a través de los préstamos internacionales.

El modelo reformista dependiente (1966-1978)

En el contexto de la crisis del modelo oligárquico de acumulación, se puede comprender la opción de política económica del modelo reformista de acumulación, estructurado a partir de 1966. Dicho modelo perseguía como uno de sus objetivos fundamentales el restablecimiento del equilibrio entre la producción y el mercado. Ahora bien, ante las insuficiencias globales de la economía y la rearticulación del nuevo bloque en el poder que en tales condiciones se articulaba, la respuesta del Estado a la crisis de la economía condujo a la estructuración de una rígida política de austeridad económica y a la organización de una estrategia reorientadora de la inversión pública. La articulación de estos tres aspectos definió un nuevo patrón de acumulación sobre el cual se sostuvo el dinamismo de la economía durante el período bajo estudio.

Cuadro 3.8
MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO: 1961 – 1978
(Tasas de crecimiento acumulativas anuales)

Categorías	Modelo Oligárquico	Modelo Reformista Dependiente		
		Reestructuración y despegue (1966-1969 (a))	Auge y expansión (1970-1975) (a)	Crisis y estancamiento 1975-1978 (b)
PIB	3.7	4.1	9.4	3.5
Inversión bruta interna:	30.0	13.3	17.4	5.3
► Pública	2.5	17.0	22.0	0.5
► Privada	30.0	9.0	15.4	7.3
Consumo total:	10.0	4.0	5.3	2.2
► Público	18.0	1.3	0.9	14.0
► Privado	12.1	3.5	5.8	1.0
Exportaciones	0.5	8.0	17.4	2.5
Importaciones	30.5	6.9	8.8	0.8
Efecto términos de intercambio (c)	0.4	23.9	-56.8	257.6

(a) Según precios de 1962; (b) Según precios de 1970; (c) En millones de RD\$.
FUENTE: Banco Central de la República Dominicana: *Cuentas Nacionales*.

Este nuevo patrón de acumulación de capital encontró su estímulo en una favorable coyuntura de precios de los productos tradicionales de exportación en el mercado mundial, principalmente del azúcar. En tal sentido, no constituye exageración alguna decir que la expansión capitalista observada en el período 1966-1978, si bien estimuló globalmente la modernización capitalista de la economía, lo hizo sobre la base del impulso sostenido por sus sectores tradicionales.

El modelo de acumulación de capital que se organizaba no supuso la ruptura con el tradicional esquema de expansión “hacia afuera”, vía la dinámica exportadora, que históricamente ha caracterizado la evolución de la economía dominicana en el siglo XX, sino su aprovechamiento coyuntural, a fin de estimular la modernización capitalista del conjunto de la economía, creando así cierto espacio económico, social y político para la expansión de los sectores de la burguesía vinculados sobre todo a la actividad financiera e industrial, forzando a la modernización a los sectores tradicionales y a todos comprometiéndolos en un esquema económico que supuso la profundización de los lazos de dependencia con el gran capital monopolista internacional, sobre todo norteamericano²⁶.

Período 1966-1969: el despegue

La estrategia de equilibrio entre la producción y el consumo, entre las dimensiones del mercado y la producción, implicó que en este período el Estado restringiera fuertemente el consumo público, al tiempo en que se reconocía la contracción del consumo privado, los cuales crecieron a tasas de 4.1 % y 3.5 %, respectivamente, en el período. Gracias a la política de austeridad en el consumo (privado y público) y al constreñimiento de los salarios, el Estado logró movilizar importantes excedentes hacia inversiones en obras de infraestructura, hasta cierto punto de carácter estra-

²⁶ El primer estudio que conozco que apuntaba en la dirección de mi argumento es el de Vilas (1973). Luego Del Castillo *et al.* (1975), a propósito del caso de la Gulf and Western (GW), profundizaron el argumento. Sobre la expansión general del capital monopolista en la región latinoamericana, debe verse a Dos Santos (1980).

tégico, que agilizarían el despegue. Sin embargo, si bien la inversión bruta interna pública se expandió a un ritmo de un 17 %, la inversión privada se contrajo. A todo esto, el PIB creció a una tasa promedio relativamente baja, en comparación con el período posterior 1970-1975: 4.1 %; sin embargo, aun cuando las exportaciones se dinamizan, hay un saldo favorable en los términos de intercambio en el orden de los 239.0 millones de pesos.

Este lento crecimiento del PIB en el período de reajuste económico y despegue del nuevo modelo de acumulación es el resultado de la acción de diversos factores, entre los cuales el principal es la contracción de la demanda efectiva global, en función de la “austerización” de la economía. En primer lugar, a ello contribuye una deliberada contracción del volumen de las importaciones, con el objetivo de paliar los graves problemas cambiarios y de la balanza de pagos. Esta estrategia tuvo su reflejo directo en un ligero descenso en la composición del PIB de los sectores “improductivos” (comercio, finanzas y gobierno), en tanto la actividad primaria (agropecuaria y minería) sostiene su ponderación, al tiempo que las actividades secundarias (industria, construcción y energía) obtienen un ligero incremento relativo. El ahorro interno bruto se reduce a menos de un 10 % en relación con el PIB, sobre todo debido a los efectos “desacumuladores” de las remesas de utilidades de las inversiones extranjeras. Sin embargo, esto último tuvo un ligero contrapeso en el incremento del ahorro externo, el cual llegó a representar el 5 % del PIB, en tanto el endeudamiento externo se incrementaba.

En términos de la inversión, el aspecto más significativo es el práctico estancamiento de la inversión privada, la cual no reacciona dinámicamente a los nuevos estímulos económicos que el Estado comienza a organizar²⁷. El 12 % que aproximadamente logra mantener la inversión bruta interna en la composición de la demanda global es gracias a las inversiones públicas, esto así pese al significativo peso que va adquiriendo el sector privado en la orientación de los préstamos bancarios comerciales en detrimento del

²⁷ Sobre este aspecto en particular, véase a ONAPLAN (1972 y 1977).

sector público. En general, en el período el ritmo de la acumulación se contrae, pero se sientan las bases económicas, políticas y sociales para la posterior expansión capitalista que en los años 1970-1975 se observará.

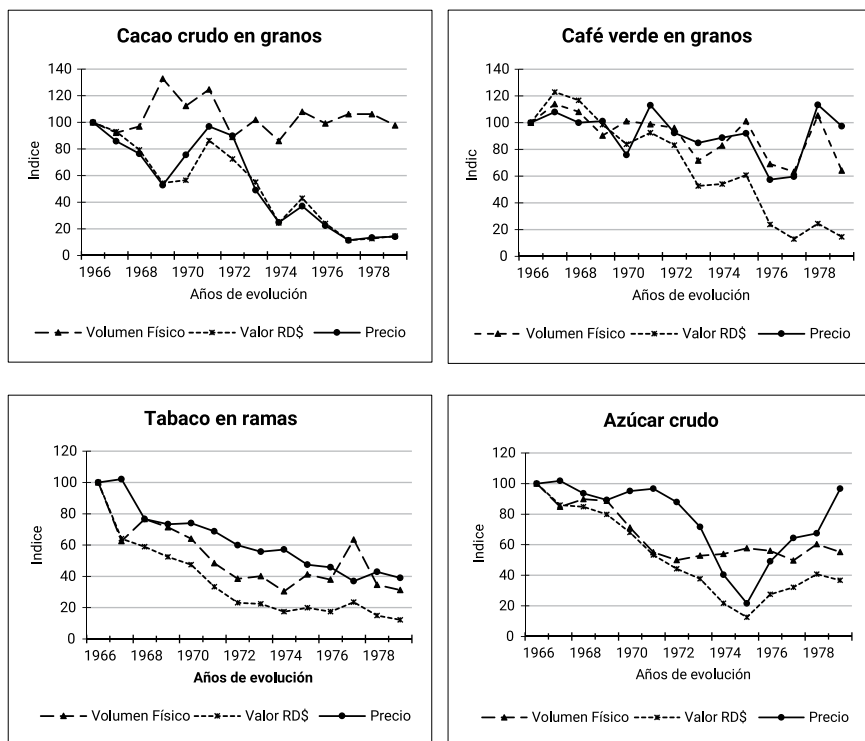
Como se consignan en un importante documento oficial durante el período de despegue del modelo de acumulación (1966-1968):

[...] el comportamiento del sector externo no ofreció factores de dinamismo que aseguraran la recuperación, presentándose más bien, pese a los términos de intercambio, un deterioro en las reservas de divisas como resultado final. Sin embargo, es en este período cuando se da el reacondicionamiento del sector exportador, es decir, cuando las empresas y actividades dedicadas a producir bienes exportables, superan sus problemas internos, racionalizan su sistema de organización y se capacitan para la futura expansión. De otro lado, la política de importaciones, pudo frenar la expansión de éstas, ajustándolas a las posibilidades del país, pues de otro modo la recuperación no hubiera podido ser lograda²⁸.

Los precedentes planteamientos exigen cierta dilucidación. En ellos se reconocen varias tesis importantes para comprender las condiciones del despegue económico del modelo de acumulación: 1) en primer lugar, se desprende que, para poder aprovechar internamente la buena coyuntura de precios internacionales de los productos de exportación tradicionales, básicamente del azúcar, en función de un esquema modernizador, se requería de cierta racionalización interna de la gestión económica de las empresas agroexportadoras. Como hemos visto, dicha racionalización, además del saneamiento de las empresas estatales (el CEA para el caso) demandaba fundamentalmente la contención de la capacidad de negociación de la clase obrera, la cual había alcanzado importantes conquistas en el período anterior, pero sobre todo exigía estrechar sus márgenes de control de los ex-

²⁸ ONAPLAN (1977), p.14.

Gráfico 3.4
TENDENCIA GENERAL DE LA ECONOMÍA
EXPORTADORA TRADICIONAL
1966-1979



FUENTE: Evolución de las exportaciones tradicionales: producción, valor y precios: 1966-1979 (toneladas métricas en miles y millones de RD\$) Banco Central.

cedentes que se lograrían en la posterior etapa de expansión, a través básicamente del congelamiento de los salarios. De otro modo, en la coyuntura de buenos precios las sobreganancias de las empresas azucareras no hubieran podido ser transferidas hacia otros sectores de la economía con la facilidad con que lo fueron, demandando más temprano que tarde una relativa modernización del eje agroexportador, especialmente del sector azucarero. Esto hubiera implicado la ruptura, o por lo menos un profundo cuestionamiento, de las fracciones burguesas tradicionales y puesto en jaque los términos del esquema de acumula-

ción y del bloque de clases en el poder²⁹; 2) en segundo lugar, se reconoce en el período un relativo freno a las importaciones, lo cual no es únicamente el resultado de la política monetaria del Estado en materia de control de divisas, sino también el producto de una serie de circunstancias, algunas de las cuales enumero: a) apenas en los años 1966-1968 la economía se está recuperando de la profunda crisis que significó la guerra de abril de 1965 y las dificultades de orden económico que conllevó; b) la burguesía en su conjunto, sobre todo su sector importador, aun no se encuentra dispuesta a arriesgar grandes volúmenes de capitales ante un mercado de consumo que permanece incierto, y c) la coyuntura de los productos de exportación no es la más favorable como estímulo a las importaciones.

Período 1970-1978: de la expansión a la crisis

En este período podemos distinguir claramente dos etapas: 1) la primera cubriría los años 1970-1975, que es propiamente el momento de auge y expansión del modelo reformista de crecimiento; 2) la segunda cubre los años 1976-1978, donde la economía exportadora sufre una seria contracción y el modelo reformista entra en una aguda crisis económica.

Durante los años 1970-1975 el PIB crece a tasas nunca vistas desde los años sesenta: 9.4 % acumulativo anual. En este momento se evidencia con absoluta claridad que el elemento dinamizador de la economía es el sector externo, el cual crece a una tasa de 17.4 %. En dicha coyuntura, el auge de la economía exportadora es la base a partir de la cual se dinamiza la inversión bruta interna, la cual crece a una tasa de 15.4 %. Ahora bien, en este último sentido el dinamismo global de la inversión en general lo sostiene el sector público, aun cuando el crecimiento de la inversión privada, en relación sobre todo con el período anterior, es muy significativo. La inversión pública crece a una tasa de 22 %, mientras la inversión privada lo hace a una tasa de 21 %.

²⁹ En su artículo de 1973, Vilas comprendió muy bien este componente del nuevo pacto de dominación inaugurado en 1966.

Se establece así un modelo de generación del excedente en la economía que reconoce en el polo exportador su fuente de generación y en la inversión pública su principal agente redistribuidor. En la consideración de este último elemento puede apreciarse un curioso patrón de crecimiento: pese a que la inversión bruta interna se incrementaba a ritmos muy acelerados, las importaciones mantienen su ritmo de expansión, en tanto el consumo se incrementa ligeramente, sobre todo el privado, pues el consumo público se contrajo.

De esta forma, si bien la economía exportadora financiaba la expansión de la inversión bruta interna, permitió un espacio de crecimiento al eje importador, sostenido en el incremento del consumo privado. Como he expresado arriba, de este modo el Estado pudo convertirse en el timón directivo del proceso de desarrollo capitalista, sobre todo porque controlaba como empresario gran parte del eje exportador a través de su corporación azucarera.

En términos de los equilibrios de compromisos en las clases dominantes, esto tuvo un resultado inmediato: el Estado forzaba a los grupos exportadores a transferir gran parte del excedente generado en el sector externo hacia las tareas del crecimiento interno, específicamente industrial. Lo hacía en gran medida gracias a que era el principal agente exportador, pero también gracias al hecho de la gran capacidad de control político que el bonapartismo (como modelo político) depositaba en manos del sector balaguerista, todo esto más allá de que en la buena coyuntura de precios la moneda dominicana tenía gran estabilidad y, en consecuencia, la transferencia hacia el Estado (vía el Banco Central) de las divisas extranjeras generadas en el sector externo no desestabilizaban el conjunto de los grupos exportadores, forzándolos más bien a la modernización.

Esto último ayuda a comprender que en tales condiciones las bancas local y extranjera sirvieran de mecanismo de comando del proceso de industrialización dependiente al administrar el excedente que le era transferido por el Estado mediante sus programas de desarrollo FIDE e INFRATUR. Ello explica, tam-

bién, el hecho de que las finanzas pronto se convirtieran en un terreno fértil a partir de cual el sector exportador renegociaba su posición frente al Estado. De esta manera, si bien por la vía de los controles cambiarios el Estado desplazaba excedentes del sector externo hacia la industrialización y en general hacia las inversiones internas, a través de su participación en la banca los exportadores participaban a su vez del comando del proceso de industrialización, pero ahora como una verdadera burguesía financiera.

La expansión del capital financiero permitió a la burguesía comercial establecer una segura posición desde la cual negociaría con el Estado su participación en el agudo problema de la distribución del excedente exportador. Al mismo tiempo, la expansión de la banca abrió un canal adecuado a través del cual los intereses del gran capital monopolista internacional se expandirían en la economía dominicana al tiempo que le permitía negociar su posición con el Estado. Visto de esta manera, la banca local y extranjera se convertía en la pieza articuladora del proceso de acumulación en su conjunto.

De todos modos, este esquema económico era frágil en su estructura y solo funcionó mientras el crecimiento de los precios de las exportaciones de azúcar se mantuvo, el gran capital financiero transfirió excedentes hacia la producción urbana e industrial y los precios de los principales productos de importación permanecieron más o menos estables, sobre todo los energéticos. Así, cuando en 1976 los precios del azúcar se contraen bruscamente (pasando de US\$ 590.19 la tonelada métrica en 1975 a US\$261.82 en 1976) y en 1978 el valor de las importaciones de los hidrocarburos se elevó en 13 %, el modelo reformista de crecimiento sufrió un colapso mortal: entre 1976 y 1978 el PIB contrajo su ritmo de expansión a los niveles del período 1961-1964, las inversiones públicas y privadas prácticamente se paralizaron y el consumo global se redujo de modo significativo.

3.2. Los patrones de acumulación en el reformismo dependiente

En este momento procederé a discutir más de cerca la dinámica del proceso de acumulación en el período 1966-1978, deteniéndome esencialmente en la dinámica de la inversión y el comportamiento de los salarios, en el entendido de que tras su análisis podemos discernir mejor la lógica económica del modelo de crecimiento reformista.

3.2.1. La orientación de la inversión y el crecimiento del mercado interno

Como he referido, la estrategia reformista implicaba una reorientación de los mecanismos de ahorro e inversión, pero también asumía la necesidad de una modernización del Estado en su gestión empresarial en el supuesto de que el auge de la economía exportadora inyectaría a la economía en su conjunto el necesario estímulo para el aumento del ahorro interno y con él de la capacidad para invertir, lo que aseguraría el volumen de excedentes necesarios a la expansión de los emergentes grupos burgueses financieros e industriales en términos de la ampliación del mercado interno.

En la estructuración de este nuevo esquema de acumulación de capital debo destacar algunos elementos. En primer lugar, se advierte la compatibilización del Estado como empresario capitalista con el capital privado local y extranjero, en su repartición de las esferas del mercado local. En la práctica, esto determinó que, pese a su saneamiento, las empresas del Estado quedaran condenadas al estancamiento económico, a la parálisis de su crecimiento, en beneficio de la expansión del capital privado competitivo, el cual cubriría las nuevas áreas del mercado interior en expansión. Efectivamente, el CEA fue saneado, pero ello no se tradujo en una ordenación modernizadora de la industria azucarera estatal tanto en términos tecnológicos como de diversificación industrial. Esto en gran medida fue el resultado del hecho de que gran parte de

los excedentes generados por la venta del azúcar en las empresas del Estado y parte sustancial de los ingresos fiscales fueron a parar a manos de nuevas capas burguesas robustecidas a la sombra del poder del Estado.

La otra cara de este proceso lo constituye la expansión de la inversión extranjera, en particular de las empresas multinacionales, en la esfera del mercado interior, expansión que colocó a la burguesía local en la condición de socio subordinado del capital extranjero. Paralelo a este proceso, se establecía un reordenamiento del mercado entre importadores e industriales. Esto permitió que en un equilibrio precario los intereses de ambos sectores pudieran coexistir con base en un esquema de industrialización por sustitución de importaciones y transnacionalización de la economía en correspondencia con la expansión del gran capital monopolista internacional en la formación social dominicana³⁰.

En materia de política económica, el primer elemento que debemos discutir, para la comprensión del nuevo esquema de acumulación, es la política de gastos públicos, como también la reorientación global de la inversión pública y privada. Ciertamente, desde su ascenso al poder en 1966, el balaguerismo estructuró una política económica reordenadora de la estructura del gasto público, el cual se canalizaría hacia las inversiones de capital, deprimiendo así los gastos corrientes.

En principio, la reorientación del gasto público se dirigió hacia las inversiones en el sector construcción, fundamentalmente. Esta política respondía en cierto modo a un imperativo de tipo social³¹ en la medida en que el Estado enfrentaba una difícil situación en materia de empleo, sobre todo en las ciudades donde el desempleo era muy elevado³². Se suponía que el incentivo a las

³⁰ Véase a Del Castillo *et al.* (1975) y Cuello (1973).

³¹ Un análisis del gasto del Estado en el período bajo estudio se encuentra en Alemán (1975), excelente estudio pese a su brevedad. Catrain (1982) y Oviedo (1983) enfocan las implicaciones políticas del gasto estatal. El trabajo más completo en información es el de Méndez Pérez *et al.* (1979).

³² Al respecto véase OIT (1975) y Lozano (1984 y 2004).

inversiones en construcción paliaría en cierta forma la situación de desempleo masivo por el gran volumen de mano de obra que se requería en las construcciones, y puesto que en lo inmediato ello no conllevaba largos y sofisticados proyectos de factibilidad previos a su implementación. Pero asumir que tal política estaba signada por un determinante esencialmente social es simplificar el problema.

Las inversiones en vivienda se insertaban en la aguda problemática del déficit habitacional crónico que vivía el país, pero en modo alguno lo tendía a resolver. Aquí la política de inversiones del balaguerismo se imbrica con algunos elementos de sus patrones de comportamiento político, pues estas tendían a captar importantes núcleos de las poblaciones urbanas, sobre todo de las capas pequeñoburguesas más pauperizadas³³. Tal política habitacional no puede verse desprendida de este *leiv motiv* político. Ello permite esclarecer que mientras las inversiones en transporte, comunicación, carreteras y caminos tuvieron un comportamiento variable a lo largo del período 1966-1972, las inversiones en vivienda (pero también las relativas al riego) tuvieron un comportamiento más estable a lo largo de los doce años del gobierno reformista.

³³ Esto Balaguer lo expresó claramente en uno de sus discursos: “Este plan no solo obedece a una finalidad social sino política, en el más alto y en el más noble sentido de la palabra. El hombre, cuando se convierte en propietario, cambia de mentalidad, adquiere un mayor sentido de sus deberes para con el medio ambiente donde vive, su sentido de la solidaridad social se hace más fuerte, consciente e inconscientemente, trabaja para el fortalecimiento de la paz, para la conservación del orden y para la estabilidad de las instituciones. Esa idea fue brillantemente expuesta en el siglo XIX por un gran civilista dominicano, Pedro Francisco Bonó. El gran repúblico santiagués, quien expuso sobre todo sus proyectos en el Senado Consultor de 1856, abogó inclusive por el licenciamiento del ejército de su época para sustituirlo por una guardia cívica, integrada por hombres casados y por propietarios de una casa en el sector urbano o de un predio rural” (1979), p. 432.

Cuadro 3.9
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS
DEL GOBIERNO CENTRAL**
(En millones de RD\$)
1966, 1972 y 1976

Categorías	1966		1972		1976	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Gastos corrientes:	154.3	77.9	195.2	58.3	343.8	59.2
1. De operación	113.9	57.6	145.4	43.4	242.7	41.8
2. Transferencias corrientes	39.5	19.9	47.2	14.1	79.0	16.2
3. Intereses deuda pública	1.0	0.6	2.6	0.8	7.1	1.2
Gastos de capital:	43.7	22.1	139.1	41.7	236.8	40.8
Inversión directa	24.2	12.3	103.9	34.1	175.3	30.1
Real	24.0	12.2	95.9	28.3	165.6	28.5
Construcciones	22.6	11.4	91.2	27.3	152.6	26.3
Maquinarias y equipos	1.4	0.8	4.7	1.4	13.0	2.2
Financiera	0.2	0.1	8.0	2.4	9.7	1.6
Inversión indirecta	13.2	6.6	24.9	27.1	44.1	7.6
(transferencias de capital)	6.2	3.2	10.3	3.1	17.4	3.4
Amortización deuda pública						
Totales	108.0	100.0	334.3	100.0	580.6	100.0

FUENTE: Banco Central: *Cuentas Nacionales 1966-1976*.

Como ha demostrado Alemán, en su nombrado artículo de 1975, tras la política de canalización del gasto público hacia las inversiones en construcción se escondía una muy clara y definida estrategia respecto a las llamadas condiciones del “despegue económico”³⁴ en una sociedad capitalista dependiente. Gran parte de esas obras se canalizaron hacia carreteras y caminos, riego y presas e inversiones, todos requisitos para la expansión del mercado interior y el aumento de la productividad que debe acompañar a cualquier proceso de desarrollo, sobre todo en la esfera agraria. De esta manera, Alemán destaca:

[...] se trata de maximizar inversiones autónomas (no dependientes primariamente de variaciones de consumo) vía sector

³⁴ Para el debate de esta problemática, véase sobre todo a Gerschenkron (1968) y Benetti (1976). Las tesis de Rostow (1978) siguen teniendo muchos aspectos que deben ponderarse.

público en todo lo referente a “infraestructura física”, por medio de inversiones directas del Estado; vía sector privado, con facilidades crediticias y fiscales. Este es precisamente uno de los tipos clásicos de función objetivo respecto a las inversiones públicas³⁵.

Este patrón de inversiones públicas conserva su vigencia durante el período 1966-1973. A partir de 1974 se observa una disminución de los gastos de inversión en transporte y comunicación, así como en urbanismo y edificaciones. Por el contrario, las inversiones en obras de riego aumentan de modo significativo. Según el padre Alemán, muy posiblemente esto se encuentra ligado a una modificación de la estrategia de inversión del Estado en la que se pasaría a privilegiar las inversiones de apoyo al desarrollo del capitalismo agrario unido al aumento de los servicios sociales en educación y salud. Una reflexión más amplia, por el camino de la hipótesis sugerida por el padre Alemán, permite argumentar que es posible que en 1973 se estimara como “acabada” la labor de apoyo material al despegue económico, que en el modelo de Nurkse (1973) se concentra sobre todo en las tareas articuladoras del mercado interior, tales como las inversiones en carreteras y caminos. Se pasaría así a otra etapa en la que, reconociéndose la importancia estratégica del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, este chocaría con el “amarre estructural” del atraso rural, y el Estado se encaminaría a facilitarle a la industria la tarea, tratando de elevar la productividad agropecuaria, y en general apoyando el crecimiento capitalista en el campo con estrategias de inversión, tales como las inversiones en riego, políticas agraristas (leyes agrarias de 1972-1973) y el fomentalismo agropecuario (Plan PIDAGRO). De esta manera los cambios en las políticas de inversión pública, lejos de obedecer a rupturas bruscas en las estrategias de crecimiento, constituirían variaciones lógicas de toda una estrategia de crecimiento capitalista, vista en una perspectiva a largo plazo.

³⁵ Alemán (1975), *op cit.*, p. 15.

Esta situación es más compleja de lo aparente. Si bien la hipótesis del padre Alemán es en general correcta, requiere precisarse en muchos aspectos. Si observamos la evolución del gasto del gobierno central por funciones, reconoceremos que hasta 1970, es decir, durante todo el primer gobierno de Balaguer, las funciones sociales del gasto del Estado predominaron sobre las funciones económicas. En el período 1966-1970 las funciones sociales concentraron alrededor del 42 % del gasto público total en términos promedios, contra el 28 % que alcanzaron a concentrar las funciones económicas. A partir de 1971 las tendencias se invierten, y las funciones económicas pasan a concentrar en el período 1970-1976 alrededor del 49 % del gasto en términos promedios, contra el 32% de los gastos sociales en el mismo período. Vemos que la tendencia al cambio en el patrón de inversión pública comienza a estructurarse en términos globales en 1971. A partir de 1974 se verifica una acentuación de esta tendencia al pasar las funciones económicas a exceder a los gastos sociales en alrededor del 10 %, mientras en el período 1971-1973 la diferencia a favor de las funciones económicas del gasto público respecto a las funciones sociales era del orden del 2 %. Sin embargo, en el período 1966-1970 se advierten importantes inversiones públicas en transporte y comunicación, y a partir de 1968 se inician las inversiones en urbanismo y edificaciones.

De todos modos, las inversiones en urbanismo y edificaciones adquirirán su mayor dinamismo en los años 1971-1973, al contrario de las realizadas en transporte y comunicaciones, cuyo período dinámico se concentra en los años 1966-1971. Aun así, es cierto que a partir de 1973 las inversiones en carreteras, caminos y urbanismo y edificaciones se contraen para dar paso a una expansión significativa de las inversiones en riego y agricultura, y a partir de 1974 en energía; pero, aun cuando con fluctuaciones significativas, las inversiones en vivienda se mantienen a lo largo del período 1966-1970. ¿Qué significa todo esto?

En primer lugar, es razonable pensar –como afirma el doctor Alemán– que esto obedecía a un cambio de lineamiento en materia de política económica por parte del Estado, como se ha dis-

cutido arriba. Sin embargo, este cambio no fue brusco, y en modo alguno implicó que el Estado había dado un giro radical a la orientación de sus inversiones. Para dilucidar el punto es imprescindible ponderar la dimensión propiamente política de toda estrategia de desarrollo económico.

En ese sentido, se aprecia que el giro en la orientación de las inversiones gubernamentales fue sobre todo de carácter estratégico. En la medida en que cambió a partir de 1971-1973 la posición relativa ocupada por los gastos sociales del Estado, no tanto su tendencia absoluta de crecimiento, la cual mantuvo incluso una tasa de crecimiento por encima de la tasa de incremento del gasto global del Estado, a lo largo del período 1966-1976: 14.3 % de incremento acumulativo anual contra una tasa de 12 %, respectivamente.

Cuadro 3.10
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL
(En millones de RD\$)
1966-1976

Años	Servicios Generales	Servicios Sociales	Servicios Económicos	Servicios Financieros	Servicios no identificados	Total
1966	70.0	57.5	46.8	-	23.6	197.9
1967	63.6	58.9	55.3	-	20.2	198.0
1968	64.7	65.7	59.7	6.5	11.0	207.6
1969	70.2	73.0	70.2	10.8	11.0	215.2
1970	73.8	87.4	81.6	11.8	10.3	264.9
1971	76.4	98.6	108.2	12.3	9.3	305.1
1972	83.5	112.1	117.8	12.9	9.8	325.8
1973	93.2	131.6	437.8	14.6	13.3	390.5
1974	118.1	152.9	205.4	24.3	12.0	512.9
1975	120.8	191.6	275.2	74.4	-	663.0
1976	133.3	219.7	234.2	28.2	-	615.4

FUENTE: Cuadro A.9 (Apéndice estadístico).

Este giro estratégico obedecía ciertamente a un claro diseño en materia de desarrollo: el Estado pasaba a ocupar en la nueva situación económica inauguraba por Balaguer en 1966 el rol de agente sostenedor del proceso general de modernización capitalista, dando impulso a la construcción de las obras de infraestructura requeridas por el desarrollo capitalista. Pero este impulso, a mi juicio, se articuló en dos momentos: en un primer momento el Es-

tado procedió a sanear las empresas del sector descentralizado al tiempo que procedía a estructurar una estrategia de inversión que apoyara la infraestructura requerida para la expansión del mercado interno, de aquí la importancia de las inversiones en carreteras y caminos. Sin embargo, como bien ha demostrado Ascuasiati, durante el período 1966-1970 la burguesía no respondió de manera dinámica, en términos de inversiones productivas, a la política de desarrollo que sugería el Estado, aun cuando este le aseguraba la estabilidad política, el control salarial y el apoyo infraestructural. Donde con mayor dramatismo se expresó esta situación fue en el agro, dada su secular tendencia al estancamiento en materia productiva. En el caso de las ciudades, la práctica ausencia de un sector empresarial ligado a la industria y el predominio del elemento comprador intermediario y especulativo del grueso de la burguesía, impedía que en su conjunto esta procediera a generar las inversiones necesarias a fin de apoyar el proceso de modernización capitalista que se imponía en las nuevas circunstancias.

De todos modos, pienso que desde un principio el balaguecismo se propuso la estrategia de desarrollar la actividad industrial, no tanto el eje exportador ni mucho menos el comercial interno. Sin embargo, objetivamente la base social y política sobre la que descansaba el régimen dificultaba, cuando no impedía, este propósito de alcance estratégico. Como resultado de este equilibrio de fuerzas surgió un esquema híbrido, que constreñía la capacidad de movimiento de los sectores tradicionales, forzándolos a su modernización, al tiempo que contribuía al surgimiento de nuevos grupos sociales ligados sobre todo a la industria y las finanzas.

A partir de 1972, en función de este objetivo es que se explica la insistencia del régimen en la modernización del agro, manifiesto en el aumento de las inversiones ligadas a la agricultura y el riego, y en las llamadas Leyes Agrarias, como también en el fomentalismo agrario a través del Plan PIDAGRO.

Por ello pienso que el giro estratégico del Estado en materia de política de gastos e inversiones en 1971-1973 debe explicarse en estrecha conjunción con el estímulo estatal a la industrialización

verificado a partir de 1969 y de los obstáculos que en el plano agrario encontraba la expansión del mercado interno, en materia sobre todo de productividad, situación que amenazaba la expansión del sector industrial no solo en términos del encarecimiento de la materia prima de origen agropecuario, sino en la medida en que ponía a peligrar la estrategia de constreñimiento salarial sobre la que se intentaban levantar las bases de la industrialización por sustitución de importaciones.

El análisis de las políticas de inversión durante el período balaguerista quedaría incompleto de no conectarse con sus implicaciones más generales en función del proceso de modernización de la burguesía dominicana en el período. Por ejemplo, el auge que experimentaron las construcciones durante el período 1966-1978 constituyó un apoyo determinante para el surgimiento de nuevos grupos de poder económico –sobre todo de aquellos núcleos burgueses crecidos a las sombras del poder del Estado–, pero también para la modernización de los sectores tradicionales de las clases dominantes, sobre todo de la burguesía exportadora e importadora. Las inversiones en construcciones agilizaron la integración de la burguesía comercial exportadora con la banca, a la vez que aceleraron el crecimiento de esta última con la creación de un verdadero mercado financiero en materia de vivienda. En dicho mercado se logró canalizar un volumen de inversiones, vía préstamos, entre 1966 y 1977, de 288.8 millones de pesos. Ciertamente, allí no solo estaban representados los intereses de la burguesía financiera en expansión, sino también los de la burguesía comercial en su sector básicamente exportador. En la banca hipotecaria encontró la burguesía comercial un espacio de expansión que le facilita su integración al nuevo esquema de acumulación, cuya dirección estaba en manos del capital financiero. Ahora bien, esta expansión de la banca hipotecaria se logró en la medida en que una serie de circunstancias se conjugaron: 1) una buena coyuntura de precios de los productos de exportación, que permitía canalizar excedentes hacia la banca hipotecaria por parte del Estado sin desestabilizar sus gastos fiscales; 2) un proceso de expansión de las clases medias urbanas, principales usuarios del mercado de viviendas en

manos de la banca privada, y 3) una política de concentración del ingreso urbano, que facilitó la expansión de la capacidad de ahorro de las clases medias³⁶.

Cuadro 3.11
PRÉSTAMOS OTORGADOS
POR LAS ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRÉSTAMOS
(En millones de RD\$)
1966-1977

Años	Número de Préstamos Acumulados	Valor Acumulado	Monto Original Préstamos por Año
1966	2,020*	17.6*	6.1
1967	3,648	23.0	5.4
1968	4,442	28.5	5.5
1969	5,483	36.3	7.8
1970	5,483	44.9	8.6
1971	7,076	51.3	8.4
1972	8,690	66.8	15.5
1973	10,676	90.5	23.7
1974	12,896	123.6	33.1
1975	15,782	167.0	43.4
1976	19,253	222.1	55.1
1977	22,528	282.8	60.7

*Acumulado a la fecha (1962-1966).

FUENTE: Banco Nacional de la Vivienda.

Las cifras sobre la inversión bruta interna precisan con mayor claridad lo referido. Hasta el año 1971 las inversiones en construcción del sector privado crecieron, pero de manera lenta. En cambio, a partir de 1972 estas adquieren un notable incremento. No es casual que fuera a partir de ese año cuando el Estado dio un giro estratégico en su política de inversiones orientándolas hacia el riego y la agricultura, deprimiendo así sus inversiones en urbanismo y edificaciones. Es también a partir de 1972 cuando la banca hipotecaria adquiere un sistemático dinamismo tanto en el monto

³⁶ Sobre el papel de las clases medias en el proceso de crecimiento capitalista en el periodo, no hay estudios sistemáticos. El ensayo de Cabral (1975) contiene interesantes puntos de vista. Sobre la política habitacional del balaguerismo, debe verse a Estrella (1971), pero es Rivas (1982) el que ha elaborado la mejor evaluación de la política de construcción del balaguerismo y su impacto en el proceso de crecimiento económico.

de los préstamos hipotecarios como en el número de estos. Sin embargo, en el período 1972-1976 el Estado incrementa con mayor celeridad sus inversiones en construcción, pero impulsando sobre todo las inversiones en riego, presas, etc., reduciéndose la participación relativa de las inversiones en viviendas. La tendencia es clara: en 1972 la burguesía financiera se expande hacia el mercado de viviendas dirigido a los sectores medios, mientras el Estado sostiene la política de viviendas populares.

En el caso de las inversiones en equipo, la situación es diferente. Hasta 1969 las inversiones del sector privado en equipo eran muy reducidas. A partir de 1970, al calor del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, tras la Ley 299 de incentivo industrial, estas inversiones se duplican respecto a 1969; en 1976 prácticamente se cuadriplican. De este modo, mientras en el período 1966-1976 el Estado impulsa un sistemático proceso de inversiones en construcción, cuyo punto de mayor dinamismo se localiza en los años 1972-1976, sus inversiones en equipo se mantienen prácticamente estancadas durante el período 1966-1976.

La orientación de la inversión pública hacia la actividad de construcción deprimió las inversiones en maquinarias y equipos en las empresas del Estado. De hecho, esto implicaba una estrategia de desacumulación de las empresas de CORDE y del CEA en beneficio del conjunto de la burguesía. Se establecían así claras áreas de inversión para las empresas pública y privada: la inversión pública asumía la tarea de apoyo a la creación de las obras de infraestructura necesarias para la expansión de los mercados, mientras el crecimiento propiamente industrial pasaba a manos del sector privado.

Fue así como, a partir de 1970, el sector privado se convirtió en el principal concentrador de la inversión en maquinarias y equipos, mientras las inversiones en dichos renglones del CEA y la CORDE prácticamente se paralizaron. Sin embargo, en este proceso, como se vio arriba, en el período bajo estudio el sector privado se constituyó en el principal agente económico en materia de inversiones en viviendas y no el gobierno central, el cual

diversificaba sus inversiones en construcciones en varias áreas (viviendas, riego, presas, carreteras y caminos, urbanismo, etc.). De ese modo, de 1,193 millones de pesos que el sector público invirtió en construcciones en el período 1966-1976, el 14 % se destinó a vivienda, el 39 % a carreteras y caminos, el 23 % a riego y presas y el 16 % a urbanismo. Mientras que el sector privado logró invertir en el mismo período más de 800 millones de pesos solo en viviendas. El modelo era muy claro: incluso en el caso de las construcciones, el Estado se convierte en un verdadero agente del capital privado.

3.2.2. La estrategia de explotación de la fuerza de trabajo

La contrapartida lógica al incremento de la inversión pública en el período 1966-1978 fue la contracción del gasto corriente. Por un lado, esto le permitió al Estado un mayor volumen de recursos con los que financiar sus inversiones de capital, pero por el otro también le facilitó la tarea para el diseño de su política de transferencia indirecta de excedentes a los sectores productivos modernos de la burguesía, a través de su política de incentivos económicos, al reducir sus gastos fiscales y burocráticos. En esta materia la política estatal se concentró en dos objetivos: 1) la reducción del volumen de empleo en el Estado y 2) el constreñimiento y posterior estancamiento de los salarios.

La ley de austeridad fue el instrumento idóneo que viabilizó tal estrategia. En todo caso, debemos estar prevenidos para no asimilar el alcance de la ley a un mero propósito de reorientación del gasto público. Esta se insertaba en una estrategia mucho más abarcadora. En lo fundamental dicha ley constituyó un instrumento reorientador del excedente económico: reorientación que se hacía necesaria no solo ante las insuficiencias de la acumulación en la formación social dominicana, sino también por cuanto, hasta cierto punto, era el resultado del nuevo equilibrio de fuerzas sociales que a partir de 1966 se conformaba. Este nuevo equilibrio asignaba a los grupos burgueses emergentes modernizantes un grado de participación económica y social cada vez más signifi-

cativo y, en consecuencia, una mayor participación en la repartición del excedente. La pérdida de espacio político de la clase obrera facilitó que las consecuencias sociales del nuevo impulso de la acumulación penalizasen sobre todo a los trabajadores, a través de la congelación del salario, la reducción de sus niveles de vida y el incremento de los niveles de explotación.

La ley de austeridad dispuso una rebaja general de los salarios de los servidores públicos cuando estos recibieran un sueldo superior a los RD\$200.00. Esta rebaja salarial vino aparejada de una ligera reducción del empleo público. A su vez, congelaba los salarios en las industrias del sector privado, lo que a la larga permitió asegurar a los industriales y la clase capitalista en general la elevación de las tasas de ganancia a ritmos estables. Este es un elemento clave para la comprensión del posterior impulso que a partir de 1969 cobraría la dinámica de la industrialización por sustitución de importaciones. En las empresas industriales del Estado, los efectos de la ley de austeridad, así como la reducción del personal ocupado, disminuyeron significativamente los costos de producción, colocando a dichas empresas en niveles próximos a la rentabilidad, superando así la anterior situación de permanente crisis y déficit económicos. Donde mejor se expresó esta situación fue en el CEA, como lo evidencia el cuadro 3.12.

Como consecuencia de la ley de austeridad, la embestida contra la clase trabajadora en el período bajo estudio se articuló en torno a estrategias relativamente diferentes según la naturaleza y composición de los grupos obreros afectados. Fueron los obreros azucareros los primeros y más profundamente afectados con la nueva situación. Esto así, como consecuencia de dos características determinantes: se trataba del área de producción económica clave de la acumulación capitalista en la formación social; en segundo lugar, del sector de la clase obrera con menos capacidad de defensa frente al capital. En gran medida, esto último era el resultado de la composición social de la clase obrera azucarera: en su generalidad estaba integrada por una mano de obra extranjera prácticamente indefensa ante las

exigencias y controles del capital, sin protección alguna ante la ley, profundamente desorganizada y con un grado de conciencia social muy bajo.

La clase obrera industrial no azucarera también sufrió las consecuencias negativas de esta política, pero de modo menos intenso que sus compañeros azucareros: muestra de ello es que hasta 1968 le fue posible mantener, aunque precariamente, los niveles de vida alcanzados en el período 1962-1963, expresado en la estabilidad de los salarios reales³⁷.

Al respecto, la explicación que propongo es la siguiente: en el momento de despegue del modelo de acumulación (1966-1968), la estrategia fundamental del Estado consiste en crear las condiciones bases del desarrollo capitalista, que posteriormente se observará en los años 1968-1978. Por esto, todo su esfuerzo se concentra en asegurar las condiciones de rentabilidad de la economía exportadora, en su sector fundamental: la industria azucarera. Esto descansa en una lógica económica precisa: las favorables coyunturas de precios en el mercado mundial se aprovechan aumentando las áreas de cultivo y los volúmenes de producción, pero sin estimular la modernización del conjunto del aparato productivo. Las malas coyunturas de precios se enfrentan en lo esencial a través del constreñimiento de los salarios obreros. Sin embargo, también en las buenas coyunturas de precios la reproducción del capital azucarero no permite que los salarios obreros alcancen un incremento sostenido y correlativo al de las ganancias. Esto claramente revela que la estrategia de la acumulación del capital azucarero descansa principalmente en la sobreexplotación del trabajo.

El significativo aumento de los salarios obreros en la coyuntura de los años 1961-1965 vulneraba las bases de esta lógica económica y amenazaba la reproducción del capital azucarero, principal sostén del conjunto de la economía.

En 1961-1966, en medio de una coyuntura de precios estables, los obreros azucareros, gracias a los nuevos equilibrios de fuerza en el Estado posteriores a la muerte de Trujillo, logran elevar sustan-

³⁷ Véase a Ascuasiati (1972) y Dauhajre (1984).

cialmente los salarios³⁸, mientras las propias empresas azucareras del Estado pasaban a manos de burocracias y élites políticas. En esas circunstancias, el manejo de los intereses de las empresas azucareras estatales estuvo sujeto a las condiciones propias de la crisis de hegemonía de la época, que se plasmaban en el prebendalismo burocrático y la ineficiencia administrativa³⁹. Esto colocaba en seria crisis a las empresas azucareras estatales. Si vemos las cosas en esa perspectiva, la acción de Balaguer en 1966 con su política de despidos masivos y de drástica contracción del salario en el CEA, se limitó a restablecer las bases de la racionalidad económica sobre la que históricamente se había desempeñado el capital azucarero: apoyar toda la estrategia del beneficio en la sobreexplotación del trabajo. Restablecer esa lógica implicaba la desarticulación de la capacidad reivindicativa de los trabajadores, así como la contracción y posterior estancamiento del salario. Como empresario el Estado obraba racionalmente, pero el precio era la barbarie.

Cuadro 3.12
**CORPORACIÓN ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA):
PERSONAL OCUPADO, SUELDOS Y JORNALES PAGADOS
SECTORES MANUFACTURERO Y AGRÍCOLA
1966-1972**

Años	Sector Manufactura		Sector Agrícola		Ambos Sectores	
	Personal ocupado	Jornal pagado en RD\$	Personal ocupado	Jornal pagado en RD\$	Personal ocupado	Jornal pagado en RD\$
1966	70,945	51,888,255	24,834	23,302,037	46,111	28,586,218
1967	82,839	44,401,706	21,834	19,058,180	61,005	25,343,526
1968	75,117	45,933,400	24,626	21,315,447	50,491	24,617,953
1969	73,527	51,261,620	23,703	25,036,369	49,824	26,225,251
1970	86,786	58,629,504	26,750	28,624,168	60,036	30,005,336
1971	99,585	59,569,625	30,587	30,964,532	57,998	28,605,093
1972	94,497	66,655,758	34,762	36,379,834	59,735	30,275,924

FUENTE: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
Tomado de Alemán (1973).

³⁸ Véase el Capítulo 1 de este libro.

³⁹ Sobre esta problemática, debe verse a Estrella (1971), FMI (1969) y los informes que sobre la economía dominicana publicó la Academia de Ciencias de la República Dominicana en su Comisión de Economía (1975, 1976, 1977).

La evolución del salario en las empresas del CEA ilustra el contenido general de esta estrategia. Si bien es cierto que entre 1966 y 1972 el salario nominal promedio de la industria azucarera estatal se contrajo en un 4 %, en el sector agrícola de esta industria esto significó un descenso de alrededor del 12 %, mientras que en el sector industrial se verificaba, a contrapelo, un incremento de igual porcentaje. Esto claramente expresa que fueron los trabajadores del corte de la caña los que sufrieron el embate salarial que disponía la ley de austeridad en el período en cuestión.

En general, para la industria azucarera estatal la estrategia es clara: en el período 1966-1967 el salario real se contrae bruscamente, a partir de ese momento estabiliza su posición y ligeramente se incrementa al final del período 1966-1972. Esto permite sostener la hipótesis de que la estrategia patronal lo que perseguía era estabilizar el salario en un punto que fuera funcional a las necesidades de la reproducción del capital en el sector azucarero en su conjunto. Sin embargo, mientras en la actividad propiamente industrial la contracción del salario nominal fue de apenas el 7 % en los años más difíciles de 1966-1967, en el sector agrícola fue de 33 %. En segundo lugar, en el período 1969-1972, mientras en el sector industrial el incremento del salario nominal fue relativamente sostenido (lo cual permitió, entre otras cosas, frenar el descenso del nivel de vida), en el sector agrícola se experimenta un movimiento irregular de ascensos y descensos bruscos del salario nominal que estabiliza la contracción de los salarios reales, en términos incluso por debajo de los niveles de vida que habían alcanzado los trabajadores cañeros en el año 1966.

Aun cuando los datos que he analizado son los relativos a los años 1966-1972 y solo para el caso del sector estatal azucarero, tengo la convicción de que valen para el sector en su conjunto, al igual que estimo que esta estrategia del capital azucarero en materia salarial se mantuvo hasta el año 1978. Para todo el período es claro que esta estrategia del capital se apoyó en la efectiva dispersión del movimiento obrero, en la cooptación prebendalista de sus élites sindicales o sencillamente en su represión directa. Sin embargo, mientras en el período 1966-1970 la contracción del salario le ase-

guraba a la industria simplemente su sobrevivencia, en la coyuntura de buenos precios de los años 1970-1975 esta misma contracción de los salarios sostenía las bases de las enormes ganancias logradas por el capital azucarero en esos años.

Respecto a la clase obrera urbana la situación es distinta. Esta se encontraba en mejores condiciones de lucha que sus compañeros azucareros frente a la clase capitalista. Por lo demás, su peso numérico era sustancialmente menor, al igual que su importancia económica. De este modo, pese a que los trabajadores urbanos se vieron seriamente afectados por la congelación de los salarios en 1966, su situación en general fue mejor que la de los obreros azucareros. Lo que es más relevante aún, solo cuando la tasa de inflación comenzó a elevarse de modo significativo, a partir de 1970, fue que el descenso del nivel de vida de la clase obrera urbana se hizo evidente.

Cuadro 3.13

CORPORACIÓN ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

SALARIO PROMEDIOS POR HOMBRE OCUPADO EN LA INDUSTRIA AZUCARERA POR SECTOR INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA: 1966-1972

(Índice base 1966=100)

Años	Sector Manufactura		Sector Agrícola		Ambos Sectores	
	Promedio	Índice	Promedio	Índice	Promedio	Índice
1966	938.3	100.0	620.0	100.0	751.3	100.0
1967	872.8	93.0	415.4	67.0	536.0	73.2
1968	865.5	92.2	487.5	79.0	611.4	84.0
1969	1,056.2	113.0	526.3	85.0	697.2	95.3
1970	1,070.0	114.0	499.7	81.0	675.5	92.3
1971	1,012.3	108.0	493.2	89.0	672.4	92.0
1972	1,046.5	112.0	506.8	82.0	705.3	96.4

FUENTE: Oficina Nacional de Estadísticas.
Citado por Alemán (1975). Elaboración del autor.

En una amplia perspectiva temporal, en el período 1960-1976 puede observarse dos etapas claramente diferenciadas en la evolución de los salarios obreros en el sector industrial no azucarero. Una primera etapa, que se prolonga hasta 1969, en la que, en la generalidad de las ramas industriales se verifica un aumento (con sus fluctuaciones relativas) del salario promedio

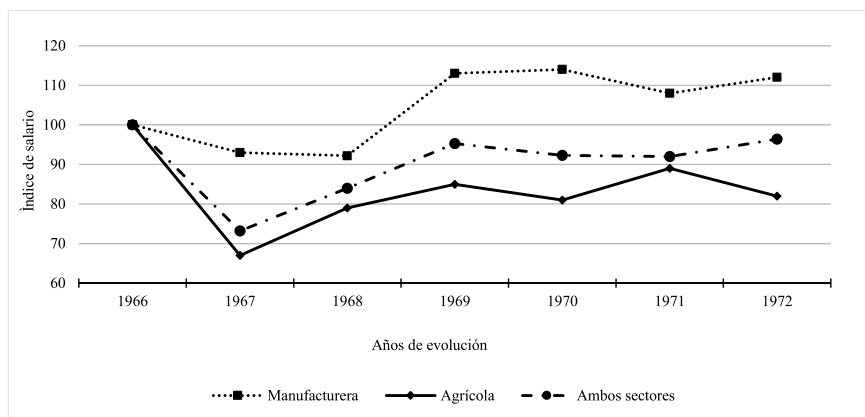
por ocupación tanto en términos reales como nominales. Esta mejora en la situación salarial de la clase obrera industrial se verifica en casi todas las ramas industriales, como lo revela el cuadro 3.15.

Como se ha discutido en el Capítulo 1, hasta el año 1965, pese a que la correlación de fuerzas en el Estado mantuvo un claro predominio oligárquico, la clase obrera industrial logró importantes conquistas organizacionales y remunerativas⁴⁰. El salario real promedio en el período 1963-1968 tuvo un significativo incremento de alrededor del 14 % para las ramas productoras de bienes de consumo, de 19 % para las ramas productoras de bienes intermedios y de 21 % para las ramas productoras de bienes de capital y consumo duradero. De este modo, puede decirse sin exagerar que entre los años 1966-1968, tres después de haberse dictado la ley de austeridad, la clase obrera urbano-industrial mantuvo sus niveles de vida, por lo menos al nivel alcanzado en el período 1962-1966. Ahora bien, como se aprecia en el cuadro 3.14, fueron las ramas productoras de bienes de capital y de consumo duradero las que lograron un mayor incremento del salario real promedio. Estas sencillas evidencias estadísticas derrumban un mito: no es cierto que para toda la clase obrera la ley de austeridad tuvo el mismo y dramático significado, como se ha venido sosteniendo en los círculos marxistas dominicanos. Entre 1966 y 1968 se observa sobre todo un lento incremento del salario nominal, que prácticamente significó el estancamiento del salario real y del nivel de vida de los trabajadores. En este sentido, debe quedar claro que esto no tuvo las dramáticas consecuencias en el sector azucarero que generalmente se le ha atribuido, pues, como se ha visto incluso en el período 1963-1968, los salarios reales lograron elevarse. Sin embargo, en la industria manufacturera no azucarera se reconoce en los años 1966-1968 una significativa contracción del volumen global del capital variable. ¿Cómo ocurrió esto? Mi hipótesis al respecto es la siguiente: la

⁴⁰ Para una visión de estas luchas y el contenido general del proceso organizacional de los trabajadores, véase a Calderón (1975).

contracción del volumen global del capital variable se logra sobre todo por la vía de la reducción de la capacidad instalada no utilizada. Con ello se lograban significativos aumentos en las tasas de beneficio, aun cuando la inversión privada en el período fuera poco significativa. Ciertamente, a esto contribuye la ley de austeridad de 1966, en la medida en que, aun cuando permitía relativos aumentos del salario real en esos años, logró frenar su tendencia alcista iniciada en 1962. Es indudable que en el largo plazo esto no hubiese podido ocurrir de no haberse contado con una política estatal que logró mantener muy baja la tasa de inflación entre los años 1966-1969, sobre todo en materia de artículos de primera necesidad y alquileres. Esos últimos fueron congelados a partir de 1966 y los primeros fueron sujetos a estrictos controles de precios por parte del Estado.

Gráfico 3.5
ÍNDICE DE LA EVOLUCIÓN DEL SALARIO EN
LA INDUSTRIA AZUCARERA: 1966-1977
 (ÍNDICE BASE 1966=100)



FUENTE: Corporación Estatal del Azúcar (CEA): salarios promedios por hombre ocupado en la industria azucarera por sector industrial y agrícola: 1966-1972.

A partir de 1969 la situación será distinta. La tendencia en la evolución del salario industrial no azucarero se modifica radicalmente, en conjunción con el repunte del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que por estos

años se activa. Ahora bien, este proceso tiene matices que es preciso tomar en consideración. En primer lugar, contra lo que se pueda creer, a partir de 1969 el incremento de los salarios nominales es más acelerado que en el período 1963-1968: entre 1969-1976 los salarios nominales prácticamente se duplican en todas las ramas y sectores de la industria manufacturera. Sin embargo, esta duplicación no logra frenar la caída sistemática del salario real que paralelamente se verifica. En este último aspecto el cambio fue rotundo, pero tuvo expresiones distintas en las diferentes ramas y sectores de la industria manufacturera. La caída del salario real fue más dramática en las industrias productoras de bienes de consumo, donde la contracción salarial fue de alrededor del 50 %. En las ramas productoras de bienes de capital y de consumo duradero la contracción del salario real fue menor, descendiendo solo un 17 %. En las ramas productoras de bienes intermedios la contracción del salario real fue de 33 %, aproximadamente.

En el sector de la construcción la evolución de los salarios fue semejante a la de las industrias manufactureras tradicionales, aun cuando el nivel de vida de los trabajadores urbanos de este sector era más bajo y precario que el de los obreros industriales vistos en su conjunto⁴¹.

Como se aprecia, hay un patrón muy claro en este proceso: son las ramas tradicionales de la industria manufacturera las que sufren la mayor contracción salarial, no tanto las modernas, productoras de bienes intermedios, de capital y de consumo duradero, en las que descansaba el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Ciertamente, en estas últimas ramas también la caída del nivel de vida de la clase obrera fue significativa, pero no de consecuencias tan dramáticas como en el caso del sector tradicional de la industria, donde prácticamente los obreros vieron contraer su nivel de vida a la mitad de sus capacidades adquisitivas alcanzadas en 1969.

⁴¹ La investigación de Rivas (1982) analiza en particular el punto.

El otro aspecto significativo en la evolución de los salarios en el período 1969-1976 es el hecho de que el descenso del nivel de vida de los trabajadores urbanos en el período no fue resultado de una estrategia que paralizó el crecimiento de los salarios nominales, sino la contracción de la capacidad adquisitiva de los salarios ante el aumento de la inflación⁴².

Cuadro 3.14
**EVOLUCIÓN DEL SALARIO INDUSTRIAL NO AZUCARERO
POR HOMBRE OCUPADO
1960-1976**

Años	Bienes de Consumo		Bienes Intermedios		Bienes de Capital y de Consumo Duradero	
	Nominal	Real	Nominal	Real	Nominal	Real
1960	577	-	767	-	707	-
1961	573	-	877	-	784	-
1962	796	-	952	-	975	-
1963	931	1,017	1,294	1,413	1,073	1,172
1964	1,037	1,116	1,395	1,502	1,516	1,633
1965	997	997	1,371	1,371	1,186	1,186
1966	1,101	1,160	1,549	1,632	1,400	1,475
1967	1,135	1,162	1,650	1,689	1,329	1,361
1968	1,176	1,176	1,705	1,705	1,449	1,449
1969	1,399	1,399	1,852	1,852	1,417	1,417
1970	1,313	1,237	1,898	1,788	1,672	1,575
1971	1,315	1,177	2,018	1,806	1,741	1,558
1972	1,489	1,199	1,918	1,545	1,806	1,455
1973	1,534	1,108	1,797	1,298	1,769	1,278
1974	1,566	904	2,192	1,364	1,960	1,219
1975	1,665	892	2,277	1,221	2,191	1,174
1976	1,633	837	2,452	1,323	2,343	1,200

FUENTE: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE): *Boletines Industriales*, 1960-1976.

En el sector gubernamental en materia salarial y de empleo la estrategia consistió en la paralización del salario nominal y la reducción del volumen de empleo, sobre todo en los años 1966-1968, pues en el período 1969-1976 se verifica un ligero incremento del volumen global del empleo en las actividades gubernamentales.

⁴² El ensayo de Cabral (1975) demuestra este argumento de manera convincente.

Cuadro 3.15

SALARIOS MÍNIMOS URBANOS

Y SALARIOS AGRÍCOLAS, INDUSTRIALES Y EN LA CONSTRUCCIÓN

(CIFRAS MENSUALES)

1965-1980

Años	Salarios Nominales (En Pesos)				Índice de precios al consumidor ('1970=100) AM (a)	Salarios Reales (A Precios de 1970)			
	Industria manufacturera	Construcción (mínimo)	Agrícola	Mínimo urbano		Industria manufacturera	Construcción	Agrícola	Mínimo urbano
1965	114.2	113.0	-	55.1	94.9	120.3	113.1	-	58.1
1966	120.0	113.0	-	55.1	93.5	128.3	120.9	-	58.9
1967	112.7	113.0	-	55.1	95.3	118.3	118.6	-	57.8
1968	122.5	113.0	-	55.1	96.9	126.4	116.6	-	56.9
1969	142.5	113.0	-	55.1	95.1	149.9	118.8	-	57.0
1970	139.2	113.0	-	59.0	100.0	139.2	113.0	-	59.0
1971	146.0	113.0	-	65.8	102.0	141.8	109.7	-	63.9
1972	158.2	113.0	-	71.2	111.0	142.5	101.8	-	64.1
1973	166.8	113.0	-	71.2	127.8	130.5	88.4	-	55.7
1974	192.8	169.0	-	71.2	144.6	133.3	78.1	-	49.2
1975	219.6	169.0	-	102.3	165.6	132.6	102.1	-	61.8
1976	-	169.0	-	102.3	178.6	-	94.6	-	57.3
1977	-	169.0	-	102.3	201.4	-	83.9	-	50.8
1978	-	169.0	-	102.3	208.5	-	81.1	-	49.1
1979	-	-	-	-	227.8	-	-	-	-
1980	-	-	-	125.0	258.6	-	-	-	-

FUENTE: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE): República Dominicana en Cifras, varios años; OIT: Anuario de Estadísticas del Trabajo, Ginebra, varios años.
Índice base 1971 llevado a 1970.
AM=Área Metropolitana.

Los análisis precedentes permiten sostener algunas apreciaciones generales acerca de las tendencias de los salarios obreros en las zonas urbanas en el período 1966-1978. Mientras el nuevo modelo de acumulación se mantuvo en una fase de “despegue” del desarrollo industrial por sustitución de importaciones, los salarios reales en el sector industrial no azucarero entre 1966-1969 se mantuvieron relativamente estables con ligeras alzas. Una vez el proceso de industrialización se activó, aun cuando los salarios nominales se duplicaron, los salarios reales tuvieron una drástica tendencia a la baja, sobre todo por el hecho de los efectos inflacionarios que acompañaron el proceso global de crecimiento capitalista. Esto tuvo efectos más profundos en las ramas tradicionales de la industria que en las modernas. Es significativa esta diferencia. Es sabido que en las ramas productoras de bienes de consumo (tabaco, ron, alimentos, textiles, calzados, etc.) se encuentran las industrias de menor productividad y tecnológicamente más atrasadas del país⁴³. Asimismo, es en este sector de la actividad industrial donde se encuentra alojada la pequeña y mediana industria. Por lo demás, dichas ramas fueron las menos protegidas por la Ley 299 de incentivo industrial, base de la industrialización por sustitución de importaciones, pese a que todavía hoy día dichas ramas continúan siendo el sector más significativo de la industria en términos de su aportación al producto industrial.

Todo ello nos obliga a concluir que si bien la actividad industrial en el período 1969-1976 acompañó su notable crecimiento con una caída significativa del salario real, en las ramas industriales inauguradas en 1968 y en aquellas modernas de alta composición orgánica del capital, los efectos de la caída de los salarios, aun cuando fueron significativos (alrededor de un

⁴³ No se puede ser tajante con esta afirmación, pues en estas ramas tradicionales hay una gran heterogeneidad estructural: la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, cuya productividad es baja, apoyándose en tecnología “atrasada”. Pero en estas ramas hay también industrias grandes muy modernas y competitivas, como son algunas empresas modernas dedicadas a la producción de ron, cigarrillos, tabaco. Véase a Moya Pons (1992), Cassá (1986), Chez Checo y Sang Ben (2008).

15 % descendió el salario real en dichas industrias modernas), no fueron tan dramáticos como en las industrias tradicionales. Esa diferencia en materia salarial entre industrias tradicionales y modernas de alguna manera reproducía un esquema semejante al de la industria azucarera. El punto consiste en que era en las industrias tradicionales donde se concentraba el grueso de la población obrera industrial. Las nuevas industrias surgidas al calor del proceso de industrialización por sustitución de importaciones continuaron siendo escasas en número, aun cuando su importancia económica en la estructura industrial se acentuaba cada día⁴⁴.

Cuadro 3.16
**ESTIMACIÓN DE LOS SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN**
(En RD\$)
1970-1979

Años	Años/Hombre	Salarios Estimados Valor Nominal	Salarios Estimados Valor Real
1970	26,579	63.79	63.79
1971	34,521	88.32	82.85
1972	40,483	112.41	90.16
1973	42,229	135.00	101.33
1974	48,108	174.00	115.46
1975	52,850	218.17	126.84
1976	50,354	224.65	120.85
1977	53,353	268.65	128.05
1978	54,746	306.40	131.39
1979	59,292	343.80	142.30

FUENTE: Cámara Dominicana de Comercio: *La industria de la Construcción y su Incidencia en la Economía Nacional*, Santo Domingo, 1981.

⁴⁴ En su evaluación de la Ley 299 de desarrollo industrial, Vega (1973b) hace un análisis de esta problemática que debe verse.

Cuadro 3.17
**NÚMERO DE EMPLEADOS FIJOS DEL GOBIERNO CENTRAL
 POR ESCALA DE SALARIOS MENSUALES
 1966-1977**

Años	Empleados por Escalas Salarial						Total de Empleados
	\$0-100	\$101-200	\$201-300	\$301-400	\$401-500	Más de \$500	
Valores Absolutos							
1966	51,235	7,500	3,248	1,154	489	463	64,389
1967	49,150	10,965	3,800	1,166	420	166	65,666
1968	49,453	12,599	4,184	1,184	303	172	67,895
1969	48,615	13,165	4,258	1,221	217	286	67,762
1970	49,466	13,245	4,200	1,289	200	290	68,690
1971	50,009	13,612	4,149	1,397	292	311	69,770
1972	56,638	13,963	4,388	1,454	345	341	77,127
1973	50,481	15,205	4,101	1,586	648	449	72,470
1974	50,934	17,223	4,124	1,839	707	465	75,292
1975	53,597	20,733	4,458	1,990	728	530	81,936
1976	33,691	44,701	5,108	2,296	748	580	87,124
1977	33,941	47,493	5,573	2,419	768	611	90,805
Valores Relativos (%)							
1966	79.6	12.1	5.0	1.8	0.8	9.7	100.0
1967	74.8	16.7	5.8	1.8	0.6	0.2	100.0
1968	72.8	18.6	6.2	1.7	0.4	0.2	100.0
1969	71.7	19.4	6.3	1.8	0.3	0.4	100.0
1970	72.0	19.3	6.1	1.9	0.3	0.4	100.0
1971	71.7	19.5	5.9	2.0	0.4	0.4	100.0
1972	73.4	18.1	5.7	1.9	0.4	0.4	100.0
1973	69.6	21.0	5.6	2.2	0.9	0.6	100.0
1974	67.6	22.9	5.5	2.4	0.9	0.6	100.0
1975	65.4	25.3	5.3	2.4	0.9	0.6	100.0
1976	38.7	51.3	5.9	2.6	0.9	0.7	100.0
1977	37.4	52.3	6.1	2.7	0.8	0.7	100.0

FUENTE: Oficina Nacional de Presupuesto (basado en el presupuesto nacional).

El proceso de industrialización en los años 1966-1978, ciertamente se desarrolló parejo a un deterioro creciente del salario real. Aun así, como he venido insistiendo, el efecto del deterioro salarial afectó de manera desigual a la clase obrera urbano-industrial, incidiendo sobre todo en sus estratos vinculados a las ramas industriales tradicionales. Tengo la impresión (aunque esto merece estudios más sistemáticos) de que aquí encontramos uno de los elementos que pueden contribuir a explicar la capaci-

dad de desmovilización del proletariado industrial del régimen balaguerista. Mi proposición es que el régimen logró desmovilizar en el largo plazo a la clase obrera como conjunto ayudado por el hecho de que la caída del salario real tuvo efectos distintos en los diferentes estratos del proletariado.

De esta forma fue más agudo el descenso del salario en aquellos estratos del proletariado menos organizados y vinculados sobre todo a los sectores y ramas más tradicionales de la economía. En cambio, en los estratos más modernos de la clase obrera, aunque también sufrieron los efectos de la caída del salario real, fueron menos afectados.

Se verificaban así en el proletariado urbano-industrial importantes diferencias en los niveles de ingreso y condiciones de vida. En los estratos más privilegiados del proletariado esto robustecía su conservadurismo político, haciendo de su actividad sindical un ejercicio puramente economicista en sus reivindicaciones y conservador en sus propósitos políticos. En los estratos menos privilegiados del proletariado, aun cuando su combatividad política podía ser superior, su capacidad de organización sindical era casi nula, unido, por lo demás, a su notoria dispersión. También hay que tomar en consideración que el proceso de modernización económica observado en el país, sobre todo en el plano industrial, creó nuevos estratos obreros surgidos a la luz del proceso de sustitución de importaciones en las ramas industriales más dinámicas. Con ello se introducían elementos que acentuaban la ya profunda heterogeneidad estructural y política de la clase obrera industrial dominicana. En su conjunto esos elementos generaban efectos económicos y sociales que tendían a frenar la acción política de las capas más favorecidas y mejor organizadas de la clase obrera en la coyuntura de auge del proceso de industrialización, más allá de la acción represiva del Estado. Estoy convencido de que fue sobre este elemento que el régimen logró cimentar, a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, su estrategia de cooptación prebendalista del sindicalismo, haciendo innecesario el recurso sistemático a las acciones represivas sobre el movimiento obrero, como fue típico de los años 1966-1968.

3.2.3 *La distribución del ingreso y el crecimiento del mercado interno*

De todos modos, pese a que la evolución de los salarios obreros tuvo efectos diferenciales, según el estrato del proletariado afectado, no se puede perder de vista el hecho general de que los niveles de vida de las clases trabajadoras en su conjunto se vieron significativamente mermados en el período 1966-1978. Esto se revela claramente en los cambios habidos en la distribución del ingreso en el período aludido.

Como ha demostrado Estrella⁴⁵, por lo menos hasta 1969 la República Dominicana disfrutó de una gran estabilidad de los precios. Este es un punto fundamental para comprender la estrategia estatal en materia de salarios, pues, como se ha visto, en el período de despegue del modelo reformista de acumulación (1966-1969) dicha estabilidad de precios constituyó una variable fundamental que le permitió al Estado orquestar su política de contracción salarial, sin el riesgo inmediato de un explosivo deterioro del nivel de vida obrero⁴⁶. Pero a partir de 1970 la situación cambió, iniciándose un período inflacionario que alteró las bases de la estrategia de constricción salarial del Estado, incidiendo ahora dicha política directamente en el deterioro del nivel de vida de los trabajadores urbanos y rurales.

Se argumenta que en el despuntar del proceso inflacionario de los setenta incidió de modo directo y determinante el grado de apertura de la economía dominicana al exterior, lo cual obligó a la importación de la inflación de otros países, gravitando esto en el costo de los insumos industriales y agropecuarios, pero también en los bienes de consumo importados⁴⁷. Como ha señalado Cabral, a este factor se une una “[...] expansión de la masa monetaria, junto con limitaciones a la expansión de la producción interna, especialmente de alimentos” o que contribuyó al aumento de los precios internos de muchos productos de origen esencialmente agropecuario⁴⁸.

⁴⁵ Estrella (1971).

⁴⁶ Para mayores detalles, véase a Lozano (1984).

⁴⁷ Fue Cabral (1975) quien planteó consistentemente esta tesis.

⁴⁸ Cabral (1975), *op. cit.*, p. 8.

Cuadro 3.18
PRECIOS E INFLACIÓN
(1966=100)
1966-1978

Años	Índice de Precios al Consumidor	Inflación (%)	Índice de Precios al Consumidor Ajustado*	Inflación ajustada (%)
1966	100.0	0.18	100.0	1.2
1967	101.25	1.25	102.00	2.0
1968	101.43	0.18	103.02	1.0
1969	103.03	1.58	105.60	2.5
1970	106.95	3.80	109.93	4.1
1971	111.55	4.30	115.10	4.7
1972	120.25	7.80	125.46	9.0
1973	138.40	15.10	146.66	16.0
1974	156.67	13.20	168.81	15.1
1976	179.39	14.50	196.49	16.4
1976	193.56	7.90	214.17	9.0
1977	218.34	12.80	244.15	14.0
1978**	233.87	7.11	268.57	10.0

*Este índice ajusta el índice de precios al consumidor al introducir una ponderación de los precios de los bienes importados.

**Cifras preliminares.

FUENTE: Banco Central: *Boletín Mensual*; Banco Mundial; Fondo Monetario Internacional. Tomado de Dauhajre (1968).

Como vemos, son dos los elementos claves del proceso inflacionario:1) los límites impuestos por el carácter dependiente del capitalismo dominicano en un contexto internacional caracterizado por la inflación⁴⁹ y 2) los límites estructurales internos en materia de productividad, derivados de la estructura del subdesarrollo, sobre todo en el sector agropecuario.

La inflación de los años setenta, como se ha insinuado arriba, no solo gravitó sobre un particular género de productos, sino que repercutió en el conjunto de la economía, vista como un todo. Como revela el cuadro 3.20, entre 1970 y 1977 en la ciudad de Santo Domingo hubo una significativa elevación de los precios no solo de los artículos de consumo suntuario duraderos, sino de los alimentos y bienes industrializados.

⁴⁹ Sobre la inflación estructural latinoamericana, véase a Prebisch (1963). También puede verse a Dos Santos (1980).

Cuadro 3.19
ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
POR GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS
1963-1978

Años	Índices de Precios al Consumidor (Base 1969=100)							
	General	Alimentos, bebidas y tabaco	Vivienda	Prendas de vestir (1)	Diversión	Bienes de consumo		Servicios
						No duraderos	Duraderos	
1963	100.0	102.3	104.5	104.4	91.7	101.3	92.8	98.6
1964	100.6	104.7	105.3	100.2	91.1	102.2	96.4	98.6
1965	99.7	106.2	105.5	100.2	87.1	101.6	92.3	97.5
1966	98.3	103.4	100.0	93.3	92.6	98.6	93.3	98.2
1967	100.2	104.0	101.1	96.9	96.2	100.2	101.8	100.2
1968	101.9	106.6	100.9	98.1	98.7	102.9	100.0	100.6
1969	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1970	105.2	101.5	101.5	96.8	111.4	106.0	95.1	105.1
1971	107.6	106.9	106.9	98.5	107.0	108.3	102.9	107.0
1972	116.8	120.8	120.8	114.9	111.9	115.7	112.7	118.5
1973	134.4	140.7	140.7	134.9	121.6	134.5	162.7	132.6
1974	152.1	153.3	153.3	152.0	137.6	160.2	187.3	139.1
1975	174.1	169.3	169.3	181.7	156.6	188.3	205.5	153.1
1976	187.8	192.6	192.6	204.3	178.5	197.6	250.3	170.9
1977	211.8	215.4	215.4	237.4	208.7	222.9	291.6	192.1
1978	219.3	217.5	217.5	268.2	231.3	233.2	301.2	195.5

Incluye calzados y accesorios.

FUENTE: Banco Central y Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
 Tomado de ONE: *República Dominicana en Cifras, 1978*.

El proceso inflacionario de los setenta afectó de manera desigual a los distintos grupos de ingresos, penalizando sobre todo a aquellos estratos con ingresos fijos, esencialmente a los grupos de trabajadores urbanos y rurales.

Según encuestas realizadas por el Banco Central y la OIT⁵⁰, en 1973 los grupos de población con menores ingresos habían reducido significativamente su participación en la distribución general del ingreso, pasando de controlar el 2.9 % por ciento al 1.4 % en 1973. Los grupos de mayores ingresos conservaban su participación relativa, controlando alrededor del 54 % del volumen total del ingreso, mientras que los grupos de medianos ingresos habían elevado significativamente su participación del 27.6 % en 1969 al 30.2 % en 1973 (cuadro 3.21).

Estas informaciones son reveladoras de un proceso de reconcentración del ingreso que, sin cuestionar el elevado volumen de ingresos controlado por los grupos altos, penaliza a los bajos a favor de los estratos intermedios. Como veremos, esto constituye un elemento esencial para la comprensión del patrón de crecimiento del sector industrial urbano y los grupos importadores, crecimiento que en ambos casos ha venido a encontrar un apoyo de mercado en las clases medias urbanas en expansión. Cabral argumenta con razón que:

[...] si comparamos la tendencia de los salarios con la tendencia de la renta nacional tenemos que concluir que los incrementos apreciables de esta última que se han producido en los últimos años (1966-1973, WL), han sido captados preponderantemente por los sectores no asalariados, o sea, por los de altos ingresos por concepto de rentas y beneficios, implicando así un empeoramiento en la distribución del ingreso⁵¹.

Este proceso de concentración desigual de la renta tiene efectos no solo a nivel de los grupos de ingresos, sino también en términos regionales. En el caso de las zonas rurales, estudios

⁵⁰ Banco Central: *Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares en Santo Domingo* (1969) y ONAPLAN (1973).

⁵¹ Cabral (1975), *op. cit.* p. 8.

del Banco Central⁵² revelan una tendencia análoga a la de las ciudades, en cuanto a la concentración desigual del ingreso se refiere. A esto se añade el hecho de que, en las zonas rurales, a la ya desigual distribución del ingreso, propia de los grupos sociales del agro, se añade la desigualdad regional, en términos comparativos con las ciudades. El cuadro 3.22 es revelador de esta situación.

Es preciso considerar más de cerca la relación campo-ciudad. En este sentido, como ya se ha argumentado, el modelo de crecimiento reformista sistemáticamente penalizó al sector agrario a través de los controles de precios y precios de garantías, pero sobre todo a partir del drenaje de excedentes que la burguesía compradora ha hecho del campo, cuyos volúmenes han ido a parar al exterior o a inversiones en inmuebles y finanzas, cuyas tasas de interés son para dicho sector mucho más atractivas y menos riesgosas que las inversiones productivas industriales. Esto sin considerar que, a través de sus relaciones de mercado con las ciudades, los términos de intercambio de ese comercio han favorecido sobre todo a los importadores e industriales urbanos⁵³.

⁵² Banco Central: *Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares* (1977).

⁵³ Este aspecto de la cuestión es erróneamente analizado por Cabral (1975), pese a que en su artículo se plantea el asunto con cierta claridad. La base de la confusión estriba en que el solo análisis de los precios no puede dar pie a la afirmación de que en 1973-1975 el sector rural se vio favorecido por la política económica del Estado en materia de control del excedente agropecuario. Como bien critica Tonos (1976), el análisis de Cabral no pondera una serie de variables claves, como son la variabilidad de los efectos de las fluctuaciones de los precios agropecuarios, según la dimensión de las fincas en términos de costos de producción, la mayor velocidad del cambio de los precios en los artículos de origen urbano-industrial que en los de origen agropecuario, la mayor dificultad del pequeño productor agropecuario de acceso al crédito bancario estatal y privado, así como los efectos de la expansión del mercado interno para los productos industriales en el nivel de vida de los campesinos.

Cuadro 3.20

**ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR GRUPOS DE INGRESO
Y SUBGRUPOS DE BIENES ALIMENTICIOS
PARA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
(1969=100)
1970-1977**

Categorías de Bienes y Servicios por Grupos de Ingreso	Años							
	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
RD\$ 50.1 – 100.0:								
Cereales y derivados	108.2	104.7	117.2	159.4	201.1	194.8	192.7	197.5
Raíces y tubérculos	113.1	126.9	143.0	225.1	196.2	303.5	195.1	277.6
Azúcar	93.8	97.7	98.7	99.7	159.4	170.1	170.1	170.1
Carnes y aves	125.8	134.4	152.8	184.0	195.0	185.3	185.3	186.3
Huevos	107.0	87.7	96.5	101.8	135.1	110.5	119.3	140.4
Leche	103.5	110.1	120.3	121.6	121.6	141.9	141.9	141.9
Aceite y grasas	94.7	97.0	100.6	104.9	180.8	182.3	181.6	180.5
Tabaco	100.0	100.0	100.0	105.9	117.6	117.6	117.6	117.6
RD\$ 100.1 – 200:								
Cereales y derivados	107.5	104.3	116.7	160.7	182.5	194.4	192.4	196.9
Raíces y tubérculos	107.3	121.8	137.2	212.5	201.8	286.1	190.3	261.1
Azúcar	97.3	104.4	105.3	106.2	187.5	163.4	163.4	184.7
Carnes y aves	120.3	126.9	146.9	178.7	189.7	181.0	180.5	183.0
Huevos	107.0	87.7	96.5	101.8	134.1	110.5	119.3	140.4
Leche	114.8	113.8	124.3	125.8	128.4	153.3	152.4	151.5
Aceite y grasas	97.9	100.5	104.3	108.7	186.6	189.2	188.3	187.2
Tabaco	100.0	100.0	100.0	105.6	111.1	111.1	111.1	111.1
RD\$ 200.1 – 300:								
Cereales y derivados	107.3	104.1	116.4	161.4	202.0	194.1	192.3	186.7
Raíces y tubérculos	105.8	117.7	133.3	207.4	184.0	278.6	178.2	248.6
Azúcar	97.5	105.2	106.1	107.0	156.1	164.9	164.9	186.0
Carnes y aves	115.8	171.5	140.0	167.2	180.8	172.9	172.5	175.5
Huevos	105.2	86.2	94.8	100.0	132.8	108.6	117.2	137.9
Leche	113.9	119.2	124.6	126.2	130.1	156.6	156.6	154.3
Aceite y grasas	97.6	100.5	104.3	108.7	186.1	189.4	188.6	187.4
Tabaco	100.0	100.0	100.0	108.3	125.0	125.0	125.0	125.0
RD\$ 300.1 – 400:								
Cereales y derivados	100.4	97.5	109.0	153.0	190.5	182.3	180.6	184.6
Raíces y tubérculos	105.5	119.3	134.1	204.8	184.9	278.0	186.4	253.5
Azúcar	103.2	112.2	108.9	110.2	173.6	179.6	179.7	184.8
Carnes y aves	127.3	128.3	144.7	174.8	189.9	184.0	185.6	187.4
Huevos	113.0	92.6	101.9	107.4	147.6	116.7	125.9	148.1
Leche	100.9	103.5	112.7	114.7	128.0	145.2	145.6	145.0
Aceite y grasas	00.5	102.9	107.0	111.9	189.6	195.7	194.0	192.1
Tabaco	100.0	100.0	100.0	107.4	111.1	111.1	111.1	111.1

FUENTE: Banco Central, *Boletines Mensuales*.

Cuadro 3.21
**CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
EN SANTO DOMINGO
1969-1973**

Grupo de Ingreso (Por cientos del total de familias)	Porcentaje del total de los ingresos de los trabajadores	
	1969	1973
20% bajo	2.9	1.4
50% bajo	17.6	15.4
30% bajo	27.6	30.2
20% bajo	54.8	54.4

FUENTE: ONAPLAN (1973).

El segundo aspecto del problema regional en la distribución del ingreso se refiere al papel estratégico que en el curso de los años 1960-1976 ha ido adquiriendo la ciudad de Santo Domingo como centro articulador del mercado interno. Los datos de la distribución regional de las ventas al por mayor ratifican este argumento. El cuadro 3.23 permite reconocer que en el curso del período 1960-1976, la ciudad de Santo Domingo se ha convertido en el centro monopolizador de las ventas al por mayor, concentrando del 65% al 70 % de estas; como tal, esto no es indicativo de la concentración espacial del consumo, sino de la fuerza económica de Santo Domingo como monopolio comercial. De ese modo, como indica Cabral, “Santo Domingo se ha convertido cada vez más en el centro distribuido del país, a expensas de Santiago y otras ciudades del país”. Se ha articulado así, en términos del mercado interno, una verdadera constelación metrópoli-satélite, en la que el eje articulador y dominante ha sido Santo Domingo⁵⁴. Ahora bien, las mismas tendencias se observan en términos de la distribución regional

⁵⁴ Véase Cabral (1975). En una perspectiva comparativa con Latinoamérica debe recordarse aquí la tesis de Stavenhagen (1969) y González Casanova (1969) sobre el colonialismo interno en el proceso de articulación de las formaciones sociales latinoamericanas al sistema mundial. En este aspecto debe recuperarse las tesis de Gunder Frank (1970) sobre la articulación de cadenas de mediación metrópoli-satélite, no ya solo en el plano de las relaciones entre los Estados centrales y los periféricos, sino internamente en las formaciones sociales latinoamericanas.

de la venta al detalle (cuadro 3.24), con el atenuante de que el grado de centralización y monopolio de estas por parte de la ciudad de Santo Domingo es menor. A esto se añade que, para algunos productos, como el ron y los cigarrillos, el incremento de sus volúmenes de venta toma una distribución que favorece al resto del país y no a Santo Domingo. Todo ello permite formular la hipótesis de que el eje articulador del mercado interno ha sido en el período bajo estudio la ciudad de Santo Domingo, pese a que posiblemente la capacidad de adquisición de sus pobladores no haya aumentado, como lo planteaba Gunder Frank en su análisis de los círculos internos metrópoli-satélite en Latinoamérica⁵⁵.

Cuadro 3.22

INGRESOS Y GASTOS MEDIOS MENSUALES DEL HOGAR
POR ZONAS SEGÚN CATEGORÍA DE INGRESOS MENSUALES
(EN RD\$)
1976-1977

Grupos de ingresos	Zona Urbana		Zona Rural	
	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos
– 50.00	27.69	106.92	32.29	82.91
50.01 – 100.00	77.83	119.46	77.46	98.95
100.01 – 200.00	150.37	180.18	141.43	150.65

FUENTE: Banco Central: *Encuesta de Ingresos y Gastos (1976-1977)*.

El último aspecto que vale la pena destacar en el análisis de la distribución del ingreso es el papel de los grupos medios. Todo parece indicar que estos grupos en el período estudiado no solo crecieron en términos numéricos, sino que incluso su capacidad adquisitiva se elevó. En este grupo social se ha apoyado la expansión del emergente sector industrial, pero también, como analizaré más abajo, en las capas más favorecidas de la clase media, el alto comercio importador logró encontrar un espacio de mercado estable.

¿Cuál es el significado de clase de esos procesos en la dinámica más general del desarrollo capitalista en el período 1966-1978?

Cuadro 3.23
DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS VENTAS AL POR MAYOR
 (En millones de RD\$)
1960-1975

Años	Distrito Nacional		Provincia Santiago		Resto del País		Total Nacional
	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
1960	165.5	60.6	54.0	19.8	53.4	19.6	272.9
1961	157.2	60.5	52.0	20.0	50.8	19.5	260.0
1962	208.3	61.4	64.2	18.9	66.7	19.7	339.2
1963	230.1	63.1	62.7	17.2	71.8	19.7	364.6
1964	252.8	62.3	76.4	18.8	76.6	18.9	405.8
1965	188.9	59.2	62.3	19.6	67.7	21.2	318.9
1966	239.0	61.5	64.2	16.5	85.7	22.0	388.9
1967	264.1	64.4	64.8	15.8	81.0	19.8	409.9
1968	291.9	66.7	68.8	15.7	77.3	17.6	438.0
1969	319.9	66.1	74.5	15.4	89.5	18.5	483.9
1970	394.1	69.1	87.1	15.3	89.4	15.6	570.6
1971	478.8	71.2	97.6	14.5	95.9	14.3	672.3
1972	547.2	71.8	110.9	14.5	104.5	13.7	762.6
1073	626.8	71.6	137.4	15.7	111.6	12.7	875.8
1974	863.7	73.6	175.4	14.9	135.2	11.5	1,174.3
1975*	904.9	73.8	195.4	15.9	126.4	10.3	1,226.7

*Cifras sujetas a rectificación.
FUENTE: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE): *República Dominicana en Cifras*, 1975.

Bajo el régimen balaguerista el modelo de acumulación sostuvo como uno de sus pilares fundamentales una elevada tasa de explotación sobre el conjunto de la clase obrera, al tiempo que la dinámica del mercado se apoyó en una desigual distribución de la renta. Sin embargo, como he demostrado, esto tuvo efectos diferenciales según los estratos y sectores de las clases trabajadoras que fueran afectados. Mi hipótesis sostiene que el sector de los trabajadores sobre el que fundamentalmente se organizó este esquema de explotación del trabajo fue el proletariado azucarero, no tanto el proletariado industrial urbano, aunque este también fue seriamente afectado en materia de sus remuneraciones y potencial de organización. El campesinado fue el otro gran sector de las clases trabajadoras seriamente afectado por la estrategia reformista de acumulación,

sobre todo los trabajadores ligados a los minifundios de subsistencia y el proletariado agrícola.

Visto en esta perspectiva, los segmentos y sectores de clases más afectados por esta estrategia de acumulación fueron esencialmente los ligados al tren exportador y agrario tanto en su expresión campesina como azucarera. Esta tesis se aviene en armónica correspondencia con el patrón de acumulación discutido arriba, según el cual las actividades agroexportadoras en su conjunto constituyeron la fuente de excedentes con los cuales se financiaba el crecimiento capitalista en el ámbito urbano-industrial y comercial.

Sin embargo, en la medida en que este modelo de crecimiento drenaba excedentes del agro, sin proceder a una consecuente modernización de sus estructuras productivas, la crisis agraria no se hizo esperar. Esto recompuso la naturaleza de la oferta de mano de obra, así como los patrones de urbanización, de cuyos efectos interesa destacar dos, principalmente: 1) en tales condiciones el proceso de terciarización de la economía urbana se aceleraba sin un consecuente apoyo en actividades productivas, lo que si bien permitía sostener el acelerado desarrollo de una burguesía comercial-urbana, más bien convertía a las ciudades en verdaderos centros intermediarios del mercado mundial, en receptáculo de toda clase de labores improductivas que socavaban los excedentes básicos que hubiesen podido sostener un proceso de desarrollo sostenido. 2) En términos de las clases trabajadoras urbanas esto tuvo efectos directos. En primer lugar, la incapacidad del capitalismo urbano-industrial de convertirse en la base del proceso de desarrollo implicó el abultamiento de un significativo subproletariado urbano, ligado a las actividades propias del llamado sector informal de la economía urbana. En tales condiciones, las actividades urbanas de mayor dinamismo y más alta capitalización, como la industrial, tenían una escasa capacidad de absorción de mano de obra. Así, el subproletariado urbano tendía a girar en torno a las actividades improductivas del pequeño comercio, los servicios personales y, en fin, de toda suerte de formas de subem-

pleo abierto o disfrazado, caracterizadas por su escasa remuneración, baja productividad y gran inestabilidad ocupacional. Esto introdujo una gran dicotomía en el conjunto de las clases trabajadoras urbanas, en tanto tendía a crear dos grandes bloques: el primero y más numeroso constituido por el grueso del subproletariado urbano y las masas desempleadas y el segundo por la reducida clase obrera industrial.

El segundo aspecto notable en términos de este patrón de crecimiento urbano estuvo constituido por el significativo desarrollo de la pequeña burguesía urbana. Al igual que el caso del proletariado, en el seno de esta pequeña burguesía se logra advertir serias diferencias de clase, sobre todo en términos de sus capacidades de ingreso y estabilidad ocupacional. De esta manera, si bien el grueso de la pequeña burguesía urbana crecida en función de este patrón de urbanización se concentró en actividades de muy baja productividad e ingreso (colmados, bares, pequeños talleres artesanales y de mecánica, etc.) un reducido sector económicamente significativo también logró sostenerse.

En tercer lugar, a la sombra de este patrón de urbanización se desarrolló una amplia clase media urbana, profundamente heterogénea. Se destaca aquí el sector de la clase media vinculado a las actividades burocráticas gubernamentales y privadas con muy bajos ingresos. Es preciso reconocer también un significativo sector de la clase media de altos ingresos, vinculado a las actividades gerenciales, la banca y el alto comercio y la burocracia administrativa y de servicios.

Al igual que el impulso de la industrialización, la modernización de la burguesía comercial se verificó en consonancia con el despuntar de las clases medias urbanas. La “eclosión” de los sectores medios como fenómeno de masas indudablemente se encuentra relacionado con el proceso más general de urbanización observado en el país durante los años 1950-1980 en estrecha articulación con el intenso proceso migratorio rural-urbano observado en esos años. Sin embargo (y esto es menos evidente), la “explosión urbana” se encuentra enlazada al proceso de

modernización económica del país desde finales de la Segunda Guerra Mundial en consonancia con el dinamismo adquirido por el tren agroexportador.

Cuadro 3.24
VENTAS AL DETALLE POR LOCALIDADES
1960-1975

Años	Distrito Nacional		Provincia de Santiago		Resto del País		Total Nacional
	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs
1960	69,740,355	52.2	16,499,137	12.3	47,490,757	35.5	133,730,249
1961	62,630,773	52.1	15,577,081	12.9	42,076,271	35.0	120,284,125
1962	87,774,751	55.5	20,547,415	13.0	49,902,945	31.5	158,225,111
1963	116,874,498	58.9	22,808,032	11.5	58,717,076	29.6	198,399,606
1964	116,345,938	57.7	23,744,625	11.8	61,509,940	30.5	201,600,503
1965	78,246,336	48.5	23,481,881	14.5	59,759,147	37.0	161,487,364
1966	113,235,767	56.2	23,329,200	11.6	64,807,151	32.2	201,372,118
1967	120,144,214	59.2	22,931,587	11.3	59,966,988	29.5	203,042,788
1968	122,964,597	59.4	24,701,777	11.9	59,410,452	28.7	297,076,826
1969	136,127,213	61.4	24,835,678	11.2	60,807,177	27.4	221,770,237
1970	146,605,228	61.0	27,753,774	11.6	65,747,668	27.4	240,106,670
1971	162,534,457	62.3	29,420,946	11.3	68,960,741	26.4	260,916,144
1972	184,641,642	63.1	33,160,792	11.3	74,787,827	25.6	292,590,261
1973	247,263,252	68.0	39,772,943	10.9	76,565,811	21.1	363,601,106
1974	274,612,596	65.9	44,494,383	10.7	97,934,938	23.5	417,041,917
1975*	307,099,028	65.8	45,913,082	9.8	113,775,182	24.4	466,787,293

*Cifras sujetas a rectificación.
FUENTE: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

De este modo, las zonas urbanas pasaron de concentrar el 30.5 % de la población del país en 1960 (para un total de 3.0 millones de habitantes) a reunir el 52 % en 1981 (para una población de 6.0 millones de habitantes), creciendo en el período aludido a una tasa acumulativa anual de 6%. Las zonas rurales vieron disminuir su capacidad relativa de concentración poblacional, creciendo a una tasa cada vez más baja, como se señala en el cuadro 3.25.

Mientras tanto, el ritmo de las migraciones se hizo cada vez más intenso y su punto principal de recepción fue la región su-
reste del país, con la ciudad de Santo Domingo como eje princi-
pal. La región expulsora de población por excelencia ha sido la
zona Norte, donde se verifica la mayor concentración de pobla-
ción campesina del país. No es ocioso señalar que no todos los
flujos migratorios se dirigieron hacia las ciudades como destino,
gran parte de estos han tenido como objetivo final la emigración
hacia los Estados Unidos, principalmente, haciendo del ambien-
te urbano un espacio de intermediación social y económico para
la emigración definitiva.

Cuadro 3.25
TASAS DE CRECIMIENTO URBANO-RURAL
1920-1981

Períodos	Zona Urbana	Zona Rural
1920-1933	4.13	-3.44
1933-1950	4.39	1.90
1950-1960	6.13	2.70
1960-1970	5.97	-1.36
1970-1981	5.70	1.10

FUENTE: ONAPLAN (1981).

Como referí, en este proceso el Distrito Nacional (DN) ha sido
el principal receptor de la emigración interna, el cual creció en el
período 1960-1970 a una tasa de 6.1 % acumulativo anual (más del
doble de la población) y pasó a concentrar en 1980 el 44 % de la
población urbana del país y el 23.9 % de la población total.

Lejos de encontrarse estimulado por un dinámico proceso
de industrialización en las ciudades y modernización capitalis-
ta en el campo, las grandes masas migratorias a lo largo de estos
años han migrado de las zonas rurales a consecuencia de su
crisis y atraso secular, mientras en las ciudades no han logrado
la inserción ocupacional en el sector industrial de modo signi-
ficativo. En este sentido, las migraciones rural-urbanas han ro-
bustecido cada vez más un voluminoso sector terciario. Veamos
esto último más de cerca.

El grueso de la población ocupada en el llamado sector terciario se vincula a actividades de baja productividad, como la venta al detalle, los servicios personales, etc., concentrando así gran parte del subempleo urbano. Sin embargo, en este sector en el período 1950-1970 también observamos un proceso de intenso crecimiento de los servicios burocráticos ligados a la reproducción del aparato estatal o la actividad comercial y la actividad productiva, tales como los choferes, las actividades de gerencia y administración, etc. Es en este sector terciario, a excepción de los choferes, donde se concentra el grueso de la población de clase media de altos ingresos. Como vemos, en el terciario se expresa una “heterogeneidad estructural” que en el fondo reproduce, en el ámbito urbano, una característica propia del conjunto de la economía subdesarrollada. Esta situación, lejos de representar una “aberración social y económica”, sostenida sobre estas premisas, y apoyada en la debilidad de la actividad industrial, la expansión del terciario constituye una consecuencia de una matriz de desarrollo de base agroexportadora, dependiente del mercado mundial, donde la intermediación comercial y financiera es uno de los vehículos determinantes de los procesos redistribuidores del excedente producido en los ejes dinámicos de la economía vinculados al exterior.

En general, el análisis de los procesos de urbanización en sus insuficiencias en materia de generación de empleos, absorción de obra y participación en el PIB tiende a verse como un resultado directo y mecánico de las debilidades del proceso de industrialización y de la modalidad sustitutiva de importaciones del proceso de industrialización en América Latina. Es cierto que el proceso de sustitución de importaciones, al tener que cimentarse en un espacio tecnológico ahorrante de mano de obra, tiende a ser sumamente lento en materia de absorción de fuerza de trabajo y su correlato en la generación de empleos. En este sentido, hay un desfase estructural entre la intensidad del proceso migratorio rural-urbano y la lenta y débil capacidad de absorción de fuerza de trabajo por el sector industrial urbano.

Pero concentrar el análisis del problema en este punto es confundir su naturaleza y escamotear su solución.

En primer lugar, desechemos algunos mitos. Es un error pensar que la industrialización, aun en las condiciones consideradas “clásicas” (Inglaterra durante la Primera Revolución Industrial en los cincuenta años que van de 1700 a 1750), logró absorber la totalidad de la población rural liberada de sus vínculos con la tierra. Si Inglaterra no hubiera contado con la posibilidad de la emigración a las antiguas colonias del Norte, a lo que hoy es Estados Unidos, sus problemas en materia de desempleo hubiesen sido muy serios en los comienzos de la industrialización. En tal virtud, la industria requería del campo la mano de obra necesaria para la expansión de la planta industrial, no tanto la completa absorción de la totalidad de la sobrepoblación relativa expulsada del campo.

Cuadro 3.26
DINÁMICA MIGRATORIA POR REGIONES
(Millones de personas)
1950-1970

Migración	Zona Norte			Zona Suroeste			Zona Sureste			El País		
	1950	1960	1970	1950	1960	1970	1950	1960	1970	1950	1960	1970
Inmigración	21.4	63.4	13.8	0.09	5.4	6.8	89.9	188.0	357.7	112.5	256.6	372.5
Emigración	74.0	177.5	240.3	18.5	52.1	69.3	19.7	26.9	68.6	112.3	256.6	372.5
Población total	100.5	1,441.0	1,749.0	313.2	481.8	555.5	722.0	122.8	1,651.4	2,155.0	3,047.0	4,016.0

FUENTE: Duarte (1980).

De todos modos, no debemos olvidar que, en condiciones de desarrollo sostenidas por premisas capitalistas, un cierto excedente estructural de mano de obra es requerido por el sistema, como condición de su funcionamiento. El pleno empleo en última instancia es un mito en el capitalismo, solo verificable en condiciones muy especiales, como, por ejemplo, la reconstrucción alemana de posguerra tras el Plan Marshall. El segundo problema es más importante: simple y llanamente es falso que la estructura del empleo urbano

en el proceso de urbanización bajo el capitalismo tiene que apoyarse exclusiva o únicamente en la industria. En el mejor de los casos, la industrialización se convierte en el eje directivo del proceso económico, en su conductor natural, y por ello genera un conjunto de demandas de servicios y actividades colaterales a la actividad industrial que absorben una parte no menos significativa de la mano de obra urbana. Cierto es que, durante todo el siglo XIX y hasta los inicios del siglo XX, el llamado sector secundario –donde se aloja la actividad industrial– tendía a ser el principal concentrador de fuerza de trabajo en los países capitalistas centrales, pero hoy día esa realidad ha cambiado y el llamado terciario ha desplazado al secundario en materia de absorción de mano de obra⁵⁵.

Debemos dilucidar un último mito. Tampoco es cierto que los llamados servicios tienen una estructura homogénea que permite calificarlos como económicamente “improductivos”. Solo hay que observar el papel decisivo que en la actividad económica juegan hoy los servicios de transporte a nivel mundial y la estructura de las comunicaciones, para darse cuenta de cuán importantes son para el funcionamiento de la estructura de la economía capitalista internacional y cuántos beneficios –como generadores de excedentes– proporcionan a las grandes corporaciones⁵⁶.

El problema de nuestras economías urbanas en materia de empleo no es el predominio del llamado terciario en la composición del empleo, sino la naturaleza de esos servicios. Mientras en

⁵⁵ Fue Colin Clark (1980) quien planteó el modelo que asumía una trayectoria lineal en las transformaciones modernizadoras de la economía, indicando que en ese proceso se pasa de una situación de predominio agrícola en sociedades tradicionales a una de predominio industrial en sociedades en proceso de cambio modernizador, para en una fase de alto desarrollo pasar al predominio de la actividad de servicios. No necesariamente la linealidad del modelo de Clark siempre se da en los procesos históricos concretos, pero el cambio que va dejando atrás el predominio de la actividad primaria y agrícola es un hecho constatable. A partir de ese enfoque, superándolo, Daniel Bell (2004) y Alain Touraine (1969) han planteado que, en su fase hiper o posmoderna, la sociedad capitalista (y cualquier orden social moderno, como las llamadas sociedades socialistas) se torna posindustrial, donde la producción de servicios se impone y supera a la producción industrial como el factor dinámico del crecimiento.

⁵⁶ Para dilucidar este punto, debe verse a Gershuny (1988).

el capitalismo central los servicios tienen una alta composición de capital y elevada productividad, en nuestros países los servicios tienen una baja composición orgánica de capital y bajísima productividad; mientras en los países centrales los servicios se vinculan estrechamente a la actividad generadora de valor, en nuestros países constituyen simplemente un eje subordinado del capital comercial. Este es el problema: una urbanización sostenida sobre premisas económicas que hace de las ciudades simples ejes intermediarios del capital agroexportador e importador; centros improductivos, redistribuidores y apropiadores de excedentes; lugares de intermediación económica de las burguesías compradoras: eso son nuestras ciudades. A la luz de esta realidad, es comprensible que más que el predominio de una tecnología intensiva en capital, la débil capacidad de absorción de mano de obra de la industria, su baja generación de empleo es consecuencia de la posición subordinada de la industria en el mercado respecto al capital comercial, esencialmente importador. De esta forma, la situación descrita no representa simplemente una realidad microeconómica, es sobre todo un hecho estructural de orden macroeconómico y social, producto de la condición del subdesarrollo de nuestra economía⁵⁷.

El proceso de urbanización, junto al débil nivel de industrialización y el atraso rural, ha venido a afianzar el carácter intermediario de nuestros centros urbanos, sobre todo de la ciudad de Santo Domingo. Es cada vez mayor la parte del PIB que las ciudades consumen y menor la parte que aportan. En tal virtud, podemos decir sin grandes exageraciones que hasta los años ochenta fuimos un país agrario que consumía y vivía en las ciudades. Indudablemente, quien pagaba los platos rotos eran los productores rurales directos y los trabajadores de la economía exportadora.

En la perspectiva de los sectores comerciales e industriales, la ciudad representa sobre todo el espacio natural de sus mercados, como también constituye un espacio redistribuidor del excedente generado en los ejes dinámicos de la acumulación del capital, el

⁵⁷ Para una visión del debate teórico general de esta problemática, véase a Benetti (1976) y Salama (1976).

sector agroexportador. Otro problema es explicar quién financia en última instancia al consumo urbano, a partir del hecho de que la inmensa mayoría de la PEA urbana se encuentra desempleada o subocupada y, en ambos casos, se mantiene aportando a la economía un exíguo margen de excedentes con que agenciarse su reproducción⁵⁸.

La consecuencia práctica inmediata es la creciente intervención del Estado en el proceso analizado a través de dos canales fundamentales: 1) como fuente de empleos urbanos y 2) como subsidiador del consumo improductivo, consecuencia de la urbanización. En ambos casos, es cierto que el Estado en última instancia está realizando el subsidio de un proceso de desarrollo capitalista sobre bases precarias, apoyado en la preservación del atraso y el subdesarrollo de la economía. Gracias a ello, preserva el equilibrio político y social, a partir de premisas económicas que, de permitirse su libre juego, colocarían en una crisis catastrófica al conjunto del sistema. Pero tampoco debemos olvidar que con el subsidio el Estado apoya la acumulación del capital de sectores que, al crecer sobre estas premisas, refuerzan los amarras del subdesarrollo.

Como fuente de empleos, el Estado proporciona de esa manera una salida al “tranque” estructural de la emigración del campo a las ciudades, en condiciones de una industrialización débil y subordinada, básicamente a través de la ampliación de la burocracia, pero el precio que por ello se paga es movilizar hacia el consumo improductivo grandes excedentes que en otras condiciones apoyarían las tareas del desarrollo. En la medida en que esta situación adquiere proporciones de masas, apoya la expansión de una burguesía compradora, que es subsidiada, a su vez, por el Estado. Es cierto que esto es una manera de crear demanda de mercado y expandir el capitalismo, pero la premisa sobre la que se sostiene es la preservación del atraso, el dispendio improductivo de recursos y sobre todo la desigualdad social.

⁵⁸ Lozano (1984) trata este problema.

Cuadro 3.27

CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

(1950-1970)

Años	Población	% De incremento en relación con el año anterior
1950	181,553	-
1960	369,980	103.8
1970	668,507	82.8

FUENTE: Duarte (1980).

A través de la ampliación de su burocracia, el Estado ha constituido una de las fuentes básicas creadoras de los emergentes grupos medios urbanos en los que se ha apoyado la expansión del mercado interno en las ciudades. Sin embargo, si se analizan las estadísticas del empleo del Estado en el período 1966-1978 (cuadro 3.17) observaremos que entre el 80 % y el 90 % de los empleados tiene un ingreso no mayor de doscientos pesos mensuales. Es decir, se trata de un sector de muy bajos ingresos. En ese sentido, su significación económica en el proceso de expansión capitalista consiste en su peso cuantitativo. Es previsible que el nivel de consumo de estos sectores medios urbanos se oriente sobre todo hacia los alimentos, vestido, bebidas, tabaco y vivienda.

Sin embargo, la complejización del proceso de urbanización y la expansión de la actividad comercial y financiera observada en el período, ha generado la emergencia de un sector medio de altos ingresos cuyos patrones de consumo distan mucho de concentrarse en los bienes básicos arriba señalados. En este sector se ha apoyado la expansión de la moderna burguesía importadora (a través de la venta de artículos para el hogar: televisores, aparatos de música, electrodomésticos y de cocina, automóviles, etc.), así como la burguesía financiera vinculada al negocio de la construcción (a través de la política de viviendas financiadas por los bancos y asociaciones de crédito)⁵⁹.

Sugiero la hipótesis de que el telón de fondo del proceso de modernización de la burguesía dominicana en todos sus sectores ha sido el proceso de urbanización, apoyado en una favorable

⁵⁹ Sobre este punto en particular, véase a Vilas (1979), Alemán (1982) y Álvarez (1982).

coyuntura de buenos precios de los productos de exportación. En ese sentido, el sector social que ha sostenido el proceso ha sido la emergente clase media urbana tanto en sus niveles bajos como de altos ingresos. De esta manera, ha habido una suerte de estratificación del mercado en la que los grupos comerciales y financieros han equilibrado sus intereses. Mientras la expansión de la industrialización por sustitución de importaciones se ha apoyado más en el consumo de los grupos medios de bajos ingresos, vinculando incluso a importantes sectores de las clases trabajadoras urbanas, la modernización de la burguesía comercial importadora se ha apoyado en la expansión y creciente poder económico de una clase media de altos ingresos.

De este modo, mientras la clase media de bajos ingresos se encuentra más ligada al proceso de urbanización provocada por la emigración rural-urbana, la moderna clase media de altos ingresos se encuentra ligada sobre todo al papel cada vez más preponderante del capital financiero en la racionalización de la actividad económica y la dinámica de redistribución de los excedentes a través de múltiples canales (banca, seguros, publicitarias, alta gerencia, turismo, etc.). De esta manera, se ha generado un mercado de consumo urbano de masas heterogéneo y desigual, en estrecha conexión con los nuevos grupos sociales surgidos a la luz del proceso general de modernización capitalista.

Capítulo 4

LA MODERNIZACIÓN DE LA BURGUESÍA DEPENDIENTE

Los miembros de la oligarquía viven extremadamente bien, aunque por lo general sin ostentación. Sus casas son viejas y están bien conservadas; aunque a uno le da la impresión de que cada vez que un tornillo se afloja en el pomo de una puerta lo reparan al instante. Van a menudo a los Estados Unidos. Envían a sus hijos a las mejores escuelas de enseñanza media de aquel país. Tienen pequeños lugares de retiro en las montañas o junto al mar. Son propietarios de fincas, a veces extensas, en los valles ricos.

Son humanitarios y paternalistas. Es probable que desprecien a los militares considerándolos campesinos armados, y a los políticos, como ambiciosos de poco fiar. Odiaban a Trujillo -carnicero inculto-, que había jurado terminar con su poder, aunque no lo consiguió. No hay dudas de que son las personas más dotadas y mejor educadas de la República.

Algunos se oponen a todo cambio. La mayor parte de ellos los fomentan, aunque en cantidades y formas distintas. Mirándolos con malos ojos, se les puede llamar realistas: saben que si no dan algo al pobre lo perderían todo, tienen suficiente sentido práctico para entregar un poco. Viéndolos con buenos ojos, se puede decir que están a favor de la justicia. Puede parecer extraño que un demócrata liberal como yo considere a la oligarquía dominicana como uno de los grupos verdaderamente prometedores de la República.

JOHN BARTLOW MARTIN

El destino dominicano

Si alguna esperanza queda [...] está en la plebe.

GEORGE ORWELL

1984

Este capítulo analiza el proceso de formación y transformación de clases que acompañó los procesos de acumulación de capital discutidos en el Capítulo 3. Muy en particular el capítulo constituye un estudio de la articulación entre el proceso de acumulación

de capital en una economía periférica y su impacto en los procesos de formación de clases.

El primer aspecto que discuto es el del predominio que alcanzó el capital financiero en la articulación y dinámica del proceso de acumulación del capital. Por ello me detengo en el papel que pasó a desempeñar la banca nacional y extranjera en la canalización de los excedentes y financiamiento del proceso de acumulación, sobre todo de la industrialización. En esta parte enfatizo particularmente la necesidad de estudios sistemáticos del proceso de inversión extranjera y el comportamiento de la deuda externa, vistos ambos como componentes fundamentales del proceso de acumulación y drenaje de excedentes hacia el exterior que esta dinámica implicó. Es por ello que en el capítulo profundizo el análisis de la inversión extranjera con el estudio de las empresas multinacionales en el país, particularmente de la Gulf and Western.

En la segunda parte del capítulo discuto el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, deteniéndome en el estudio de sus variables económicas fundamentales (inversión, apoyo estatal, proteccionismo, productividad y mercado, etc.). También analizo los impactos que este proceso tuvo en la articulación de clases, destacando, finalmente, las complejidades del proceso de industrialización y el atraso de la agricultura.

4.1. El predominio del capital financiero

El elemento fundamental que caracteriza el período de gobierno reformista (1966-1978) es predominio que adquieren los intereses ligados al capital financiero, en función del proceso de formación de las clases sociales favorecidas o estimuladas en la dinámica más general del desarrollo capitalista en esos años.

Sin exageración alguna, puede afirmarse que en su expresión económica el régimen balaguerista se caracterizó por el fortalecimiento de un verdadero empresariado financiero, y solo en segundo lugar por el afianzamiento de un empresariado industrial. Es cierto que durante el balaguerismo se constituyó un sector empresarial ligado a la industria, pero su significación e importancia económica quedaron siempre subordinadas al gran

capital financiero y comercial. En tal sentido, en función del predominio de los intereses de la fracción financiera de la burguesía, adquiere significado económico el proceso de crecimiento industrial que se observó en el país en el período 1966-1978, como también se logra comprender la naturaleza y especificidad de la expansión de las grandes empresas transnacionales en el país. Así, el relativo auge de la industrialización por sustitución de importaciones en el período estudiado, caracterizado por su dependencia tecnológica y financiera del gran capital internacional, y por su elevado grado de proteccionismo estatal, no expresa sino la relación de subordinación de los sectores industriales de la burguesía local respecto a las fracciones financieras y comerciales, como también su dependencia estructural del capitalismo agroexportador y del Estado.

Este dominio del capital financiero en la formación social dominicana se manifestó en varios niveles de su estructura, algunos de los cuales trataré de dilucidar en lo adelante.

4.1.1. El papel dirigente de la banca

En primer lugar, se impone un breve análisis que explique las condiciones históricas y económicas que hicieron de la actividad financiera el espacio propicio para que, en las condiciones postrujillistas, la burguesía dominicana articulara una estrategia de expansión y modernización.

Soy de la opinión de que en el período 1961-1966 la banca constituyó el canal a través del cual la burguesía importadora logró agenciarse los excedentes necesarios para su expansión en las nuevas condiciones de dominio oligárquico del Estado en que las importaciones pasaron a jugar el papel dinamizador del proceso de acumulación ante el aumento exorbitante de la demanda interna, dadas las nuevas condiciones sociopolíticas provocadas por la destrujillización de la sociedad dominicana, la emergencia de las clases medias y el aumento de la capacidad reivindicativa de las clases trabajadoras.

El aumento de las importaciones que se observa en el período 1961-1966 fue en gran medida el resultado directo no solo de

las incapacidades del aparato productivo interno para responder dinámicamente al incremento de la demanda, sino también de la estrategia oligárquica de crecimiento, bloqueadora del crecimiento industrial estatal, como he discutido. Lo importante a recuperar en este momento es que la satisfacción de la demanda, vía el aumento de las importaciones, se tradujo en una presión directa sobre las reservas de divisas del sistema bancario, planteando a la postre las condiciones iniciales de gran parte de los desequilibrios monetarios del país en esos años. Veamos.

La banca no solo contribuyó directamente al financiamiento de las importaciones en el período 1961-1965, también apoyó gran parte de las exigencias de capital demandado por las empresas industriales instaladas en el país, una vez los salarios tuvieron un significativo incremento en dichos años.

Esto permite explicar el extraordinario incremento de los préstamos bancarios en el período 1961-1964, los cuales pasaron de 49.9 millones de pesos en 1961 a 119.0 millones en 1964, con un incremento del 72 %. En esta dinámica el sector privado absorbió el grueso del financiamiento bancario, concentrando el 64.3 % de los préstamos comerciales en 1961 y el 66 % en 1964. En dicho período, fueron sobre todo los préstamos bancarios comerciales a corto plazo los que experimentaron un aumento considerable, debido a los préstamos que la banca privada realizó a las empresas del Estado. Estrella lo plantea claramente: “En realidad, la responsabilidad de este aumento se localiza en los préstamos a las entidades oficiales autónomas que de 2.4 millones que tenían como saldos de préstamos con la banca comercial al fin de 1962, se elevaron a 24.0 millones de pesos al fin de 1964”¹.

Esto es explicable no solo por el incremento masivo de nuevos empleados y trabajadores en las empresas del Estado y el aumento de los salarios, sino también debido a la estrategia de bloqueo oligárquico a la expansión del sector estatal en la economía. Así, la oligarquía en el poder logró crearles a las empresas del Estado una serie de limitaciones que les bloqueaba el acceso a determinadas

¹ Estrella (1971), *op. cit.* p. 292.

facilidades financieras controladas por el aparato estatal. Bajo el argumento de bloquear la competencia del capital estatal al sector privado, la oligarquía introducía obstáculos a la expansión de las empresas del Estado. El resultado fue que las empresas estatales tuvieron que acudir a la banca privada para lograr los capitales con los cuales harían frente a las nuevas necesidades financieras que el aumento de la demanda en el período 1961-1965 exigía. De todo ello resultó que el aumento de la capacidad de consumo en el período se sostuvo en gran medida gracias a los préstamos a corto y mediano plazo de la banca local tanto al capital importador como a las empresas autónomas del Estado.

¿De dónde procedían los recursos con los cuales la banca local logró financiar estas operaciones, sobre todo las importaciones? En primer lugar, dado el control oligárquico del Estado, la banca local y los importadores lograron favorecerse con la reducción de la fuga de capitales hacia el exterior que fue característica de los años 1950-1961, como también les favoreció el flujo de capitales hacia el país producto de un préstamo de 25 millones que la AID realizó al Estado dominicano en 1962. Se beneficiaron también de la devolución de 22.7 millones de pesos retenidos por la tesorería de los Estados Unidos, por concepto de un impuesto punitivo a las importaciones de azúcar dominicana en los años 1960-1961 a consecuencia de las sanciones impuestas al régimen de Trujillo en 1960 por la OEA.

Además de esto, otra fuente de excedentes que favoreció al capital financiero en el período fue la práctica de la banca local de utilizar los fondos depositados en moneda nacional procedentes del sector privado para el pago de facturas de importación extranjeras, a la espera de que el Banco Central les asignara sus correspondientes cuotas de divisas extranjeras para el consecuente pago en el exterior. Si en 1960 estos depósitos llegaban a 14 millones de pesos, en 1964 se habían incrementado a 60.8 millones de pesos. Naturalmente que el uso de estos fondos, pese a no violentar disposiciones legales, ponía en peligro la estabilidad de la moneda nacional al ser uno de los elementos que presionó a la concertación de cuantiosos préstamos internacionales. Como ha referido

Estrella: “Al llegar a 60.8 millones de pesos las cobranzas extranjeras no convertidas, en manos de los bancos comerciales, al fin de 1964, el Banco Central gestionó tres préstamos en el exterior con el FMI, un conjunto de bancos privados norteamericanos y la tesorería de los Estados Unidos, montantes en total a 62.2 millones de dólares, para hacer frente a esta peligrosa posición deficitaria”².

Otra fuente de capitalización de la banca local fue el notable incremento de los depósitos de ahorro y a plazo fijo, como los fondos de capitales de reservas. Estos últimos estimulados gracias a que en el período 1961-1964 se constituyeron tres nuevas empresas bancarias. Entre 1960 y 1965 el valor de los depósitos en cuentas de ahorros se triplicó, pasando de 12.8 millones de pesos a 36.5 millones, respectivamente, al tiempo que el valor de los depósitos bancarios estatales se elevaba de 101.8 millones de pesos a 160.0 millones. Por lo menos, el aumento de los depósitos de ahorro está estrechamente relacionado con el desarrollo de las clases medias urbanas y el incremento del medio circulante, que fue estimulado por el aumento de los sueldos y salarios.

En cuanto al incremento de los depósitos a plazo fijo y el capital de reservas, además de las nuevas entidades financieras que se constituyeron en el período, esto se encuentra íntimamente vinculado al hecho de que la banca comenzaba a erigirse en una fuente de capitalización de la oligarquía dominicana, constituyéndose en terreno fértil para la formación de un nuevo empresariado dominicano de tipo financiero-comercial. El papel estratégico que le tocaría jugar en este proceso a la banca privada en lo esencial fue el de intermediario de la canalización del ahorro interno hacia el eje directivo del proceso de acumulación en las condiciones del dominio oligárquico de la economía: el tren importador. Así, el surgimiento de las entidades financieras privadas no solo agilizó la canalización del ahorro nacional hacia el sector comercial, sino que también sirvió de instrumento limitante a la expansión de las empresas estatales y, como tal, con-

² *Ibidem*, p. 296.

tribuyó en el período 1961-1965 al bloqueo de una estrategia de industrialización por la vía estatal.

La creación desde 1962 del sistema de ahorros y préstamos para la vivienda fue otra de las fuentes de capitalización de la oligarquía local. Dicho sistema se creó de un modo tal que el llamado Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) funcionaría como la agencia estatal para el financiamiento y construcción de viviendas de bajo costo dirigidas a los sectores populares, mientras que el Banco Nacional de la Vivienda (BNV) actuaría como el elemento financiero articulador del sistema de ahorros y préstamos de las asociaciones privadas, cuyas construcciones se dirigirían sobre todo a la clase media en expansión. Al respecto Estrella explica que:

Desde el punto de vista del origen de los recursos, el BNV y el sistema de asociaciones de ahorros y préstamos funcionan con tres principales (fuentes, WL): 1) el capital del BNV que lo aportan el Estado y las asociaciones de ahorros y préstamos; 2) préstamos internacionales que se utilizan principalmente para adquirir títulos hipotecarios originalmente negociados por las asociaciones de ahorros y préstamos; y 3) el ahorro privado que se recaba a través de éstas últimas entidades, y las cuales, además, son las que generalmente operan con el público para otorgar los préstamos destinados a la construcción de viviendas³.

Aun cuando el aparato burocrático que controlaba el sistema de ahorros y préstamos del sector privado no se beneficiara directamente de este en términos económicos, de manera indirecta le reportaba una gran capacidad de negociación frente a la banca local y extranjera, lo cual le facilitaba su estrategia de expansión económica a un plazo mediano. Por otro lado, los excedentes controlados por el sistema de ahorros y préstamos favorecían indirectamente el crecimiento de un sector de la burguesía vinculado a la construcción, como he analizado en el Capítulo 2, al tiempo que robustecía la posición del sector de la burguesía comercial importadora de los insumos y materiales de construcción.

³ *Ibidem*, p. 292.

Otro elemento decisivo en el análisis del papel dirigente de la banca en el proceso de desarrollo capitalista dominicano es la cuestión de la capacidad gerencial. A diferencia de los grupos comerciales y los escasos industriales, el sector financiero de la burguesía dominicana, desde los años sesenta, mostró una gran capacidad gerencial tanto en su estructura organizativa como en su gestión económica. El caso del Banco Popular es ilustrativo de este último punto⁴. Ello dotó a quienes controlaban el sector de una gran experiencia financiera, lazos económicos con el Estado y relaciones internacionales, de lo cual carecían los otros grupos económicos del país, salvo la oligarquía importadora y parcialmente los sectores monopolistas de la industria.

Esto vino a facilitarse con el hecho de que en 1968 no existía propiamente en el país una legislación que favoreciera clara y directamente a la burguesía industrial. Sin embargo, sí existía una legislación que regulaba la actividad bancaria y normaba sus relaciones con el Estado⁵. A lo que se vino a unir un conjunto de disposiciones emanadas del Estado en la coyuntura 1961-1965 que, al tiempo que favorecían al sector importador de la burguesía⁶, facilitaban la expansión de la banca comercial privada (nacional y extranjera), tales como el tratamiento liberal en el manejo de las cobranzas extranjeras por parte del Banco Central, la igualación de las tasas de interés en los depósitos de ahorros del sector bancario y las asociaciones de ahorro, etc., como se analiza en el Capítulo 1.

⁴ La fuerza económica del Grupo Financiero Popular, al cual pertenece el Banco Popular, puede apreciarse en el interesante libro de Álvarez Vega (1978), donde se describe el poder económico de la burguesía financiera dominicana a través de sus principales empresas. En el periódico *Hablan Los Comunistas*, Nro. 229 del 11 noviembre de 1982, se ofrecen interesantes datos sobre el poder económico de las 18 principales familias de la oligarquía dominicana que complementan las informaciones proporcionadas por Álvarez Vega. Con todo, para el Banco Popular el mejor estudio es el de Moya Pons (1989) que presenta una historia sistemática de su origen y desarrollo.

⁵ Estrella (1972) hace una buena descripción de esta legislación.

⁶ Véase a Ascuasiati (1972) y ONAPLAN (1968).

Cuadro 4.1
DEPÓSITOS DE AHORRO Y A PLAZO
EN LOS BANCOS COMERCIALES
1960-1976

Años	Depósitos Ahorro		Depósitos a Plazo		Total Depósitos
	Valor (Millones RD\$)	% del total	Valor (Millones RD\$)	% del total	
1960	12.8	12.6	12.3	12.1	101.8
1961	8.2	8.0	11.4	11.1	102.8
1962	17.4	13.5	2.3	1.8	128.5
1963	24.7	15.7	2.6	1.7	157.2
1964	26.1	22.8	5.0	4.4	114.5
1965	30.1	22.6	5.4	4.1	133.1
1966	36.6	22.7	9.1	5.7	161.0
1967	42.5	24.5	10.7	6.2	173.8
1968	51.1	24.3	21.1	10.0	210.4
1969	60.9	25.5	32.9	13.8	239.0
1970	75.2	26.7	42.9	15.2	281.7
1971	85.9	26.0	59.0	17.8	330.7
1972	101.2	25.9	87.0	22.2	391.1
1973	119.5	24.8	125.3	26.0	482.5
1974	158.7	22.9	202.6	29.3	691.0
1975	176.8	22.4	290.7	36.9	788.3
1976	181.4	21.8	303.2	36.5	831.5

FUENTE: 1960-1961, ONE: *República Dominicana en Cifras*, 1968.
1961-1971, ONE: *República Dominicana en Cifras*, 1971.
1971-1976, Banco Central: *Boletines mensuales*.

A partir de 1966 el papel del capital financiero potenció su incidencia en la economía dominicana, llegando a desplazar prácticamente al sector importador en el control directo del proceso de acumulación. Este cambio se orienta por varias vertientes.

En primer lugar, el Estado forzó a la banca local a redefinir su política de créditos comerciales, a través de los encajes legales selectivos favorecedores de los sectores productivos, sobre todo industriales⁷. Con ello se modificaba la orientación del crédito bancario usualmente dirigido hacia la actividad comercial y gubernamental. Además de los encajes legales selectivos, esta política se vio apoyada por la activación de FIDE, que fue el instrumen-

⁷ Álvarez Betancourt (1982) ofrece una excelente descripción de este proceso de expansión del sector financiero de la economía dominicana.

to a través del cual el Estado organizó en gran medida su política de desarrollo industrial, como analicé en el Capítulo 2.

Asimismo, a partir de 1966, el Estado generó un tramado legal que permitió establecer las llamadas sociedades financieras de desarrollo, instituciones claves tras las cuales el capital financiero local y extranjero se asoció con la actividad industrial. Sin embargo, entre 1966 y 1970 apenas se constituyen en el país dos sociedades financieras: la Compañía Financiera Dominicana (1968) y la Corporación Agrícola Asociada (1970). Fue sobre todo en el período 1970-1977 donde se dio el verdadero auge de las sociedades financieras de desarrollo, estableciéndose en el país 13 instituciones de ese tipo, en estrecha conjunción con el auge de la política de industrialización del Estado e incentivado por el acceso a los recursos del Banco Central, vía redescuentos y créditos directos del FIDE.

Si hasta 1960 los préstamos bancarios a la industria no alcanzaban el 20 % de la totalidad de préstamos, concentrándose en el comercio fundamentalmente, a partir de 1966 se revierte la dinámica de la cartera de préstamos bancarios al pasar el sector industrial en el período 1966-1977 a concentrar más del 30 % de los créditos bancarios. En cifras absolutas esto significa que, de un total de 4,333.4 millones de pesos movilizados por la banca (tanto a los sectores privados como públicos), 1,360.0 millones de pesos se concentraron en las ramas industriales de la economía. Más allá del hecho claro de la preferencia de la banca comercial por las inversiones producidas, debo realizar algunas precisiones. En primer lugar, es clara la vinculación de la banca con la industria en una estructura que se acerca bastante al modelo formulado por Lenin respecto a la caracterización del capital financiero, como fusión del capital bancario con el industrial⁸. En esa estructura, fue el capital bancario el eje dinámico y rector del proceso. Ahora bien, más allá de esta característica “clásica”, se añadían nuevas determinaciones. En la estructura del capital bancario se encuentran representadas también las inversiones extranjeras procedentes de las grandes

⁸ Al respecto debe verse el lúcido estudio de Sutcliffe (1978) y el fundamental trabajo de Barratt Brown (1976).

firmas financieras internacionales, fundamentalmente del Chase Manhattan Bank, el First National City Bank y la banca española.

De todos modos, no podemos perder de vista que, pese al propósito estatal de favorecer con el financiamiento bancario al sector industrial, no por ello la burguesía comercial, sobre todo su fracción importadora, dejó de ocupar un puesto fundamental en la cartera de crédito de los bancos comerciales. Así, entre 1966 y 1977 las actividades comerciales fueron favorecidas con 1,002.0 millones de pesos en préstamos comerciales bancarios, lo cual representa el 23.1 % de los préstamos de la banca comercial en el período en cuestión. La actividad industrial, dados los incentivos y la protección estatal, tuvo acceso a fuentes de financiamiento vedadas para la actividad comercial, como el FIDE. Pero la actividad comercial no por ello sufrió una merma en su acceso al crédito bancario comercial, por lo menos en términos absolutos.

El último punto que debe considerarse se refiere al hecho de que a través de la expansión de la banca local y extranjera se financió gran parte de la expansión de la inversión extranjera directa dirigida al mercado interno o al mercado mundial, como se verá de inmediato.

Cuadro 4.2
**PRÉSTAMOS ACUMULADOS POR DESTINO
DE LOS BANCOS COMERCIALES**
(Saldo a fin de año)
(En millones de RD\$)
1966-1977

Sector	Absoluto	%
<i>Sector Público:</i>	680.0	15.7
Gobierno Central	181.0	4.2
Instituciones autónomas	499.0	11.5
<i>Sector Privado:</i>	3,653.4	84.3
Industriales	1,360.0	31.4
Agropecuarios	373.4	8.6
Reparación y construcción de inmuebles	224.0	5.3
Comerciales	1,002.0	23.1
Garantizados por ventas	24.0	0.7
Condicionales	654.1	15.2
Varios		
Total	4,333.4	100.0

FUENTE: Banco Central, *Boletines mensuales*.

4.1.2. *El proceso de endeudamiento externo*

Durante el período 1961-1978 pueden distinguirse varias etapas o momentos del proceso de endeudamiento externo en la República Dominicana, en función de la lógica global de la acumulación de capital, así como de las clases y fracciones de clase que lideran cada momento del proceso. Se reconoce una primera etapa de 1961 a 1965 en que el endeudamiento externo apoya y estimula el funcionamiento y dinámica del modelo de acumulación capitalista con hegemonía oligárquica, cuya variable dinámica son las importaciones. Un segundo período que va de 1966 a 1972 en el que el endeudamiento externo apoya la gestión estatal en materia de inversiones necesarias para el “despegue económico” del nuevo modelo de acumulación que bajo la hegemonía del capital financiero se articula. Y un tercer período, de 1972 a 1978, en el que el endeudamiento externo de nuevo pasa a apoyar la acumulación capitalista de los sectores burgueses privados, pero ahora favoreciendo al eje financiero-industrial, principalmente al capital extranjero, sobre todo de origen norteamericano⁹.

A partir de 1966 el proceso de endeudamiento externo se constituye en uno de los ejes claves de la acumulación capitalista. En primer lugar, a través de los gastos del Estado en materia de inversiones en la infraestructura necesaria para el despegue del modelo de acumulación, estimula el crecimiento de algunas de las fracciones burguesas, sobre todo aquellas vinculadas al negocio de la construcción. En segundo lugar, constituyó una fuente de capitalización de las propias empresas transnacionales que pasaban a operar en el país, tal es el caso de los préstamos avalados por el Estado a través de los cuales Falcombridge y GW se instalan en el país. Finalmente, representa una adecuada ilustración del proceso de creciente control político del Estado por parte del gran capital monopólico internacional, sobre todo a

⁹ A mi modo de ver el mejor estudio sobre la deuda externa dominicana en el período 1966-1978 es el de Rathe (1979). El ensayo de Conde (1979) es excelente y resume muy bien los principales problemas. El trabajo de Guerrero (1975) proporciona muy buena información.

través del condicionamiento de la política y planes de desarrollo implementados, los cuales de más en más pasan a ser dirigidos y orientados por las instituciones internacionales financiadoras de los préstamos y las propias agencias norteamericanas de desarrollo. Es interesante hacer notar aquí que, en la medida en que el endeudamiento externo se profundizaba en la formación social dominicana, mayor era el incremento de las importaciones y, pese a que, junto a las inversiones extranjeras, se planteó la utilización de los préstamos externos como mecanismo paliativo del desequilibrio de la balanza de pagos, este se acentuaba, al tiempo que las inversiones extranjeras directas lograban sus mayores niveles en aquellos momentos de mayor profundización de la deuda exterior.

Analicemos este proceso con mayor detalle. Como consecuencia de la precaria situación económica heredada por Balaguer en el año inmediato a la finalización de la Guerra de Abril de 1965, en el año siguiente (1966) se generó una fuerte corriente de ayudas por parte de distintos organismos de los Estados Unidos, encaminadas al saneamiento y robustecimiento de las instituciones del Estado. En ese momento Balaguer logró sanear y hasta hacer rentable el sector azucarero del Estado, gracias a la política de despidos masivos y restricción salarial que analicé en el Capítulo 3. Consiguió también sanear y estabilizar CORDE y en general el conjunto de instituciones públicas. Solo en 1966 los Estados Unidos gastaron en República Dominicana aproximadamente 220 millones de dólares en ayudas, donativos y préstamos.

A partir de 1969 la ayuda externa ya no se caracterizará por el simple donativo, sino que se traducirá en una corriente permanente de préstamos externos. Esta se había estructurado durante los años 1963-1965, en el período de plena hegemonía oligárquica llamado Triunvirato. En esta ocasión ocurrirá no solo un sustancial aumento de la deuda, sino una drástica reorientación de su dirección en función del nuevo patrón de inversiones y gastos que caracterizará el nuevo modelo de acumulación de capital a partir de 1966. Si hasta 1965 los préstamos externos sirvieron de fuente de financiamiento para la expansión de la fracción importadora de la burguesía, a par-

tir de 1966 estos apoyarían la gestión de inversión del Estado, mientras que desde 1972 se respaldaría, a su vez, la expansión del gran capital transnacional en la formación social dominicana (como se expresa en el cuadro 4.4), al igual que estimularía el crecimiento de la fracción financiera de la burguesía dominicana.

Cuadro 4.3
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA
(En millones de RD\$)
1966-1978

Años	Amortizaciones Netas	Desembolsos brutos	Amortizaciones	Deuda neta	Saldo no utilizado
1966	251.1	179.9	21.8	1581.1	71.2
1967	278.7	230.4	37.0	193.4	48.3
1968	334.3	281.2	60.3	220.9	53.1
1969	448.8	374.2	113.1	261.1	74.6
1970	481.2	412.6	121	291.4	68.6
1971	531.8	452.4	157.0	296.4	79.4
1972	941.7	848.5	263.9	584.6	93.2
1973	1,101.4	858.2	249.5	608.7	244.2
1974	-	-	-	-	-
1975	1,367.5	1,086.2	284.2	802.0	281.3
1976	1,912.6	1,248.3	339.3	454.0	614.3
1977	1,737.4	1,419.2	342.4	1,076.8	318.2
1978	2,111.7	459.5	229.1	1,314.5	291.1

FUENTE: Banco Central, *Boletines mensuales*.

De este modo la deuda externa total se elevó de RD\$158.1 millones en 1966 a RD\$1,314.5 en 1978, lo cual representó un incremento de 157.0 % a una tasa acumulativa anual del 17.3 %.

Esta corriente de préstamos supuso una serie de compromisos con las entidades financieras internacionales que, de hecho, constituyeron un vehículo a través del cual se profundizó la dependencia del país respecto al gran capital monopolístico internacional. Estos compromisos no solo implicaron el pago de intereses de la deuda, sino una serie de disposiciones en materia de desarrollo económico subordinadas a las estrategias de las agencias internacionales, como también la atadura de las importaciones dominicanas a la oferta de bienes de los países prestamistas¹⁰.

¹⁰ Véase Rathe (1979), quien discute con detalle el proceso de endeudamiento.

Cuadro 4.4
INVERSIÓN EXTRANJERA Y LA DEUDA EXTERNA QUE GENERA
 (En millones de RD\$)
1967-1978

Años	Deuda de las empresas extranjeras	Deuda del sector privado nacional	Deuda externa total	Porcentaje que representa la deuda de las empresas extranjeras del total de la deuda del sector privado	Porcentaje de deuda de las empresas extranjeras de la deuda externa total del país
1967	-	4.7	192.6	0.0	0.0
1968	1.2	1.2	218.6	100.0	0.5
1969	-	6.7	252.8	0.0	0.0
1970	101.2	104.6	376.7	96.7	33.1
1971	188.9	221.9	519.8	85.1	36.3
1972	234.8	260.7	581.6	90.1	40.4
1973	244.2	274.8	613.8	88.9	39.8
1974	241.0	289.0	710.9	83.2	33.9
1975	278.6	348.7	808.0	79.9	34,5
1976	325.2	426.4	965.2	76.3	33.7
1977	303.8	464.6	1,084.2	65.4	28.0
1978	253.3	431.5	1,314.6	58.7	19.0
			Promedio	76.6	28.4

FUENTE: Banco Central: *Directorio de Inversión Extranjera*.

Al profundizar el análisis del proceso de endeudamiento, se puede apreciar que, además del apoyo al financiamiento de las instalaciones de Falcombridge, GW y otros sectores del gran capital internacional¹¹, en el período 1966-1978 los préstamos se encaminan a las siguientes operaciones: 1) compra de alimentos a los Estados Unidos mediante el Acuerdo PL-480; 2) financiamiento de la construcción de las presas de Tavera y Valdesia; 3) programas de asistencia técnica a campesinos; 4) construcción de acueductos; 5) financiamiento de las importaciones a las importaciones; 6) financiamiento de los déficits de balanza de pagos, y 7) compras al exterior por las empresas del Estado. Como fácilmente puede inferirse, estos préstamos se movilizaron en su mayoría hacia inversiones no reproductivas o solo reproductivas

¹¹ En el caso de GW, véase a Del Castillo *et al.* (1975) y Frundt (1980). Sobre la Falcombridge, véase a Deverell (1977).

a muy largo plazo, como es el caso de las presas de Tavera y Valdesia¹². Entre otros efectos, esto provocó que la economía tuviera que depender cada vez más de dichos financiamientos para precisamente cubrir sus desequilibrios externos. Así, la política de endeudamiento externo, además de afianzar los intereses del gran capital monopolístico internacional, robustecía a la burguesía compradora, sobre todo a su sector importador, aun al precio del desequilibrio externo, el déficit crónico de la balanza de pagos y el ahondamiento de la dependencia¹³.

Cuadro 4.5
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA POR TIPO DE DEUDORES
(En millones de RD\$)
1966-1979

Años	Gobierno Central		Organismos Autónomos		Sector Privado		Total Adeudado
	Valor Adeudado	% del total	Valor Adeudado	% del Total	Valor Adeudado	% del total	
1966	69.8	44.0	85.6	53.9	3.2	2.0	158.6
1967	92.9	48.0	95.7	49.4	4.8	2.4	193.4
1968	123.0	55.7	93.1	42.1	4.9	2.2	221.0
1969	145.2	55.6	102.9	39.4	13.0	4.9	261.1
1970	159.0	54.6	113.5	38.9	18.9	6.5	291.4
1971	171.4	50.5	131.2	38-6	36.9	10.8	339.5
1972	189.6	32.3	132.5	22.5	265.5	45.1	587.6
1973	198.5	32.9	136.1	22.5	267.8	44.4	602.4
1974	198.4	27.8	224.9	31.6	288.2	40.5	711.5
1975	210.0	26.1	250.1	31.1	341.9	42.6	802.0
1976	218.0	27.9	315.7	40.5	245.3	31.4	779.0
1977	227.3	21.1	398.3	36.9	451.2	41.9	1,076.8
1978	339.7	25.6	555.7	41.8	431.1	32.4	1,326.5
1979	499.7	31.7	596.9	37.9	479.1	30.3	1,575.7

FUENTE: Banco Central, *Boletín mensual*, Vol. XXXV, No. 12, diciembre, 1981.

A lo referido se aúna el atenuante de que una gran parte de las inversiones financiadas con los préstamos externos realmente constituyan actividades exportadoras, cuyos beneficios el Estado dominicano no los controlaba, como es el caso de Falcombridge¹⁴.

¹² Sobre el particular véase a Cuello (1973).
¹³ Sobre esta dinámica debe verse a Ceara (1984).
¹⁴ Sobre las actividades de Falcombridge, en la revista *Impacto Socialista* (II-22-24,

Por otro lado, aquellos flujos monetarios destinados al sector industrial, dada la extrema dependencia de este sector en materia tecnológica e insumos del exterior, implicaban una reversión de excedentes al exterior.

En el período 1966-1972 el sector dinámico que concentró los principales montos de la deuda externa fue el Estado (tanto el gobierno central como los organismos descentralizados). Al inicio de dicho período el 5 % de la deuda correspondía a los organismos autónomos del Estado y el 44 % al gobierno central; el sector privado concentraba apenas el 2 % de la deuda exterior. En los años subsiguientes y hasta 1971, fue el gobierno central el que concentró los principales montos de la deuda exterior con más del 50 %. Los organismos autónomos descienden gradualmente su peso relativo hasta llegar a alcanzar en 1971 alrededor del 38 % de la deuda pública, en tanto el sector privado eleva su participación en ese año al 11 %. Las tendencias generales descritas se encuentran expresadas en el cuadro 4.5.

A partir de 1971 la participación del Estado en la deuda exterior comienza a disminuir su peso relativo, al tiempo que la deuda del sector privado con el exterior incrementa sustancialmente su participación hasta llegar a concentrar en 1977 el 42 %. Con ello no solo se reorienta la canalización de los excedentes movilizados de este modo, sino que el objetivo económico del proceso de endeudamiento sufre modificaciones. Hasta 1971 el

1976) se ofrecen los siguientes datos que ilustran el drenaje de excedentes de la transnacional en el país:

Exportaciones de Ferróníquel y Movimiento de Divisas Generadas: 1972-1975
(En millones de RD\$)

Años	Valor	Divisas Generadas	
		Retornan al país	No retornan al país
1972	47.0	8.0	42.0
1973	83.5	19.5	64.0
1974	93.1	22.5	70.6
1975	102.2	23.5	78.7
Total	325.8	73.5	255.3

endeudamiento externo del sector público constituyó, además de una fuente de capitalización para el saneamiento de las empresas del Estado, un mecanismo inyector de recursos al conjunto de la economía, lo cual sirve de estímulo al despegue del proceso de decrecimiento y modernización capitalista del conjunto de la burguesía dominicana. A partir de 1972 la deuda externa pasa a constituir una fuente de capitalización del sector privado, una vez el Estado ha logrado aumentar las bases sociales y políticas necesarias que le aseguren sobre todo al capital extranjero, pero también al empresariado local, un estable ritmo de crecimiento en sus inversiones. En este momento es preciso reconocer que, además de lo ya expuesto, un importante elemento que le permitió al Estado limitar el recurso al endeudamiento externo para financiar sus gastos e inversiones fue la favorable coyuntura de precios de los productos de exportación que se observa en el período 1972-1975, situación que le permitió elevar sustancialmente sus recaudaciones fiscales –al verse estimuladas las importaciones como una de las consecuencias económicas inmediatas de los buenos precios de los productos de exportación– al tiempo que las ventas del CEA aumentaron notablemente. De todos modos, es preciso referir que en el período 1972-1977 el grueso de la deuda del Estado se concentró en el saneamiento del sector descentralizado del Banco Central y en menor medida en obras de infraestructura. Solo para algunas de estas últimas, como es el caso de las presas de Tavera y Valdesia, el Estado recurrió al financiamiento externo de manera significativa.

Como puede inferirse de lo hasta aquí expuesto, al contrario del modelo oligárquico de crecimiento, en el que el financiamiento interno sirvió sobre todo para financiar las importaciones, el nuevo modelo de acumulación que se inaugura con Balaguer supuso como una constante en su dinámica el uso frecuente de los préstamos externos, avalados por el Estado, como una fuente de promoción de las inversiones extranjeras. De 1971 a 1972 la deuda privada pasa de RD\$36.9 millones a RD\$265.5 millones, lo que supone un incremento del orden de los RD\$228.6 millones. Solo Falcombridge debía RD\$182 millones de esos RD\$228.6

millones, es decir, el 75 %. Esta deuda de Falcombridge estaba garantizada incondicionalmente por el Estado dominicano, la cual fue contraída con la Loma Corporation y el Banco Mundial. En 1978 la deuda externa de las principales empresas extranjeras radicadas en el país ascendía a los RD\$301.4 millones. Solo Falcombridge, GW y CODETEL concentraban más de la mitad de la deuda externa contraída por las empresas extranjeras radicadas en el país, y de la generalidad de estas el Estado dominicano era garante.

En el período 1966-1978 la corriente de préstamos externos que comenzó a dirigirse al país a partir de 1966, en un primer momento, constituyó un fuerte apoyo a la gestión estatal en el proceso de “despegue” del nuevo modelo de acumulación de capital que se organizaba bajo el reformismo dependiente. Una vez dadas las “condiciones del despegue”, la deuda externa sufrió una importante reorientación, pues sus flujos fueron orientándose poco a poco hacia el sector privado y fueron las empresas extranjeras transnacionales (sobre todo Falcombridge y GW) las principales beneficiarias. En este proceso, la deuda externa, junto a las inversiones extranjeras directas, en la medida en que más se abría la economía hacia afuera, más fue utilizada para cubrir los déficits de los sectores externo e internos de la balanza de pagos. El precio que se pagaba por esto era el del apoyo al sector importador y con ello al afianzamiento de todo tipo de actividades improductivas que bloqueaba las potencialidades internas en materia de mercado y producción.

4.1.3. La inversión extranjera, las empresas transnacionales y el Estado

En estrecha conjunción con el proceso de endeudamiento externo se verifica en la formación social dominicana en el período 1966-1978 el afianzamiento de un proceso de inversión extranjera de importancia significativa. En este apartado analizaré este proceso. Primero presentaré sus tendencias generales, luego analizaré el caso de la GW y, finalmente, discutiré el impacto de la inversión extranjera en el proceso de desarrollo.

Dinámica general de la inversión extranjera: 1950-1978

Hasta 1960 las inversiones extranjeras directas fueron bastante restringidas; se localizaban fundamentalmente en la minería y el azúcar y secundariamente en la producción de alimentos, bebidas, tabaco y el comercio. En 1958 de RD\$120 millones invertidos por las empresas extranjeras en el país, 44 % se localizaba en las ramas industriales de bebidas, alimentos y tabaco; evidentemente, aquí se incluían las inversiones del ingenio Romana, propiedad de la Porto Rico Sugar Company¹⁵; de estas el 82 % era de procedencia norteamericana. Once años después, a partir de 1969, esta situación se invierte, iniciándose un flujo sistemático y permanente de inversiones extranjeras en la formación social dominicana, el cual se encuentra vinculado a los reordenamientos del mundo capitalista, verificados sobre todo a partir de la década de los setenta con la emergencia de las grandes empresas transnacionales como los ejes rectores de la economía capitalista mundial¹⁶. En el plano nacional, este proceso se encuentra, a su vez, vinculado a los nuevos equilibrios de fuerzas que en el seno del Estado se articulan a partir del ascenso del doctor Balaguer a la presidencia de la República en 1966.

Pese a que las fuentes estadísticas que se poseen no son muy claras respecto al monto de las inversiones extranjeras ni mucho menos confiables ciento por ciento, la tendencia es más o menos clara. En el período 1966-1978 se destaca inicialmente la minería, que pasa a concentrar el 20% en 1970, lo cual se debe sobre todo a las inversiones de Falcombridge. Asimismo, en las ramas de los servicios comerciales, turismo y finanzas, las inversiones extranjeras incrementaron su participación de 9 % en 1969 a 14 % en 1974, lo que se encuentra estrechamente relacionado con las inversiones realizadas por GW en el sector turismo. Hasta mediados de los años setenta las ramas tradicionales de la industria

¹⁵ El trabajo más completo sobre la historia del Central Romana es el monumental estudio de García Muñiz (2010).

¹⁶ Sobre las consecuencias de este proceso de transnacionalización mundial en el sistema de división internacional del trabajo, véase a Frobél y Kreye (1981).

(alimentos, bebidas y tabaco) ven declinar la participación relativa de las inversiones extranjeras en estrecha relación con las cuantiosas inversiones realizadas en el sector minería por Falcombridge al principio de la década, y con las inversiones en turismo realizadas por GW. Pero a partir de 1974 las inversiones extranjeras se expanden hacia las ramas industriales tradicionales (excepto textiles) y la elaboración de productos químicos, lo cual coincide con la expansión hacia el dominio del mercado interno emprendida por empresas como GW, CODAL, Nestlé, Philips Morris en las ramas alimenticias, de tabaco y de bebidas.

El proceso hasta aquí descrito inicialmente fue liderado por dos grandes empresas transnacionales: GW y Falcombridge, pero posteriormente se amplió la cobertura de empresas extranjeras que en distintas ramas y sectores de la economía movilizarían sus capitales, sobre todo a mediados de la década de los setenta, como veremos abajo.

En el análisis de la inversión extranjera en el país, el primer elemento significativo es su acelerado incremento en el período 1960-1978. En los años 1960-1970 la inversión extranjera se multiplica por tres. En segundo lugar, advertimos la creciente diversificación de dichas inversiones. Si en 1960 se encontraban restringidas a unas pocas empresas (Sugar Porto Rico Company, posteriormente GW, Grenada, CODETEL, Alcoa, etc.), en 1978 las inversiones extranjeras estaban más diversificadas. En 1960 el capital extranjero concentraba el grueso de sus inversiones en actividades tipo enclave, con débil o nula vinculación con la economía nacional (casos de la Alcoa, la Grenada, etc.). En 1978 la situación será distinta, pues el capital extranjero también se expandirá a actividades vinculadas al mercado interno, como también se dará una práctica eclosión de la banca extranjera en la economía local.

El análisis de los cuadros 4.7 y 4.8 ilustra el sentido general de esta tendencia, aun cuando solo se refiera a la inversión extranjera registrada en el Banco Central. En primer lugar, resulta claro que en el período 1969-1978 el capital extranjero no se interesó en el sector agropecuario, pues en diez años de inversiones registradas en el sector, las inversiones extranjeras no se elevaron

a más de RD\$250,000.00. El segundo hecho significativo es el gran peso relativo que sostuvieron las inversiones extranjeras en la industria productora de bienes para el mercado interior, sobre todo a partir de 1974, cuando su participación relativa en dicho sector se elevó a 50 %. En tercer lugar, reconocemos que en el período estudiado las inversiones extranjeras en el sector financiero en general se equilibraron con las del sector comercio, lo cual se verificó en estrecha conjunción con el dinamismo y rol dirigencial experimentado por la banca extranjera en el proceso de acumulación en el período. Asimismo, el sector financiero y el comercio, juntos, a partir de 1974 llegaron a tener un peso relativo igual al de la industria, pero en el período 1960-1973 le superarán, lo que ratifica la tesis de que las inversiones industriales constituyeron el eje dinámico de la inversión extranjera en el período. Finalmente, las inversiones extranjeras en minería, después de representar más del 60 % de la inversión registrada en 1970, descienden en su peso relativo hasta llegar a sostener apenas un 11 % en 1978.

En este período las empresas líderes del proceso de inversión extranjera fueron las transnacionales, sobre todo Falcombridge y GW. Entre los años 1969 y 1974, de un total de RD\$401.6 millones, cinco empresas concentraban el 65.4 % de las inversiones extranjeras. Me refiero a Falcombridge, GW, Shell, Codal, y Codetel, como se aprecia en el cuadro 4.6.

Cuadro 4.6
**INVERSIÓN EXTRANJERA LOCALIZADA DE LAS EMPRESAS
FALCOMBRIDGE, SHELL, CODAL, CODETEL Y GULF AND WESTERN**
(En millones de RD\$)
1969-1974

Años	Falcombridge	Shell	Codal	Codetel	Gulf and Western	Total
1969	8.6	-	-	-	-	8.6
1970	67.5	1.3	3.4	4.0	4.7	75.9
1971	82.0	20.9	1.8	5.6	4.7	115.0
1972	11.3	1.8	-	6.0	14.9	34.0
1973	-	5.5	0.2	0.2	12.5	18.4
1974	-	4.7	-	1.8	5.3	11.8
Total	169.4	34.2	5.1	18.6	37.4	263.7

FUENTE: ONAPLAN: *Plandes 7: Proyecciones macroeconómicas y del sector público (s/f)*. Citado por Cuello (1973), p. 54.

Veamos los detalles de este proceso. Debido a que el eje dinámico del proceso de inversión extranjera ha sido el sector industrial, conviene iniciar el análisis detallado del proceso con las ramas industriales. Por el cuadro 4.7 se reconoce que en diez años la inversión extranjera en la industria elevó su participación en más de RD\$90 millones. La distribución por ramas de estas inversiones se revela en el cuadro 4.8. En este se evidencia que la inversión extranjera en la industria se concentra sobre todo en las ramas alimenticias, donde obviamente las inversiones en la industria azucarera de GW tienen un gran significado. De este modo, la rama de alimentos pasa de concentrar el 37 % de las inversiones extranjeras registradas en 1969 con apenas RD\$537,000.00 a representar el 60 % en 1978 con más de \$55 millones. En la producción de alimentos, las principales industrias donde el capital extranjero localiza sus inversiones son, además de GW, Industria Portela, Codal, Nestlé, Adams Dominicana, Tamara Nabisco, Molinos del Norte, Embutidos Stefanutti, Productos La Estrella, Productos Diversos y otras empresas menores.

En las ramas de bebidas y tabaco se verifica igualmente un significativo proceso de inversiones de capital extranjero. Si en 1970 la inversión extranjera registrada en dichas ramas apenas superaba los dos millones de pesos, en 1978 sobrepasaba los 16 millones. Dichas inversiones se concentran fundamentalmente en las siguientes industrias: Cervecería Nacional Dominicana, Cochón Calvo (productora del ron Siboney y prácticamente propiedad de la GW), Refrescos Nacionales (Coca-Cola), Industria de Licores Internacionales, y en el tabaco, además de las firmas que se dedican a la comercialización del producto, encontramos las inversiones de Philips Morris en E. León Jimenes.

En las ramas de productos químicos también se verifica, partir de 1973, un significativo incremento de las inversiones extranjeras registradas, las cuales se elevan de apenas unos 30 mil pesos en 1969 a más de RD\$ 8 millones en 1978. En dicha rama, las principales empresas donde se localizan las inversiones extranjeras son la Refinería Dominicana de Petróleo (capital mixto: estatal y Shell), Petroquímica Dominicana, Tropical Gas Company, Sterling

Products, Vick Chemical, Colgate Palmolive, Warner Chilcott, Bridom Dominicana, Laboratorios Abott, etc. Otras industrias vinculadas a dicha rama donde hay importantes inversiones extranjeras son Polites S.A., Baltimore Dominicana, Ray-O-Vac, Quinsanto Industrial, Papeles Nacionales, Cementos Nacionales, etc.

Después de la producción industrial, donde se verifican los mayores incrementos de la inversión extranjera es en las ramas financieras y en el sector turismo, así como en el comercio. En las primeras, en 1970 la inversión extranjera registrada ascendía a poco más de RD\$400,000.00. En 1978 estas se habían elevado a más de RD\$ 48 millones. En el sector comercio si en 1970 la inversión extranjera localizada apenas alcanzaba al millón de pesos, en 1978 también sobrepasaba los RD\$48 millones. La inversión extranjera tiene una gran participación en la banca, destacándose el First National City Bank, The Chase Manhattan Bank, The Royal Bank of Canada, the Bank of Nova Scotia y el Bank of America. En el negocio de seguros encontramos a The Home Insurance Company, Pan American Life Insurance Company, Intercontinental de Seguros, Confederación del Canadá. En el sector turismo, además de la cadena hotelera de Gulf and Western (Hoteles de la Costa), los principales hoteles propiedad de firmas extranjeras son Sheraton, Intercontinental, Costa Ámbar. En materia de comunicaciones destaca CODETEL, así como All American Cable and Radio y la RCA Global Communications. En las ramas comerciales y de servicios algunas de las principales empresas extrajeras, o donde el capital extranjero tiene significativa participación, son Curacao Trading Company, Electroluz Lagares, Esso Standard Oil, Texaco y Caribbean Inc. Arco Caribbean Inc., Shell Company Limited.

Capital transnacional y mercado interno:

El caso de Gulf and Western

La expansión de la corporación transnacional Gulf and Western (GW) ilustra el contenido general del proceso de penetración del gran capital internacional en la economía dominicana en el período 1966-1978, por lo cual resulta conveniente analizar con cierto detalle este proceso.

Cuadro 4.7

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA REGISTRADA EN EL BANCO CENTRAL

POR RAMAS DE ACTIVIDAD

(En millones de RD\$)

(1969-1978)

Años	Inversión por ramas de actividad											
	Agropecuaria		Minería		Industria*		Finanzas**		Comercio y otros servicios***		Total	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%	Abs	%
1969	-	-	-	-	1,439.6	58	411.8	18.0	602.0	24	2,453.4	100
1970	-	-	14,893.7	66	5,933.0	26	468.2	2.0	1,376.5	6	22,671.4	100
1971	-	-	14,893.7	43	9,932.5	28	5,000.3	14.0	5,118.2	15	34,974.7	100
1972	-	-	16,157.8	23	21,576.7	30	12,217.6	17.0	20,413.1	30	70,887.2	100
1973	-	-	16,168.8	17	24,450.4	25	19,431.0	20.0	33,633.5	38	96,609.2	100
1974	70.0	-	21,880.7	13	86,902.6	50	28,035.2	16.0	36,590.3	21	174,100.0	100
1975	163.0	-	21,880.7	12	88,512.7	48	34,215.6	17.0	26,708.7	23	182,792.9	100
1976	257.0	-	23,417.6	12	89,699.9	47	37,932.7	20.0	26,806.0	21	189,425.6	100
1977	257.0	-	23,417.6	11	92,308.6	43	48,393.0	21.0	48,676.3	25	214,158.2	100
1978	257.0	-	23,414.6	11	92,659.5	43	48,934.0	23.0	48,585.0	23	214,958.9	100

*Incluye: alimentos, bebidas y tabaco, textiles y vestidos, calzados y cueros, madera, química, maquinarias y equipos y productos metálicos.

** Incluye: finanzas, seguros, bienes raíces, servicios comerciales y turismo.

*** Incluye: comercio, transporte y almacenamiento, comunicaciones.

FUENTE: Banco Central: Boletines mensuales Vol. XXXV, No.12, diciembre 1981.

Cuadro 4.8
**INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA REGISTRADA EN EL BANCO
 CENTRAL**
PARA EL SECTOR INDUSTRIAL
 (En miles RD\$)
1969-1978

Años	Alimentos	Bebidas y tabaco	Textiles, Vestidos, Cuero, Calzados y Madera	Productos Químicos	Maquinarias, Equipos Metálicos	Total
1969	537.0	155.2	-	87.6	719.2	1,434.6
1970	2,409.4	2,133.9	-	44.2	845.5	5,933.0
1971	3,211.3	2,133.9	-	3,131.4	1,485.9	9,932.5
1972	3,530.3	10,430.1	523.0	5,566.3	2,049.0	21,576.7
1973	3,517.8	10,383.8	554.5	10,248.8	2,381.0	24,450.4
1974	54,911.3	15,114.1	612.2	13,512.8	2,689.4	86,902.6
1975	54,511.3	15,799.1	1,312.2	15,198.9	3,003.4	88,512.7
1976	55,000.6	15,749.1	1,312.2	15,688.3	3,222.9	89,699.9
1977	55,160.7	15,487.4	1,105.7	17,879.8	3,270.7	92,308.6
1978	55,244.3	16,105.7	1,105.7	18,075.0	3,270.7	92,659.5

FUENTE: Banco Central, *Boletines mensuales 1969-1978*.

En 1968 la Porto Rico Sugar Company, hasta ese momento propietaria del Central Romana Corporation y de la Central Romana by Products Company, se fusionó con la GW Industries Inc.¹⁷ Fue de este modo que la empresa transnacional GW se introdujo en la vida económica dominicana. Con la fusión, la GW se aseguró la entrada al país a través del renglón más importante de su actividad económica: el azúcar. Con ello, la gran corporación, como se verá abajo, estableció los canales necesarios para su posterior expansión al dominio del mercado interior dominicano. GW se introdujo en el país a través de la compra del Central Romana by Products, aprovechando el inicio de la favorable coyuntura de precios del mercado azucarero norteamericano y mundial, los cuales desde 1966 comenzaban a dar indicios de recuperación lenta, pero tendencialmente sostenida, de los precios. Esta favorable coyuntura se articuló, en el terreno local, con las nuevas condiciones po-

¹⁷ Para el análisis de la fusión, véase a Frundt (1980). Para el análisis contemporáneo, véase a Del Castillo *et al.* (1975). Para el estudio de la Porto Rico Sugar Company, el referente obligado es García Muñiz (2010).

líticas y sociales, que la nueva administración del presidente Balaguer inauguró a partir de 1966, fundamentalmente con su política de persecución y aniquilamiento del movimiento sindical, de las organizaciones de izquierda y de la ley de austeridad que aseguraba condiciones salariales óptimas para el capital internacional, sobre todo en el sector azucarero.

A partir del control del Central Romana y de la Central Romana by Products, GW se expandió en función de tres grandes renglones económicos: la producción de furfural, la cría de ganado y la producción agrícola para exportación de frutos menores, sobre todo cítricos y hojas de tabaco. Todas estas actividades se encuentran estrechamente vinculadas a la empresa azucarera: el furfural es un derivado del bagazo de caña, que a través de su procesamiento sirve como materia prima para la industria del plástico y la cohetería espacial; el ganado vacuno ha sido utilizado como fuerza de tracción animal en los ingenios azucareros, levantándose a partir de este uso una industria frigorífica de carnes para exportación, principalmente para cubrir la demanda de los mercados regionales, sobre todo de Puerto Rico y Miami; finalmente, las tierras sin uso del Central Romana le han permitido a la GW organizar la producción en gran escala de cítricos y hojas de tabaco para exportación, aprovechando, también en esta ocasión, la buena coyuntura de precios internacionales para esos productos en los años 1972-1973.

Es cierto que estas producciones aun no suponen la penetración de la corporación GW en el mercado interno, pero sí señalan cierto grado de competencia con algunos renglones de la economía de exportación en manos de la burguesía comercial, como son los casos de la producción ganadera y de las exportaciones de tabaco. Posteriormente, GW logró firmar un contrato con el Estado dominicano mediante el cual se le extendía por un plazo de veinte años las concesiones otorgadas por Trujillo en 1953 a la industria de furfural, en ese momento en manos de la Porto Rico Sugar Company. Posteriormente, la corporación firmó otro contrato mediante el cual se comprometía a operar una zona franca en la provincia La Romana, donde se encuentran los terrenos e instala-

ciones del Central Romana. Asimismo, obtuvo del Estado dominicano un contrato que le autorizaba a instalar en San Pedro de Macorís una planta de cemento y, finalmente, a través de la Compañía Financiera Nacional (COFINASA), logró imponer un nuevo estilo de dominio del capital financiero en el país, que le permitió captar parte del ahorro interno para financiar sus operaciones, sin prácticamente movilizar capitales propios, como veremos abajo.

La penetración de GW en el país expresa con bastante claridad el nuevo carácter que el dominio del gran capital ejerce sobre las economías subdesarrolladas, como la dominicana. Las modalidades de desarrollo capitalista a nivel interno que esta dominación implicaba afectan las rearticulaciones del bloque en el poder en los vínculos entre Estado-burguesía local y gran capital internacional; asimismo, definen nuevas estrategias de dominación, sobre todo en el ámbito laboral, a partir del papel que en este plano pasan a desempeñar el Estado y actores locales específicos del bloque en el poder.

La fusión a la GW de la Sugar Porto Rico Company constituye en muchos sentidos un caso típico de expansión imperial, ilustrativo del comportamiento de las empresas transnacionales en sus decisiones de inversión en el mundo subdesarrollado. ¿Por qué GW se interesó en el negocio del azúcar, específicamente en el Central Romana? La hipótesis más interesante que conozco al respecto es la de Henry J. Frundt¹⁸. De entrada hay que desechar la hipótesis que asegura como razón principal de la fusión de la Porto Rico Sugar Company y compra del Central Romana por GW que por este medio la transnacional adquirió, tras la compra del Central, vastas extensiones de tierra en la zona Este del país, a menos de RD\$125 el acre, precio que, como dice Frundt, “es buen pero no lo suficiente para explicar por qué la compañía habría de empezar una expansión de esa magnitud dentro de una producción tan altamente especulativa”¹⁹, como lo es el azúcar. Hay que considerar, además, añadido yo, que desde los años

¹⁸ Frundt (1980).

¹⁹ *Ibidem*.

cincuenta la Sugar Porto Rico Company venía operando con una sistemática caída relativa de sus beneficios. Este último elemento posiblemente fue uno de los factores que, del lado de los directivos de GW, más le facilitó las negociaciones de compra y fusión con la Sugar Porto Rico Company.

Ahora bien, tal parece que la decisión de la fusión de la Sugar Porto Rico Company se enmarcaba en una estrategia de expansión a largo plazo en la que la corporación aprovecho los lazos de algunos de sus miembros directivos con la Administración Johnson en los Estados Unidos y los vínculos del Chases Manhattan Bank con la Junta de Directores de la Sugar Porto Rico Company. De más está decir que las relaciones del Chases Manhattan Bank con la corporación GW son muy estrechas. Es pertinente recordar que el señor Bluhdorn, en ese momento principal accionista y presidente de GW, tenía una vasta experiencia en el negocio del algodón, cuyo mercado, como se sabe, puede decirse es “contiguo” al azucarero, a nivel mundial. Asimismo, a Charles Bluhdorn, le unían lazos de estrecha amistad con personalidades de gran ascendiente sobre el presidente Johnson, tales como los señores Ellsworth Bunker, Rosewell Gilpatric y Averell Harriman, prominentes figuras de la administración, todos con intereses en la National Sugar Refining de los Estados Unidos. Del lado de la Sugar Porto Rico Company es pertinente señalar que el señor Joseph Farland, miembro de su junta directiva, había sido embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana. En ese momento, como refieren Goff y Locker²⁰, más de treinta prominentes figuras públicas del gobierno de Johnson, ligados a dichos intereses económicos, tenían a su vez intereses financieros en la República Dominicana.

El segundo elemento que debe tomarse en consideración es la favorable coyuntura de precios que para el mercado azucarero se veía venir a finales de la década de los sesenta, cuyo análisis de seguro fue hecho con suma precisión por los hombres de la corporación GW, sobre todo dados sus lazos con el mundo azucarero

²⁰ Véase a Goff y Locker (1972).

norteamericano y las altas finanzas, especialmente con el Chase Manhattan Bank, cuyos negocios e intereses azucareros en el área del Caribe eran muy importantes.

Un tercer elemento, de naturaleza política, se vincula a las condiciones que se presentaron en el país inmediatamente Joaquín Balaguer ascendió al poder en 1966, con el práctico aniquilamiento del movimiento obrero organizado y la contracción y consecuente congelación de los salarios obreros, condiciones ambas que hacían ideal y altamente rentable la inversión en el azúcar –sector de la economía donde la clase obrera fue más afectada por la caída de los salarios reales–, máxime si estas tendrían como futuro inmediato una coyuntura de precios tan favorables, como los que se presentaron en los años inmediatamente posteriores a la fusión de la Sugar Porto Rico Company en 1968.

Sintetizando la discusión, puede decirse que en el asunto de la fusión de la Sugar Porto Rico Company con GW se entrelazan factores diversos entre los que destacan: 1) los estrechos vínculos de la corporación con el gran capital financiero internacional, a través del Chase Manhattan Bank y de este con la Porto Rico Sugar Company; 2) los estrechos vínculos de los grandes intereses azucareros norteamericanos con el gran capital financiero internacional, su ascendencia en la Administración Johnson y la relación de esta última con los planes contrainsurgentes implementados por los Estados Unidos en la República Dominicana a partir de 1966, de cuyos resultados (el práctico aniquilamiento del movimiento obrero y una feroz persecución del movimiento revolucionario en su conjunto) la República Dominicana terminó siendo un sitio “ideal para el inversionista extranjero”, sobre todo en materia de condiciones salariales y políticas, y 3) finalmente, la relación entre los planes de expansión a largo plazo de la corporación y su expresión de coyuntura, a propósito del inicio del ciclo de buenos precios que a finales de la década de los sesenta se presentó en el mercado azucarero internacional.

Analicemos con mayor detalle el proceso de expansión de la gran corporación GW en la economía dominicana en el período 1968-1978. En 1968, en el momento en que GW fusionó a la Porto

Rico Sugar Company, el Central Romana, que pasó a ser propiedad de la corporación, poseía alrededor de 11,784 tareas de tierra con un valor de 1.9 millones de pesos e instalaciones en equipos por valor de 14.5 millones. En total los activos fijos de la compañía ascendían a 53.8 millones de pesos. De 1971 a 1974 la GW invirtió RD\$37.6 millones en equipo, maquinarias, construcciones y otros gastos de inversión, lo que sumado a las inversiones iniciales del central arroja un promedio de RD\$91.4 millones, controlados por GW en materia azucarera, incluida la planta de furfural. La evolución de las inversiones directas localizadas de GW se especifica en el cuadro 4.9.

Cuadro 4.9
**INVERSIONES DIRECTAS LOCALIZADAS
DE GULF AND WESTERN**
(En millones de RD\$)
1971-1974

Concepto	Años				
	1971	1972	1973	1974	Total
Maquinarias y equipos (C.F.I.)	1.65	8.05	7.55	2.05	19.30
Construcciones	2.60	4.20	2.80	1.80	11.40
Gastos de inversión financiados localmente	0.50	2.70	2.20	1.50	6.90
Total	4.75	14.95	12.55	5.35	37.60

FUENTE: Cuello (1974), p. 54. Cuadro elaborado por el autor.

Como se puede inferir de las cifras que proporciona el cuadro 4.9, desde su instalación en el país GW contó con enormes extensiones de tierra para sus inversiones en materia agropecuaria. La mayor parte de estas tierras estaba dedicada al cultivo de la caña, pero una parte sustancial se dedicaba a la cría de ganado y otra no menos significativa se encontraba como reserva territorial sin trabajar. Una vez el Central Romana pasó a ser propiedad de la corporación, pasó de constituir una típica plantación azucarera a convertirse en un moderno emporio agroindustrial, transformando así la estructura económico-social de la región Este del país, todo lo cual no iludía el carácter latifundista de la plantación en el Central Romana ni el carácter verdaderamente neocolonial de su dominio sobre la región Este del país.

En 1967 GW poseía alrededor de 275 mil acres de tierra en la región Este. Nueve años después, en 1976, se habían elevado a 378,310 acres (cuadro 4.9). Se estima que con ello GW poseía en 1976 alrededor del 4.4 % de las tierras de cultivo del país y el 5.3 % de sus tierras cañeras, lo que sumado a las tierras en manos de sus colonos azucareros y algunos productores independientes que tienen vínculos con la corporación, le permite a GW controlar alrededor del 8 % de la tierra de cultivo de la nación. En la región Este del país, según las propias fuentes de GW, la corporación controlaba en 1976 alrededor del 75 % de las tierras de cultivo, las cuales fueron adquiridas en gran medida a través de mecanismos compulsivos de expropiación y despojo campesinos²¹. Diversas fuentes estiman las tierras controladas por GW, a lo largo del período 1967-1976, como se indica en el cuadro 4.10.

Las enormes extensiones de tierras controladas por GW en la región Este se insertan en una estructura de tenencia de abierto carácter latifundista, donde alrededor de 14 mil familias campesinas de la zona apenas controlan 401.5 mil tareas de tierra, mientras 95 familias poseen 5.3 millones de tareas, de las cuales la corporación es propietaria de 3 millones de tareas²².

Analizaré ahora la dinámica económica del Central Romana, en función de la dinámica azucarera más general del país. Hasta 1970 la producción del Central Romana marchaba a un ritmo semejante a la del resto de los productores del país, como se observa en el cuadro 4.11, pero a partir de esta fecha, unido al inicio del período de alza sostenida de los precios del azúcar tanto en el mercado mundial como en el norteamericano, los diferenciales de productividad del Central Romana respecto a los ingenios del Estado y de la familia Vicini se acentúan a favor del Central Romana. En esa coyuntura los precios del azúcar se elevaron de 6.9 centavos la libra en 1970 a 7.3 centavos en 1971, 14.2 centavos en 1974 y 60 centavos en 1975 en lo relativo al mercado norteamericano. En lo que respecta al mercado mundial, los precios se elevaron de 3.7 centavos la libra en 1970 a 4.5 centavos en 1971, y llegaron a alcanzar los 19.12 centavos en 1974 y

²¹ Sobre esta problemática, véanse los trabajos de Dore (1979 y 1981).

²² Véase a Frundt (1980), Dore (1979) y Del Castillo *et al.* (1975).

los 60 centavos en 1975. En general, esto provocó una elevación de la producción azucarera en los productores locales, pero quien logró elevar más considerablemente sus niveles productivos fue el Central Romana no solo ampliando las extensiones de las áreas cañeras, sino elevando la productividad por área de corte.

Cuadro 4.10
POSESIONES DE TIERRA DE GULF AND WESTERN
1967-1976 (Estimado)

Años	Cantidad de tierra estimada (en Acres)
1967	275,000 ⁽¹⁾
1971	280,738 ⁽²⁾
1972	290,038 ⁽³⁾
1973	278,968 ⁽⁴⁾
1974	370,560 ⁽⁵⁾
1975	472,888 ⁽⁶⁾
1976	378,310 ⁽⁷⁾

FUENTE:
⁽¹⁾ Grimaldi (1977).
⁽²⁾ *El Caribe*, 25 de noviembre de 1972.
⁽³⁾ *Ibidem*.
⁽⁴⁾ Del Castillo et al. (1975).
⁽⁵⁾ *Washington Post*, 27 de septiembre de 1974.
⁽⁶⁾ *La Noticia*, 9 de septiembre de 1975, p. 4A.
⁽⁷⁾ *El Nacional de ¡Ahora!*, 6 de marzo de 1976. Citado por Frundt (1980), p. 68.

Los ingenios azucareros estatales tuvieron también un incremento en sus volúmenes de producción de 15 % en el período 1960-1970, mientras los productores privados tuvieron un crecimiento de 6% para el Grupo Vicini y 0 % para el Central Romana. En el período 1966-1976 los volúmenes de producción de los ingenios del Estado se elevaron en 23 %, mientras los del Central Romana se incrementaron en 6 %. Este afán por elevar la producción claramente se encontraba en estrecha asociación con el alza de los precios del azúcar. Ello le reportó a la corporación GW jugosos beneficios, como lo revela el cuadro 4.11.

En el período 1970-1976, la GW logró colocar en el mercado azucarero (local, norteamericano y mundial) alrededor de 2.7 millones de toneladas métricas de azúcar crudo y refinado, con

un promedio anual de producción de 250 toneladas métricas. Ello le permitió acumular en el período, solo por ingresos de las operaciones azucareras, la suma de RD\$ 273 millones, de los cuales \$183.4 millones fueron acumulados en los años 1974-1976. De este modo, los ingresos por operaciones azucareras, del total de operaciones agrícolas y alimenticias del conglomerado, se elevaron del 9.5 % en 1970 al 14.7 % en 1976.

De todos modos, estas cifras deben considerarse con precaución. En el caso del azúcar, la GW tiene el recurso de la subvaluación de las exportaciones que realiza²³. Según un informe del Banco Mundial de 1972, las subvaluaciones de los precios en las exportaciones ascendieron a cinco millones de dólares, y correspondió a la GW la parte sustantiva.

Cuadro 4.11
**COSTOS Y BENEFICIOS POR TONELADAS DE CAÑA PRODUCIDAS
EN EL CENTRAL ROMANA CORPORATION
1970-1976**

Años	Caña Procesada (miles T.M)	Costos por T.M. (US\$)	Costo no explicado por T.M. (US\$)	Ventas por T.M. (US\$)	Beneficio Declarado (Millones de US\$)
1970	2,545	10.89	2.83	18.08	4.36
1971	2,750	12.54	3.27	21.81	6.00
1972	3,351	15.46	0.24	21.19	5.49
1973	3,117	15.52	5.59	28.65	7.54
1974	259	19.72	12.52	12.52	15.25
1975	2,562	23.68	17.96	17.96	33.92
1976	2,855	16.12	14.49	14.49	19.67
Totales	17,439	-	-	-	92.23
Promedio	-	10.72	8.12	19.24	-

FUENTE: Frundt (1980), pp. 39-40. Elaboración del autor.

Son ciertos los grandes beneficios obtenidos por el conglomerado, directamente de la producción azucarera en el período de buenos precios 1970-1976. Si en 1970 la GW vendió su azúcar a un precio de 18.08 dólares la tonelada métrica, en los años 1975 y 1976 había logrado venderla a un precio de

²³ Al respecto véase la polémica Cuello-Peynado (1974).

US\$75.56 y US\$50.08 por tonelada métrica, respectivamente. Con ello logró obtener un alza en sus beneficios declarados por concepto ventas de azúcar en el período 1970-1978 del orden del 127 %. En términos de la relación costos/beneficios, ello significó que, si en 1970 GW para obtener un dólar de beneficio por cada tonelada métrica de azúcar vendida tenía que invertir 4.1 dólares, en 1976 había logrado obtener el mismo dólar al invertir solo 2.54 dólares.

Para lograr estos pingües resultados, el conglomerado articuló una sagaz estrategia de racionalización y optimización de sus recursos, pero sobre todo de constricción salarial, fundamentalmente en las áreas del corte de la caña, que prácticamente mantuvo estancado el salario en el período 1970-1976, aunque en las áreas industriales de la plantación azucarera las remuneraciones tuvieron un significativo incremento. Con esta estrategia la GW logró ganar en 1970 casi cuatro veces lo que el trabajador obtenía por tonelada de caña cortada y en 1975 esta cifra se había elevado a 10. En ese año la corporación, por cada tonelada de azúcar, deducidos costos, logró obtener un beneficio de US\$33.92 mientras los trabajadores obtenían un promedio de US\$1.59. A lo largo del período 1970-1976, la GW logró acumular beneficios declarados de US\$92.23 millones, solo por concepto de las ventas de azúcar, como se aprecia en el cuadro 4.11.

En esta sistemática política de control salarial, un puntal decisivo fue el práctico aniquilamiento del Sindicato Unido de la Romana, organización que logró agrupar a la casi totalidad de los trabajadores fabriles, de transporte y de la plantación (braceros y empleados). En este propósito la corporación contó con las favorables condiciones de la política de persecución y aniquilamiento del movimiento obrero organizado, decretada por Balaguer en 1966, junto a su política de austeridad y constricción salarial a escala nacional²⁴.

²⁴ Para la discusión de este punto, véase NACLA (1975), Cassá y Jarvis (1994).

Cuadro 4.12
**PRECIOS F.O.B. DEL FURFURAL EN DÓLARES POR KG.
1963-1970**

Años	Precios por Países		
	República Dominicana	Francia	Italia
1963	0.19	-	-
1964	0.20	-	-
1965	0.20	0.64	-
1966	0.25	0.60	0.72
1967	0.28	0.41	0.51
1968	0.26	0.36	0.35
1969	0.23	0.27	-
1970	0.26	-	-

FUENTE: Cuello, José Israel: “*El mismo*”. Citado por Del Castillo et al. (1975), p. 220.

La industria del furfural representa el segundo renglón que mayores beneficios ha dejado a la GW después del azúcar²⁵. Siguiendo la misma tendencia alcista de la productividad en la industria azucarera, observada en el período 1970-1976, a propósito del ciclo de buenos precios en el mercado mundial, la industria del furfural incrementó su productividad a partir de 1968. De esta manera, entre los años 1968-1970 la producción de furfural aumentó en 83 %, y en el período 1970-1977 se elevó en 29 %. Solo en los años 1972-1973, el furfural produjo alrededor de RD\$8.1 millones, de los cuales se pagaron por concepto de impuestos sobre la renta la suma de RD\$1.5 millones, alrededor del 18 %.

Pero estas cifras son engañosas, pues en realidad sobre la comercialización del furfural pesa el mismo mecanismo de subvaluaciones que he señalado a propósito de las exportaciones azucareras. Esto se aprecia con facilidad en el cuadro 4.12. Como se puede inferir del cuadro de referencia y ha indicado Cuello:

[...] siempre el furfural que más barato se vende es el dominicano, Pero no con diferencias de precios comprensibles, sino con una variación próxima al 100% en muchos casos.

²⁵ El furfural es un insumo que se produce a partir del bagazo de caña. Inicialmente, se destinaba a la industria del nylon y los plásticos. Pero, a la par que el nylon ha sido desplazado por fibras sintéticas, el furfural ha encontrado nuevos usos, particularmente en la cohertería espacial, como purificador de los lubricantes de alta calidad utilizados por los cohetes.

Evidentemente que las diferencias reales en el mercado mundial no son de ese tipo, por lo que la evasión de divisas es manifiesta. Si en el año 1966 el furfural dominicano hubiese sido reportado al Banco Central como vendido al precio que declaran los franceses, por ejemplo, el ingreso en divisas por ese concepto hubiese ascendido a la suma de US\$8,981,156 y no a la declarada de US\$3,785,482.

La diferencia es enorme: US\$ 5,195, 674²⁶.

A partir del control del Central Romana, GW inició un proceso de diversificación y expansión económica que poco a poco le permitió vincularse con el sector turismo, las ramas industriales ligadas al mercado interno, las altas finanzas e incluso los sectores tradicionales de exportaciones no azucareras. Así, en poco más de cinco años dicha transnacional, con un monto de inversión en 1968 de RD\$61 millones, inició una estrategia de expansión en la formación social dominicana que la colocó en posición de control y beneficio de los principales sectores dinámicos de la economía dominicana. En este proceso la gran corporación movilizó muy poco capital productivo propio. Básicamente fue gracias a una sagaz estrategia de canalización del ahorro interno, a través de sus aparatos financieros en ese período (COFINASA)²⁷ y del aval del Estado para la consecución de los préstamos extranjeros, que la empresa se expandió no solo en las áreas ligadas al mercado exterior (azúcar y furfural, carne, cítricos, etc.), sino también al mercado interno.

En su expansión al mercado interno, junto a la movilización del ahorro interno, GW emplea el mecanismo de la reinversión de utilidades como estrategia que le permite resolver el problema de

²⁶ Cuello-Peynado (1974), *op cit.* p. 50.

²⁷ COFINASA opera como una pequeña bolsa de valores. A través de los préstamos que otorga a los diversos sectores económicos nacionales, realmente le vende a crédito bonos negociables y negocia con acciones. Con ello, COFINASA logra, además del manejo de grandes renglones del ahorro interno, la penetración en las esferas directivas de la banca y el empresariado nacional, pues exige de las entidades a quienes otorga créditos el conocimiento de sus estados financieros, así como la colocación de algunos de sus hombres en los puestos directivos de dichas entidades.

los límites de la reexportación de capital en cuanto a los beneficios derivados de sus actividades exportadoras.

Se estima que, entre 1970 y 1976, GW reinvertió en el país alrededor de RD\$100 millones²⁸, lo que junto a la movilización de las fuentes externas e internas de financiamiento le ha permitido el control de importantes renglones de la economía nacional²⁹.

Entre 1970 y 1976 las operaciones de GW generaron un ingreso de RD\$250 millones, lo cual representa el 16 % del ingreso de operaciones del conglomerado en su conjunto³⁰, así como cuatro veces la inversión original de RD\$61 millones, cifras que, junto a los beneficios no declarados, podrían elevarse a RD\$300 millones, aproximadamente.

A la consolidación de la economía azucarera y sus actividades conexas, procedió la afirmación de las zonas francas y la escalada de las inversiones en el sector turismo. Pero ambos tipos de inversiones no se consolidarían sino una vez GW logró asegurar un mecanismo financiero interno que le permitió una fácil canalización del ahorro interno del país para el afianzamiento de sus inversiones. Ese recurso financiero se lo proporcionaría COFINASA y el Banco de la Construcción.

COFINASA es un banco de inversiones que se fundó por parte de GW en abril de 1969 y, según los directivos, tiene como objeto:

²⁸ Según Frundt (1980), las inversiones de GW en el país en el período 1970-1979 alcanzaron los RD\$110 millones, distribuidos en los siguientes sectores: a) azúcar: 30 millones; b) furfural: 3 millones; c) carne: 10 millones; d) diversificación agrícola: 3.1 millones; e) zonas francas: 4 millones; f) finanzas: 3 millones; g) cemento: 10 millones; h) turismo: 35 millones, y i) desarrollo de la comunidad: 18 millones.

²⁹ A través de esos mecanismos, COFINASA se convirtió en un buró de informaciones de crédito para la corporación. Por medio de este mecanismo, en 1973 COFINASA ejercía un control directo o indirecto sobre 89 firmas. COFINASA se aseguró, además, a través de sus subsidiarias y empresas “amigas” el control de muchas empresas donde estaba en minoría como accionista. Como refiere Frundt (1980): por ejemplo, en Cochón Calvo con apenas un 10% de las acciones, la corporación ejercía un control real sobre el 80% de las acciones y de hecho de la empresa.

³⁰ En 1970, según estimaciones de Frundt (1980: p. 106), GW controlaba alrededor del 35 % de la producción azucarera dominicana, el 90 % de la producción de melaza y furfural, el 25 % de la ganadería, el 10 % de las finanzas, el 60 % de la producción de cemento, el 15 % de la actividad de construcción, textiles muebles y turismo, así como el 20 % de la producción de tabaco.

[...] incrementar las inversiones de capital privado, en totalidad o en parte, nacional o extranjero, en empresas o actividades que contribuyan al desarrollo económico de la República Dominicana, tales como las que se dedican a una actividad de producción o transformación de materias primas y las que sean complementarias o conexas de esas actividades como son la minería y extractivas y las del transporte, hoteles y otros servicios que promuevan propiamente la producción³¹.

Nótese cómo en su declaración de principios COFINASA evalúa como actividad “productiva” aquellas puramente de servicios, como turismo (hoteles) y transporte. Como vemos abajo, ello está en relación íntima con la estrategia de penetración al sector turismo por parte de la corporación.

El capital suscrito de COFINASA al constituirse ascendía a RD\$3,000, 000.00, con un capital pagado de RD\$2, 500,000.00 y una suscripción adicional de RD\$500,000.00. Este capital fue aportado en su conjunto por GW. El 25 de mayo de 1973 COFINASA había prestado RD\$9.3 millones. En esta ocasión, los créditos procedieron de diversas fuentes: 1) los valores originales de la compañía por el monto de RD\$1,000,000.00 (lo que autoriza RD\$4.0 millones continuando el valor efectivo en RD\$2.5 millones), 2) los préstamos bancarios de entidades extranjeras y nacionales, que ascendían a un total de RD\$6,359,240.00, y 3) finalmente, los fondos provenientes de la administración de valores ascendentes a RD\$9.0 millones. Como se aprecia, COFINASA, con un valor efectivo de RD\$2.5 millones llega a controlar alrededor de RD\$11.2 millones.

El monto fundamental de capitales manejado por la compañía está constituido por líneas de los bancos comerciales y fondos de redescuentos del Banco Central. Es interesante, además, que los fondos provenientes de los bancos comerciales nacionales o del Banco Central tienen una mayor velocidad de utilización que los recursos procedentes de los organismos internacionales. Realmente COFINASA se financia a través del ahorro nacional, no tanto por los

³¹ Citado por Frundt (1980), *op. cit.* p. 106 y ss.

créditos internacionales, los que a su vez le sirven de aval para las emisiones de bonos y los redescuentos del Banco Central.

A partir de estos fondos COFINASA inició sus operaciones. La mayoría de los préstamos que realizó no constituyen más que compras de acciones a las compañías beneficiarias de estos. De este modo, COFINASA, y con ella GW, se introdujo en la dinámica del mercado interno dominicano. Por ello, vía el mercado de valores que esta dinámica desató, COFINASA se aseguró puestos importantes –a través de la compra de acciones– en las compañías consideradas de su interés. Conocía así el manejo financiero de sus fondos, asegurándose un amplio margen de decisión sobre la estrategia económica de la compañía beneficiaria en función de los intereses de la corporación.

El beneficiario principal de COFINASA ha sido el comercio importador. Esta tendencia se conjuga con el papel que juega en la dinámica de la acumulación de capital, en el modelo de acumulación en el período bajo estudio, la fracción comercial de la burguesía. Pero los préstamos a dicho sector han sido dirigidos sobre todo a aquellos comerciantes que controlan el comercio de artículos manufacturados (televisores, aparatos de radio, electrodomésticos, etc.), directamente relacionados con el auge del mercado urbano en expansión, principal receptáculo del comercio importador y cuyos compradores fundamentales son los sectores medios urbanos. También COFINASA ha financiado préstamos a la industria sustitutiva de importaciones y la industria de ensamblaje.

El préstamo de mayor importancia de COFINASA en el período analizado fue a Operadora Zona Franca de La Romana, dependencia de GW. Ello evidencia con notoria claridad el rol de COFINASA: servir como mecanismo captador de fondos locales para la expansión del conglomerado. Lo importante es que este préstamo se financió con fondos del FIDE, avalado en su totalidad por el Estado dominicano. Se evidencia de nuevo el papel del Estado en la dinámica de penetración del capital extranjero en República Dominicana. De todas maneras, la principal actividad de COFINASA consistió en la compra y venta de acciones en el pequeño mercado de valores que contribuyó a crear.

De este modo, a través de tales operaciones, COFINASA ha ido adquiriendo una real y significativa importancia en el mundo financiero dominicano, que le ha permitido penetrar en el tramado de la economía dominicana en su conjunto e influir notablemente en sus ejes decisorios.

En 1972 GW vendió la mitad de sus acciones en COFINASA a un consorcio de bancos nacionales y extranjeros. Y en 1976 transfirió la otra mitad de sus acciones al Bank of America y a un trust que administraría el 65 % de los beneficios para financiar un complejo deportivo. La otra parte fue asignada a la Universidad Central del Este (UCE). Pero eso no quiere decir que GW ha perdido el control de COFINASA, pues a través del Bank of America y de sus adláteres del Banco Central, en la Junta Directiva de la empresa ha seguido controlando las decisiones de inversión.

A través de los mecanismos financieros articulados por COFINASA y una inteligente política de diversificación industrial y reinversión de utilidades no reexportables, a principios de los años setenta la corporación inició un acelerado proceso de penetración del mercado interno en la formación social dominicana, así como también ha logrado el virtual monopolio del negocio turístico en el país. Esta estrategia se ha dirigido a los sectores de la industria dominicana de mayor capacidad de mercado, como es el caso de las industrias tradicionales de tabaco y bebidas, y también ha penetrado en el jugoso negocio de producción de cemento y en la construcción, aprovechando su ventajosa posición como gran corporación respecto a la burguesía local en la favorable coyuntura de los años setenta en materia de construcción.

Las inversiones de GW en la industria de la construcción, la banca comercial y la producción de cemento constituyen un elocuente ejemplo de las limitaciones e imposibilidad de las burguesías del mundo capitalista subdesarrollado de definir opciones de desarrollo al margen o en oposición a los intereses del gran capital monopolístico internacional. En 1973 GW prácticamente forzó a un grupo de inversionistas dominicanos a constituir junto al Estado y la corporación, como socios menores, el Banco Hipotecario de la Construcción (BHC), luego de una larga querrela

en la que con la mediación del Estado, finalmente, la corporación logró imponer sus intereses estratégicos. El caso de la industria del cemento constituye un nuevo ejemplo de lo afirmado arriba. Ante el papel estratégico que en el modelo de acumulación reformista dependiente jugaban las inversiones en construcciones, un grupo de capitalistas locales decidió en los años setenta establecer en Barahona una fábrica de cemento. En ese contexto GW logró que el grupo CORDE apoyara su gestión de inversión, aportando RD\$ 3 millones para la construcción de una fábrica de cemento en San Pedro de Macorís. En 1975 GW logro del BM un financiamiento que le permitió movilizar una inversión de RD\$42 millones en la construcción de Cementos Nacionales, C. por A. En 1978 dicha empresa constituía una firme competencia de la Fábrica Dominicana de Cemento y de Cementos Cibao al acaparar alrededor del 60 % del mercado.

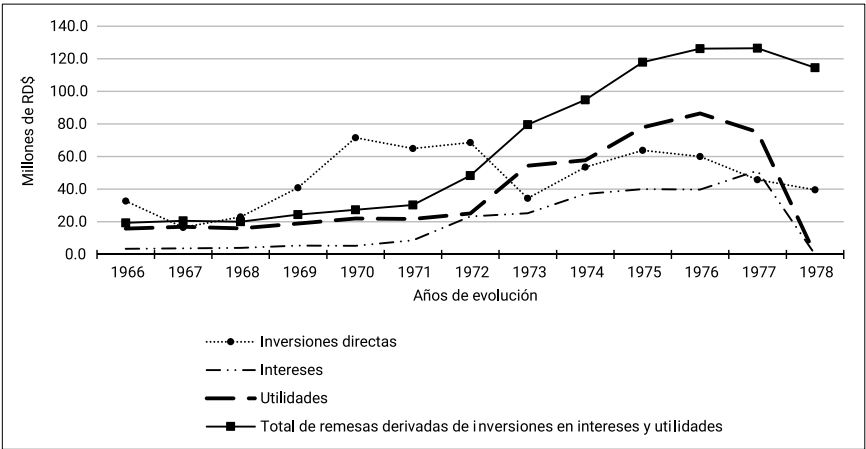
En este caso, GW no solo logró bloquear la iniciativa de los inversionistas dominicanos, sino que les forzó a vincularse como socios en Cementos Nacionales. Movilizando sus influencias en el Estado logró que este interviniera como socio menor en Cementos Nacionales y como garante para que la Corporación financiera Internacional del BM otorgara gran parte del financiamiento de Cementos Nacionales. Lo irónico de la historia es que esta operación prácticamente condenó a la ruina a la empresa estatal, Fábrica Dominicana de Cemento.

El impacto de la inversión extranjera en el proceso de desarrollo

Una evaluación general del significado económico de la inversión extranjera en el país a lo largo del período 1966-1978 obliga a reconocer que, si bien en el período 1966-1972 las inversiones extrajeras representaron un aporte positivo a la balanza de pagos, a partir de 1973 el flujo de capitales provenientes de las inversiones extranjeras directas era cada vez menor que el flujo de excedentes que los inversionistas extranjeros sacaban del país por concepto de reexportación de utilidades. De este modo, en el período 1966-1978, en términos netos, se remesaron hacia el

exterior, por concepto de reexportación de utilidades e intereses provenientes de las inversiones extranjeras, RD\$850 millones contra una inversión neta de RD\$615.9 millones. Esto representa un saldo negativo para la balanza de pagos dominicana de RD\$234.9 millones, como se narra en el cuadro 4.13.

Gráfico 4.1
DINÁMICA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA



FUENTE: Banco Central de la República Dominicana, Unidad de Balanza de Pagos.

La participación de las empresas transnacionales y el gran capital monopolista en la inversión extranjera generada en el país se muestra con claridad en el cuadro A.15 del Apéndice Estadístico. De este análisis se desprenden los siguientes elementos:1) En primer lugar, en 1978 las remesas de utilidades para todas las empresas extranjeras registradas en el Banco Central representaban el 60.3 % de la inversión. 2) De estas empresas, las ligadas a las comunicaciones y al comercio son las que han remesado mayores excedentes al exterior en el período bajo estudio: alrededor del 68 % del valor de sus inversiones, seguido por la minería (64 %) y la industria (61.8 %). 3) Las actividades bancarias extranjeras son las menos dinámicas en términos de reexportación de utilidades al exterior al representar el 43 % del volumen de sus inversiones, lo cual es también una suma alta. 4) De todos modos, quizás lo más significativo de este

proceso es que en general en el país siete empresas extranjeras controlaban el 50 % de la reexportación al exterior de utilidades en su conjunto; nos referimos a las siguientes: GW, Cementos Nacionales, Falcombridge, CODETEL, The Royal Bank of Canada, Shell y Esso, todas pertenecientes a grandes corporaciones y consorcios financieros internacionales.

En el período 1966-1978 en general las inversiones extranjeras constituyeron un verdadero obstáculo a las tareas del desarrollo, drenando las potencialidades productivas internas de la economía dominicana y movilizándolo hacia afuera gran parte de los excedentes generados en el país.

Además de sus efectos desacumuladores, en materia de control local del excedente, las inversiones extranjeras han tenido un efecto bastante negativo en la dinámica de los mercados. Por lo pronto, su efecto integrador del mercado interior ha sido casi nulo, pues el grueso de sus capitales se ha dirigido hacia ramas productivas que, como la minería y el aparato agroexportador (sobre todo del azúcar), prácticamente no tienen incidencia directa en el dinamismo del mercado interior. Asimismo, cuando las inversiones extranjeras se han dirigido hacia la industria local, han tenido un escaso efecto modernizador del aparato industrial manufacturero local, pues sus capitales se han orientado a las zonas francas, cuyos efectos en materia de mercado son semejantes a los de las inversiones mineras y agroexportadoras, y en aquellos casos en que se han enfocado hacia las ramas industriales abastecedoras del mercado interno, dichos capitales se han encauzado en gran medida en dirección a las ramas tradicionales de la industria (bebidas, tabaco y alimentos).

En estos casos, el capital extranjero simplemente ha aprovechado la abundante y barata mano de obra local (sobre todo en el sector azucarero y las zonas francas), así como los insumos agropecuarios baratos (sobre todo las inversiones en las ramas agroindustriales dirigidas al mercado interior, las bebidas y el tabaco), y no se han preocupado por modernizar el tren industrial, como estrategia de maximización del beneficio. En el caso de las industrias tradicionales, cuando se ha verificado un cierto

dinamismo productivo que implica una relativa modernización de su estructura tecnológica, en modo alguno ello puede achacarse exclusivamente a la incidencia del capital extranjero.

Cuadro 4.13
**INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS Y REMESAS DE INGRESOS
DERIVADOS DE INVERSIONES EN INTERESES Y UTILIDADES**
(Millones de RD\$)
1966-1978

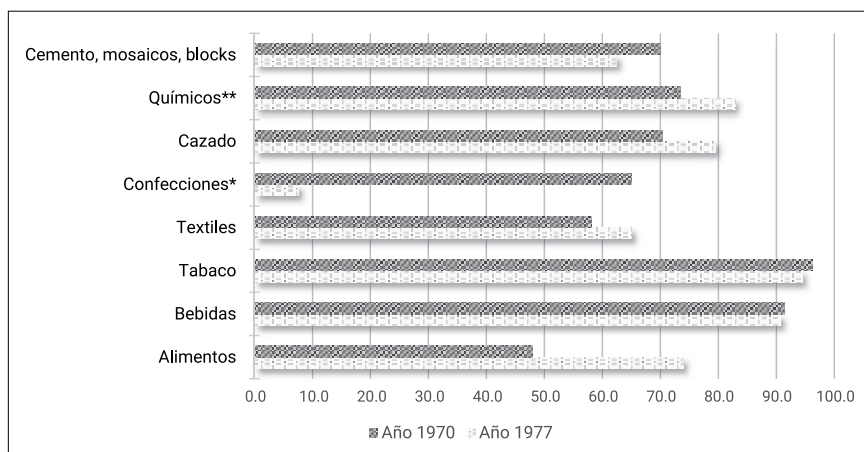
Años	Inversiones directas	Intereses	Utilidades	Total de remesas derivadas de inversiones en intereses y utilidades	Diferencia
1966	32.7	3.5	15.9	19.4	13.3
1967	16.6	3.8	16.9	20.7	-4.1
1968	23.0	4.0	16.0	20.0	3.0
1969	40.9	5.4	19.0	24.4	16.5
1970	71.6	5.3	22.1	27.4	44.2
1971	65.0	8.6	21.7	30.3	34.7
1972	68.6	23.3	25.1	48.4	20.2
1973	34.5	25.3	54.4	79.7	-45.2
1974	53.6	37.1	57.8	94.9	-41.3
1975	63.9	40.1	77.9	118.0	-54.1
1976	60.0	39.8	86.5	126.3	-66.3
1977	45.9	51.4	75.1	126.5	-80.6
1978	39.6	-	-	114.6	-75.0
Total	615.9	247.6	488.4	850.6	-234.9

FUENTE: Banco Central: Unidad de Balanza de Pagos.

En el caso del empleo, está claro que las inversiones extranjeras han tenido un efecto muy limitado. En todo caso, su incidencia en la dinámica de la absorción de mano de obra ha tenido como norte el aprovechamiento de una mano de obra abundante sobreexplotable.

Finalmente, es pertinente referir que gran parte del capital extranjero se ha dirigido hacia sectores improductivos, como el alto comercio, los seguros y la banca, cuyos efectos locales en materia de ampliación del mercado interno y del proceso global de desarrollo han sido escasos y limitados.

Gráfico 4.2
RETRIBUCIÓN AL CAPITAL COMO PORCENTAJE DEL VALOR
AGREGADO EN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL: 1970 Y 1977



FUENTE: *Hablan los Comunistas*, Año V, No. 219, 2-9 septiembre 1982, p. 5.

**Incluye abonos, pinturas, jabones perfumería, etc.

* Probablemente esta reducción obedece a las inconsistencias de las fuentes de información de los boletines industriales.

4.2. La industrialización dependiente y sus contradicciones

Desde que la CEPAL propuso sus primeras interpretaciones acerca del desarrollo latinoamericano, pero sobre todo a partir de la obra de Prebisch³², es un hecho fuera de discusión en América Latina que forzosamente la tarea del desarrollo conduce al esfuerzo por la industrialización. Se trata de discutir las condiciones en que en los países dependientes podría darse ese proceso. Por lo menos, desde la posguerra en América Latina se reconoce tanto por autores y académicos marxistas y no marxistas y economistas neoclásicos y estructuralistas como por dirigentes políticos, que la región vivió en el último cuarto del siglo XX un importante y significativo proceso de transformación de sus estructuras económicas y sociales, gracias al cual ha dejado

³² Véase sobre todo Prebisch en su obra clásica sobre el desarrollo latinoamericano (1963) y su posterior trabajo de cara a los procesos de transnacionalización de la economía mundial y el capitalismo periférico (1981).

de ser, por lo menos en los países de mayor desarrollo relativo, como Argentina, México y Brasil, una zona típicamente agrario-exportadora, con un abierto predominio de las oligarquías comerciales y terratenientes. Nuevos agentes y sujetos sociales se han abierto paso en el escenario latinoamericano, vinculados a la acelerada urbanización que vive la región, cuyo punto de indiscutible nucleamiento ha sido la industrialización³³. Sin embargo, este proceso ha sufrido notables altibajos y su conducción ha sido vindicada por los sujetos y actores sociales más disímiles (desde sectores burgueses vinculados al aparato comercial, pasando por grupos burocráticos estatales, hasta las alianzas de las burguesías dependientes latinoamericanas con las empresas transnacionales). Aun así, pese al prolongado esfuerzo industrializador latinoamericano, la región continúa siendo un área subdesarrollada, con profundas desigualdades y desequilibrios propios del subdesarrollo. La industrialización latinoamericana no ha podido apoyar un proceso de crecimiento autosostenido, expandir los mercados internos de modo significativo e integrar a las masas trabajadoras urbanas y rurales a un aceptable estándar de consumo que eleve sus niveles de vida. Se sigue sosteniendo por autores marxistas y no marxistas, por economistas estructuralistas y neoclásicos, que la tarea de la industrialización constituye el requisito indispensable para lograr el desarrollo³⁴. Por esto, cabe la pregunta: ¿en las condiciones del capitalismo dependiente y subdesarrollado, pueden las burguesías latinoamericanas emprender la tarea del desarrollo de base industrial? La respuesta nos la proporciona la propia historia latinoamericana. Desde principios de los sesenta hasta finales de los setenta (1960-1978) asistimos en la región a un proceso de creciente internacionalización del mercado interior en los países de mayor desarrollo relativo (Argentina, México y Brasil), dándose paso a un proceso de integración de las burguesías dependientes y las burocracias de Estado con

³³ Véase a Calili, Cardoso *et al.* (1978) y Salama (1976).

³⁴ Cardoso (1968) sintetiza brillantemente este problema.

el gran capital transnacional, como condición del impulso industrializador³⁵. Sin embargo, esto no ha modificado en lo esencial la base subdesarrollada de esas economías. En los países de menor desarrollo relativo, las burguesías dependientes han intentado estrategias de integración a las nuevas condiciones del sistema de división internacional del trabajo al abrir sus fronteras al capital extranjero y ofrecer como atractivo la baratura de su mano de obra, o al diversificar la economía exportadora, al tiempo que la modernizan³⁶. Pese a ello, en estos casos se demuestra con mayor rudeza que lejos de modernizar nuestras economías y elevar el nivel de vida de la población, la integración de América Latina al mercado mundial en las nuevas condiciones de la división internacional del trabajo ha profundizado la desigualdad social e intensificado los niveles de explotación de las clases trabajadoras³⁷. El proceso de industrialización latinoamericano ha chocado con obstáculos formidables que, en las condiciones impuestas por las relaciones de dependencia tecnológica de los grandes centros capitalistas, la estrechez de sus mercados internos, y el sistemático drenaje de excedentes realizado por el gran capital transnacional y el capital financiero, ha significado un bloqueo a la formación de capitales necesarios al desarrollo, haciendo del proceso de industrialización una tarea tortuosa, plagada de contradicciones y profundamente limitada³⁸.

Es en este contexto que se insertan los esfuerzos de industrialización por sustitución de importaciones que en los años 1950-1980 se han realizado en el país. En esta ocasión no intento adentrarme en un análisis ni siquiera somero del proceso de industrialización

³⁵ Sobre el proceso de transformación de la periferia capitalista subdesarrollada, véase a Cardoso y Faletto (1971) Frogel y Kreye (1981) y Marini (1974). Para la experiencia del sudeste de Asia y el papel de los “tigres” asiáticos en el cambio del paradigma industrializador en la periferia capitalista, debe verse a Wade (1999).

³⁶ Véase a Dos Santos (1980). En el *Post scriptum* de su clásico libro *Dependencia y desarrollo en América Latina* (1968/1971), Cardoso y Faletto aportan al respecto una apretada síntesis de los principales problemas.

³⁷ Véase a Frobél y Kreye (1981), quienes analizan el problema en una escala global.

³⁸ Para un panorama esclarecedor del proceso de industrialización latinoamericano en su conjunto, debe verse a Bulmer-Thomas (1998).

dominicano ni mucho menos proponer una descripción cuantitativa y pormenorizada del comportamiento de sus principales variables macroeconómicas. Me interesa en esta parte recuperar la dimensión propiamente sociológica y política del proceso de crecimiento industrial dominicano.

4.2.1. Industrialización y clases sociales

El primer hecho que debe llamar nuestra atención es que en las dos “oleadas” del proceso de industrialización en la República Dominicana³⁹, a lo largo del siglo XX ha habido una práctica ausencia de una burguesía propiamente industrial como sector motor del proceso. En ambas ocasiones, con las diferencias que explicaré, el agente organizador e impulsor del proceso de crecimiento industrial ha sido el Estado. Sin embargo, los resultados han sido distintos en ambas situaciones.

El monopolio trujillista del poder del Estado no solo depositó en manos del dictador el control y comando del proceso de industrialización en los años cincuenta, sino que al mismo tiempo bloqueó a la oligarquía dominicana tradicional sus posibilidades de participación dirigente en este, como he discutido en este libro. En el caso dominicano queda claro que, independientemente de cualquier otra razón, la exclusión de la burguesía comercial –en su expresión oligárquica– del comando del proceso de industrialización y su integración residual en este estuvo condicionado por determinantes esencialmente políticos. No soy de los que cree que por razones intrínsecas a la naturaleza mercantil de dicho grupo económico halla una “incapacidad” estructural de la burguesía comercial, por lo menos un sector de esta, para viabilizar e impulsar un proceso industrializador por sustitución de importaciones.

³⁹ Sobre la primera ola del proceso de industrialización por sustitución de importaciones en el país en los años cuarenta, véase a Cassá (1982), aun cuando el capítulo sobre la industrialización es uno de los menos felices de este, por lo demás, excelente estudio. La segunda ola industrializadora puede estudiarse en Ceara (1984). Con todo, el estudio más completo del proceso de industrialización en República Dominicana, desde sus orígenes hasta los años ochenta, continúa siendo el de Moya Pons (1992).

Eso depende de circunstancias históricas tanto económicas como políticas. En las condiciones impuestas por la industrialización trujillista, la burguesía tradicional dominicana quedaba forzada a su integración en ese esquema como socio menor y subordinado, a lo cual se añadía su posición dependiente e intermediaria en el mercado mundial. La vocación especulativa, mercantil y terrateniente –su claro perfil oligárquico– que mostraría en los años sesenta devenía fruto de un proceso histórico y del particular equilibrio de fuerzas en el Estado en el que se veía envuelta.

La muerte de Trujillo en 1961 rearticuló el comando del proceso de crecimiento industrial. Al respecto, el primer aspecto que debe discutirse es el del carácter estatal que asumió la estructura industrial con la nacionalización de las empresas de la familia Trujillo. La segunda cuestión es la incapacidad de lo que he denominado la alianza oligárquica, y en particular de su fracción burguesa comercial y los grupos terratenientes, para continuar y profundizar el proceso de industrialización iniciado por Trujillo, ahora sostenido por nuevas condiciones sociales y políticas, que convertían al Estado no solo en el árbitro de la crisis de hegemonía en el período 1961-1965, sino también en el principal empresario “burgués” del país. Hay que añadir que, en las nuevas condiciones políticas, las masas populares urbanas lograron afirmar un gran espacio de participación económica y social. En la conjunción de estos elementos procede interpretar el sentido histórico de la estrategia oligárquica de bloqueo al crecimiento industrial, ante el virtual fracaso de su estrategia de traspaso a manos privadas de las empresas de Trujillo.

Tengo la convicción de que la incapacidad mostrada por la oligarquía dominicana para asumir la tarea de la modernización capitalista en los años 1961-1965 no solo fue el resultado de su vocación mercantil y especulativa, sino también el efecto de su condición de socio subordinado bajo la cual se planteó históricamente su acceso al Estado. La estrategia oligárquica en el período de crisis referido estuvo, además, condicionada por el particular equilibrio de fuerzas articuladas en torno al Estado, resultado de las confrontaciones entre las masas populares ur-

banas, la alta burocracia estatal reducto de la tiranía trujillista y la propia oligarquía dominicana⁴⁰. En otras palabras, durante el período 1961-1965 el proceso de industrialización iniciado por Trujillo a finales de los años cuarenta del siglo XX quedó prácticamente bloqueado, en parte debido al propio modelo de crecimiento impuesto en esos años por la alianza oligárquica en el poder, que sostenía como su variable dinámica a las importaciones, pero también, en alguna medida, resultado de la propia crisis de hegemonía del período.

A partir de 1966 cabría a Balaguer retomar la conducción del proceso de industrialización iniciado en los años cuarenta del siglo XX e interrumpido en los años 1961-1965. Como he discutido en este libro, tras el balaguerismo el Estado tendió a robustecer el poder económico y social de los grupos y clases sociales dominantes del país, pero al precio de transferir hacia Balaguer su representación política. En el caso que nos ocupa, es importante reconocer que, a partir de su ascenso al poder, Balaguer contó con la suficiente fuerza política como para imponer un modelo de crecimiento que no solo se apoyó en la constricción de los ingresos de las masas trabajadoras y en la sobreexplotación del trabajo en las áreas cañeras de las empresas azucareras, sino que estimuló (y en muchos sentidos impuso) una relativa modernización de las clases dominantes locales.

Es relevante el hecho de que en esas condiciones el Estado asumía de nuevo la conducción global del proceso de industrialización, pero las consecuencias políticas y sociales que ello acarrearía serían distintas a las planteadas en los años cincuenta del siglo XX bajo la dictadura trujillista. En primer lugar, en las nuevas condiciones políticas, y a partir de la naturaleza del nuevo bloque en el poder, que tras el balaguerismo se articuló en el Estado, se estimularía la conformación de un empresariado industrial, hasta ese momento prácticamente inexistente en el país. Desde ese punto de vista, la industrialización por sustitución de importaciones asumía bajo el balaguerismo un carácter distinto a la emprendida durante el trujillismo. Bajo este último la participación de la burguesía

⁴⁰ Sobre el particular, véase a Vilas (1973) y Cassá (1976).

tradicional en la conducción del proceso industrializador quedaba bloqueada, anulándose así la posibilidad de que desde su seno surgiera un moderno empresariado de tipo industrial. En las nuevas condiciones impuestas por la dominación balaguerista, la estrategia del Estado era la inversa: el apoyo estatal al proceso de industrialización estimuló el surgimiento de un empresariado industrial y bloqueó la posible expansión del Estado como empresario capitalista. Como vemos, en ambos casos el Estado asumía la conducción global del proceso de industrialización, pero mientras en uno anulaba la posible emergencia de un empresariado industrial, en el otro se constituía en su objetivo estratégico central. Sin embargo, el empresariado industrial, que comenzó a constituirse en los años setenta, era muy débil y solo logró expandirse bajo la protección directa del Estado y la asociación con el gran capital monopolista internacional, el que, a partir de la década de los setenta, como se ha visto, comenzó a extenderse hacia las ramas industriales productoras para el mercado local. En este punto, la industrialización bajo el balaguerismo también tomaba distancia de la experiencia trujillista, pues en aquella ocasión, bajo el dominio trujillista, el proceso industrializador no estableció fuertes lazos de dependencia o asociación con el capital extranjero.

Otra de las notas distintivas de la industrialización por sustitución de importaciones en el período 1966-1978 fue su relación con los mercados. No se trata solo del reconocimiento de que el proteccionismo estatal establecía un dominio monopolístico de los mercados y que ello, unido a la política de bajos salarios, proporcionaba altas tasas de ganancias, sin estimular el progreso técnico y la productividad. También el proceso de industrialización se apoyó en un mercado de consumo fragmentado, en el que le fue imposible al sector industrial desplazar el capital importador de importantes y decisivas áreas, en lo que respecta a los bienes de consumo intermedios y duraderos. Esto restringía los márgenes y capacidad de expansión del sector industrial, independientemente de las dimensiones de la demanda interna y los niveles de ingreso de la población consumidora. La modificación de esta situación implicaba una toma de decisión política no solo la movilización de

capitales. En tales circunstancias, el Estado se vio imposibilitado de apoyar en esta batalla al sector industrial y forzado a permitir un amplio margen de expansión al capital importador, pese a su política de desarrollo industrial. Aquí colidía el proyecto reformista con sus límites de clase. El resultado fue un equilibrio económico entre industriales y comerciantes que terminó fragmentando el mercado de consumo, sobre todo en las áreas urbanas, en términos de la composición de la oferta: el sector industrial supliría los bienes de consumo no duraderos, algunas líneas de artículos de consumo intermedio, apoyándose sobre todo en las capacidades de ingresos de las clases medias en expansión, pero también en algunos estratos pequeñoburgueses y de trabajadores urbanos, mientras la burguesía importadora apoyaría su expansión en el alto consumo de las clases medias en sus estratos superiores y en la pequeña burguesía, fundamentalmente en aquellos productos industriales que en el país no podían producirse en términos competitivos.

Aquí llama la atención el vínculo entre el proceso industrializador y las clases medias urbanas. Al respecto persisten demasiados mitos. En primer lugar, en la expansión del sector industrial es evidente que la capacidad de consumo de las clases medias urbanas en expansión constituyó una importante “fuente de mercado” para los géneros industriales. Pero esto no implicaba que la industrialización no afectara el consumo obrero. Por el contrario, sobre todo en sus ramas tradicionales, la industrialización encontró un importante espacio de mercado en la capacidad de consumo de amplios sectores sociales de bajos ingresos, cuyo peso cuantitativo era considerable al expandirse la urbanización. En ese sentido, no es cierto que la expansión industrial tenía como requisito la exclusión del mercado de bienes industriales de los sectores obreros urbanos. No solo el proletariado, sino el subproletariado urbano, en la medida en que la economía se mercantilizaba, quedaron forzados a depender cada vez más de la oferta de bienes industriales producidos localmente, aun cuando estos fueran poco elaborados (tabaco, ron, textiles, calzados, alimentos, plásticos, etc.) o de origen extranjero (gas propano, electrodomésticos, etc.). Todo ello pese a la política de constricción salarial del Estado.

En sus líneas de mayor sofisticación tecnológica, al igual que en aquellas de mayores costos de producción, es cierto que, tanto la industria sustitutiva de importaciones como el sector importador, se apoyaron en la clase media en sus estratos más favorecidos y con mejores ingresos. Pero sería un malentendido creer que del consumo de géneros elaborados industrialmente estaban excluidos los trabajadores urbanos y porque la industrialización se apoyó en las clases medias urbanas, el sector importador concentró su fuente de demandas solo en el estrato superior de la clase media con elevado nivel de consumo.

4.2.2. *Límites y contradicciones de la industrialización*

Como se ha precisado, en el período 1969-1978 las actividades industriales tuvieron un notable dinamismo, creciendo a tasas muy por encima de las observadas por el PIB en la generalidad de sus sectores⁴¹. Este crecimiento se expresó en el significativo incremento de los volúmenes de producción y ventas y en los capitales que las actividades industriales lograron movilizar.

Cuadro 4.14
**RITMO DE CRECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL
NO AZUCARERO: 1967-1977**

Años	Ritmo de crecimiento del sector industrial no azucarero	Relación entre la tasa de crecimiento del sector industrial no azucarero y la tasa de crecimiento del PIB	Producción industrial no azucarera como por ciento del PIB
1967	(0.10)	0.029	10.5
1968	1.70	3.400	10.6
1969	22.2	1.835	11.6
1970	16.3	1.811	12.3
1971	15.8	1.491	12.9
1972	13.8	1.113	13.1
1973	13.6	1.124	13.3
1974	10.7	1.551	13.7
1975	9.90	1.768	14.3
1976	6.30	0.000	14.3
1977	4.10	1.242	14.4

FUENTE: Academia de Ciencias de la República Dominicana, Comisión de Economía: *Economía Dominicana 1977*.

⁴¹ Véase al respecto a Ceara (1984), así como los análisis de la Comisión de Economía de la Academia de Ciencias de la República Dominicana en los años 1976 y 1977.

Sin embargo, este dinamismo no logró convertir el sector industrial en el dominante del proceso global de crecimiento capitalista. Este se mantuvo a lo largo del período en cuestión representando de un 16 % a un 17 % del PIB. Al respecto, sin embargo, lo importante no es tanto su rol secundario en la estructura del PIB, sino más bien el hecho de que el crecimiento industrial se ha verificado en condiciones de atraso tecnológico y baja productividad. De este modo, medida en términos del valor agregado por hombre ocupado, la productividad apenas se incrementó para todas las ramas industriales en alrededor de 7.5 % entre los años 1970 y 1977. Más aún, este incremento fue resultado de las ramas alimenticias (incluida la producción azucarera), donde la productividad en dicho período se incrementó en 8.3 %. Las ramas de bebidas y tabaco tuvieron un bajísimo crecimiento en el orden de 0.7 %, en cambio las restantes apenas alcanzaron el 1.4 %. Empero, dentro de la rama alimenticia el incremento de la productividad se verificó sobre todo en la industria azucarera, mientras en los restantes grupos se mantuvo estancada y llegó incluso al crecimiento negativo en el período 1970-1974. En el caso del azúcar, el aumento de la productividad ha tenido un comportamiento muy desigual, estimulado sobre todo por la buena coyuntura de precios de los años 1974-1977. Ello determinó que, en lo que respecta al azúcar, el incremento de la producción por hombre ocupado fuese resultado de la intensificación de la jornada laboral, el aumento de las áreas de corte y la intensificación del trabajo, no tanto por una sustancial renovación tecnológica modernizadora de la plantación azucarera.

Asimismo, el dinamismo del proceso de industrialización se apoyó en las sustituciones fáciles, sobre todo las de consumo no duradero, como alimentos, bebidas, calzados y textiles, al ser muy limitadas sus potencialidades de sustitución de los artículos de consumo duradero y prácticamente nula la capacidad de generar un sector productor de bienes de capital. En este sentido, fue característico que, en la medida en que el proceso de sustitución de importaciones se desarrollaba, la actividad industrial se hacía cada vez más dependiente del extranjero en materia de bienes de capital, tecnología e insumos. Con ello se introducía una serie de características que hacía sumamente

Cuadro 4.15

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

EN SUS PRINCIPALES RAMAS

(En RD\$ a precios de 1970 e índices total industrias=100)

Años	Total Manufacturas		Alimentos		Bebidas y Tabaco		Resto Industria Manufacturera	
	Valor agregado por hombre ocupado	Total	Valor agregado por hombre ocupado	Índice	Valor agregado por hombre ocupado	Índice	Valor agregado por hombre ocupado	Índice
1970	2,389	100.0	1,376	57.6	27,803	1,163.8	4,357	182.3
1971	2,608	100.0	1,478	56.7	29,230	1,120.8	5,265	201.9
1972	2,591	100.0	1,478	57.0	22,607	871.5	4,961	191.2
1973	2,765	100.0	1,419	51.3	29,173	1,055.1	6,018	250.2
1974	2,749	100.0	1,486	54.1	29,764	1,082.7	5,200	189.2
1975	3,342	100.0	1,771	53.0	26,150	782.5	5,785	173.1
1976	3,909	100.0	2,312	59.4	31,446	804.5	5,272	134.9
1977	3,977	100.0	2,407	60.5	29,207	734.4	4,820	121.2
Tasa de crecimiento acumulativa anual	7.5%	-	8.3%	-	0.7%	-	1.4%	-

FUENTE: Banco Central: Matriz de insumo/producto del sector manufacturero 1977.
Elaboración del autor.

vulnerable el porvenir del proceso de industrialización. En primer lugar, la dependencia del exterior en materia de insumos contribuía a profundizar la dependencia económica del país del mercado mundial y objetivamente se convertía en un factor disruptor de las posibilidades de interdependencia y conexión entre los distintos departamentos de la economía, sobre todo entre agricultura e industria, limitando de esta forma las posibilidades de expansión del mercado interior. Asimismo, la dependencia del proceso de industrialización de los bienes de capital procedentes del exterior condenaba el porvenir de la industrialización al atraso tecnológico al profundizar la sujeción estructural de la economía al gran capital monopolista internacional, esta vez por la vía tecnológica.

Es claro que la industrialización sostenida sobre premisas tan débiles encontraría serias dificultades para lograr establecer una estructura productiva completa, ya que en esas condiciones el ciclo del capital industrial se completa al integrarse con el eje externo tanto en materia de compra de insumos de bienes de capital como de apoyo tecnológico⁴².

En tales condiciones, la industrialización solo podía abrirse paso con un alto proteccionismo estatal. Sin embargo, unido a la estrechez del mercado y la naturaleza de los capitales que acudían hacia las actividades industriales, este robustecía el monopolio. La industria dominicana de los años 1966-1978 se apoyaba, como en los años cincuenta del siglo XX, en un alto grado de monopolización de la producción y el mercado y de concentración y centralización del capital.

Estas circunstancias, unidas a la baratura de la mano de obra, han determinado que la eficiencia productiva desempeñe un papel sumamente marginal en la determinación de los elevados beneficios obtenidos por los grupos industriales. Estos se han apoyado sobre todo en la elevación de la tasa de explotación de

⁴² Sobre la problemática de la industrialización, véase a Cardoso y Faletto (1971) y Faljzylber (1983). En los países del tercer mundo y los límites que impone la dependencia, véase entre otros estudios a Sutcliffe (1978), Warren (1977) y Emmanuel (1977). Los análisis de Prebisch (1963 y 1981) en este aspecto concreto continúan siendo pertinentes.

su mano de obra y en los mecanismos de formación de precios en situaciones de monopolio.

Cuadro 4.16
**ORIGEN DE LAS MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS
POR LA INDUSTRIA MANUFACTURERA**
(En millones de RD\$)

Años	Materias primas nacionales	Materias primas importadas	Total materias primas	Incidencia materias primas importadas (%)
1950	39.331	.350	48.681	19.2
1963	99.374	27.011	126.385	21.4
1970	243.117	78.912	322.029	24.5
1977	855.512	388.769	1,244.281	31.2

FUENTE: Banco Central y Oficina Nacional de Estadística.

La asimétrica distribución de la inversión contribuye a robustecer esta tendencia a la generación de sobreganancias industriales. En primer lugar, la concentración del capital en las ramas tradicionales, en proporciones superiores al 50 %, favorece al monopolio. Asimismo, la estrecha relación de las ramas tradicionales con el sector agropecuario hace que la política estatal de abaratamiento de insumos industriales procedentes del agro le favorezca más que a las ramas productoras de bienes intermedios y durables, lo cual, unido a su menor dependencia de las importaciones de insumos extranjeros, contribuye a reducir el tiempo de rotación del capital y a potenciar su tasa de ganancia. De esta manera, se reconoce una estrecha asociación entre la naturaleza de los capitales industriales y las elevadas tasas de beneficios del sector. En ambos casos, esto tiende a concentrarse en las ramas tradicionales, aun cuando en las más modernas se obtengan también apreciables márgenes de ganancia.

Varios factores en su interconexión determinan las elevadas tasas de ganancia observadas en el sector industrial en el período 1966-1978. En primer lugar, se destacan las bajas y decrecientes remuneraciones salariales, como se analizó en el Capítulo. Al respecto, la tendencia histórica ha sido clara: en la medida en que la retribución al trabajo ha decrecido, las ganancias del capital se han elevado sistemáticamente. Esta tendencia ha sido mucho

más acentuada en las ramas tradicionales de la industria, donde coinciden las mayores tasas de beneficio del sector, unido a las más bajas tasas salariales. Es probable que la tendencia a la baja de las tasas de ganancia observada para la totalidad de las ramas industriales en los años 1970-1977 obedezca primordialmente a las dificultades enfrentadas por las industrias y sectores modernos, los cuales observaron una menor contracción del salario en la década de los setenta, sobre todo a partir del momento en que la tasa de inflación comenzó a elevarse en dicha década.

Cuadro 4.17
**RETRIBUCIÓN AL CAPITAL COMO PORCENTAJE DEL VALOR
AGREGADO EN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL: 1970 Y 1977**

Ramas	1970	1977
Alimentos	48.0	73.9
Bebidas	91.5	90.7
Tabaco	96.2	94.6
Textiles	58.2	65.1
Confecciones	65.0	7.6*
Cazado	70.3	79.5
Químicos**	73.5	82.9
Cemento, mosaicos, blocks	70.1	62.4
Total	64.4	76.9

*No tenemos dudas de que esta reducción obedece a las inconsistencias de las fuentes de información de los boletines industriales.

**Incluye abonos, pinturas, jabones perfumería, etc.

FUENTE: *Hablan los Comunistas*, Año V, No. 219, 2-9 septiembre 1982, p. 5.

Otro elemento que incide directamente en las elevadas tasas de beneficio en el sector industrial es, sin lugar a duda, la elevada concentración del capital. Como se muestra en el cuadro 4.19, en la generalidad de las ramas industriales existen dos o tres empresas que concentran el grueso de las inversiones, coexistiendo con una gran cantidad de pequeños y medianos establecimientos. Ello tiende a concentrar el dinamismo del mercado en los sectores monopolistas y, en consecuencia, permite que estos sean los que fijen los precios. En ese sentido, el monopolio propicia fáciles márgenes de ganancia a las grandes empresas industriales y condena a los pequeños y medianos industriales a una crisis permanente, cuando no a una ruina segura.

Un último elemento que merece la pena referir es el relativo al proteccionismo como factor que estimula la obtención desorbitada de ganancias. Es claro que en la política de fijación de precios el sector monopolista ha contado con la efectiva anuencia del Estado. A pesar de la protección estatal, las exoneraciones fiscales al sector (en materia de beneficios e importaciones) y el bajo costo de la mano de obra, la política de precios de los artículos industriales tiende a colocarse en función de los artículos importados, los cuales ya vienen claramente encarecidos por los aranceles proteccionistas⁴³.

Cuadro 4.18
**PARTICIPACIÓN DE LOS SALARIOS EN EL VALOR AGREGADO
DE LA PRODUCCIÓN Y SALARIOS REALES
POR RAMAS INDUSTRIALES:
1970 Y 1977**

Ramas	Participación de los salarios en el valor de la producción			Salario Medio Real (Precios 1969=100)**		
	1970	1977	Tasa de incremento acumulativo anual (%)	1970	1977	Incremento
Azúcar	-	-	-	56	54	-3.0
Alimentos	19.9	9.5	-70.7	95	60	-36.0
Bebidas	5.1	5.1	-	180	113	-37.4
Tabaco	2.8	3.2	-13.3	-	-	-
Textiles	23.4	19.5	-18.2	135	80	-40.3
Confecciones	14.3	17.1	-17.8	73	55	-24.8
Calzados	20.3	13.3	-41.7	106	66	-38.0
Químicos*	12.8	6.7	-62.2	205	127	-38.2
Cemento, mosaicos, etc.	18.7	15.6	-18.1	177	107	-39.2
Total	16.2	9.2	-55.1	76	71	-6.7

*Incluye abonos, pinturas, jabones perfumería, etc.

**Deflactado por el índice de precios al consumidor (1969=100).

FUENTE: *Hablan los Comunistas*, Año V, No. 219, 2-9, septiembre, 1982, p. 5.

⁴³ De esta situación puede inferirse que los precios de los artículos industriales equivaldrían a la sumatoria de la ganancia media más el diferencial relativo al bajo costo de la mano de obra, unido al respectivo nivel de protección, una vez se deduzcan los costos de fletes de los artículos importados. Es claro en este caso que el proteccionismo no solo favorece el monopolio, sino que se convierte en un factor directo de generación de sobreganancias.

Conviene detenerse un poco en el análisis del significado económico del proteccionismo estatal a la industrialización por sustitución de importaciones. Para ello me concentraré en examinar la Ley 299, bajo cuyo amparo se organizó la estrategia de desarrollo industrial en el período 1966-1978.

En primer lugar, hay que dejar claro que en modo alguno se trata de sostener que la protección brindada por el Estado al sector industrial intrínsecamente favorece al monopolio y, en consecuencia, tiende a introducir obstáculos al desarrollo global de la economía⁴⁴. Por el contrario, quizás el último, y único caso, de desarrollo industrial sobre la base del libre cambio fue el inglés, y esto así porque Inglaterra en su etapa temprana de desarrollo industrial prácticamente era el único taller manufacturero del mundo⁴⁵. Pero desde el momento en que los productores manufactureros ingleses se esparcieron, por así decirlo, a todos los rincones del mundo, convirtiendo a Inglaterra en el gran suplidor mundial de géneros manufactureros y las posibilidades de industrialización en otras áreas del mundo sobre las bases librecambistas que caracterizaron el despegue industrial inglés, quedaban simplemente anuladas⁴⁶. A partir de ese momento, el proteccionismo estatal se convirtió en una de las reglas de oro del crecimiento industrial en aquellas naciones que “llegaban tarde” a la industrialización, como fueron los casos de Alemania, Rusia y Estados Unidos. En esos casos de industrialización tardía⁴⁷ las posibilidades de desarrollo de la burguesía industrial, sin el apoyo y protección del Estado, quedaban prácticamente anuladas frente a la competencia inglesa. En esas condiciones, la protección estatal, por lo menos en esa etapa temprana, favorecía el crecimiento interno y el desarrollo industrial sostenido sobre premisas que impulsaban un crecimiento independiente. Este no ha sido el caso de la industrialización en los países hoy llamados subdesarrollados.

⁴⁴ Merharv (1972).

⁴⁵ Una lúcida descripción de este proceso se encuentra en Hobsbawn (1978). El texto de Barratt Brown (1976) es de lectura necesaria.

⁴⁶ Véase el lúcido trabajo de Kemp (1979).

⁴⁷ La referencia clásica es Gerschenkron (1968).

Al respecto, debe discutirse en primer lugar el asunto relativo a la tecnología. A diferencia de los países subdesarrollados, el despegue de la industrialización en Alemania y Estados Unidos contó con una tradición tecnológica y científica interna, que les permitió aprovechar al máximo los descubrimientos e invenciones tecnológicas que en materia de procedimientos químicos, construcción de maquinarias, energéticos, etc., apoyó el crecimiento industrial inglés, al punto de que pronto los alemanes y los norteamericanos llegaron a tener una tradición e independencia tecnológica tales que les facilitó, mucho más que a los ingleses (cuya planta industrial era ya obsoleta) el aprovechamiento de la llamada Segunda Revolución Industrial, sobre todo en la siderurgia y la industria productora de bienes de capital. Es indudable que a esto contribuían los enormes recursos naturales con que contaban estos países, pero en modo alguno podría decirse que fue el determinante exclusivo del salto industrial alemán o norteamericano, pues en esa situación no podría explicarse la industrialización japonesa, que careció de esos recursos en su suelo local, o el bloqueo de la industrialización en la India, que poseyéndolos no logró el despegue industrial.

El otro elemento determinante para el desarrollo en esos países que llegaron tarde a la industrialización, pero lograron cimentar un verdadero proceso de crecimiento industrial sostenido, fue sin duda la dimensión de sus mercados, lo cual permitió una expansión sistemática de la producción industrial, al tiempo que le facilitó al Estado la implementación de las barreras proteccionistas sin tener que mermar sus ingresos fiscales. Esto no hubiera podido lograrse si el proceso no se hubiese apoyado en un sistemático desarrollo de las fuerzas productivas internas, sobre todo en materia agraria.

Vemos que los que llegaron tarde supieron aprovechar las condiciones políticas del proteccionismo estatal, tuvieron una cobertura de mercado que les aseguraba un crecimiento autosostenido, al tiempo que el desarrollo de las fuerzas productivas les aseguraba la independencia tecnológica y científica. A todo ello, ya en estrecha alianza con la banca (caso alemán) o apoyados por el Estado (caso ruso y norteamericano), las burguesías de esos

países se convirtieron en las fuerzas económicas directrices del proceso de desarrollo capitalista, al tiempo que las viejas clases terratenientes pasaban a ocupar un lugar subordinado y el nivel de vida de las clases trabajadoras urbanas y rurales se elevaba, sobre todo en los Estados Unidos⁴⁸.

Este no ha sido el caso de los países subdesarrollados. Allí observamos que el proteccionismo estatal en materia de industrialización lejos de apoyar la expansión del mercado interno ha obligado a los emergentes sectores industriales a profundizar sus lazos de dependencia tecnológica con la gran burguesía monopolista internacional, internacionalizando el mercado interno, al tiempo que dichos mercados encuentran serios obstáculos para expandirse ante el atraso del agro, la fuerza política de los grupos comerciales terratenientes y, en general, la desigual distribución del ingreso en que se ha apoyado el desarrollo del capitalismo dependiente⁴⁹. A todo esto, se une la presencia del dominio del capital monopolista internacional del mercado mundial y el control geopolítico de las grandes potencias hegemónicas, específicamente de los Estados Unidos en la región latinoamericana; dominio que históricamente se ha constituido en un elemento disruptor del proceso de desarrollo, limitante de la expansión de los mercados internos y fuente de succión de los excedentes necesarios para impulsar un crecimiento independiente autosostenido⁵⁰.

En el caso de la República Dominicana, el elevado proteccionismo que ha caracterizado el proceso de industrialización no debe ser motivo de escándalo, pues ha constituido un axioma económico en la historia del desarrollo capitalista. Lo que debe discutirse son los términos de ese proteccionismo: las fuerzas sociales que lo impulsan, las condiciones económicas sobre las que ha actuado y sus posibles resultados para el proceso general de desarrollo.

⁴⁸ Véase a Bairoch (1978), Mandel (1972) y Moore (1972).

⁴⁹ El libro de Marini (1971) resume muy bien las implicaciones de esta problemática para la industrialización dependiente.

⁵⁰ Véase a Merharv (1972) y Sutcliffe (1978).

Cuadro 4.19
NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL SEGÚN RAMAS MANUFACTURERAS,
EXCLUIDA AZÚCAR

(Número de establecimientos, valor en miles RD\$ y porcentaje)

Sectores	Totales		Empresas Muy Grandes*		Empresas Grandes**		Total Mayores Firmas	
	Estab.	Inversión	Estab.	Inversión	Estab.	Inversión	Estab.	Inversión
Alimentos, bebidas y tabaco	557 (100.0)	477,112 (100.0)	8 (1.4)	178,829 (37.48)	9 (1.6)	69,871 (14.04)	17 (3.1)	248,700 (52.12)
Alimentos	521 (100.0)	318,781 (100.0)	5 (1.0)	116,602.9 (36.40)	5 (1.0)	37,521 (11.77)	10 (1.9)	153,550 (48.18)
Bebidas	28 (100.0)	131,541 (100.0)	2 (7.1)	46,500 (35.35)	3 (10.7)	23,000 (17.99)	5 (17.8)	70,160 (53.34)
Tabaco	8 (100.0)	26,790 (100.0)	1 (12.5)	16,300 (60.8)	1 (12.5)	8,690 (32.43)	2 (25.0)	24,990 (93.2)
Textiles, confecciones y cueros	281 (100.0)	146,321 (100.0)	1 (0.4)	11,600 (7.93)	3 (1.1)	24,507 (16.75)	4 (1.42)	36,107 (24.68)
Madera y muebles	122 (100.0)	23,123 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
Papel e imprenta	76 (100.0)	93,424 (100.0)	3 (3.9)	38,904 (41.04)	2 (2.6)	13,548 (14.50)	5 (6.58)	52,452 (55.14)
Productos químicos	128 (100.0)	213,337 (100.0)	2 (1.2)	61,116 (28.65)	2 (12.0)	14,813 (6.94)	4 (2.38)	75,929 (35.58)
Minerales no metálicos	56 (100.0)	153,606 (100.0)	4 (7.1)	88,620 (57.69)	3 (5.4)	18,759 (12.21)	7 (12.50)	107,379 (40.86)
Metálicas básicas	8 (100.0)	35,729 (100.0)	1 (12.5)	31,898 (89.28)	- (-)	- (-)	1 (12.50)	31,898 (89.98)
Producción metálicas, maquinaria y equipo	124 (100.0)	145,465 (100.0)	5 (4.0)	55,805 (38.36)	2 (1.6)	11,577 (7.96)	7 (5.84)	67,382 (46.12)
Otras manufacturas	15 (100.0)	3,211 (100.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
Total industrias no azucareras	1,438 (100.0)	1,291,331 (100.0)	24 (1.7)	466,772 (36.15)	21 (1.5)	153,081 (11.85)	45 (3.13)	619,853 (48.00)

*Inversión superior a diez millones RD\$.

**Inversión entre cinco y diez millones de RD\$.

FUENTE: Secretaría de Estado de Industria y Comercio.

Cuadro 4.20
BENEFICIOS BRUTOS DEL SECTOR INDUSTRIAL
 (En millones de RD\$)
1970-1977

Años	Valor ventas (1)	Costos de producción (2)	Beneficios brutos (3)	Tasa de beneficios 3/2 (En %)
1970	583.3	390.6	192.7	49.3
1971	677.3	438.1	239.2	54.6
1972	826.2	521.6	304.6	58.8
1973	1058.4	690.0	368.4	53.4
1974	1478.1	1032.6	445.5	43.6
1975	1890.1	1252.9	637.2	50.8
1976	1821.0	13.10	510.7	38.9
1977	2029.5	1456.4	573.1	39.3

FUENTE: Oficina Nacional de Estadística: *Boletines Industriales*.

Como se sabe, la política de desarrollo industrial en República Dominicana, a partir de 1968, se ha sostenido en la Ley 299 de incentivo y desarrollo industrial⁵¹. Su análisis permitirá forjarse una idea del contenido y características general del proceso de industrialización dominicano en el período 1968-1978.

Dicha ley contempla tres clasificaciones, bajo las cuales las industrias podían acogerse a la protección de la ley. Del análisis de las empresas acogidas a una u otra clasificación de la ley pueden desprenderse algunos elementos básicos del proceso de desarrollo industrial en el período 1968-1978.

Clasificación A. Bajo esta clasificación, se pueden acoger las empresas industriales exclusivamente dedicadas a las exportaciones, radicadas esencialmente en zonas francas industriales. El incentivo consiste en la exoneración total de los impuestos de importación (de insumos y maquinarias) y exportación y de las rentas durante un plazo de diez años. Sin embargo, en lo que a esto último respecta, el impuesto sobre las rentas, solo le otorgaría la exención en caso de que el negocio principal de dicha empresa se encontrase establecido fuera del país. En caso contrario, solo gozaría de un 50 % hasta un 75 % de exoneración de dicho impuesto.

⁵¹ El mejor estudio sobre los alcances de la Ley 299 de incentivo y desarrollo industrial continúa siendo el de Vega (1973b). Debe verse también a Moya Pons (1992).

Cuadro 4.21
INDUSTRIAS NUEVAS CLASIFICADAS BAJO LA LEY 299 DE INCENTIVO INDUSTRIAL

Año	Categorías B y C							Categoría A				
	Cantidad	Inversión (RD\$ millones)	Sueldos (RD\$ millones)	Nuevos empleos	Valor inversiones promedio (RD\$ millones)	Relación inversión/ empleo*	Cantidad	Inversión (RD\$ millones)	Sueldos (RD\$ millones)	Nuevos empleos	Valor inversiones promedio	Relación inversión/ empleo
1968**	12	12.4	-	708	1,030	15,736	3	0.3	-	170	0.100	1,765
1969	30	16.3	-	1,493	0.543	10,917	8	3.4	-	1,117	0.435	3,044
1970	17	4.5	0.8	375	0.265	12,000	9	1.9	0.7	704	0.211	2,699
1971	36	13.0	3.4	1,330	0.363	9,774	9	2.1	1.2	1,190	0.233	1,765
1972	-	-	-	-	-	-	11	0.9	1.1	736	0.082	1,222
1973	13	5.6	2.0	766	0.431	7,211	26	7.0	3.9	3,229	0.269	2,168
1974	13	20.5	2.1	509	0.750	20,628	26	14.2	7.2	5,250	0.546	20,628
1975	28	17.8	3.6	1,193	0.636	14,920	16	18.4	3.0	1,884	1.150***	9,766***
1976	23	10.5	2.1	775	0.455	13,494	12	6.2	2.3	1,356	0.517	4,573

* Inversión requerida para generar un empleo.

** El valor promedio de la inversión por proyecto en las clasificaciones B y C, así como la relación inversión/empleo, está muy influenciada en 1968 por dos plantas lácteas con inversión promedio de RD\$ 6.8 millones y 220 empleos.

*** La clasificación A está muy afectada en 1975 por una planta de cigarrillos y capas de tabaco con una inversión de RD\$12.0 millones y generación de 250 empleos.

FUENTE: Academia de Ciencias de la República Dominicana, Comisión de Economía: *Economía dominicana 1976*.

Cuadro 4.22

**VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS
POR EMPRESAS QUE OBTUVIERON EL BENEFICIO
DE LA REINVERSIÓN SEGÚN LA LEY 299 DE INCENTIVO INDUSTRIAL
1969-1976**

Años	Valor (RD\$)	Cambio con relación al año anterior
1969	1.6 millones RD\$	-
1970	3.0 "	+ 87%
1971	8.5 "	+183%
1972	8.7 "	+2%
1973	20.6 * "	+138%
1974	27.2 "	+32%
1975	20.9 "	-25%
1976	28.7** "	+37%

*Incluye RD\$ 9 millones de Cementos Nacionales C. Por A.

**Incluye RD\$9.7 millones de dos empresas de CORDE (Trigo y Papel).

FUENTE: Comisión de Economía de la Academia de Ciencias de República Dominicana: *Economía Dominicana 1976*.

Dicha discriminación contra el capital nativo estimulaba la fuga de capitales, ya que, como indica la ley y se ha referido en el importante análisis de Vega sobre el asunto⁵², en el caso de que los capitales dominicanos desearan invertir en este tipo de industria “establecerían compañías en el extranjero para poder obtener las exoneraciones totales del impuesto sobre la renta”. Por el lado del capital extranjero, esto simplemente significa un drenaje de recursos que el Estado no captará.

Como se ve, este tipo de incentivos tiende a promover las exportaciones de productos industriales. Sin embargo, su estímulo principal es la exoneración de importaciones, con lo que, a su vez, se incentiva la extranjerización del proceso de industrialización al incrementar la dependencia en materia de insumos industriales extranjeros. Ahora bien, el principal objetivo social de este tipo de incentivos es generar empleos. Para atraer al inversionista extranjero fue estipulado un salario mínimo en las zonas francas en el período 1966-1978 de alrededor de 0.25 pesos la hora, muy por debajo del salario mínimo nacional. Como fuente de generación de empleos las industrias acogidas a esa clasificación en el período

⁵² Vega (1973).

do 1968-1976 apenas generaban 15,636 nuevos empleos. Como se aprecia, su incidencia en el agudo problema del desempleo era de 23 % para una población económicamente activa de 1.6 millones de personas.

Tal como se encuentra estructurada la ley, el capital extranjero puede acogerse a los incentivos de la *Clasificación A*, dado que solo las grandes transnacionales logran tener un dominio tal del mercado mundial que permite el control efectivo de un espacio de demanda seguro dado el carácter “orientado hacia afuera” de las industrias de zonas francas.

En lo que respecta a este tipo de industrias extranjeras radicadas en zonas francas, esta ley, lejos de beneficiar al país en materia de empleo, ha estimulado la extranjerización de la economía. Como bien sostiene Vilas: [...] la industria de este modo *incentivada* no es más que un simple segmento de una cadena internacional de producción a la que la República Dominicana contribuye aportando un basamento geográfico y mano de obra gratuita [...]⁵³.

Clasificación B. La Ley 299 expresa que las empresas que se acojan a este incentivo deben ser aquellas que se dedican exclusivamente a la sustitución de importaciones. El incentivo a dicha sustitución está dado a través de la exoneración del 95 % de los impuestos a las importaciones. De esta circunstancia deriva el hecho de que, durante los primeros dos años de implementación de la ley, se acogieran a esta clasificación solo tres empresas.

Clasificación C. En dicha clasificación se incluyen todas aquellas industrias nuevas o existentes que se dedican a elaborar materia prima nacional o a producir para el mercado interno. La rentabilidad de la empresa es el criterio para el otorgamiento de las exoneraciones. Empero, este es bastante ambiguo y fue manipulado de forma tal que en 1971 casi todas las industrias dominicanas se encontraban acogidas a dicho incentivo. Realmente, el único y supuesto criterio para no otorgar el incentivo es “cuando ya exista capacidad instalada ociosa en el país, que

⁵³ Vilas (1973), p 202 y ss.

no goce de ningún tipo de exoneración, o cuando se trate de ensamblaje o de *artesanías* [...]”⁵⁴. Sin embargo, la existencia de esta capacidad ociosa no es un fenómeno aislado propio de una que otra industria, sino una característica estructural de este tipo de desarrollo industrial por sustitución de importaciones en el país. Si esto no fuera así, sería imposible comprender que en los años setenta casi todas las industrias que producían para el mercado interno se encontraban acogidas a este incentivo, cuando sabemos que la existencia de un amplio margen de capacidad ociosa ha sido una estrategia del capital industrial, sobre todo en sus sectores monopolistas. De aquí que la existencia de capacidad ociosa como criterio para no otorgar la protección industrial favorece al monopolio. Es decir, una industria que desee acogerse a los incentivos de la ley solo podrá hacerlo en esta clasificación siempre y cuando en las industrias existentes del mismo ramo no tuvieran capacidad ociosa instalada.

La política industrial ha contribuido a desarrollar cierto nivel de producción de bienes de consumo duraderos, pero esto ha sido muy reducido en términos de mercados y no ha tenido la suficiente fuerza económica como para reorientar la matriz básica de la estructura industrial, la que sigue descansando en las ramas tradicionales que en los años cincuenta lideraban el proceso de industrialización.

Como puede apreciarse, tras la Ley 299, pese a que el balaquerismo intentó darle un impulso sostenido a una estrategia de desarrollo industrial por sustitución de importaciones para el mercado interno, el proceso de industrialización ha sido sumamente contradictorio y, en definitiva, puede decirse sin exagerar que fracasó en su intento de dotar al país de una sólida infraestructura industrial manufacturera. Por el contrario, sobre las premisas de la sustitución de importaciones la industrialización era muy dependiente de la protección estatal en materia de financiamiento y mercados, lo que tendió a robustecer su carácter monopolista y obsolescencia tecnológica, preservando así su tra-

⁵⁴ Citado por Vega (1973b).

dicionalismo, al conservarse desde los años cincuenta el predominio de aquellas ramas industriales con menor capacidad de modernización tecnológica e interrelación industrial, tales como las ramas alimenticias, las bebidas, los textiles, el calzado y el tabaco. Por otro lado, gran parte de aquellas ramas productoras de bienes intermedios y consumo duradero, al tener que depender notablemente del mercado mundial en materia de insumos y tecnología, no han representado sino una simple intermediación económica del gran capital monopolístico internacional, el cual proporcionaba tanto las materias primas como la tecnología, lo cual convirtió al sector industrial en simple parte de una gran cadena de relaciones industriales a nivel mundial, con escaso nivel de agregación de valor en suelo nacional⁵⁵.

Sin lugar a duda, un punto decisivo en este proceso ha sido que el capital industrial ha actuado siempre como un eje subordinado al gran capital comercial, dadas su debilidad económica y su dependencia del capital bancario, no pudiendo competir con el gran capital importador en aquellos rubros que asumen un grado de elaboración industrial, productividad y agregación de valor muy elevado. Esto tendía a mediano plazo a imponerle serias limitaciones al proceso de sustitución de importaciones, concentrándose solo en la producción de aquellas sustituciones fáciles, más vinculadas al sector agropecuario. Por ello, pese a la importancia objetiva del proceso de industrialización por sustitución de importaciones en los años 1966-1978, el capital industrial no pudo modificar la estructura básica de la oferta final de bienes manufacturados, en la cual la incidencia de las importaciones, pese a sufrir significativas mermas, en rubros importantes de la oferta final conservó en términos generales su importancia, como se aprecia en el cuadro 4.23.

Debido a que el nivel tecnológico de la industrialización por sustitución de importaciones requería una alta inversión de capitales y la generación de empleos era baja, tenía escasa incidencia

⁵⁵ Sobre este debate véase a Grunwald y Kreye (1981). Para el caso latinoamericano véase a Fajnzylber (1983).

Cuadro 4.23
GRAVITACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN LA OFERTA INTERNA
SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS
 (En miles de RD\$ y porcentaje)
1973 y 1980

Sectores	1973			1980				
	Producción	Importación	Oferta Global	% importación	Producción	Importación	Oferta Global	% importaciones
Productos alimenticios	541,004.6	54,017	595,101.6	9.08	1,200,887.0	160,887.0	1,120,976.5	11.32
Alimentos, bebidas, tabaco	681,835.6	55,542	737,377.6	7.53	1,529,966.3	165,553	1,695,519.3	9.76
Textiles, confecciones y cueros	39,421.0	19,312	58,733.0	32.88	117,025.0	52,970	169,995.0	31.16
Madera y muebles	8,383.6	8,253	16,636.6	49.61	19,792.1	22,889	42,681.1	53.63
Papel, imprenta y publicaciones	38,406.8	15,640	54,046.8	28.94	65,298.4	55,016	120,314.4	45.73
Productos químicos	108,295.9	87,280	195,575.9	44.63	430,910.0	327,964	75,887.4	43.21
Minerales no metálicos	39,023.9	7,631	46,654.9	15.36	88,673.2	18,614	107,287.7	17.35
Industrias metálicas básicas	12,814.9	26,041	381,855.9	67.02	32,304.0	76,179	108,483.0	70.22
Productos metálicos, maquinarias y equipos	35,283.9	132,724	168,007.9	79.00	77,544.6	380,663	458,205.6	83.09
Otras manufacturas	801.6	3,512	4,313.6	81.42	1,503.8	8,616	10,119.8	85.11

FUENTE: Oficina Nacional de Estadísticas: *Boletines industriales* y Banco Central: *Boletines mensuales*.

en la absorción productiva de mano de obra. Entre los años 1968 y 1976 las nuevas empresas industriales, acogidas a la Ley 299, en sus tres clasificaciones apenas generaron alrededor de 22 mil nuevos puestos de trabajo.

Como discutí al principio de este apartado, la industrialización por sustitución de importaciones tanto en su primera ola bajo la dictadura trujillista como en su segunda ola bajo el régimen balaguerista, ha tenido que apoyarse en un alto proteccionismo estatal, en materia de insumos agrícolas y bienes salarios de origen nacional, lo cual, al deprimir o frenar los precios de los productos agropecuarios, desestimulaba la modernización del agro, obligando al Estado a dirigir grandes volúmenes de excedentes al subsidio de los alimentos baratos para los trabajadores urbanos, a través de organismos de control de precios como el INESPREE, con lo que muchas de las exigencias del desarrollo capitalista eran forzadas a ser abandonadas.

Por todo esto, el impulso a la industrialización por sustitución de importaciones logró sostenerse mientras el Estado, dada la buena coyuntura de precios de los productos tradicionales de exportación, sobre todo el azúcar, pudo generar los excedentes necesarios a partir de los cuales se financiaría gran parte del proceso de desarrollo, permitiéndoles sostener sus carencias y debilidades estructurales. Pero, una vez el Estado se vio constreñido en su capacidad económica, el proceso de industrialización sufrió un duro golpe que contrajo bruscamente su capacidad y ritmo de expansión, haciéndole entrar en crisis. Al fin y al cabo, la industrialización por sustitución de importaciones caía víctima del mismo elemento que logró darle su impulso inicial: la economía exportadora.

4.2.3. Crisis agraria e industrialización

El último elemento del proceso de industrialización en República Dominicana que debe llamar nuestra atención se refiere al apoyo brindado por el agro al proceso industrializador. Durante la dictadura trujillista se reconoce que la economía agraria se mantuvo transfiriendo excedentes sistemáticamente a favor de la economía urbana. En términos del proceso de industrialización,

el movimiento del excedente económico agrario se tradujo en el abaratamiento de las materias primas y bienes salarios de origen agropecuario a través de rigurosos controles de precios. En los hechos, esto condenaba al práctico estancamiento al sector agropecuario, precipitándolo a la crisis, la cual estalló en los años sesenta. Este problema merece un análisis más detallado.

Una de las premisas básicas de la industrialización europea fue, precisamente, la revolución agraria que la precedió, la cual estuvo caracterizada fundamentalmente por dos elementos: 1) un notable incremento de la productividad y 2) una profunda transformación de las relaciones sociales de producción en el campo a través de los procesos de disolución de las formas de producción precapitalistas, los lazos tradicionales de sujeción del campesinado a la tierra y los procesos de proletarianización que le fueron consecuentes. Es importante retener que, junto a estos procesos, una vez se produjo la revolución industrial, la posibilidad de ampliación del mercado interno capitalista de las zonas urbanas a las rurales se facilitó enormemente⁵⁶.

En el caso de los países capitalistas dependientes, el proceso de desarrollo industrial ha sido distinto. Sin entrar en mayores discusiones sobre el problema, es claro que en las áreas subdesarrolladas el proceso industrializador no ha estado precedido por una revolución agraria que fuera capaz de apoyar la ampliación del mercado interno para la gran industria, elevar la productividad y, en general, crear aquel conjunto de relaciones sociales que facilitarían la inserción en la economía de mercado a las grandes masas campesinas. Indudablemente que en esta situación interviene la naturaleza del proceso de industrialización dependiente: su carácter sustitutivo de importaciones y la secuela de problemas estructurales a que esto condujo, su dependencia del gran capital internacional, así como su subordinada posición de mercado tanto a nivel internacional como interno⁵⁷.

⁵⁶ Para el análisis general de este proceso, puede verse a Bairoch (1978). La dimensión social del proceso se discute en Sereni *et al.* (1974).

⁵⁷ Sobre el proceso general de industrialización en la periferia capitalista, véase a Benetti (1976). Para el caso latinoamericano en particular, véase a Calili, Cardoso *et al.* (1978), Salama (1976) y sobre todo a Fajnzylber (1983) y Bulmer-Thomas (1998).

Respecto a este proceso, el otro elemento que deseo destacar es de naturaleza sociopolítica y se vincula a la estrecha relación que establecieron los grupos industriales con los grupos comerciales y terratenientes, junto a la creciente concentración del ingreso urbano y rural, que permitió abrir a los sectores industriales un espacio de mercado seguro, pese a su estrechez general ⁵⁸. En el caso dominicano, a estos problemas se suman otros de tipo estructural y político, que deben ser tomados en cuenta a la hora de evaluar históricamente el proceso de industrialización. Vale la pena discutir este asunto.

En la coyuntura de los años cincuenta, la producción agrícola en su conjunto creció a un ritmo superior al de la población. En tales circunstancias, la oferta de bienes agrícolas logró superar, incluso, los niveles de la demanda. Sin embargo, fueron sobre todo los productos agropecuarios más ligados a las ramas industriales tradicionales (alimentos, bebidas y tabaco) los que lograron un incremento por encima del poblacional: me refiero a los cereales (arroz), las oleaginosas (maní) y los textiles (henequén). Era precisamente en estos sectores donde mayor penetración de las relaciones capitalistas de producción se había alcanzado en el agro, tendencia que, al menos para el caso del arroz, permanece hasta la fecha.

En los restantes productos agropecuarios, la productividad era muy baja, prácticamente equilibraba su ritmo de crecimiento al de la población: me refiero a la producción de tubérculos, raíces, frutas, plátanos, etc., cultivos en lo fundamental vinculados a la economía campesina. En la década de los cincuenta del siglo XX, fue el sector campesino el que enfrentó los principales problemas de productividad en la economía agraria. De todos modos, aun en tales circunstancias, puede considerarse que la producción para consumo interno logró satisfacer mínimamente los niveles de la demanda, pese a que el producto agropecuario per cápita tuvo un lento incremento.

⁵⁸ Sobre el punto véase a Marini (1974).

En la década de los cincuenta del siglo XX hubo una tendencia general al incremento absoluto de la producción agrícola para consumo interno tanto en términos globales como por habitantes, pese a la baja productividad agropecuaria. Sin embargo, en la segunda mitad de la década de los cincuenta, cuando el proceso de industrialización por sustitución de importaciones en su primera ola alcanzó su mayor potencia de desarrollo, la producción agrícola para consumo interno comenzó a declinar en términos per cápita.

A mi juicio, tres factores intervienen en la explicación de este fenómeno: 1) el mantenimiento de amplios contingentes de población campesina fuera de la economía de mercado y 2) un bajo nivel de consumo de la población incorporada a la economía de mercado, dados sus bajos salarios e ingresos y la estrechez del mercado interno; 3) todo esto estrechamente relacionado con los mecanismos de compulsión extraeconómica propios del régimen dictatorial vigente en ese momento.

Esto lo comprendieron con claridad los expertos del Secretariado Técnico de la Presidencia en su Oficina Nacional de Planificación:

En el período de los cincuenta podría considerarse que la producción agropecuaria se comportó de acuerdo a los requerimientos de la demanda, aun cuando comenzaba a insinuarse un debilitamiento de la producción para abastecer al mercado interior.

“Los cambios políticos que se inician en 1961 significaron una alteración sustancial en la política de remuneraciones con efectos inmediatos en la demanda interna para alimentos y materias primas agropecuarias. La producción de consumo interno que se había demostrado una tendencia a un menor crecimiento entra en un período de franco deterioro. La mayor demanda por productos del agro es satisfecha por importaciones, creándose serias presiones sobre la balanza de pagos. Es así como, desde 1961, se hace evidente en todas sus dimensiones el problema agrario, que iniciado algunos años antes no se había expresado plenamente debido a las especiales condiciones políticas en que vivió el país hasta ese entonces⁵⁹.

⁵⁹ ONAPLAN: *Bases para el Desarrollo Nacional* (1966).

Como se aprecia, los elementos de la crisis agraria ya estaban maduros a finales del decenio de los cincuenta. La precipitación de la muerte de Trujillo en 1961 simplemente aceleró el proceso. Como ya discutí, el efecto inmediato en materia de trabajo de la destrujillización fue el aumento de los salarios, sobre todo en la burocracia gubernamental y el sector industrial.

Esta nueva situación, al hacer crecer las dimensiones de la demanda, reveló las profundas precariedades del agro dominicano. La agricultura no pudo responder dinámicamente al incremento de la demanda. El déficit se cubrió a través de las importaciones. Esto queda mejor explicitado al analizar el comportamiento de las tasas de incremento de la producción agropecuaria en la década de los sesenta. En dicho decenio, la producción agrícola apenas creció a una tasa de 1.1 % acumulativo anual, cuando en la década anterior lo hizo a una tasa de 5.6 %. Es decir, la producción agrícola prácticamente se estancó. La contracción fue más fuerte en los cultivos industriales de exportación. Si recordamos que los estos representaban para la fecha alrededor del 40 % de la producción agrícola, es obvio que factores unidos a la dinámica del mercado mundial gravitaron en la contracción de la oferta agropecuaria. Sin embargo, sería erróneo atribuirle al factor externo la determinación básica de la crisis agrícola de los sesenta.

En este momento es imposible extenderse en torno al análisis de las raíces de la crisis agraria. Solo consignaré algunos de sus elementos más relevantes. En primer lugar, hay que reconocer que la estructura de la tenencia de la tierra en el período 1950-1970 mantuvo sus características de extrema concentración latitudinaria y minifundización de las pequeñas propiedades campesinas. Esto, unido a las dificultades de comercialización y financiamiento, que se planteaban a las economías minifundistas, se agravaba ante el estímulo del proceso de diferenciación del campesinado, el cual se aceleró en la década de los sesenta. Esta situación provocó un práctico estancamiento de la productividad agropecuaria, incluso en los cultivos agrícolas que constituyen la materia prima básica de la industria o integran la dieta de consumo obrero, lo cual planteó a la industria urbana en desarrollo graves problemas, por lo menos por dos razones fundamentales:

en primer lugar hay que considerar que, al decrecer la productividad en aquellos bienes agrícolas directamente ligados a la industria como materia prima, se elevarían los costos de producción, se presionaría negativamente las tasas de ganancia industriales, pero además se transferirían grandes excedentes de la actividad urbana a la agricultura. Esto cuestionaba la estabilidad de la acumulación industrial urbana en los años sesenta. Sin embargo, en la década anterior era precisamente el fenómeno inverso el que se verificaba: gracias a los precios estables de los productos agrícolas, la industria lograba captar amplios excedentes de la agricultura⁶⁰.

En general, durante la década de los cincuenta la agricultura se mantuvo transfiriendo gran parte de sus excedentes a otros sectores de la economía, principalmente a la actividad comercial e industrial. Pero a partir de 1962 la tendencia se revierte, como se dijo, coincidiendo con el predominio oligárquico en el Estado hasta 1966.

Cuadro 4.24

**IMPORTACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)**

(En millones de RD\$)

Productos	Valor de las Importaciones 1970-1978	
	Absoluto	%
Arroz	117.9	29.0
Habichuelas	24.5	6.0
Aceite crudo de maní	64.2	15.8
Aceite de soya	57.6	14.2
Aceite de algodón	30.8	7.6
Trigo	60.1	14.8
Maíz	50.2	12.3
Pasta de tomate	0.7	0.1
Otros	0.8	0.2
Total	406.8	100.0

FUENTE: INESPRE: *Boletines estadísticos*.

⁶⁰ Es importante reconocer que en los años sesenta esta inversión de la relación de intercambio campo-ciudad en la movilidad del excedente agrícola no terminó favoreciendo al campesinado ante el aumento de los precios, sino a los intermediarios rurales o burguesía intermediaria, dado el carácter monopolista de la intermediación comercial agrícola. Para un análisis de esa estructura, véase a Aquino González (1978). Véase además el estudio de Crouch (1979).

El segundo aspecto que considerar es el descenso de la productividad en los bienes agrícolas que integra la dieta de consumo de los obreros industriales y de las masas trabajadoras urbanas en general, el cual también amenazaba la estabilidad del valor de la fuerza de trabajo y presionaba a la elevación de los salarios urbanos. En estas circunstancias, si bien a corto plazo la estrategia del descenso de los salarios implementada por el Estado en la década de los sesenta resistía coyunturalmente la presión del aumento del salario, esto no podía mantenerse de modo estable en el ciclo a largo plazo. Sin embargo, en esas condiciones la estrategia de acumulación industrial tenía que resolver el problema del valor de la fuerza de trabajo planteado por la crisis de la agricultura, pero por ninguna circunstancia la solución que se implementase podía admitir un incremento del salario tal que hiciera disminuir el ritmo de crecimiento de la tasa de ganancia en el supuesto de que se mantuviera el mismo nivel tecnológico e igual productividad.

Mientras la tasa de crecimiento industrial se mantuvo rezagada en el período de crisis de hegemonía en los años 1961-1965, este problema no surgió en toda su desnudez. Pero, en cuanto el balaguerismo hubo restablecido el equilibrio fiscal del Estado, saneado las empresas estatales y emprendido la tarea de la modernización, tras la aprobación en 1968 de la Ley 299 de incentivo y desarrollo industrial, surgieron como un obstáculo formidable a las tareas de la industrialización las dificultades que en materia de productividad –no ya de estrechez de mercado– presentaba la agricultura dominicana. El Estado inicialmente enfrentó el problema al tomar a su cargo la comercialización de los productos básicos de la dieta obrera y fijar precios que frenaran la inflación, aun cuando los precios de garantía fijados a los productores rurales y los de los alimentos importados, implicaran de hecho un drenaje de excedentes del Estado que potenciaba el déficit fiscal⁶¹.

⁶¹ Debe verse el estudio de Alfonseca (1985) sobre la producción de aceite que ilustra con ese producto el proceso de dependencia del mercado mundial de las oleaginosas y el papel del INESPRES. Para los problemas generales de la agricultura dominicana en esos años, véase a Aquino (1975).

Cuadro 4.25
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA A PRECIOS CONSTANTES
(RD\$)
1970-1974
(1962=100)

Productos	Años				
	1970	1971	1972	1973	1974
<i>Productos principalmente de exportación:</i>	95,538,336	99,636,857	103,029,686	115,262,124	113,096,620
<i>Tasas de Crecimiento Acumulativo Anual</i>	-	(6.5)	(3.4)	(11.9)	(-1.9)
<i>Valor RD\$:</i>					
Caña de azúcar	54,176,917	62,435,519	61,544,796	62,234,586	63,417,650
Tabaco (en ramas)	8,949,918	9,150,018	10,470,110	17,611,118	15,378,350
Café (en cerezos)	19,032,300	18,310,000	20,186,880	24,646,440	22,810,620
Cacao (en granos)	11,377,200	9,741,000	10,827,900	10,770,000	11,490,000
<i>Productos principalmente de consumo interno:</i>	131,284,097	139,573,498	142,224,697	144,116,777	163,150,152
<i>Tasas de Crecimiento Acumulativo Anual</i>	-	(6.3)	(1.9)	(1.3)	13.2
<i>Valor RD\$</i>					
Arroz (en cáscara)	35,700,000	36,040,000	36,380,000	38,403,000	39,457,000
Maíz (en gano)	2,250,000	2,450,000	2,500,000	2,330,000	2,440,000
Maní (en cáscara)	13,158,992	14,154,976	14,107,984	12,629,000	14,471,600
Algodón (en ramas)	2,314,494	1,851,255	1,811,967	1,739,556	1,088,073
Frijoles o habichuelas	5,750,000	6,550,000	6,900,000	7,774,000	22,797,160
Guandules	4,286,250	4,457,700	4,629,150	4,526,280	4,732,020
Papas	2,507,400	2,616,480	2,725,500	3,172,482	3,326,482
Batata	4,350,000	4,550,000	4,750,000	4,660,000	4,815,000
Yuca	7,000,000	7,680,800	8,034,000	8,029,880	8,375,960
Guineos	8,598,400	8,775,200	9,632,800	10,143,200	10,650,400
Plátanos	8,055,555	8,263,890	8,396,897	8,016,110	8,434,720
Otros	37,313,006	42,183,197	42,356,399	42,682,269	42,561,737
<i>TOTAL</i>					
<i>Valor RD\$</i>	224,822,433	239,210,355	245,254,901	259,378,901	276,246,772
<i>Tasas de Crecimiento Acumulativo Anual</i>		(6.4)	(2.5)	(5.8)	(6.5)

FUENTE: INESPRES: Boletines estadísticos.

Empero, esto era inevitable si se quería mantener los precios de los bienes salarios en un nivel de estabilidad que no amenazara a largo plazo los salarios reales. De ese modo, el Estado le regularizaba al capital industrial el valor de la fuerza de trabajo y con

ello la estabilidad del proceso de acumulación. Por medio de este mecanismo, la actividad industrial lograba así abrirse un espacio de crecimiento, pese al atraso secular de la agricultura. De hecho, este fue el objetivo estratégico del balaguerismo al crear en 1969 el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE). Solo por alimentos importados, INESPRE había movido entre 1970 y 1978 más de RD\$ 400 millones (Cuadro 4.24).

La otra línea de acción del Estado frente a la crisis agraria se orientó por dos vertientes: la primera a través de las leyes de reforma agraria implementada por el régimen balaguerista entre los años 1972 y 1974 y la segunda a través del Plan de Desarrollo Agropecuario Dominicano (PIDAGRO), organizado en coordinación con la AID a partir de 1974⁶².

Habría que preguntarse hasta qué punto en el contexto de la crisis agraria de los años setenta las leyes agrarias implementadas por el régimen balaguerista intentaban restablecer las condiciones de subordinación del sector agrario a la acumulación de capitales en las ciudades, tal como se verificó en los años cincuenta. Ciertamente, es claro el determinante político que medió en el establecimiento de las leyes agrarias, a partir del cual el régimen reformista trataba de robustecer su resquebrajada hegemonía sobre el campesinado en el contexto preelectoral de los años 1972-1974. Ahora bien, de aquí a sostener como determinante esencial de las leyes agrarias la prevención contrainsurgente del régimen frente a la movilización campesina existe una notable distancia⁶³. Lo que me interesa destacar en este momento es que ello –el condicionante político de las leyes agrarias– no es forzosamente alternativo y opuesto al determinante económico y social. En este sentido, el propósito modernizador y reformista de las leyes agrarias, sugerido por algunos autores⁶⁴, como determinante básico de dichas leyes no encuentra fácil asidero, si

⁶² Para el análisis de esas dos iniciativas estatales, véase a D'Oleo (1983).

⁶³ Para este debate véase a Fernández (1983), Crouch (1979), D'Oleo (1983), Dore (1981) y Gómez (1977).

⁶⁴ Dore (1981).

se quiere sostener con ello que, tras el intento de reforma agraria en esos años, se pretendía crear un sólido campesinado medio con una relativa capacidad de consumo que ampliara el espacio de mercado para la industria urbana en expansión. El punto en que me apoyo para introducir una duda razonable al respecto es el siguiente: estimo que la industria urbana en expansión todavía en 1972 encontraba en los consumidores urbanos una cobertura de mercado lo suficientemente amplia en los grupos medios en expansión como para no tener que proponerse una estrategia que persiguiera la modernización del agro y le obligara a chocar con el sector terrateniente, la oligarquía rural. Ello hubiera implicado un nivel de desarrollo de la burguesía industrial que a la sazón no existía en el país, como también hubiera requerido de un poder político y una coherencia ideológica del empresariado industrial que en ese momento se reveló ausente. Sin embargo, el propósito modernizador existía al dictarse las leyes agrarias, como también era clara su motivación política. ¿Cómo resolver este problema, esta aparente paradoja? La explicación que sugiero es la siguiente:

El propósito modernizador del balaguerismo en términos de desarrollo capitalista implicó que el eje urbano-industrial y financiero pasara a comandar la dinámica de la acumulación capitalista. Para esto el Estado no solo tuvo que someter a un estricto control cambiario al sector exportador –movilizando con ello gran parte del excedente generado en el sector externo de la economía hacia las tareas del crecimiento interno–, sino también se vio forzado a presionar para la restitución del vínculo entre el campo y la ciudad, quebrado en la coyuntura de la crisis de 1961-1965 a partir de cuyo propósito el eje urbano restituía su dominio sobre el eje agrario, sometiéndolo a las tareas del desarrollo sobre premisas financieras e industriales. Fue así que, tras esta política, de nuevo el campo pasaba a transferir excedentes que iban a apoyar el crecimiento capitalista urbano-industrial, aun cuando fuera sobre bases económicas y políticas muy diferentes a las planteadas en el período trujillista. Este propósito modernizador y reformista del Estado se apoyó, como he discutido en el Capítulo 2, en una gran alianza de clases en la cual el campesinado aportaba la necesaria

cobertura de masas al aparato burocrático y militar controlador del Estado y liderado por Balaguer, proporcionándole no solo la zapata social sobre la cual se erigiría su autonomía relativa frente al conjunto de las clases dominantes, sino también su capacidad de legitimación y liderazgo frente al Ejército. De aquí que, aunque parezca paradójico, las leyes agrarias deben ser vistas, en primer lugar, como parte de una estrategia más general de subordinación del eje agrario al industrial-urbano y, en segundo lugar, en términos de las necesidades de la conservación y restitución del liderazgo balaguerista sobre el campesinado, diezmado precisamente tras el deterioro que la restitución del poder del capitalismo urbano había producido sobre el mundo agrario bajo el modelo reformista de crecimiento. Por ello, el propósito modernizador de las leyes agrarias se apoyó en su tarea de legitimación política. Se revelaba así que la reforma no podía implementarse sin la conservación de la hegemonía⁶⁵.

⁶⁵ En el *Post scriptum* profundizo en el análisis del problema agrario en función de los obstáculos al desarrollo industrial por sustitución de importaciones.

Capítulo 5

EPÍLOGO: LA CRISIS DEL REFORMISMO DEPENDIENTE

se cansaba mucho pensando esas cosas. Le hacía experimentar la sensación de que le crecía la cabeza. Pasó la guarda al libro y se puso a mirar con aire cansado la Tierra verde y redonda como las nubes castañas. Se preguntaba que era mejor: si decidirse por el verde o por el castaño. Porque un día Dante había arrancado con unas tijeras el respaldo de terciopelo verde del cepillo dedicado a Parnell y le había dicho que Parnell era una mala persona. Se preguntaba si estarían discutiendo de eso en casa. Eso se llamaba la política. Había dos partidos: Dante pertenecía a un partido y su Padre y el señor Casey a otro, pero su madre y tío Charles no pertenecían a ninguno. El periódico hablaba todos los días de esto.

Le disgustaba el no comprender bien lo que era la política y el no saber dónde terminaba el universo [...].

JAMES JOYCE

Retrato del Artista Adolescente

[...] En un juego serio, la convención es siempre la misma: las que hablan son las cartas no el jugador. Pero nunca se debe olvidar que esto es una convención.

ALVIN GOULDNER

La dialéctica de la ideología y la tecnología

La crisis y el desmoronamiento del régimen balaguerista en los años 1976-1978 se ha visto, sobre todo por algunos autores marxistas, como el resultado directo de la crisis del sector externo de la economía en esa difícil coyuntura, y ha llegado incluso a sostenerse que fue el fruto directo del agotamiento del modelo de acumulación de capital impulsado desde el Estado en los años 1966-1978. Otra línea de argumentación sostiene que el desplazamiento del balaguerismo del poder fue esencialmente resultado de la emergencia de una poderosa burguesía industrial moderna

y democratizante, la cual encontró en la principal fuerza opositora, el PRD, un apoyo de masas consecuente en un contexto internacional donde Estados Unidos, dado el giro estratégico de la política Carter para América Latina en los mediados de los setenta, se encontraba empeñado en desplazar a Balaguer del poder, sustituyéndolo por un gobierno de mayor apertura democrática¹. Pese a que esta segunda perspectiva del problema está más acorde con los hechos, en rigor también es inexacta.

A partir de la segunda mitad del régimen balaguerista, propiamente hablando, desde 1972, el régimen cayó en una crisis más o menos permanente, cuyo punto culminante fue la crisis de los años 1976-1978, inaugurada con la caída de los precios de los productos de exportación, sobre todo del azúcar, y culminada en 1978 con la derrota política del reformismo por el PRD. En esta situación se conjugaron elementos de carácter orgánico, vinculados a las especificidades del proceso de desarrollo capitalista en los años 1966-1978; elementos de orden social, relacionados con las transformaciones de clase que este proceso trajo consigo, y elementos de orden político, relativos a las especificidades de la coyuntura electoral en 1978. Por esto argumento que el modelo balaguerista de dominación cayó en crisis y la élite burocrático-militar balaguerista fue desplazada del control de los aparatos de Estado, debido, principalmente, a la crisis y agotamiento de los límites sociales y políticos del bonapartismo dependiente. En modo alguno intento sostener que los factores propiamente económicos –determinados por la crisis de las exportaciones en los años 1976-1978– no hayan gravitado en dicha situación; Considero que la intervención de estos “factores” generó “efectos de crisis” solo al imbricarse con aquellos elementos de carácter sociopolítico que le imponían un límite a la capacidad de maniobra del “régimen reformista”.

Solo en los años 1977-1978 el ritmo de crecimiento del PIB y de la inversión bruta interna tuvieron una brusca contracción, pese a que desde 1974-1975 venía verificándose una caída tendencial del PBI y en menor medida de la tasa de inversión, como lo revela el cuadro 5.1.

¹ El texto de Catrain (1982) ilustra muy bien esta interpretación del problema.

En el cuadro se aprecia que hasta 1973 las tasas de crecimiento del PIB eran significativamente altas, al igual que las tasas de inversión. A partir de 1973-1974 el PIB y la inversión comenzaron a decrecer; aun así, pese a su contracción a la mitad del ritmo alcanzado en el período previo (1970-73), el crecimiento era importante. Fue en 1977-1978 que se produjo la contracción determinante, reduciéndose el crecimiento del PIB a solo el 2.2% y el de la inversión al 2.7 %.

Por lo referido, el análisis de la crisis “final” del reformismo tiene que realizarse en una perspectiva a largo plazo que permita asumir la expresión de coyuntura que en 1978, tras las elecciones generales, dio pie al desplazamiento de la élite burocrático-militar reformista del control de los aparatos de Estado. A mi entender, en el estallido de la crisis del reformismo coexisten diversos procesos sociopolíticos y económicos con ritmos diferenciales de movimiento en el tiempo, pero unificados por las transformaciones de clase y rearticulación de sus relaciones en el período 1966-1978.

Cuadro 5.1
**TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB
Y DE LA INVERSIÓN BRUTA INTERNA: 1970-1978**

Año	Tasas De Crecimiento	
	PBI	Inversión Bruta Interna
(1962=100)		
1970-71	10.6	16.0
1971-72	12.4	26.2
1972-73	12.1	19.0
1973-74	7.5	15.7
1974-75	5.1	10.6
(1970=100)		
1975-76	6.7	6.4
1976-77	5.0	8.1
1977-78	2.2	2.7

FUENTE: Banco Central: *Boletines mensuales*.

Tras el telón de fondo de los procesos de formación de clases en los años 1976-1978 (1966-1978), en la precipitación de la crisis del reformismo, lo primero que advertimos es el conflicto que se le planteó al régimen entre los grupos emergentes de poder económico, surgidos a la sombra del poder del Estado, con

los grupos burgueses ya existentes. Como se ha visto², a la luz de la estrategia balaguerista de dominación emergieron núcleos burgueses beneficiarios directos del control de los aparatos del Estado, vinculados a la burocracia civil y militar sostenedora del régimen. Estas capas tuvieron como esferas de actividad predilecta las especulaciones financiera y mercantil. Esta situación, si bien le reportaba al balaguerismo un apoyo esencial al ejercicio de su predominio político sobre el conjunto de las clases dominantes, en términos estratégicos dificultaba el equilibrio interno del bloque en el poder básicamente en lo que respecta a los grupos industriales y en menor medida a los sectores financieros y comerciales. En todo caso, debemos convenir en que esta “contradicción” se vinculaba a un problema estructural y de clases de mayor envergadura histórica, referido al proceso de modernización capitalista que en la sociedad dominicana se venía verificando, y del necesario apoyo estatal al proceso de constitución de las clases dominantes en condiciones de subdesarrollo y dependencia. Visto de este modo, la contradicción entre burguesía “modernizante” emergente y élites burocrático-militares era el producto inevitable de un estilo de desarrollo capitalista donde el dinamismo del proceso encontraba en el Estado su “comando estratégico” no solo en el plano político, sino también económico, dada la privilegiada posición del Estado en el control de las fuentes básicas del excedente azucarero³.

Un problema más complicado fue el que se le presentó al reformismo a lo largo de sus doce años de dominio del Estado respecto a los grupos populares urbanos. En ese sentido, el reformismo dependiente mostró siempre una incapacidad histórica notable para agenciarse un mínimo de apoyo popular en las áreas urbanas, lo que se tradujo en su incapacidad para movilizar a núcleos mínimos de la clase obrera y la pequeña burguesía pauperizada en torno a sus propios objetivos políticos. En una amplia perspectiva, el reformismo dependiente, como expresión

² Véase *supra* Capítulo 2.

³ El análisis de Oviedo (1983) arroja ideas que deben ser tomadas en cuenta al respecto.

del bloque histórico oligárquico pequeñoburgués de base agraria y comercial, mostraba así una incapacidad de cooptación corporativa de las masas urbanas y de hegemonía política e ideológica sobre el movimiento obrero⁴. Esto es un índice revelador de las limitaciones del bloque en el poder para hegemonizar a los nuevos actores sociales y políticos que, fruto del desarrollo capitalista y la modernización burguesa impulsada por el Estado, surgían y se desarrollaban. Actores –estos últimos– esencialmente vinculados a la industrialización sustitutiva de importaciones y el proceso más general de urbanización experimentado por la sociedad dominicana desde los años cincuenta. Dichos actores no estaban constituidos solo por las masas populares urbanas en su heterogénea composición clasista (proletariado y subproletariado urbano e industrial, pequeña burguesía, etc.), sino también por los emergentes grupos medios y la incipiente burguesía industrial. Por ello creo que no exagero al afirmar que el reformismo dependiente cayó víctima de sus propios objetivos históricos. Es conveniente aclarar el punto.

Como hemos visto, en gran medida el reformismo dependiente fue el continuador histórico de la estrategia trujillista de crecimiento capitalista al estimular un cierto desarrollo del mercado interior apoyado en la industrialización por sustitución de importaciones, lo único que bajo condiciones históricas muy diferentes a las de la dictadura trujillista y apoyado en fuerzas sociales parcialmente distintas, lo que daba una nueva expresión al juego de fuerzas sociales representadas en el Estado, sin dejar por ello de reconocer en este una gran autonomía relativa. Para lograr esta tarea, el reformismo se apoyó en un bloque de fuerzas sociales que reconocía a la alianza oligárquica como su principal soporte político en el seno de las clases dominantes y al campesinado como su esfera de mediación hegemónica fundamental. Sin embargo, los propios objetivos estratégicos del reformismo,

⁴ Este problema, naturalmente, merece un estudio más detenido, vinculándose a la cuestión de los límites históricos y de clase de la llamada “alianza oligárquica” como bloque de clase, no solo incapaz de impulsar un proceso sostenido de desarrollo, sino también de ejercer la hegemonía.

conducentes a las tareas de la industrialización, estimulaban el desarrollo de nuevos actores sociales y políticos, los cuales, como referí, reconocían en el acelerado proceso de urbanización de la sociedad dominicana su espacio de despliegue histórico: me refiero a la burguesía industrial emergente y a los sectores medios urbanos. Empero, el proceso de urbanización e industrialización dependiente generó también un proletariado y subproletariado urbanos de creciente importancia política, sobre los cuales el reformismo no pudo articular una mediación hegemónica efectiva, pero las opciones populistas urbanas, esencialmente el PRD, sí lograron articular un eficaz discurso ideológico y político⁵. Llama la atención esta paradoja histórica, puesto que la estrategia de industrialización articulada por el reformismo se apoyó en un drenaje sistemático de excedentes del campo hacia las ciudades, lo que no solo penalizó a la burguesía agraria y los grupos exportadores, sino al propio campesinado, al tiempo que favorecía a la emergente burguesía urbano-industrial y a ciertas capas privilegiadas del proletariado industrial⁶.

Para explicar esta situación no basta con el recurso de la “lógica de la acumulación”. El problema exige de una dilucidación de alcance propiamente sociológico, pero históricamente situada. Como hemos visto, la estrategia reordenadora de la distribución del excedente económico afectó de modo directo el nivel de vida de las clases trabajadoras urbanas y rurales⁷. En el caso del campesinado, esto se reflejaba directamente en la aceleración del proceso de descomposición social y económica de la pequeña propiedad en el agro, la creciente pérdida del poder adquisitivo de los productos que la economía campesina enviaba al mercado ante el deterioro de los precios y el monopolio capitalista de su comercio; en el caso obrero (incluido el proletariado agrícola) se evidenciaba directamente en el estancamiento de los salarios o el deterioro

⁵ El libro de Del Castillo (1981) contiene interesantes ideas al respecto, así como su ensayo de 1982.

⁶ Vilas (1979).

⁷ Véase *supra* Capítulo 3.

de su poder de compra real, lo cual unido a la baja productividad agrícola determinó un brutal descenso del precio de la fuerza de trabajo para el capital.

Sin embargo, no solo fueron los trabajadores urbanos y el campesinado los que sufrieron los embates de la política de concentración del ingreso sostenida por el Estado en los años 1966-1978, ya que también los grupos pequeñoburgueses urbanos empobrecidos se vieron afectados directamente por el deterioro del salario y la espiral inflacionaria. Pero a diferencia de la clase obrera y del campesinado, en el plano político estos sectores “pequeñoburgueses” lograron mantenerse parcialmente organizados. En esta circunstancia interviene el papel del PRD en la coyuntura de 1978. Originalmente, fue contra dichos sectores que se cernió directamente la embestida represiva del régimen en los años 1966-1972, pues era la fuente de reclutamiento de la base política del movimiento de izquierda. Sin embargo, en su conjunto dichos sectores lograron organizar una serie de mecanismos *sui generis* (clubes barriales, etc.) que, si bien en su última etapa el régimen balaguerista logró permearlos, en su conjunto mantuvieron una gran capacidad de resistencia, organización y movilización política de las masas urbanas. Fue en estos sectores donde el PRD reclutó su base dirigencial intermedia, que lo vinculó desde temprano a la vida de las clases populares. Esto, a su vez, le permitió tender un puente político para ganar el apoyo de la clase obrera. Es a través de esta dinámica que puede comenzar a comprenderse cómo la mediación política proporcionada por el PRD les dio a las fracciones de las clases dominantes en conflicto con el balaguerismo la base social indispensable para la sustitución política del régimen. Por su lado, la clase obrera sin jefes, desorganizada políticamente y en abierto conflicto en el plano social y económico con el régimen⁸ encontró en el PRD el mecanismo político idóneo para lograr agenciarse el apoyo de las clases populares en su conjunto, en una situación de pérdida de

⁸ Debe precisarse que este último conflicto no era solo con el balaguerismo como régimen político, sino con el conjunto de las clases dominantes, con algunas de cuyas fracciones en ese momento la clase obrera aparecía coyunturalmente en virtual alianza contra el enemigo común.

la legitimidad reformista frente al campesinado. Se socavaba así la estabilidad del régimen y su capacidad de legitimación de masas, sobre todo frente a las clases campesinas.

En esta estrategia, fueron la clase obrera y la pequeña burguesía empobrecida las que lograron unir al campesinado en un solo bloque de oposición al gobierno. Por una de esas ironías de la historia, en 1978 los campesinos se veían en esta ocasión en alianza con ciertas capas terratenientes en un propósito unitario, la sustitución del régimen. La naturaleza de esta alianza colocaba, desde el punto de vista de los intereses del proletariado y los campesinos, la cuestión social en un segundo plano, ante la urgencia de la cuestión política. Esto, en un futuro, le traería nefastas consecuencias a la clase obrera y el movimiento campesino.

Una situación semejante se plantearía respecto a las emergentes clases medias urbanas, las cuales en sus diversas expresiones corporativas y grupos de presión (asociaciones y colegios profesionales), mantuvieron siempre una actitud de distanciamiento y crítica permanente al régimen, tal es el caso, por ejemplo, de las asociaciones y colegios de ingenieros, abogados, médicos, entre otros. Respecto a estos grupos profesionales, como Del Castillo ha demostrado⁹, el PRD logró también tender un puente político que las movilizó contra el régimen, sobre todo al tomar en cuenta los bloqueos que a su movilidad social implicaba el modelo político autoritario y centralista impuesto por el balaguerismo y las posibilidades que al respecto planteaba la opción democrática perredeísta.

La pérdida de la hegemonía del régimen balaguerista respecto a la alianza oligárquica merece un comentario más amplio. La alianza oligárquica, tras su práctica anulación en la esfera estatal durante la Era de Trujillo, tras la muerte del dictador en 1961, se encontró en una situación de verdadera incapacidad sociopolítica para la articulación de un modelo de dominación alternativo al trujillismo en ruinas. Ante esta situación, las masas populares urbanas ampliaron su capacidad de acción y organización políti-

⁹ Del Castillo (1981).

cas. Ante ambas situaciones, se crearon las condiciones para que la crisis de hegemonía postrujillista desembocara en una guerra civil en 1965. El régimen balaguerista fue de hecho la respuesta autoritaria que solucionó la crisis de hegemonía postrujillista al articular un nuevo modelo de dominación¹⁰ con gran autonomía relativa del Estado. Fue en ese contexto que las élites burocráticas trujillistas y el Ejército, tras su reorganización bajo el balaguerismo, mostraron la suficiente coherencia política como para convertirse en un espacio de mediación capaz de recuperar la hegemonía sobre el campesinado, tradicional apoyo de masas de la alianza oligárquica. El balaguerismo, al recuperar el respaldo del campesinado, permitió a la alianza oligárquica enfrentar a la cada vez más activa pequeña burguesía urbana en proceso de pauperización, así como a los emergentes proletariado industrial y subproletariado urbano. Sin embargo, el precio que la oligarquía pagaba por ello era el de su práctica anulación política en el Estado. Gracias a esta situación, eminentemente política, pudo el reformismo recuperar la conducción del proyecto trujillista de crecimiento interno.

Ahora bien, como se ha visto, en tales condiciones, el nuevo equilibrio de fuerzas en el Estado imponía que la estrategia de crecimiento capitalista se orientara hacia el desarrollo de la burguesía como clase económica, sobre todo en su expresión industrial y financiera, a diferencia de la estrategia trujillista donde los beneficios del proceso de desarrollo capitalista hacia adentro fueron monopolizados por la élite trujillista. Sin embargo, dada la autonomía relativa del Estado y la fragilidad política de las clases dominantes, la dinámica política del bonapartismo dependiente terminó favoreciendo el desarrollo de la élite burocrático-militar balaguerista, como grupo económico y condición del funcionamiento del modelo de dominación política bonapartista. De este modo, entre la lógica de la expansión económica de la burguesía dirigida por el Estado y los beneficios económicos de la élite burocrático-militar balaguerista, se planteó una contradicción *in nuce* que el reformismo

¹⁰ Véase *supra* Capítulo 1.

no pudo superar, pues ambas tendencias operaban como premisas necesarias del modelo de dominación en su conjunto. De nuevo el dinamismo del modelo de dominación se volvía contra sus autores.

Fue de este modo que las relaciones entre el Estado y las clases dominante determinaron una casi absoluta autonomía de movimiento político del régimen balaguerista respecto a las clases dominantes en su conjunto, anulando no solo su expresión política, sino también haciéndola indefensa en el plano económico ante la élite burocrático-militar reformista. Esto implicó el surgimiento de un espacio de contradicciones “no previstas” por el bonapartismo dependiente, que socavaba su equilibrio estratégico: me refiero al hecho de que al ceder su dominación política para recuperar la económica y social, la clase dominante, si bien recibía los beneficios del Estado en materia de desarrollo, de pronto se encontró con la situación de que la autonomía relativa del Estado, que requería el régimen bonapartista liderado por Balaguer, constreñía el potencial de crecimiento económico de las élites dominantes, tras el hecho de que los grupos burocrático-militares en el Estado eran también beneficiarios directos de la estrategia estatal de desarrollo capitalista que les facilitó su expansión como grupos económicos.

Por otro lado, en la medida en que afloraba la contradicción entre las élites burocrático-militares estatales y la emergente burguesía industrial-financiera, la necesaria modernización agraria exigida por la industrialización dependiente enfrentó al Estado con los grupos terratenientes, tras su política de reforma agraria en 1972, pero sin recibir un apoyo entusiasta de los nuevos y emergentes burgueses industriales y de la banca.

De esta manera, en tanto el proceso de industrialización se afirmaba y se robustecía el poder de la élite burocrático-militar, las contradicciones de la burguesía industrial-financiera con dichas capas se acentuaba, al tiempo que se hacía más urgente la necesidad de reformas en el campo tanto por las necesidades de modernización agraria como en función de la creciente pérdida de hegemonía del balaguerismo con el campesinado pobre.¹¹

¹¹ Dore (1981).

Con la promulgación de las leyes agrarias en los años 1972-1974, se marca el inicio de la sustracción del apoyo terrateniente al régimen, y con ello estalla una verdadera crisis que rompe la unidad del bloque en el poder. Como he analizado en el Capítulo 4, esta ruptura se encuentra estrechamente vinculada a la crisis del agro en materia de productividad, la concentración latifundista de la tierra y la consecuente crisis del minifundio campesino en los inicios de los años setenta. A nivel político se expresó en la pérdida o socavamiento del apoyo que el campesinado mostrara a Balaguer en sus dos primeros gobiernos. Con las leyes agrarias de 1972, se inicia un movimiento campesino por la tierra que, si bien en su primer momento fue dominado por el gobierno en su disputa con los grupos terratenientes, definió niveles reivindicativos más allá de las estrategias balagueristas de manipulación y cooptación campesinas, poniendo en peligro las bases del poder oligárquico en el campo¹².

La ruptura con el eje terrateniente por parte del régimen, o por lo menos con un importante sector de este no solo implicó una fisura en la composición del bloque en el poder, sino también el planteo de su posibilidad histórica de resquebrajamiento, dada la posición hegemónica de los intereses agroterratenientes y comerciales en este¹³.

Yendo más lejos, con dicha ruptura cabría preguntarse, ¿el régimen intentaba ganar espacio social y político en los emergentes grupos industriales que sí requerían un proceso modernizador del campo, más allá del evidente intento por restablecer las bases de la resquebrajada hegemonía reformista sobre el campesinado en una coyuntura preelectoral?

Como he argumentado, en términos históricos las leyes agrarias constituyeron un resultado político necesario del proceso más general de industrialización dependiente, en función de una estrategia de sujeción del eje agrario por el capitalismo urbano, en tanto fuente de excedentes, insumos agrícolas y bienes salarios baratos.

¹² *Ibidem*.

¹³ El texto de Crouch (1979) contiene un valioso análisis a propósito del papel de la burguesía arrocera en este conflicto.

Ahora bien, ello implicaba una tarea formidable por su magnitud y alcance histórico, la cual el reformismo dependiente se demostró incapaz de llevar a cabo. El dilema era sencillamente el siguiente: la producción agrícola barata para las ciudades, en las condiciones dadas por la situación de atraso rural y dominio terrateniente sobre el campesinado, implicaba deprimir aún más los niveles de vida de los campesinos y elevar el grado de explotación de dicha fuerza de trabajo. Esto ponía en entredicho al régimen reformista al socavar su legitimidad frente a los campesinos, sector social base de su poder de negociación ante el bloque de dominación. Pero si no se sacrificaba al campesinado, para el capitalismo urbano en ascenso las bases del desarrollo quedaban cuestionadas, y con ello la fuerza modernizadora del reformismo obstaculizaría su propio modelo de crecimiento. Esto último, a tenor de la cuestión económica, hubiese planteado la imposibilidad definitiva del régimen de cooptar corporativa y políticamente a los nuevos agentes históricos urbanos, que se constituían tras la industrialización dependiente. La solución más lógica, en la perspectiva del bonapartismo dependiente, era reformar la estructura agraria al modificar los términos de la propiedad y control oligárquico de la tierra, de un modo tal que asegurara el aumento de la productividad agropecuaria sin sacrificar los niveles de vida campesinos, o por lo menos sin depauperar aún más su condición. Ideal sería si con ello se lograba elevar los niveles de vida de las masas rurales y se ampliaban las posibilidades de crecimiento del mercado para el capitalismo urbano industrial. Sin embargo, ocurrió el choque con la clase terrateniente, grupo fundamental del poder económico y social en el campo. En este conflicto, el régimen reformista a la larga se demostró incapaz de someter a sus objetivos reformistas a la clase terrateniente, y su estrategia de reforma agraria puede decirse que culminó en una derrota política. Es necesario explicar los términos de esa derrota.

El primer elemento que mueve a la curiosidad es el hecho de que dentro del bloque en el poder solo el sector industrial prestó un tímido apoyo a la implementación de las leyes agrarias¹⁴.

¹⁴ Dore (1981).

Este fue desgastándose lentamente hasta silenciarse. La explicación que puedo proporcionar ante este hecho contiene tres elementos.

En primer lugar, es necesario recuperar la dimensión propiamente política del problema. En el equilibrio de fuerzas que tras el Estado balaguerista se daba entre las diversas fracciones de la burguesía, los grupos industriales emergentes tenían una posición subordinada y secundaria, lo cual les impedía cualquier enfrentamiento directo y diametral con los intereses comerciales y terratenientes predominantes. La única posibilidad de enfrentamiento exitoso de los industriales con los terratenientes y comerciantes pasaba por el fortalecimiento del Estado y la movilización popular de base campesina y urbana. En dicha coyuntura, esto hubiese implicado potenciar los términos de otra confrontación no menos engorrosa para los industriales: la que sostenían con las élites burocráticas y militares como competidores que violentaban las leyes del mercado, base de la racionalidad económica capitalista. En todo caso, ello ponía en entredicho la legitimidad del bloque de dominación y amenazaba con radicalizar el conflicto con consecuencias que al conjunto de las clases dominantes les atemorizaba¹⁵.

En segundo lugar, es necesario recuperar la dimensión económica del conflicto, a propósito del dinamismo de los mercados. Creo que existe la suficiente evidencia para argumentar que todavía en los inicios de la década del setenta las dimensiones del mercado al que los industriales tenían acceso no implicaban la puesta en peligro de su expansión económica como grupos industriales, aun cuando la modernización del campo evidentemente favorecía su crecimiento. Ahora bien, siempre existía la opción (que fue la que finalmente primó) de hacer crecer las dimensiones del mercado sin colidir con los grandes intereses terratenientes y comerciales importadores: a través de la reorientación de las rentas que favoreciera su concentración en grupos de altos y medianos ingresos, que proporcionara tanto a industriales como a importadores márgenes de mercado seguros. La expansión de las clases medias urbanas también podría permi-

¹⁵ Véase Dore (1979 y 1981) y D'Oleo (1983).

tirlo. En igual sentido obraba la constricción de los salarios obreros y el drenaje de excedentes a los campesinos. Esto se complementaba con una política agraria que abaratara los bienes salarios urbanos y los insumos industriales de origen agrícola al sacrificar los niveles de vida de las clases trabajadoras del agro, pero sin el riesgo de enfrentamiento con la alianza oligárquica. En este caso, era preferible forzar al Estado a la adopción de una estrategia de política económica que subordinara el campo a las tareas de la industrialización, sin cuestionar la estructura del atraso rural¹⁶. Se aseguraba así que el régimen perdiera parte de su base de legitimación frente al campesinado, lo cual reportaba a los industriales, en particular, y al conjunto del bloque de dominación, en general, una mayor capacidad de negociación frente al Estado, y en concreto frente a Balaguer, máxime si en tales condiciones la desmovilización de las masas populares urbanas por parte del régimen aseguraba que por ese lado las bases del pacto de dominación no podían ser cuestionadas.

El último elemento que debemos tomar en consideración es de carácter ideológico. Por su origen social pequeñoburgués en unos casos y agrario-comerciales en otros, los grupos industriales eran profundamente conservadores en el plano ideológico-político. Esto los hacía reacios a cualquier posibilidad de cambios radicales que supusieran la movilización de las masas, aun cuando dichos cambios pudieran significar una efectiva expansión de sus intereses o solo meras medidas reformistas. La real desmovilización política de los industriales, preservadora de su corporativismo social y económico y conservadurismo político, les forzaba a cerrar filas con los atrasados intereses terratenientes y comerciales. Fue de este modo que en la coyuntura de los años 1972-1974 los emergentes grupos industriales eligieron la vía de la preservación del atraso como condición de su crecimiento.

¹⁶ Las limitaciones de un proyecto burgués de industrialización mostraban así su gran debilidad histórica. Por lo demás, esto no era en modo alguno un elemento *sui generis* del proceso industrializador dominicano; este tipo de situaciones se ha mostrado en contextos históricos de relativa debilidad de los grupos capitalistas urbano-industriales y gran poder terrateniente y comercial. Para una discusión de esta problemática debe verse a Gerschenkron (1968).

La oposición a las leyes agrarias por parte de la burguesía comercial-importadora es más diáfana en sus razones. Tradicionalmente los grupos importadores han estado vinculados a los terratenientes no solo por las afinidades ideológicas y el rancio conservadurismo político oligárquico, sino a través de sus lazos con la tierra, pues muchos altos representantes del poder importador son también grandes terratenientes. Por lo demás, aun cuando los grupos importadores no se encontraran ligados directamente a la tierra, sus vínculos con la banca y el eje agroexportador en su conjunto los vinculaba estrechamente con los sectores terratenientes, ya que tanto en el ámbito financiero como exportador los representantes del poder oligárquico terrateniente tenían gran peso.

La oposición del perredeísmo a las leyes agrarias es también más clara en sus propósitos políticos¹⁷. Como representante de la pequeña burguesía urbana en sus sectores más progresistas políticamente y de las masas populares urbanas en general, la oposición perredeísta estuvo signada por las fisuras que las leyes agrarias habían introducido en el seno del bloque en el poder. Con ello el PRD intentaba ganarse a los sectores terratenientes en ese momento en disputa con el régimen. Pienso que el PRD comprendió muy bien la importancia que para la unidad y estable equilibrio del bloque en el poder representaban los grupos terratenientes. En ese sentido el PRD estimó que la unidad del bloque en el poder se encontraba en juego con las leyes agrarias, y podría romperse al profundizar la contradicción Estado-terratenientes, socavándole así al balaguerismo su base de legitimidad política frente a las clases dominantes.

¹⁷ Bosch lo expuso con notable claridad al declarar que con las leyes agrarias Balaguer había roto con su base social terrateniente y que “con la situación creada se presentaba la primera luz en la noche política dominicana de los últimos siete años. Hasta ahora no podía vérselo la salida a la situación política nacional, pero ya se le ve. Ya podemos asegurar, lo menos, que el poder del doctor Balaguer dejó de ser lo que era, y que, si sabemos actuar con inteligencia, su sueño de seguir siendo presidente de la República el resto de su vida no se va a cumplir” (*Listín Diario*, 19 abril de 1972). Palabras premonitorias de las que Peña Gómez sabría hacer uso hábilmente a partir de la salida de Bosch del PRD en 1973.

Con ello el perredeísmo no se equivocaba, pero precisamente le impedía ver que esta lógica conducía a un necesario reajuste de la estrategia política que hasta ese momento le caracterizó, lo que más temprano que tarde lo llevaría a posibles conflictos con su base de apoyo popular-urbana. En tal sentido, con su oposición a las leyes agrarias de 1972, el perredeísmo sacrificaba parte de sus objetivos estratégicos para maximizar objetivos políticos a corto plazo: el de la ruptura de la unidad del bloque en el poder, que le condujo a la alianza con parte de la base de clase que le había dado sentido histórico al reformismo, ahora coyunturalmente opuesto a este. Esto implicaba que una alianza popular urbana y oligárquica-burguesa tendría menores y más frágiles posibilidades contra el reformismo mientras se sostuviera sobre la simple premisa de la oposición y reforma modernizadora del agro, mientras no tuviera más base programática que el objetivo político del desplazamiento del poder del balaguerismo.

Estas son las condiciones que explican que en 1974 la oligarquía terrateniente e importantes sectores de la burguesía agraria y comercial, tras su acuerdo político de participación electoral con el PRD en un amplio frente en el llamado “Acuerdo de Santiago”, diera sus primeros pasos de oposición política al balaguerismo, como veremos abajo¹⁸.

Del lado del movimiento revolucionario, salvo en el caso del PCD, hubo también una tajante oposición a las leyes agrarias, las cuales se vieron como un mero propósito contrainsurgente, sin percatarse de las complejas relaciones que estas sostenían respecto al proceso de industrialización, las necesidades de legitimación política frente al campesinado y la apertura del mercado interior para el capitalismo urbano.

Finalmente, es necesario considerar el papel de las Fuerzas Armadas en la implementación de las leyes agrarias, pues la pérdida de predominio hegemónico de Balaguer sobre el conjunto de las clases dominantes se evidencia en el recurso del régimen a las Fuerzas Armadas como sostén que políticamente apunta-

¹⁸ Véase a Del Castillo y Fernández (1974), más reciente Chaljub (2015).

lara la implementación de las leyes. Así, en 1972, en una parada militar, las Fuerzas Armadas le expresan la lealtad sin tachas al régimen y su irrestricto apoyo a las leyes agrarias aprobadas por el Congreso. Asimismo, en 1973, Balaguer nombra al frente del IAD al general Valdez Hilario, el cual fungiría como responsable directo de la implementación de los asentamientos campesinos y como tal de la ejecución de las leyes agrarias. Con estas disposiciones, cierto es, Balaguer mostraba en lo inmediato un ascendiente hegemónico sobre las Fuerzas Armadas. Pero, estratégicamente, al enfrentar al Ejército con aquellas capas del poder terrateniente en oposición a las leyes, abría una contradicción que hasta ese momento el bloque de dominación en su conjunto se cuidó de provocar: la posible colisión entre los mandos militares y el conjunto del bloque en el poder. Con ello la mecánica política del modelo de equilibrio tenso que caracterizó al bonapartismo dependiente abría una fisura en su lógica de funcionamiento político, pues dicha contradicción hacía peligrar su unidad al otorgar a las Fuerzas Armadas una capacidad directa de movimiento político respecto a las clases dominantes, de la cual, hasta ese momento, Balaguer era su exclusivo y casi único depositario. Evidentemente, a el largo plazo este le sustraía poder político al régimen. Un elemento menos evidente fueron las contradicciones que las leyes agrarias suscitaron en determinados mandos militares, los cuales tenían intereses terratenientes, contradicciones que hicieron surgir en su seno un significativo descontento respecto a Balaguer, al igual que posibilitaban una potencial alianza estratégica militar-terrateniente.

Contradicciones semejantes se plantearon en el seno de la élite burocrático-política reformista, las cuales restringían la capacidad de maniobra del régimen frente a los terratenientes. Las más evidentes fueron aquellas que se plantearon a nivel político entre la camarilla dirigente del Partido Reformista y los hombres del Movimiento Agrario Reformista (MAR). Este último, brazo político organizado por Balaguer para la movilización del apoyo campesino a las leyes agrarias. Es cierto que esto era expresión de la incapacidad organizativa del PR para servir

de organizador y movilizador de las clases campesinas, pero también pone al desnudo las oposiciones, abiertas o soterradas, de un importante sector de la dirigencia reformista al proceso de reformas en el campo¹⁹.

En tales condiciones el proyecto reformista de Balaguer en el campo fracasó, en parte por la oposición cerrada a las leyes agrarias tanto por parte de importantes sectores del bloque en el poder como de los partidos revolucionarios y populistas, pero sobre todo debido a las limitaciones de clase del bonapartismo dependiente que le restringía su capacidad de maniobra. Las reformas planteadas por Balaguer no pretendían revolucionar el campo al socavar las bases del latifundismo oligárquico. En el fondo, se perseguía una simple adaptación modernizante de sus estructuras a las exigencias de la industrialización dependiente. No pretendían destruir el poder oligárquico agrario, sino simplemente adaptarlo a las nuevas condiciones del desarrollo capitalista. Prueba de ello fue que la poca tierra que el Estado captó de los terratenientes no fue vía expropiaciones sin indemnización, sino a través de compras a muy buenos precios mediante bonos cambiables que afianzaron los lazos del capital financiero en las ciudades con los grupos terratenientes. En ese contexto, la coyuntura de las leyes agrarias en los años 1972-1974 mostró al desnudo la debilidad política de la industrialización dependiente: surgida en un contexto de atraso rural, la industrialización sustitutiva de importaciones no logró potenciar un proceso modernizador que aumentara la productividad en el agro. Por el contrario, ante el fracaso de las leyes agrarias, en gran medida la política alternativa del Estado fue la compra de granos en el extranjero, lo cual, al tiempo que desestimulaba la producción local, profundizaba los lazos de dependencia externa y drenaba excedentes hacia las inversiones improductivas que estratégicamente socavaban las posibilidades de expansión del aparato industrial y fortalecían a los grupos importadores locales.

¹⁹ Dore (1981).

El fracaso de las leyes agrarias mostró los límites de la capacidad de hegemonía del bonapartismo dependiente respecto al bloque de dominación y a las masas populares. También demostró que la llamada “burguesía nacional” emergente tenía muy poca conciencia ideológica de las necesarias tareas reformadoras que el proceso de desarrollo industrial implicaba, sobre todo en la esfera agraria, al tiempo que su temor por el fortalecimiento del Estado terminó ampliándoles la capacidad de maniobra a los tradicionales grupos hegemónicos (importadores, grandes comerciantes, terratenientes). Respecto a las clases campesinas, ante el real fracaso de las leyes agrarias en su aplicación, el bonapartismo dependiente perdió poco a poco su liderazgo y dichos grupos se inclinaron hacia la oposición política de izquierda o populista.

Más allá de los factores orgánicos arriba discutidos, cuya eficacia solo puede apreciarse a largo plazo, los elementos de la crisis del régimen reformista estuvieron condicionados por la situación internacional, específicamente por la redefinición de la estrategia norteamericana en el área del Caribe ante la nueva coyuntura mundial. En ese sentido, la nueva política de los derechos humanos inaugurada por el presidente Carter en 1976 en términos estratégicos tendía a restringirle capacidad de movimiento al balaguerismo y, en tal virtud, contribuía si no al socavamiento, por lo menos a la facilitación de la acción política a aquellos sectores burgueses en franca oposición con el régimen. En la coyuntura de finales de los setenta, en la perspectiva internacional los norteamericanos afianzaban una nueva estrategia geopolítica que chocaba en un plazo mediano con el esquema de dominación balaguerista, máxime si consideramos la importancia que para esta pasaría a jugar la República Dominicana en el área del Caribe, sobre todo en función del combate político que se debía librar ante el inminente triunfo de la revolución nicaragüense y el ascenso al poder del régimen socialdemócrata de Manley en Jamaica²⁰.

²⁰ Para la coyuntura regional véase a Maira (1982 y 1982b), quien brinda un panorama esclarecedor.

Desde luego, esto no supone que por necesidad mecánica Estados Unidos forzaría a que la situación política dominicana se moviera hacia un equilibrio de fuerzas favorable a su nueva estrategia en el área del caribe. Esto era viable en la medida en que en la situación interna se presentaran los factores de crisis arriba señalados y en que las clases dominadas estuvieran lo suficientemente controladas por parte del Estado como para mantener la estabilidad del dominio hegemónico sin necesidad de violencia y coerción política directas y recurrentes, en tanto la crisis del sistema capitalista a nivel mundial y su reflejo dominicano (crisis energética, caída de los precios del azúcar, inflación, etc.) exigiera la “modernización” de los aparatos políticos para paliar su catastrófica expresión económica.

En la coyuntura de 1978 el enfrentamiento de los grupos empresariales desafectos al régimen reformista se verificó en unas condiciones en que estos poseían la fuerza económica suficiente como para disputarle a los grupos balagueristas el control de los sectores de la economía donde operaban, pero sobre todo en que podían, al calor de la coyuntura internacional y su ascendiente hegemónico sobre el principal núcleo político opositor al régimen (el PRD), disputarle a los grupos balagueristas precisamente la hegemonía política. En ese sentido, la crisis se precipitó en un contexto social y político que permitía a la dominación burguesa un control tal de la sociedad civil que cualquier alternativa de cambio social o político que las clases subordinadas plantearan no cuestionaba la estabilidad del orden burgués.²¹

Ciertamente, la crisis se verificó cuando el Estado, en sus diversos aparatos e instituciones, dado el nivel de desarrollo capitalista alcanzado, o impulsado por el esquema balaguerista de dominación, exige de su modernización y, en consecuencia, de la eliminación o bloqueo de las políticas prebendarias y de corrupción propias del modelo balaguerista de equilibrio ten-

²¹ En realidad, el conjunto de la burguesía se sentía en capacidad de disputarle al balaguerismo la hegemonía política en el Estado, lo que cuestionaba las bases del bonapartismo.

so. No se trata en modo alguno de que la corrupción en el balaguerismo fuese simplemente un obstáculo al desarrollo del capitalismo, sino de que esta dificultaba la acumulación en los grupos burgueses que no participaban del control de los aparatos de Estado.

Estos conflictos y resquebrajamiento en el conjunto de fuerzas políticas y sociales que sostenían al régimen político debilitaron la capacidad del modelo balaguerista de dominación, lo cual le amplió los márgenes de movimiento al conjunto de las clases dominadas, pero fundamentalmente aumentó la capacidad de acción de aquellos sectores al interior del bloque en el poder, que ya presentaban conflictos con sus sectores hegemónicos.

Tanto la mayor capacidad de maniobra de los grupos burgueses enfrentados al régimen como el control del conflicto social en los términos de la legalidad burguesa permitió en la coyuntura de 1978 desmovilizar la acción reivindicativa de las masas populares y potenciar su acción política.

En este contexto de pérdida de legitimidad ante las masas campesinas y de ruptura o conflicto de las clases dominantes, es que interviene el PRD, a partir de cuya situación podemos explicar su triunfo electoral en 1978.

En medio de la crisis del reformismo, poco a poco el PRD se fue constituyendo en una opción de recambio del balaguerismo, sobre todo para aquellos sectores de las clases dominantes en abierto o virtual conflicto con el régimen. Para llegar a ocupar esa posición, el PRD tuvo que sufrir una profunda transformación interna en lo ideológico y en la composición de sus cuadros dirigentes, la cual lo fue alejando del radicalismo populista que lo caracterizó en los años posteriores a la revolución de 1965. Dicho radicalismo en cierto modo colocaba al PRD ante las clases dominantes como una opción antisistema que hacía peligrar su estabilidad. En 1973, un año antes de la segunda reelección de Balaguer, el PRD sufrió una división interna y de su seno salió Juan Bosch, su líder tradicional, quien funda el Partido de la Liberación dominicana (PLD). Con ello salía de la organización el

grupo cuyas posiciones ideológicas eran más cercanas a una propuesta doctrinaria de carácter socialista, o por lo menos abiertamente antiimperialista.²²

Con la salida de Bosch, emerge el liderazgo de Peña Gómez en el PRD y, con él, tras una hábil línea táctica, a través de una política de negociación con Washington y sectores de las clases dominantes, el PRD iría logrando desprenderse de su viejo ropaje filosocialista y antiimperialista. Peña Gómez articuló una estrategia política de acceso al gobierno que se desplazaba en dos frentes: 1) en lo internacional buscaría el apoyo de los sectores más liberales de Washington, aprovechando el compromiso de la administración demócrata con una línea política internacional de condena a los regímenes de fuerza en el área, la cual se sintetiza en la llamada “defensa de los derechos humanos”; 2) por otro lado, trataría de hacer alianzas con sectores de las clases dominantes locales en conflicto con el régimen balaguerista, moderó el radicalismo de sus políticas de oposición al régimen, de manera que las fuerzas armadas modificaran la imagen que tenían de la organización. Por medio de esta política, aun cuando el PRD de nuevo se abstuvo de participar en las elecciones de 1974 (en gran medida empujado por el tono represivo de la campaña electoral del balaguerismo que incluso movilizó abiertamente a las fuerzas armadas en la campaña, pero sobre todo debido a los conflictos internos y las debilidades organizativas planteadas por la salida de Bosch y su grupo del partido) para los norteamericanos y los sectores de las clases dominantes el PRD surgía como una opción de recambio políticos en los marcos del sistema²³.

La alianza que estrechó intereses de sectores de los grupos dominantes desafectos del régimen con el PRD quedó sellada con el triunfo del partido blanco (PRD) en 1978. Realmente, el PRD aportaba en esa alianza el necesario apoyo de masas requerido por los grupos dominantes para poder enfrentar al reformismo con alto grado de legitimación popular. Sin embargo, el precio que el PRD

²² Sobre el significado de la salida de Bosch del PRD y la fundación del PLD en la coyuntura de los años 1973-1978, véase a Vilas (1979) y Del Castillo (1981).

²³ Oviedo (1985).

pagaría por ello sería el de su gradual y creciente conversión en un partido, ciertamente de masas, de hecho, mero vehículo de la dominación burguesa, sobre todo en tanto expresión de la voluntad de poder político de aquellos sectores de la burguesía dominicana en conflicto con el régimen balaguerista.

En este último punto se unifican en un tinglado armónico los propósitos estratégicos de la administración norteamericana con la crisis del sistema político balaguerista. Así, en la coyuntura de 1978, Balaguer quedó aislado. En un momento de la crisis, su único apoyo quedó restringido a ciertas capas de comerciantes muy comprometidos con el régimen y a las capas dirigentes tradicionales del Ejército. Estos últimos poco podían hacer sin el apoyo que antes le prestaran las élites económicas en su conjunto, con la pérdida de hegemonía sobre el campesinado por parte del régimen y ante el claro propósito norteamericano de desplazamiento del balaguerismo del control del Estado.²⁴

En un primer momento, el apoyo que Balaguer logró suscitar por parte del Ejército, que le convirtió en un líder de gran importancia, incluso dentro de sus suboficiales, se encuentra estrechamente vinculado a la base campesina que inicialmente logró movilizar a partir del hecho de que el Ejército trujillista tenía como su fuente natural de reclutamiento el eje agrario²⁵. Sin embargo, si bien Balaguer heredó un Ejército tradicional, levantado sobre bases campesinas, que lo vinculaba a los atrasados sectores terratenientes, el proceso de modernización del Estado dominicano, que durante sus doce años de gobierno se verificó, afectó al propio Ejército no solo en su constitución y eficacia técnica, sino redefinió también las bases sociales sobre las que se levantaba²⁶. En primer lugar, Balaguer promovió

²⁴ Catrain y Oviedo (1981).

²⁵ El libro de Turits (2017) demuestra que inicialmente Trujillo no solo alcanzó amplia aceptación en el campesinado, apoyo que permaneció hasta los años cincuenta en que la dictadura entró en crisis, sino que dicho apoyo pasó a constituir un eje central de la legitimación del régimen político.

²⁶ Sobre el Ejército balaguerista y el papel de los militares en el régimen político, lo mejor sigue siendo el libro de Brian J. Bosch (2010). Debe también verse a Atkins (1987).

la movilidad económica de la alta oficialidad y de algunos sectores de los mandos medios, integrándolos, en términos socioeconómicos, a nuevos estratos sociales al desplazar, en gran medida, sus vínculos sociales y económicos del campo hacia la ciudad. De este modo, a la modernización técnica de la vieja oficialidad y su sustitución por una jerarquía militar mejor preparada, sucedió la modernización social y económica y la promoción de muchos de sus cuadros a verdaderos empresarios capitalistas, o integrándolos en una posición pequeñoburguesa modernizada a la vida y valores urbanos. En ese “desplazamiento” encontramos una de las claves que en 1978 dejó apreciar claramente el quiebre del apoyo militar a Balaguer. Dicha ruptura tiene a su vez dos expresiones básicas: a) tras los procesos aludidos, las bases fundamentales del Ejército continuaron teniendo una gran presencia campesina, sin embargo, poco a poco muchos de sus elementos fueron reclutándose de la pequeña burguesía urbana pauperizada que encontraba en el Ejército un efectivo mecanismo de movilidad social. Naturalmente, esto se vincula estrechamente a la crisis del agro iniciada en los años sesenta y al proceso migratorio a que dio lugar, el cual desplazó hacia las ciudades más de un millón de personas entre 1960 y 1970, unido al “destape” de la gran emigración hacia los Estados Unidos; b) en segundo lugar, debemos considerar un elemento de alcance político: tras el fracaso de la estrategia balaguerista en el campo y la ruptura de la armonía del bloque en el poder, se produjo un significativo conflicto entre las capas terratenientes y el gobierno, iniciado con las famosas leyes agrarias y el intento fallido de reforma agraria que Balaguer impulsó entre los años 1972-1974. Tras el conflicto agrario y la movilización campesina que estimuló, el quiebre del apoyo campesino al régimen alcanzó un notable relieve obligándolo incluso a crear su propio movimiento campesino, el Movimiento Agrario Reformista (MAR), a lo que se añade la acción en el mundo agrario del movimiento de izquierda²⁷. De

²⁷ Para una discusión de la acción de la izquierda en el movimiento campesino en esos años, véase a CEPAE (1982) y Portorreal Liriano (2010).

esa forma, se abrió un canal para que la ruptura entre parte de la base social campesina que sostenía al balaguerismo terminara afectando las filas de las instituciones militares en sus bases y la suboficialidad. El sector de la oficialidad promovido por el proceso de enriquecimiento que estimulaba el Estado en su política de equilibrio entre facciones militares y tenía intereses terratenientes terminó haciendo causa común con la oligarquía comercial y terrateniente e incluso con los grupos financieros. Este sector militar, y en general de la pequeña burguesía enriquecida tras la protección del régimen, ciertamente apoyó a Balaguer entre los años 1966-1974, pero ante los quiebres del equilibrio del bloque en el poder tendió a moverse en correspondencia con sus intereses de orden económico-corporativo más inmediato y no con la expresión política del régimen, que lideraba Balaguer. Este sector pequeñoburgués, si bien no desplazó inmediatamente su apoyo al balaguerismo hacia el PRD, asumió en muchos casos una postura de cierta expectación o neutralidad, que firmó su dependencia de los sectores mercantiles y financieros que se habían fortalecido en lo económico y alejado del régimen en lo político. Algo análogo ocurrió con la oficialidad media más joven del Ejército.

Vemos entonces que estas transformaciones y situación del Ejército como aparato de Estado no solo obedece a su modernización técnica, y al mayor control ideológico que sobre este pasó a ejercer el Pentágono, sino que se levanta un ordenamiento clasista de sus bases y cuerpo dirigencial en estrecha conjunción con los cambios socioeconómicos que se verificaron durante los años del régimen balaguerista. Así, la eficacia de la acción norteamericana en el control del Ejército en la coyuntura de mayo de 1978 no fue el resultado de un control mecánico de Washington sobre los mandos militares, sino que se posibilitó en estrecha conjunción con la serie de cambios sociales, económicos y políticos que en la sociedad se verificaban y a los cuales los hombres de armas no se podían sustraer.

De este modo, aislado de su base campesina, con profundas contradicciones en su seno, enfrentado a un PRD que había logrado desprenderse de su rostro radical, adoptando en su defecto una opción de legitimación populista del sistema, atractiva para

la burguesía y la Administración Carter en Washington, con una profunda incapacidad histórica de movilización política de los sectores populares urbanos y en medio de una crisis económica, el régimen balaguerista finalmente sería desplazado del poder por una alianza popular-democrática con firme apoyo de importantes sectores empresariales, que abriría un nuevo capítulo en la historia política dominicana.

Capítulo 6

POST SCRIPTUM: **REPENSANDO EL REFORMISMO, EL AUTORITARISMO Y LA DEMOCRACIA**

¡No esperéis más volver a ver el cielo:
vengo a llevaros a la opuesta riba,
a la eterna tiniebla, al fuego, al hielo!

DANTE ALIGHIERI
La Divina Comedia
(*Infierno*)

Como es natural, en *El reformismo dependiente* hay un conjunto de aspectos que apenas fueron insinuados en el análisis del régimen balaguerista que allí hice hace 34 años. El propio texto, a su vez, abre otras interrogantes de las inicialmente planteadas, dejando en la mesa de discusión un horizonte problemático que todavía hoy, en pleno siglo XXI, aguarda ser estudiado.

En este *Post scriptum* presento únicamente algunos aspectos que apenas se esbozaron en mi texto de 1985 o surgieron como asuntos nuevos, a la luz de los resultados que esa investigación produjo. En primer lugar, creo que en los estudios que hasta ahora se han realizado en torno al régimen balaguerista, el tema de la crisis de hegemonía que abrió el período postrujillista, que culminó en la guerra civil de 1965, continúa siendo un camino abierto. Se han publicado muchos artículos y algunos libros, incluidos los trabajos más sistemáticos hasta ahora producidos, pero la crisis de hegemonía de los años 1961-1965, a mi criterio, todavía hoy requiere más estudios y reflexiones¹.

¹ Entre la gama de estudios coyunturales sobre el período, cito algunos que asumen una reflexión general sobre la crisis política y en particular sobre la crisis hegemónica, aunque sin caracterizarla de la manera como la abordo. A mi criterio el estudio más sistemático sobre la guerra civil de 1965 sigue siendo el de Gleijeses (1978/2011). El libro de Harthlyn (2008) es un esfuerzo sistemático muy valioso para el estudio

Comprender la crisis de hegemonía postrujillista constituye un requisito esencial para el estudio del régimen balaguerista de los doce años, por la simple razón de que este fue la respuesta histórica a esa crisis.

En esa línea de argumentación, la cuestión militar constituye un aspecto central del estudio de la crisis hegemónica, pero también define un aspecto central del régimen balaguerista de los doce años. En *El reformismo dependiente* avanzo una serie de hipótesis, en mi ensayo de 2018² profundizo en el estudio de la cuestión militar, pero el debate continúa abierto. Es cierto que se han publicado muchos libros, sobre todo escritos por exoficiales de las Fuerzas Armadas o protagonistas de los acontecimientos más importantes de la vida militar, pero no articulan la problemática de la cuestión militar, como componente del sistema político o institución muy particular del Estado. Constituyen esfuerzos autobiográficos, narraciones de eventos importantes de la historia militar contemporánea, pero en modo alguno agotan la problemática militar, ni siquiera comienzan a articularla. Hay dos excepciones notables: los trabajos de Atkins y Brian J. Bosch³.

del proceso de construcción de la democracia. Los trabajos de Vilas (1973 y 1979) y Goff y Locker (1972) siguen siendo referencias necesarias. El trabajo de Cassá (1986) presenta uno de los esfuerzos de sistematización más rigurosos de la crisis política de los años 1961-1965. Vega ha publicado varios libros que son imprescindibles para comprender la crisis política de esos años (1991, 1999, 2004 y 2006). En varios de mis libros hago un esfuerzo por sistematizar una reflexión sobre la crisis política de esos años (2003 y 2013). Los autores norteamericanos han hecho importantes esfuerzos en el estudio del papel de los Estados Unidos en la política dominicana del período de crisis, como son los realizados por Lowenthal (1977), Draper (2016) y Slater (1976). Hay otros estudios que merecen citarse: Guerrero (1993) y Grimaldi (2000).

² Lozano (2018), p. 191 y ss.

³ Véase a Atkins (1987) y B. J. Bosch (2010). Mi crítica a ambos libros es su manejo complaciente de la injerencia norteamericana en la vida militar del país. Esto no constituye un alegato patriota ni mucho menos, aunque expresa claramente una inconformidad. Pero la mirada complaciente hacia los EE. UU. introduce un componente colonialista que empaña el análisis en general inteligente de ambos autores. Por ejemplo, en el caso de B.J. Bosch su idea de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas es a mi manera de ver ingenua o dueña de un inteligente cinismo. En el papel, los EE. UU. estaban preocupados por la institucionalidad de las Fuerzas Armadas dominicanas y sobre eso no hay discusión, pero el autor no advierte que las debilidades institucionales del cuerpo militar eran el producto concreto de un mo-

A partir de sus dos libros, la discusión académica sobre el tema militar adquiere un giro analítico. En el presente *Post scriptum* trato de reflexionar en particular este punto.

Otro asunto central de la discusión es la construcción de los actores sociopolíticos. Con todo y no contar todavía hoy con un estudio más o menos sistemático, la oligarquía dominicana es el grupo social sobre el que quizás se hayan realizado más estudios, aunque dispersos y en muchos casos concentrados en otros asuntos, de los cuales el análisis de los grupos oligárquicos constituye un tema derivado, residual⁴. El otro grupo social importante en el análisis del reformismo balaguerista está constituido por el campesinado. Hay muchos trabajos dispersos sobre el tema, la mayoría concentrados en el estudio del capitalismo agrario o el desarrollo rural, pero todos involucran a los campesinos. En la primera edición de *El reformismo dependiente* el tema campesino se rescata, pero no se desarrollan las implicaciones que tiene el lugar que los campesinos ocuparon en la articulación del régimen político que presidió Balaguer entre 1966 y 1978. Aunque no pretendo en este *Post scriptum* suplir esa carencia, en esta parte final de la segunda edición de mi estudio desarrollo algunas reflexiones que espero ayuden a apreciar mejor la importancia del campesinado en la dinámica política del régimen balaguerista, sobre todo si se asume su caracterización como un caso o situación bonapartista.

Esta última conceptualización empleada en la primera edición de 1985 de *El reformismo dependiente* es de vital importancia en la visión o perspectiva teórica que asumo. Aunque ya en mi artículo de 2018 recojo críticas hechas por Harthlyn y Faxas al manejo del concepto de bonapartismo en mi caracterización del régimen balaguerista, aquí amplío algunos elementos de mi respuesta a las contribuciones de esos académicos.

delo de equilibrios políticos que, al dividir los altos mandos en grupos y facciones, agrietaba la institucionalidad y de esto eran responsables no solo Balaguer y los militares, sino también los propios Estados Unidos.

⁴ Véase a Martín (1975), Juan Bosch (1961/2009a), Moya Pons (1989 y 1992) y Artiles (1982 y 1986).

Dos asuntos más incorporo en este *Post scriptum*. El primero se refiere al empresariado y el fracaso del proyecto industrializador por sustitución de importaciones. Para beneficio de las ciencias sociales dominicanas, Moya Pons ha hecho dos importantes estudios al respecto. Uno sobre la historia de la institución bancaria privada más antigua del país, el llamado Grupo Popular, en concreto el Banco Popular, y otro sobre la experiencia dominicana de industrialización y el comportamiento del empresariado⁵. No pretendo discutir aquí sus argumentos, simplemente me interesa recuperar una reflexión generalizadora: ¿Por qué fracasó la industrialización sustitutiva de importaciones tras el nuevo liderazgo exportador de los servicios que le sucedió? ¿Por qué el nuevo modelo exportador de servicios no incorporó y asignó un lugar al sector industrial en el esquema exportador de ascendiente neoliberal? La respuesta a estas y otras interrogantes pasa por el destino de la agricultura en el nuevo modelo neoliberal y la naturaleza social del empresariado industrial. Aquí simplemente plantearé algunas hipótesis sobre estos asuntos tan complejos⁶.

Finalmente, está el tema del lugar del reformismo en el proceso político democratizador y la dinámica del desarrollo. En lo adelante expongo mis argumentos sobre los asuntos planteados discutiendo primero el problema geopolítico y el condicionamiento del poder imperial en la conformación del régimen reformista. Analizo la crisis de hegemonía postrujillista para luego estudiar la cuestión del bonapartismo. En este último aspecto me detengo en la cuestión militar. A partir de ahí analizo el fracaso de la industrialización por sustitución de importaciones y, consecuentemente, incorporo la discusión sobre el lugar del campesinado en el proceso de desarrollo. En ese punto procedo a discutir los límites

⁵ Moya Pons (1989 y 1992). También debe verse el importante y hoy clásico estudio de Estrella (1971).

⁶ En varios trabajos he dialogado con el estudio de Moya Pons sobre la industrialización. En primer lugar, en mi libro sobre los trabajadores del capitalismo exportador (2004), donde, a propósito de la industrialización, hago observaciones críticas al enfoque del autor. En dos libros posteriores (2013 y 2018) extiendo mi análisis al universo empresarial. Remito al lector interesado a esos textos.

del reformismo dependiente como proyecto político, social y económico y por ello analizo someramente algunos puntos de la experiencia del gobierno de los diez años de Balaguer tras su regreso al poder (1986-1996). Concluyo con una reflexión muy general acerca del significado del reformismo dependiente en la historia política y social dominicana moderna.

6.1. Crisis de hegemonía y guerra civil

6.1.1. *La crisis de hegemonía postrujillista*

Comprender la crisis de hegemonía tras la muerte de Trujillo en 1961 exige una clara visión de la naturaleza del régimen trujillista que se derrumbaba. En general, en la literatura sociológica y politológica dominicana, la caída de la dictadura trujillista no se aprecia como desplome de un poder hegemónico, sino como caída de un régimen despótico. En realidad, esto no implica mayor contradicción en los enfoques, pero sí demanda de algunas precisiones. La principal dificultad es que la idea del desplome del poder despótico, al ser correcta en su evaluación de la crisis política e internacional del régimen trujillista, asigna un menor rango al análisis del agrietamiento de la economía y las dificultades para manejar el proceso de cambio social que el propio régimen estimulaba, como es el caso del desarrollo de la clase media en ciernes, la creciente urbanización y la crisis agraria que se asomaba⁷.

Los determinantes de la crisis del régimen trujillista se encuentran estrechamente conectados con los elementos específicos que cohesionaban la dictadura: la fuerza del Estado en el mundo campesino, el poder de persuasión y desmovilización del terror político y el carácter monopolista de la empresa económica trujillista, a lo que se agrega la geopolítica.

⁷ Vale decir: se insiste esencialmente en el derrumbe de los mecanismos coercitivos y de terror y no en los problemas del ordenamiento social entrado en crisis. Ese enfoque ha destacado sobre todo la dimensión política del derrumbe de la dictadura, pero ha subestimado los problemas del consenso autoritario que le permitió al régimen, entre otras cosas, la dominación del campesinado. Sobre esto último, véase a Turits (2013).

Hubo dos autores que vieron con cierta claridad las complejidades del régimen despótico trujillista en crisis. Me refiero a Juan Bosch y José Ramón Cordero Michel⁸. Por caminos distintos, ambos apreciaron que el régimen no podía definirse únicamente con base en el manejo del terror, se requería de su caracterización económica y sus impactos sociales. En su libro sobre Trujillo, Bosch indicó que quizás lo característico del régimen era la estrecha integración entre el despotismo del régimen político y el acentuado carácter personal del manejo de la economía por el dictador, donde este aparecía como el eje centralizador del proceso de desarrollo tanto en el campo industrial –sobre todo– como en el agrario y comercial⁹. Resultaba así una empresa vertical autoritariamente dirigida, un verdadero monopolio de toda una economía nacional. Cordero Michel precisó con mayor rigor el planteamiento de Bosch en una óptica claramente marxista¹⁰. Destacó el carácter monopolista de la empresa trujillista e indicó el predominio capitalista de dicha empresa y cómo esa característica determinó el carácter que asumía el Estado en esas condiciones. En *El reformismo dependiente* asumo el punto de vista de Cordero Michel.

Ambos autores destacaron aspectos que, tras la muerte de Trujillo, se confirmaron: el verticalismo de la empresa Trujillista no solo era eficaz en el manejo del control político, sino que tenía un rostro de Jano: por un lado concentró casi todo el poder económico en manos del Estado postrujillista y, por el otro, tras la muerte del dictador, la maquinaria del poder se desarticuló, dando lugar a una descarnada lucha entre los remanentes del régimen y lo que caracterizo como la alianza oligárquica en sus fracciones excluidas del poder dictatorial.

En el plano sociopolítico, la muerte del dictador desató fuerzas sociales emergentes, aceleró algunos procesos, como las migraciones internas y la urbanización consecuente, y potenció el despertar de movimientos sociales liderados por la clase media,

⁸ Véase a Bosch (1961/2009a) y Cordero Michel (1975).

⁹ Bosch (1961/2009a).

¹⁰ Cordero Michel, *op.cit.*

que condujeron a la organización corporativa de importantes núcleos profesionales (médicos, ingenieros, abogados, maestros y estudiantes universitarios y otros). En los estratos populares fue la incipiente clase obrera la que logró un mayor potencial de organización, sobre todo en el mundo azucarero, entre los obreros portuarios y los trabajadores de mayor especialización, como los concentrados en el sector energético y las comunicaciones.

De ahí que el conflicto central que se desata tras la muerte de Trujillo en 1961 produjera una incruenta lucha por el control de las empresas del Estado entre las fracciones oligárquicas que heredaban el poder político posdictatorial y los estamentos trujillistas que controlaban los aparatos de Estado (de hecho, la burocracia trujillista, un sector del liderazgo militar y el grupo liderado por Balaguer). Pero esa lucha se verificaba en un nuevo contexto donde nuevos actores hacían su aparición. En primer lugar, se activaba la emergente clase media y los grupos populares asumían por primera vez un inusitado dinamismo participativo. A su vez, nuevos actores no vinculados a la tradición oligárquica relegada por la dictadura, pero tampoco al aparato trujillista, pasaban a constituirse en actores políticos. Me refiero al PRD bajo el liderazgo de Bosch y una izquierda con un fuerte componente nacionalista y antiimperialista en su discurso, liderada por Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo) en el Movimiento Revolucionario 14 de junio. A esta situación se añadía un tercer elemento: la continuidad del poder militar y la cohesión paralela del poder económico oligárquico en torno a su fracción importadora.

Los dos últimos aspectos (la fuerza del movimiento popular y el predominio importador en el modelo económico que se abría paso) eran nuevos. El primero implicaba un cambio de dirección en las relaciones entre Estado y sociedad, donde ahora la sociedad definía capacidades inéditas de presión sobre el Estado. El segundo suponía el desarrollo de una nueva voluntad de control del Estado no derivada del poder militar o de la camarilla que heredaba el poder de la dictadura, sino del grupo o sector de las clases dominantes excluido del modelo político-económico propio de la dictadura, me refiero a la oligarquía.

De esta forma, la crisis hegemónica se produjo precisamente cuando, tras el quiebre de la dictadura, ninguna de las fuerzas políticas –ni las que operaron al interior de la dictadura ni las excluidas del modelo político que se derrumbaba ni las nuevas fuerzas emergentes– mostraron capacidad para responder a los elementos que definieron la crisis, aun cuando no se trata de que no hubo respuestas, sino de que las que se produjeron no fueron precisamente eficaces para poder recomponer la unidad del aparato de Estado, de cara a un nuevo esquema de relaciones de fuerza y desarrollo económico estables. De ahí que los elementos de la crisis muestran sobre todo una gran incapacidad para asegurar la estabilidad política, principalmente para lograr la unidad del Ejército. Pero no es menos importante el fracaso de la política económica de predominio importador, que envolvió al país en el período 1962-1965 en una espiral de déficits de balanza de pagos y crisis fiscal permanente. Finalmente, se revela una gran incapacidad de articulación de una estrategia de hegemonía frente al movimiento popular

La prueba de fuego del fracaso oligárquico, como alternativa hegemónica al trujillismo, fue la derrota de su candidato Viriato Fiallo frente a Juan Bosch y con él la llegada al poder de un movimiento democrático heterogéneo, pero de factura liberal, como era el PRD. La práctica de gobierno de Bosch, sin plantear una ruptura con el orden capitalista, formuló al menos tres líneas de acción que cuestionaban la estrategia oligárquica de control del Estado e introducían dificultades al dominio geopolítico norteamericano en el país, atrapado en la dogmática de la guerra fría, vale decir, envuelto en el anticomunismo doctrinal y el miedo a la Cuba fidelista. Estos tres asuntos fueron: a) el mantenimiento de las empresas trujillistas en manos del Estado, b) las mínimas reformas sociales que Bosch se proponía impulsar y c) las libertades democráticas que permitían la acción política institucional de las izquierdas y el movimiento democrático.

De nuevo se aprecia cómo los dos primeros puntos atacaban en la base el proyecto de hegemonía oligárquica, mientras que el último le dificultaba a la administración norteamericana su política de bloqueo y aislamiento político de Cuba. Pero los tres puntos en su conjunto implicaban el cuestionamiento del proyecto hege-

mónico oligárquico. Visto así, el gobierno de Bosch expresó en el plano de la hegemonía exactamente los problemas inversos que enfrentó el proyecto oligárquico: incapacidad de articulación de un equilibrio de compromisos realistas con los sectores oligárquicos, los militares y Estados Unidos.

Esto se aprecia en diversos niveles: en primer lugar, en esa primera experiencia de gobierno democrático hubo un choque de trenes entre el proyecto oligárquico de control de las empresas estatales y la propuesta de Bosch de emplear el Estado para la reforma social. Ello no era el producto de la terquedad del presidente, tras su férrea personalidad, sino la consecuencia de la naturaleza de su proyecto político liberal. Aquí colidían el liberalismo boschista con la visión autoritaria de las oligarquías. A esto se añade que el liberalismo doctrinal del proyecto de Bosch producía dificultades de orden político e ideológico a Washington en su política de bloqueo a Cuba, como ya indiqué.

De modo que con su triunfo electoral en 1962 Juan Bosch expresó el claro papel del conflicto hegemónico y la debilidad oligárquica de controlar al actor popular por parte de lo que he denominado la alianza oligárquica, poniendo también en claro la ausencia de mediaciones que permitieran articular un acuerdo o compromiso entre el campo democrático y la oligarquía conservadora. El golpe militar contra Bosch en septiembre de 1963 no fue simplemente el producto de la subjetividad del presidente y la frenética rabia anti-comunista de la oligarquía; fue sobre todo el producto del choque entre el proyecto oligárquico, la propuesta democrática y el ejercicio de la hegemonía geopolítica norteamericana en la región del Caribe.

A lo largo de la crisis de la primera parte de los sesenta, el poder militar es la única constante en el control del Estado, pero también constituye la expresión organizada e institucional del autoritarismo, como forma de dominio y poder político. Esa presencia, además, tiene la peculiaridad de que, junto al autoritarismo, conjuga dos asuntos que serán ejes del ordenamiento que asumirá el Estado tras la revolución constitucionalista de 1965 y el ascenso de Balaguer al poder: me refiero al faccionalismo de sus élites y al manejo neopatrimonial del Estado. De esta forma, en ese contex-

to los militares constituyen el mecanismo institucional que define la continuidad del autoritarismo político, pero también muestran la incapacidad política de quienes controlaban el Estado para construir un esquema de orden alternativo al trujillismo. En ese escenario es que el poder de los Estados Unidos pasa a constituir un componente central de la unidad del Estado y junto a este la geopolítica anticomunista asume un carácter orgánico al discurso autoritario del poder¹¹.

6.1.2. *La guerra civil y la intervención militar extranjera*

La insurrección de abril de 1965 fue el producto directo del fracaso oligárquico y militar para sostener a su propio gobierno, el llamado Triunvirato, que de hecho no era tal, ya que en ese momento Donald Reid Cabral era su único “jefe”¹². El indicador claro de dicha incapacidad fue la conspiración Enriquillo que no solo dio pie al estallido que devino revuelta armada y popular, sino que aglutinó a una gran parte de las facciones militares descontentas con el Triunvirato. La conspiración, sin embargo, expresaba algo más. Por lo pronto, indicaba la agudización del faccionalismo militar, a lo que se añade otro hecho menos claro: los propios Estados Unidos, o bien desconocían la conspiración en sus propósitos o, si la conocían, no hicieron nada para detenerla o simplemente la dejaron pasar por apreciarla quizás de improbable éxito¹³.

¹¹ No debe olvidarse que en la guerra fría la dictadura trujillista había asumido el discurso anticomunista como parte de la retórica del poder, definiendo un pilar importante en las relaciones del dictador con los Estados Unidos. Para el análisis de las relaciones internacionales de la dictadura trujillista véase a Capdevila (2000).

¹² El otro triunviro era Manuel Cáceres Troncoso, quien no tenía en esas circunstancias ningún poder en el aparato de gobierno.

¹³ Los errores de la embajada norteamericana en la apreciación de la naturaleza del conflicto armado entre los días 24 y 26 están magistralmente analizados por Gleijeses (1978/2011). Aunque el autor asume que los norteamericanos desconocían la conspiración Enriquillo, la verdad es que en el clima de la época, donde todo el mundo sabía de la división entre los militares y las permanentes conspiraciones, era muy difícil que los organismos de inteligencia norteamericanos (sobre todo la CIA) no estuvieran enterados de la conspiración. Posiblemente ocurrió que subestimaron su alcance, a partir de una estrecha visión de la sociedad dominicana y de la naturaleza de la lucha política en el país.

Muy posiblemente los norteamericanos no aquilataron que el grupo de oficiales envueltos en la conspiración no representaban al militar tradicional de las luchas internas por el poder. Ese grupo planteaba el regreso de Bosch al poder y el rescate de la Constitución de 1963, vale decir: planteaban, por un lado, un argumento moral (restaurar el gobierno legítimo de Bosch) y por otro, defendían una propuesta política democrática y reformadora (la Constitución de 1963), lo cual podía indicar, entre otras cosas, que entre los militares que heredaron el poder tras la caída de la dictadura trujillista, había un germen democratizador y que en realidad el derrocamiento de Bosch en 1963 no tuvo un apoyo compacto de todo el Ejército¹⁴.

No es mi intención reconstruir los hechos de la Revolución de Abril de 1965, para ello contamos con formidables análisis, como los de Gleijeses y Cassá¹⁵. Simplemente deseo destacar varios asuntos. La conspiración Enriquillo fue descubierta unos días antes del día planeado para el golpe, lo cual obligó a “acelerar los acontecimientos”. Por ello cuando el general Rivera Cuesta fue a exigir cuentas a las oficinas del Estado Mayor del Ejército, en vez de arrestar a los presuntos conspiradores que allí tenían su asentamiento, fue hecho prisionero por ellos. En esas condiciones, el capitán Peña Taveras llamó por teléfono a Peña Gómez, líder perredeísta quien, a su vez, en su programa radial “Tribuna Democrática” convocó a las masas a respaldar a los militares que estaban dando el golpe. Puede decirse que de inmediato estas se lanzaron a las calles. A diferencia de otros cuartelazos militares latinoamericanos, este hecho indica que por un accidente las masas fueron involucradas en el proceso conspirativo desde el momento en que fue develado. Es cierto que esa noche todo el mundo se recluyó en sus casas. Pero la acción conspirativa ya había pasado a otro plano. Es importante destacar dos cosas: esa noche, cuando el presidente del Triunvirato Donald Reid Cabral habló ante las cámaras

¹⁴ El autor que conozco que más se aproxima a esta idea es Gleijeses (1978/2011, que a mi juicio es el conocedor más profundo de esa coyuntura. En lo adelante la reflexión que presento se apoya fundamentalmente en su libro, específicamente en la edición de 2011, cuyo nuevo título es *La esperanza desgarrada*.

¹⁵ Véase a Gleijeses (1978/2011), Slater (1976), Cassá (2086).

televisivas, llamando al Campamento 16 de Agosto a rendirse, en realidad no estaba seguro de la situación a la que se enfrentaba: la propia embajada norteamericana estaba sorprendida con la situación que se desarrollaba, pero fueron los militares que intentaban regresar a Bosch al poder los únicos que estuvieron en acción. En la madrugada del 25 los militares rebeldes salieron a las calles y no encontraron resistencia, tomaron el Palacio Presidencial y no hubo mayor asomo de oposición; fue así como, en la práctica, sin que nadie lo anunciara, el Triunvirato cayó¹⁶.

En ese punto del proceso ocurrieron dos asuntos. Primero, los militares opuestos a Bosch y concentrados en la base Aérea de San Isidro, y en particular en el CEFA, bajo el mando de Wessin y Wessin, contactaron a los rebeldes y plantearon la idea de una Junta Militar. Una parte de los rebeldes conversó con ellos y no cerró esa posibilidad. Pero, en esas condiciones, los rebeldes dieron otro paso: establecieron un gobierno provisional y por ello los miembros del Congreso que pudieron reunirse procedieron a nombrar a Molina Ureña como presidente provisional. Esto prácticamente era un ultimátum a los militares de San Isidro que habían planteado la Junta Militar. Con ese paso se cerraba en la práctica la posibilidad de una Junta Militar integrada por las dos facciones militares¹⁷.

A esas alturas los rebeldes conversaron con la embajada norteamericana, luego lo hizo el presidente provisional Molina Ureña, pero encontraron un frío rechazo. A partir de ese punto, el proceso dio un giro. De un lado la gente de Wessin y Wessin tomó la iniciativa de movilizar sus tanques hacia Santo Domingo, pero los rebeldes, en la práctica, en parte tomaron la iniciativa y, en parte, al ser sobrepasados por los acontecimientos, procedieron a incorporar y armar a la población civil. Se estaba en una situación de guerra civil.

Lo que ocurrió inmediatamente después fue una especie de desconcierto político. Los dirigentes del PRD se asilaron en diversas

¹⁶ El propio Donald Reid fue atrapado en el palacio y solo la indulgencia de los rebeldes le salvó la vida. Para la reconstrucción de los hechos, véase a Gleijeses (1978/2011) y Jorge Blanco (2003).

¹⁷ Gleijeses (1978/2011) aclara muy bien estos hechos.

embajadas y algunos oficiales rebeldes decidieron abandonar la empresa. En ese contexto los líderes del PRD y los líderes militares, incluidos Caamaño y Montes Arache, conversan nuevamente con los norteamericanos. Estos reiteran su rechazo al golpe, muchos líderes civiles deciden asilarse en varias embajadas, entre ellos Molina Ureña, pero Caamaño y Montes Arache, en vez de abandonar la lucha, deciden ir al Puente a enfrentar a Wessin y Wessin y sus tanques.

En ese momento el proceso da otro giro. Caamaño asume el mando militar y las bases del PRD y los militantes del IJ4 deciden incorporarse a la resistencia en el Puente Duarte. La Batalla dura dos días (26 y 27) y al final los tanques de Wessin y Wessin y su infantería, ante la resistencia encontrada, deciden retirarse. A partir de ese momento el Ejército tradicional entra en crisis. Sus mandos militares no saben qué hacer y es cuando Bartolomé Benoit reitera a los Estados Unidos su pedido formal de intervención¹⁸.

Pero sobre todo la decisión de ocupación se produce a raíz del convencimiento americano de que el Ejército ha sido derrotado por las tropas rebeldes. Antes de eso los norteamericanos primero menospreciaron a los rebeldes constitucionalistas y los regañaron como niños. Luego, cuando se hizo evidente la incapacidad militar del Ejército, pensaron en la posibilidad de una Junta Militar y solo mucho después se convencieron de la incapacidad de Wessin y Wessin y la gente de San Isidro para controlar la revuelta. En el ínterin el conflicto militar se convirtió en una guerra civil y el Ejército oficial fue derrotado en el Puente Duarte. A partir de ese momento se toma en serio la decisión de intervención, aunque ya desde el 25 de abril se manejaba la posibilidad de desembarcar los marines, primero para salvar vidas de civiles norteamericanos y luego para impedir que los comunistas se apropiaran del poder.

Sin adentrarnos en la complejidad de esta situación, lo primero que se hace claro es que a los norteamericanos les sorprendió la insurrección y no pudieron imaginar que esta podría devenir en una verdadera guerra civil de resultados inciertos. Menospreciaron a los militares constitucionalistas y al pueblo dominicano

¹⁸ La descripción de estos hechos realizada por Gleijeses (2011) es excelente.

en su capacidad de movilizarse en la defensa de la Constitución de 1963 y el regreso de Bosch. Es claro que tenían –por decirlo de alguna manera– una venda ideológica que impidió ver que la revuelta era un auténtico reclamo democrático. Esa ceguera ideológica no la definía solo su anticomunismo y gran preocupación por Cuba y la posibilidad de que en Santo Domingo se produjera un nuevo caso de insurrección exitosa tipo Cuba. Esta estaba definida también por una visión colonial de los países que, como República Dominicana, se encontraban en la esfera de su influencia geopolítica.

La incertidumbre de la decisión de ocupar militarmente la República Dominicana no duró mucho. Entre el 24 de abril, fecha de la insurrección, y el 27, donde se producen los primeros desembarcos, transcurrieron apenas tres días, cuatro, si consideramos que el desembarco en masa de los marines se produjo el 28.

Por la información que han ido reuniendo investigadores como Vega y Gleijeses, la incertidumbre de la decisión estaba en la dura realidad a la que se enfrentó Washington, respecto al Ejército dominicano tutelado colonialmente. La derrota de ese Ejército de alguna manera era también una derrota para los Estados Unidos, no solo un peligro de producción de una nueva Cuba. La democracia que los norteamericanos creían viable para pueblos como el dominicano era una democracia tutelada y los constitucionalistas con la lucha por el regreso de Bosch y la vuelta a la Constitución de 1963, exigían exactamente un modelo contrario: la autodeterminación, el respeto a los derechos del pueblo a decidir su vida y la construcción de su propia historia.

Fue esto lo que se resumió con el triunfo militar constitucionalista en la batalla del Puente Duarte. Washington se quiso luego convencer con frágiles argumentos del peso comunista en la revuelta, pero cualquier analista serio rápidamente advertía que era un ardid, un simple argumento justificador de una decisión arbitraria, por el hecho de que una nación estaba asumiendo su

destino propio, sin tutela¹⁹. La ideología de la guerra fría no solo estaba articulada con la consigna de la lucha contra el comunismo, sino por la convicción norteamericana de que los pueblos subdesarrollados, en particular los latinoamericanos y caribeños, requerían una democracia tutelada, dirigida por las élites educadas en Estados Unidos y Europa y defendida por ejércitos controlados por generales de poca educación y de mano dura.

6.1.3. *Cómo se soluciona una crisis*

La discusión acerca de la revolución constitucionalista de 1965 tiene pertinencia para el análisis del origen del régimen balaguerista de los doce años. La recupero aquí por una simple razón: en algún momento del desarrollo de la crisis de abril, la figura de Balaguer surgió como posibilidad política a los ojos de Washington en el camino por encontrar solución al conflicto. Asimismo, esa discusión es importante en el debate poco desarrollado en el país en torno al proceso que finalmente condujo a los Estados Unidos a apoyar a Balaguer en las elecciones de 1966 y de ahí a sostener su gobierno²⁰. De esta forma, fue en el clima de crisis que acabo de describir que el subsecretario Mann hizo la afirmación al presidente Johnson de que las circunstancias exigían el regreso a República Dominicana de Joaquín Balaguer²¹.

¹⁹ El libro de Draper (2016) es importante en la crítica de la intelectualidad norteamericana a la invasión a Santo Domingo. El estudio de Vega (2006) es el libro más moderno que refuta convincentemente el argumento de la presencia comunista en la dirección de la revolución constitucionalista. En general, la literatura norteamericana especializada rechaza ciertamente la idea del peso comunista en la insurrección, no solo la liberal (Lowenthal, 1977), sino también la propiamente de izquierda (Gleijeses, 2011).

²⁰ Ha sido Bernardo Vega quien ha abordado el tema de manera sistemática en su libro *Cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder en 1966* (2004).

²¹ La idea del regreso de Balaguer la planteó Thomas Mann a Johnson el 26 de abril en la mañana (9.35 a. m.), como refiere Gleijeses (2011: p. 409): Mann le dijo al presidente: “el hombre que tiene que regresar, pienso yo, es Balaguer”. La información la toma Gleijeses de Recording of Telcon (Johnson y Mann), 26 de abril 1965, 9.35 a. m., Tape E65.10 (side B, PNO 3), Recording and Transcript, LBJL. La afirmación de Mann era en realidad la conclusión de un razonamiento que derivaba de su convicción de que las tropas de San Isidro, los hombres de Wesssin en particular, habían fracasado y había que pasar a otra fase. Como se puede ver, el nombre de Balaguer

Sin embargo, en el proceso negociador entre los norteamericanos y el gobierno de Caamaño, la figura de Balaguer en ningún momento fue manejada, aunque en diversos momentos en la esfera interna norteamericana en varias ocasiones su nombre surgiera. Podría decirse que en parte esto se debe a la naturaleza de la negociación que no integró a ningún representante del Gobierno de Reconstrucción Nacional (un gobierno títere armado por los Estados Unidos) ni tampoco a ninguna fuerza política “conservadora”. De hecho, la primera negociación fue directa entre McGeorge Bundy, Juan Bosch y Antonio Guzmán. Esa negociación primero giró en torno al nombre de Antonio Guzmán del PRD, es decir, giró alrededor de una solución “liberal” y constitucional sin la figura de Bosch. Luego del fracaso de esa negociación, el debate se hizo con mayor presencia negociadora de la OEA, pero en manos norteamericanas, bajo el liderazgo del embajador Ellsworth Bunker. Esa segunda negociación se propuso encontrar un nombre “independiente” que terminó siendo García Godoy. Pero las dos negociaciones asumieron claramente que se trataba de armar un gobierno provisional que preparara unas elecciones “libres”²².

Bernardo Vega ha sostenido que desde el principio de la crisis de 1965 los norteamericanos vieron en Balaguer su opción para encabezar un gobierno alternativo al disuelto Triunvirato que superara la crisis de la guerra civil. En su libro *Cómo los norteamericanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder en 1966* (2004), Vega trata de desarrollar esa tesis apoyándose en documentos desclasificados del Departamento de Estado, la Casa Blanca y la CIA. Vega aporta mucha información que muestra el manejo del nombre de Balaguer por los norteamericanos, sus contactos y conversaciones durante un largo tiempo, que muestran la insistencia de

comienza a ser contemplado por Mann tras fracasarle a los norteamericanos su idea (y esperanza) de que las tropas “leales” podían enfrentar con éxito a los “rebeldes” (constitucionalistas), o lo que es lo mismo: si eso se hubiese producido, hombres como Mann probablemente nunca hubiesen pensado en Balaguer.

²² Para el conocimiento del gobierno provisional de Héctor García Godoy lo mejor es Hamlet Hermann (2009): *Eslabón perdido. Gobierno Provisional 1965-1966*, Editora Búho, Santo Domingo.

sectores del Departamento de Estado, encabezados por su ala más conservadora, donde destacaba el subsecretario para América Latina Thomas Mann, en su visión de que Balaguer era el hombre que los norteamericanos debían convocar.

En realidad, la argumentación de Vega demuestra que el apoyo norteamericano a la “solución Balaguer” no constituyó una premisa, sino un producto de la maduración de la posición que el Departamento de Estado y la Casa Blanca fueron definiendo a lo largo del conflicto, a propósito no solo del freno y derrota de los constitucionalistas, sino principalmente a partir de las negociaciones con los “rebeldes”, sobre todo con el sector liberal encabezado por el PRD. La pista principal para sostener el argumento de Vega es la posición del subsecretario Mann respecto a la figura de Balaguer al principio de la crisis dominicana de que Balaguer era el hombre que se necesitaba, como se aprecia en las notas 314 y 318.

La declaración de Mann al presidente Johnson está documentada y revela claramente la preferencia del subsecretario para América Latina por Balaguer en la solución de la crisis dominicana, como vimos. De esto no hay duda alguna. Pero el análisis histórico debe distinguir claramente entre la información, el dato histórico que a partir de esta se produce y lo que constituye la explicación histórica. El punto, en consecuencia, es reconstruir el proceso mediante el cual declaraciones como las de Thomas Mann formaban parte de una política o terminaron siendo el eje de una política.

Sostengo que los norteamericanos *llegaron* a esa posición de apoyo a Balaguer como solución de la crisis, no *partieron* de ella. Y esto es el producto de varios asuntos débilmente tratados por Vega: a) en primer lugar, la dinámica del conflicto armado, que condujo a la intervención y llevó a los norteamericanos, primero a imponer la derrota militar a los constitucionalistas, tras la llamada “operación limpieza” y el cerco a la zona colonial y barrios colindantes (la zona constitucionalista); b) una vez establecida la zona constitucionalista, que de hecho fue una zona de cercamiento, los norteamericanos no pudieron encontrar una figura alternativa surgida de los grupos oligárquicos o del sector más conservador del PRD,

que encabezara un gobierno de transición²³. c) En ese marco, para los norteamericanos pronto se pasó a separar en la fórmula de la transición lo que debía ser un gobierno de transición encabezado por una figura “neutral”, que no aspirara a la permanencia en el poder, y las candidaturas que podrían surgir de las elecciones que sucedieran al gobierno de transición, y d) la necesidad de encontrar un candidato conservador que tuviera experiencia de mando, capacidad de penetración en las masas campesinas y contactos con los mandos militares²⁴. Solo en esta última fase, Balaguer surgió como la figura que debía ser apoyada por los Estados Unidos²⁵.

El libro de Vega sí deja claro que los norteamericanos desde el principio rechazaron la figura de Bosch, nunca vieron como una solución de compromiso a largo plazo figuras como Antonio Guz-

²³ Como está claramente establecido, la fórmula Guzmán no logró cuajar y finalmente fue abandonada. En el fracaso de esa opción lo determinante en lo aparente fueron las dudas del negociador norteamericano, McGeorge Bundy, pero en realidad ese fracaso fue el resultado de la visión ideológica norteamericana hacia todo lo que oliera a democratismo liberal y la excusa se la dio Guzmán al negarse, al igual que el gobierno de Bosch, a una persecución de las izquierdas, rechazando deportar a los izquierdistas o concentrarlos en zonas de aislamiento y vigilancia. Para el análisis de las negociaciones entre los norteamericanos y los constitucionalistas hay acumulada una literatura cuyos textos básicos deben verse: Gleijeses (1978/2011), Slater (1975), Draper (2016), Jorge Blanco (2003) Grimaldi (2000), Vega (2006).

²⁴ Para dilucidar esto último, debe verse los libros de Atkins (1987) y B. J. Bosch (2010) y los dos libros de Vega que tratan estos asuntos (2004 y 2006). El manejo de las negociaciones en sus detalles se aprecia en Jorge Blanco (2003), Cury/Balcácer (2018) y Slater (1975), con la ventaja de que proporcionan los puntos de vista que se debatieron en las reuniones de la comisión negociadora: el constitucionalista con predominio liberal que lideraban Bosch y Caamaño y el de los norteamericanos, cuyos “encargados” en la mesa negociadora fueron la OEA y las tropas de intervención, bajo el liderazgo de Bunker.

²⁵ La información reunida por Vega (2004) permite sugerir que, además de Mann, la propia CIA veía con buenos ojos a Balaguer, al tiempo que ordenaron encuestas, las que ciertamente afirmaban que Balaguer tenía amplia simpatía en el electorado, sobre todo entre los residentes en las áreas rurales, los campesinos. Muy posiblemente este hecho permitió a los analistas norteamericanos asumir que, a diferencia de otras personalidades políticas igualmente conservadoras, como Rafael F. Bonnelly, Balaguer tenía respaldo de masas, que era lo que le sobraba a Bosch y ninguno de los líderes oligarcas tenía. Aunque fuera por esa simple razón, Balaguer podía pasar a resolver un problema muy importante: el nuevo gobierno que surgiera de las elecciones de 1966 no solo debía estar alineado con los Estados Unidos, sino también tener cierto respaldo de masas. Balaguer tenía todo eso. Podría decirse que los norteamericanos aprendieron rápido.

mán y nunca confiaron en la vuelta al poder del PRD. Asimismo, asumieron siempre la idea de que cualquiera que fuera la solución encontrada había que distinguir entre el gobierno de transición y quien lo encabezara y la figura que en las nuevas elecciones debía encabezar la boleta que se opusiera a Bosch y al PRD. Esa distinción se encontraba, a su vez, conectada al convencimiento de que esa nueva figura debía ganar la confianza de los militares y de la propia oligarquía. Si así se ven las cosas, la solución Balaguer nunca estuvo claramente definida desde el principio de la crisis, a ella los norteamericanos “fueron llegando” con la maduración de las negociaciones y el convencimiento de la Casa Blanca de que había que rechazar el regreso inmediato de la oligarquía al poder, al igual que la posibilidad del regreso de Bosch como líder popular. Todo esto nos indica que de alguna manera los propios norteamericanos fueron diseñando una opción de corte bonapartista, como fórmula política para resolver la crisis.

La línea de argumentación que planteo conduce a la introducción de una hipótesis que hasta ahora no he visto formulada entre los especialistas. Lo que he definido como “solución bonapartista” no estuvo solo en la cabeza de Balaguer. De alguna manera se fue articulando como una solución negociada por los propios norteamericanos que muy posiblemente apreciaron temprano que la fórmula a la que se llegara no podía simplemente resolver el conflicto político-militar inmediato de la guerra de abril, sino que debía encontrar un “mecanismo” de conciliación entre las Fuerzas Armadas y los grupos dominantes del país, pero producirla con apoyo popular y de masas y esto último lo aportaba el campesinado. Independientemente del genio de Balaguer en la política vernácula, según mi hipótesis, su figura aportó el entendimiento de que lo que se buscaba no era solo esa solución negociada, sino también equilibradora de los intereses militares, el empresariado y los norteamericanos.

El conflicto no se resolvía solo con la derrota militar de los constitucionalistas y los militares liderados por Caamaño, exigía encontrar un compromiso con la tradicional oligarquía y los grupos políticos conservadores, al tiempo que imponía la reconstruc-

ción de las Fuerzas Armadas tradicionales que habían quedado fragmentadas tras la insurrección del 24 de abril. Esto último implicaba al menos dos asuntos: disolver el Ejército constitucionalista y al mismo tiempo unificar los mandos militares tradicionales, como el Ejército “legítimo”. En esta fase negociadora los norteamericanos no podían prever –y no previeron– el alcance del faccionalismo militar, y estoy seguro tampoco apreciaron el alcance de esta realidad, como un componente del modelo bonapartista que Balaguer impulsaría. Lograron, sí, contener a los grupos oligárquicos e imponerles de alguna manera su sumisión al compromiso con la facción balaguerista, como fórmula para frenar a Bosch y a los grupos democrático-liberales y a la propia izquierda.

El bonapartismo balaguerista no fue entonces únicamente el aporte de la “fracción balaguerista”, sino la solución negociada al conflicto de abril de 1965, desde la perspectiva de las clases dominantes y de acuerdo con los intereses norteamericanos. Pero no debe olvidarse que fueron estos últimos los articuladores del acuerdo para la firma del Acta de Conciliación de 1966 que dio fin al conflicto de abril de 1965.

En una perspectiva más amplia, Balaguer aportó el mecanismo específico de armar el posterior compromiso al acuerdo formal que dio fin al conflicto armado, en correspondencia con el nuevo régimen que se deseaba articular, puesto que él no fue parte constitutiva de las fuerzas que negociaron el fin de la revolución constitucionalista. Pero no debe olvidarse que, tras los resultados de las elecciones de 1966, la articulación del nuevo régimen que se constituía en su expresión bonapartista sí estaba relacionado con el papel que al final del régimen trujillista y durante la crisis del postrujillismo desempeñó Balaguer, por lo menos respecto a los mandos militares, la burocracia política del régimen dictatorial disuelto e importantes núcleos campesinos.

El argumento planteado conduce a reconocer dos niveles de acuerdos y compromisos. El primero fue el acuerdo que definió un compromiso formal para finalizar el conflicto armado de 1965, donde, como he indicado arriba, los negociadores reales fueron dos: los norteamericanos y el gobierno de Caamaño. Derivados de

ese acuerdo²⁶, que casi de inmediato fue violado, el Ejército constitucionalista fue disuelto, dispersados y perseguidos sus cuadros dirigentes y dio pie a una cadena de asesinatos prácticamente durante todo el primer año de gobierno del régimen balaguerista. Otra interpretación política debe darse a la permanencia de la persecución, el asesinato de dirigentes de la izquierda y del PRD, que se prolongaron con sus alzas y bajas a lo largo de los doce años, pero que, como he indicado en este libro, fueron intensos principalmente en el primer gobierno balaguerista (1966-1970)²⁷. Este segundo nivel del compromiso político fue un resultado más general de la alianza en que se sostuvo el régimen político encabezado por Balaguer, cuyo eje articulador fue el carácter bonapartista que asumió desde sus inicios en 1966²⁸.

6.2. La solución bonapartista

6.2.1. La cuestión bonapartista

Como señalé en el prefacio a esta segunda edición, pese a que han pasado más de tres décadas desde la publicación de *El reformismo dependiente*, el debate que suscitó la caracterización del régimen balaguerista de los años 1966-1978 como bonapartista, planteada en este libro en su primera edición de 1985 y en el de Cassá de 1986, solo dio pie a dos críticas académicas rigurosas, las de Harthlyn y Faxas²⁹.

Harthlyn planteó claramente que una mejor manera de caracterizar el régimen balaguerista era definirlo con neopatrimonialista, siguiendo en esto el enfoque de Chehabi y Linz (1998), en cuyo libro Harthlyn había publicado un artículo. El argumento de Faxas se ubica en otro universo discursivo. Ella ve tanto el proyecto político del PRD, como el de Balaguer, como un intento

²⁶ Jorge Blanco (2003).

²⁷ Duarte y Pérez (1980) analizan con detalles ese proceso. Goff y Locker (1972) aportan datos importantes para la primera fase. B. J. Bosch (2010) presenta información importante que debe verse.

²⁸ Véase *supra*, capítulo 2.

²⁹ Harthlyn (1998) y Faxas (2007).

fracasado de construcción de un proyecto nacional-democrático, por la vía liberal o la más conservadora, como fue el reformismo balaguerista.

En realidad, en el debate las tesis de esos autores no necesariamente implican un desencuentro absoluto en la caracterización del régimen reformista con la tesis del bonapartismo, como he sostenido en otra parte³⁰. La idea del bonapartismo apunta a la caracterización política de una específica relación de fuerzas en el Estado, donde ninguna de las fuerzas políticas principales tiene la suficiente capacidad para imponer su proyecto político y se debe acudir por ello a una solución de “compromiso” en la que interviene una tercera fuerza. De esta manera, el bonapartismo consiste en una específica situación política, por incapacidades o limitaciones de las propias fuerzas en lucha. El bonapartismo busca resolver una crisis política que restaure la estabilidad en el Estado y pueda articular un proyecto de hegemonía frente a las “clases peligrosas” que, sin embargo, están fuera de la disputa por la hegemonía entre las clases que ejercen la dominación.

Hay corolarios que se derivan de este argumento general. Por lo pronto, la literatura en torno al concepto de bonapartismo indica que usualmente una situación de este tipo se produce en sociedades con un bajo nivel de desarrollo de las clases ligadas a la industrialización y, en consecuencia, con fuerte presencia del campesinado y las clases dominantes tradicionales vinculadas al comercio y el poder terrateniente. En este enfoque, en el fondo el bonapartismo remite a un poder delegado por estos grupos dominantes a un estamento o estrato político que pasa a representarlos, sectores que comúnmente encarnan en el estamento militar y la burocracia de Estado³¹.

Es común que una situación bonapartista surja luego de una crisis política, allí donde la vía de solución al conflicto que produjo la crisis es propiamente el bonapartismo, como fue el caso del régimen balaguerista de los doce años. El bonapartismo no puede

³⁰ Lozano (2018), pp. 261-262.

³¹ Véase a Bartra (1977), Stinchcombe (1979) y Poulantzas (1971).

entonces ser “pensado” como un concepto que define una situación “normal”, remite siempre a la excepción³².

Resumiendo, el bonapartismo constituye un mecanismo de solución de un conflicto político en una determinada situación de precario equilibrio de fuerzas en la esfera de la dominación política. Por su naturaleza remite siempre a un equilibrio inestable de compromisos que debe, permanentemente, ser restaurado y reproducido, como un componente necesario de la propia naturaleza del régimen bonapartista, como ha señalado Gramsci. El bonapartismo expresa, más que una fortaleza, una debilidad de las clases dominantes en su capacidad de control hegemónico del Estado. Por esto último, constituye un mecanismo *ad hoc*, por así decirlo, de construcción de un espacio de hegemonía que articula una modalidad excepcional del Estado capitalista y, por ello, en tanto régimen político, responde en esencia a una coyuntura de crisis de la dominación. No implica, entonces, un proyecto de permanencia estructural de un determinado poder de clase como hegemonía, sino una respuesta surgida del propio Estado y los estamentos intermedios que lo organizan (militares, burócratas, políticos) a fin de resolver precisamente una incapacidad hegemónica de los grupos dominantes tradicionales. Finalmente, por todo ello, por lo general las situaciones bonapartistas se producen en contextos capitalistas caracterizados por una fuerte presencia del campesinado en la estructura social y un predominio significativo de una sociedad agraria, con amplia presencia pequeñoburguesa en el conjunto del orden social. El bonapartismo, por tanto, es propio de sociedades en procesos de cambio hacia sociedades capitalistas modernas.

La idea del neopatrimonialismo define una problemática distinta. Se construye en torno a un particular modo de control del Estado en la que sus aparatos (Poulantzas) son manejados como

³² Véase a Poulantzas (1971), quien ha caracterizado muy bien el bonapartismo como modalidad de excepción del Estado capitalista, aunque me parece que su argumento deja en el limbo la diferenciación entre forma de régimen y forma de Estado, que en este asunto es de vital relevancia. Un desarrollo de la idea del Estado de Excepción que generaliza la situación de excepción a todo el andamiaje del Estado Moderno se encuentra en Agamben (2005).

recursos privados por el grupo en el poder. Esta situación remite a dos asuntos entrelazados: la capacidad de dominio del grupo en el poder precisamente de esos aparatos de Estado como bienes privados. En ese sentido, el patrimonialismo o, más específicamente, el neopatrimonialismo, debe resolver el problema de la construcción de un orden político legítimo como condición de esa modalidad de control privado del Estado. El otro problema que enfrenta el manejo neopatrimonial del Estado es el de los acuerdos políticos que deben permitir el manejo neopatrimonial del propio Estado. De esta forma, mientras los problemas de legitimación remiten por lo general al manejo clientelista de la política, el acuerdo político en que se sostiene usualmente es de tipo autoritario³³.

Como he señalado en otra parte³⁴, “[...] a lo que remite el bonapartismo es al análisis de un tipo de régimen donde la capacidad de ejercicio del poder político está, si se quiere, *disuelta*, entre varios actores y su cohesionamiento solo lo resuelve una *tercera fuerza* que es la que permite restablecer la hegemonía del Estado frente a la sociedad”.

De forma muy distinta el (neo) patrimonialismo remite a un dominio privado de los recursos de que disponen las instituciones estatales, y, en consecuencia, desdibuja la diferencia entre el bien público y el dominio privado del poder. De esta forma, el neopatrimonialismo se enfoca en el Estado como recurso privado, mientras el bonapartismo está preocupado por el régimen político. A mi criterio, por ello, lo que especifica al bonapartismo es la búsqueda del equilibrio político entre los distintos grupos de las clases dominantes para poder organizar el dominio del Estado sobre la sociedad, mientras el neopatrimonialismo se interesa en la legitimación de ese dominio en condiciones particularmente no-democráticas.

Por tal razón, creo que, en la experiencia histórica dominicana que se discute, el bonapartismo, como recurso analítico, resuelve mejor la solución del conflicto político en el seno de las clases

³³ Véase Chehabi y Linz (1998), Poulantzas (1971 y 1971b) y Agamben (2005), pero en este punto el referente “polémico” por definición es Carl Schmitt (2009).

³⁴ Lozano (2018), *op cit.* p. 202.

dominantes, mientras el enfoque del dominio neopatrimonial del Estado analiza mejor la eficacia del dominio prolongado del Estado. Pero en los dos casos se asumen los bloqueos a la participación democrática de las clases dominadas, el empleo privado de recursos estatales, el dominio autoritario del poder para alcanzar la legitimación de masas y la autonomía relativa del Estado frente a la sociedad.

Pero el bonapartismo como “situación política” no puede constituir a largo plazo una condición estructural del Estado, sus límites no solo los impone la coyuntura en la que nace, sino las condiciones que articulan su propia lógica política: el compromiso político (inestable), las condiciones de crisis, etc. En cambio, en el Estado neopatrimonialista se define un campo histórico más amplio que puede cohabitar con diversas formas de régimen político autoritarias, sobre todo, y parcialmente democráticas, en determinadas condiciones, lo que incluye naturalmente a regímenes bonapartistas.

La preocupación de Faxas en torno a *El reformismo dependiente* y el libro de Cassá, a propósito del bonapartismo, es distinta a la crítica de Harthlyn. Ella está preocupada por lo que considera el fracaso del intento de construcción de un sujeto nacional-democrático en la República Dominicana. Su enfoque es subsidiario de múltiples estudios latinoamericanos de sociología del desarrollo, pero sobre todo se debe al accionalismo de Alain Touraine, a propósito de los procesos de construcción de los sujetos del desarrollo. De todos modos, muchas observaciones de Faxas, como las del propio Harthlyn, son pertinentes y atendibles, y naturalmente enriquecen el estudio del régimen balaguerista de los doce años.

6.2.2. Los militares y el poder bonapartista

Está fuera de discusión el papel relevante que los militares desempeñaron en la articulación del poder que logró concentrar Balaguer en el régimen de los doce años. Como sabemos, tras la muerte de Trujillo, los militares pasaron a desempeñar la función central de la dominación estatal en la coyuntura de crisis de los años 1961-1965, aun cuando desde las Fuerzas Armadas no se lo-

gró articular un proyecto de orden político que superara la crisis de hegemonía producida tras el fin de la dictadura. Lo que es peor aún, el significativo faccionalismo de las élites militares no solo impidió que las Fuerzas Armadas articularan un proyecto razonable de orden político, sino que se convirtieron a su vez en uno de los factores precipitantes de la crisis de hegemonía. Voy más lejos, ese faccionalismo militar constituyó también una clara fuente de estímulo a la conspiración política permanente en esos años, de forma tal que cuando los militares pasaron a sostener de modo directo un gobierno propio, tras el golpe de Estado a Bosch en septiembre de 1963 –el llamado Triunvirato–, a la larga la división en las Fuerzas Armadas se profundizó y precipitó el estallido de abril y de ahí la guerra civil³⁵.

De hecho, la conspiración militar de 1965 para derrocar al Triunvirato pronto se transformó en insurrección popular y condujo a la derrota del Ejército tradicional y prácticamente al triunfo constitucionalista, tras la batalla del Puente Duarte el día 27 de abril de 1965, como se discutió arriba. Ello precipitó la decisión de intervención militar norteamericana el 27, consumada el 28 de abril, a partir de la cual no solo las fuerzas constitucionalistas fueron derrotadas militarmente, sino que se impuso también un acuerdo que condujo al gobierno provisional de García Godoy a las elecciones de 1966 y al triunfo previsible de Balaguer como figura de la derecha que pasó a constituir el elemento de aglutinamiento de las fuerzas conservadoras. A partir de esos hechos, se produjo también un proceso muy rápido de reordenamiento y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas bajo la directa y clara intervención norteamericana en sus estructuras de mando, reconstitución organizativa, aumento de su potencial de fuego y capacidades militares y represivas.

Los militares como cuerpo institucional pasaron a desempeñar la principal función de orden y control del Estado sobre la sociedad no solo por su poder represivo directo, sino también por

³⁵ Para el análisis del papel de los militares en la dinámica de la crisis política entre 1961-1965, debe verse a B. J. Bosch (2010) y Gleijeses (1978/2011).

factores que fueron propios de las clases y grupos sociales que heredaron el poder, tras el derrumbe de la dictadura, me refiero a la alianza oligárquica. Dichos grupos sociales eran muy débiles económicamente y, al igual que los militares, tampoco lograron una propuesta alternativa de ordenamiento del Estado, pues constituían un conjunto de grupos divididos entre sí. Desde ese punto de vista, en el período inmediato a la muerte del dictador, los militares constituyeron el único estamento cohesionado en torno al Estado que logró mantenerse unificado como institución política, aunque dividido internamente como grupos de poder (facciones). En ese contexto, la guerra civil obligó a una directa intervención norteamericana, pues de lo contrario los resultados de la derrota del Ejército tradicional conducían no solo a la derrota de la alianza oligárquica y la reforma social, indicaban también el camino para un régimen de amplia participación popular y la reforma democratizadora. En esa situación, la llegada al poder de Balaguer en 1966 y el régimen bonapartista que inauguró, venían a resolver la tensión planteada entre poder civil y poder militar, entre la presión democratizadora y el dominio autoritario del Estado.

Con el triunfo de Balaguer en 1966, aun cuando los norteamericanos imponían una solución de fuerza al conflicto planteado por la guerra civil del año anterior, la forma bonapartista del nuevo gobierno que pasó a presidir Balaguer era por definición inestable. Resolvía el problema del control de las fuerzas democráticas (constitucionalistas) por la vía represiva y autoritaria, tras la derrota militar de las fuerzas constitucionalistas que los norteamericanos habían asegurado, pero el régimen en su interior siempre fue inestable y sobre todo dependió de un permanente equilibrio de fuerzas entre las facciones militares. Veamos esto último con mayor detalle.

Las luchas entre los diversos grupos militares fue una de las características centrales del régimen bonapartista que presidió Balaguer. Esas pugnas no solo descansaban en una “lógica de compromisos inestables” entre los diversos grupos y facciones militares que le facilitaba a Balaguer el control de las instituciones armadas, terminaron constituyendo un componente fundamen-

tal del modelo político bonapartista, definieron así un mecanismo central mediante el cual Balaguer controló a los grupos populares y reprimió al PRD y a la izquierda, al tiempo que desmovilizaba políticamente a los grupos económicos dominantes, como la clase terrateniente, el alto comercio importador y el empresariado industrial y financiero.

Balaguer no “inventó” las luchas faccionales entre los grupos militares, más bien se valió de ellas para construir su esquema bonapartista de control estatal y dominio político de la sociedad. Brian J. Bosch³⁶ ha demostrado que las Fuerzas Armadas, pese a haber constituido el sector de mayor concentración de poder en la fase posdictatorial en los sesenta, nunca lograron organizar el suficiente poder para sustituir al régimen tiránico de Trujillo. Sostiene este autor, además, que fue en esos años cuando precisamente comenzó a organizarse la política faccional de las camarillas militares. Indica que en ese momento había al menos cinco grupos o facciones militares: los oficiales del CEFA, bajo el mando y liderazgo de Elías Wessin y Wessin; el Grupo de San Cristóbal, que terminó liderado por Neit Nivar Seijas; los oficiales constitucionalistas, cuyo líder fue el coronel Fernández Domínguez; el grupo de San Isidro, y los oficiales de la Marina de Guerra.

Al final de la dictadura trujillista, el CEFA logró convertirse en el destacamento militar que llegó a controlar el mayor poder de fuego (tanques y artillería). Por el contrario, el Grupo de San Cristóbal tenía mucho menor poder militar, pero era el que de alguna manera conservaba una mayor vinculación con los remanentes de la dictadura trujillista. El grupo de los constitucionalistas tenía un origen distinto al de los otros dos, y de hecho no mantuvo un esquema unificado estable, lo unificaba un objetivo político democrático: la vuelta de Bosch al poder y el respeto a la Constitución de 1963. El grupo de San Isidro, al decir de Brian J. Bosch, era el más difuso y estuvo constituido por oficiales paracaidistas y pilotos, en su seno se albergó el liderazgo del coronel paracaidista Lluberes Montás y posteriormente del oficial de in-

³⁶ B. J. Bosch (2010).

fantería Enrique Pérez y Pérez. En el grupo de la marina destacaban tres oficiales: Francisco Rivera Caminero, Ramón Emilio Jiménez y Francisco Amiama Castillo.

La política de equilibrio tenso en torno al poder militar que Balaguer articuló, y que he descrito en la primera edición de *El reformismo dependiente*³⁷, encontraba en él su eje articulador. En ese esquema, el triunfo que coyunturalmente alcanzaran algunos de los líderes de facciones militares contra otro líder de facción era siempre coyuntural y totalmente dependiente del poder de Balaguer; se trataba de triunfos parciales y limitados en sus alcances. En segundo lugar, las rivalidades militares se producían en torno a un estamento armado muy poco profesional, lo cual no era el simple derivado de la política balaguerista de divide y vencerás, sino el resultado de un manejo neopatrimonialista del Estado por parte de Balaguer y su séquito civil y militar. De esto resultaba un tercer elemento del esquema de equilibrios y compromisos inestables: toda la política militar giraba en torno a la lealtad incuestionable a Balaguer, lo que producía, por un lado, la cohesión de los mandos militares en torno al líder o caudillo, pero estimulaba, por otro lado, los choques de facciones. Asimismo, en el plano civil este esquema de cohesión política y construcción de lealtades desmovilizaba políticamente a los grupos de presión en la sociedad, sometiéndolos al liderazgo bonapartista del jefe de Estado. Claramente este último aspecto (la centralización de las lealtades en torno al liderazgo de Balaguer) era de claro ascendiente trujillista.

Las diversas crisis militares por las que atravesó el régimen de los doce años definen el terreno ideal para reconocer el funcionamiento del modelo de equilibrios políticos descrito, ya que las crisis militares afectaban la política general del régimen, pero a su vez eran condicionadas por ella. Visto de esa manera, podemos ver las crisis militares como un componente de la propia gobernabilidad del régimen político. El primer gran conflicto que enfrentó Balaguer en el gobierno de los doce años fue el choque con Elías Wessin y Wessin, el cual puso en peligro la propia unidad política y militar del régimen. Balaguer

³⁷ Véase el Capítulo 2 y el Capítulo 5 (Epílogo) de esta segunda edición.

estaba muy consciente de que no podía emprender su tarea estabilizadora de la situación política post guerra civil y cumplir con los acuerdos establecidos con los norteamericanos y los grupos de poder si el peso de Wessin y Wessin en las Fuerzas Armadas no era reducido. A mi criterio Balaguer aprovechó que Wessin y Wessin había salido muy desprestigiado –al interior de los mandos militares y a los ojos de los norteamericanos– del conflicto de abril de 1965, tras su efectiva derrota militar en la batalla del Puente Duarte y que en el momento del conflicto el general no tenía un control efectivo del poder de fuego del CEFA, pues su salida del país, tras los acuerdos que dieron fin a la guerra de abril, lo desconectaron del ámbito militar de este.

Balaguer articuló un argumento coherente frente a los norteamericanos, los mandos militares y los grupos de poder en el país: Wessin y Wessin, al igual que el coronel Francisco Alberto Caamaño, representaban soluciones extremistas, de derecha e izquierda, respectivamente. Por conductos distintos y en posiciones opuestas, ambos liderazgos no podían encontrar espacio en el nuevo esquema de equilibrios y compromisos que Balaguer estaba tratando de articular y los norteamericanos claramente apoyaban. La salida de Wessin y Wessin al exterior e igualmente la desaparición de Caamaño de la escena pública, tras su nombramiento en Londres como agregado militar, le facilitaron la tarea a Balaguer. Lo cierto es que con Wessin y Wessin el choque fue directo y cuasipersonal, encontrando el respaldo del alto mando³⁸. Hubo de pasar varios años y en 1973 el choque con Caamaño se produjo, tras su ingreso clandestino al país y la instalación de un foco guerrillero bajo su mando. En los dos casos, Balaguer aprovechó el resultado del conflicto para fortalecer su poder unificador en las Fuerzas Armadas y su liderazgo en la oficialidad.

Los dos conflictos descritos no eran del tipo propiamente intercamarillas militares, sino entre líderes militares y Balaguer. El conflicto interno entre facciones era relativamente distinto. Hubo en ese sentido al menos dos tipos de conflictos entre los liderazgos militares que merecen referirse. El primero se refiere a los choques

³⁸ Para una visión general del conflicto Balaguer-Wessin, véase B. J. Bosch (2011), Cap. VIII, pp. 147-170.

producidos entre grupos militares a propósito del control político del movimiento popular y el segundo a los choques que se sucedieron entre las camarillas en tanto grupos corporativos de interés. En el primer tipo de conflictos, el caso más prominente fue el que se produjo a propósito de la famosa Banda. La acción de la Banda era de tipo terrorista. Sus miembros eran exmilitares de la izquierda, por lo general provenientes del lumpen proletariado urbano. La acción terrorista de la Banda le resolvía al régimen político problemas propios del control represivo que los organismos militares y policiales no podían solucionar de modo directo y abierto: la intimidación pública en los barrios, la creación de un clima de terror generalizado que frenara la iniciativa política de jóvenes izquierdistas, como analicé en la primera edición de *El reformismo dependiente*³⁹.

La información con que se cuenta⁴⁰ indica que este grupo paramilitar de corte terrorista fue armado por oficiales provenientes de las filas policiales y se creó en momentos en que el General Enrique Pérez y Pérez estuvo al mando de la Policía Nacional. Reitero: la opinión generalizada indica que la Banda fue iniciativa de sectores ligados a la Policía Nacional y agregó: pero también parece que hubo algún apoyo de órganos de inteligencia, como la CIA. Sin embargo, Brian J. Bosch, quien fue asesor militar de la embajada norteamericana en Santo Domingo, en su libro niega que existiera algún vínculo entre la Banda y los norteamericanos⁴¹.

³⁹ Véase Capítulo 2.

⁴⁰ Sobre las acciones represivas en el gobierno de los doce años, además del libro de B.J. Bosch (2011), debe verse el trabajo de Duarte y Pérez (1980). Asimismo, Goff y Locker (1972), Espinal (1982) y Harthlyn (2008).

⁴¹ Aun cuando el libro de B.J. Bosch (2011) es un trabajo bastante objetivo, cuando el autor tiene que tratar el tema de la intervención de los norteamericanos en asuntos de seguridad nacional, represión y apoyo a grupos ultraderechistas, tiende a exculpar la participación norteamericana y eso pone en duda su afirmación sobre la no injerencia norteamericana en la operación de La Banda, máxime si se tiene en cuenta que en esos años la CIA normalmente hacía operaciones de ese tipo en América Latina. A ello hay que agregar que el general Pérez y Pérez era quizás el militar que le merecía mayor respeto y reconocimiento a la misión militar norteamericana en el país (MAAG), desde su participación en la llamada Operación Limpieza durante la guerra de abril y su explícito conservadurismo anticomunista, a lo que debe agregarse que en lo personal Pérez y Pérez era un militar de vida austera y durante toda su carrera no mostró interés alguno por participar directamente en la vida política.

Ahora bien, la realidad es que la Banda expresaba una tensión no resuelta en el proceder político del régimen frente a sus opositores: excluirlos de cualquier posibilidad de acceso a esferas de poder en el Estado o reducir al menos su presencia en las instituciones político-representativas del Estado (Congreso y municipios) y el riesgo de concentrar únicamente los mecanismos de la dominación en la acción puramente represiva. Durante la primera parte del gobierno de los doce años, sobre todo en el período 1966-1972, claramente el gobierno balaguerista optó en lo esencial por la segunda vía, excluir por mecanismos represivos y autoritarios la presencia de la oposición en esferas del poder estatal, que pudiese cuestionar las bases políticas del régimen, acentuando así su carácter autoritario, centralizador y excluyente. Pero, en la medida en que el régimen se afirmaba en el poder y se fortalecían sus acciones reformistas e impulsaba su estrategia de desarrollo en materia industrial de fortalecimiento de las clases medias urbanas y se intentaba una reforma agraria conservadora, el régimen se vio cada vez más obligado a abrir espacios de tolerancia política y moverse hacia el campo de las acciones hegemónicas legitimadoras, reduciéndose el campo de sus acciones represivas⁴².

Al crearse en la opinión pública un clima de rechazo a la Banda, no solo en el espacio nacional sino internacional, el régimen comenzó a ser afectado políticamente por las acciones de ese grupo terrorista. En ese momento, el general Neit Nivar Seijas, antagonista del general Pérez y Pérez, incrementa sus acciones contra la Banda y en la práctica demanda su desmantelamiento. Había llegado la hora de disolver el grupo. Sin embargo, este solo fue desmantelado cuando las presiones de los medios de comunicación nacionales, la opinión pública internacional y las opiniones de poderosos grupos de presión locales obligaron al gobierno a producir acciones que liquidaron la organización. Además de lo ya planteado, la acción de desmantelamiento de la Banda posiblemente no se hubiera producido o hubiese tardado mucho más tiempo en pro-

⁴² Esto se analiza con rigor en el Capítulo 2.

ducirse de no haber caído en el campo del conflicto de liderazgos entre los generales Pérez y Pérez y Neit Nivar Seijas.

El otro caso de conflictos de las camarillas militares en el régimen balaguerista que deseo retomar aquí es el de la renuncia de los generales ocurrida en el año 1975. Dicha renuncia fue la prueba de fuego de la autoridad de Balaguer sobre los mandos militares. En el juego de facciones a que este tenía acostumbrada a la población, el poder del general Pérez y Pérez se había fortalecido significativamente al nuclear en torno suyo a oficiales de experiencia y alto rango, como el coronel José Ernesto Cruz Brea, el general Salvador Lluberes Montás y el contraalmirante Ramón Emilio Jiménez, quien en ese momento era el secretario de las Fuerzas Armadas. El momento era difícil, acababa de ser asesinado el 17 de marzo de ese año el reputado periodista Orlando Martínez y la opinión pública señalaba a los oficiales más cercanos a Pérez y Pérez como los responsables del crimen. Por su parte Neit Nivar Seijas había ganado prestigio en la opinión pública por su posición de condena al asesinato de Orlando Martínez, vil asesinato que encontró el repudio de la opinión pública nacional⁴³. Sorpresivamente, Balaguer nombró a Neit Nivar Seijas como jefe de la Policía Nacional y de dicho nombramiento los jefes militares se enteraron por los periódicos, al igual que cualquier ciudadano. En condiciones “normales” la facción que adversaba a Nivar Seijas, al enterarse de esos movimientos de Balaguer, tomaba con tiempo medidas que le permitían mantener el equilibrio del poder militar. Pero en esta ocasión el grupo de Pérez y Pérez fue sorprendido y reaccionó con un fuerte rechazo al nombramiento. “La troica” (Pérez y Pérez, Lluberes Montás y Jiménez), como se le llamaba a este grupo, a la que se sumó el comodoro Logroño Contín, de inmediato le presentó sus renuncias a Balaguer. Sin mayor reparo este aceptó tranquilamente las

⁴³ Casi dos décadas después del asesinato de Orlando Martínez, luego de un accidentado proceso a los autores materiales del crimen, la justicia dominicana condenó a Mariano Durán Carrera y Rafael Alfredo Lluberes Ricart a treinta años de prisión y a Joaquín Antonio Pou Castro a 20 años. Pero nunca los autores intelectuales del horrendo crimen fueron inculcados y mucho menos enjuiciados.

renuncias y continuó su agenda del día. Por su parte, los generales, en la tarde de ese día, dieron una rueda de prensa en la que hicieron pública la carta de renuncia. La crisis era un hecho.

Balaguer guardó silencio y el 10 de abril actuó. Designó al coronel Renato Malagón Montesano en la Fuerza Aérea, a Rivera Caminero en la Marina, reincorporó a Imber McGregor como subjefe de la Fuerza Aérea y se nombró a sí mismo jefe de las Fuerzas Armadas. Luego efectuó una movilización estratégica de tropas en todo el territorio nacional. A partir de esas acciones, se produjo un alud de adhesiones y declaraciones de lealtad y visitas al Palacio Nacional de la alta oficialidad. El día 12 Balaguer nombró al general Braulio Álvarez Sánchez como jefe del Ejército Nacional y al general Juan René Beauchamps Javier al frente de la Secretaría de las Fuerzas Armadas como reemplazo del propio Balaguer. El 2 de junio cerró el círculo: nombró a Pérez y Pérez como secretario de Interior y Policía. Meses después, reincorporó a Jiménez y Lluberes Montás y colocó al general Ramiro Matos como subsecretario de las Fuerzas Armadas, ascendió a Álvarez Sánchez y no incorporó al comodoro Contín. La crisis estaba resuelta.

Por lo hasta aquí visto, debe quedar claro al lector el ascendente militarista del régimen de los doce años. Pero ello no implicaba otra cosa sino un modelo de equilibrios políticos y de contención y control del poder militar. En ese sentido, el “militarismo balaguerista”, si cabe el término, era la expresión de una lógica política que tenía una triple expresión: por un lado, constituía un eje articulador de la dominación bonapartista, por el otro, operaba como un componente fundamental del modelo de exclusión política al que era sometida la oposición, pero también representaba una garantía de la subordinación política de los grupos dominantes al poder de Balaguer. Finalmente, a los ojos norteamericanos, el poder de los militares en ese escenario constituyó un Jano bifronte, como ha tratado de argumentar B. J. Bosch. Los norteamericanos estuvieron preocupados inicialmente por el tema del restablecimiento de la unidad de las Fuerzas Armadas, cuyo faccionalismo condujo en gran medida a la guerra civil en 1965 y la efectiva derrota militar

del Ejército dominicano tradicional, el cual se enfrentó en el Puente Duarte a las fuerzas constitucionalistas y fue derrotado. Desde ese ángulo, el bonapartismo balaguerista resolvía el problema del equilibrio de fuerzas en el Ejército, como también el restablecimiento de su unidad como institución que garantizaba el poder del Estado (el modelo de equilibrio tenso que he descrito en el Capítulo 2 en la primera edición de este libro). Sin embargo, ese mismo modelo de permanente equilibrio inestable de compromisos militares producía en el plano civil tensiones e inestabilidad, lo que conspiraba contra la unidad política del Estado y debilitaba a los grupos de poder que a los norteamericanos les interesaba fortalecer, incluidos, claro está, los intereses de sus propias corporaciones en el país.

Cuando esas tres dimensiones del factor militar en el régimen bonapartista se agrietaron, comenzó también a agrietarse el régimen balaguerista en su conjunto. Esto debe apreciarse en varios niveles. Por lo pronto, el poder de las facciones militares condujo a muchos oficiales del alto mando a acumular fortunas y operar negocios que afectaban al empresariado, sobre todo el industrial. En muchos sentidos esto era producto de la lógica de equilibrios que el propio Balaguer estimulaba. Por otro lado, cuando Balaguer dictó las leyes contra el latifundio improductivo, en la coyuntura de las leyes agrarias, muchos altos oficiales, que a su vez eran terratenientes, se inquietaron y comenzaron a ver con otros ojos al régimen balaguerista. Esto, en otras circunstancias, hubiese sido el simple producto del conservadurismo militar tradicional que lo vinculaba a los grupos oligárquicos del campo, pero en el contexto del modelo bonapartista tenía un correlato directo en el equilibrio político entre las facciones militares. En el seno de la oficialidad la lucha faccional produjo resultados no buscados: muchos oficiales que no estaban envueltos directamente en el conflicto entre los dos bandos militares y no eran miembros de ninguna facción, a la larga tomaron distancia de ambos sectores. Esto produjo malestar en este grupo al ser excluidos del juego del equilibrio del poder. De esta forma la política bonapartista de equilibrios inestables agrietaba a la larga las bases de su poder.

6.2.3. La fuerza de la geopolítica

En 1985, año de publicación de *El reformismo dependiente*, era casi un consenso la idea de que el expresidente Balaguer era un líder en declinación y que el país entraba en una fase de abierto desarrollo democrático. Al año siguiente, Balaguer resurgía como un líder político que aglutinaba a la oposición conservadora y volvía al poder. Se derrumbaba en la práctica la visión de un Balaguer políticamente muerto. De esta forma, independientemente de cualquier consideración acerca de la convicción democrática de Joaquín Balaguer, el hecho concreto es que en agosto de 1986 el viejo caudillo regresó al poder, aceptando la regla básica de la democracia liberal: la competencia electoral libre. Este hecho plantea al analista al menos dos asuntos: por un lado, implica la posibilidad de que el viejo caudillo aceptara el procedimiento democrático electoral como mecanismo central del cambio político en condiciones democráticas, lo que supondría un cambio significativo del proyecto conservador que él cohesionaba. Por otro lado, consecuentemente, el asunto formula la interrogante acerca del fin de la transición democrática iniciada en agosto de 1978 con el ascenso al poder de Antonio Guzmán del PRD.

Con el regreso al poder de Balaguer en 1986 se abrió una nueva fase conservadora del proceso de transición democrática, aunque inicialmente pudo anidar la ilusión de que este giro conservador estaba quizás fortaleciendo la transición, ya que los actores autoritarios del período previo regresaban al poder bajo las reglas que imponía el nuevo orden democrático. Con razón Harthlyn ha calificado este segundo período de gobierno de Balaguer como de “retroceso autoritario”⁴⁴. Pero ahí empiezan los problemas. La regresión autoritaria sugerida por Harthlyn ¿implicaba el inicio de una nueva fase no democrática del proceso político? Si las conquistas democráticas logradas en la década previa al regreso al poder de Balaguer se mantenían precariamente, ¿de qué régimen democrático estábamos hablando? ¿De una democracia débil, incompleta? ¿De

⁴⁴ Harthlyn (2008).

un régimen autoritario en restablecimiento? ¿De qué modo cohabitaban en la esfera política la fuerza del autoritarismo, el poder del neopatrimonialismo de Estado, con las débiles instituciones democráticas que se abrían paso? Estas y otras preguntas han definido los ejes centrales de las preocupaciones de buena parte de las ciencias sociales dominicanas en lo relativo a los estudios políticos desde los años noventa del siglo XX a nuestros días.

Esas interrogantes no se pueden responder en una simple investigación, exigen todo un programa de estudios. En *El reformismo dependiente* me limito a estudiar una experiencia de ejercicio del poder de ascendiente autoritario, la de los gobiernos de Balaguer entre 1966 y 1978. Pero un asunto sí resulta pertinente en la búsqueda de respuesta de las interrogantes planteadas: la crisis de hegemonía planteada en el país tras la muerte de Trujillo en 1961 solo encontró solución tras el fin de la guerra civil de 1965 y dicha solución no fue simplemente una imposición norteamericana tras la derrota militar de las fuerzas constitucionalistas. Fue una solución negociada, no entre los constitucionalistas y las fuerzas políticas dominicanas conservadoras, sino entre Estados Unidos, los constitucionalistas y un actor ausente de la mesa negociadora, que finalmente fue la alternativa encontrada por Washington: Balaguer.

En ese punto Estados Unidos se vio forzado a encontrar una “respuesta” a la crisis adaptada a la realidad política local, que a la vez resolviera al menos tres asuntos: contener la fuerza del movimiento popular que Juan Bosch representaba, encontrar una vía alternativa en materia de desarrollo a la propuesta oligárquica que, sin embargo, la incluyera y la definición de un modelo político que, reconociendo el poder militar, sometiera a los generales a un orden político “civil” y produjera estabilidad política. Esa solución no solo se sintetizó en Balaguer, sino que fue de un tipo específico: el bonapartismo, como esquema político de orden. De ahí la relevancia de la caracterización del régimen balaguerista como bonapartista⁴⁵.

⁴⁵ Este enfoque me ha permitido apreciar la envergadura de tres asuntos claves en la historia política dominicana moderna: 1) el predominio del Estado en el proceso de formación de los actores sociales y políticos; 2) la debilidad de los grupos dominantes en el ejercicio del poder, que por lo general expresa una doble dificultad: la poca capa-

Aquí surge un último asunto: el papel imperial de Estados Unidos en la historia política dominicana moderna, sobre todo en el siglo XX. El enfoque marxista tradicional del “imperialismo” por lo general es mecanicista, pero establece un modelo de interpretación que usualmente impide asumir la autonomía de la política. Este problema remite a un debate clásico hoy superado, pues ningún marxista serio piensa actualmente que la economía es el “factor” que en última instancia determina la política. El último esfuerzo relevante en esta dirección fue quizás el de Althusser, con su propuesta del principio de “sobredeterminación”, el cual, aunque fue un esfuerzo fecundo, al fin y al cabo, sucumbe al determinismo.

Hoy debe admitirse que la política tiene su ritmo y particular dinámica y, por ello, el papel de los actores internacionales debe asumirse en el juego de los poderes mundiales que se definen en relaciones asimétricas, donde el más poderoso impone su poder, pero el sistema posee su propio principio de determinación que afecta igualmente al más poderoso no solo al débil.

Esto permite apreciar el poder de intervención de Estados Unidos como actor político hegemónico en la República Dominicana. Pero su eficacia también ha estado determinada por los tipos de actores locales o “nacionales”. Con relación a la manera específica de incidencia norteamericana en un país como República Dominicana, debe reconocerse que no representa la misma relación la oligarquía terrateniente y comercial de mediados del siglo XX con Estados Unidos, como la de la aristocracia financiera del siglo XXI ante el poder hegemónico norteamericano a

cidad de estos grupos para el establecimiento de compromisos coherentes y estables entre sus diversas fracciones y su poca capacidad de controlar el poder del Estado, apoyándose en mecanismos hegemónicos que aseguren el consenso en un apelativo moral y cultural como base institucional del Estado. 3) Finalmente, me ha permitido apreciar la capacidad de autonomía de estamentos y grupos sociales que, en contextos muy cambiantes, pasan a constituirse en ejes articuladores y sostenedores de los grupos dominantes para estos ejercer precisamente su poder e influencia en el Estado. De ahí la importancia en la política dominicana moderna, no solo de fracciones burocrático-políticas, como la trujillista, el papel de los militares en la política y el liderazgo hegemónico de figuras como Balaguer, sino también el papel pasivo o activo de grupos y clases sociales como los estamentos medios y el propio campesinado.

nivel global. Dos lógicas, dos mecanismos de subordinación del actor periférico al poder imperial, que implican principios específicos de articulación.

Un segundo asunto es el propio del poder económico. Ayer ese poder imperial era más directo y por lo tanto más integrado al poder político. Hoy la globalización hace ese poder más difuso, menos articulado al poder político, y más compleja, en consecuencia, la relación de subordinación de la periferia al poder central. Eso se aprecia claramente en los cambios sustanciales que ha tenido el sistema internacional a la hora de tomar decisiones globales que involucran las instancias institucionales formales del sistema internacional, como el de Naciones Unidas⁴⁶.

Debe apreciarse que la dominación se ejerce a través de actores específicos, locales y globales, internos y externos, y por tanto introduce especificidades que tienen que ver con la naturaleza sociocultural de los grupos que ejercen la dominación. Por ejemplo, siempre se negocia entre actores concretos, en coyunturas específicas, en contextos particulares, y los actores hegemónicos internacionales no escapan a ello. Son estos los elementos que permiten apreciar el espacio de autonomía de actores como Balaguer, pero también es lo que ayuda a reconocer el establecimiento de soluciones de compromiso y la intervención de actores “mediadores” en la solución de crisis, como lo fue Balaguer.

En todas las fases del régimen balaguerista de los doce años, los norteamericanos brindaron un apoyo irrestricto a Balaguer, concentrándose sobre todo en la ayuda militar tanto en materia de equipos como de entrenamiento de su oficialidad. La ayuda militar no se orientó solo hacia el Ejército, sino que benefició también “la modernización” de la policía en tareas de contra-insurgencia y represión. Hubo también un programa de ayuda económica junto al esfuerzo por unificar en torno al poder central el apoyo de las élites del poder (la alianza oligárquica, sobre todo). Pero esos apoyos en esta ocasión encontraron en Balaguer un jefe político que tenía ideas claras en torno a la gestión del de-

⁴⁶ Véase a Beck (2004) y Attinà (1992).

sarrollo, lo que fortaleció su poder bonapartista en cuanto a los grupos dominados (la oposición política y el movimiento social) y frente a las élites tradicionales.

El apoyo norteamericano al régimen de los doce años fue permanente, aunque no se produjo de manera estable. Este debe verse en dos perspectivas: como un componente propio del modelo político bonapartista que se articulaba y como una función geopolítica e ideológica que involucraba la visión norteamericana de su dominación en el Caribe.

Este aspecto de las relaciones del régimen con el dominio geopolítico norteamericano en el Caribe no se desarrolla sistemáticamente en *El reformismo dependiente*, solo se indica de manera general el alcance del apoyo y algunas de sus variaciones coyunturales en el ciclo político analizado (1966-1978). De todos modos, para apreciar el asunto con mayor claridad, me parece que debemos ver los flujos de ayuda norteamericanos hacia el país por lo menos desde la muerte de Trujillo.

Hasta 1966 la ayuda fue significativa y alcanzó hasta ese momento la suma de US\$ 258.6 millones, solo superada en la región por países, como Brasil, Chile y Colombia. A esto se debe añadir los flujos privados provenientes en este caso del Eximbank, que alcanzaron los US\$ 23.2 millones. De esta forma entre 1962 y 1966 se movilizaron recursos hacia el país provenientes de Estados Unidos en el orden de los US\$ 294 millones. Entre 1967 y 1978 hay información que permite reconocer un flujo de recursos que aportó directamente el Eximbank de US\$ 82.5 millones, al llegar la ayuda militar a los US\$ 22.1 millones. En ese período en cuestión en total los recursos movilizados alcanzaron los US\$ 416.3 millones.

En cuanto a la ayuda militar propiamente dicha, los recursos desplazados fueron hacia el Programa de Asistencia Militar (PM), pero también el de Ventas Internacionales Militares a Crédito (FMS) y el Programa de Educación Militar Internacional y Entrenamiento (IMET). Al manejar las cifras por períodos, se aprecian tres asuntos: a) en el período de la dictadura trujillista (1948-1961), la ayuda militar fue muy baja (1.5 % del total del pe-

río 1948-1978), b) en el período de crisis política (1962-1966) la ayuda militar concentró el 40.7 % de toda la ayuda en el período largo y c) entre 1967-1978 el 57.8 %.

Esa información sobre la ayuda militar permite reconocer que, si bien el grueso de la ayuda se concentró en el período 1966-1978, los flujos más intensos se produjeron en la fase de crisis hegemónica entre 1961-1966⁴⁷. Sin embargo, las fuentes dominicanas son relativamente distintas: indican que en el período 1970-1978 la ayuda militar alcanzó la cifra de RD\$ 112.6 millones. Destacan también que la segunda mitad del período (1975-1978) concentró el grueso de la ayuda (58.8 %), aunque entre 1970-1974 también fue significativa, lo que apoya la idea de la regularidad del flujo de ayuda en todo el período, pero sobre todo indica que los flujos se mueven más intensamente en los momentos de crisis, en este caso de mayor intensidad represiva del régimen reformista. Según las fuentes dominicanas, el grueso de la ayuda militar se destinó al Ejército y en menor medida a la Policía y el resto de las instituciones castrenses⁴⁸. En cuanto a los recursos orientados al crecimiento y desarrollo económicos en *El reformismo dependiente* (Capítulo 4) se ha hecho un análisis bastante completo en lo relativo a las políticas de apoyo al agro, la política de endeudamiento externo y en general la dinámica de la inversión extranjera.

6.2.4. El corporativismo empresarial y la Ley 299

El corporativismo que estimulaba el modelo de control político del estamento militar, a través de la lucha entre facciones, encontraba un correlato en el corporativismo empresarial. Sin embargo, se trataba de dos procesos distintos que obedecían a

⁴⁷ Las informaciones estadísticas hasta aquí reunidas sobre la ayuda norteamericana las resume Atkins (1987) y provienen de AID, publicadas en el llamado *Libro verde*, específicamente las del período 1 de julio 1945 al 30 de septiembre de 1978.

⁴⁸ La información dominicana proviene de los *Presupuestos de ingresos* y la *Ley de Gastos Públicos* del período 1973-1978, preparados por el Secretariado Técnico de la Presidencia, Oficina Nacional de Presupuesto.

funciones diferentes en el marco del modelo político. Mientras la lucha faccional en el plano militar constituía el mecanismo mediante el cual el régimen controlaba el poder de los generales y limitaba las posibilidades de participación e inclusión política en el Estado de la oposición política, en el caso del empresariado el corporativismo estimulado por el régimen apoyaba el crecimiento de los grupos empresariales emergentes, como los industriales y los sectores financieros, pero los convertía en un simple mecanismo legitimador de las iniciativas de gobierno. Es el caso del CND, que casi desde el principio del gobierno de los doce años creó Balaguer como mecanismo consultivo a las iniciativas de gobierno.

Por otro lado, la expresión real de la acción empresarial corporativa se daba en las organizaciones empresariales como el CNHE y la AIRD. Eran estos los territorios corporativos del empresariado, con los cuales negociaba el poder central (Balaguer) sus iniciativas de políticas de desarrollo y todo lo que concerniera al papel del empresariado en esta materia. Fue este mecanismo corporativo el empleado por Balaguer para impulsar su estrategia de crecimiento industrial a través de la famosa Ley 299, aprobada en 1968⁴⁹.

En torno a dicha ley se produjeron muchos debates que reflejaron en su conjunto las posiciones de los diversos grupos de interés, sobre todo empresariales, en relación con cómo asumir las tareas del desarrollo. Tras su promulgación, la Ley 299 recibió un primer embate crítico, el cual indicó que tenía un sesgo discriminatorio a favor del capital extranjero. Balaguer rechazó esta crítica. De todos modos, el objetivo central de los industriales, sobre todo de la oligarquía industrial de Santo Domingo, era asegurar la protección estatal, pues al fin y al cabo sus escalas de producción eran bajas, y, por ende, la competencia proveniente de las importaciones era significativa. Naturalmente, los industriales también le temían al

⁴⁹ El mejor análisis de este proceso lo ha hecho Moya Pons en su referido libro sobre el empresariado (1992). En lo adelante, la síntesis que presento se apoya en general en este texto. Recupero también algunos argumentos planteados en mi artículo de 2018.

capital extranjero. El temor se sostenía en hechos reales, ya que el Estado recibía sus ingresos en gran medida de las importaciones y, a su vez, el capital extranjero que se instalaría representaba una fuente de rentas netas para el Estado⁵⁰.

Quizás amparado en esas críticas y temores del sector industrial, en 1970 se promulgó otra ley dirigida a estimular la reinversión de utilidades en un modelo que implicaba exenciones impositivas a aquellas industrias orientadas a las exportaciones. En la práctica, ese fue el peldaño inicial para el desarrollo de las hasta hoy llamadas zonas francas de exportación.

Otro debate giró en torno a la llamada capacidad instalada no utilizada, argumento que fue empleado por los industriales tradicionales de Santo Domingo para frenar el acceso de nuevas industrias a la protección estatal. Pese a ello, Balaguer no cedió en su llamado al capital extranjero ni tampoco en su idea del acceso a los beneficios de la ley a nuevas industrias. En gran medida esto fue así, no por un criterio técnico, como de hecho argumentaban los industriales establecidos y los propios técnicos del gobierno central, sobre todo concentrados en ONA-PLAN. La firme posición de Balaguer era producto de una visión política, la de crear un nuevo sujeto del desarrollo en torno a la industrialización.

Otra objeción fue que la Ley 299 de desarrollo industrial estimulaba la concentración de la inversión alrededor de Santo Domingo y, por ende, desestimulaba el desarrollo regional integral. Realmente, esto era así no por un componente específico de la ley, sino por un problema de capacidades instaladas y consecuentes ventajas comparativas que implicaba colocar

⁵⁰ Es necesario recordar que en este libro (Capítulo 4) se analiza cómo las grandes corporaciones extranjeras que se asentaron en el país en los doce años de gobierno de Balaguer, para sus inversiones iniciales, movilizaron significativamente recursos provenientes del ahorro interno. Por lo demás, en materia de la reinversión de utilidades que pretendió estimular el Estado con las modificaciones de 1970 a la Ley de desarrollo industrial, a la larga produjeron un balance negativo que drenaba excedentes a favor de las corporaciones extranjeras, tales fueron los casos emblemáticos de la Falcombridge y la GW. Sobre esta última y la Falcombridge en República Dominicana véase a Del Castillo, Puig *et al.* (1975) y Deverell (1977).

las inversiones en los entornos cercanos a la movilidad de las mercancías, el acceso al recurso energía e incluso a la mano de obra. Pero, como afirma Moya Pons, esta objeción provino sobre todo del empresariado del norte (el Cibao) y perseguía en última instancia participar también de los beneficios que brindaba la protección estatal⁵¹.

En realidad, Balaguer estaba apoyando fuertemente a la oligarquía industrial asentada en Santo Domingo. Esto se ve claro en un simple hecho: las nuevas empresas medianas y pequeñas que lograron acogerse a los beneficios de la Ley 299 concentradas en la Zona Industrial de Herrera no tuvieron iguales ventajas que las empresas ya instaladas en manos de la oligarquía empresarial, cuyos integrantes se concentraban en la AIRD⁵². Lo mismo puede decirse del empresariado de la región norte, el cual siempre fue un actor subordinado en materia de desarrollo industrial y solo vino a asumir un liderazgo hegemónico tras el ascenso al poder del PRD

⁵¹ A propósito del debate sobre la Ley 299 de desarrollo industrial, Moya Pons argumenta (1992) que en las tesis defendidas por los empresariados cibaños y de Santo Domingo mediaba un problema de percepción: los del norte veían que el empresariado de Santo Domingo drenaba recursos hacia la capital y los de Santo Domingo argumentaban que los cibaños querían desplazarlos del poder que habían conquistado. En realidad, ambos pugaban por controlar potenciales recursos que la protección estatal podía brindar, pero sobre todo luchaban por espacios de mercado. Por otro lado, intelectuales y técnicos como Bernardo Vega, Eduardo Tonos y Bienvenido Brito, argumentaban que la estrategia industrializadora que estimulaba la Ley 299 y el Estado era muy costosa, drenaba excedentes al Estado vía las exenciones y favorecía en la práctica la concentración, el monopolio y de hecho estimulaba el desarrollo importador bloqueando la diversificación industrial. Otros, por el contrario, como Frank Marino Hernández, sostenían que eso era inevitable precisamente porque el aparato productivo dominicano estaba poco integrado y desarrollado. Lo cierto es que este debate expresaba las tensiones de la opción por la industrialización que Balaguer había asumido, pero era un claro indicador de que la industrialización no solo resultaba un proceso económico y técnico, sino también político, que implicaba para el Estado una búsqueda permanente de equilibrios y compromisos entre los diversos actores involucrados en el proceso. Para las consecuencias más generales en diversos escenarios históricos acerca de los debates sobre la industrialización, véase a Gershenkron (1968) y Sutcliffe (1978).

⁵² Ese poder del gran empresariado de Santo Domingo se aprecia claramente en el hecho de que tenía en la práctica el control del Directorio de Desarrollo Industrial, organismo que tomaba las decisiones del FIDE, por medio del cual se distribuían los recursos emanados del Estado para el desarrollo industrial. Véase Estrella (1971).

bajo la presidencia de Antonio Guzmán, él mismo prominente empresario agropecuario de Santiago.

La verdad es que la Ley 299 siempre fue un motivo de disputa interempresarial durante todo el período 1968-1978 y se continuó en el nuevo gobierno de Antonio Guzmán. Sin embargo, en la segunda mitad del gobierno de Balaguer (1974-1978) la discusión dio un giro. En primer lugar, logró introducirse el debate sobre el desarrollo agroindustrial, la discusión sobre el nivel de confianza del empresariado en el gobierno tomó importancia y los organismos internacionales de desarrollo comenzaron a plantear sus propias críticas al modelo industrializador dominicano, como fue la crítica del BID. Ciertamente es que en todo este debate Balaguer mantuvo su posición proteccionista no solo al empresariado industrial dominicano, sino también su apoyo al subsidio como política de desarrollo y a la inversión extranjera, como mecanismo de desarrollo.

Detrás de la estrategia proteccionista al desarrollo industrial, Balaguer nunca perdió de vista sus objetivos políticos. Estimuló el crecimiento de un empresariado industrial y a cambio consiguió su apoyo político; definió un modelo centralizador de las decisiones que involucraban las estrategias de desarrollo industrial, donde si bien daba espacio al sector corporativo del empresariado de Santo Domingo, se reservó siempre la última palabra en las grandes decisiones; forzó a sectores tradicionales, como la clase terrateniente, a su vinculación con la oligarquía financiera y estimuló la reforma en el campo, pero en un precario esquema de compromisos que a la larga le reportó dificultades para mantener compacto el apoyo de la oligarquía y el propio empresariado ligado a la industria y las finanzas. A lo que se une las dificultades que encontró al chocar el empresariado industrial y segmentos de la gran burguesía mercantil con grupos del alto mando militar, que terminaron siendo competidores fraudulentos del alto comercio y la industria, a través de mecanismos ilícitos, como el contrabando, las subvaluaciones del comercio importador y toda suerte de acciones ilegales.

Sin embargo, el verdadero y principal problema que enfrentó Balaguer en materia de desarrollo estuvo en el atraso de la agri-

cultura capitalista y la estrechez del mercado interno. Cuando Balaguer intentó atacar este problema con una tímida propuesta de reforma agraria, encontró la resistencia de la oligarquía terrateniente y comercial, a lo que se unió un segmento del alto mando militar, a su vez grandes terratenientes. Por otra parte, los impactos sociales del crecimiento urbano y la propia industrialización, pese a sus grandes limitaciones, estimularon el desarrollo de un sector obrero y una clase media urbana cada vez más numerosa, sectores ambos que Balaguer nunca pudo controlar y movilizar compactamente hacia su apoyo político. Finalmente, la industrialización que Balaguer intentó estimular siempre estuvo subordinada al poder de la gran burguesía compradora dominicana, cuyo frente mercantil fueron las importaciones.

6.2.5. La clase ausente: los campesinos y el desarrollo económico

Hasta casi las postrimerías del siglo XX, los campesinos dominicanos constituyeron la clase social más numerosa en la República Dominicana. Sin embargo, puede decirse que también fueron una clase ausente, ya que a lo largo de toda la historia dominicana no han tenido representación política propia de sus intereses. De esta manera, el caso dominicano representa una situación clásica, donde los campesinos se han visto representados por individuos y grupos sociales que asumen dicha representación y por lo general terminan sometiéndolos a un ejercicio político de subordinación hegemónica⁵³.

Pero esa representación subordinada ha sido cambiante en el tiempo. Durante el siglo XIX y principios del XX, los campesinos constituyeron claramente la fuente de generación del excedente económico que pasaban a controlar los comerciantes exportadores, sobre todo en el Cibao, pero eso no se tradujo en fuerza política. De hecho, los campesinos fueron objeto del rentismo y depredación del caudillismo regionalista, engrosaron las filas de los bandos militares regionales, y de su seno salieron

⁵³ Para una visión del problema de la representación política del campesinado, véase a Shanin (1976).

muchos jefes y caudillos, pero como cuerpo social y político se mantuvieron disgregados, ausentes⁵⁴.

La llegada de Trujillo al poder les trajo la esperanza de la reforma, pues con el dictador llegó la paz que liquidó la subordinación predatoria del caudillismo regionalista. Pero la dictadura los sometió a otro tipo de dominio y control, esta vez por el doble camino del control del mercado por parte de las empresas controladas por la dictadura, a través de mecanismos como las fijaciones de precios, y la fuerza del Ejército a escala nacional, así como la articulación de un nuevo tipo de poder local, como las gobernaciones provinciales, los alcaldes pedáneos y el propio Ejército⁵⁵.

De esa forma, si como demuestra Turits los campesinos apoyaron por múltiples vías a Trujillo, a la larga en el mundo rural surgió el descontento social, que corría parejo con el recrudecimiento del control político a finales de los años cuarenta, pero sobre todo debido al endurecimiento del control del mercado por el dictador y el deterioro consecuente del nivel de vida campesino. Como creo haber demostrado en este libro, esto produjo un sistemático drenaje de excedentes mediante el cual la agricultura de base campesina y capitalista financió, en gran medida, el desarrollo del proyecto industrializador por sustitución de importaciones. Aun así, del seno del campesinado no surgió una resistencia política a la dictadura.

⁵⁴ En la historia republicana en cierto modo el único momento en que los campesinos lograron expresarse como un “grupo de presión” frente a los poderes regionales fue el movimiento restaurador en la sexta década del siglo XIX. Dicho movimiento, a diferencia de la acción independentista de 1844, que fue de base esencialmente urbana, tuvo un firme apoyo social en el campesinado del Cibao, como ha sido ampliamente documentado (Cassá, 1977; Moya Pons, 1981), al punto de que Juan Bosch ha calificado el movimiento restaurador como la “verdadera” acción independentista (Bosch, 1970/2009c y 1982/2009f), definiéndola incluso como una guerra social (de base campesina, agregó yo). Véase a San Miguel (1995), que brinda una amplia panorámica sobre el proceso de desarrollo de las economías campesinas en la región del Cibao en torno a la compleja situación que producía en la vida rural las presiones del caudillismo regional en el siglo XIX hasta los inicios del siglo XX. En Crouch (1979) encontramos un análisis más sociológico sobre el desarrollo capitalista en el mundo agrario del Cibao. .

⁵⁵ El texto de Turits (2013) es el más completo para el estudio de la sujeción del campesinado al poder político en el contexto de la dictadura trujillista. Debe también verse a Inoa (1994).

Lo poco que se sabe del mundo rural de esos años indica que políticamente el campesinado bajo las condiciones de la dictadura se mantuvo apoyando al régimen, pese al descontento rural⁵⁶.

Pero, como la evidencia estadística muestra⁵⁷ ya a finales de los cincuenta apuntaba el descontento campesino. Solo la crisis política que se produjo en el país tras el fin de la dictadura frenó el generalizado descontento campesino. El llamado *Informe White*⁵⁸ demuestra claramente que a finales de los sesenta del siglo XX la situación de extrema concentración de la tierra, la agobiante situación del minifundismo precarista y la cada vez más frágil situación del campesino sin tierra⁵⁹ anunciaban un potencial conflicto de peligrosas consecuencias políticas. Los propios expertos norteamericanos se dieron cuenta de ello. Ya desde la finalización del conflicto de abril en 1965 estimularon la emigración de importantes núcleos de campesinos medios hacia Estados Unidos y, un poco más tarde, tras el *Informe White*, estuvieron de acuerdo con los planes de modernización agraria, en particular con la reducción o liquidación del latifundio improductivo. Desde este punto de vista, más allá de las consideraciones que en *El reformismo dependiente* se vierten sobre los determinantes de las leyes agrarias, entre 1972-1974 un factor no menos importante fue el descontento rural ante la crisis general de la agricultura campesina.

En esas condiciones, emergía por primera vez, desde el inicio de la dictadura trujillista en 1930, una situación de crisis que potenció el descontento en el mundo rural y abrió la posibilidad de un cambio histórico en el patrón de representación subordinada, que hasta ese momento mantuvo al campesinado bajo el domi-

⁵⁶ Para una discusión de esta problemática, debe verse a Turits (2013). Para el análisis del papel del trabajo forzado bajo las condiciones de la dictadura, ver a Inoa (1994). El estudio de Moreta (2009) es de los pocos trabajos que permite apreciar la situación del campesinado de la región sur, la más pobre del país. D'Oleo (1983), Dore (1979 y 1982) y Fernández (1986) brindan el panorama social y político del mundo rural en los años setenta y ochenta del siglo XX. Portorreal Liriano (2010) estudia la movilización campesina en los setenta y gran parte de los ochenta.

⁵⁷ Lozano (1985b) y Cassá (1982).

⁵⁸ White y Bradley (1968).

⁵⁹ Rodríguez (1987).

nio de las élites políticas y económicas dominantes. Por primera y última vez los campesinos se vieron en una compleja situación: estaban inconformes con la situación a la que el drenaje de excedentes, que provocaba el dominio oligárquico de la agricultura comercial y el desarrollo industrial, los condenaba; no tenían forma de frenar el proceso de concentración latifundista de la tierra y el peso agobiante de las relaciones de mercado había deteriorado sus niveles de vida. Sin embargo, tras la muerte del dictador en 1961, por primera vez sí tenían la fuerza de sus votos en la nueva situación política que la posdictadura colocaba al país: ahora existía una oposición política que produjo nuevos actores urbanos no ligados al gobierno central, que trataban de ganar el voto campesino, mientras el gobierno bajo el mando de Balaguer, que hasta ese momento decía representarles, estaba concentrado en un proyecto que no solo era “ajeno” al campesinado, sino que claramente había convertido al mundo industrial y los consumidores urbanos en general en los beneficiarios efectivos del drenaje de excedentes al que el campesinado productor estaba sometido.

Este es el telón de fondo que en la primera parte de los años sesenta llevó a Balaguer a tomar la decisión de impulsar una reforma agraria, pero también a modificar la situación calamitosa que en la práctica el proceso de industrialización estaba produciendo en el campesinado. Por ello, los planes de reforma agraria del gobierno balaguerista no se concentraron únicamente en la distribución de la propiedad de la tierra, implicaron un esquema más amplio: 1) por un lado, con la distribución de tierras provenientes del latifundio improductivo, perseguían afianzar la situación de un campesinado medio; 2) con los sentamientos colectivos, se proponían fortalecer la producción arrocerá, base de la dieta urbana y nacional, y 3) se perseguía estabilizar los precios de los productos que integraban la dieta alimenticia urbana, sin provocar grandes desequilibrios en el mundo rural, lo que condujo al subsidio de los productores rurales que sostenían la demanda de bienes agrícolas en las ciudades.

Con ello el régimen balaguerista trató de alcanzar tres objetivos paralelos: 1) frenar el descontento campesino y sostener su apoyo de clase en la política electoral; 2) asegurar la estabilidad

de la dieta obrera urbana, base de su política de constreñimiento salarial en las ciudades, y 3) estabilizar la oferta de bienes de origen rural en las ciudades, clave de una política de captura del voto popular urbano.

Los resultados del esfuerzo balaguerista no pueden apreciarse en una sola dirección. En primer lugar, hoy resulta claro que su objetivo reformador de las estructuras propiamente productivas en la agricultura nacional fracasó. No se pudo integrar a los productores medios a un esquema competitivo de abastecimiento agropecuario de las ciudades. Con el tiempo, los productores medios y pequeños fracasaron y el campo aceleró su despoblamiento, al tiempo que la dependencia urbana del abastecimiento agropecuario terminó trasladándose a las importaciones de bienes agrícolas subsidiados.

Los campesinos pobres y los asalariados sin tierra entraron en una acelerada crisis que los empujó a la emigración, alteró la estructura del mercado laboral rural y creó problemas estacionales de mano de obra para cultivos específicos y regiones particulares. Ello estimuló en un efecto indirecto el acceso de mano de obra inmigrante a cultivos que demandaban mucha mano de obra estacional, como el arroz, el café, el cultivo del tabaco, la producción de tomate, etc.⁶⁰

El sector industrial no logró resolver el problema que se planteó al inicio del proceso de sustitución de importaciones a finales de los ochenta: la producción de bienes salarios baratos a precios estables. El régimen tuvo que acudir al subsidio de la producción agropecuaria local y a las importaciones, lo que tampoco pudo resolver el problema.

Este proceso tuvo profundas consecuencias políticas que afectaron la estabilidad del régimen reformista. Por lo pronto, generó fisuras en el bloque oligárquico que apoyaba sin cuestionamiento a Balaguer. A ello se suma el hecho de que importantes sectores del alto mando militar, también latifundistas, cerraron filas con la clase terrateniente. Finalmente, esto tuvo un efecto inmediato y directo en la oposición política. Tras el anuncio

⁶⁰ Véase a Lozano (2004) y el informe general de la segunda ENI (2017).

de las leyes agrarias, Juan Bosch manifestó que por primera vez se abría una posibilidad para desplazar a Balaguer del poder, dada la fractura que en el bloque en el poder había producido la decisión reformadora de Balaguer. En la izquierda hubo una fisura, pues mientras en el PCD se asumía la defensa de las leyes agrarias, el resto de la izquierda cerraba filas con Bosch en la búsqueda de alianzas con los sectores oligárquicos descontentos con esas medidas gubernamentales. Todo esto se encuentra en la base del primer intento de alianzas políticas desde la oposición para desplazar del poder a Balaguer. Me refiero al llamado Bloque de la Dignidad Nacional, que se desplomó tras la renuncia de Bosch del PRD y la creación del PLD. De todos modos, Peña Gómez mantuvo esta línea de alianzas y articuló el llamado Acuerdo de Santiago, aunque en 1974 finalmente tampoco participó en las elecciones⁶¹.

Vale la pena reflexionar en términos más amplios en torno al porvenir del campesinado en condiciones de desarrollo capitalista dependiente. En el caso dominicano, en la fase moderna de la integración de la economía dominicana al sistema internacional, a través de las exportaciones agropecuarias sobre todo azucareras, el primer hecho relevante es que el campesinado tradicional se integró como un componente subordinado al sector exportador en precarias condiciones de mercado y producción. Cuando se desarrolló un sector campesino productor de bienes agrícolas destinado al mercado interno, dicha integración fue muy localizada regionalmente, controlada autoritariamente por el Estado y en condiciones tecnológicas y de mercado precarias. En algunos rubros se produjo una relativa modernización, como fueron los casos de la producción arroceras y de oleaginosas (maní), integrándose a circuitos monopolistas de tipo agroindustrial controlados por la dictadura⁶². Pero en su generalidad los

⁶¹ Realmente el acuerdo de Santiago no participó en las elecciones de 1974 por la clara conciencia balaguerista de que esa concertación de fuerzas ponía en cuestionamiento la estabilidad de su poder. De ahí la campaña represiva del régimen balaguerista con la oposición, que obligó a esta última a desistir de su participación en las elecciones. Véase a Lozano (2004) y Chaljub (2015).

⁶² Alfonseca (1985).

productores rurales no se beneficiaron mucho del desarrollo del mercado interior, estimulado desde arriba y apoyado en un modelo político autoritario de base estatal.

Lo que en las condiciones clásicas fue un estímulo para la apertura de una vía democrática de desarrollo capitalista⁶³ –el desarrollo del mercado y la diferenciación al interior de las clases campesinas–, en República Dominicana pasó a constituir una suerte de freno al desarrollo democrático y a la larga se convirtió en un factor de disolución del campesinado al forzarlo a una masiva emigración a las ciudades, sobre todo de los campesinos pobres y jornaleros sin tierra, desde el momento en que el despotismo trujillista se desplomó a principios de los años sesenta del siglo XX. Pero ello no produjo ningún efecto político hacia la construcción de un proceso democratizador de las estructuras estatales. Solo cuando el régimen político dictatorial se derrumbó y la crisis política subsecuente fue superada tras la articulación de una vía bonapartista de restablecimiento del orden político, se reconoció la necesidad de la reforma de las estructuras agrarias. Ello condujo a un cierto grado de movilización campesina tras los intentos reformistas de redistribución de la tierra. Pero esto ocurrió en un contexto de transformación de las estructuras agrarias que condujo a un cambio significativo del lugar del campesinado en la economía agraria en el sentido de su disolución. De simples productores rurales con débiles conexiones mercantiles, pasaron a ser productores precarios altamente dependientes de sus relaciones con el mercado, de ahí que los intentos de reforma agraria en vez de mejorar la situación del campesinado con el mercado condujeron al debilitamiento de sus unidades productivas y al final mermaron las posibilidades de la reforma agraria, como vía de integración del campesinado al capitalismo agrario⁶⁴.

⁶³ Moore (1976).

⁶⁴ Para un análisis del proceso de diferenciación campesino y el fracaso de una vía capitalista hacia el desarrollo rural, véase a Crouch (1979). Una visión general de la situación del agro en los años setenta la encontramos en Aquino (1978). Bendezú (1982) brinda un panorama esclarecedor del conflicto social y la situación del campesinado en la coyuntura de las leyes agrarias, pero es D'Oleo (1983) quien realiza quizás el análisis más completo de la situación del agro en esa coyuntura. Dore (1981) y Fernández (1982) son los autores que han analizado más sistemáticamente el proceso político.

Sin embargo, la oposición de las clases terratenientes a la reforma modernizadora del agro con las llamadas leyes agrarias, en particular las leyes de cuota parte y la encaminada a liquidar el latifundio improductivo, si bien abrió un espacio que permitió que la oposición política al régimen balaguerista comenzara a articular alianzas con los sectores más conservadores de la política nacional, obligaron a la clase terrateniente, y en general a lo que he llamado la alianza oligárquica, a su integración al proceso de cambio modernizador de las estructuras capitalistas⁶⁵. Esto ocurrió a través de la integración de la clase terrateniente y el alto comercio exportador a los mecanismos e instituciones financieras que pasaban a controlar el excedente exportador, como creo demuestro en este libro. Las clases dominantes tradicionales vinculadas a la economía agraria se integraban así al eje dominante de la economía, tras el simple traspaso de su poder terrateniente al Estado y su integración como socios subordinados del gran capital financiero, específicamente bancario.

Hubo así una reforma capitalista que integró no solo a los emergentes empresarios vinculados a la industrialización por sustitución de importaciones, sino también a los grupos más tradicionales vinculados a la tierra, el comercio y en general a la producción agrícola y ganadera.

La “reforma” se produjo en muchos sentidos estimulada por los problemas del desarrollo capitalista en la agricultura, pero fue una reforma desde arriba que condujo a una rearticulación

⁶⁵ A lo largo de los años 1972-1974 se produjeron diversas leyes encaminadas a la reforma de las estructuras agrarias. Aun así, la creación del Instituto Agrario Dominicano (IAD) a través de la Ley 5872, que creaba la institución, data de 1962. Las Leyes 436 de 1964, la 134 de 1971 y sobre todo la 126 del 21 de mayo de 1971 definen lo que a partir de esta última se conoce como leyes de cuota parte y se proponían regular el riego. Las leyes propiamente de reforma agraria en el gobierno de los doce años son cuatro, dictadas en 1972: la 290 que traspasaba al IAD tierras arroceras, la 282 sobre tierras baldías, la 314 sobre el latifundio y la 391 sobre los asentamientos colectivos. Lo referido no indica que los esfuerzos formales de reforma agraria se limiten a esos años. En realidad, la reforma agraria en rigor se remonta a los esfuerzos de repartición de tierras del propio Trujillo en los años cuarenta (Turits, 2013) y, como se vio arriba, con la creación del Instituto IAD en 1962 se inician los esfuerzos propiamente modernos encaminados a la reforma agraria.

de las fuerzas políticas en el poder, el fortalecimiento del capital financiero y el desarrollo urbano. Los campesinos de diversas formas estuvieron involucrados a estos cambios –aunque no se beneficiaran de ellos–, ya como productores de excedentes, ya como sujetos políticos pasivos, pero como tales constituyeron una clase ausente.

La crisis del campesinado agrietó la base de masas del balaguerismo como proyecto político. Lo hizo por doble vía: al socavar la base central de su electorado y fracturar la unidad de la élite económica y política que le apoyaba. En esas condiciones, en el último cuatrienio del gobierno de los doce años, las burguesías comercial y terrateniente ligadas al capitalismo agrario comenzaron a ver que sus intereses estaban siendo tomados en cuenta. En fecha temprana, en el año 1969, se dictó una ley de desarrollo agrícola y ganadero, en gran medida impulsada por el empresariado del norte del país, específicamente por el llamado Grupo de Santiago, aunque de hecho los efectos positivos de dicha ley solo se apreciaron al llegar Antonio Guzmán al poder en 1978, pues su gobierno en el plano económico claramente privilegió los intereses del empresariado del norte vinculado al sector agropecuario⁶⁶.

Pese a todo, el sector industrial manufacturero, principalmente su fracción monopolista concentrada en Santo Domingo, mantuvo su predominio hasta el final del gobierno de los doce años. Sin embargo, ese poder se vio mermado significativamente por la fortaleza que iban adquiriendo los intereses agrofinancieros del norte del país, pero sobre todo por la crisis del sector externo que al final del gobierno de los doce años se hizo presente. Con la crisis de las exportaciones, sobre todo azucareras, y el aumento sistemático de los precios del petróleo, el Estado se vio en serias dificultades para sostener el apoyo al sector industrial, al tiempo que toda la economía observó una contracción significativa, apreciada en el descenso de su ritmo de crecimiento.

⁶⁶ Véase la Ley 532 de desarrollo agrícola y ganadero de 1969.

El otro componente significativo de los cambios económicos que se venían produciendo en el país al final del período balaguerista y el inicio del gobierno perredeísta de Antonio Guzmán se reconoce en el surgimiento de un emergente sector empresarial vinculado al turismo, unido al hecho de que en la medida en que el sector industrial interno encontraba dificultades para su expansión y la economía dominicana se orientaba cada vez más al exterior en la esfera de los servicios, el sector importador se dinamizó, lo que modificó tanto la dinámica del mercado interior, transnacionalizándolo, como las fuentes de financiamiento del propio Estado.

6.3. El significado histórico del reformismo dependiente

Para concluir esta reflexión evaluadora del reformismo dependiente como régimen político particular es importante discutir los roles y funciones políticas distintos desempeñado por Balaguer como el líder político que encabezó el gobierno reformista entre 1966 y 1978 y el gobierno de corte populista y conservador entre 1986 y 1996. Esta perspectiva comparativa permite apreciar mejor los límites políticos del bonapartismo balaguerista, y ayuda, a su vez, a deslindar lo propio del bonapartismo, en el ejercicio del liderazgo balaguerista, del producto del modelo político más general; finalmente, permite apreciar la capacidad de adaptación del liderazgo balaguerista a los cambios y situaciones políticas producidos en el largo período de luchas democráticas que va de 1965 a 1996. De esta forma pienso que se pueden distinguir mejor los límites del balaguerismo, como corriente política en el proceso de desarrollo democrático dominicano.

6.3.1. *El gobierno de los diez años: continuidad y ruptura del reformismo dependiente*⁶⁷

El choque permanente con el movimiento social

Tras las protestas de abril de 1984 contra los acuerdos del gobierno de Jorge Blanco con el FMI y el hundimiento de la base de masas del PRD que le fue consecuente, emergió Balaguer como el líder conservador que sacó mejor provecho del descontento político contra el gobierno perredeísta, erigiéndose en líder de la oposición. Dos años después, en 1986, a nadie sorprendió que Balaguer ganara las elecciones regresando de nuevo al poder. Se inauguraba así el llamado gobierno de los diez años (1986-1996). El regreso al poder de Balaguer replanteó, sin embargo, el proceso de cambio democrático, abrió un nuevo capítulo de la transición democrática e inició su segunda fase, que he definido como populista-conservadora⁶⁸.

Se destacan aquí varios asuntos. En primer lugar, el regreso de Balaguer al poder se produce en una situación en que los militares ya no desempeñan un rol de arbitraje y control político directo sobre la oposición política. Las reglas del conflicto político son ordenadas ahora por la competencia electoral más o menos libre. En segundo lugar, si se compara con la situación del gobierno de los doce años, en este nuevo escenario el actor popular no solo tiene mayor capacidad de presión sobre el Estado, sino que se apoya en una mayor organización de la sociedad civil⁶⁹ y opera en un

⁶⁷ Hay muy poca literatura con relación al llamado “gobierno de los diez años”, en el que Balaguer de nuevo gobernó de 1986 a 1996. En mi libro *Después de los caudillos* (2003), hago un análisis comparativo de las dos experiencias de gobierno balaguerista. En mi artículo de 1987 analizo el primer año de gobierno de los diez años. En libros subsiguientes estudio aspectos parciales de ese período: en *La razón democrática* (2013), examino la dimensión cultural de la dominación política en esos años; en *La política del poder* (2017), discuto la coyuntura de crisis entre 1900-1996. Con todo, el mejor trabajo que conozco que aborda en su globalidad ese segundo período de gobierno de Balaguer es el ensayo de Leopoldo Artilles de 2018 publicado en el volumen VI de la *Historia general del pueblo dominicano*, auspiciado por la Academia Dominicana de la Historia.

⁶⁸ Lozano (2003).

⁶⁹ Álvarez, Lozano *et al.* (editores) (2010).

marco más amplio de reconocimiento de derechos sociales. Por ello, el manejo de los conflictos que al régimen político le plantean las presiones del movimiento popular y sindical ya no pueden ser resueltos apelando pura y simplemente al poder represivo, se requiere ahora un esfuerzo hegemónico de convencimiento de los electorados y los grupos fácticos de poder, lo que conduce a la articulación de espacios de negociación, diálogos y acuerdos políticos, como componentes directos de la gobernabilidad. De ahí que instituciones legitimadoras por definición, como la Iglesia católica, adquieran en esas circunstancias una directa y significativa presencia en la escena política y, en los casos de la Iglesia y el empresariado, resulten aliados necesarios del poder central y en particular de Balaguer, con mayor importancia que en el régimen de los doce años⁷⁰.

En esas condiciones, tras su segundo ejercicio del poder (1986-1996), la presencia de Balaguer en la política dominicana remite a un discurso articulado en torno a un nuevo tipo de régimen político. No se apela ahora a la racionalidad bonapartista sostenida en la debilidad generalizada de las fuerzas sociales y políticas dominantes ni tampoco los militares desempeñan un rol articulador fundamental del modelo político. Surge así, por decirlo de alguna manera, un nuevo Balaguer que fundamenta su poder en un discurso populista que se adapta a los nuevos roles que ha asumido el Estado en la transición democrática ante la realidad del fortalecimiento del movimiento popular y los actores de la sociedad civil. También se articula en torno a la figura de Balaguer un discurso conservador de nuevo tipo, que ya no representa una propuesta oligárquica de control del Estado, como lo fue en los años sesenta, ni tampoco un compromiso bonapartista que las excluya del ejercicio de la dominación política del Estado, como en el gobierno de los doce años. Lo que ahora surge es un discurso conservador que asume abiertamente el desarrollismo en lo económico, se apoya en el corporativismo empresarial, que se ha fortalecido frente a los actores populares y democráticos (PRD, sindicatos, organiza-

⁷⁰ Betances (2016).

ciones de la sociedad civil), y se define en torno a la apelación a un esquema de orden de ascendiente conservador, frente a lo que identifica como desorden popular del anterior gobierno (PRD), de ascendiente “socialdemócrata”. Balaguer pasa así de ser el jefe político bonapartista para constituirse en un caudillo populista conservador y autoritario.

Como se aprecia, esta segunda fase de la transición democrática, en el rostro conservador que asume bajo el liderazgo de Balaguer, se produce en medio de un ciclo ascendente de protestas sociales, iniciado en abril de 1984, que comenzó una fase de pérdida de espacio político del PRD como principal partido popular-democrático y en un contexto de fortalecimiento institucional de la sociedad civil. Si bien este declive del PRD en su hegemonía popular es, a mi juicio, la clave de su derrota electoral frente a Balaguer en 1986 no es menos importante que esas fuerzas populares también condicionan el potencial legitimador del nuevo régimen político conservador. Como se verá abajo, este ciclo de protestas se prolonga hasta mediados de los años noventa, donde el proceso de transición “se detiene”. Ahora debemos apreciar que la situación política se articula en torno a un nuevo esquema de reglas institucionales en la política democrática: competencia libre en las elecciones, ausencia de la capacidad de presión política de los militares, garantías institucionales mínimas para el desarrollo de una sociedad civil autónoma, existencia de un sistema de partidos competitivo, entre otros aspectos. A su vez, este ordenamiento político descansa en un patrón de relaciones de fuerzas políticas diferentes: el PRD continúa siendo el partido de mayor presencia política de masas, pero se encuentra internamente dividido y profundamente deslegitimado; el empresariado ha adquirido un gran espacio de autonomía corporativa y se constituye en un grupo de presión determinante en la política de partidos. De ahí que en su apoyo a Balaguer como líder populista conservador, alternativo a la fuerza del PRD, además de constituir un pilar determinante de la legitimidad del nuevo régimen, el fortalecimiento corporativo del empresariado indica que había ganado autonomía frente al Estado y su potencial negociador ante este se había fortalecido.

Finalmente, permite apreciar que comienza a emerger una tercera fuerza, que al inicio de los años noventa se constituirá en una fuerza política alternativa tanto al PRD como al reformismo balaguerista, me refiero al PLD.

Por lo discutido en el presente párrafo, el gobierno de los diez años asume características distintas a las propias del régimen bonapartista de los doce años. Sin entrar en una discusión más profunda al respecto, la comparación por lo menos debe conducirnos a destacar tres asuntos: 1) Balaguer inicia el gobierno de los diez años en una coyuntura de ascenso del movimiento social, mientras en la segunda mitad de los sesenta el gobierno balaguerista inicia su gestión en una coyuntura de reflujo, derrota y persecución del movimiento social; 2) el poder corporativo empresarial en el inicio del gobierno de los diez años es significativamente mayor, y sobre todo más autónomo a la intervención del Estado, mientras que en el período de los doce años el empresariado era un sujeto esencialmente dependiente del proteccionismo estatal, por tanto el poder negociador del empresariado es mucho mayor en el gobierno de los diez años; 3) finalmente, durante el gobierno de los diez años Balaguer opera en un contexto político plural, caracterizado por la acción populista donde el elemento militar ya no representa el factor de cohesión del Estado, desplazándose hacia la capacidad de hegemonía de los actores políticos, respecto a la voluntad de los electores, a lo que debe agregarse los equilibrios entre los poderes del Estado democrático (gobierno, congreso y sistema de justicia).

El balaguerismo como actor “democrático” conservador

En 1966 Balaguer se enfrentó a la necesidad de restablecer el necesario equilibrio entre las fuerzas y fracciones de las clases dominantes para poder impulsar un régimen político alternativo al trujillismo. Para ello enfrentó dos asuntos centrales: la crítica división de las fuerzas militares herederas de la dictadura y la incapacidad de la clase dominante de agenciarse una base política propia. A ello se unía la irrupción de un actor popular que demandaba participación social y el surgimiento de nuevos ac-

tores políticos que presionaban por la apertura democrática. La respuesta balaguerista, apoyada por Estados Unidos, fue el bonapartismo. En el campo económico la respuesta de Balaguer fue el dirigismo estatal.

Ocho años después de su salida del poder en 1978, al regresar al poder en 1986, Balaguer se enfrentó a un movimiento social con mayor organización y desarrollo político, pero el movimiento democrático estaba disperso y en proceso de transformación interna, tras la crisis del principal partido popular-democrático (PRD). La respuesta a esta situación por parte de Balaguer fue la retórica conservadora del orden⁷¹, unida al discurso desarrollista de base estatal⁷². En esos años, en la medida en que Balaguer articulaba su dominio del poder central, enfrentó en esencia dos grandes problemas, a los que nunca pudo brindar respuesta coherente, como sí lo hizo en su experiencia de gobierno de los doce años: la presión social dirigida hacia un Estado en crisis y con menor poder económico y la transformación neoliberal de la economía y la sociedad, a la que el Estado y el propio Balaguer tuvieron finalmente que adaptarse. La historia del gobierno de los diez años es la historia de ese proceso de adaptación nunca resuelta.

El poderoso movimiento social que desde su regreso al poder en 1986 enfrentó Balaguer no era el resultado de la oposición de las fuerzas democráticas al autoritarismo balaguerista, como lo fue en los años setenta. Era el producto de una sociedad civil más madura e institucionalmente más organizada en el manejo de sus conflictos con el Estado. En esas condiciones, el movimiento social representaba un producto –si cabe el término– de “larga duración” donde el movimiento social que apoyó el ascenso del PRD al poder y lo sostuvo hasta abril de 1984, desarrollaba ahora un repertorio más amplio de reivindicaciones en el que los derechos sociales de nueva generación comenzaban a materializarse en su concreción societal. Luchas por una mejor educación, la calidad de los servi-

⁷¹ Lozano (1987).

⁷² Godínez y Máttar (2009).

cios de salud, derechos de género, etc., se daban cita en la acción cuestionadora al nuevo régimen que pasó a presidir Balaguer⁷³.

Sobre todo, el movimiento se desplazaba en un contexto político que apuntaba a una cultura reivindicativa y de derechos, no a un modelo defensivo de sobrevivencia política. La respuesta inteligente de Balaguer no pudo ser en ese contexto la represión, sino la negociación e incluso la pretensión hegemónica que trataba de asumir el repertorio movilizador de la sociedad civil, como “algo” propio del balaguerismo, pero en un marco menos radicalizado, en cuyo caso de lo que se trataba entonces era de hacer un esfuerzo por “el justo medio” donde Estado y sociedad pudieran encontrarse, pues, de acuerdo con ese discurso, “compartían” un horizonte común. Aun así, con esa estrategia Balaguer nunca pudo frenar el ciclo de protestas que se desplazó a lo largo de sus diez años de gobierno entre 1986 y 1996.

A la imposibilidad de cooptación del movimiento social, se añadía un segundo nivel de dificultades que enfrentaba el régimen, esta vez producto de la propia voluntad del presidente Balaguer. Nos referimos a la insistencia gubernamental en sostener un agresivo programa de inversiones en infraestructura en una coyuntura de severa crisis fiscal, ante la crisis del modelo de crecimiento exportador tradicional que sostenía la industrialización por sustitución de importaciones en franca decadencia. Balaguer insistía en el industrialismo, pero lo cierto es que el Estado ya no contaba con recursos y capacidades para sostener esa tarea: las exportaciones azucareras estaban en crisis, el sector energético requería su modernización, los recursos fiscales encontraban severas restricciones ante la crisis de la deuda⁷⁴, todo lo cual produjo un serio agrietamiento de las idílicas relaciones entre empresariado y gobierno central que inicialmente caracterizaron el gobierno de los diez años.

En condiciones llamémosle “normales” debía esperarse que el PRD, como principal partido popular-democrático, ahora en la oposición, recuperara fuerzas, reagrupara a su electorado de

⁷³ Artiles (2010) en Álvarez, Lozano *et al.* (2010).

⁷⁴ Godínez y Máttar (2009).

masas tradicional e iniciara un ciclo de ascenso que lo condujera a recuperar el poder. Pero el PRD se encontraba a su vez envuelto en una severa crisis interna, iniciada en 1984 en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, la cual mantenía sus efectos corrosivos a nivel interno. A mi criterio, por ello el creciente descontento ciudadano fue fortaleciendo un partido emergente, el PLD liderado por Juan Bosch. De esta forma, en 1990 el contendor de Balaguer fue el PLD como partido y Juan Bosch como su candidato. Al PRD, y en particular a su líder Peña Gómez, le tomó casi diez años recuperarse de la derrota de 1986 y en 1994 resurgir como la fuerza opositora que podía desplazar del poder a Balaguer. Pero, más allá del fraude perpetrado contra Peña Gómez en ese año⁷⁵ y los resultados electorales de 1996, se impuso una nueva realidad materializada en una nueva conformación de fuerzas político-partidarias: la alianza de Balaguer con su antagonista histórico el PLD y Juan Bosch y el inicio de una nueva hegemonía bajo el liderazgo de dicho partido. Solo de ese modo, el líder conservador reformista logró detener el ascenso hacia el poder de Peña Gómez y su propuesta socialdemócrata⁷⁶.

Finalmente, debe destacarse que, a diferencia de los conflictos gobierno/empresariado que fueron propios del régimen de los doce años, ahora el conflicto no enfrentaba simplemente al gobierno con fracciones o grupos empresariales específicos o aislados, sino con el cuerpo empresarial corporativamente organizado y sobre todo como un “conjunto de clase”⁷⁷. Al final del gobierno de los diez años, cuando Balaguer y el empresariado negociaron en 1990 un acuerdo global, se hizo evidente que lo que estaba en juego no era ya un conjunto de diferencias puntuales, a propósito de una o varias políticas públicas impulsadas por el gobierno cen-

⁷⁵ Díaz (1996).

⁷⁶ En *La política del poder* (2017) analizo con cierto detalle el alcance de la crisis de 1994-1996 y discuto la conformación de la nueva situación a que los resultados electorales de 1996 condujeron al sistema de partidos y la política democrática en el país.

⁷⁷ Vale decir: como un grupo social de orden superior –en el sentido en que Ossowsky (1972) define a las clases sociales–, con identificación de intereses comunes, y apoya su representación en un cuerpo organizativo caracterizado por un determinado comportamiento o proceder político.

tral, sino dos esquemas de desarrollo: de un lado un modelo estatista de dirección del desarrollo, y, del otro, una nueva concepción neoliberal, que no solo exigía la apertura de la economía para la exportación de servicios en áreas emergentes, como el turismo y las zonas francas, formulaba también una nueva visión del Estado que requería de su “retirada” de esferas centrales del desarrollo, como el sector energético y la empresa azucarera, al tiempo que impulsaba un esquema desregulador de los mercados y una reforma radical de los mecanismos tradicionales de tributación y manejo fiscal de los recursos públicos⁷⁸.

De todos modos, no debe perderse de vista que la resistencia balaguerista al desarrollo de un modelo abierto de crecimiento en una perspectiva neoliberal no constituía simplemente un desacuerdo doctrinario. El problema era esencialmente político. Balaguer no aceptaba la restricción del poder estatal sobre el mercado, que el modelo neoliberal asumía como un axioma de su propuesta, sobre todo porque eso implicaba, como de hecho se produjo, la reducción del poder del viejo caudillo y de su fracción política. Por esta razón, Balaguer resistía “doctrinalmente” el recorte del tamaño del Estado y el constreñimiento de su poder de intervención y ordenamiento del mercado⁷⁹. Por ello, los acuerdos de 1990 del gobierno con el alto empresariado marcaron el final del desarrollismo estatista como estrategia de desarrollo dirigido “desde arriba”.

Lo afirmado no indicaba que el Estado había perdido su presencia en la dinámica de la economía, simplemente estableció una rearticulación en la dinámica reguladora del proceso económico, al flexibilizar el papel del trabajo, otorgar mayores libertades al empresariado en el control de los mercados y establecer un nuevo esquema ordenador de las relaciones Estado/sociedad. En ese reacomodo estatal frente al mercado, la tributación que se impuso vía el consumo, a la larga, terminó otorgando al Estado una mayor capacidad fiscal frente al conjunto de la sociedad, aunque produjera

⁷⁸ Godínez y Máttar (2009).

⁷⁹ He desarrollado sistemáticamente este argumento en dos de mis libros, específicamente en *La razón democrática* (2013) y en *La política del poder* (2017).

una mayor autonomía de la élite política colocada en la dirección del Estado y, como tal, recompusiera sus relaciones con el empresariado. Lejos de ello traducirse en el desarrollo de una política de bienestar, terminó imponiendo una lógica clientelar de control social, vía la implementación de programas focales dirigidos hacia los pobres.

El pacto neoliberal y la “retirada” del Estado

El ocaso del reformismo dependiente se hizo evidente tras la derrota electoral de Balaguer en las elecciones de 1978. Sin embargo, como líder conservador se recuperó parcialmente en 1986, y resurgió de nuevo en la política nacional, esta vez como el líder conservador que aglutinó a la derecha política que venció al PRD en las elecciones de ese año. Pero ese liderazgo se vio obligado a jugar con otras cartas y hablar otro lenguaje. De esta forma, un Balaguer realista se adaptó a las reglas de la competencia democrática y armó un nuevo discurso: ciertamente populista, pero de factura conservadora.

Más allá de la adopción formal del canon democrático, desde su regreso al poder en 1986 el balaguerismo enfrentó obstáculos muy diferentes a los que hubo de vencer el mismo régimen en 1966, como se ha discutido. Por lo pronto, tras los acuerdos con el FMI en 1984 estaba claro que el país avanzaba hacia un nuevo modelo de inserción en la economía mundial, que demandaba la apertura hacia afuera en actividades de servicios, como el turismo y las zonas francas. Los ajustes producidos tras los acuerdos con el FMI en 1984, pese al trauma social de la revuelta de ese año, con el tiempo le permitieron a Jorge Blanco ordenar las cuentas nacionales y restablecer la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, tras su regreso al poder dos años después, Balaguer trató de restaurar el viejo modelo desarrollista de base estatal al impulsar una agresiva política de gastos e inversiones públicas. Pero, en esta ocasión, la base financiera del Estado se encontraba con una economía exportadora tradicional en declive y sectores empresariales emergentes que luchaban por imponer su hegemonía. El resultado fue la crisis fiscal del Estado, problemas de

escasez en el mercado de los combustibles, el desabastecimiento en importantes rubros de la canasta alimentaria y el resurgimiento de la inflación⁸⁰.

Aunque los impactos de la transformación neoliberal de la economía y sociedad dominicanas se verían plenamente más tarde, tras el ascenso del PLD al poder, ya en las postrimerías de los años ochenta del siglo XX se podía apreciar importantes transformaciones. Por lo pronto, el mundo del trabajo había sufrido significativos cambios. Los núcleos obreros organizados en torno a la industria por sustitución de importaciones y la producción azucarera, se habían desestructurado, su poder corporativo (sindical) era prácticamente nulo y su peso en la economía se había reducido. El mercado laboral se había “flexibilizado” con la consecuente informalización del mundo del trabajo y la inestabilidad y precariedad laboral que le es típica⁸¹. La gran masa trabajadora, que antes encontraba alternativas ocupacionales en la esfera productiva, ahora fluctuaba en cambiantes actividades de servicios profundamente inestables ocupacionalmente y con baja remuneración. A ello se agregaba la crisis de la economía campesina en proceso de desaparición⁸² y un profundo reordenamiento del mercado laboral rural hacia donde se orientaban ahora importantes flujos de trabajadores inmigrantes procedentes de Haití⁸³.

Por su lado, las clases medias estaban envueltas en un significativo proceso de transformación. La década perdida, como se le llamó a los años ochenta, había reconfigurado la composición de estos sectores. En la mayoría de sus miembros se había producido un deterioro de su nivel de vida y un descenso de sus

⁸⁰ Godínez y Máttar (2009).

⁸¹ Carnoy (2001).

⁸² Bendeزú (1982).

⁸³ Para una visión del papel de la inmigración en la nueva estructura económica dominicana, tras las reformas neoliberales, véase a Lozano y Wooding (editores) (2008). Una visión integral de los cambios del orden mundial tras la globalización la brinda Castells (1997). Para la discusión del impacto de la globalización en la escena latinoamericana debe verse a Calderón *et al.* (2003).

niveles sociales. Muchos de ellos habían pasado a ser miembros de los sectores populares y pobres, otras habían entrado en una situación de incertidumbre laboral y de ingreso que desestabilizaba su situación. Pero un pequeño grupo, al calor de la creciente importancia de los servicios, del cada vez mayor peso de la actividad financiera y el fortalecimiento de un mercado de alto consumo, había mejorado su situación de vida en materia de ingresos y nivel de vida⁸⁴.

El empresariado había sufrido una significativa transformación no solo porque ahora su liderazgo se encontraba en la esfera de los servicios (turismo y zonas francas), sino porque la propia composición económica y social empresarial lo hacía menos dependiente del Estado. Naturalmente, el empresariado continuaba requiriendo del Estado un apoyo significativo en materia infraestructural, energía y exenciones fiscales, pero muy posiblemente por la orientación de su esfera de actividad tenía ahora un mayor margen de autonomía. El turismo es el ejemplo típico, donde su mercado es por definición internacional, lo mismo puede decirse de las zonas francas, aunque en este caso dicho mercado sea menos diversificado. Quizás lo más significativo era que el propio Estado había perdido poder económico al fortalecerse el sector privado. Al final del gobierno de los diez años, el Estado se vio obligado a iniciar formalmente un proceso de privatización en el sector eléctrico, el cual culminaría con el nuevo gobierno que presidiría a partir de 1996 Leonel Fernández del PLD.

Desde la perspectiva de la gestión de la economía en su conjunto en su dimensión reguladora, al final del gobierno de los diez años, se hizo claro que el Estado pasaba a tener un rol más restringido en el ordenamiento de los mercados, en parte consecuencia de la reducción de su poder empresarial a partir del proceso de privatización, pero sobre todo como consecuencia de la nueva ingeniería institucional que la reforma neoliberal impulsaba en la esfera tributaria, la gestión de servicios y la organización y gestión

⁸⁴ El estudio de Guzmán (2012) es a la fecha el más completo sobre las transformaciones de las clases medias.

burocrática de los aparatos estatales⁸⁵. En lo primero, la liberalización de la economía y su creciente orientación hacia afuera apoyada en los servicios modificó las fuentes impositivas que generaban los excedentes que sostenían la gestión estatal; ahora se trataba sobre todo de una estrategia impositiva apoyada en las importaciones, pero sobre todo en el consumo y producción internos. En segundo lugar, en la gestión de servicios el enfoque neoliberal predominante condujo a la privatización de la producción de energía eléctrica en un modelo híbrido de producción y distribución que imbricaba al capital privado (nacional y extranjero) y el propio Estado. El proceso privatizador afectó también el sector salud, donde el sistema de seguridad social en la esfera de los servicios pasó a tener una creciente participación del sector privado en aquellos que cubrían la demanda de las clases medias, acompañado de un modelo hospitalario asistencial para la población vulnerable y pobre. Finalmente, la gestión burocrática del Estado comenzó a sufrir transformaciones.

Al final del gobierno de los diez años Balaguer se vio forzado a aceptar estos cambios, pero fue la nueva gestión gubernamental la que propiamente los impulsó. Al final del gobierno de los diez años se produjo un acuerdo entre el alto empresariado y el

⁸⁵ La CEPAL (2001) y Godínez y Máttar (2009) han planteado con claridad el alcance de las reformas de los noventa para el desarrollo económico dominicano en la última década del siglo XX. Propiamente entre 1990 y 2001 se entraron en vigor las siguientes leyes que reformaron el andamiaje institucional del Estado dominicano. En primer lugar, en materia arancelaria se produjeron tres reformas: la de 1990, la de 2001 y la de 2003. En 1990 se aprobó la llamada Ley 8-90 sobre fomento de zonas francas; en 1992 se produjo la ley de reforma fiscal 11-92 (Código Tributario). En ese mismo año se efectuó la reforma laboral con la Ley 16-91 que aprueba el Código de Trabajo; mientras en 1995 se aprobó la Ley 16-95 sobre Inversión Extranjera. La reforma del sector educativo se realizó en 1997 mediante la Ley General de Educación 66-97, y en ese mismo año se aprobó la Ley de Reforma de la Empresa Pública 141-97. En 1997 también se aprobó la ley reguladora de las privatizaciones (Ley 141-97). Al año siguiente en 1998 se dictó la Ley General de Telecomunicaciones 153-98 y al siguiente año 1999 se produjo Ley 84-99 de Reactivación y Fomento de las Exportaciones, seguida en 2000 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Finalmente, en 2001 se aprobó la Ley de Incentivo Turístico 158-01. Para un análisis del impacto de este nuevo marco normativo del Estado y los mercados, véase a Lozano (2017), pp. 213-230, y a Godínez y Máttar (2009), quienes discuten en particular el impacto macroeconómico de la reforma del Estado.

Estado, en virtud del cual se inició un significativo proceso de cambio de la gestión económica del Estado en la esfera tributaria y la privatización de la economía sobre todo en el sector energético y la producción azucarera. De esta forma, la transformación neoliberal de la economía dominicana al final del siglo XX no la inició una fuerza política nueva y reformadora, sino una fuerza política conservadora, verticalmente controlada por un liderazgo caudillista clásico⁸⁶. Pero eso, como he indicado arriba, no se produjo sin resistencia del liderazgo político, en concreto del propio Balaguer⁸⁷.

Los cambios descritos tuvieron sus impactos en la sociedad en su conjunto. Aumentaron los niveles de desigualdad en la distribución de los frutos del crecimiento económico y, en particular, agrietaron los niveles de bienestar de las clases medias al empobrecer sus sectores más vulnerables. La sociedad se hizo más individualista y fragmentada y se abrió una nueva cultura consumista estrechamente vinculada al proceso de transnacionalización que sufría el país, en el marco de la dinámica de la globalización. Otro país había nacido.

6.3.2. *Modernización desde arriba y autoritarismo*

La figura de Joaquín Balaguer atraviesa toda la historia política dominicana moderna. No se trata simplemente de la indudable fuerza carismática del líder conservador sobre buena parte de los principales momentos de construcción del Estado dominicano “moderno”. En la misteriosa y casi mítica figura de Balaguer de alguna forma se resumen, y casi encarnan, las características centrales del Estado dominicano, del liderazgo político alineado desde el centro hacia la derecha y de alguna manera también muestra los límites del conservadurismo político, como propuesta de organización y reforma del Estado tanto si se aprecia en la perspectiva del desarrollo democrático como desde la propia del desarrollo económico. Más allá de la

⁸⁶ CEPAL (2001).

⁸⁷ Despradel (2005).

anécdota y la seducción que produce a muchos la figura de Balaguer, como del acre rechazo que genera en la tradición liberal, debe estudiarse y sobre todo aprender de él, no tanto de su pensamiento político, que como tal es relativamente simple, tradicional en su “clasicidad” conservadora fuertemente arraigada a una prolongada tradición autoritaria, sino sobre todo apreciar las lecciones de su desempeño como jefe político, su capacidad de gestión burocrática centralizadora del Estado y su indudable maestría en el manejo del conflicto político. En una palabra, debemos asumir la figura de Balaguer como una pieza importante para la comprensión del proceso de construcción del Estado dominicano contemporáneo, visto como el eje articulador de la opción histórica por el desarrollo autoritario desde arriba, el gran demiurgo que propició la modernización conservadora, si cabe el término. Por el lugar ocupado en esas estructuras del poder central, Balaguer ha resultado una figura clave del manejo de la capacidad estatal para impulsar el crecimiento y cohesionar a los actores empresariales, también ha devenido en el componente central de una política de contención de las presiones de las clases peligrosas en un complejo modelo de controles que ha ido desde la represión burda y directa hasta sofisticados esquema clientelares y populistas.

Finalmente, de muchas maneras, ciertamente, en Balaguer se sintetizan los procesos de resistencia al cambio democrático, pero también se aprecian los mecanismos adaptativos de las élites conservadoras, sobre todo de las capas burocráticas y militares del Estado, para asimilarse a los mismos procesos. Por lo general, la experiencia de Balaguer al frente del Estado, bajo su estímulo directo o indirecto, ha fortalecido esquemas conservadores y autoritarios que someten las instituciones propias del orden democrático a un proceso de control elitista que neutraliza en muchos casos la voluntad democrática de la población y casi siempre produce resultados “eficaces” conducentes al control personal y privado de los aparatos de Estado en esquemas neopatrimoniales y clientelistas. Esa es la otra lectura del proceso democrático dominicano que debe ser pensada.

La modernización bloqueada

Como he insistido, de múltiples formas y por diversas vías el Estado dominicano ha sido el demiurgo del cambio social en la República Dominicana. El reconocimiento de este hecho en la perspectiva de la historia económica de occidente no es una novedad. En su estudio clásico sobre el atraso y la industrialización, Gerschenkron (1968) demostró que, en general, tras las experiencias iniciales de industrialización con Inglaterra a la cabeza y, en segundo lugar, Estados Unidos y Francia, las posteriores experiencias industrializadoras en Occidente, comenzando por Alemania, encontraron en el Estado su agente impulsor, sobre todo en Rusia y a partir de allí en la industrialización de la Europa del Este e Italia⁸⁸. El caso dominicano no escapa a la regla de la intervención del Estado como agente central del desarrollo industrial. La novedad dominicana es que ese “intervencionismo de Estado” no solo articuló la primera fase de la industrialización por sustitución de importaciones, sino que lo articuló en base a una modalidad monopolista donde Trujillo fue el principal y casi único empresario industrial, pero también el agente político que controlaba el Estado⁸⁹.

La industrialización trujillista fue de base estatal en lo económico y en lo político cohesionada por un modelo autoritario y despótico. Este raro fenómeno impuso un modelo desarrollista donde el Estado pasó a ser el origen y destino final del crecimiento, si pensamos el Estado como un proyecto cuasipersonal del propio dictador. Lo que más se acerca a esta experiencia en la historia moderna es el caso de Rusia con su tradición despótica bajo el dominio de los zares, o tras su experiencia socialista bajo el control

⁸⁸ En la historia económica del capitalismo, el Estado ha desempeñado un papel determinante en su dinámica de desarrollo. En esa historia las experiencias estatales autoritarias de desarrollo capitalista tal vez sean las que trazan la norma y las excepciones las vías democráticas, como ha demostrado Barrington Moore (1976). Para el análisis histórico comparado de las experiencias de industrialización y el papel del Estado, debe verse a Gerschenkron (1968). Para América Latina en particular, debe verse a Bulmer-Thomas (1998), quien presenta el panorama general. El análisis de los obstáculos a la industrialización está agudamente analizado por Fajnzylber (1983).

⁸⁹ Cordero Michel (1975) y Bosch (1961/2009a).

autoritario bolchevique. En Santo Domingo los pocos espacios que quedaban libres para un crecimiento discreto de las clases terratenientes y comerciantes condenaba a estos sectores a ser débiles y en permanente dependencia del Estado. Bajo esas circunstancias, resulta claro el ímpetu oligárquico por el control del Estado, tras el fin de la dictadura trujillista en 1961.

Bajo el control absoluto de los sectores modernos de la economía por parte de la dictadura, claramente el eje más moderno del sector externo, base del financiamiento a la industrialización por sustitución de importaciones, el azucarero, también quedó predominantemente en manos del dictador Trujillo⁹⁰. Todo el esfuerzo oligárquico posterior a la muerte del dictador se concentró precisamente en ese punto: transferir hacia el sector privado las empresas del emporio trujillista que había heredado el Estado. Por eso, cuando la oligarquía dominicana se opuso a Bosch, no lo hizo porque planteara una política de conciliación nacional, muy adelantada para la época, sino porque su programa de reformas y modernización social no contemplaba el traspaso de la riqueza estatal recién heredada hacia el sector privado. La esencia de la crisis hegemónica de esos años difíciles, que culminaron en una guerra civil, se encuentra quizás en ese punto.

En ese sentido, el programa industrializador que impulsó Balaguer en base a la sustitución de importaciones no solo estimulaba el surgimiento de un nuevo empresariado alrededor de la industria, también frenaba el potencial de crecimiento económico de las empresas estatales. Podría decirse que materializaba el objetivo estratégico de la oligarquía, pero en un formato político con dirección estatal. En otras palabras, en esta estrategia los beneficios del crecimiento económico eran privados, pero su control político permanecía en manos estatales. Visto de esa manera, lo nuevo aquí era el lugar que ocupaban los agentes del desarrollo: se asignaba al empresariado la administración

⁹⁰ A partir de 1952 solo tres ingenios (propiedad de la familia Vicini) quedaron fuera del emporio trujillista, a lo que se añade el Central Romana, propiedad de la Porto Rico Sugar Company. Sobre el particular véase a Del Castillo, Puig *et al.* (1975) y García (2010).

y los beneficios del crecimiento, pero el proceso en su conjunto era controlado por el Estado. De esta forma, se mantenía un esquema autoritario, pero negociado entre las fuerzas económicas emergentes estimuladas por el Estado y las camarillas políticas y Balaguer, que controlaban la dimensión política del proceso. Uno no debe engañarse, bajo este esquema la gestión del crecimiento mantenía su sello autoritario y dirigido desde arriba, el patrimonialismo de Estado, en gran medida, se acentuaban como pieza clave de la transferencia de excedentes hacia el sector privado, pero se articulaba un esquema de relaciones políticas de permanentes equilibrios entre Estado, sectores empresariales y actores políticos, que denomino bonapartismo.

De todos modos, la capacidad de expansión de los nuevos actores empresariales era limitada, estaba sujeta en última instancia al poder de actores tradicionales como el gran comercio importador, la banca y, en menor medida, la fuerza de actores económicos más tradicionales, como la burguesía agraria y la clase terrateniente. Cuando el sector externo, sobre todo azucarero, entró en crisis, el dinamismo industrial se estancó. Pero en los ochenta no puede olvidarse los cambios sufridos en el entorno internacional, los efectos locales del aumento de los precios de los hidrocarburos, en una palabra: el inicio de la década perdida. Esta nueva situación vino a ser administrada por fuerzas políticas de ascendiente popular-democrático, el PRD con el apoyo de fracciones empresariales más vinculadas al sector agropecuario y los emergentes servicios de la economía del turismo que despuntaban.

En ese nuevo escenario de crisis del sector externo tradicional, la presión democratizadora impuso una apertura política que amplió en la práctica el espacio de participación y negociación de los actores populares y democráticos, en un contexto donde la dirección política de ese *proto sujeto* democrático y popular alcanzó el poder, lo cual alejó aún más la posibilidad de realización exitosa del asalto oligárquico al poder económico del Estado.

La vuelta al poder de Balaguer fue el resultado de la crisis de los sujetos políticos democráticos. Pero al verificarse en un contexto muy distinto a los años 1966-1978, la gestión balaguerista se movió

en una doble tensión: de un lado, mantener su poder de masas en una situación donde su base política tradicional, el campesinado, se encontraba en crisis y disolución y responder a un movimiento social ascendente con una capacidad autónoma de presión sobre el Estado. Por este lado, el balaguerismo trató de responder a esta doble presión al activar una suerte de keynesianismo conservador que, en medio de la precaria situación fiscal del Estado, condujo a la crisis económica. Por otro lado, a la larga, se vio obligado a asumir la propuesta alternativa a la crisis fiscal del Estado, tras el agotamiento del desarrollismo estatal de base industrial, un compromiso de apertura económica y una reingeniería institucional del Estado de ascendiente neoliberal.

En esa nueva situación, el balaguerismo, como opción histórica, puede decirse que ha muerto. Sin embargo, su última respuesta a los cambios políticos y económicos fue de orden esencialmente político: la alianza con las fuerzas de izquierda que hasta ese momento representó el PLD, lo cual reconvirtió, de ese modo, el tramado político del país. Por un lado, al dejar libre el espacio de la izquierda, que no fue llenado ni por la izquierda tradicional ni por el PRD, como fuerza política de ascendiente socialdemócrata. Por otro lado, llevó al PLD a constituirse en un partido de corte populista y conservador, que condujo a una reconversión de la política de masas y desarrolló un nuevo esquema de control y dominio clientelar del movimiento social, esta vez por la vía de un eficiente esquema prebendalista de control social y un modelo corporativo de organización del Estado y la política de partido, que lo condujo a afirmarse en el poder por espacio de dos décadas.

Aquí cabe una reflexión general en torno a la experiencia de la industrialización por sustitución de importaciones y sus impactos en el desarrollo.

La globalización rompió los supuestos centrales de las teorías del desarrollo en sus versiones marxistas clásicas, estructuralistas y neoclásicas, y puso sobre la mesa de discusión un replanteamiento de algunos puntos hasta ese momento vistos como verdades “evidentes”: a) la idea del trabajo productor de valor ya no se sostiene en su identificación con la producción agraria, minera e

industrial. b) Los servicios surgen ahora como un componente no solo dinámico en el proceso de crecimiento, sino como un sector productor de valor. c) Esto último nos lleva claramente al debate sobre el papel del conocimiento en el funcionamiento de la economía global y la dinámica de la sociedad de la información⁹¹.

Entre los muchos aspectos que esta cuestión trae consigo debe asumirse que hoy hay un total cuestionamiento de la teoría del desarrollo, como un proceso que asume una dirección única y universal. En su defecto la realidad de la globalización obliga a reconocer mecanismos múltiples de crecimiento y bienestar.

Lo que queda de la “competencia” se desplaza hacia el mercado mundial en la totalidad de sus momentos y el concepto de mercado interior tiene forzosamente que ser reformulado. Si esto es así, y los mercados no pueden continuar siendo vistos como parte de un horizonte relativamente protegido por los Estados-naciones, la función de la inversión extranjera se modifica. Y aquí se reconoce una limitación del enfoque presentado al respecto en *El reformismo dependiente*, extensible a todos los estudios histórico-estructurales de la época: su horizonte estrecho en el análisis del papel de la inversión extranjera. En el caso dominicano al menos algunos puntos quedan claros: por el camino del análisis que sitúa al sector industrial como el eje central del desarrollo, no se podía prever el papel de líder del proceso de desarrollo del sector turismo.

Las alianzas sociales y políticas que sostienen las estrategias de desarrollo cambian de dirección, pues ahora la autonomía del Estado se amplía y por ello la hipótesis de Cardo y Faletto⁹² del papel de las élites burocráticas en el Estado como actor del desarrollo se afirma. En el caso dominicano es claro que el empresariado industrial nacional se ha debilitado y casi desaparecido en su definición clásica. En ese marco, las élites políticas adquieren un papel central en la conducción del proceso de crecimiento y la definición de estrategias de desarrollo en el campo social y ambiental.

⁹¹ Carnoy (2001) brinda una excelente panorámica acerca de los cambios del mundo del trabajo en la sociedad de la información. El referente general para una visión de las transformaciones del orden mundial, tras la globalización, es Castells (1997).

⁹² Cardoso y Faletto (1971).

Finalmente, a modo de síntesis, en el caso dominicano debemos destacar tres dimensiones del proceso de desarrollo, a partir de la premisa inicial de una subordinación histórica de los sujetos empresariales a la dirección del Estado: 1) el carácter profundamente oligárquico de la organización corporativa y el control de los mercados del empresariado dominicano moderno, 2) su permanente dependencia del capital extranjero y 3), finalmente, la reiterada necesidad de un modelo de control del proceso de acumulación donde la competitividad global del crecimiento económico no depende de la eficiencia tecnológica, sino de una mano de obra barata y dócil⁹³, como también de variables “monopolistas” en torno a la generación de rentas y lógicas de protección. En esos tres niveles, el reformismo dependiente constituyó el modelo clásico, pero también el ejemplo más claro de las limitaciones de esta estrategia.

Los límites autoritarios de la construcción democrática

El significado del balaguerismo para la modernidad dominicana no es sobre todo económico, sino político. Y eso no debe olvidarse. Es cierto que en un país Estado-céntrico, para emplear la expresión de Garretón⁹⁴, los límites entre economía y política son difusos y muchas veces parecen indicar que la política traza el curso de la economía y no lo inverso, como predica el canon clásico. Aun así, hay dos asuntos que deben guiar la reflexión: a) los efectos de las decisiones políticas no solo inciden en la esfera de lo político, sino también de lo social y lo económico y por esta vía, a su vez estimulan nuevas situaciones, que muchas veces reorientan el curso de lo económico, y b) el contexto internacional en que se produce la acción política y económica en el Estado-nación determina muchas veces los límites y posibilidades de la acción estatal,

⁹³ En este punto la cuestión de la inmigración de mano de obra haitiana se torna estratégica para la sostenibilidad competitiva del conjunto de la economía y del proceso de acumulación. Sobre este punto en particular véase a Báez Evertsz (1986). Una reflexión más general es la de Corten (1989).

⁹⁴ Garretón (1977).

que es la instancia a través de la cual la nación y los actores políticos por lo general se conectan al contexto internacional.

En el caso del balaguerismo, lo expresado arriba es muy claro. En primer lugar, lo que puede definirse como “balaguerismo”, y que en este libro se conceptualiza mejor como “reformismo dependiente”, en tanto forma de régimen y no como corriente de pensamiento, en muchos sentidos es el heredero histórico de lo que fue el trujillismo en sentido estricto y, en un marco más general, de la “tradición autoritaria”. Sin este componente sería imposible pensar la concepción balaguerista del Estado, su capacidad para asumir el liderazgo político sobre la casta militar y su fuerza hegemónica sobre el campesinado. En segundo lugar, debemos reconocer que las acciones del régimen balaguerista en la esfera del proceso de desarrollo no solo se dirigieron a la creación de un empresariado financiero e industrial moderno, estimularon también un proceso modernizador estrechamente conectado al rápido proceso de urbanización en marcha, el desarrollo de la clase media urbana y, en la práctica, el crecimiento de una clase obrera ligada al industrialismo⁹⁵.

La paradoja de este proceso fue que, en la medida en que el empresariado, estimulado por el Estado, se fortalecía, se ampliaba su espacio de acción corporativa de forma tal que en la práctica, cuando Balaguer salió del poder en 1978, le permitió a ese empresariado negociar en mejores términos su relación con las fuerzas políticas democráticas que tomaban el poder, pero también sostener mayor autonomía y capacidad de presión en la situación planteada tras el regreso de Balaguer al poder en 1986. Vale decir, en este caso la acción estatal por el desarrollo industrial y por la creación de un empresariado moderno, generó un potencial de acción autónoma de las élites empresariales sobre el Estado. Finalmente, el régimen balaguerista no puede explicarse

⁹⁵ Naturalmente, esto último no puede pensarse como objetivos estratégicos del régimen reformista, sino como consecuencia del proceso de industrialización y fortalecimiento empresarial que el régimen se propuso. Se trata de lo que en otro contexto Max Weber (1948/1968) ha definido como “consecuencias no buscadas” de la acción histórica.

sin el contexto internacional que facilitó el ascenso al poder de su líder Balaguer y que condicionó su derrota en 1978, como se demuestra en este libro⁹⁶.

En la crisis de 1965-1966, el marco de la guerra fría facilitó que el poder norteamericano viera desde temprano a Balaguer como una opción de poder “estabilizadora”, vale decir, como una alternativa para salir de la crisis hegemónica que había conducido a la guerra civil en 1965, pues la sola derrota de los constitucionalistas no aseguraba la contención de la presión popular y las posibilidades de una acción exitosa de cara a un Ejército dividido y una clase dominante incapaz de producir el orden político para asegurar una vía conservadora alternativa. En 1978 fue ese mismo poder norteamericano el que le facilitó al PRD afirmar una estrategia exitosa en lo interno, que no encontró obstáculos en el plano internacional para sostenerse como alternativa al régimen reformista, tal como se ha explicado en el epílogo de este libro.

De todos modos, el dominio del Estado, en el estilo bonapartista (1966-1978), o en su formato populista y autoritario (1986-1996), por parte de Balaguer, mantuvo una incapacidad estructural en lo que pudiese definirse como la reforma modernizadora del Estado, que introdujera al país en la modernidad política, vale decir, en un proceso de cambio democrático estable, tras el fin de la crisis de hegemonía en 1965, o profundizara los cambios democráticos iniciados en 1978, que permitieron precisamente el regreso de Balaguer al poder en 1986. Por el contrario, en 1966-1978 se produjo –lo hemos visto en este libro– un régimen autoritario de corte bonapartista, mientras en 1986 se abrió una vía conservadora y autoritaria que condujo la transición democrática iniciada en 1978 a la crisis de los años noventa.

Entre 1961 y el fin del siglo XX, se asiste al desarrollo de un actor popular que, pese a los ejercicios represivos, los mecanismos de cooptación y el desarrollo de una cultura clientelista, se afirmaba como un sujeto popular cuestionador del orden autoritario en el gobierno de los doce años, acción popular que al fin y al cabo la dominación bonapartismo no pudo contener. Tampoco en la

⁹⁶ Véase el Epílogo de este libro.

experiencia populista de Balaguer, entre 1986 y 1996, dicho movimiento popular pudo ser frenado. En esta experiencia, más que en el régimen de los doce años, se aprecia el crecimiento de un potencial de desarrollo de la sociedad civil, claramente estimulado por el proceso de transición democrática iniciado en 1978⁹⁷.

Aun así, el desarrollo y afirmación de una sociedad civil organizada y con poder de cuestionamiento sobre el Estado y el conjunto del sistema político, solo se apreciaría claramente tras la crisis de 1994 y el desarrollo de organizaciones como Participación Ciudadana y un movimiento popular urbano con apreciables niveles de organización corporativa, como COPADEBA. De esta manera, esos actores populares siempre representaron un sujeto no controlable de manera firme, una verdadera “classe dangereuse”⁹⁸.

Los ciclos electorales en el gobierno de los doce años

De las dos experiencias de gobierno de Balaguer, el otro componente que aquí merece destacarse es el que denomino “la política del fraude”. No se trata simplemente de los reiterados ejercicios fraudulentos que desde el Estado se produjeron durante sus dos experiencias de gobierno (1966-1978 y 1986-1996). Se trata al menos de tres asuntos estrechamente vinculados.

En primer lugar, el fraude electoral ocupa en la tradición política dominicana, desde la fundación de la República⁹⁹, un lugar prominente como recurso para alcanzar el poder, pero también y como es natural, como fuente de conflictos políticos. A mi criterio, lo importante es reconocer que en tanto parte de una tradición, y como mecanismo recurrente en el acceso de las élites políticas al poder, la política del fraude se inserta en una cultura política y termina siendo reconocido como un recurso “legítimo” al que las élites pueden recurrir. Si los mecanismos fraudulentos adquieren cierto nivel de generalización en

⁹⁷ Sobre la historia del movimiento popular y la sociedad civil, debe verse a Pérez y Artiles (1992) y Álvarez, Lozano *et al.* (2010). Sobre la acción popular lo mejor es el libro de Faxas (2007).

⁹⁸ Esta idea la desarrollo en *Después de los caudillos* (2003).

⁹⁹ Para una visión histórica general de los procesos electorales, debe verse el clásico estudio de Campillo Pérez (1986).

el conjunto de las élites políticas, el grado de legitimación de la acción fraudulenta aumenta. Pero en esa dinámica se introduce un potente argumento legitimador, pues se asume que todos los actores políticos en la competencia electoral son, con mayor o menor grado, finalmente “tramposos”, lo que termina legitimando la acción propiamente fraudulenta y logra hacer “trampas legítimas” con los resultados finales de los procesos electorales. Todo esto, además de los sofisticados mecanismos que la política del fraude termina produciendo, como fue el caso emblemático del fraude electoral de 1994¹⁰⁰.

Pero la política del fraude no se detiene en este nivel, involucra también otro tipo de determinaciones. En el caso de Balaguer en el Gobierno de los doce años, el fraude aparece como una expectativa no resuelta. Me explico. En la medida en que sus opositores políticos asumían que la posibilidad del fraude era un hecho inevitable y que no había forma de impedir que eso ocurriera, Balaguer surgía como un líder casi invencible. En ese marco, Balaguer manejó con notable maestría los recursos de la coerción y los de la posibilidad de la coerción, afirmando una cultura política que, en determinadas circunstancias históricas, producía en la población la idea del fraude electoral como “lo inevitable”. Lo hasta aquí discutido ayuda a la comprensión de la acción política electoral en el gobierno de los doce años.

La cuestión de los ciclos electorales en la dinámica política bajo el gobierno de los doce años está poco desarrollada en la primera edición de *El reformismo dependiente*. Solo en el epílogo (Capítulo 5) se analiza con cierto detalle la crisis político-electoral del reformismo en la coyuntura de 1978, cuyos resultados electorales produjeron la derrota política de Balaguer ese año. Pero comprender la dinámica electoral bajo el reformismo dependiente es pieza clave del entendimiento de la unidad y estabilidad política del régimen, su reproducción política y, claro está, la eficacia del autoritarismo que le fue característico. En lo que sigue, como reflexión final, presento algunas hipótesis que espero ayuden a interpretar

¹⁰⁰ Para un análisis muy pormenorizado del fraude de 1994, debe verse a Díaz (1996). El embajador Graham en su ensayo de 2011 brinda una suerte de visión oficial internacional que reconoce el fraude ocurrido ese año y que perjudicó a José Francisco Peña Gómez.

la dinámica político-electoral dominicana bajo condiciones abiertamente autoritarias, lo cual complementa el estudio de la cuestión electoral y el régimen político.

El primer componente del modelo político que Balaguer impuso a cada fase del ciclo político de los doce años fue la presión por la exclusión de los certámenes electorales del principal partido opositor, vale decir: el primer componente fue la vocación excluyente de la participación política opositora, en correspondencia con el carácter autoritario del esquema bonapartista. En las elecciones de 1966 esto se manifestó claramente en diversos aspectos evidentes por sí mismos. En primer lugar, las tropas norteamericanas controlaban todo el territorio nacional, y Estados Unidos, durante el conflicto de abril de 1965, había manifestado su claro rechazo a Bosch. En segundo lugar, la presión de los militares en todo el país estableció un clima de tensión ante la posibilidad de la represión abierta. Esto ocurría al tiempo en que las fuerzas militares constitucionalistas, por el contrario, se encontraban recluidas en un único campo militar y los que no lo estaban habían salido del país, dados de baja o eran abiertamente perseguidos. En ese clima de temores generalizados, al candidato del PRD, Juan Bosch, fue prácticamente impedido de hacer campaña política. Finalmente, el candidato contrincante de Bosch, Joaquín Balaguer, era claramente el favorito de los norteamericanos y aunque no puede decirse que Balaguer gozó de un favor especial del gobierno provisional de García Godoy, era clara su ventaja: contaba con el apoyo norteamericano y de los militares, podía desplazarse por todo el país con absoluta seguridad, a lo que debe añadirse que, en el campesinado, sobre todo de la zona más poblada, el Cibao, era el candidato favorito. En esas condiciones, Balaguer obtuvo el triunfo con una clara mayoría¹⁰¹.

El modelo político que a partir del ascenso de Balaguer al poder se organizó ha sido descrito con amplitud en el Capítulo 2. Lo único que tiene que añadirse desde el punto de vista de

¹⁰¹ En las elecciones de 1966 participaron solo tres partidos. La votación alcanzó la cifra de 1,372,695 votos válidos, donde el PR de Balaguer alcanzó el 57.7%, el PRD de Bosch el 39% y la UCN, que postuló a Rafael F. Bonelly, el 2.9%.

la política electoral es el hecho de que durante todo el período 1966-1970, más allá del carácter represivo del nuevo régimen, la consecuencia de ello fue una clara dispersión de las fuerzas políticas opositoras, debido precisamente a la persecución y represión a que fue sometida. El otro componente que vale la pena recordar es el abierto carácter militarista del régimen, que no solo actuó como el eje central del control represivo de las fuerzas populares y sus representantes políticos, también operó como un factor de dispersión de los grupos oligárquicos, obligándolos al apoyo incondicional a Balaguer.

En ese contexto, se producen fisuras internas en el partido gobernante (PR) con la salida de Francisco Augusto Lora, vicepresidente del partido, tras su disputa con Balaguer por el continuismo expresado por el líder reformista. En ese sentido, a partir de las elecciones de 1970, se plantea abiertamente la vocación continuista y, en consecuencia, releccionista, de Balaguer. Esto trae consigo un elemento nuevo en la política del bloque en el poder: a partir de 1970 Balaguer no solo se enfrenta a las fuerzas democráticas opositoras, sobre todo el PRD, también debe enfrentar el surgimiento periódico de focos disidentes en su propio partido, al ser el tema del continuismo el eje de las disputas.

En el período 1970-1974 la situación descrita sufre cambios significativos. Por lo pronto, saneadas las empresas del Estado en la fase previa, Balaguer se propone iniciar su programa de reordenamiento del Estado en materia de desarrollo, como se analiza en este libro. Las acciones represivas contra el PRD, el movimiento popular y la izquierda continúan, pero en la segunda mitad de esta fase la represión abierta comienza a tener otro cariz, como han señalado Duarte y Pérez, al abrirse un nuevo esquema de control político que ahora se interesa por la cooptación del liderazgo popular e inicia programas asistenciales hacia los pobres de las ciudades¹⁰². Pero un elemento novedoso

¹⁰² En el Capítulo 2 reconozco los méritos del trabajo de Duarte y Pérez (1980) y señalo lo que considero son imprecisiones de su enfoque, al caracterizar esta segunda fase de la política de dominación bonapartista como de “represión institucional”. Como explico en la Nota 92 del referido Capítulo 2, en esta fase se asiste a una etapa de

se incorpora a lo descrito, esta vez para beneficio de Balaguer: se trata de la disputa interna en el PRD, producida en parte por diferencias estratégicas de enfoque respecto al papel opositor del partido, en parte por la lucha interna desatada entre las fuerzas más radicalizadas de la organización lideradas por Bosch y las agrupadas en torno a un enfoque más liberal que cohesionaba Peña Gómez. Estas disputas, unidas a la represión que sufrían sus cuadros de base, llevaron al partido a la decisión abstencionista en 1970. En las elecciones de ese año participaron cuatro partidos: PQD, que obtuvo el 15.6 %; MIDA, que logró el 20.4 %; PRSC, que consiguió el 5.1 %, y el Partido Reformista de Balaguer, que concentró el 57.2 %, para un total de votos válidos de 1,297, 843. En tales condiciones de práctico monopolio del voto popular, esa cantidad de votos alcanzados por Balaguer se dio en un contexto de pérdida de legitimación en el conjunto de la nación, con el consecuente desprestigio del régimen.

De todos modos, a partir de 1970 se inicia una fase de fortalecimiento y articulación de los programas de desarrollo que caracterizarían al régimen, la cual se prolonga hasta 1976, en el contexto de la expansión de la economía exportadora dominicana sobre todo del azúcar, en una buena coyuntura de precios en el mercado mundial¹⁰³. Es aquí que se producen los eventos más relevantes del reformismo: expansión industrial, crisis agraria, reforma agraria, guerrilla de Caamaño, fortalecimiento del liderazgo balaguerista en el seno de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, al final del período, más allá de la aparición de la guerrilla de Caamaño, se rompe la unidad monolítica del régimen tras el conflicto de Balaguer con la oligarquía terrateniente.

Luego de ese quiebre del bloque en el poder, surge una nueva situación, ya que por primera vez la oposición encuentra interlocutores válidos en la oligarquía, sectores militares y el empresario.

legitimación política que se expresa en los programas reformistas indicados arriba, pero también en los intentos de reforma agraria a partir de 1972.

¹⁰³ Para la discusión de las políticas económicas del régimen y la fase expansiva de la economía exportadora, debe verse los Capítulos 3 y 4 en los cuales se analiza el asunto en detalle.

Al mismo tiempo, en la vida del principal partido de oposición –el PRD– se produce un cambio significativo, pues quien hasta ese momento fue su líder, Juan Bosch, sale del partido y funda el PLD. Tras esta renuncia, Peña Gómez queda con el control de la organización. Sobre esta base, el llamado Acuerdo de Santiago, esta vez bajo el liderazgo de Peña Gómez, logra reunir el grueso de la oposición en un frente electoral. En ese contexto, Balaguer se enfrenta por primera vez a la posibilidad de salir derrotado y por ello se ve obligado a dar un giro represivo a la campaña electoral y enfrentar a la oposición política al Ejército. En esas condiciones, cientos de soldados del Ejército salen a hacer campaña por Balaguer, uniformados y con banderines rojos en la punta de sus fusiles. De nuevo la represión directa obliga a la oposición a retirarse de la contienda electoral. Balaguer de nuevo “gana” las elecciones, pero su triunfo indica ya un gran deterioro del régimen político¹⁰⁴.

La siguiente fase –1974-1978– se produce en un contexto desventajoso para Balaguer. La buena coyuntura de precio de la economía exportadora se agota, iniciándose una fase de descenso de los precios en el mercado mundial. Al mismo tiempo, el régimen pierde una gran parte de su electorado campesino y el descontento de la clase media se expande. A eso se une que la oposición, bajo el liderazgo de Peña Gómez, impulsa una coherente política de participación electoral y el PRD encuentra simpatía en sectores liberales de Washington. En 1978 una coalición de fuerzas políticas, bajo el liderazgo del PRD, con Antonio Guzmán como candidato presidencial, derrota a Balaguer en las elecciones de ese año.

Como se aprecia, en los tres ciclos o fases político-electorales discutidos aquí (1966-1970, 1970-1974 y 1974-1978), la lógica política que cohesionaba la estrategia balaguerista era la de la

¹⁰⁴ En las elecciones de 1974 Balaguer alcanzó asombrosamente el 84% del total de votos válidos (1,518,297). En ese certamen solo participaron dos partidos: además del PR de Balaguer, el Partido Demócrata Institucional del ex contralmirante Luis Homero Lajara Burgos, que alcanzó un 15.3%. En esas elecciones las estimaciones del abstencionismo fueron altas y claramente la participación de Lajara Burgos fue simplemente una burda legitimación de la reelección de Balaguer.

exclusión del principal contendor de la competencia electoral, a lo que podía añadirse la implementación de estrategias más o menos fraudulentas que aseguraban el control de los resultados de cada proceso electoral. En cada coyuntura hubo factores específicos que materializaron esa estrategia autoritaria de control de los procesos electorales. En 1966 el hecho de la derrota militar de los constitucionalistas en 1965 y la presencia de las tropas norteamericanas en el país claramente fueron factores determinantes del triunfo de Balaguer. En 1970 la estrategia la facilitó la lucha interna en el PRD, pero también la fase represiva del régimen con los militares a la cabeza. En 1974 Balaguer tuvo que emplearse a fondo en la misma estrategia y frenar al PRD y el acuerdo de Santiago tras la represión militar. Pero en 1978 el PRD era una fuerza unificada internamente, y las fuerzas políticas que apoyaban al régimen tenían divisiones y conflictos con el poder central. En esas condiciones, Balaguer no pudo aplicar la lógica excluyente de las tres ocasiones anteriores y fue derrotado.

La discusión hasta aquí sostenida es estimulante para el debate en torno a los límites de la exclusión política en los regímenes autoritarios en sociedades en procesos de modernización y desarrollo, como era el caso de la República Dominicana.

Lo que llevó a Balaguer al poder fue la debilidad compartida de las clases dominantes tradicionales del orden social dominicano, que pasaron a predominar en la vida política tras la muerte del dictador, a lo que debe sumarse el rol de los militares y la fuerza geopolítica de Estados Unidos. En esas condiciones históricas, Balaguer aportó su excelente desempeño para articular en un esfuerzo común estos tres elementos. El resultado fue un régimen bonapartista de dominación política. Pero el tipo de bonapartismo que organizó el nuevo régimen era esencialmente dependiente del poder norteamericano, no solo se apoyaba en la debilidad de sus aliados. Por ello, en la medida en que estos se fortalecieron a lo largo de los doce años que se mantuvo el régimen, este fue debilitándose.

Reitero con mayor precisión: siempre el régimen autoritario impulsó una lógica excluyente de la participación política de la oposición en los poderes del Estado. Si la oposición se fortalecía siempre se planteaba la posibilidad de un cuestionamiento al régimen y esto se hacía más peligroso si esa oposición lograba mantener el liderazgo sobre sectores populares (cosa que siempre ocurrió en todo el período estudiado) y lograba ganar parte de las fuerzas que compactaban la unidad del bloque en el poder (cosa que ocurrió en 1974). En 1978 se conjugaron estos factores en una misma experiencia de lucha político-electoral: el mantenimiento del liderazgo opositor sobre los actores populares urbanos, el favor de una parte del campesinado y la concertación de acuerdos con sectores del régimen descontentos, la unidad de los militares se debilitó y se abrió así la posibilidad de un cambio político democrático.

Pero la fuerza del balaguerismo era grande, aun en las condiciones de crisis de la unidad del bloque en el poder. Por ello, los cambios internacionales pasaron a desempeñar un papel central para la legitimación de la opción opositora ante las élites dominantes tradicionales y el liderazgo militar. Este fue el papel que desempeñó, a mi juicio, la administración Carter, pero ocurrió porque hubo internamente una nueva situación o correlación de fuerzas que le daba bases a la política Carter para el éxito de su desempeño en países como República Dominicana y no a la inversa.

Debemos introducir aquí un último aspecto que denomino “el efecto Fausto”¹⁰⁵. En este libro he planteado en varias ocasiones

¹⁰⁵ Como se sabe, en el primer *Fausto* de Goethe, el Dr. Fausto alcanza el amor de Margarita (la promesa del diablo por la cual Fausto le vendería su alma), pero ella paga con su vida el crimen contra su propio hijo. En el segundo *Fausto* se produce un giro de la trama goethiana. Como Mefistófeles está obligado a permitirle a Fausto, mientras su alma esté en la tierra, la realización de obras a su albedrío tiene que aceptar que este produce obras de bien que al final contravienen el plan de los infiernos y fortalecen el propósito de Dios en la tierra. Por ello, aunque Fausto haya hecho un pacto diabólico, es redimido por los resultados de su obra, no por el compromiso inicial que lo llevó a producirlos. En la redención Fausto encontró el amor y un lugar en los cielos. El regreso de Balaguer al poder en 1986 es de alguna forma un favor fáustico, pero la búsqueda de la redención fáustica genuina la articuló Balaguer con su alianza con el PLD en 1996. Su redención, más que vencer electoralmente a Peña

que, tras su gobierno de los doce años, Balaguer perdió el poder en 1978 víctima de las fuerzas que el régimen político que dirigió había estimulado. Es en alguna medida el caso de los industriales que protegió y en muchos sentidos dio vida corporativa como grupo económico. El industrialismo que bajo su régimen se estimuló y desarrolló, con las grandes limitaciones del proceso de sustitución de importaciones no solo dio paso a una clase industrial que adquirió vida propia, también produjo nuevos actores, como las clases medias y la clase trabajadora del sector industrial en el marco del proceso de urbanización en marcha. A esos últimos actores Balaguer nunca los pudo controlar ni someter. Ciertamente, fue eficaz en la compra o cooptación de algunos de sus dirigentes, pero “la clase obrera” y las capas medias, de alguna forma, siempre le fueron contestatarias. Este es el primer efecto Fausto: las criaturas prohijadas en su régimen terminaron siéndole rebeldes.

Pero hay otro efecto fáustico, poco reflexionado. Ocho años después de su salida del poder en 1978, Balaguer ganó las elecciones de 1986 y regresó al poder. Ganó las elecciones apoyado en un discurso populista y conservador. Las clases medias en gran medida votaron por el caudillo, los empresarios le apoyaron y muy posiblemente gran parte de los pocos campesinos que aún quedaban en el país como clase moribunda vieron en él una esperanza de cambio. Ciertamente, ninguna de esas esperanzas se materializó, pero Balaguer logró cohesionar y reestructurar un bloque conservador que de alguna forma sobrevive hoy como la base de la política clientelar que predomina en la vida política nacional. El efecto Fausto en este caso representa la reacción inversa a la primera descrita en el anterior párrafo: la fuerza de la acción promovida por el gobierno de los doce años se impuso a los efectos del descontento político contra el régimen bajo el cual estos grupos se desarrollaron y fortalecieron su poder. Sin embargo, en esta segunda ocasión Balaguer fracasó en su intento por restablecer un poder estatal so-

Gómez, fue que el PLD hiciera suya la visión tutelar y prebendalista que caracterizó la política balaguerista en el largo ciclo histórico durante el cual Balaguer reinó como un monarca y todavía hoy predomina como cultura en la política dominicana.

bre la economía, mermado por la crisis que el estatismo reformista desató y cercado por el impulso neoliberal que se abría paso en la escena mundial. Todo lo aquí dicho simplemente afirma la tesis hegeliana de que en la historia los hechos se repiten por así decirlo dos veces. Marx, en *El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*, añadió que era cierto, pero que Hegel se olvidó decir que esto ocurría una primera vez como tragedia y una segunda como farsa, e indicó además que los hombres hacen la historia bajo circunstancias que ellos no eligen. Balaguer no puede ser visto fuera de esta ley de hierro.

Bibliografía

- ABDEL-MALEK, Anouar (Comp.) (1977): *Sociología del imperialismo*, Universidad Nacional Autónoma de México.
- ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, Comisión de Economía (1976): *Economía Dominicana* (1975), Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, Santo Domingo.
- _____ (1977): *Economía dominicana 1976*, Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, Santo Domingo.
- _____ (1978): *Economía dominicana 1977*, Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, Santo Domingo.
- ACEMOGLU, Daron y James A. Robinson (2005): *Economic origins of dictatorship and democracy*, Cambridge University Press, London-New York.
- AGAMBEN, Giorgio (2005): *Estado de excepción. Homo Sacer II, I*, Adriano Hidalgo Editora, Buenos Aires.
- ALEMÁN, José Luis (1975): “Ciencia, tecnología y política de inversiones en República Dominicana: 1966-1972”, en *Estudios Sociales*, año VIII, núm. 9, Santo Domingo.
- _____ (1979): “La economía de la corrupción”, en *Seminario sobre corrupción y conflicto de intereses*, Santiago, República Dominicana.

ALEMÁN, José Luis (1980): "Las políticas económicas de Balaguer y Guzmán" (mimeo), Santo Domingo.

_____ (1982): "Ley de incentivo industrial: análisis y comentarios", en Asociación de Jóvenes Empresarios: *La política económica en República Dominicana*, Santo Domingo.

_____ (1982b): *Veintisiete ensayos sobre economía y sociedad dominicana*, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago, República Dominicana.

ALFONSECA, Juan (1985): "La agroindustria del aceite: de la sustitución de importaciones a la dependencia externa", Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Santo Domingo (mimeo).

ÁLVAREZ BETANCOURT, Opinio (1982): "Instituciones financieras y la actividad económica en la República Dominicana", en *Las instituciones financieras y el mercado de valores en la República Dominicana*, Imprenta La Palabra, Santo Domingo.

ÁLVAREZ, Rosa Rita, Wilfredo Lozano, Addys Then Marte, Gerardo Pieter y Wanda Polanco (coordinadores) (2010): *La sociedad civil dominicana: contribución a su historia*. Santo Domingo: Búho.

ÁLVAREZ VEGA, Bienvenido (1983): *Prensa escrita y estructura de poder en la República Dominicana*, Alfa y Omega, Santo Domingo.

AMÍN, Samir (1974): *La acumulación a escala mundial*, Siglo XXI, México.

AQUINO GONZÁLEZ, Carlos (1978): *Fundamentos para una estrategia de desarrollo agrícola*, Instituto Superior de Agricultura, Santiago, República Dominicana.

ARTILES, Leopoldo (1982): *Ideología del empresariado dominicano*, Tesis de Maestría, FLACSO-Sede México.

_____ (1986): "Ideología de la burguesía industrial dominicana", en *Estudios Sociales*, año 19, núm. 15, pp. 37-72.

_____ (2010): "Estado, sociedad civil y democracia en la República Dominicana", en Álvarez, R. R., W. Lozano *et al.* (editores): *La sociedad civil dominicana. Contribución a su estudio*, MUDE-CIES-UNIBE y Alianza ONG, Santo Domingo.

_____ (2018): "Los diez años de gobierno del Dr. Joaquín Balaguer 1986-1996: la dialéctica entre la inercia y la transformación",

en *Historia general del pueblo dominicano*, t. VI, coordinado por Roberto Cassá, Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo.

ASCUASIATI, Carlos (1972): "Diez años de economía dominicana", en *Revista de Ciencias Económicas y Sociales*, v. 1, núm. 1, marzo-junio, Universidad Autónoma de Santo Domingo.

ATKINS, G. Pope (1987): *Los militares y la política en la República Dominicana*. Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana.

ATTINÀ, Fulvio (1992): *El sistema político global. Introducción a las relaciones internacionales*, Paidós, Madrid.

BÁEZ EVERTSZ, Franc (1979): *Azúcar y dependencia en la República Dominicana*, Alfa y Omega, Santo Domingo.

_____ (1986): *Braceros haitianos en la República Dominicana*, Editora Taller, Santo Domingo. En 1981 circuló un manuscrito del borrador original del libro bajo el título "La migración de braceros haitianos a la República Dominicana" (mimeo).

BÁEZ EVERTSZ, Julio y Otto Fernández (1975): "Estado y partidos en República Dominicana", en *Realidad Contemporánea*, v. 1, núm. 16-17, Santo Domingo.

BAIROCH, Paul (1978): *Revolución industrial y subdesarrollo*, Siglo XXI, México.

BALAGUER, Joaquín (1947): *La realidad dominicana*, México.

_____ (1955): *El pensamiento vivo de Trujillo*, Impresora Dominicana, Ciudad Trujillo.

_____ (1971): *Los próceres escritores*, Gráfica Guadalupe, Buenos Aires.

_____ (1972): *La marcha hacia el Capitolio*, Fuentes Impresos, S.A., Santo Domingo.

_____ (1975): *La palabra encadenada*, Editora taller, Santo Domingo.

_____ (1979): *Mensajes presidenciales*, Pareja, Barcelona.

_____ (1988): *Memorias de un cortesano de la "Era de Trujillo"*, Editora Corripio, Santo Domingo.

BALAGUER, Joaquín (2006): *Los carpinteros*, Santo Domingo.

BALCÁ CER, Juan Daniel (2006): *Trujillo. El tiranicidio de 1961*, Taurus, Santo Domingo.

BANCO CENTRAL (1971): *Cuentas nacionales. Producto Nacional Bruto 1960-1971*, Santo Domingo.

_____ (1975): *Cuentas nacionales. Producto Nacional Bruto: 1970-1975*, Santo Domingo.

_____ (1979): *Cuentas nacionales. Producto Nacional Bruto 1975-1979*, Santo Domingo.

_____ (1980): *Cuentas nacionales. Producto Nacional Bruto 1976-1980*, Santo Domingo.

_____ (1981): *Cuentas nacionales. Producto Nacional Bruto 1977-1981*, Santo Domingo.

_____ (1969): *Encuesta de gastos e ingresos familiares en la ciudad de Santo Domingo*, Santo Domingo.

_____ (1977): *Encuesta nacional de ingresos y gastos*, Santo Domingo.

_____ (1980): *Estudio sobre la construcción en la República Dominicana*, Santo Domingo.

_____ (1977): *Matriz insumo-producto del sector manufacturero*, Santo Domingo.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) (1978): *Informe sobre la Economía Dominicana*, Washington.

BARAN, Paul (1968): *La economía política del crecimiento*, Siglo XXI, México.

BARAN, Paul M. y ZWEEZY Paul (1971): *El capital monopolista*, Siglo XXI, México.

BARRATT BROWN, Michael (1976): *Después del imperialismo*, Siglo XXI, México.

BARTLOW MARTIN, John (1975): *El destino dominicano. La crisis dominicana desde la caída de Trujillo a la guerra de abril*, Editora de Santo Domingo.

- BARTRA, Roger (1977): *El poder despótico burgués* (1977), Era, México.
- BECK, Ulrich (2004): *Poder y contrapoder en la era global. La nueva economía política mundial*, Paidós, Madrid.
- BELL, Daniel (2004): *Las contradicciones culturales del capitalismo*, Alianza Editorial, Madrid.
- BELTRÉ MELO, G.A., A. M. Yorro Suero y F. Olivero Suero (1981): *El modelo de sustitución de importaciones en República Dominicana y su incidencia en el desarrollo económico y social*, Tesis de Grado, Universidad Autónoma de Santo Domingo.
- BENDEZÚ ALVARADO, Guillermo (1982): "La realidad campesina dominicana y sus posibilidades de desarrollo", en *Forum*, núm. 3: *Los problemas del sector rural en la República Dominicana*, Amigo del Hogar, Santo Domingo.
- BENDIX, R. y LIPSET, S.M. (1973): *Clase, status y poder* (tres tomos), Euromérica, Madrid.
- BENETTI, Carlo (1976): *La acumulación en los países capitalistas subdesarrollados*, Fondo de Cultura Económica, México.
- BETANCES, Emilio (2009): *La iglesia católica y la política del poder en América Latina: el caso dominicano en perspectiva comparada*. Santo Domingo: Fundación Global y Desarrollo.
- _____ (2016): *En busca de la ciudadanía. Los movimientos sociales y la democratización en la República Dominicana*, Archivo General de la Nación, Santo Domingo.
- BLACKBURN, Robin (editor) (1977): *Ideología y ciencias sociales*, Grijalbo, Barcelona.
- BOSCH, Brian J. (2010): *Balaguer y los militares dominicanos*. Santo Domingo: Fundación Cultural Dominicana. Impreso en Amigo del Hogar.
- BOSCH, Juan (1961/2009a): *Trujillo: causas de una tiranía sin ejemplo*, Obras Completas, Tomo IX, Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Santo Domingo.
- _____ (1964/2009b): *Crisis de la democracia de América en la República Dominicana*, Obras Completas, Tomo XI, Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Santo Domingo.

BOSCH, Juan (1970/2009c): *Composición social dominicana*, Obras Completas, Tomo X, Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Santo Domingo.

_____ (1985/2009d): *La fortuna de Trujillo*, Obras Completas, Tomo XI, Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Santo Domingo.

_____ (1982/2009e): *Clases sociales en la República Dominicana*, Obras Completas, Tomo XI, Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Santo Domingo.

_____ (1984/2009f): *La pequeña burguesía en la historia de la República Dominicana*, Obras Completas, Tomo XI, Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Santo Domingo.

_____ (1986/2009g): *Capitalismo tardío en la República Dominicana*, Tomo XII, Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Santo Domingo.

_____ (1969/2009h): *El próximo paso: dictadura con respaldo popular*, Obras Completas, Tomo XV, Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Santo Domingo, 1971.

BRAY, David (1983): “La agricultura de exportación, la formación de clases y mano de obra excedente. El caso de la migración interna y externa en la República Dominicana”. Trabajo presentado en la “Conferencia sobre la emigración dominicana a los Estados Unidos”, Museo del Hombre Dominicano, Santo Domingo.

BREA, Ramonina (1983): *Ensayo sobre la formación del Estado capitalista en la República Dominicana y Haití*, Editora Taller, Santo Domingo.

_____ (1987): “El autoritarismo y el proceso de democratización en República Dominicana”, en *Ciencia y Sociedad*, v. XII, núm. 2, abril-junio, pp. 180-209.

BREA, Ramonina (editora) (2014): *Hiper presidencialismo en la República Dominicana*, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santo Domingo.

BRUNES, Álvaro (1978): *Economía política del fascismo dependiente*, Siglo XXI, México

BRYAN, Patrick (2016): *La transformación económica de la República Dominicana, 1870-1916*, Academia Dominicana de la Historia, impreso en Editora Búho, Santo Domingo.

- BUCCI-GLUCKSMAN, Christine (1978): *Gramsci y el Estado*, Siglo XXI, México.
- BULMER-THOMAS, Víctor (1998): *Historia económica de América Latina y el Caribe*, Fondo de Cultura Económica, México.
- CABRAL, Manuel José (1973): "Inflación, distribución del ingreso y empleo. Conceptos aplicados a la República Dominicana", en *Ciencia y Sociedad*, año 1, núm. 1, Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
- CALDER, Bruce (1984): *El impacto de la intervención. La República Dominicana bajo la ocupación norteamericana de 1916-1924*, Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo.
- CALDERÓN, Fernando (coordinador) (2003): ¿Es sostenible la globalización en América Latina? Debates con Manuel Castells, (dos volúmenes), Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile.
- CALDERÓN, Rafael (1975): "Movimiento obrero dominicano: 1930-1962", en *Realidad Contemporánea*, año 1, núm. 2, abril-junio, Santo Domingo.
- CALILI PADIS, Pedro Fernando H. Cardoso *et al.* (1978): *América Latina. Cincuenta años de industrialización*, Premio Editorial, México.
- CAMPILLO Pérez, Julio G. (1986): *Historia electoral dominicana*. Santo Domingo: Junta Central Electoral de la República Dominicana.
- CAPDEVILA, Lauro (2000): *La dictadura de Trujillo. República Dominicana: 1930-1961*, Colección Bibliófilos, Santo Domingo., Bibliófilos, Santo Domingo.
- CARDOSO, Fernando H. (1968): *Cuestiones de sociología del desarrollo en América Latina*, Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- _____ (1972): *Estado y sociedad en América Latina*, Nueva Visión, Buenos Aires.
- CARDOSO F. H. y Enzo Faletto (1971): *Dependencia y desarrollo en América Latina*, Siglo XXI, México.
- CARNOY, Martin (2001): *El trabajo flexible en la era de la información*, Alianza Editorial, Madrid.
- CASSÁ, Roberto (1976): *Modos de producción, clases sociales y luchas políticas*, Alfa y Omega, Santo Domingo.
- _____ (1977): *Historia económica y social de la República Dominicana* (dos tomos), Alfa y Omega, Santo Domingo.

CASSÁ, Roberto (1982): *Capitalismo y dictadura*, Universidad Autónoma de Santo Domingo.

_____ (1986): *Los doce años: contrarrevolución y desarrollismo*. Alfa y Omega, 1ra. Edición, 1986, Santo Domingo.

_____ (1990): *Movimiento obrero y lucha socialista en la República Dominicana*. Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo.

_____ (1999): *Los orígenes del Movimiento 14 de Junio*. Universidad Autónoma de Santo Domingo.

CASSÁ, Roberto (editor) (1977/2015): *Historia general del pueblo dominicano*, v. V, Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo.

_____ (editor) (2018): *Historia general del pueblo dominicano*, v. VI, Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo.

CASSÁ, Roberto y Rafael Jarvis (1994): “El Sindicato Unido de la Romana. Caso límite de las luchas obreras en los años 60”, en *Anuario de la Academia de Ciencias de la República Dominicana*, año XX, núm. 12, pp. 265-319.

CASTELLS, Manuel (1997): *La era de la información, Vol. 1: La sociedad red*, Alianza Editorial, Madrid.

CASTILLO, José del (1981): *Ensayos de sociología dominicana*, Siboney, Colección Contemporánea, Santo Domingo.

_____ (1982): “Entre el autoritarismo y la democracia: el dilema del sistema político dominicano”, en *República dominicana: 1980-1990. Perspectivas de una década*. Santo Domingo: Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

CASTILLO, José del, Max Puig *et al.* (1975): *La Gulf and Western en la República Dominicana*, Universidad Autónoma de Santo Domingo.

CASTILLO, José del y Otto Fernández (1974): “Elecciones de 1962: modelo para armar”, en *¡Ahora!*, núm. 547, Santo Domingo.

_____ (1974): “el difícil tránsito a la dependencia política”, en *¡Ahora!*, núm. 547, Santo Domingo.

_____ (1974): “La dominación política con contradicciones”, en *¡Ahora!*, núm. 547, Santo Domingo.

- CATRAIN, Pedro y José Oviedo (1981): *Estado y crisis política (República Dominicana 1980)*, Alfa y Omega, Santo Domingo.
- CAVAROZZI, Marcelo (1977): “Elementos para una caracterización del capitalismo oligárquico”, en *Revista Mexicana de Sociología*, v. XXXIX, núm. 1.
- CEARA, Miguel (1984): *Tendencias estructurales y coyuntura de la economía dominicana, 1968-1983*, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Santo Domingo.
- CENTRO DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN ECUMÉNICA (CEPAE) (1982): *Historia del movimiento campesino dominicano*, Cuadernos Populares, núm. 7, impreso en Editora Nivar, Santo Domingo.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina) (2001): *Desarrollo económico y social en la República Dominicana. Los últimos 20 años y perspectivas para el siglo XXI*, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y CEPAL.
- CHALJUB MEJÍA, Rafael (2000): *He aquí la izquierda*. Mediabyte, Santo Domingo.
- _____ (1995): *La guerrilla del decoro. Memorias*. Editora Taller.
- _____ (1997): *Cuesta arriba. Memoria*. Editora Taller, Santo Domingo.
- _____ (2015): *El Acuerdo de Santiago*, ARGOS, Santo Domingo.
- CHEHABI, Houchang E. y LINZ, Juan (comps.) (1998): *Sultanistic regimen*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- CHEZ CHECO, José y Mu-Kien Adriana SANG (2008): *El tabaco. Historia general en República Dominicana*, Grupo León Jimenes, Impreso en Amigo del Hogar, Santo Domingo.
- COLLADO, Faustino (1990): *Balaguer y el futuro del PRSC*, Centro para la Democracia, Santo Domingo.
- COLLIER, David (comp.) (1979): *The New Authoritarianism in Latin America*, Princeton: Princeton University Press.
- CONDE, Leonardo (1979): “El proceso de endeudamiento dominicano”, en *Ciencia y Sociedad*, año 4, núm. 1, Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

- CORDERO MICHEL, J. R. (1975): *Análisis de la Era de Trujillo*, Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Primera Edición de 1970 de la misma editora fue bajo el título *Informe sobre la República Dominicana*.
- CORECATO (Movimiento de Liberación Nacional Camilo Torres) (1978): *República Dominicana: capitalismo dependiente y alternativas políticas*, Ediciones Socialistas, Santo Domingo.
- CORPORACIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL (CFI) (1967): *Información y datos industriales de la República Dominicana*, Santo Domingo (mimeo).
- CORTEN, André (1973): "Las relaciones de producción en la economía azucarera dominicana", en Corten A. *et al.*: *Imperialismo y clases sociales en el Caribe*, Cuenca, Buenos Aires.
- _____ (1989): *El Estado débil. Haití y República Dominicana*. Editora Taller, Santo Domingo.
- COTLER, Julio (1978): *Clase, Estado y nación en el Perú*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima.
- CRASSWELLER, Robert D. (1968): *Trujillo: la trágica aventura del poder personal*, Bruguera, Madrid.
- CROUCH, Luis (1979): *Desarrollo del capitalismo en el campo: política agraria y crecimiento agrícola (versión preliminar)*, Instituto Superior de Agricultura, Centro de Investigaciones Económicas y Alimenticias, Santiago, República Dominicana.
- CRUZ, Domingo de la (1999): *Liberales y conservadores en 12 años de cultura dominicana*, Graffi Caribe, Santo Domingo.
- CUELLO, José Israel (1973): *Siete años de reformismo*, Editora Taller, Santo Domingo.
- _____ (1975): *El proceso revolucionario dominicano y sus enseñanzas*, Editora Taller, Santo Domingo.
- _____ (1985): "Partidismo político de izquierda: 1961-1978", en *Impacto Socialista*, 2da. época, año I, núm. 2, julio-agosto, pp. 29-36.
- CUELLO, José Israel y Narciso Isa Conde (1965): "Revolutionary Struggle in the Dominican Republic and its Lessons", en *World Marxist Review*, 8/12 (diciembre, 1965), pp 271-281 y 9-1 (enero, 1966), pp. 33-36.

- CUELLO, J. I y Peynado J. F. (1974): *Polémica acerca de los cuatro contratos de la Gulf and Western*, Editora Taller, Santo Domingo.
- CURY, Jottin, edición de Juan Daniel Balcácer (2018): *Jottin Cury, el canceller de abril*, Comisión Nacional de Efemérides Patrias, impreso en Editora Búho, Santo Domingo.
- D'OLEO, Francisco (1983): *Estado y políticas agrarias, 1972-1982*, Universidad Autónoma de Santo Domingo.
- DAHRENDORF, R. (1974): *Las clases sociales y su conflicto en la sociedad industrial*, RIALP, Madrid.
- DAUHAIJRE, Andrés (1984): "República Dominicana: 18 años de política económica", en *Forum*, núm. 13: *La situación cambiaria en la República Dominicana*, Amigo del Hogar, Santo Domingo.
- DERBY, Lauren (2016): *La seducción del dictador. Política e imaginación popular en la Era de Trujillo*, Academia Dominicana de la Historia, impreso en Editora Búho, Santo Domingo.
- DESPRADEL, Carlos (2005): *40 años de economía dominicana*. Santo Domingo: Búho.
- DEVERELL, John y el Latin-American Working Group (1977): *Anatomía de una corporación*, Siglo XXI, México.
- DÍAZ, Juan Bolívar (1996): *Trauma electoral*, Mograf, Santo Domingo.
- DIEDERICH, Bernard (s/f): *Trujillo. La muerte del dictador*, Santo Domingo.
- _____ (2010): *Navidad con libertad: la lucha por la libertad del pueblo dominicano*, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo.
- DORE, Carlos (1979): *Problemas de la estructura agraria dominicana*, Editora Taller, Santo Domingo.
- _____ (1981): *Reforma agraria y luchas sociales en la República Dominicana*, Editora Taller, Santo Domingo.
- DOS SANTOS, Theotonio (1980): *Imperialismo y dependencia*, Era, México.
- DRAPER, Theodore (2016): *La revuelta de 1965. Un estudio de caso de la política estadounidense en la República Dominicana*, Colección de Efemérides Patrias, impreso en Editora Búho, Santo Domingo.

- DUARTE, Isis (1986): *Trabajadores urbanos. Ensayos sobre fuerza laboral en República Dominicana*, Editora Universitaria, Universidad autónoma de Santo Domingo.
- DUARTE, Isis y José Pérez (1980): “Consideraciones en torno a la política represiva y asistencial del Estado dominicano, 1966-1978”, en *Realidad Contemporánea*, v. II, núm. 10-11, Santo Domingo.
- ENMANUEL, Arghiri (1977): “Mitos del desarrollo contra mitos del subdesarrollo”, en Warren B. *et al.*: *Industrialización y tercer mundo*, Anagrama, Barcelona.
- ESPAILLAT, Arturo (1963): Trujillo: *The Last Caesar*, Chicago.
- ESPINAL, Flavio Darío (2001): *Constitucionalismo y procesos políticos en la República Dominicana*. Santo Domingo: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
- ESPINAL, Fulgencio: *Breve historia del PRD* (1982), Alfa y Omega, Santo Domingo.
- ESPINAL, Rosario (1987): *Autoritarismo y democracia en la República Dominicana*. San José, Costa Rica: CAPEL.
- ESPINAL, Rosario y Jonathan Harthlyn (1998): “Las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana en la posguerra fría”, en Wilfredo Lozano (editor): *Cambio político en el Caribe: escenarios de la post guerra fría*, Nueva Sociedad, Caracas.
- ESTRELLA, Julio C. (1971): *La moneda, la banca y las finanzas en la República Dominicana* (dos tomos), Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago.
- EVERS, Tilman (1978): *El Estado en la periferia capitalista*, Siglo XXI, México.
- FAJNZYLBER, Fernando (1983): *La industrialización trunca de América Latina*, Nueva Imagen, México.
- FAXAS, Laura (2007): *El mito roto. Sistema político y movimiento popular en la República Dominicana, 1961-1990*. México: Siglo XXI-FUNGLO-DE-FLACSO.
- FERNÁNDEZ, Arlette (comp.) (1981): *Coronel Rafael Fernández Domínguez, fundador del movimiento constitucionalista*, 2da. Edición, Editora Cosmo, Santo Domingo.

- FERNÁNDEZ, Florestán (1973): “Problemas de conceptualización de las clases sociales en América Latina”, en Florestán Fernández, Nicos Poulantzas *et al.*: *Las clases sociales en América Latina*, Siglo XXI, México.
- _____ (1978): *La revolución burguesa en Brasil*, Siglo XXI, México.
- FERNÁNDEZ, Otto (1983): *Ideologías agrarias y luchas sociales en la República Dominicana (1961-1980)*, Universidad Autónoma de Santo Domingo y CLACSO.
- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) (1969): *Usos de recursos del FMI y sistema cambiario*, Washington.
- FRANCO, Franklyn J. (1971): *Trujillo, génesis y rehabilitación*, Santo Domingo.
- FROBEL, F. y H. Freye (1981): *La nueva división internacional del trabajo*, Siglo XXI, México.
- FRUNDT, Henry J. (1980): Objeciones de accionistas cristianos contra la Gulf and Western en la República Dominicana, Estudios Sociales, Santo Domingo.
- GALÍNDEZ, Jesús de (1956): *La Era de Trujillo*, Editora Americana, Buenos Aires.
- GAMUNDI CORDERO, Rafael (2014): *Afán de libertad*, Santo Domingo.
- GARRETON, M.A. (1977): “De la seguridad nacional a la nueva institucionalidad. Notas sobre la trayectoria del nuevo Estado Autoritario”, en *Revista Mexicana de Sociología*, v. XXXIX, núm. 1.
- GERMANI, Gino (1974): *Política y sociedad en una época de transición*, Paidós, Buenos Aires.
- GERSCHENKRON, Alexander (1968): *El atraso económico en su perspectiva histórica*, Ariel, Barcelona.
- GERSHUNY, Jonathan (1988): *Nueva economía de servicios. Las transformaciones del empleo*, Ministerio del Trabajo y Seguridad social, Madrid.
- GLEIJESES, Piero (1978): *The Dominican Crisis. The 1965 Constitutionalist Revolt*. The Johns Hopkins University Press. Hay edición en español (FCE, México 1983). En el 2011 se publicó una edición revisada con otro título: *La esperanza desgarrada* (Editora Búho, Santo Domingo).

- GODÍNEZ, Víctor y Jorge Máttar (coordinadores) (2009): *La República Dominicana en 2030: hacia una nación cohesionada*. CEPAL, México.
- GOFF, Fred y M. Locker (1972): "La violencia de la dominación: en poder de los Estados Unidos en la República Dominicana", en *Revista de Ciencias Económicas y Sociales*, v. I, año 1, marzo-junio, Universidad Autónoma de Santo Domingo.
- GÓMEZ BERGÉS, Víctor (1985): *Las causas de dos derrotas*. Santo Domingo.
- GÓMEZ CERDA, José (1979): *El movimiento de los trabajadores dominicanos*, Visión, Santo Domingo.
- _____ (2006): *El sindicalismo en la República Dominicana*, Editorial Argos, Santo Domingo.
- GÓMEZ, Luis (1974): *Economía, política e investigación social*, Universidad Autónoma de Santo Domingo.
- _____ (1977): *Relaciones de producción dominantes en la sociedad dominicana, 1875-1975*, Alfa y Omega, Santo Domingo.
- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo (1969): *Sociología de la explotación*, Siglo XXI, México.
- GRAHAM, John W. (2011): *La crisis electoral de 1994. Alejándose del precipicio. Una crónica del mediador de la OEA*, Fundación Cultural Dominicana, impreso en Editora Búho, Santo Domingo.
- GRAMSCI, Antonio (1972): *Notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno*, Nueva Visión, Buenos Aires.
- GRASMUCK, Sherri (1983): "The Consequences of Dominican Urban Migration for National Development: The Case of Santiago", en conferencia "La emigración dominicana a los Estados Unidos", Museo del Hombre Dominicano, Santo Domingo.
- GRIMALDI, Víctor (2000): *Golpe y revolución. El derrocamiento de Juan Bosch y la intervención norteamericana*, Editora Corripio, Santo Domingo.
- GRUNWALD, Joseph y Kenneth Flamm (1991): *La fábrica mundial. El ensamblaje extranjero en el comercio internacional*, Fondo de Cultura Económica, México.
- GUERRERO Maritza (1975): "La inversión extranjera en la República Dominicana", en *Seminario sobre orientación de inversiones*, Santo Domingo.

- GUERRERO, Miguel (1993): *El golpe de Estado. Historia del derrocamiento de Juan Bosch*, Editora Centenario, Santo Domingo.
- GUNDER FRANK, André (1970): *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*, Signos Buenos Aires.
- GUZMÁN, Rolando (2012): *Composición social dominicana. El estrato de ingresos medios en República Dominicana en el umbral del siglo XXI*, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, Santo Domingo.
- GUZMÁN, Rolando, Manuel Agosin, Magdalena Lizardo y Rafael Capellán (2011): *Cuatro décadas de políticas de desarrollo productivo en República Dominicana*. Banco Interamericano de Desarrollo e Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
- HARTHLYN, Jonathan (2008): *La lucha por la democracia en la República Dominicana*. Santo Domingo: Fundación Global y Desarrollo.
- HERMANN, Hamlet (1980): *Caracoles. La guerrilla de Caamaño*, Editora Alfa y Omega, Santo Domingo.
- _____ (2009): *Eslabón perdido. Gobierno Provisional 1965-1966*, Editora Búho, Santo Domingo.
- HOBSBAWN, Eric (1978): *Industria e imperio*, Ariel, Barcelona.
- IAD (Instituto Agrario Dominicano): *El desarrollo rural y la reforma agraria en la República Dominicana. Informe de la delegación del Gobierno Dominicano a la conferencia mundial sobre reforma agraria y desarrollo rural*, Santo Domingo (mimeo).
- IANNI, Octavio (1975): *La formación del Estado populista en América latina*, Era, México.
- IDEA (Instituto de Estudios Aplicados) (s/f): *La zona franca de la Romana*, Santo Domingo (mimeo).
- INOA, Orlando (1994): *Estado y campesinos al inicio de la Era de Trujillo*, Librería La Trinitaria, Santo Domingo.
- JAGUARIBE, Helio et al. (1971): *La dependencia político-económica de América Latina*, Siglo XXI, México.
- JANVRY, Alain de (1981): *The Agrarian Question and Reformism in Latin America*, The John Hopkins University Press.

JIMENES GRULLÓN, Juan Isidro (1962/2003): *Una Gestapo en América*, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo

_____ (1965): *La República Dominicana; una ficción. Análisis de la evolución histórica y de la presencia actual del coloniaje y el colonialismo en Santo Domingo*, Talleres Gráficos Universitarios, Mérida, Venezuela.

_____ (1979): *Nuestra falsa Izquierda*, Santo Domingo.

JIMÉNEZ POLANCO, Jacqueline (1994): *Los partidos políticos en la República Dominicana*. Santo Domingo.

JORGE BLANCO, Salvador (2003): *Guerra, revolución y paz*, Editora Corripio, Santo Domingo.

JULIÁN PÉREZ, Luis (1989): *Santo Domingo frente al destino*, Editora Taller, Santo Domingo.

JUSTO DUARTE, Amaury (2004): *Partidos políticos en la sociedad dominicana (1844-2004)*, Editora Búho, Santo Domingo.

KEMP, Tom (1979): *La revolución industrial en la Europa del siglo XIX*, Editorial Fontanella, Barcelona.

KNIGHT, Melvin (1982): *Los americanos en Santo Domingo*, Editora de Santo Domingo.

LACLAU, Ernest (1978): *Política e ideología en la teoría marxista*, Siglo XXI, México.

LATORRE, Eduardo (1975): *Política dominicana contemporánea*, Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

LECHNER, Nobert (1977): *La crisis del Estado en América Latina*, El Cid, Caracas.

LINZ, Juan (1978): "The Transition from Authoritarian Regimes to Democratic Political Systems and the Problems of Consolidation of Political Democracy", en *The Breakdown of Democratic Regimes*, v. II, Baltimore Johns Hopkins University Press.

_____ (1978b): "Una interpretación de los regímenes autoritarios", en *Papers: Revista de Sociología*, núm. 8.

_____ (1990): "Democracia: presidencialismo o parlamentarismo. ¿Hace alguna diferencia?", en Juan Linz et al.: *Hacia una democracia moderna. La opción parlamentaria*. Universidad Católica de Chile.

- LIPSET, S. M. y A. E. Solari (editores) (1967): *Élites y desarrollo en América Latina*, Paidós, Buenos Aires.
- LLIBRE, Julio (1979): *Las sociedades financieras de desarrollo en República Dominicana*, Santo Domingo (mimeo).
- LOWENTHAL, A. (1977): *El desatino americano*, Editora de Santo Domingo.
- LOZANO, Wilfredo (1976/2016): *La dominación imperialista en la República Dominicana: 1900-1930*. Universidad Autónoma de Santo Domingo, impreso en Editora Taller. Segunda Edición de Editorial Búho.
- _____ (1984): “Fuerza de trabajo y empleo en República Dominicana”, Fundación Friedrich Ebert, Santo Domingo.
- _____ (1985): *Proletarización y campesinado en el capitalismo agroexportador*, Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
- _____ (1987): “Balaguer: 1986-1987, una nueva legitimidad política”, en *Estudios Sociales*, núm. 68.
- _____ (2003): *Después de los caudillos*. Librería La Trinitaria y FLACSO-Secretaría General, Santo Domingo.
- _____ (2004): *Los trabajadores del capitalismo exportador*, Banco Central, Santo Domingo.
- _____ (2013): *La razón democrática*, Editora Búho, Santo Domingo.
- _____ (2018a): “El gobierno de los doce años: 1966-1978. Entre el autoritarismo y la reforma conservadora”, en *Historia general del pueblo dominicano*, t. VI, coordinado por Roberto Cassá, Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo.
- _____ (2018b): “Los gobiernos del PRD: 1978-1986. Transición democrática, movilización popular y crisis económica”, en *Historia general del pueblo dominicano*, t. VI, coordinado por Roberto Cassá, Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo.
- LOZANO, Wilfredo y Alejandra Liriano (1990): “Estado, militares y sociedad en República Dominicana”, en *Estudios Sociales Centroamericanos*, núm. 54, septiembre-diciembre, pp. 59-84.
- LOZANO, Wilfredo y Bridget Wooding (editores) (2008): *Los retos del desarrollo insular. Desarrollo sostenible, migraciones y derechos humanos en las relaciones dominico-haitianas en el siglo XXI*, Programa

FLACSO Dominicano y el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, impreso en Editora búho, Santo Domingo.

MACPHERSON, C. B. (1979): *La teoría política del individualismo posesivo*. Libros de Confrontación.

MAIRA, Luis (1982): *América Latina y la crisis de hegemonía norteamericana*, DESCO, Lima.

_____ (1982b): *La política de la Administración Reagan y la crisis centroamericana*, EDUCA, San José, Costa Rica.

MANDEL, Ernest (1972): *El capitalismo tardío*, Era, México

MAÑÓN, Melvin (2005): *Operación estrella*, Editora Manatí, Santo Domingo.

MAQUIAVELO, Nicolás (1976): *El príncipe*, Aguilar, Madrid.

MARCELINO, Melissa, Francisco Jiménez y Diógenes Lamarche (2012): *Gasto social, democracia y ciclo político en República Dominicana 1976-2010*, Observatorio Político Dominicano, FUNGLODE, Santo Domingo.

MARINI, Ruy Mauro (1974): *Dialéctica de la dependencia*, Era, México.

MARTIN, John Bartlow (1975): *El destino dominicano. La crisis dominicana desde la caída de Trujillo hasta la guerra civil*. Editora de Santo Domingo.

MARTÍNEZ, Orlando (1976): *Microscopio* (tres tomos). Edición preparada por Carlos Dore, Editora Taller, Santo Domingo.

MARTÍNEZ MOYA, Arturo (2011): *La caña da para todos*, Archivo General de la Nación, impreso en Editora Búho, Santo Domingo.

MARX, C. (s/f): *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte*, Editorial Progreso, Moscú.

MATEO, Andrés L. (1993): *Mito y cultura en la Era de Trujillo*. Librería La Trinitaria, Santo Domingo.

MATOS MOQUETE, Manuel (2000): *Caamaño. La última esperanza armada*. Editora Corripio, Santo Domingo.

MEDINA BENET, Víctor M. (1976): *Los responsables. El fracaso de la Tercera República. Narraciones de historia dominicana, 1924-1930*. Amigo del Hogar, 2da. Edición, Santo Domingo.

- MEDRANO, Felipe (1981): "Historia, realidad y futuro de los clubes populares", en *Extensión*, año I, Publicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, abril.
- MEJÍA, Luis F. (1988): *De Lilís a Trujillo. Historia contemporánea de la República Dominicana*, Editora de Santo Domingo, S.A.
- MÉNDEZ PÉREZ, Manuel, Luis Núñez Santana, Olmedo Reyes Méndez (1979): *El financiamiento de la economía dominicana en el decenio 1960-1977: la captación de recursos internos y externos*, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tesis de Grado.
- MERHARV, Meir (1972): *Dependencia, tecnología, monopolio y crecimiento*, Editorial Periferia, Buenos Aires.
- MILIBAND, Ralph (1974): *El Estado en la sociedad capitalista*, Siglo XXI, México.
- MILLS, C. W. (1973): *La élite del poder*, Fondo de Cultura Económica, México.
- MIOLÁN, Ángel (1984): *El PRD desde mi ángulo*, Editorial Letras de Quisqueya, Santo Domingo.
- MOORE, Barrington (1976): *Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia*. Península, Barcelona.
- MORENO, José A. (1973): *El pueblo en Armas*, TECNOS, Madrid.
- MORETA, Ángel (2009): *Capitalismo y descampesinización en el suroeste dominicano*, Archivo General de la Nación, Santo Domingo.
- MORRISON, Delessep S. (1965): *Latin American Mission*, New York, Simon and Shustec.
- MOYA PONS, Frank (1975): "El impacto de la industrialización en la sociedad dominicana y en el siglo XX: historia y perspectiva", en *Seminario sobre el desarrollo industrial en la República Dominicana*, Asociación Nacional de Jóvenes empresarios (ANJE), Santo Domingo.
- _____ (1981): *Manual de Historia Dominicana*, Editorial Corripio, Santo Domingo.
- _____ (1986): *El pasado dominicano*, Amigo del Hogar, Santo Domingo.
- _____ (1989): *Pioneros de la banca dominicana. La historia institucional del Banco Popular Dominicano y el Grupo Financiero Popular*, Amigo del Hogar, Santo Domingo.

- MOYA PONS, Frank (1992): *Empresarios en conflicto. Políticas de industrialización y sustitución de importaciones en la República Dominicana*, Editora Amigo del Hogar, Santo Domingo.
- MUTO, Paul (2014): *La promesa ilusoria. La República Dominicana y el proceso de desarrollo económico, 1900-1930*, Academia Dominicana de la Historia, impreso en Editora Búho, Santo Domingo.
- NACLA REPORT ON THE AMERICAS (1975): "Trade Union Imperialism in the Dominican Republic", en *NACLA's Latin America and Empire Report*, v. 9, núm. 3, April, New York.
- NURKSE, Raknar (1973): *Problemas de formación de capital en países insuficientemente desarrollados*, Fondo de Cultura Económica, México.
- O'CONNOR, James (1976): *Estado y crisis fiscal en la sociedad norteamericana*, Editorial Periferia, Buenos Aires.
- O'DONNELL, Guillermo (1977): "Reflexiones sobre las tendencias de cambio del Estado Burocrático Autoritario", en *Revista Mexicana de Sociología*, v. XXXIX, núm. 1: 9-59.
- _____ (1994): "Delegative Democracy", en *Journal of Democracy*, v. 5, núm. 1, pp 55-69.
- _____ (1996): "Ilusiones sobre la consolidación", en *Nueva Sociedad*, núm. 144, julio-agosto, pp. 70-89.
- O'DONNELL Guillermo y Philippe Schmitter, (editores) (1988): *Transiciones desde un Gobierno autoritario*. Tomo 4: *Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*. Buenos Aires: Paidós.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo) (1975): *Generación de empleo productivo y crecimiento económico. El caso de la República Dominicana*, Ginebra.
- ONAPLAN (Oficina Nacional de Planificación), Secretariado Técnico de la Presidencia (1965): *Bases para el desarrollo nacional*, Santo Domingo.
- _____ (1968): *Plataforma para el desarrollo económico y social de la República Dominicana*, Santo Domingo.
- _____ (1972): *Evolución de la economía dominicana en el período 1950-1970 (Plandes 9)*, Santo Domingo.

ONAPLAN (1973): *Bases para formular una política de empleo en la República Dominicana*, Santo Domingo.

_____ (1977): *Posibilidades del desarrollo económico y social en la República Dominicana, 1976-1986*, Santo Domingo.

OSSOWSKY, Stanislaw (1972): *Estructura de clases y conciencia social*, Península, Barcelona.

OVIEDO, José (1987): “La tradición autoritaria”, en *Ciencia y Sociedad*, v. XII, núm. 2, abril-junio.

_____ (1983): *Estado, reestructuración y crisis en la República dominicana: 1965-1978*, Universidad Autónoma de Santo Domingo.

OVIEDO, José y Pedro Catrain (1981): *Estado y crisis política. República Dominicana 1980*, Alfa y Omega, Santo Domingo.

OVIEDO, José y Rosario ESPINAL (1986): *Democracia y proyecto socialdemócrata en República Dominicana*. Editora Taller, Santo Domingo.

PEÑA VALDEZ, Julio (1978): *Breve historia del movimiento sindical dominicano*, Ediciones Dominicanas Populares, Santo Domingo.

PÉREZ CABRAL, Pedro (1967): *La comunidad mulata*, Gráfica Americana, Caracas.

PÉREZ, César y Leopoldo Artilles (1992): *Movimientos sociales dominicanos. Identidad y dilemas*, Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

PORTORREAL LIRIANO, Fátima (2010): “El movimiento campesino independiente (MCI) en República Dominicana Un estudio de caso”, en Álvarez, R. R., W. Lozano *et al.* (editores): (coordinadores): *La sociedad civil dominicana: contribución a su historia*. Santo Domingo: Búho.

PORTORREAL MOREL, Francisca y Rafaela Miranda S. (1979): *Evolución de los salarios en la industria dominicana*, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tesis de Grado.

POULANTZAS, Nicos (1971): *Poder política y clases sociales en el Estado capitalista*, Siglo XXI, México.

_____ (1971b): *Fascismo y dictadura*, Siglo XXI, México.

POULANTZAS, Nicos (1975): *La crisis de las dictaduras. Portugal, Grecia y España*, Siglo XXI, México.

- POULANTZAS, Nicos (1976): *Las clases sociales en el capitalismo actual*, Siglo XXI, México.
- PREALC (Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe) (1982): *Mercado de trabajo en cifras 1950-1980*, Santiago de Chile.
- PREBISCH, Raúl (1963): *Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano*, Fondo de cultura Económica, México.
- _____ (1981): *Capitalismo periférico, crisis y transformación*, Fondo de Cultura Económica, México.
- PUELLO, Sócrates M. ((s/f): *La política de balanza de pagos en la República Dominicana*, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tesis de Grado.
- RATHE, Magdalena (1979): *Aproximaciones a un estudio de la deuda externa dominicana*, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tesis de Grado.
- RIVAS, José (1982): *Evaluación de la política gubernamental en el sector construcción 1960-1979*. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tesis de Grado.
- RODRÍGUEZ, Frank (1987): *Campesinos sin tierra*, Editora Taller, Santo Domingo.
- RODRÍGUEZ DE LEÓN, Francisco (1996): *Trujillo y Balaguer. Entre la espada y la palabra*, Artes y Ediciones Caribe, Santo Domingo.
- RODRÍGUEZ DEL PRADO, Cayetano (2008): *Notas autobiográficas*, Editorial Búho, Santo Domingo.
- ROSARIO, Esteban (2006): *Los dueños de la República Dominicana*, Editora Búho, Santo Domingo.
- ROSTOW, W. (1978): *Las etapas del crecimiento económico*, Fondo de Cultura Económica, México.
- ROUQUIE, Alain (1987): *The military and the state in Latin America*. Berkeley, University of California Press.
- _____ (2011): *A la sombra de las dictaduras. La democracia en América Latina*, Fondo de Cultura Económica, México.
- SALAMA, Pierre (1976): *El proceso de subdesarrollo*, Era, México.

- SAN MIGUEL, Pedro L. (1995): *Los campesinos del Cibao. Economía de mercado y transformación agraria en la República Dominicana 1880-1960*, Editorial de la Universidad de Puerto Rico.
- SANG, Mu-Kien Adriana (2000): *La política exterior dominicana. Caminos transitados: un panorama histórico: 1844-1961*, Banco Central y Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, impreso por Amigo del Hogar, Santo Domingo.
- _____ (2002): *La política exterior dominicana. Del caos al abandono: 1961-1974*, Banco Central y Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, impreso por Amigo del Hogar, Santo Domingo.
- _____ (2015): *CONEP: 50 años de su historia institucional*, Santo Domingo.
- SARTORI, Giovanni (1989): *Teoría de la democracia* (dos volúmenes), Alianza Universidad, México.
- SCHMITT, Carl (2009): *Teología política*, Trotta, Madrid.
- SERENI, Emilio *et al.* (1974): *Agricultura y desarrollo del capitalismo*, Alberto Corazón Editor, Madrid.
- SHANIN, Theodor (1976): *Naturaleza y lógica de la economía campesina*, Anagrama, Barcelona.
- SIERRA, Gerónimo de (1968): "República Dominicana: dependencia, subdesarrollo y movimientos populares", en ¡Ahora!, núm. 385, Santo Domingo.
- SILFA, Nicolás (1980): *Guerra, traición y exilio* (tres tomos), Barcelona.
- SLATER, Jerome (1976): *La intervención americana*, Editora de Santo Domingo.
- STAVENHAGEN, Rodolfo (1969): *Las clases sociales en las sociedades agrarias*, Siglo XXI, México.
- STINCHCOMBE, Arthurd (1979): *La construcción de teorías sociales*, Nueva Visión, Buenos Aires.
- SUNKEL, Osvaldo (1972): *Capitalismo transnacional y desintegración nacional*, Nueva Visión, Buenos Aires.
- SUTTCLIFFE (1978): "Imperialismo e industrialización en el tercer mundo", en Owen R. y B. Sutcliffe (editores): *Estudios sobre la teoría del imperialismo*, Era, México

TAVARES, Maria da Conceição Tavares (1980): *De la sustitución de importaciones al capital financiero*, Fondo de cultura Económica, México.

TAVERAS GUZMÁN, Juan Arístides (1987): *La IV República. La de Balaguer*, Editora Corripio, Santo Domingo.

THERBORN, G. (1978): ¿Cómo domina la clase dominante?, Siglo XXI, México.

TONOS, Luis E. (1974): “Comentarios sobre la ponencia “Inflación, distribución del ingreso y empleo” de Manuel José Cabral”, en *Seminario sobre la inflación*, Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

_____ (1976): “Proteccionismo, industrialización e inflación en la República Dominicana”, en *Revista Tributación*, v. I, núm. 5, enero-marzo, Santo Domingo.

TOURAINE, Alain (1969): *La sociedad post industrial*, Ariel, Madrid.

TROTSKY, León: (1975): *La revolución de 1905*, Planeta, Barcelona.

TURITS, Richard (2013): *Foundation of Despotism. Peasant, the Trujillo Regimen, and Modernity in Dominican History*, Stanford University Press, California.

VEGA, Bernardo (1970): “La inversión extranjera: casos y situaciones dominicanas”, en ¡Ahora!, núm. 346, Santo Domingo.

_____ (1973): *La problemática económica dominicana*, Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago.

_____ (1973b): *Evolución de la política de industrialización de la República Dominicana*, Santo Domingo.

_____ (1975): *Tratamiento que recibe la inversión extranjera en la legislación dominicana actual*, Editora Taller, Santo Domingo.

_____ (1991): *Kennedy y los Trujillo*, Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo.

_____ (1999): *Los Estados Unidos y Trujillo. Los días finales: 1960-1961*, Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo.

_____ (2004): *Cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder en 1966*, Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo.

- VEGA, Bernardo (2006): *El peligro comunista en la Revolución de Abril ¿Mito o realidad?* Fundación Cultural Dominicana, Santo Domingo.
- VILAS, C. M. (1973): "La política de la dominación en la República Dominicana", en Corten, André *et al.*: *Imperialismo y clases sociales en el Caribe*, Cuenca, Buenos Aires.
- _____ (1979): "Clases sociales, Estado y acumulación periférica en la República Dominicana", en *Realidad Contemporánea*, v. II, núm. 10-11, Santo Domingo.
- WADE, Robert (1999): *El mercado dirigido. La teoría económica y la función del gobierno en la industrialización del Este de Asia*, Fondo de Cultura Económica, México.
- WARREN, Bill (1977): "Imperialismo e industrialización capitalista", en Warren B. *et al.*: *Industrialización y tercer mundo*, Anagrama, Barcelona.
- WEBER, Max (1948/1968): *Economía y sociedad*, Fondo de Cultura Económica, México.
- WEFFORT, Francisco (1968): *Classes populares e política: contribuição ao estudo do populismo*, São Paulo (mimeo).
- WELLS, Sumner (2000): *La Viña de Naboth. La República Dominicana 1844-1924*, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Santo Domingo.
- WHITE, William y W. Bradley (1968): *Informe sobre la agroindustria en la República Dominicana*, Santo Domingo.
- WHITEHEAD, Laurence (2002): *Democratización. Teoría y experiencia*. FCE, México, 2002.
- WIARDA, Howard J. (1966): *Materials for the Study of Politics and Government in the Dominican Republic, 1930-1966*, Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago, República Dominicana.
- _____ (1969): *The Dominican Republic: a Nation in Transition*, F.A. Praeger, New York.
- _____ (1978): *The Trujillo Dictatorship: caudilloism or totalitarianism*, Gainesville University of Florida.
- ZAFFARONI, Eugenio R. *et al.* (2018): *Masacre de 1937, 80 años después. Reconstruyendo la memoria*, Fundación Juan Bosch, CLACSO, FLAC-

Apéndice estadístico

Cuadro A.1
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR SECTORES DE ORIGEN: 1950-1976
(En millones de RD\$ a precios de 1962)

Años	Agricultura	Ganadería	Silvicultura	Minería	Industria	Construcciones	Comercio	Transporte	Comuni- caciones	Electricidad	Finanzas	Propiedad de vivienda	Gobierno	Otros servicios
1950	106.0	37.3	4.0	1.0	65.5	14.6	84.4	18.0	1.2	1.3	5.2	35.8	40.4	52.3
1951	115.4	38.1	4.8	0.7	75.7	20.7	99.9	19.8	1.4	1.3	5.6	37.2	47.6	53.8
1952	124.1	39.6	5.3	1.3	84.0	28.6	101.5	24.0	1.7	2.1	6.2	39.3	50.2	55.6
1953	125.2	40.5	5.6	1.5	81.4	24.5	100.1	23.1	1.8	2.1	7.0	41.0	46.3	52.0
1954	139.0	42.9	6.5	1.7	88.3	24.5	110.4	25.0	1.9	2.4	7.8	42.4	46.2	58.7
1955	134.3	44.3	7.7	1.7	88.2	32.1	118.2	25.4	2.5	3.3	9.0	43.7	55.3	60.4
1956	140.9	46.9	6.8	2.2	102.1	35.8	136.6	28.4	2.6	4.4	11.0	45.7	61.5	62.1
1957	146.5	48.7	7.0	1.9	111.0	37.9	142.3	31.4	2.8	5.0	11.7	48.5	71.3	64.2
1958	156.9	51.5	7.3	1.9	116.9	40.7	141.8	34.3	3.4	6.4	12.8	50.9	71.8	66.4
1959	162.6	53.6	6.7	8.0	112.8	25.5	148.4	34.4	3.6	7.3	13.4	52.6	81.4	65.5
1960	187.9	59.1	7.5	12.1	115.3	21.4	131.7	32.3	3.8	8.1	12.9	53.3	70.7	59.3
1961	164.4	60.9	7.7	12.7	113.5	20.0	130.9	31.5	3.8	8.2	12.0	54.2	79.3	58.9
1962	170.1	61.6	8.0	10.9	145.2	27.2	159.5	40.0	4.4	9.3	13.1	56.7	109.8	71.0
1963	168.9	66.0	8.9	10.8	147.7	35.9	168.1	46.1	4.8	10.1	14.0	61.3	124.8	77.8
1964	177.7	68.2	9.3	12.2	140.7	43.1	179.2	54.8	5.2	11.8	16.9	67.4	134.9	86.5
1965	157.5	69.9	9.4	12.1	112.2	29.2	135.5	46.8	5.1	10.4	15.5	70.9	136.0	72.0
1966	171.8	72.6	9.4	11.9	148.0	38.8	171.6	54.4	5.3	12.7	16.8	75.4	129.0	87.9
1967	169.7	73.9	9.3	15.5	162.7	45.2	175.3	55.2	5.8	14.2	17.7	80.4	121.4	86.6
1968	163.1	95.5	6.6	14.8	151.1	49.9	175.6	58.9	6.4	15.2	17.9	85.8	108.0	87.7
1969	191.7	99.3	6.8	17.0	181.1	53.3	198.4	64.8	6.9	17.2	19.0	91.4	105.1	98.3
1970	204.3	102.5	7.0	18.1	215.5	64.2	224.5	74.7	7.2	19.6	21.2	97.7	106.1	108.6
1971	217.3	106.8	6.9	18.4	244.0	86.3	255.0	83.5	7.9	22.2	21.4	105.5	110.6	120.6
1972*	222.8	112.5	7.5	59.6	269.3	105.6	292.0	90.0	8.6	25.1	23.2	114.5	109.9	139.4
1973*	239.2	116.8	9.2	87.8	304.3	120.3	321.3	96.7	10.0	29.4	26.4	125.6	109.9	161.2
1974	243.5	121.6	12.1	96.6	338.4	133.5	351.9	103.7	10.9	31.3	30.1	141.2	114.3	183.0
1975	230.0	123.1	8.8	115.4	347.4	134.2	364.7	111.4	11.9	33.6	38.0	157.7	127.3	194.1
1976	258.8	128.2	8.9	140.8	368.9	137.2	379.7	113.0	17.3	34.6	43.7	166.1	131.3	193.5

(*) Cifras provisionales.
FUENTE: Banco Central, *Cuentas nacionales*.

Cuadro A.2
OFERTA Y DEMANDA FINALES: 1960-1976
 (Millones de RD\$ a precios de 1962)

Años	Oferta Final			Demanda Final						
	PIB	Importaciones	Total	Gastos consumo privado	Gastos consumo Gobierno	Inversión Bruta Interna			Exportaciones	Total
						Fija	Variación de existencia	Total		
1960	775.6	910.2	885.8	529.6	90.9	67.2	9.2	76.4	188.7	885.8
1981	758.2	96.9	835.1	530.4	92.3	52.7	4.1	56.8	175.4	885.1
1982	887.1	184.2	1,071.3	646.5	129.9	91.3	6.8	98.1	196.7	1,071.3
1963	945.1	219.3	1,164.4	705.4	146.8	124.7	14.4	139.2	172.9	1,164.4
1964	1,008.3	252.8	1,261.1	759.2	153.8	159.0	13.1	172.2	175.7	1,261.1
1965	882.8	155.5	1,038.3	650.2	162.5	83.7	-2.5	81.1	143.9	1,038.3
1966	1,001.1	211.3	1,212.5	780.5	145.1	131.5	9.6	141.1	144.6	1,212.5
1967	1,035.0	215.3	1,250.5	799.8	131.0	142.3	6.9	149.2	170.4	1,250.5
1968	1,040.3	235.1	1,275.4	815.4	137.3	154.2	-2.3	151.9	170.8	1,275.4
1968	1,167.1	258.3	1,425.4	897.3	150.9	173.2	21.8	195.0	181.9	1,425.4
1970	1,286.5	300.9	1,587.4	977.3	155.3	218.3	24.7	243.0	211.8	1,587.4
1971	1,413.9	348.0	1,761.9	1,071.1	160.2	272.6	7.8	280.4	250.1	1,761.9
1972	1,581.3	365.4	1,946.7	1,170.0	111.7	375.6	-25.6	350.0	315.0	1,946.7
1973	1,772.1	392.9	2,165.0	1,268.6	114.9	406.1	10.1	416.3	365.0	2,165.0
1974	1,894.8	522.8	2,417.6	1,388.8	166.8	457.3	23.7	481.1	380.9	2,417.6
1975	2,001.7	542.6	2,544.3	1,511.0	109.0	505.8	45.2	551.1	373.1	2,544.3
1976	2,128.7	530.3	2,659.0	1,554.3	122.5	490.4	41.8	532.2	449.8	2,659.0

FUENTE: Banco Central; Boletines mensuales.

Cuadro A.3
INVERSIÓN BRUTA INTERNA SEGÚN TIPO DE COMPRADOR
1960-1976
(Millones de RD\$)

Años	Sector Privado			Sector Público			Total General
	Construcciones	Equipo	Variación de existencia	Total	Construcciones	Equipos	Total
1960	12.3	20.0	9.2	41.5	30.9	3.0	34.8
1961	11.1	8.9	4.1	24.1	29.4	3.1	32.5
1962	32.1	27.2	6.8	66.7	25.6	8.2	33.8
1963	51.5	39.1	14.4	105.0	20.8	13.2	34.0
1964	64.4	59.5	13.1	137.0	22.9	12.2	35.1
1965	42.3	13.5	- 2.5	63.3	16.9	10.9	27.8
1966	50.3	41.6	9.6	101.9	27.8	11.2	39.0
1967	56.0	40.5	6.9	103.4	39.9	10.2	45.6
1968	59.5	44.1	- 2.3	101.3	41.5	8.9	50.4
1969	61.8	48.5	21.8	142.1	45.9	16.8	62.7
1970	68.7	82.8	24.7	176.2	61.3	5.3	66.6
1971	69.9	100.6	7.8	178.3	92.3	9.6	101.9
1972	93.4	150.2	- 25.6	218.3	170.2	11.6	131.8
1973	112.0	150.8	7.5	270.3	131.4	12.9	144.3
1974	120.7	176.0	23.7	320.4	124.7	35.7	285.1
1975	129.6	190.1	45.2	364.9	142.0	44.0	186.0
1976	146.6	178.0	41.8	364.4	121.0	36.6	167.6

FUENTE: Banco Central, Cuentas nacionales.

Cuadro A.4
BALANZA DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: 1960-1978
(En millones de RD\$)

Años	Exportaciones	Importaciones	Balanza Comercial	Ingresos por Servicios	Egresos por Servicios	Balanza de Servicios	Balanza de Pagos (*)
1960	157.4	90.3	67.1	16.0	37.5	- 21.3	42.5
1961	138.9	72.1	66.8	13.4	45.2	- 31.8	33.0
1962	169.6	132.3	37.3	19.7	73.3	- 53.6	- 10.4
1963	174.3	164.6	9.7	23.2	81.5	- 58.3	- 19.4
1964	179.4	202.4	- 23.0	25.0	82.4	- 57.4	- 11.8
1965	125.5	120.7	4.8	19.2	58.7	- 39.5	42.9
1966	136.7	166.9	- 30.2	21.7	82.9	- 61.2	- 74.9
1967	156.2	174.7	- 18.5	30.5	85.2	- 54.7	- 66.2
1968	163.5	196.8	- 33.3	37.0	88.9	- 51.9	- 75.2
1969	184.1	217.2	- 33.1	44.3	104.2	- 59.9	- 81.9
1970	213.2	278.0	- 64.8	44.2	113.9	- 69.7	- 125.2
1971	243.0	311.1	- 68.1	50.7	129.1	- 78.4	- 124.1
1972	347.6	337.7	9.9	64.7	152.8	- 88.1	- 47.6
1973	442.1	421.9	20.6	73.8	222.4	- 142.6	- 97.9
1974	636.7	673.0	- 36.3	97.8	338.9	- 241.1	- 242.4
1975	893.8	772.7	121.1	120.5	355.1	- 234.6	- 74.5
1976	716.4	763.6	- 47.2	126.5	367.7	- 241.2	- 241.9
1977	780.5	847.8	- 67.3	140.5	387.0	- 247.3	- 264.5
1978	675.5	859.7	- 184.2	154.1	399.1	- 245.0	- 375.2

(*) No incluye transacciones unilaterales netas (donaciones).
FUENTE: Banco Central: Cuentas nacionales.

Cuadro A.5
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TRADICIONALES: PRODUCCIÓN, VALOR Y PRECIOS: 1966-1979
(Toneladas métricas en miles y millones de RD\$)

Años	Cacao crudo en granos			Café verde en granos			Tabaco en ramas			Azúcar crudo		
	Volumen Físico	Valor RD\$	Precio	Volumen Físico	Valor RD\$	Precio	Volumen Físico	Valor RD\$	Precio	Volumen Físico	Valor RD\$	Precio
1966	25.9	10.8	18.9	25.3	20.9	37.5	12.5	6.6	23.9	548.0	70.3	5.8
1967	23.9	11.6	22.0	22.2	17.0	34.7	20.0	10.3	23.4	646.5	81.8	5.7
1968	25.0	13.6	24.7	23.4	17.9	34.7	16.3	11.2	31.2	609.9	82.9	6.2
1969	25.1	19.8	35.8	28.0	21.2	34.3	17.5	12.6	32.6	617.7	88.1	6.5
1970	34.4	19.1	25.0	25.0	24.9	45.2	19.5	13.9	32.3	769.4	103.4	6.1
1971	29.1	12.5	19.5	25.6	22.6	40.0	25.8	19.8	34.8	994.2	132.0	6.0
1972	32.3	14.9	21.0	26.3	25.1	43.3	32.5	28.6	39.9	1,098.7	159.0	6.6
1973	23.1	19.6	38.5	35.3	39.7	51.0	31.2	29.5	42.9	1,037.3	186.6	8.1
1974	26.4	44.1	75.8	30.5	38.6	57.4	41.1	37.9	41.8	1,016.8	323.3	14.4
1975	22.3	25.1	51.0	25.0	34.4	62.4	30.3	33.2	50.4	949.7	560.6	26.8
1976	24.1	44.9	84.3	36.6	87.7	108.7	33.0	38.0	52.2	976.9	255.4	11.8
1977	25.7	93.8	165.5	40.0	160.8	182.3	19.7	28.1	64.7	1,102.8	218.3	9.0
1978	27.5	85.1	140.4	24.0	85.1	160.8	36.1	44.3	55.7	907.9	172.4	8.6
1979	25.3	73.7	133.4	39.4	143.3	165.0	39.9	53.9	61.3	993.3	191.5	6.0

FUENTE: ONE: Comercio Exterior, 1966-1979.

Cuadro A.6
ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES: 1966-1978
 (Precios corrientes en millones de RD\$)

Concepto	1966		1970		1974		1978	
	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
1. Alimentos ⁽¹⁾	32.9	19.7	33.6	12.0	87.2	13.0	121.0	14.0
2. Combustible y minerales	13.5	8.0	19.2	7.0	114.9	17.0	194.8	22.6
3. Productos químicos y farmacéuticos ⁽²⁾	27.4	16.4	44.7	16.0	63.8	9.4	95.2	11.0
4. Plásticos	-	-	-	-	20.1	3.0	25.8	3.0
5. Manufacturas diversas ⁽³⁾	15.3	9.1	22.6	8.1	62.3	9.2	75.4	8.7
6. Papel y carbón	7.1	4.2	9.1	3.2	21.6	3.2	27.3	3.1
7. Fundición hierro y acero	10.7	6.4	19.5	7.0	56.8	8.4	52.0	6.0
8. Calderas, máquinas y aparatos industriales	20.5	12.2	62.6	22.5	71.7	10.6	93.8	11.0
9. Electrodomésticos	7.6	4.5	21.4	7.6	34.0	5.0	32.3	3.7
10. Vehículos y tractores	14.5	8.6	27.1	9.7	49.1	7.2	66.6	7.7
11. Otros	11.2	10.9	18.2	6.0	83.3	14.9	75.1	9.2
Totales	166.9	100.0	278.0	100.0	673.0	100.0	859.2	100.0

⁽¹⁾ Incluye: cereales, aceites y grasas, pescados y mariscos, leche y lácteos, huevos, productos de molinería, semillas y oleaginosas, preparados diversos de alimentos manufacturados, tabaco.

⁽²⁾ Incluye: productos farmacéuticos, productos químicos orgánicos e inorgánicos, abonos, curtimbres, caucho sintético y natural, diversos productos químicos.

⁽³⁾ Incluye: manufacturas de madera y madera, textiles sintéticos, algodón y sus manufacturas, cerámicas, vidrios y sus manufacturas, aluminio, herramientas y enseres de ferretería, metálicos diversos, aparatos ópticos y fotográficos.

FUENTE: ONE: Boletines anuales de Comercio Exterior (1966-1970) y Banco Central: Boletines mensuales (1966-1978).

Cuadro A.7

GASTOS PRESUPUESTADOS DEL GOBIERNO CENTRAL POR CAPÍTULO: 1966-1978
(En miles de RD\$)

Instituciones	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Congreso Nacional	594	768	733	859	884	884	894	907	921	1,090	1,089	1,176	1,204
Presidencia de la República	30,547	28,084	30,981	19,507	22,454	28,730	31,858	36,895	43,491	43,841	44,085	50,841	66,764
Interior y Policía	36,083	23,550	24,974	25,588	26,755	26,639	27,538	27,318	32,259	33,547	38,090	381,604	40,201
Fuerzas Armadas	1,068	31,147	30,292	29,948	31,570	32,392	33,254	34,231	35,575	37,195	43,228	412,403	48,780
Relaciones Exteriores	55,317	2,148	2,466	2,429	2,670	2,774	2,900	2,990	3,235	3,250	3,400	1,855	4,050
Finanzas	37,135	8,437	21,090	33,208	37,228	40,047	35,728	36,661	46,932	50,214	56,861	62,677	77,323
Educación, Bellas Artes y Cultos	13,433	31,518	34,605	37,546	40,406	51,955	53,886	59,726	73,307	72,536	96,143	91,416	97,736
Salud Pública y Asistencia Social	20,621	17,957	16,907	28,751	12,405	35,258	40,311	49,773	63,555	65,989	83,617	79,057	81,230
Deportes, Educación Física y Recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,322	4,373	5,080
Trabajo	611	682	683	610	730	779	795	805	880	900	980	910	982
Agricultura	19,715	15,768	16,713	27,300	25,586	17,396	30,834	33,682	43,478	122,226	11,480	119,035	128,102
Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
y Comunicaciones	30,011	20,273	12,936	19,661	20,005	20,324	26,149	27,884	29,509	32,609	34,516	35,965	55,718
Industria y Comercio	-	742	736	713	777	900	10,512	6,126	2,241	2,300	2,790	3,047	3,080
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	4,053	3,487	3,407	3,565	3,684	4,083	4,317	4,407	4,607	4,505	4,710	4,763	4,879
Junta Central Electoral	2,416	615	887	591	2,243	1,194	1,890	2,030	4,211	2,030	2,123	2,124	4,169
Cámara de Cuentas	592	51	51	51	54	55	56	65	63	73	65	65	62
Totales	253,569	196,335	198,221	230,324	247,558	264,312	300,924	325,300	363,366	486,308	530,513	547,727	620,351

FUENTE: ONAPLAN: Departamento de Ejecución Presupuestaria.

Cuadro A.8
GASTOS EJECUTADOS DEL GOBIERNO CENTRAL POR CAPÍTULOS: 1966-1978
 (En miles de RD\$)

Instituciones	1966	1967	1968	1969	1970	51971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978
Congreso Nacional	465	731	731	852	863	870	875	882	937	1,024	1,047	1,058	1,187
Presidencia de la República	145,370	12,834	46,478	65,43	81,381	114,362	138,852	174,525	255,304	320,150	266,580	297,806	300,126
Interior y Policía	28,178	24,928	25,270	25,509	25,730	25,748	27,141	31,549	37,202	39,309	39,304	39,593	42,433
Fuerzas Armadas	23,543	30,793	32,551	30,251	31,495	31,972	34,499	36,619	47,538	57,668	67,385	75,783	87,145
Relaciones Exteriores	2,605	2,187	2,233	2,425	2,653	2,768	2,826	2,803	2,910	3,039	3,334	3,562	3,812
Finanzas	23,157	24,951	27,639	32,960	36,890	39,309	34,159	40,914	59,826	120,931	62,800	62,677	85,286
Educación, Bellas Artes y Cultos	27,022	28,287	29,112	30,868	36,289	38,364	40,483	43,021	44,796	47,261	60,081	61,641	70,327
Salud Pública y Asistencia Social	20,136	15,342	15,621	16,209	17,361	18,603	19,399	21,425	24,970	31,257	33,807	36,187	41,584
Deportes, Educación Física y Recreación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,104	2,467	3,202	2,779
Trabajo	641	591	581	596	634	655	655	642	613	644	649	692	805
Agricultura	19,158	15,835	10,085	12,159	13,638	13,728	13,542	13,275	11,091	19,289	20,463	22,511	22,036
Obras Públicas y Comunicaciones	22,756	16,971	12,219	13,531	12,097	12,278	13,104	13,116	13,482	13,900	14,114	19,198	19,583
Industria y Comercio	169	656	667	704	745	778	2,470	1,931	1,620	1,770	1,970	2,123	2,595
Turismo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	3,494	3,383	3,484	3,536	3,622	4,037	3,199	4,284	4,295	4,574	4,637	4,766	5,566
Junta Central Electoral	2,061	5,581	901	624	134	1,402	2,049	2,314	4,135	2,001	1,922	2,581	4,424
Cámara de Cuentas	48	48	52	53	54	54	54	55	60	57	59	57	65
Totales	198,010	198,102	207,631	235,325	264,800	304,987	334,7315	387,353	508,784	664,986	580,627	631,345	689,756

FUENTE: ONAPLAN: Departamento de Ejecución Presupuestaria.

Cuadro A.9
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL: 1966-1976
(En millones de RD\$)

Concepto	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976
SERVICIOS GENERALES:											
1.Administración	70.0	63.6	64.7	70.2	73.8	76.4	83.5	93.2	118.1	120.8	133.3
2.Justicia y orden público	17.3	14.1	16.2	20.4	23.2	24.1	29.4	33.9	38.5	34.8	37.0
3.Defensa nacional	17.2	16.6	17.6	17.6	17.0	17.7	18.6	21.0	28.1	27.5	29.1
4.Relaciones internacionales	32.8	30.8	28.7	29.8	30.8	31.2	32.5	35.1	48.1	55.1	63.6
	2.7	2.1	2.2	2.4	2.8	3.1	3.0	3.2	3.4	3.4	3.6
SERVICIOS SOCIALES:											
1.Educación	57.5	50.9	65.7	73.0		98.6	112.3	131.6	152.9	191.6	219.7
2.Salud pública y asistencia social	28.9	20.9	30.4	36.3	84.4	44.0	46.4	58.2	63.0	66.1	73.9
3.Trabajo	24.5	16.7	24.0	25.6	42.0	32.3	33.4	38.3	48.9	57.6	73.4
4.Vivienda	-	7.3*	0.5	0.6	29.0	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	0.6
5.Alcantarillado y agua potable	0.7	5.0	4.4	5.0	0.6	13.2	13.1	15.3	19.8	38.6	41.3
6.Servicios a la comunidad	-	-	5.3	4.7	9.1	6.0	14.2	13.4	14.2	21.2	24.1
7.Deportes	3.4	1.0	1.1	0.8	4.6	2.5	2.4	2.3	2.6	2.5	2.2
	-	-	-	-	2.1	-	2.0	3.5	3.8	4.4	7.2
SERVICIOS ECONÓMICOS:											
1.Agricultura	46.8	55.3*	59.7	70.2	81.6	108.2	117.8	437.8	205.4	340.2	234.2
2.Riego	19.2	20.3	18.0	17.2	15.2	15.4	17.5	27.2	31.0	47.7	52.3
3.Industria, comercio, minería y turismo	-	-	3.5	10.4	12.4	14.5	12.4	18.5	50.9	74.7	74.7
4.Transporte y comunicación	-	-	1.3	2.1	3.1	3.5	2.6	4.5	19.4	17.2	4.8
5.Urbanismo y edificación	1.7	3.6	30.5	34.2	42.0	58.4	49.2	42.5	43.8	52.5	55.1
6.Energía	25.0	26.9	3.7	5.3	5.7	8.2	30.1	39.0	33.0	36.7	25.7
7.Azúcar	-	-	0.4	1.4	2.8	6.8	4.6	5.0	27.9	34.4	48.5
	-	-	2.3	0.4	0.4	1.4	0.9	1.1	0.3	77.0*	3.1
SERVICIOS FINANCIEROS:											
1.Deuda pública interna	-	-	6.5	10.8	11.8	12.3	12.9	14.6	24.3	74.4	28.2
2.Deuda pública externa	-	-	3.4	6.9	6.2	4.3	5.7	7.0	13.8	18.1	24.4
3.Banca, seguros y otros	-	-	3.1	3.7	5.6	8.0	7.2	7.6	10.4	18.1	-
	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	61.2	3.8
SERVICIOS NO CLASIFICADOS:											
	23.6	20.2	11.0	11.0	10.2	9.9	9.8	13.3	12.0	-	-
Totales	197.9	198.0	207.6	215.2	264.9	305.1	325.8	390.5	512.9	663.0	615.4

(*) Incluye "Otros".
FUENTE: ONAPRES, elaborado POR ONAPLAN: Ejecuciones Presupuestarias.

Cuadro A.10
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS
DEL GOBIERNO CENTRAL: 1966-1976
 (EN MILLONES DE RD\$)

Concepto	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1973	1975	1976
A. GASTOS CORRIENTES	154.4	144.7	152.4	162.3	172.9	182.9	195.2	220.7	275.3	286.3	343.8
1. Gastos de operación:	113.9	110.3	115.6	122.4	130.3	136.4	145.4	163.8	197.8	220.6	242.7
a) Gastos de personal	94.4	97.2	99.5	104.0	109.0	113.4	118.9	127.5	143.6	161.3	131.4
b) Bienes y servicios	19.5	13.1	16.1	18.4	21.3	23.0	26.5	16.3	54.2	59.3	74.2
2. Transferencias corrientes:	39.5	33.7	37.7	37.7	40.8	43.8	47.2	51.9	71.5	60.1	74.9
a) Al sector público	26.1	21.2	22.8	24.7	25.3	26.0	27.5	27.7	45.7	30.2	55.7
b) Al sector privado	13.3	12.5	12.3	13.5	15.3	17.5	19.5	22.8	25.3	29.5	37.9
c) Organismos internacionales	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.3	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4
3. Intereses de la deuda pública:	1.0	0.7	1.3	2.2	1.8	2.7	2.6	5.0	6.0	5.6	7.1
a) Interna	-	-	-	1.4	1.1	0.6	0.1	2.4	2.3	2.9	2.4
b) Externa	-	-	-	0.8	0.7	2.1	2.5	2.6	3.7	2.7	4.7
B. GASTOS DE CAPITAL:	41.7	53.4	55.3	73.0	91.9	122.1	139.1	166.7	233.5	378.7	236.8
1. Inversión directa:	24.2	34.3	39.7	47.2	62.2	86.3	103.9	124.7	122.5	240.2	175.3
a) Inversión real:	24.0	33.6	36.4	45.3	51.1	77.1	95.9	111.9	116.1	167.7	165.6
i) Construcciones (*)	22.6	31.8	35.1	43.3	48.9	71.1	91.2	107.8	105.3	153.4	152.6
ii) Maquinarias y equipos	1.4	1.8	1.3	2.0	2.2	6.0	4.7	6.1	10.8	13.8	13.0
b) Inversión financiera:	0.2	0.9	1.3	1.9	11.1	9.2	8.0	10.3	6.4	73.0	9.7
i) Adquisición de inmuebles	0.1	0.6	2.3	1.7	11.1	9.2	8.0	10.3-	6.4	8.8	5.9
ii) Préstamos, estudios, investigaciones y proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	3.8
iii) Otras inversiones financieras	0.1	0.3	1.0	0.2	-	-	-	-	-	60.1	-
2. Inversión indirecta (transferencias de capital):	13.2	13.2	10.6	17.3	19.8	26.1	24.9	32.8	92.7	126.0	44.1
a) Al sector público	-	-	-	-	18.6	25.6	24.7	32.8	92.3	125.8	43.3
b) Al sector privado	-	-	-	-	1.2	0.5	0.2	0.0	0.4	0.2	0.8
3. Amortización de la deuda pública:	6.2	5.7	5.0	8.5	9.9	9.7	10.3	9.7	18.3	12.5	17.4
a) Interna	6.0	3.7	2.6	5.5	5.1	3.7	5.5	4.6	11.6	7.3	5.6
b) Externa	0.2	2.0	2.4	3.0	4.8	6.0	4.8	5.1	6.7	5.2	11.8
Totales (A+B)	196.1	198.1	207.7	235.3	264.8	305.0	334.3	387.4	508.8	665.0	580.5

(*) En los años 1966, 1967,1968 y 1969 incluye, además, "mantenimiento de carreteras" y otras inversiones "reales".

FUENTE: ONAPRES: Ejecuciones presupuestarias. Elaborado por ONAPLAN.

Cuadro A.11
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS RECAUDADOS: 1966-1979
(En miles de RD\$)

Concepto	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
INGRESOS ORDINARIOS:														
1. Ingresos tributarios			187,902	214,370	238,773	271,887	306,534	349,273	462,000	636,503	546,409	619,984	578,375	673,677
A. Impuestos	147,831	156,114	166,421	189,805	214,305	243,927	274,248	315,423	421,962	579,171	523,981	574,890	552,094	522,738
B. Tasas	5,081	4,358	7,254	8,607	9,644	10,689	1,304	12,006	12,761	17,691	14,139	14,379	15,210	16,348
2. Ingresos no tributarios	8,133	12,528	14,226	15,962	14,823	17,278	20,981	21,841	27,276	44,640	26,289	30,712	26,780	50,884
INGRESOS EXTRAORDINARIOS:														
1. Recursos internos (*)			17,786	20,168	28,070	31,715	29,248	37,593	58,539	20,942	19,485	9,290	49,867	331,791
2. Recursos externos			7,030	10,333	13,715	18,162	23,194	27,722	56,584	20,942	19,485	9,290	149,867	104,513
MÁS:			10,756	10,034	14,354	13,552	6,054	14,869	1,954					227,278
- Depósitos en custodia			235	2,334	471	453	398	2,961	562	647	759	997	809	624
- Traspasos			313	45	154	9		39	531					
Totales Registrados (**)	161,046	173,441	206,237	236,919	267,419	304,065	336,174	369,867	521,633	658,092	584,654	630,277	629,112	1,008,038

(*) Recursos internos: emisiones de bonos, préstamos bancarios.

(**) En los años 1976, 1977 y 1978 los recursos externos no fueron canalizados por la tesorería.

FUENTE: Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES): Ejecuciones presupuestarias de 1966 a 1979.

Cuadro A.12

PRÉSTAMOS POR DESTINOS DE LOS BANCOS COMERCIALES

1968-1977

(En millones de RD\$)

(Saldos al final del año)

Detalle	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1976
Sector público:	50.5	24.4	26.5	30.1	36.9	46.3	43.8	59.5	88.9	88.6	72.4	112.1
-Préstamos al Gobierno Central	9.4	10.2	9.2	9.6	10.6	13.6	14.4	15.9	20.8	22.8	20.9	23.6
-Préstamos a instituciones autónomas	41.1	14.2	17.3	20.5	26.3	32.7	29.4	43.6	68.1	65.8	51.5	88.5
Sector privado:	74.0	88.8	118.8	147.5	174.4	210.3	273.2	370.6	556.2	661.7	763.2	814.7
-Préstamos industriales	23.9	36.8	52.9	66.8	72.3	84.3	114.0	147.9	231.9	277.9	292.7	295.6
-Préstamos agropecuarios	11.3	13.3	15.2	12.7	15.5	16.2	21.1	34.5	36.9	61.9	61.9	73.1
-Préstamos por reparación y construcción de inmuebles	3.1	4.6	6.6	9.0	11.3	13.2	15.6	25.3	43.7	49.1	64.8	72.3
-Préstamos comerciales	25.4	26.3	29.8	38.4	44.3	56.9	69.3	85.6	127.2	147.3	175.3	197.2
-Préstamos garantizados por ventas condicionales	5.1	5.2	5.8	1.7	1.6	1.5	2.3	1.0	0.6	0.5	1.3	2.4
-Préstamos varios	5.2	2.6	8.5	18.9	29.4	38.2	50.9	76.3	105.9	125.0	167.2	174.1
Totales	124.5	113.2	145.3	177.6	211.3	256.6	317.0	430.1	645.1	750.3	835.6	926.8

FUENTE: Banco Central: Boletines mensuales.

Cuadro A.13
PRÉSTAMOS DEL FONDO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO (FIDE)
CLASIFICADOS POR CATEGORÍAS Y ENTIDADES FINANCIERAS: 1966-1975
(Miles de RD\$)

Categorías	Fide (4)	Beneficiarios	Intermediarios	Total
Maquinarias y equipos ⁽¹⁾ :	70,151.3	21,241.1	6,441.1	97,833.5
-Industria	46,672.8	15,583.2	4,572.0	66,128.0
-Agricultura	2,964.6	1,292.9	191.1	4,448.6
-Ganadería	21,543.9	4,065.0	1,678.0	27,256.9
Construcciones y edificios:	30,140.4	11,207.2	4,511.3	45,858.9
-Industria	20,568.4	5,858.1	2,463.7	25,890.2
-Agricultura	1,628.1	792.1	182.6	2,602.8
-Ganadería	7,943.9	4,557.0	1,865.0	14,365.9
Terrenos:	1,670.6	13,312.0	5,386.0	20,368.6
-Industria	1,248.0	12,916.0	5,380.4	19,544.4
-Agricultura	393.6	351.1	5.6	750.3
-Ganadería	29.0	44.9	-	73.0
Capital de operaciones e insumos ⁽³⁾ :	12,230.3	25,800.7	9,820.4	67,851.4
-Industria	14,163.0	17,271.9	8,502.7	39,937.6
-Agricultura	8,629.1	3,125.5	617.2	12,371.8
-Ganadería	9,438.2	5,403.3	700.5	15,542.0
Otros ⁽²⁾ :	2,182.6	3,816.4	1,577.5	7,576.5
-Industria	78.9	1,902.6	1,485.0	3,467.4
-Agricultura	2,103.7	1,913.8	91.6	4,109.1
-Ganadería	-	-	-	-
TOTAL:	136,375.2	75,377.4	27,736.3	239,488.9
-Industria	81,731.1	53,831.8	22,404.2	154,967.6
-Agricultura	15,719.1	7,475.4	1,088.1	24,282.6
-Ganadería	38,925.0	14,070.2	4,243.5	57,238.7

⁽¹⁾ Incluye, además, compra de ganado para el caso del sector ganadería.
⁽²⁾ Incluye asistencia técnica y servicios agrícolas.
⁽³⁾ Incluye mano de obra, insumos agrícolas e industriales y fomento de pastinas para el sector ganadero.
⁽⁴⁾ No incluye los préstamos a los sectores salud, educación, turismo y “otros”, los cuales ascienden a RD\$34.6 millones.
FUENTE: Banco Central: FIDE: Boletines trimestrales.

Cuadro A.14
PRÉSTAMOS DEL FONDO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO (FIDE)
CLASIFICADOS POR SECTORES ECONÓMICOS E INSTITUCIONES INTERMEDIARIAS: 1966-1978
(En miles de RD\$)

Instituciones Intermediarias	Sectores Económicos									
	Industria		Agricultura		Ganadería		Otros Sectores		Total	
	No.	Monto	No.	Monto	No.	Monto	No.	Monto	No.	Monto
Bancos comerciales:	268	51,056.7	76	5,054.6	252	15,864.1	371	30,496.4	967	102,471.8
-Banco de Reservas RD:	73	10,415.4	24	1,072.8	75	3,474.7	266	20,039.2	438	35,002.1
-Banco de Santander:	7	1,060.0	9	452.0	4	100.4	2	104.0	22	1,716.4
-Banco de Santo Domingo	4	769.0	4	204.7	10	236.0	3	236.0	21	2,472.4
-Banco Popular Dominicano	91	14,994.7	7	132.7	36	2,990.2	75	5,484.5	209	23,602.1
-Bank of Nova Scotia	7	2,746.9	7	215.8	7	522.2	1	175.0	22	3,659.9
-Bank of America	3	274.3	8	361.4	5	291.4	2	16.0	18	943.1
-Citibank, N.A.	29	5,857.3	5	1,805.3	17	1,015.2	10	1,133.2	61	9,811.0
-Chase Manhattan Bank	13	3,229.8	3	82.0	65	4,288.4	3	1,168.3	84	8,768.5
-The Royal Bank of Canada	41	11,709.3	9	727.9	33	1,918.9	9	2,140.2	92	16,496.3
Entidades de fomento:	123	14,635.6	28	3,193.7	270	8,891.2	28	2,030.7	449	28,751.2
-Banco Agrícola RD	3	490.0	23	2,455.0	270	8,891.2	-	-	296	12,336.2
-Corporación de Fomento Industrial	118	13,759.6	-	-	-	-	28	2,030.7	146	15,790.3
-Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones	2	386.0	5	238.7	-	-	-	-	7	624.7
Sociedades financieras:	81	16,038.9	200	7,471.1	364	14,169.9	11	2,170.0	656	39,849.9
-Compañía Financiera Dominicana	11	2,713.0	6	109.3	67	2,142.8	3	261.2	87	5,226.3
-Compañía Financiera Asociada	24	2,384.5	20	700.9	65	2,577.0	8	1,908.8	117	7,571.2
-Financiera Agroindustrial	10	2,748.8	120	3,540.3	150	4,591.5	-	-	103	10,880.6
-Financiera Citicorp, S. a.	4	1,661.7	2	66.5	7	569.4	-	-	13	2,297.6
-Financiera de Desarrollo Industrial	5	1,084.9	23	1,109.2	45	1,729.8	-	-	93	3,923.9
-Financiera Empresarial	10	1,763.7	2	362.3	6	824.9	-	-	18	2,951.1
-Financiera La Moneda	1	30.7	16	1,025.7	14	749.4	-	-	31	1,805.3
-Financiera Nacional de Desarrollo	7	2,343.5	9	451.3	5	132.7	-	--	21	2,927.5
-La Nacional Financiera	9	1,308.6	-	-	4	776.8	-	-	13	2,085.4
-Financiera para el Desarrollo de la Cooperación	-	-	-	-	1	75.6	-	-	1	75.6
-Compañía Financiera del Caribe	-	-	2	105.4	-	-	-	-	2	105.4
Total General	472	81,731.2	304	15,194	886	38,975.2	410	34,697.1	2,072	171,072.9

FUENTE: Banco Central: Fondo de Inversión para el Desarrollo (FIDE): Boletines mensuales.

Cuadro A.15
**CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO REGISTRADAS EN EL BANCO CENTRAL
POR RAMAS DE ACTIVIDAD, VOLUMEN DE INVERSIÓN Y UTILIDADES: 1966-1978**

Ramas	Inversión Registrada (1)	Reinversión de Utilidades (2)	Total 3= (1+2)	Remesas de Utilidades (4)
Industrias:	93,538,261	2,371,541	95,099,802	57,822,637
-Cementos Nacionales	4,430,000	-	4,430,000	-
-Cerámica Industrial del Caribe	1,161,864	-	1,161,864	-
-Cervecería Nacional Dominicana CxA	10,624,850	-	10,624,850	10,024,307
-Colgate Palmolive, S.A.	3,000,000	779,685	3,799,685	3,419,716
-Compañía Dominicana de Alimentos Lácteos	2,500,000	-	2,500,000	1,311,448
-E. León Jimenes CxA	2,332,227	-	2,332,227	98,428
-Envases Antillanos, CxA	1,200,000	400,00	1,600,000	617,920
-Gulf and Western	50,086,041	-	50,086,041	39,000,000
-Refinería Dominicana de Petróleo, S.A.	4,395,000	-	4,395,000	-
-Refrescos Nacionales, CxA	2,712,640	-	2,712,640	2,232,852
-Otros ⁽¹⁾	11,075,639	1,191,856	12,267,495	1,119,466
Minería:	23,192,159	-	23,192,159	14,849,906
-Falcombridge Dominicana, CxA	14,843,680	-	14,843,680	-
-Rosario Dominicana, S.A.	8,298,479	-	8,298,479	14,849,906
Comunicaciones:	9,325,444	-	9,325,444	6,366,415
-All American Cables and Radio	1,115,644	-	1,115,644	950,427
-Compañía Dominicana de Teléfonos	8,194,800	-	8,134,800	5,415,488
-Otros ⁽²⁾	75,000	-	75,000	270,000
Comercio:	26,523,503	10,326,306	36,849,809	18,786,582
-Almacenes Generales del Caribe	2,240,000	1,768,755	4,008,755	3,097,575
-Esso Standard Oil, S.A.	9,870,836	536,581	10,347,417	4,912,827
-Texaco Caribbean Inc.	2,000,000	7,491,846	9,491,846	-
-The Shell Company (W.I.) Ltd.	10,000,000	-	10,000,000	4,570,594
-Otros ⁽³⁾	2,477,667	29,124	2,501,791	16,351,503





Instituciones financieras ⁽⁴⁾:					
-Banco Condal Dominicano	37,385,297	4,385,306	41,770,583	16,351,503	-
-Banco de Santo Domingo	1,108,000	-	1,108,000	-	-
-The Bank of America, N.Y., and S.A.	1,123,117	-	1,123,117	-	-
-The Bank of Nova Scotia	1,680,000	240,000	1,192,000	527,850	-
-The Chase Manhattan Bank	5,000,000	-	5,000,000	3,791,785	-
-The First National City Bank	6,560,000	-	6,560,000	2,451,454	-
-The Royal Bank of Canada	5,092,000	4,127,826	9,219,826	9,524,699	-
-Corporaciones Financieras Asociadas	12,000,000	-	12,000,000	442,880	-
-Financiera Citicorp, S.A.	1,250,000	-	1,250,000	-	-
-Otros ⁽⁵⁾	1,500,000	-	1,500,000	-	-
	2,072,080	17,480	2,089,500	-	-
Turismo y otros servicios:					
-Inverturs, S.A.	4,847,813	88,380	4,336,193	656,367	-
-IBM	1,200,000	-	1,200	-	-
-Otros ⁽⁶⁾	1,000,000	-	1,000,000	368,607	-
	2,047,813	88,380	1136,193	267,760	-
Empresas no clasificadas en otras ramas ⁽⁷⁾	515,000	-	515,000	9,380	-
Total General:	194,727,457	17,171,533	211,898,990	114,242,790	

NOTA: Solo se detallan las empresas con más de un millón de pesos (RD\$) invertidos que registra el Banco Central.

- (1) Incluye 51 empresas industriales.
- (2) Se refiere a la Compañía Nacional de Directorios Telefónicos.
- (3) Incluye 10 establecimientos comerciales.
- (4) Incluye en una sola rama a las empresas financieras monetarias (bancos comerciales) y no monetarias (compañías financieras).
- (5) Incluye el Banco de Santo Domingo y 6 compañías financieras.
- (6) Incluye 3 compañías turísticas y 12 compañías de servicios diversos.
- (7) Incluye 5 empresas diversas.

FUENTE: Banco Central.

Testimonio gráfico



1



2

1 Juramentación de Joaquín Balaguer como presidente de la República en su primera administración, 1966.

2 Discurso de Joaquín Balaguer en la toma de posesión en su primera reelección, 1970.



3



4

3 El brigadier Neit Rafael Nivar Seijas es juramentado por Joaquín Balaguer como jefe de la Policía Nacional, 1975.

4 El general Enrique Pérez y Pérez es juramentado por Joaquín Balaguer como secretario de Estado de Interior y Policía, 1975.



5 Grupo guerrillero del coronel Caamaño en algún lugar de Cuba.

6 Cadáver de Francisco Alberto Caamaño Deñó, 1973.



7



8

7 Amaury Germán Aristy, líder revolucionario, jefe de Los Palmeros.

8 Amaury Germán Aristy con su familia.



9 10 11 Palmeros caídos en combate junto a Amaury Germán Aristy. De izquierda a derecha: Virgilio Perdomo, Bienvenido Leal Prandy (la Chuta) y Ulises Cerón Polanco.

12 Militares en operación contra los Comandos de la Resistencia o Los Palmeros encabezada por el general Neit Rafael Nivar Seijas.



13



14



15



16

13 Amín Abel Hasbún, prominente líder estudiantil y posterior dirigente del Movimiento Popular Dominicano (MPD).

14 Cadáver de Amín Abel Hasbún, asesinado el 24 de septiembre de 1970.

15 16 Entierro de Amín Abel Hasbún, 1970.



17 Otto Morales, secretario general del MPD, en vida y luego de ser asesinado el 16 de julio de 1970.

18 Guido Gil, intelectual de izquierda, miembro del MPD, asesinado el 17 de enero de 1967.

19 Orlando Martínez, prominente periodista dominicano, asesinado el 17 de marzo de 1975.

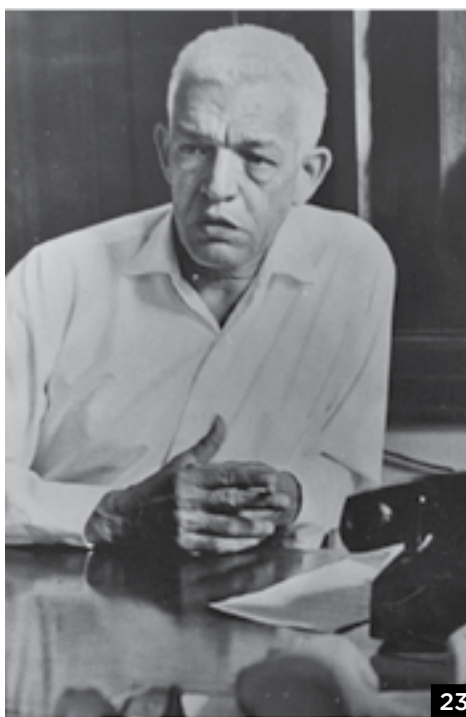
20 Maximiliano Gómez (el Moreno), líder del MPD, camino a tomar el avión que lo llevaría al exilio, 1970.



21



22



23

21 Caricatura de Joaquín Balaguer, Jacobo Majluta, José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch, líderes políticos en el Gobierno de los Doce Años de Joaquín Balaguer (1966-1978).

22 23 Principales líderes políticos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). En 1973 Juan Bosch decide renunciar y funda el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pasando Peña Gómez a ser el líder indiscutible del PRD.



24

24 Los cuatro principales dirigentes del PPRD en 1978. De izquierda a derecha: José Francisco Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán y Jacobo Majluta.



25



26

25 Dirigentes cañeros en una reunión, probablemente en 1972.

26 Trabajadores del Central Romana Corporation, principal corporación azucarera extranjera del país durante el período de los Doce Años de Joaquín Balaguer.



27 28 29 El rostro cambiante de Balaguer en uno de sus habituales actos de entrega de casas en el período de los Doce Años.



30



31

30 Balaguer sonriente entregando la llave de su casa a un seguidor.

31 Balaguer recibe bendiciones y agradecimientos de una señora del pueblo al recibir la llave de su casa.



32 Posible acto de inauguración de la Avenida 27 de Febrero el 16 de agosto de 1971.



33 Primer Encuentro Internacional de la Nueva Canción Siete Días con el Pueblo, celebrado del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 1974, convocado por la Central de Trabajadores de República Dominicana.

34 Luis "Terror" Díaz, Ramón Leonardo, Sonia Silvestre y Víctor Víctor en visita a la redacción de *El Nacional* durante el Encuentro Internacional de la Nueva Canción Siete Días con el Pueblo. Al fondo observa el periodista Orlando Martínez.





37 Toma de posesión de Antonio Guzmán como presidente Constitucional de la República Dominicana el 16 de agosto de 1978.

38 Abrazo entre el presidente saliente Joaquín Balaguer y el presidente entrante Antonio Guzmán en 1978.

39 Joaquín Balaguer y Antonio Guzmán en los cañonazos de salutación con motivo del acto de juramentación de este último como presidente de la República Dominicana.

Índice onomástico

A

Abdel-Malek, Anuar 417
Abel Hasbún, Amín 468
Acemoglu, Daron 417
Agamben, Giorgio 351-352, 417
Agosín, Manuel 431
Alemán, José Luis 176, 178-180, 189,
191, 219, 417
Alfonseca, Juan 298, 379, 418
Alighieri, Dante 329
Althusser, Louis 366
Álvarez, Rosa Rita 418, 437
Álvarez Betancourt, Opinio 229, 418
Álvarez Sánchez, Braulio 362
Álvarez Vega, Bienvenido 228, 384,
389, 406, 418
Amiama Castillo, Francisco 356
Amín, Samir 418
Aquino González, Carlos 159, 297-
298, 380, 418
Ariza, Marina 40
Artiles, Leopoldo 331, 384, 389,
406, 418, 437
Ascuasiati, Carlos 40, 57-58, 121, 132,
144, 165-166, 182, 188, 228, 419

Attiná, Fulvio 367, 419
Atkins, G. Pope 70, 77, 82, 94, 325,
330, 346, 369, 419

B

Báez Evertsz, Franc 40, 42, 48-49,
51, 138-139, 403, 419
Báez Evertsz, Julio 92, 419
Bairoch, Paul 121, 283, 293, 419
Balaguer, Joaquín 23-25, 27, 29-30,
31, 34, 43, 46, 50-51, 54, 62-66,
71, 73-83, 86, 91-98, 104-110,
112-113, 126-127, 164, 177, 180-
181, 189, 233, 240, 247, 250,
255, 271, 302, 304, 312-313,
316-320, 323, 325-327, 331,
333, 335, 337, 343-349, 353-
358, 361-367, 370-374, 377-379,
383-392, 395-397, 399-400,
404-415, 418-419, 421, 425,
433, 438, 440, 463-464, 470,
472-474, 478
Balcácer, Juan Daniel 30, 42, 346,
420, 427
Baran, Paul M. 60, 140, 420

Barratt Brown, Michael 47, 230, 281, 420
 Bartlow Martin, John 221, 420, 434
 Bartra, Roger 76, 87-89, 96, 350, 421
 Beauchamps Javier, Juan René 362
 Beck, Ulrich 367, 421
 Bell, Daniel 216, 421
 Beltré Melo, G.A. 152, 421
 Bendeزú Alvarado, Guillermo 159, 380, 393, 421
 Bendix, R. 421
 Benetti, Carlo 60, 132-133, 144, 178, 217, 293, 421
 Benoit, Bartolomé 341
 Betances, Emilio 385, 421
 Blackburn, Robin 421
 Bluhdorn, Charles 249
 Bonelly, Rafael F. 50, 63-65, 346, 408
 Bonó, Pedro Francisco 177, 442
 Bosch, Brian J. 42, 47, 62, 65, 82-83, 94-95, 143, 325, 330, 346, 349, 354, 356, 358-359, 362, 421
 Bosch, Juan 47, 61-63, 68-71, 77, 79, 82-83, 94-95, 104, 109, 147, 317, 323-324, 331, 334-337, 339-340, 342, 344, 346-348, 354, 356, 365, 375, 379, 390, 398-399, 408, 410-411, 421, 430-431, 442, 470
 Bradley, W. 376, 441
 Bray, David 422
 Brea, Ramonina 422
 Brito, Bienvenido 372
 Brunes, Álvaro 422
 Bryan, Patrick 422
 Buci-Glucksmán, Christine 51, 107, 423
 Bulmer-Thomas, Víctor 85, 123, 144, 147, 268, 293, 398, 423
 Bundy, McGeorge 344, 346
 Bunker, Ellsworth 249, 344, 346

C

Caamaño Deñó, Francisco Alberto 341, 344, 346-348, 358, 410, 431, 434, 465
 Cabral, Manuel José 184, 195, 201, 204-205, 207, 423, 440
 Cáceres Troncoso, Manuel 338
 Calder, Bruce 83, 138, 423
 Calderón, Fernando 56, 101-102, 192-193, 423
 Calili Padis, Pedro 267, 293, 423
 Campillo Perez, Julio G. 406, 423
 Capdevila, Lauro 42, 338, 423
 Capellán, Rafael 431
 Cardoso, Fernando H. 60, 85, 132-133, 148, 150, 267-268, 277, 293, 402, 423
 Carnoy, Martin 393, 402, 423
 Caroit, Jean Michel 30
 Carter, Jimmy 304, 321, 328, 413
 Cassá, Roberto 26, 42, 48, 50-52, 56-57, 75, 92, 94, 101-102, 138-139, 143-144, 197, 255, 269, 271, 330, 339, 349, 353, 375-376, 419, 423-424, 433
 Castells, Manuel 393, 402, 423-424
 Castillo, José del 42, 65, 75, 84, 101, 104, 106, 108-109, 113, 129, 133, 164, 168, 176, 235, 246, 252-253, 256, 308, 310, 318, 324, 371, 399, 424
 Catrain, Pedro 110, 176, 304, 325, 425, 437
 Cavarozzi, Marcelo 76, 425
 Ceara, Miguel 152, 156, 236, 269, 274, 425
 Chaljub Mejía, Rafael 318, 379, 425
 Chehabi, Houchang E. 349, 352, 425
 Chez Checo, José 197, 425
 Churchill, Winston 24
 Clark, Colin 216

Collado, Faustino 24-25, 425
 Collier, David 425
 Conde, Leonardo 232, 425
 Cordero Michel, José Ramón 48-49,
 51-53, 55, 334, 398, 426
 Corten, André 139-140, 142, 403,
 426, 441
 Cotler, Julio 47, 426
 Crassweller, Robert D. 42, 48, 51-
 52, 95, 426
 Crouch, Luis 160, 297, 300, 313, 375,
 380, 426
 Cruz, Domingo De La 426
 Cruz Brea, José Ernesto 361
 Cuello, José Israel 75, 78, 176, 236,
 242, 251, 254, 256-257, 426-427
 Cury, Jottin 346, 427

D

D'Oleo, Francisco 101, 155, 159-160,
 300, 315, 376, 380, 427
 Dahrendorf, R. 427
 Dauhajre, Andrés 188, 202, 427
 Derby, Lauren 42, 48, 52, 94, 427
 Despradel, Carlos 396, 427
 Deverell, John 75, 84, 129, 133, 164,
 235, 371, 427
 Díaz, Juan Bolívar 390, 407, 427
 Diederich, Bernard 427
 Dore, Carlos 101, 155, 159-160, 252,
 300, 312, 314-314, 320, 376, 380,
 427, 434
 Dos Santos, Theotonio 85, 133, 168,
 202, 268, 427
 Draper, Theodore 77, 330, 343, 346,
 427
 Duarte, Isis 58, 100, 102, 215, 219,
 349, 359, 409, 429, 432
 Durán Carrera, Mariano 361

E

Echavarría, Pedro Rafael 63-65
 Enmanuel, Arghiri 428
 Espaillet, Arturo 428
 Espinal, Flavio Darío 75, 428
 Espinal, Fulgencio 359, 428
 Espinal, Rosario 75, 92, 428, 437
 Estévez, Jaime 76
 Estrella, Julio C. 47, 68, 121, 129,
 131, 184, 189, 201, 224, 226-228,
 332, 372, 428
 Evers, Tilman 428

F

Fajnzylber, Fernando 85, 144, 147,
 290, 293, 398, 428
 Faletto, Enzo 85, 132, 150, 268, 277,
 402, 423
 Farland, Joseph 249
 Faxas, Laura 26-28, 75, 331, 349,
 353, 406, 428
 Fernández, Arlette 70, 82, 428
 Fernández, Florestán 47, 429
 Fernández, Leonel 394
 Fernández, Otto 42, 65, 92, 101, 108,
 155, 300, 318, 380, 419, 424, 429
 Fernández Domínguez, Rafael
 Tomás 70, 356, 428
 Fiallo, Viriato 95, 336
 Flamm, Kenneth 430
 Franco, Franklyn J. 429
 Freye, H. 429
 Frobel, F. 85, 150, 240, 268, 429
 Frundt, Henry J. 75, 129, 133,
 235, 246, 248, 252-254, 258-
 259, 429

G

Galíndez, Jesús de 42, 48, 51-52, 84,
 95, 429
 Gamundi Cordero, Rafael 429
 García Godoy, Héctor 344, 354, 408

García Muñiz, Humberto 84, 240, 246, 399
 Garreton, M. A. 76, 403, 429
 Germán Aristy, Amaury 466-467
 Germani, Gino 429
 Gerschenkron, Alexander 133, 144-145, 178, 281, 316, 398, 429
 Gershuny, Jonathan 216, 429
 Gil, Guido 469
 Gilpatric, Rosewll 249
 Gleijeses, Piero 42, 66, 70, 72, 77, 329, 338-343, 346, 354, 429
 Godínez, Víctor 388, 391, 393, 395, 430
 Goff, Fred 42, 56, 62, 68, 85, 93, 249, 330, 349, 359, 430
 Gómez, Luis 51, 85, 144, 300, 430
 Gómez, Maximiliano (el Moreno) 469
 Gómez Bergés, Víctor 430
 Gómez Cerda, José 430
 González Casanova, Pablo 207, 430
 Gouldner, Alvin 303
 Graham, John W. 407, 430
 Gramsci, Antonio 41, 51, 87-89, 107, 110, 351, 423, 430
 Grasmuck, Sherri 430
 Green, Rosario 76
 Grimaldi, Víctor 68, 70, 253, 330, 346, 430
 Grullón, Alejandro 47
 Grunwald, Joseph 290, 430
 Guerrero, Maritza 232, 430
 Guerrero, Miguel 68, 70, 330, 431
 Gunder Frank, André 60, 207-208, 431
 Guzmán, Antonio 32, 344, 346, 364, 372-373, 382-383, 411, 471, 478
 Guzmán, Rolando 431

H

Harriman, Averell 249
 Harthlyn, Jonathan 26-28, 75, 92, 329, 331, 349, 353, 359, 364, 428, 431

Hermann, Hamlet 344, 431
 Hobsbawn, Eric 281, 431

I

Ianni, Octavio 431
 Imber McGregor, Mario 362
 Inoa, Orlando 375-376, 431
 Isa Conde, Narciso 426

J

Jaguaribe, Helio 431
 Janvry, Alain de 160, 431
 Jarvis, Rafael 101-102, 255, 424
 Jimenes Grullón, Juan Isidro 95, 432
 Jiménez, Francisco 434
 Jiménez, Ramón Emilio 356, 361
 Jiménez Polanco, Jacqueline 75, 432
 Johnson, Lyndon B. 249-250, 343, 345
 Jorge Blanco, Salvador 340, 346, 349, 384, 390, 392, 432, 471
 Joyce, James 303
 Julián Pérez, Luis 432
 Justo Duarte, Amaury 432

K

Kemp, Tom 147, 271, 432
 Kennedy, John F. 70, 440
 Knight, Melvin 138, 432
 Kreye, Folker 85, 150, 240, 268, 290

L

Laclau, Ernest 432
 Lajara Burgos, Luis Homero 411
 Lamarche, Diógenes 434
 Latorre, Eduardo 62, 68, 432
 Lawrence, D. H. 137
 Lechner, Nibert 76, 432
 Linz, Juan 349, 352, 425, 432-433
 Lipset, S. M. 60, 421, 433
 Liriano, Alejandro 82, 326, 376, 433, 437
 Lizardo, Magdalena 431

Llibre, Julio 433
 Lluberes Montás, Salvador 356,
 361-362
 Lluberes Ricart, Rafael Alfredo 361
 Locker, M. 42, 56, 62, 68, 85, 93, 249,
 330, 349, 359, 430
 Logroño Contín, Manuel 361
 Lora, Francisco Augusto 108, 409
 Lowenthal, A. 42, 71-72, 77, 330, 343,
 433
 Lozano, Wilfredo 82, 83, 92, 138,
 143, 176, 201, 218, 330, 350, 352,
 376, 378, 379, 384, 388, 389, 393,
 395, 406, 418, 428, 433, 434, 437

M

Machiavelli, Niccolo 73
 Macpherson, C. B. 434
 Maira, Luis 321, 434
 Malagón Montesano, Renato 361
 Mandel, Ernest 85, 283, 434
 Manley, Michael 321
 Mann, Thomas 343-346
 Mañon, Melvin 434
 Marcelino, Melissa 434
 Marini, Ruy Mauro 60, 268, 283,
 294, 434
 Marrero Aristy, Ramón 50
 Martin, John Bartlow 42, 62-63, 68,
 70, 81, 221, 331, 420, 434
 Martínez, Orlando 82, 361, 434, 469,
 476
 Martínez Moya, Arturo 143, 434
 Marx, Carlos 9, 87, 89, 415, 434
 Mateo, Andrés L. 42, 94, 434
 Matos, Ramiro 362
 Matos Moquete, Manuel 434
 Máttar, Jorge 388-389, 391, 393, 395, 430
 Medina Benet, Víctor M. 435
 Medrano, Felipe 435
 Mejía, Luis F. 52, 435
 Méndez Pérez, Manuel 176, 435

Merharv, Meir 281, 283, 435
 Miliband, Ralph 435
 Mills, C. W. 435
 Miolán, Ángel 435
 Miranda S., Rafaela 437
 Molina Ureña, José Rafael 340-341
 Montes Arache, Manuel Ramón 341
 Moore, Barrington 28, 133, 283, 380,
 398, 435
 Morales, Otto 473
 Moreno, José A. 435
 Moreta, Ángel 376, 435
 Morrison, Delessep S. 56, 62, 70, 81,
 435
 Moya Pons, Frank 47, 75, 85, 132,
 144, 197, 228, 269, 285, 331-332,
 370, 372, 375, 435
 Muto, Paul 143, 436

N

Nivar Seijas, Neit 356, 360-361,
 464, 467
 Nolasco, Cornelio 30
 Núñez Santana, Luis 435
 Nurkse, Raknar 179, 436

O

O'Connor, James 114, 436
 O'Donnell, Guillermo 76, 436
 Olivero Suero, F. 421
 Orwell, George 221
 Ossowsky, Stanislaw 390, 437
 Oviedo, José 75, 92, 96, 110, 113, 176,
 306, 324-325, 425, 437
 Owen, R. 439

P

Pastoriza, Jimmy 47
 Peña Batlle, Manuel Arturo 50
 Peña Gómez, José Francisco 317,
 324, 339, 379, 390, 407, 410-411,
 470-471

Peña Taveras, Mario 339
 Peña Valdez, Julio de 437
 Pérez, César 437
 Pérez, José 428
 Pérez Cabral, Pedro 437
 Pérez y Pérez, Enrique 356, 359-362, 464
 Pieter, Gerardo 418
 Polanco, Wanda 418
 Portorreal Liriano, Fátima 326, 376, 437
 Portorreal Morel, Francisca 437
 Pou Castro, Joaquín Antonio 361
 Poulantzas, Nicos 41, 76, 96, 107, 350-352, 429, 437
 Prebisch, Raúl 60, 147, 202, 266, 277, 438
 Puello, Sócrates M. 438
 Puig, Max 75, 84, 133, 164, 371, 399, 424

R

Rathe, Magdalena 232, 234, 438
 Reid Cabral, Donald 71, 338, 339
 Reyes Méndez, Olmedo 435
 Rivas, José 184, 194
 Rivera Caminero, Francisco 356, 362
 Rivera Cuesta, Marcos 339
 Robinson, James A. 417
 Rodríguez, Frank 438
 Rodríguez De León, Francisco 50, 438
 Rodríguez del Prado, Cayetano 438
 Rodríguez Echavarría, Pedro 63-65
 Romeo, Rosario 133, 145
 Rosario, Esteban 348
 Rostow, W. 178, 438
 Rouquie, Alain 438

S

Salama, Pierre 85, 217, 267, 293, 438
 San Miguel, Pedro L. 143, 375, 439

Sang, Mu-Kien Adriana 105, 197, 425, 439
 Santana, Ruddy 40
 Sartori, Giovanni 439
 Schmitt, Carl 352, 436, 439
 Schmitter, Philippe 436
 Sereni, Emilio 147, 293, 439
 Shanin, Theodor 374, 439
 Sierra, Gerónimo de 56, 60, 439
 Silfa, Nicolás 439
 Slater, Jerome 42, 77, 330, 339, 346, 439
 Solari, A. E. 60, 433
 Stavenhagen, Rodolfo 207, 439
 Stinchcombe, Arthurd 89, 350, 439
 Sunkel, Osvaldo 439
 Sutcliffe, Bob 144, 230, 277, 283, 372, 439

T

Tavares, María da Conceição 85, 123, 144, 440
 Tavárez Justo, Manuel Aurelio (Manolo) 71, 335
 Taveras Guzmán, Juan Arístides 440
 Then Marte, Addys 418
 Therborn, G. 96, 440
 Tonos, Luis Eduardo 205, 372, 440
 Touraine, Alain 216, 353, 440
 Trotsky, León 440
 Trujillo, Rafael Leónidas 23, 25, 27-28, 31, 34-35, 38, 41, 43, 45, 48-50, 52-53, 55, 62-63, 76, 78-79, 84-86, 113, 130, 138, 143-144, 146, 166, 188, 221, 225, 247, 270-271, 296, 310, 325, 333-335, 353, 356, 365, 368, 375, 381, 398-399
 Turits, Richard 29, 42, 48-52, 86, 94, 113, 145, 325, 333, 375-376, 381, 440

V

Valdez Hilario, Rafael 319
Vega, Bernardo 42, 52, 66, 70, 81,
285, 287, 289, 330, 342-346,
372, 440, 441
Vilas, Carlos M. 42-45, 57, 62, 75,
93, 168, 172, 219, 271, 288, 308,
324, 330, 441

W

Wade, Robert 133, 268, 441
Wahendorfer, Achen 40
Wallerstein, Immanuel 41
Warren, Bill 277, 428, 441
Weber, Max 94, 404, 441

Weffort, Francisco 441
Wells, Sumner 441
Wessin y Wessin, Elías 108-109,
340-341, 356-358
White, William 376, 441
Whitehead, Laurence 441
Wiarda, Howard J. 51, 441
Wooding, Bridget 393, 434

Y

Yorro Suero, A. M. 421

Z

Zaffaroni, Eugenio R. 52, 441
Zweezy, Paul 420

La relectura de *El reformismo dependiente*, aparecido en 1985, treintai-cinco años después, ayuda a replantear con inevitables nuevos ojos la consideración de su objeto: los determinantes y la definición de los llamados Doce Años, el régimen presidido por Joaquín Balaguer entre 1966 y 1978. Wilfredo Lozano se abocó a un análisis sustentado en una perspectiva materialista de interrelación entre factores “estructurales” y la dinámica de los actores sociales y políticos. En tal sentido, concede un valor activo al ámbito político, lo cual le permite escapar del tipo común de soluciones deterministas que han abundado en la tradición marxista. Se plasma un producto magistral, imprescindible para la dilucidación de claves de la historia política dominicana posterior a la muerte de Trujillo.

Esta reedición consta de un *Post scriptum*, dirigido a ampliar planos del análisis de aquella etapa e introducir el del período de los Diez Años, entre 1986 y 1996. Mientras se ratifica la definición del régimen de los Doce Años como bonapartista y de desarrollismo dependiente, el siguiente segmento de protagonismo de Balaguer en el poder ejecutivo se caracteriza como de populismo conservador forzado a permitir la introducción de los lineamientos del neoliberalismo. En el origen de esta diferencia hace intervenir un balance del proceso de democratización iniciado en 1978. En tal sentido, se abordan de manera sumaria algunos componentes de este proceso que ayudan a explicar aquella renovada vigencia de Balaguer.

Las productivas elaboraciones de Lozano contienen el valor reactualizado de contribuir a abrir terrenos exploratorios de los antecedentes de la realidad dominicana presente. Aquí se sientan bases conceptuales, se proponen consistentes soluciones interpretativas, en síntesis, se plasma un logro intelectual vigente hasta hoy.

ROBERTO CASSÁ
Octubre 2020